

NACIÓN Y SOCIEDAD EN LA HISTORIA DEL PERÚ

Peter F. Klarén

IEP Instituto de Estudios Peruanos

NACIÓN Y SOCIEDAD EN LA HISTORIA DEL PERÚ

NACIÓN Y SOCIEDAD EN LA HISTORIA DEL PERÚ

Peter F. Klarén

Traducción de Javier Flores

IEP *Instituto de Estudios Peruanos*

Serie: Estudios Históricos, 36

La edición en inglés de este libro, Perú: Society and Nationhood in the Andes*, fue publicada en el año 2000 por Oxford University Press, en Oxford New York.*



Horacio Urteaga 694, Lima 11
Telf. (511) 332-6194
Fax (511) 332-6173
Email: publicaciones@iep.org.pe

ISBN 978-9972-51-095-3
ISSN 1019-4533

Impreso en el Perú
1.ª ed., 2004. 1.ª reimp., 2005. 2.ª reimp., 2008,
3.ª reimp., 2011, 4.ª reimp. (revisada), abril 2012
1000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2012-04277

Registro del proyecto editorial en la Biblioteca Nacional: Nº 11501131200274
Revisión de texto: Sandy Mansilla y Odín del Pozo

Klaren, Peter

Nación y sociedad en la historia del Perú. Lima: IEP, 2004. (Estudios Históricos, 36)

HISTORIA/EPOCA PREHISPANICA/COLONIA/INDEPENDENCIA/REPUBLICA/DEMOCRACIA/POLITICA/PERU

W/05.01.01/E/36

Contenido

Lista de mapas y cuadros

Mapas

Cuadros

Prefacio a la edición en castellano

ESTA EDICIÓN en español de *Perú, Society and nationhood in the Andes,* es fiel a la versión original en inglés, publicada en el año 2000 por la Oxford University Press. El libro forma parte de una serie de historias individuales y autónomas de países latinoamericanos, que busca informar acerca de ellos, a los estudiantes universitarios y al público interesado de los Estados Unidos. En lugar de un enfoque y una naturaleza comparativa, se espera que iluminen los rasgos y la trayectoria histórica especial y singular de cada país. Dicha perspectiva es el producto inevitable de la especialización en los escritos históricos, que se ha dado a lo largo del último cuarto de siglo, en los Estados Unidos y otros lugares.

Hay, me parece, un valor particular en traducir mi libro y hacer que esté a disposición del público peruano. Como un colega de este país me dijera recientemente, el libro constituye la mirada de un extranjero alejado, capaz de formular nuevas interrogantes y de discernir el pasado en forma distinta a los investigadores peruanos, y de presentar otro ángulo y otro punto de vista para examinar ciertos problemas históricos. El observador extranjero puede asimismo decidir analizar ciertos temas que difieren de aquellos que los estudiosos locales consideran importantes, y de este modo contribuir a una comprensión más amplia del pasado.

La serie Oxford, y más en particular mi *Perú*, representa también el pensamiento de una generación de investigadores estadounidenses cuya formación intelectual y su punto de vista se plasmaron a finales de la década de 1950 y en la de 1960. Ese fue un periodo signado por tumultuosos acontecimientos mundiales —la Revolución cubana de 1959, el movimiento de los derechos civiles, la Guerra Fría y la intervención de los EE.UU. en Vietnam—, todos los cuales contribuyeron a un difundido descontento social, una efervescencia intelectual y una eclosión idealista entre los jóvenes de los Estados Unidos y otros lugares. Dichos sucesos influyeron profundamente y moldearon el enfoque que mi generación dio al estudio de la historia, propiciando particularmente su adopción

de la Nueva Historia Social, que rompió con el énfasis que los académicos ponían tradicionalmente en la historia política y diplomática orientada a la élite. Nos esforzamos por escribir la historia de abajo hacia arriba, sin perder de vista aquella en la dirección inversa, o las estructuras de dominación que continuaron existiendo a pesar de la resistencia de los de abajo. A lo largo de los siguientes treinta años o más, pasamos a revisar y a reescribir la historia de América Latina, introduciendo nuevas metodologías y teorías, y adoptando en general una perspectiva más progresista y reformista en nuestros escritos. La serie Oxford de América Latina y la edición en español de *Perú*, en particular, constituye la culminación del enfoque y la reinterpretación que mi generación hiciera de la historia de la región: siempre enfatizando las interconexiones vitales entre las instituciones y estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas

Mucho ha sucedido en el Perú desde que concluí mi libro al finalizar el primer gobierno de Fujimori y su reelección a la presidencia en 1995. Aunque los peruanistas y los comentaristas políticos comprendieron en ese entonces la naturaleza estrecha, autoritaria y nada democrática del régimen, ninguno de nosotros percibió en ese momento las dimensiones de la sórdida corrupción y criminalidad que lo envolvían. Eso sólo sería revelado luego, después de la ruptura entre Fujimori y Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia, y la caída del gobierno en el año 2000. A partir de ese momento comenzó a salir a la luz todo el alcance de la corrupción del régimen, después de la captura y apresamiento de Montesinos, el breve pero efectivo gobierno de transición de Valentín Paniagua y, por último, la elección democrática de Alejandro Toledo como presidente para un nuevo gobierno en el año 2001.

Las investigaciones subsiguientes han dejado al descubierto la naturaleza corrupta del régimen de Fujimori-Montesinos y permitirá a los historiadores del futuro dar una versión más completa y exacta de sus diez años de gobierno. Por lo tanto, el lector debe tener en mente que el capítulo sobre Fujimori en la presente edición fue escrito antes del aluvión de información reciente sobre las fechorías y crímenes de dicho régimen, reportados y documentados en los medios y en otros lugares (y no sólo en los cientos de «vladivídeos» descubiertos luego de la captura de Montesinos, sino también en documentos de los archivos oficiales de los Estados Unidos, que revelan la naturaleza y alcance de las relaciones entre la CIA y el ex asesor de inteligencia del presidente). Asimismo, el lector debe estar advertido de que algunas de las estadísticas citadas en el último capítulo no son ya confiables debido al supuesto «retoque» de los números por parte del gobierno de Fujimori, a fin de presentar una imagen del crecimiento económico mejor de lo que realmente era.

Por último, permítaseme decir que espero que esta nueva historia del Perú, basada como está en investigaciones angloamericanas y peruanas, sirva para

construir un puente y un diálogo sumamente necesario entre dos mundos, uno que abra la promesa de alcanzar una mayor comprensión del pasado y, con ella, del problemático presente peruano, enmarañado como está en las complejidades del subdesarrollo y la globalización. Es con este espíritu, y con un agradecimiento especial a Javier Flores Espinoza, mi traductor, y a Carlos Contreras, mi editor en el IEP, que ofrezco al público peruano las siguientes páginas desde una perspectiva septentrional, dedicadas a su historia colectiva como pueblo.

Peter F. Klarén
Washington, D. C.
Agosto de 2002

Prefacio

EL PERÚ es un país con una historia rica, aunque dolorosa y tortuosa. Como cuna de las civilizaciones nativas más avanzadas de Sudamérica, cuenta con un legado singular entre las naciones del continente sureño. A diferencia de los países del Cono Sur (Argentina o Chile) o, para el caso, de Norte América (Canadá y los Estados Unidos), abarca un pasado que se remonta a más de diez mil años atrás en uno de los medios más duros e inhóspitos, aunque espectaculares, del mundo: los altos Andes de Sudamérica. Una serie de complejas civilizaciones precolombinas brotó a lo largo de los frondosos valles de la costa, en los fértiles valles de la sierra y en las mesetas de las cumbres andinas al este. La culminación de la civilización andina fue la construcción de un imperio por parte de los incas en apenas algo más de un siglo, que comprendía la tercera parte del continente sudamericano y que alcanzó un nivel de bienestar material general y una sofisticación cultural que rivaliza, y de hecho supera, al de muchos de los grandes imperios del mundo.

Paradójicamente, la historia peruana es también única en otras formas menos gloriosas. Los pueblos andinos hicieron frente a la invasión española en 1532, en uno de los primeros choques de la historia entre Occidente y las civilizaciones no occidentales. La subsiguiente conquista y colonización hispana desgarró el rico tejido de la sociedad andina y creó un enorme abismo entre los vencedores y los vencidos que siguió reverberando a través de los siglos. Al igual que su geografía, el país quedó dividido económica, social y políticamente entre una sierra «semifeudal», mayormente ocupada por nativos americanos, y una costa más moderna, capitalista, urbana y mestiza. En la cima de la estructura social, una pequeña élite blanca llegó a dominar a la inmensa mayoría de andinos, a quienes excluyó sistemáticamente de su angosta concepción europeizada de la nación. El resultado fue una incapacidad crónica por parte del Estado moderno para superar los legados del colonialismo y del subdesarrollo, que efectivamente inhiben hasta hoy la integración y la consolidación de la nación peruana.

Escribir la historia del Perú plantea numerosos obstáculos y problemas. Los occidentales básicamente vieron la antigua tierra de los incas desde la posición ventajosa de la distancia y las profundas diferencias culturales que Edward Said denominó «orientalismo». Esto es, percibieron al Perú como un país no solamente misterioso y exótico, un espejo de sus propios sueños y deseos, sino también como una tierra de extremos. Así, para los observadores occidentales —viajeros, periodistas, hombres de negocios y otros— el Perú a lo largo de los años fue un país de una legendaria y fabulosa riqueza (El Dorado), de una sangrienta conquista (Pizarro contra Atahualpa), de ciudades perdidas de los incas (Machu Picchu), de una nobleza señorial hispana y católica (Lima colonial), de revolucionarios violentos y fanáticos (las guerrillas de Sendero Luminoso), y de narcotraficantes en busca del «oro blanco» del tráfico internacional de cocaína. La manifestación más reciente de este «orientalismo» fue tal vez la percepción de impermeabilidad de Alberto Fujimori, el presidente peruano neopopulista de ascendencia japonesa que proclamaba la democracia, pero que cerró el Congreso en el llamado autogolpe de 1992.

Aunque esas imágenes tan fabulosas tal vez contienen una mezcla de verdad y leyenda, de distorsiones y contradicciones, cuando se examina la historia peruana de cerca y en profundidad, ella resulta, en realidad, distinta. Por supuesto que las épicas historias de la construcción del imperio y la civilización inca, la invasión española del siglo XVI o la liberación final del continente de tres siglos de dominio hispano por Bolívar en la batalla de Ayacucho en 1824, siguen captando nuestra atención y encendiendo nuestra imaginación. Pero hoy en día, la narración de ese relato se concentra más en cómo una población peruana, escindida y étnicamente heterogénea, logró sobrevivir tenazmente a la conquista y al dominio de una pequeña élite criolla europeizada, en medio de periódicos y, a menudo, espantosos desastres naturales o crisis sociales, que han asolado al país a lo largo de los siglos. Sólo como ejemplos podríamos señalar el holocausto biológico del desastre demográfico causado por la difusión incontrolable de las enfermedades europeas entre la población indígena durante la conquista, o la serie de guerras —civiles e internacionales— que azotaron al país desde la independencia (por ejemplo, con España, Chile y Sendero Luminoso). En cada oportunidad, los peruanos se levantaron de las ruinas económicas y sociales de tales debacles, y se las ingeniaron para sobrevivir en forma tal que no puede menos que despertar la admiración de los lectores de la larga y convulsa historia de este país.

Otro problema para el historiador es cómo tratar un territorio lejano del tamaño de Inglaterra, Francia y España, caracterizado por su diversidad geográfica, climática y étnica. En realidad, la historia peruana se ha desarrollado, al igual que los «archipiélagos verticales» en los que cada comunidad o *ayllu* incaico operaba a distintas alturas y nichos climáticos para cultivar una gran variedad de productos, en un mosaico de microregiones en el cual el vida humana se ha

desenvuelto de miles de formas. Esta historia plural fue generalmente ignorada por los historiadores, sobre todo los de la élite del país, que durante largo tiempo impusieron al pasado, desde Lima, una unidad artificial: una narrativa desde el centro y desde la capital, donde se asumía que la historia del Estado-Nación se había dado en términos europeos. Esto produjo un doble problema o distorsión: la historia escrita desde la perspectiva de la élite, que rara vez se aventuraba dentro del mundo indígena y que, por lo tanto, no conocía al Perú «real», y el pasado visto desde las alturas dominantes del Estado virreinal, y posteriormente de su sucesor republicano, ambos mirando decididamente hacia Europa.

Para comenzar a cambiar todo esto fue necesaria una revolución historiográfica, iniciada en la década de 1970 con las nuevas metodologías de la historia económica y social. Surgió entonces una nueva generación de historiadores formados en etnohistoria y en lo que se ha denominado la «historia desde abajo». Esta es la historia sobre y desde la perspectiva de quienes no tienen el poder: trabajadores, campesinos, esclavos, mujeres y así sucesivamente, las llamadas clases subalternas que pueblan cada vez más la historia poscolonial latinoamericana que viene escribiéndose en los Estados Unidos. El resultado de estas tendencias historiográficas fue el inicio del desplazamiento del enfoque predominante de la historia peruana, de un lado de la perspectiva de la élite dominante a las clases subalternas, y del otro, de Lima a las diversas regiones y subregiones que conforman el corazón del espacio andino. En suma, la historia del Perú pasó de ser la proyección de la «historia de Lima» y de las élites a todo el país, a una mayor aproximación a lo que el historiador Jorge Basadre llamó «el Perú profundo».

En este libro utilicé una serie de enfoques que espero hayan incorporado eficazmente dichos cambios, y que además hayan superado los antedichos obstáculos para la interpretación de la historia peruana. En primer lugar, me esforcé por presentar la historia del país como un debate en curso entre los investigadores, presentando las controversias e interpretaciones divergentes. Es mi intención hacer un tratamiento profundo y, en cierto sentido, complejo de la temática andina que permita una mejor comprensión de su historia. En segundo lugar, desarrollé la mayoría de los temas con relativa brevedad, para así dar lugar a un tratamiento más detallado y hondo de uno o dos de ellos particularmente significativos en cada capítulo. Si bien hay algunas desventajas en este método, el contraste entre un avance relativamente acelerado a través de algunos temas, y un mayor lujo de detalles y desarrollo en otros, permitirá iluminar mejor la historia peruana y captar el interés de mis lectores.

Tercero, al abarcar toda la extensión de la historia andina —la *longue durée*, si se quiere— me concentré en las estructuras económicas y sus cambios, en la política formal y en las constelaciones del poder, y en las estructuras sociales y sus transformaciones. Si algún tema predominante subyace a mi enfoque, es el de la

lucha entre la élite hispana y las «masas» indígenas, mestizas y afroperuanas en torno al poder y a la inclusión, un enfrentamiento que exploro en sus dimensiones tanto étnicas como de clase. En términos generales, este enfoque sociopolítico (al igual que las limitaciones de espacio) implicó prestar menos atención a los temas culturales e intelectuales; aunque intenté tocar algunos de ellos, por lo menos brevemente, en realidad merecen otro libro. De igual modo, acaba de aparecer el nuevo revisionismo posmoderno de la década de 1990 en los estudios de una nueva generación de historiadores, y por lo tanto apenas si se atisba aquí y allá en las siguientes páginas.

El libro parte de un examen del auge y caída de las diversas formaciones políticas prehispánicas, comenzando con la cultura Chavín en el año 800 a. C. y cerrando con el surgimiento y colapso de los incas. Me parece que lo importante de estos últimos es la mezcla curiosa de una sociedad campesina a nivel local y comunal, con la extraordinaria superestructura estatal centrada en el Cuzco, así como la importancia de la reciprocidad, la redistribución y el culto a los antepasados que caracterizó al imperio.

De los incas paso a analizar la conquista y colonización de los Andes, enfatizando la centralización del poder político, iniciada por los Habsburgos españoles a través de un sistema de patrimonialismo burocrático y mercantilismo. La economía resultante se fundó sobre «la casa del tesoro hispana en los Andes» —los ricos distritos mineros de plata de Potosí en el Alto Perú (la actual Bolivia), que se convirtieron en la base del comercio trasatlántico— y el vasto sistema de producción e intercambio interno de los Andes. Al gobierno de los Habsburgos siguió el de los Borbones, cuyos reformadores establecieron controles administrativos y fiscales más eficaces y centralizadores en el siglo XVIII, lo que a su vez produjo una amplia gama de rebeliones indígenas que sacudieron los propios cimientos del gobierno imperial y llevaron, con el tiempo, a la independencia de España.

Pasando al siglo XIX, muestro la manera en que la nueva élite criolla «imaginó» a su novedosa comunidad en forma restringida, excluyendo sistemáticamente a las masas indígenas en un periodo caracterizado más por la continuidad que por el cambio con respecto a la era colonial. La razón por la cual el Perú no logró convertir la inmensa bonanza guanera de mediados de siglo en un desarrollo económico sostenido, constituye otra parte sustancial del análisis de la etapa postindependentista. Lo que sí comenzó con la era del guano fue una apertura de la economía peruana, que data de la década de 1850, y que no obstante ser interrumpida por las guerras y depresiones, dio inicio a una larga oleada de crecimiento impulsado por las exportaciones que duraría hasta la década de 1960. Este crecimiento constituyó la base para la formación de una oligarquía —las llamadas cuarenta familias— que logró gobernar el país hasta

finales de la década de 1960, aunque no sin ser desafiada por fuerzas populistas insurgentes que hicieron necesaria una alianza entre la élite y las fuerzas armadas.

En los capítulos finales del libro, analizo el «tiempo de plagas» peruano, iniciado con la «década perdida» de 1980 y su deuda, el mal manejo gubernamental, la recesión internacional y las luchas civiles, que culminó con la peor depresión en más de un siglo. Para empezar, el crecimiento impulsado por las exportaciones se desaceleró a mediados de la década de 1960, en tanto que la migración interna iniciada después de la Segunda Guerra Mundial siguió intensificándose y desplazó el centro de gravedad demográfico de la sierra a la costa, particularmente a la ciudad de Lima. Para la década final del siglo, la mitad de los siete millones de habitantes de la capital, y un tercio de la población total del país, vivía en los llamados «pueblos jóvenes». Agreguemos a ello que más de la mitad de la población vivía en la pobreza o cerca de ella. En una ciudad que históricamente se enorgullecía de sus orígenes europeos y su cultura cosmopolita, esta marejada de inmigrantes procedentes del «otro» Perú significó nada menos que la andinización de la capital y la redefinición del país, abandonándose lo criollo y pasándose a una identidad nacional autóctona e inclusiva.

Muestro cómo a comienzos de la década de 1970, los militares reformistas se identificaron con esta tendencia y la incorporaron a su esfuerzo por reestructurar y desarrollar el país, naufragando finalmente en los arrecifes de la recesión mundial y en el mal manejo administrativo. Los problemas de los militares condujeron al retorno a la democracia en la década de 1980, lo cual, junto con una espiral económica descendente, creó paradójicamente la oportunidad para el desarrollo de la insurgencia terrorista más radical del hemisferio. Más recientemente, mientras que Sendero Luminoso finalmente iba siendo derrotado, la incipiente democracia peruana fue sacudida en 1992 por el autogolpe del presidente Alberto Fujimori, mostrando que la tradición autoritaria profundamente arraigada del país seguía en pie. Es cierto que esa tradición y la persistencia de la violencia constituyen una constante en todo el pasado andino, desde el surgimiento y caída de las formaciones políticas preincaicas, el expansionismo inca, la conquista española y los tres siglos de dominio colonial —marcados por las rebeliones indias y su represión—, hasta la lucha por la independencia en la década de 1820, la Guerra del Pacífico (1879-1883) y, a un nivel más profundo, la naturaleza a largo plazo del neocolonialismo y del mismo subdesarrollo contemporáneo.

Y sin embargo, semejante conclusión es exagerada. Un examen más detenido muestra que la violencia en el Perú jamás se aproximó a la de la Revolución mexicana (1,5 millones de muertos) o al genocidio de Chile o Guatemala en las décadas de 1970 y 1980. Y el general Juan Velasco Alvarado tampoco fue en nada semejante a un dictador fascista como Augusto Pinochet en Chile. En cuanto a los incas, ciertamente no fueron democráticos, al igual que la mayoría de los

imperios, pero sí lograron alcanzar un nivel de desarrollo y bienestar que no ha sido igualado por ningún otro régimen que haya gobernado al Perú desde ese entonces. Por último, el Perú no deseó ni buscó la guerra con Chile en 1879, y la independencia de 1824 no fue tanto algo organizado por los mismos peruanos como impuesto desde afuera.

Y hay otros aspectos del pasado reciente peruano que permiten concebir un futuro mejor. El control de la vieja oligarquía ha sido quebrado: la «comunidad imaginada» del Perú se ha ampliado, las mujeres son cada vez más un actor central en los movimientos sociales y la política peruana; y las clases subalternas, largo tiempo contenidas y manipuladas, dejan cada vez más su huella en la cultura, las instituciones y las posibilidades futuras del país. Aunque incompleta y cargada con los problemas de una crónica debilidad institucional, la democratización pasó a ser más una realidad que una promesa en la última década, por lo menos hasta el autogolpe de 1992 (posiblemente el lapso más largo de gobierno civil ininterrumpido entre 1895-1914). Hay, por lo tanto, razones para ser optimistas a medida que el Perú cruza el umbral del siglo XXI. Espero que la historia que sigue, posible sobre todo gracias a los investigadores peruanos e internacionales que proporcionaron los ladrillos y el cemento necesarios para el presente trabajo, contribuya a lograr una comprensión más profunda de los procesos que llevaron a este fascinante país andino a la cúspide de un nuevo milenio.

La preparación de este libro fue una obra de amor que culmina más de treinta años de trabajo sobre la historia peruana, desde que fui a ese país por vez primera a efectuar el trabajo de campo para mi tesis doctoral en 1965. Estoy extremadamente agradecido a numerosos colegas que leyeron diversas partes del manuscrito y ofrecieron valiosas correcciones, sugerencias y revisiones. Para los capítulos sobre los periodos precolombino y colonial, estos colegas incluyen a Catherine Allen, Anita Cook, Steve Stern, Manuel Burga y Nils Jacobsen, y para los capítulos sobre el periodo moderno a Peter Blanchard, Florencia Mallon, Dan Masterson, Cynthia McClintock y Chuck Walker. También deseo agradecer a los dos lectores anónimos que hicieron varias sugerencias valiosas y me salvaron de cometer más de un error mayúsculo. Claro está que asumo toda la responsabilidad por las páginas que siguen.

Asimismo deseo agradecer a Tom Skidmore, el editor de la serie, por su constante estímulo y consejos, y a Frank Turner, historiador de Yale y amigo, por su útil asesoría. Sara Castro-Klarén merece un abrazo especial no sólo por soportar las largas horas que este libro dedujo de las responsabilidades familiares, sino también por brindar generosamente su sabiduría académica, percepciones especiales y asesoría profesional. Stacie Caminos, Christine D'Antonio y el personal de la Oxford University Press se hicieron cargo entusiastamente de todos los problemas de la edición del texto, algo que a menudo requirió la paciencia de Job, por lo

cual les agradezco sinceramente. Vayan también las gracias a mis asistentes de investigación, Estelle McKinnie, Johana Ayers y Max Skolnick por su buen trabajo, y a Michael Weeks por librarme de todos esos entrampes cibernéticos. Por último, desearía agradecer a la Universidad de George Washington por haberme dado una generosa beca de investigación con que cubrir buena parte de los viajes, estudios y otros gastos incurridos al redactar este libro.



Mapa 1. Ciudades, departamentos y regiones de Perú.

Capítulo I

La geografía y la era prehispánica

Geografía

Para comprender la historia del Perú necesitamos comenzar con su medio ambiente y ecología. El rasgo más dominante de su paisaje son los espectaculares nevados de los Andes, que se elevan desde la costa del océano Pacífico hasta una altura majestuosa. El Huascarán, el más alto de ellos, alcanza los 6.768 metros sobre el nivel del mar, dominando los doscientos kilómetros de longitud de la majestuosa Cordillera Blanca. A esta altura hay glaciares y una línea de nieve perpetua que se inicia a los cinco mil metros de altura. El deshielo de este casquete corre al oeste, hacia el océano Pacífico y al este hacia la cuenca del Amazonas.

Debajo de estas cumbres que miran hacia el oeste, existen centenares de pequeñas lagunas brillantes y cristalinas formadas por los glaciares de épocas pasadas. En tiempos precolombinos, muchas de ellas fueron usadas para guardar aguas de regadío, en tanto que en el siglo pasado sus aguas se usaron para generar electricidad. Sin embargo, ellas y los glaciares que las acompañan han sido también la causa de siniestros eventos. En 1941, las fuertes lluvias hicieron que las lagunas rebalsaran, produciendo una inundación catastrófica que golpeó la ciudad de Huaraz y ahogó a cinco mil personas. En 1962 y en 1970, las avalanchas provocadas por los hielos caídos del Huascarán enterraron los pueblos de Ranrahirca y Yungay, dando muerte a más de diez mil personas.

Los Andes, parte de la gran cadena montañosa que se extiende desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, se formaron con el movimiento «compactador» de las grandes placas tectónicas frente a las costas del Pacífico, comenzando hace más de doscientos millones de años. El movimiento geológico resultante de la corteza terrestre retorció la llamada Placa Sudamericana en la era Jurásica, para formar la primera de tres grandes cordilleras de los Andes.

Una consecuencia importante de este largo periodo de formación de los Andes es su extraordinaria variedad climática y ecológica. Por ello, el Perú es realmente una tierra de contrastes. Su variado terreno comprende desiertos, extensos bosque tropicales, escarpados valles montañosos y elevadas planicies asoladas por los vientos. El impresionante Callejón de Huaylas es característico de los valles interandinos; por allí corre el río Santa hasta desembocar en el océano Pacífico, luego de un viaje fragoso desde su divisoria de aguas a unos cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Aquí, en lo que se conoce como la puna, unos pastizales frondosos sirven como forraje para los camélidos andinos (llamas, alpacas, guanacos y vicuñas), a una temperatura fría que jamás se eleva por encima de los 18°C.

El clima es más benigno abajo a media altura, en los valles serranos como el Callejón de Huaylas, variando entre 4°C y 23°C. Aquí se pueden plantar cultivos templados y subtropicales con ayuda del riego, pues a la temporada de lluvias de noviembre a marzo le sigue una larga temporada seca. Durante la época de lluvias, la sierra experimenta frecuentes aluviones —huaycos— que bloquean las carreteras y dañan los canales de regadío. Pero en esta zona más templada, los campesinos cultivan en los niveles más altos trigo, cebada, quinua y centeno en pequeñas parcelas llamadas chacras; y a menor altura maíz, alfalfa y diversos productos vegetales. Por último, una temperatura más cálida, aunque seca, prevalece a dos mil metros de altura, cerca de la ciudad de Caraz, lo que hace necesario un riego más extenso para producir naranjas y otras frutas.

En la sierra sur, la alta puna se amplía hasta convertirse en una extensa meseta o altiplano, en donde pasta la mayoría del ganado y de camélidos peruanos se extendiéndose por cientos de kilómetros al sur de Cuzco hasta Bolivia. Las temperaturas secas y frías del altiplano disminuyen ligeramente únicamente alrededor del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. En el duro y desolado altiplano la vida se complica por el hecho de que las sequías o las heladas destruyen dos de cada cinco cosechas.

Tal vez el rasgo más singular de la sierra andina es la diversidad de microambientes que proliferan en las laderas oriental y occidental de las montañas. Según Dobyns y Doughty (1976: 17), «están determinados por complejas variantes en el contenido de oxígeno en el aire, la inclinación de la pendiente con respecto al sol, la calidad del suelo, el contenido de minerales, la disponibilidad de agua, los patrones de vientos nocturnos y diurnos, y la humedad del aire». Debido a ello, una inmensa diversidad de flora y fauna se ha adaptado y prosperado en estos distintos nichos ambientales y climáticos. Por ejemplo, fue aquí, por encima de los tres mil metros, que los cultivadores prehistóricos domesticaron por vez primera la papa y otros tubérculos, junto con otras plantas adaptadas a las grandes alturas. Eventualmente, este colorido y agradable vegetal (se ha identificado más de cuatro mil variedades) se esparció por todo el mundo para

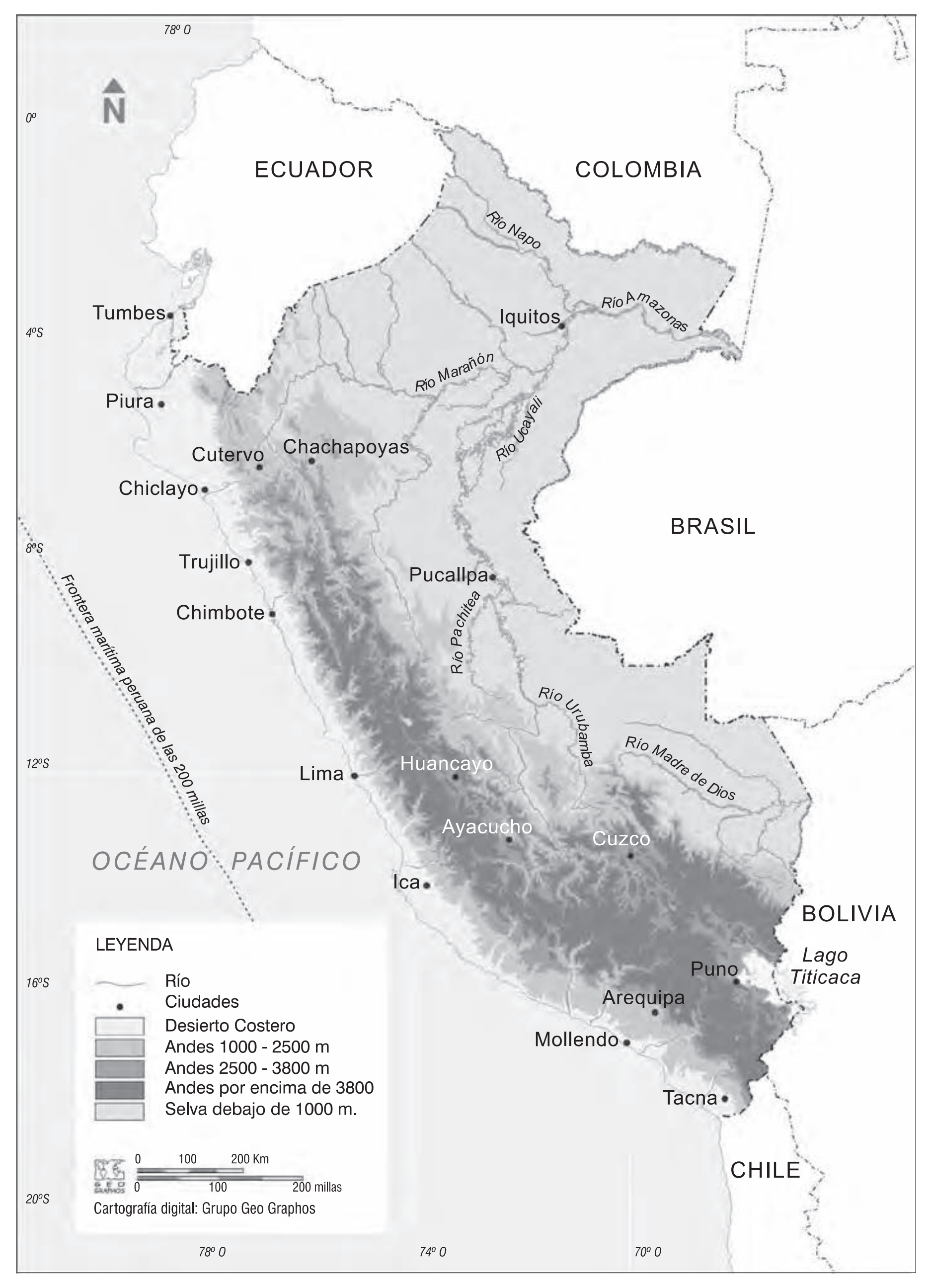
enriquecer y ampliar la provisión alimenticia disponible. De hecho, se atribuye a la papa andina, entre otras cosas, haber contribuido a la Revolución Industrial al estabilizar la población, y con ello la provisión de mano de obra para las fábricas de Manchester (Inglaterra) y otros lugares a partir del siglo XVII.

Bajando por el flanco occidental de los Andes nos encontramos con un paisaje distinto, la larga y árida franja costera que se extiende entre el océano Pacífico y las estribaciones costeras de Tumbes, por el norte, hasta Arica, por el sur. Por los efectos climáticos de la Corriente de Humboldt, la costa peruana es desértica por completo y abarca el doce por ciento del territorio nacional. En el mar, las aguas frías de la corriente bajan la temperatura del aire, de tal manera que el patrón predominante de los vientos se orienta hacia el este, sobre la tierra más cálida. El resultado del encuentro entre el aire caliente y el frío impide las lluvias y absorbe la humedad del suelo.

Este árido paisaje costeño, aunque prácticamente desértico, está atravesado por veintiún ríos que bajan de los Andes, produciendo frondosos oasis verdes allí donde desembocan sus aguas en el mar. En estos verdes valles ribereños se desarrollaron los primeros asentamientos andinos que posteriormente evolucionaron hasta convertirse en las grandes civilizaciones costeras como Moche, Nazca y Chimú. La dieta de estos tempranos pobladores costeños se vio enriquecida por la vida marina que prolifera en las frías aguas de la Corriente de Humboldt, ricas en minerales y plancton. Estos peces a su vez sustentan a las bandadas de aves marinas cuyos excrementos depositados en las islas costeñas produjeron, a lo largo de miles de años, las montañas de guano usado como fertilizante desde la época precolombina.

Entretanto, la masa de aire cargada de agua proveniente del mar prosigue su movimiento hacia el este, atravesando las montañas y llegando a la ladera oriental de los Andes. Estas laderas eventualmente se nivelan en la ardiente vastedad tropical conocida como la amazonía. Aquí, una población dispersa de antiguos americanos y sus antepasados se adaptaron a los ritmos biológicos y ciclos vitales del gran bosque tropical amazónico. Como un observador anotase, éste se esparce como una alfombra de color verde oscuro que cubre más del sesenta por ciento del territorio nacional.

La amazonía, con sus densas junglas, y huestes de insectos que pican y letales reptiles, es una formidable barrera a la penetración, mas a pesar de ello ha ejercido una fuerte atracción para los extranjeros, que la conciben como una suerte de «paraíso» e incluso como una panacea potencial para los problemas del subdesarrollo. Su extraordinaria gama de flora y fauna exóticas, juntamente con su plétora de plantas medicinales, han contribuido a dicha imagen. De hecho, sólo recientemente las compañías farmacéuticas descubrieron la región como una fuente potencial de nuevas drogas y otros productos para los mercados occidentales. La atracción



Mapa 2. Rasgos físicos del Perú. *Fuente*: Henry E. Dobyns y Paul Doughty, *Peru: A Cultural History* (Nueva York, 1976), 1213.

de encontrar al Dorado llevó a más de un conquistador español a emprender expediciones finalmente infructuosas, aunque el descubrimiento del caucho sí sirvió, como veremos, como una fuente de gran riqueza a comienzos del siglo XX. Sin embargo, los primeros habitantes tendían a aferrarse a sus ríos y arroyos tortuosos, donde podían pescar fácilmente en pos de su alimento y usarlos para transporte, y cuyas orillas se usaban fácilmente para los cultivos.

Actualmente, la amazonía está dividida en dos regiones, la alta «ceja de selva» de las laderas orientales de las montañas, y la selva baja y más plana. El clima y suelo de la primera fueron particularmente idóneos para cultivar las hojas de coca que los antiguos andinos y sus descendientes han masticado con cal durante milenios por su efecto moderadamente narcótico. La selva baja, un posible lugar de origen de la civilización andina, está actualmente poblada por unas cincuenta tribus amazónicas que alcanzan un total estimado de 250.000 habitantes.

Desde los grandes picos de la Cordillera de los Andes pueden distinguirse claramente las tres grandes regiones geográficas del Perú: costa, sierra y selva. Ellas comprenden un área total de 1.285.121 kilómetros cuadrados, además de los 95 kilómetros cuadrados de las islas en el océano Pacífico, convirtiendo al Perú en el tercer país más grande de América del Sur, después de Brasil y Argentina.

Las culturas preincaicas

La primera gran conquista de este espacio andino comenzó hace unos veinte mil años, cuando los descendientes de los inmigrantes originales atravesaron el puente de tierra en lo que hoy es el Estrecho de Bering, entre los continentes de Asia y América y llegaron a Sudamérica. A lo largo de varios milenios, los cazadores-recolectores se dispersaron desde su cabeza de puente en Panamá para poblar toda América del Sur. Entre los años 11.000 y 8000 a. C., un pueblo que recolectaba mariscos en los pantanos de manglares cercanos estableció campamentos en los valles de Piura-Chira, en el norte peruano. Más al sur, en la región casi desértica alrededor del actual Trujillo, entre los años 10.000 y 7000 a. C. los pescadores alanceaban a su presa en los arroyos y ensenadas que se abren en el océano Pacífico utilizando puntas de piedra finamente talladas.

Al este de los Andes, en la Cueva de Guitarrero, cerca del río Santa y frente al Callejón de Huaylas, los primeros peruanos comían vizcachas, tinamou (un ave sudamericana), palomas y venados, así como tubérculos, calabazas y lúcuma (una fruta). También fabricaban esteras y contenedores de malla, tal vez domesticaron los fríjoles y el ají, y cazaban la vicuña en la alta puna, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Lo más notable es que estos tempranos habitantes de cavernas crearon el arte peruano más antiguo en las paredes de sus campamentos, versiones pictóricas de la caza, así como diseños geométricos en rojo y negro.

Entre los años 5700 y 2800 a. C., los habitantes de Paloma, justo al sur de Lima, vivían en chozas ovales semisubterráneas hechas con postes de caña y totora. Ellos consumían pescado del mar, cultivaban tubérculos, calabaza y fréjoles, y cazaban en las lomas vecinas utilizando diversos implementos. La tasa de mortalidad infantil era elevada (cuarenta y dos por ciento) y la esperanza media de vida oscilaba entre veinte y treinta y cinco años. La población de Paloma cortó los árboles de las lomas, privándolas de la humedad y secándolas, constituyendo, un temprano caso de sobreexplotación del medio.

Hacia el año 2500 a. C. comenzaron a surgir pequeñas aldeas pobladas por granjeros y pescadores en los fértiles valles ribereños de la costa norte peruana. Ellas marcaron el paso de los campamentos de cazadores-recolectores a asentamientos más permanentes. Estos antiguos peruanos vivían en simples casas de adobe, cultivaban papas, fréjoles, algodón, con el que tejían su ropa y pescaban en el vecino mar. El catalizador para el desarrollo subsiguiente de las civilizaciones más complejas fue la introducción de un cultivo anual —el maíz— y el desarrollo de la irrigación, logros que datan de los años 3000 a 1800 a. C. Ambos desarrollos sirvieron para estabilizar la provisión alimenticia y producir excedentes, los que a su vez nivelaron la población y liberaron mano de obra para emprender tareas más especializadas como la construcción de elaborados centros ceremoniales y la manufactura de diversas artesanías.

La difusión de la irrigación permitió a los pueblos costeños trasladar sus asentamientos tierra adentro desde la costa, subiendo por los valles a las estribaciones de los Andes. La construcción de canales de irrigación les permitió cultivar y cosechar más de un producto al año. Aparte del maní y los fréjoles aparecieron nuevos cultivos tales como la palta, la papa, el camote y el maní, así como el algodón. Además, con la provisión cada vez mayor de mano de obra se construyeron grandes centros ceremoniales con pirámides y otras edificaciones monumentales. Por último, aproximadamente hacia el año 1800 a. C. se introdujo y desarrolló la cerámica, cuya tecnología probablemente provino de la región amazónica o del norte de Sudamérica. En este medio cada vez más especializado apareció un estrato importante de artesanos, que tejían textiles de algodón y fabricaban cerámica a gran escala.

Un desarrollo similar se produjo en la sierra en lo después se conocería como el Temprano Periodo Cerámico, aunque fue menos imponente que en la costa y más dependiente de una mezcla de agricultura, pastoreo y caza. Los camélidos que poblaban el altiplano no solamente brindaron proteínas importantes a la dieta de los serranos y fibras para su vestimenta, sino que también sirvieron como bestias de carga que podían recorrer el difícil terreno montañoso.

Una gran catástrofe hizo que los centros del Temprano Periodo Cerámico de la costa fueran abandonados repentinamente. Las evidencias sugieren que



Mapa 3. Asentamientos prehispánicos y el imperio incaico, con sus principales divisiones y caminos. *Fuente*: Magnus Mörner, *The Andean Past: Land, Societies and Conflicts* (Nueva York, 1985), 18.

fue provocada por un gran cambio climático hoy conocido como El Niño. Las aguas del océano Pacífico normalmente frías en esta región (la Corriente de Humboldt) son calentadas de tiempo en tiempo por corrientes profundas que desatan fuertes lluvias en el norte y sequía al sur. Los arqueólogos especulan que los peces desaparecieron de la costa al quedar privados de los nutrientes de aguas profundas, y que las lluvias torrenciales dañaron los sistemas de riego y agrícolas, provocando pestes, enfermedades y despoblamiento.

Chavín

Tres siglos después de esta catástrofe, un nuevo e importante centro cultural surgió en la sierra norte de Ancash, en Chavín de Huántar, alrededor de año 800 a. C.. Situado en una gran ruta de intercambio entre la costa y el bosque tropical de la floresta amazónica, los templos principales de la ciudad fueron tallados minuciosamente con símbolos religiosos extraídos tanto de la costa como del bosque amazónico. Chavín pasó a convertirse en uno de los complejos religiosos y ceremoniales más grandes de las Américas. Aunque Julio C. Tello, el padre de la arqueología peruana, originalmente pensó que ésta era «la matriz de la civilización andina», ahora parece más bien haber tenido raíces amazónicas.

El impresionante centro ceremonial de Chavín fue situado cuidadosamente por sus arquitectos en la confluencia de dos ríos cuyas aguas se originan en los glaciares de la montaña sagrada de Huantsán, en la espectacular Cordillera Blanca. Bajo el templo principal se construyeron canales subterráneos, aparentemente para que los peregrinos pudieran escuchar el rugido de las aguas que corrían debajo del imponente oráculo lítico del Dios Sonriente, de 1,50 m de altura, que se alza dentro del templo. Los inusuales efectos de sonido se sumaban al misterio y la mística de este lugar sagrado. El gran templo fue percibido por los pueblos andinos como el centro del mundo: el lugar más sagrado y reverenciado de la cultura Chavín. Este concepto del dios y su élite sacerdotal, ligados a una localización geográfica en el centro del cosmos —una suerte de misticismo espacial—, perduró en los Andes y fue fundamental para las posteriores creencias incaicas (Cameron 1990: 41).

El culto de Chavín, que comprendía un conjunto particular de ideas, rituales y estilos artísticos, eventualmente abarcó un amplio espacio geográfico. Teniendo su centro en Ancash, llegó por el norte hasta Cajamarca e incluso a Puerto Éten, en la costa, mientras que por el sur alcanzó al valle del Mantaro, Huancavelica y Ayacucho en la sierra, y Nazca en la costa. Al difundir importantes innovaciones metalúrgicas y textiles junto con el culto religioso, Chavín unió por vez primera a culturas no relacionadas entre sí de todo el Perú, con una religión y tecnología compartidas. Los cultos regionales a Chavín surgieron a lo largo y ancho de una

amplia zona, del mismo modo en que lo harían a comienzos del siglo XVI con Pachacamac, el imponente complejo ceremonial precolombino situado en el valle de Lurín, al sur de Lima.

Chavín comenzó a languidecer quinientos años después de su surgimiento, fragmentándose en varias partes. Durante los siguientes mil años diversas culturas regionales aparecieron para ocupar su vacío, tanto en la costa como en la sierra, entre ellas Recuay, Vicús, Moche, Paracas y Nazca; dos de ellas merecen una atención especial.

Moche

La civilización moche tuvo su centro cerca de Trujillo, en el valle del mismo nombre, ocupó unos seiscientos kilómetros de costa, entre Huarmey al sur y Piura al norte, un área que contenía varios centenares de miles de habitantes y alcanzó su apogeo alrededor del año 400 d. C.. El pueblo moche construyó una impresionante red de canales y acueductos de riego y abundantes campos, capaces de sostener a una población considerablemente mucho más grande que cualquier otra entre la llegada de los españoles y comienzos del siglo XX. A pesar de no contar con la rueda, el arado o un sistema de escritura desarrollado, los moches alcanzaron un notable nivel de desarrollo, como lo muestra su cerámica sumamente sofisticada, sus elevadas pirámides y su ingeniosa metalurgia. Ellos fertilizaron sus campos con guano, pescaron en el océano con sus singulares botes de totora y desarrollaron una elaborada red de intercambio marítimo y terrestre que se extendió a lo largo de la costa y sierra arriba.

En 1987, cerca de Sipán, el arqueólogo Walter Alva y su esposa desenterraron un extraordinario depósito de artefactos moche de la tumba de un gran sacerdote-guerrero y su séquito, pertenecientes, al parecer, a la sede de una corte regional moche. La tumba contenía ornamentos de oro y plata finamente trabajados, grandes figurillas de cobre dorado y cerámica hermosamente decorada. De hecho, los artesanos hicieron representaciones tan realistas y exactas de sí mismos y de su entorno, que contamos con un cuadro notablemente auténtico de su vida y labores cotidianas.

Nazca

Entre los 100 a. C. y los 600 d. C. floreció a lo largo de la costa y la sierra sur la cultura Nazca, una sociedad más pequeña que la Moche. Su centro estuvo situado en el valle de Ica, cuya superficie agrícola era mucho menos extensa que la de la costa norte al igual que su población. El agua era escasa, las sequías algo común y buena parte de su río más importante corría bajo tierra, lo que hizo que los



Vasija de la alfarería Nazca (siglos II a VII d. C.) de 36,5 cm de diametro. Museo Leiden.

nazcas diseñaran un ingenioso sistema de filtración subterránea para captar agua de la capa freática. Los nazcas asimismo alcanzaron renombre por sus coloridos textiles finamente bordados y su cerámica bellamente pintada y estilizada, pero no erigieron pirámides en la escala masiva de su contraparte norteña de Moche.

Sin embargo, tal vez el artefacto más llamativo de esta cultura son las ahora famosas líneas de Nazca. Estas líneas o jeroglifos atraviesan el desierto por kilómetros alrededor de Nazca y tienen diversas formas geométricas, animales y humanas. Aparentemente se hicieron retirando una capa de los guijarros de manganeso y óxido de hierro depositados sobre el suelo del desierto durante milenios. Tema de muchas especulaciones, las líneas de Nazca han producido una serie de hipótesis sobre su finalidad. Tal vez la más temprana, pero la menos respaldada con evidencias concretas, fue sugerida por Paul Kosok y su discípula María Reiche, quienes sostuvieron que las marcas en el desierto eran un gigantesco calendario astronómico, diseñado para que coincidiera con el ciclo agrícola. Más plausible resulta la idea presentada por J. Reinhard, respecto a que ellas formaban parte de los rituales asociados con el transporte del agua al valle de Nazca.

Tiahuanaco-Huari

A partir del siglo V d. C., el centro de gravedad de la antigua civilización peruana se desplazó de estas culturas costeñas a la sierra andina. Allí surgieron dos grandes estados imperiales junto con grandes centros urbanos, uno en Tiahuanaco (Tiwanaku), cerca al lago Titicaca, y otro en Huari (Wari), cerca de la actual ciu-

dad de Ayacucho. Ambos constituían una nueva síntesis de la sociedad andina, fragmentada antes tras la desaparición de Chavín. También influyeron bastante en el surgimiento de los dos imperios posteriores, el de Chimor en la costa norte y el de los incas del Cuzco. Se desconoce la cronología exacta del desarrollo de estas dos culturas andinas.

La ciudad de Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, fue la capital situada a mayor altura (unos 3.789 metros sobre el nivel del mar) en el mundo antiguo. Fue un centro ceremonial y una ciudad administrativa, cuya población tal vez alcanzó cuarenta mil habitantes, una cifra enorme para ese entonces. Es más, su influencia religiosa y política se extendió sobre un área inmensa que contenía millones de pobladores. Como correspondía a su importancia, la ciudad de Tiahuanaco fue diseñada a escala monumental, cubriendo más de 6,5 km^2 con grandes estructuras de piedra. Las piedras eran usadas como material de construcción, algunos de cuyos bloques pesaban hasta ciento treinta toneladas, fueron arrastrados por un gran ejército de trabajadores de canteras a cierta distancia de la ciudad, utilizando rampas y rodillos.

Para sustentar este gran centro poblacional, los habitantes de Tiahuanaco desarrollaron un sofisticado e intrincado sistema de campos elevados encima de las pantanosas orillas del lago. Su elevado rendimiento complementaba la usual dieta andina de papas, quinua (un grano rico en proteínas) y carne de los rebaños de camélidos. Sin embargo, poco se sabe del sistema imperial del pueblo tiahuanaco, es decir, de los métodos de comercio e intercambio, trabajo y explotación, y de administración y control que usaron para regir su imperio. Por ejemplo, dos teorías rivales del intercambio sugieren que la especialización y una desarrollada red comercial entre las regiones sirvió para la circulación de productos en el imperio; o que, alternativamente, un sistema de colonias, recolección de tributo y redistribución por parte del gobernante aseguraba el acceso a productos y bienes de distintas zonas ecológicas andinas. En todo caso, el poder imperial de Tiahuanaco parece haberse basado más en medios religiosos y económicos que militares.

La relación entre estos dos imperios más o menos cronológicamente coincidentes —Tiahuanaco y Huari— es incierta. Ambos compartieron una serie de rasgos sociales y características similares; en algunas zonas incluso parecen superponerse administrativamente. En Huari, a menor altura en las cercanías de Ayacucho, se observan algunas diferencias importantes con respecto a su contraparte en la alta puna del lago Titicaca. Por ejemplo, su sistema de campos estaba orientado a las laderas bajas y cuencas entre las montañas de los Andes que pudiesen configurarse para el riego y las terrazas. Su cultivo principal era el maíz, que podía fácilmente almacenarse, transportarse y utilizarse en la producción de chicha, una importante bebida andina usada en fiestas y rituales, así como para

sellar las transacciones personales de la vida cotidiana. En cambio, en la puna más fría y semiárida, no se producía maíz y debía importarse de zonas más bajas.

El pueblo huari exhibió características que fueron adoptadas posteriormente por el Estado inca. Por ejemplo, es posible que recurrieran, como ya se señaló, a zonas ecológicas complementarias para variar su producción y consumo, del mismo modo que los incas lo harían después. De igual manera, desarrollaron una temprana forma del quipu como instrumento de registro, pero usando colores en lugar de nudos. Por último, al igual que los incas posteriormente, el imperio huari edificó centros estatales en áreas provinciales para administrarlas y controlarlas mejor.

En síntesis, tanto Tiahuanaco como Huari desarrollaron grandes asentamientos urbanos y sistemas estatales de amplio alcance en los Andes entre los años 500 d. C. y 1000 d. C. Ambos mostraron sus habilidades y destrezas como ingenieros tales como extensos sistemas viales y estilos arquitectónicos perfeccionados posteriormente por los incas. Sin embargo, entre los años 1000 y 1450 d. C., un periodo de fragmentación quebró la unidad previa alcanzada durante la etapa Tiahuanaco-Huari. En este lapso, decenas de grupos de diversa base étnica, tanto grandes como pequeños, poblaron el paisaje andino. En los Andes del centro y del sur, por ejemplo, los chupachos de Huánuco sumaban unas diez mil personas, los lupacas en la orilla occidental del lago Titicaca eran más de cien mil y controlaban grandes rebaños de camélidos en la puna, y Tunamarca, cerca de la actual Jauja, un asentamiento huanca, otro de los grupos étnicos que habitaban en los Andes centrales, contaba con una población estimada entre ocho y trece mil habitantes.

Estos belicosos grupos, relativamente pequeños, estaban esparcidos por la sierra, separados en ocasiones por grandes áreas deshabitadas, o compartiendo en otras las tierras de territorios más o menos contiguos. Los recursos que controlaban, basados esencialmente en la agricultura y la ganadería, se encontraban a menudo dispersos, por lo que eran más difíciles de administrar que los ricos y más desarrollados valles de las culturas costeñas. Por este motivo, el desarrollo de unidades políticas más centralizadas o imperios, fue mucho más difícil en la sierra que en la costa, lo que implicó que debían superarse múltiples obstáculos para construir un imperio viable en la serranía. Sin embargo, una vez logrado, como en el caso de los incas, la capacidad política y administrativa que desarrollaron les dio tal vez una ventaja sobre sus contrapartes costeñas. En consecuencia, esta capacidad para controlar y administrar territorios y recursos dispersos podría explicar el hecho de que los imperios serranos exitosos lograran alcanzar cierto grado de dominio e influencia sobre las culturas costeñas y no a la inversa.

El reino de Chimor

Con la decadencia y fragmentación que tuvo lugar en el periodo post-Tiahuanaco-Huari, el centro de gravedad de la antigua civilización andina se desplazó una vez más, a la costa norte. Entre los años 850 o 900 d. C, sobre las ruinas de la cultura Moche, surgió un nuevo reino llamado Chimor con su capital Chan Chan, cerca de la actual Trujillo. El reino de Chimor se extendió a todo lo largo de la costa central y norte entre Tumbes y Chincha, una extensión de más de 1.440 km Chan Chan, situada en la desembocadura del río Moche, cubría más de 25,9 km^2, con una población que en su apogeo tuvo más de cien mil personas. Fue la ciudad precolombina más grande de Sudamérica en ese entonces, y estaba dividida en nueve u once ciudadelas, cada una de las cuales era al parecer la residencia de un señor local, y a veces el palacio del monarca del reino.

Además de sus funciones ceremoniales y administrativas, Chan Chan fue también un centro de producción artesanal. Una cuarta parte de su población estaba conformada por artesanos que producían los bienes metalúrgicos y textiles que fueron el máximo logro artístico de los chimúes. De hecho, Chan Chan fue un gran centro «manufacturero». Los bienes se producían en grandes conjuntos, subdivididos en un laberinto de pequeños talleres individuales dentro de las ciudadelas, y se almacenaban en grandes depósitos situados por toda la urbe. Una activa estación de caravanas cerca del centro de la ciudad recibía remesas de materias primas y cargaba los productos terminados para ser transportados por todo el imperio. La redistribución de estos bienes, práctica común en la economía política de los Andes, servía para ampliar y remozar el poder del gobernante chimor.

El preciso y simétrico espacio urbano de Chan Chan estaba rodeado por un frondoso oasis de campos agrícolas que mantenían la densa población de la ciudad. Dependiente de un complejo sistema de riego conectado al vecino río Moche, el corazón del reino Chimor era, al igual que Moche, vulnerable a periódicos desastres naturales tales como las inundaciones por los efectos de El Niño, o los terremotos. Asimismo, con el tiempo la sal se infiltraba en el sistema desde el mar, reduciendo la productividad agrícola, lo que tal vez dio a los chimúes el empujón necesario para adquirir más tierras mediante la expansión imperial. En consecuencia, para el año 1200 d. C. habían alcanzado el control del valle de Saña al norte, y del Santa al sur, y para el año 1400 d. C. habían llegado a sus límites imperiales. Sin embargo, parece ser que la hegemonía chimú sobre esta región no se basó exclusivamente en medios militares, sino en el poder y el control económico de sus cruciales sistemas hidráulicos. Paradójicamente, esto último hizo que los chimúes, al igual que sus predecesores, fueran vulnerable al corte o desvío de sus recursos hídricos a manos de formaciones políticas serranas en expansión, como los incas a mediados del siglo XV.

El imperio inca

El apogeo de las civilizaciones andinas precolombinas fue la construcción, por parte de los incas, de un imperio que abarcó una tercera parte del continente sudamericano y alcanzó un nivel de bienestar material general y sofisticación cultural que rivalizó, o tal vez incluso sobrepasó, el de muchos otros grandes imperios de la historia mundial. Aunque nuestros conocimientos sobre esta gran civilización son mejores que la información fundamentalmente arqueológica de los periodos preincaicos, aún siguen siendo controvertidos debido a varios factores. El primero de ellos es que la mayoría de los trabajos sobre el imperio inca se basa casi íntegramente en los cronistas hispanos que reunieron información sobre el imperio después de su conquista en 1532. Ellos dependieron para buena parte de su información sobre el imperio y su historia, de los recuerdos de la élite nativa incaica hispanizada del Cuzco. A diferencia de los aztecas que contaban con pictografías, o de los mayas, que tenían jeroglíficos, los incas no desarrollaron ninguna forma de escritura. Por cierto, que tuvieron el sistema de quipus, un método cuantitativo singular para compilar datos y conservar registros que permitió al Estado administrar su extenso imperio desde su capital en el Cuzco.

Un segundo factor que nubla nuestro conocimiento sobre la sociedad inca proviene del hecho de que las dinastías incaicas no desarrollaron una sola versión oficial de su pasado, como habría sido de esperar en una sociedad tan altamente centralizada y concentrada en el Estado. Lo que hubo más bien fueron historias distintas y contendoras derivadas de las familias, o panacas, de los varios reyes Incas y sus descendientes que gobernaban el imperio y conspiraban para hacer valer sus derechos dinásticos sobre el poder político. De este modo, el control del pasado histórico y sus distintas versiones fue también un aspecto central de la lucha por el poder. Estas versiones de la historia reflejaban las distintas relaciones de poder de los diversos grupos en una sociedad altamente estratificada. En consecuencia, muchos historiadores conciben las narrativas de la historia inca como construcciones, creadas en los primeros años del imperio para explicar y legitimar las prácticas y patrones de las relaciones sociales que se habían instituido» (Patterson 1991: 45). Esta postura contrasta con las de otros historiadores que tratan esas relaciones como más próximas a la realidad histórica. De cualquier manera, a partir de la década de 1960 los historiadores que trabajaban en los archivos virreinales hispanos descubrieron una nueva y valiosa fuente sobre los incas: los informes de las visitas de funcionarios coloniales, que efectuaban viajes en busca de información a distintas provincias para reunir datos con fines administrativos.

Tal vez el problema más complejo para construir una historia exacta y coherente de los incas se deriva de una cosmovisión andina distinta de la occidental. Por ello, para comprender el pasado incaico los historiadores deben preguntarse,

como lo hiciera R. Tom Zuidema, acerca de la forma en que los incas mismos concebían su propia historia. Los europeos, por lo menos desde la Ilustración, la ven como algo lineal, como una cadena de eventos en la que cada uno era el producto de su predecesor. Los andinos, sin embargo, creían que la «historia» (el devenir de la experiencia humana) era cíclica, «una alternancia de edades imperiales y antipolíticas que se seguían la una a la otra en sucesión; la transición de una edad a la otra estaba marcada por cataclismos» o pachacuti (Patterson 1991: 44). Los cronistas españoles, muchos de ellos sacerdotes que veían a los nativos americanos como infieles a ser convertidos al cristianismo, interpretaron lo que vieron desde una perspectiva estrictamente eurocéntrica y judeo-cristiana. Este sesgo oscureció muy a menudo toda comprensión significativa de sus temas en lugar de aclararlos.

Dicho esto, parecería que los incas o quechuas no eran sino uno de los diferentes grupos de base étnica de distintas dimensiones, dispersos por todo el paisaje andino luego de la caída de las civilizaciones Tiahuanaco y Huari alrededor del primer milenio de nuestra era. Este periodo, el llamado Intermedio Tardío o preinca, se extendió aproximadamente entre los años 1000 a 1400 d. C. Se caracterizó por una relativa fragmentación y dispersión de la población, así como por la ausencia de toda gran concentración urbana, marca distintiva del anterior Horizonte Medio, entre los años 600 y 1000 d. C.

Orígenes

Hay distintas interpretaciones sobre el origen de los incas y el surgimiento de su reino en el Cuzco. Una escuela tradicional sostiene que ellos se originaron en la región del lago Titicaca, desde donde se comenzaron a expandir gradualmente, ingresando (tal vez invadiendo) al valle del Cuzco ya en el año 1200 d. C. Sin embargo, la concepción predominante es que los incas no fueron invasores del valle, sino que en realidad habían vivido allí cientos de años, y que más tarde comenzaron a someter e incorporar a diversos otros pueblos también asentados en la región del Cuzco. Estos grupos comprendían a los huallas, sausirays, alcavizas y ayarmacas, a cuyas élites se les concedió el título de «incas de privilegio». De este modo se les incorporó al funcionamiento del incipiente Estado incaico a través de un sistema de ayllus de la realeza.

Los ayllus constituían la unidad básica de la sociedad andina. Estaban conformados por grupos de parentesco endógamos cuya función más importante era el dominio de tierras específicas, en las cuales se permitía a sus integrantes (parejas) cultivar parcelas para su subsistencia. A cambio del derecho a tener la tierra, sus miembros estaban obligados a detentar cargos y efectuar ciertas funciones religiosas en su comunidad. En el ayllu, los pastizales eran comunales (la propiedad privada

no existía), en tanto que las tierras cultivables eran asignadas a las familias en proporción a su tamaño. Dentro de la comunidad, las tareas se llevaban a cabo en forma colectiva, fundándose la división del trabajo en la edad y el género. Así, sus integrantes se reunían para atender colectivamente a los campos de cada uno de ellos, construir una casa o reparar sistemas de riego, mientras recibían por ello chicha, comida, herramientas y semillas de su anfitrión o beneficiario. Estas cuadrillas de trabajo colectivo de base comunal aún se mantienen en los Andes y se les denomina mingas. La división del trabajo por edad y género implicaba que los adolescentes trabajaran como pastores, los hombres araran y las mujeres sembraran, hilaran, tejieran y prepararan chicha. Algunos integrantes de la comunidad también producían artesanías, como cerámica y objetos de plata, tal vez durante la época de baja actividad agrícola.

La división del trabajo mencionada no debe ser entendida como un dominio masculino en la sociedad andina, por lo menos a nivel comunal. Más bien había una interdependencia y complementariedad entre los sexos, y la igualdad de género era la norma, tal como sucedía entre los integrantes de la comunidad. Ella se manifestaba mejor en la ceremonia matrimonial, que festejaba la unión de iguales y se expresaba en el intercambio ritual de vestimentas. Sin embargo, con el tiempo, el imperialismo y las conquistas incas prestaron más importancia al soldado varón, lo que introdujo el proceso de creación de una jerarquía basada en el género. Es más, a medida que el imperio se expandía, su administración cayó en manos de varones nobles que pasaron a ser los verdaderos detentadores del poder.

Otro rasgo de la igualdad de género en los Andes fue la costumbre de contar con líneas de descendencia paralelas, es decir, las mujeres descendían de sus madres y los hombres de sus padres. Por lo tanto, a las mujeres, al igual que a los varones, se les concedía una parte de los recursos del ayllu y con ello un acceso independiente a los medios de subsistencia de la sociedad (incluyendo el derecho a las tierras, aguas y rebaños de la comunidad). De igual manera, la herencia también se basaba en el género, de modo que las mujeres transmitían algunos de estos recursos a sus hijas (Silverblatt 1987). Al igual que la propiedad comunal, en contraposición a la propiedad privada de la tierra, esta herencia fundada en el género resultó ser un problema difícil, después de la conquista, cuando los españoles impusieron a la sociedad colonial sus nociones patriarcales de la primogenitura en la herencia, del mismo modo que lo hicieron con el concepto de la propiedad privada.

Puesto que la autosuficiencia era el ideal fundamental de la antigua sociedad andina, las comunidades a menudo cultivaban parcelas de tierra en distintos nichos ecológicos del quebrado terreno andino. Así alcanzaron lo que John Murra llamó la «complementariedad vertical», es decir, la capacidad de producir

una amplia gama de cultivos —como el maíz, la papa y la quinua— a distintas alturas para el consumo familiar y comunal.

En el temprano periodo inca, el Cuzco probablemente no fue sino una aldea y las «conquistas» incaicas antes de inicios del siglo XV fueron limitadas y probablemente se asemejaban más a incursiones. Según Rowe, «en los primeros tiempos, ni los incas ni ninguno de sus vecinos pensaba en organizar sus conquistas como un dominio permanente. Una aldea derrotada era saqueada y tal vez se le imponía un tributo, y se abandonaba hasta que recuperaba suficiente fortaleza como para volver a constituir una amenaza» (citado en Davies 1995: 38).

Expansión

Durante este periodo formativo de expansión gradual (1200-1400 d. C.), los incas fueron gobernados por una serie de monarcas cuyos nombres se han identificado en las crónicas y otras fuentes, y cuyos reinados conforman una especie de historia oficial. El ritmo de las conquistas se aceleró dramáticamente durante el reinado de Pachacútec Inca Yupanqui, el noveno de estos reyes, quien gobernó entre los años 1438 y 1471. Hemming le describió como «una de esas figuras proteicas, como Alejandro o Napoleón, que combinaba una manía por las conquistas con la habilidad para imponer su voluntad sobre todas las facetas del gobierno» (citado en Cameron 1990: 1958). Otro académico prominente afirma que no sólo fue un gran gobernante, «sino [también un]... héroe cultural primordial, creador tanto de la ciudad como del imperio» (Davies 1995: 40).

Dos escuelas surgieron en años recientes para explicar la expansión del Estado inca en el siglo XV. La visión tradicional, basada en un cuidadoso análisis de las crónicas hispanas efectuado por Rowe (1946) y otros, la atribuye a la figura carismática de Pachacútec y a su genio organizador y su liderazgo. Un segundo grupo cuestiona esta visión de la historia basada en acontecimientos, que ve a una persona —Pachacútec— como el agente principal del cambio histórico entre los incas. Para esta escuela, el desarrollo del Estado inca se derivó de procesos más amplios de cambio social, aunque no hay acuerdo en lo que respecta a las causas específicas. Por ejemplo, en lo que toca a la expansión, Rostworowski de Diez Canseco (1988) subraya la manipulación de las relaciones de intercambio institucionalizadas y no las conquistas militares; Lumbreras (1978) recalcó la lucha de clases, así como la animosidad tradicional entre el Cuzco y los chancas; Murra (1980) y otros han señalado el manejo económico y los sistemas de redistribución, y finalmente, Conrad y Demarest (1984) y otros dan importancia al sistema de herencia incaica.

Bajo el reinado de Pachacútec y el de su hijo Túpac Inca Yupanqui (1471-1493), los incas llegaron a controlar hasta más de una tercera parte del continente sudamericano, contando con una población estimada de nueve a dieciséis millones de habitantes en el momento de la conquista española. El elemento clave para esta expansión veloz con Pachacútec fue su victoria sobre los chancas, un feroz grupo étnico rival que aparentemente amenazó su jefatura incipiente. Al invadir el valle en el siglo XV, los chancas intentaron capturar el Cuzco pero fueron rechazados por una heroica defensa a ultranza de la ciudad organizada por Pachacútec, y fueron luego perseguidos y aplastados por su ejército.



Machu Picchu, ciudadela Inca situada a cien kilómetros del Cuzco.Construida en el siglo XV, cumplió funciones de Hacienda Real y centro ceremonial.

Una vez derrotados, los chancas aceptaron la autoridad de su conquistador, como se acostumbraba en los Andes. Habiendo mostrado su habilidad guerrera, fueron incorporados al creciente ejército imperial de Pachacútec, una práctica que los incas posteriormente seguirían con otros pueblos conquistados. En campañas militares subsiguientes, el emperador extendió el alcance del poderío inca a Huamanga, Huánuco y la región alrededor del lago Titicaca. Tras el deceso de Pachacútec en 1471, su hijo Túpac Inca Yupanqui amplió el radio de sus conquistas hacia el norte, a Cajamarca y Quito; y por el sur al actual Chile. Estas conquistas también incluyeron los avanzados reinos de la costa como Chimor, que, como ya señalé, eran vulnerables al corte de los canales de regadío de los cuales dependían para su provisión de alimentos. Por otro lado, los reinos sucesores de las naciones nazca y chincha, en la costa sur, aceptaron o se opusieron a la intromisión incaica, dependiendo del grado de complejidad política de valle a valle.

Luego de su gran victoria sobre los chancas, Pachacútec transformó al Cuzco en una resplandeciente ciudad imperial y consolidó su hegemonía política. Usando el botín tomado a los vencidos chancas, recompensó a los jefes locales vecinos con suntuosos presentes a cambio de su lealtad al dominio inca. Tales nociones de reciprocidad eran características de la política andina y marcaban la aceptación de la sumisión de los jefes locales a una autoridad mayor. La clave de este singular arreglo andino era económica: la acumulación y distribución de riqueza, en este caso el botín, en forma de alimentos y otros bienes suntuarios producidos con los campos y la mano de obra, y almacenados en grandes depósitos a lo largo de todo el reino.

Religión

Pachacútec también instituyó cambios en la religión politeísta de los incas. Ellos no solamente sirvieron para reforzar su poder temporal, sino que fueron además una expresión del incipiente imperialismo incaico. En el Cuzco, Pachacútec reconstruyó el palacio de Coricancha, antes residencia de los reyes incas, convirtiéndolo en un gran santuario dedicado al culto de Inti, el dios sol. Allí colocó resplandecientes estatuas de oro de los anteriores reyes Incas y ordenó a los sacerdotes que prepararan nuevos cánticos y rituales en honor a su memoria. Posteriormente, cuando los españoles capturaron el Cuzco en 1533, quedaron deslumbrados con este brillante monumento al dios sol, cuyos muros estaban minuciosamente cubiertos con oro y plata, tesoros posteriormente fundidos para su envío a España. Garcilaso de la Vega reporta que los jardines interiores del Coricancha también estaban suntuosamente adornados con oro y plata, y contenían cinco fuentes de oro en donde se lavaba a las víctimas de los sacrificios antes de que

éstas se encontraran con su destino. Con Pachacútec, el Templo de Coricancha se convirtió en el símbolo de su nuevo culto imperial.

En el panteón religioso incaico, Inti no era sino uno de una tríada de dioses. Los otros dos eran el dios creador Viracocha e Illapa, el dios del clima o del trueno. Otras deidades importantes eran Mama Quilla, la luna, y Pachamama, la madre tierra. Fue Viracocha quien se apareció a Pachacútec en sueños en vísperas de la gran batalla del Cuzco, como una figura barbada de rostro blanco que prometía la victoria sobre los chancas. Gracias a la victoria inca, la posición de Viracocha en el panteón religioso fue posteriormente mejorada por un agradecido Pachacútec, como parte de una reforma general de la religión estatal incaica. Su objetivo, al igual que la elevación de Inti, era usar la religión oficial como un medio para legitimar las conquistas incaicas. Como las funciones de los dioses a menudo parecían fundirse o estar superpuestas, y dado que ninguna deidad incaica era considerada suprema (no conociéndose el monoteísmo), los investigadores tienen diferentes posiciones respecto a la importancia de estas divinidades, Inti o Viracocha, para los incas. Sin embargo, la interpretación predominante sostiene que durante el reinado de Pachacútec se dio claramente un proceso de «solarización de la religión estatal», como expresión del culto y el ethos del imperialismo (Pease 1978).

Sin embargo, la vida religiosa de la población común y sujeta del imperio tenía poco que ver con las manifestaciones abstractas y universales de la religión estatal oficial. A nivel local, el culto más bien giraba en torno a seres o espíritus sagrados que vivían en lugares u objetos llamados huacas, o sitios sacros. Estos lugares incluían montañas, manantiales, lagos, afloramientos rocosos, ruinas antiguas y cuevas, además de objetos tales como efigies, momias, oráculos: todo lo hecho por el hombre. En tanto sitios u objetos sagrados, las huacas eran reverenciadas por la población que las llenaba de presentes como carne de llama y de cuy, polvos minerales de colores brillantes, ropa, hojas de coca y chicha. Las huacas a menudo se convertían en templos y eran atendidas por sacerdotes mantenidos con la producción de los campos aldeanos destinados a dicho fin.

Además de instituir el culto al sol, Pachacútec formalizó y estandarizó el calendario con el que el Estado fijaba las fechas de ciertos rituales, procesiones y otras actividades sociales. Éste fue otro mecanismo para el dominio estatal de los pueblos conquistados, con el cual se determinaba el momento en que se llevaban a cabo las fases del ciclo agrícola, se levantaban los censos, se cobraban los impuestos, se entregaba trabajo, inclusive hasta cuándo debían realizarse las ceremonias matrimoniales. Un cronograma tal formaba parte del desarrollo de una cosmología oficial llamada el sistema de ceques, mediante el cual los incas crearon una compleja representación geográfica del país y el universo.

Según Zuidema (1986: 73), el sistema comprendía cuarenta y un líneas o vectores imaginarios que se irradiaban desde el centro del Cuzco hacia el hori-

zonte, algo así como los rayos de una rueda. Sobre el sistema estaban situadas 328 huacas, principalmente manantiales, montañas o cerros. Cada lugar sagrado era el objeto de un ritual especial desarrollado en un culto asignado en un día determinado. Además de ordenar los días del año con cada huaca —algo parecido a un rosario—, el sistema de ceques también ayudó a codificar las observaciones astronómicas de los incas.

Organización

Pachacútec también fue un gran innovador en otras formas. Él dio inicio a un ambicioso programa de obras públicas. Por ejemplo, los dos ríos más importantes del Cuzco, que a menudo inundaban la ciudad durante la temporada de lluvia, fueron canalizados por trabajadores movilizados por los curacas locales, o jefes del valle vecino. Pachacútec al parecer también inició la construcción de la masiva fortaleza de Sacsahuamán para proteger la ciudad, movilizando tal vez unos veinte mil trabajadores en una tarea que abarcó el reinado de monarcas posteriores. Además de su función militar, Sacsahuamán se convirtió en el principal depósito de la capital, guardando armas, vestimentas, joyas y metales preciosos. Por último, el emperador comenzó la construcción del gran sistema vial incaico, que iría desde la plaza central de la capital hacia los cuatro puntos cardinales, dividiendo la ciudad en cuatro suyus o secciones. A medida que el territorio inca se expandía, estos cuatro caminos sirvieron como el eje principal que dividía al imperio, igual que la capital, en cuatro suyus o cuartos. «[L]a ciudad se convirtió así», en todo sentido, «en el ombligo mismo del naciente imperio» (Davies 1995: 51), al que los incas llamaron Tahuantinsuyo o las cuatro divisiones.

Para llevar a cabo estas grandes obras públicas, Pachacútec introdujo un sistema de trabajo de prestaciones laborales que giraba en torno a los yanas (siervos) y mitimaes (colonos). Estos últimos estaban conformados por contingentes extraídos de los pueblos conquistados cuya lealtad a los incas estaba ahora asegurada, y a quienes se transfería en masa para vivir y trabajar en otras partes del imperio. Ellos reemplazaban a los grupos rebeldes, y otros, de cuya lealtad se sospechaba, y que habían sido deportados a otras regiones para ser reeducados e integrados al imperio. Los mitimaes ocupaban sus tierras y podía emplearseles en otras tareas tales como la construcción de caminos, templos y canales, o en la producción de alimentos y artesanías para el Estado. También se les podía usar para establecer guarniciones permanentes destinadas a conservar el control y el orden en la creciente frontera incaica. En todo caso, su retiro y reubicación en áreas recientemente conquistadas fue un medio de establecer el control e integración de los nuevos grupos al orden imperial. Los yanas fueron reclutados de las comunidades recién conquistadas o rebeldes, y enviados al Cuzco como

sirvientes o trabajadores. Al parecer inicialmente se les usó para construir obras de irrigación en el Cuzco y cultivar las tierras de las panacas. Éstas, la familia de Incas anteriores y sus contrapartes asimiladas (los incas de privilegio), ya estaban transformándose en una aristocracia hereditaria con la cual llenar los puestos del creciente aparato administrativo estatal. Los yanas también laboraban en las haciendas reales, en casa de los jefes locales, o en los santuarios de los cultos religiosos estatales.

El Sapa (supremo) Inca se erguía en la cúspide del Estado incaico encarnando al Estado. Los incas lo consideraban como hijo del Dios Sol Inti, y era, en efecto, tanto hombre como dios, y sus súbditos eran los «hijos de Dios». Se cree que la importancia original del dios sol Inti se derivaba del origen del cultivo del maíz en los Andes, que prospera únicamente a bajas alturas, allí donde el calor del sol es más intenso, y el peligro de heladas menos severo. Los antropólogos creen que este cultivo fue crucial para los incas, puesto que se producía y transportaba con facilidad para el sustento de los ejércitos imperiales. La coincidencia del imperialismo, la solarización y la producción de maíz no fue azar alguno.

El Sapa Inca contraía matrimonio con una de sus hermanas, la que se convertía en coya o reina. Como su marido era el hijo del Sol, ella era la hija de la Luna y representante de todas las mujeres. Esta dualidad basada en el género masculino/femenino-sol/luna-día/noche constituía parte del principio organizador sobre el cual se levantaba la cosmogonía y la sociedad incaicas. Desde el punto de vista social, esta dualidad se traducía en el sentido más amplio de la reciprocidad y la complementariedad. Hay ciertas evidencias de que la coya tenía cierta autoridad política en el imperio, por ejemplo gobernando en ausencia del Inca o asesorando a su marido en asuntos importantes. A pesar de ello, al ser «reina de las mujeres», su autoridad se ejercía principalmente sobre las mujeres del imperio. En el Cuzco en las ceremonias oficiales del Cuzco ellas, besaban la mano de la reina, del mismo modo que los varones rendían similar pleitesía al rey. Podemos captar cierta idea de la autoridad de la coya a partir de la descripción que un cronista hiciera de ella:

> [...] casado el ynga, esta coia, [...], era la reina a quien todas las demás obedecían y respetaban, y esta era tenida por muger lejitima y los hijos de esta heredaban el reino, como está dicho. Estas coias y reinas salian de su palacio raras veces, y quando salian eran con una pompa admirable y magestad de ynfinitos escuderos, criados y jente de su servicio, [...] (Murúa, [1590] 1964: 68)

No se conoce el método de elección del Sapa Inca. Los cronistas asumieron que los incas se regían de acuerdo con las reglas de primogenitura o de sucesión del hijo mayor como entre los reyes de España. Sin embargo, en un informe a Felipe II

en 1572, el virrey Toledo sostuvo más bien que el hijo que mostraba la mayor capacidad para gobernar pasaba a ser el emperador. Tal método abría el camino para las diferencias de opinión e intrigas en la sucesión imperial, y en la historia incaica efectivamente abundan los relatos sobre numerosas luchas por el poder. De hecho, Pachacútec usurpó el trono en un golpe de Estado en contra de otro heredero o pretendiente. La división en facciones y las luchas por el poder se hicieron más comunes a medida que el imperio crecía y los gobernantes pasaban periodos más prolongados fuera de la capital. La legendaria guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, su hermano supuestamente ilegítimo, que abrió el camino a la conquista española, fue precisamente una lucha por la sucesión imperial.

El poder absoluto del Sapa Inca no se basaba únicamente en su autoridad espiritual. En teoría, él era dueño de todos los campos, minas y rebaños del imperio. Las comunidades estaban obligadas a asignar una parte de sus campos y pastos para el mantenimiento del Estado y la religión estatal, la que se trabajaba mediante la mita. Este sistema idealmente significaba la división de las tierras comunales en tres partes (Estado, religión, comunidad), aunque en la práctica la que se asignaba a cada sector variaba de un lugar a otro. La producción de estas tierras estatales se almacenaba en la localidad o se enviaba al Cuzco o a otros centros administrativos.

En cuanto a los rebaños —de llamas y alpacas— pastados en las tierras comunales a mayor altura, eran valiosos como transporte, para sacrificios religiosos y para la producción de lana fina para las elaboradas vestimentas usadas por el Inca y la élite. Se dice que el Sapa Inca solamente usaba una vez cada pieza de vestir y que cambiaba de ropa varias veces al día. La minería también ocupaba un lugar importante en la riqueza material del Sapa Inca. Los metales preciosos, en particular el oro y la plata, eran sumamente valorizados por los incas, quienes les usaron con gran destreza en la decoración de sus templos.

El núcleo de la élite se encontraba justo por debajo del Sapa Inca en la pirámide social, y estaba conformada exclusivamente por los descendientes de los reyes Incas. Los orejones, como los llamaron los españoles, juntamente con los sumos sacerdotes, residían exclusivamente en el centro del Cuzco. Ellos enviaban sus hijos a una escuela especial, se les permitía usar vestidos suntuosos, estaban exentos de los impuestos y tal vez hablaban un dialecto distinto del quechua. Se les asignaba una renta estatal y se esperaba que devolvieran parte de ella en forma de presentes al rey. Era entre los orejones donde el Sapa Inca reclutaba a muchos de sus principales comandantes y administradores. La élite incaica asimismo era servida por la clase de los yanas, reclutados en las provincias y llevados a la capital con esta finalidad. Éstos eran «criados» y al parecer había distintos tipos de ellos, constituyendo incluso un privilegio ser yana del rey Inca, y ciertamente podían alcanzar estatus como artesanos.

La administración

La administración de un imperio tan grande debe haber sido una ardua tarea, lo que en ausencia de la escritura —la base de toda burocracia moderna— rebasa las fronteras de lo verosímil. Un elemento central en este proceso era la implementación de un registro llamado quipu, que constaba de cordeles o cuerdas rojas y anudadas en formas significativas. Los quipus eran el dominio de expertos llamados quipucamayos, contadores premodernos que llevaban registros de todo lo relacionado al imperio, desde alimentos almacenados a rebaños, o el movimiento de tropas y personas. Educados en escuelas especiales, ellos trabajaban en cada ámbito de la administración, desde el centro en el Cuzco hasta el nivel local y provincial. Sus prodigiosas hazañas de una meticulosa contabilidad imperial asombraron a los conquistadores hispanos y aún desafían la imaginación.

En ausencia de información precisa se corre el riesgo de imponer conceptos organizativos occidentales, sin embargo, podemos pensar en un aparato y una casta administrativa organizados a lo largo de líneas judiciales, fiscales, militares y de transporte, siendo tal vez los dos últimos los rubros más importantes. En una sociedad diseñada para la expansión imperial, el ejército y el transporte eran fundamentales. Es notable la extensión y la complejidad de la construcción de un sistema de transporte funcional y eficiente por todo el Ande, un problema que desafía las soluciones modernas. La construcción de puentes y caminos para atravesar este terreno montañoso requirió el máximo nivel de originalidad y técnica, campos en los cuales los ingenieros incaicos sobresalían. Los investigadores quedaron aún más impresionados por el hecho de que los puentes y edificios incaicos fueron construidos sin recurrir al arco, un concepto usado ya por más de dos mil años en Occidente. La originalidad de la ingeniería incaica destaca más la información sobre la infraestructura de comunicaciones imperial que fue planificada centralmente sin recurrir a cuadros y mapas, por lo menos tal como se les conoce en Occidente. Cómo un sistema tal fue controlado desde el centro, sin estos artefactos y tal vez dependiendo en gran medida de la memoria, es algo que también desafía la comprensión moderna. El quipu indudablemente desempeñó un papel en ello, pero sigue siendo un misterio en qué consistió exactamente.

Aunque probablemente jamás se conozca su extensión total, gran parte del sistema vial incaico fue registrado en los últimos años en un notable proyecto dirigido por el arqueólogo John Hyslop. Posiblemente haya comprendido hasta catorce mil kilómetros. Aunque se usaba con fines religiosos y militares, su función principal fue administrativa y económica. La arteria central del imperio fue el camino Cuzco-Quito, a lo largo del que existían muchos y grandes centros administrativos incaicos. Los caminos laterales conectaban la sierra con los valles orientales y occidentales, facilitando el intercambio de productos de distintas

zonas ecológicas. En su recorrido, a intervalos de una jornada diaria, se alzaban los tambos, estructuras de alojamiento y almacenaje que contenían armas, ropa, combustible y alimentos. También había estaciones de chasquis a diversos intervalos, donde los corredores encargados de transmitir mensajes comunicaban su contenido a sus reemplazantes. Uno de los rasgos más singulares del sistema vial eran los puentes colgantes construidos con sogas y fibras que cubrían algunas de las alturas más espectaculares de los Andes, los cuales asombraron a los primeros españoles que los cruzaron con cierto temor.

La organización militar fue también crucial para el funcionamiento del imperio, aunque las conquistas incaicas muchas veces se alcanzaban mediante demostraciones de poder y hábiles negociaciones, eran acompañadas por minuciosas pompas, ceremonias y danzas. El despliegue de las fuerzas militares incas dependía de comunicaciones eficientes. También, como ya se señaló, dependían de las amplias instalaciones de almacenaje —los tambos— y caminos, así como de fortificaciones bien construidas por todo el imperio. Se utilizaron fuertes estratégicamente situados para controlar las tierras ya conquistadas. Ubicados a menudo, lejos de los centros imperiales, guarnecidos no por soldados profesionales sino por mitimaes, colonos que también cultivaban las tierras circundantes, brindando así tanto seguridad (de ataques y rebeliones) como productos locales.

Los ejércitos imperiales, que al parecer no eran permanentes, se reclutaban a partir de una leva obligatoria de todos los hombres entre veinticinco y treinta años. Estaban conformados principalmente por campesinos e incluían poblaciones cada vez más numerosas de las zonas conquistadas, a cuyos pueblos los incas convirtieron en súbditos leales y dependientes. La ventaja que estos ejércitos tenían sobre los adversarios locales radicaba en su número, que podía alcanzar las decenas de miles de hombres con una provisión, al parecer interminable, de reservas que se dice tomaban de sus oponentes numéricamente más pequeños. Sus armas, que diferían poco en todos los Andes, incluían hondas con las que se arrojaban piedras, arcos y flechas, mazas de piedra con punta y lanzas de madera. Llama la atención que los incas no aplicaran la industria metalúrgica sofisticada que habían desarrollado en la fabricación de armas.

Los ejércitos incas parecen haber sido muy bien preparados y disciplinados, formados para que respetaran a los pueblos por cuyo territorio pasaban. Sus comandantes eran conocidos por su capacidad para cooperar y coordinar los movimientos de sus tropas, lograr la sorpresa y aplicar el principio de la concentración de sus fuerzas en un punto decisivo para alcanzar la victoria. Una logística superior mantenía a sus ejércitos en pie durante campañas prolongadas. Dado que las fuerzas incaicas siempre estaban a la ofensiva, aventajaban las defensas de sus adversarios en lo que a tácticas militares respecta.

El problema de desplegar las tropas y programar su arribo oportuno requería una extraordinaria organización y administración central desde el Cuzco. Como un experto mostrase, el vasto dominio territorial de los incas necesitaba, de hecho, la construcción de un sistema de mando y control que permitiera a la periferia relacionarse eficientemente con el centro. Por otro lado, el imperio habría estado sujeto a constantes rebeliones y a la fragmentación. Si a esto sumamos el hecho de que los incas fueron también reconocidos por la construcción de grandes terrazas agrícolas y regadío, comenzamos a apreciar la magnitud de sus logros y su contribución a la civilización americana.

La construcción de estas y otras obras públicas y comunales, así como la producción de bienes que se entregaban al rey, se llevaba a cabo a través de un sistema de reclutamiento laboral denominado m'ita. Este sistema constituía la forma más importante de impuesto gravado sobre la población sometida y sus unidades domésticas individuales. Quienes efectuaban los censos llevaban la cuenta del sistema de mita, que operaba sobre la base de un sistema contable fundado en agrupamientos decimales de unidades domésticas y comunidades. No está claro si éste era en realidad un sistema laboral o tributario (un impuesto en especie). Lo cierto es que todo súbdito masculino estaba obligado a servir al Estado un número determinado de días al año. Este servicio podía cumplirse en la construcción de carreteras o templos, en la minería de metales preciosos o produciendo un producto para el rey, como el maíz o artículos con plumas. Los curacas locales también podían recurrir al trabajo de la m'ita para efectuar tareas locales, así como el ejército para reclutar soldados.

Mientras cumplían con su m'ita, ya fuera para el Estado o los jefes locales, los mitayos recibían alimentación, bebida y música generosamente brindadas por sus anfitriones. Al igual que la minga comunal, el trabajo siempre se realizaba de forma festiva y ritualizada. Como Morris y Von Hagen (1993: 170) lo dijeran en forma tan precisa, «[d]e este modo la economía, la política y la religión quedaban envueltas en un elaborado paquete de trabajo, ritual y fiesta».

Gobierno

El sistema de gobierno incaico era piramidal, al igual que su sistema de clases, teniendo en su cima al emperador, quien gobernaba por derecho divino y al cual se adoraba como deidad. Por debajo de él se encontraban los apus, prefectos a cargo de los cuatro cuadrantes en que estaba dividido el imperio. Por debajo de ellos, a nivel provincial, estaban los gobernadores, escogidos entre la élite, y a nivel local los curacas, los señores étnicos tradicionales leales al dominio inca. Los primeros residían en los principales centros provinciales, ubicados estratégicamente a lo largo del imperio; tenían funciones judiciales y administrativas,

y también supervisaban a los curacas, viajando en literas para inspeccionar su jurisdicción.

El dominio de un curaca variaba desde una aldea de un par de centenas de habitantes a una concentración mucho más grande de territorio. Su tarea más importante era movilizar los trabajadores de la m'ita para que cumplieran con las funciones militares y civiles del Estado. Los curacas también tenían derecho a usar la tierra y podían recurrir al trabajo comunal para cultivarla. Por último, ellos eran responsables de la asignación de los campos comunales al pueblo, según las dimensiones de la familia. En tanto señor étnico tradicional, el curaca retuvo la lealtad de su comunidad mientras gobernaba a instancias de los incas. En este sentido, fueron intermediarios en el sistema imperial articulando las relaciones entre la clase dominante incaica y el Estado, de un lado, y su propia parentela y comunidad, del otro.

Una forma en que el Inca aseguraba la lealtad de estos señores locales fue contrayendo matrimonio con sus hijas —las que pasaban a ser esposas secundarias en su unidad doméstica— y exigiendo que sus hijos fueran educados en el Cuzco. En este último caso, el emperador no solamente adquiría un útil rehén con el cual garantizar la obediencia, sino que además se aseguraba la lealtad de la siguiente generación de curacas. Con este mismo fin el rey también los colmaba con presentes de tierras y sirvientes. Las actividades tanto de los gobernadores provinciales como de los curacas locales, eran inspeccionadas periódicamente por los tocricoc (que literalmente significa, «los que todo lo ven»), o inspectores. Personas fieles en las que confiaba el emperador, su trabajo consistía en vigilar que estos funcionarios cumpliesen correctamente con sus obligaciones y no planearan ninguna rebelión o conjura en contra del Estado.

Los incas impusieron su culto del dios sol Inti a todos los grupos étnicos conquistados como símbolo de su poder y autoridad. En todos los centros provinciales principales del imperio se erigieron templos dedicados a su culto, pero a su vez les permitieron conservar sus ritos y deidades locales, se dice que incluso llevaban sus imágenes al Cuzco para que ocuparan un lugar de honor (y fueran rehenes) en sus templos. Este hecho era típico de la generalizada práctica incaica de permitir que muchas tradiciones y costumbres locales persistieran en su cada vez más grande imperio multiétnico, al mismo tiempo que establecían el dominio del centro sobre la periferia.

Además de imponer al dios sol Inti, otros mecanismos de «incaización» de los pueblos conquistados fueron la lengua y la cultura. El quechua pasó a ser la lengua oficial del imperio, y se esperaba que por lo menos las élites provinciales lo aprendieran. Otros símbolos de la cultura incaica se propagaron por todo el imperio, transmitiendo códigos y significados importantes a los pueblos incorporados. Por ejemplo, los centros administrativos eran trazados y las edificaciones

construidas y decoradas con formas y diseños arquitectónicos propiamente incaicos. Estas estructuras fueron usualmente edificadas con bloques de piedra finamente cortados y utilizaban puertas y ventanas trapezoidales. Al mismo tiempo, las ciudades eran divididas en las cuatro secciones acostumbradas, que se proyectaban desde una espaciosa plaza central para las reuniones públicas.

Estos y otros objetos cotidianos de la cultura incaica fueron decorados especialmente para transmitir información y significados. Por ejemplo, la vestimenta estaba cuidadosamente diseñada con patrones, colores y símbolos que indicaban la posición y el estatus de la persona, y de dónde era. Según un cronista,

> [t]enían los de cada nación y provincia, hombres y mujeres, sus señales y divisas por donde eran conocidos, y no podían andar sin ellas ni trocarlas con las de otra nación, so graves penas. Esta señal traían en el vestido con diferentes listas y colores; y los hombres otra en la cabeza más señalada [...] (Cobo, citado en Morris y Von Hagen 1993: 175 [Bernabé Cobo, S.J., Obras, II. Madrid: Ediciones Atlas, 1964: 112]).

Con estas decoraciones y significados especiales, los cinturones, las hondas y bolsas generalmente resaltaban. Las vasijas y el menaje de cerámica, particularmente los que se usaban en ceremonias públicas auspiciadas por el Estado, lucían formas y patrones específicos, que indicaban el evento que se celebraba. Éstos y otros accesorios de la cultura incaica, como la música y las actuaciones rituales, servían como un medio importante a través del cual el Estado transmitía su imagen y autoridad al pueblo, esperando reciprocidad con trabajo y lealtad.

Éstos accesorios eran necesarios porque los incas generalmente gobernaban en forma indirecta, a través de la estructura de poder existente, cuya lealtad se aseguraba mediante la fuerza, la negociación, la entrega de presentes o por otros mecanismos. Cuando tomaron el control de formaciones políticas costeñas tan centralizadas como la de Chimor, los incas no se esforzaron mucho por imponer su cultura a sociedades tan sofisticadas y desarrolladas como éstas. Por el contrario, simplemente se establecieron en la cima de la pirámide del poder político.

El mecanismo crucial para la integración y el control de los pueblos conquistados en el imperio fue la institución singularmente incaica de los mitimaes. Como ya señalé, este era un sistema de reasentamiento masivo, con el que los incas deportaban una parte de los pueblos derrotados a otra provincia, y la reemplazaban con colonias leales de mitimaes de partes ya establecidas del imperio. Su función era específicamente estratégica y económica. Ellos trabajaban para educar y convertir a la población local en leales súbditos de los incas, y al mismo tiempo servían como guarniciones militares con las cuales protegerse de invasiones externas y rebeliones. También trabajan los campos dejados por los deportados y tomaban nuevas tierras aplicando la más eficiente tecnología y *know*

how incaicos. Es poco probable que sin la institución de los mitimaes, los incas hubiesen alcanzado cierto grado de unidad y control sobre un territorio tan vasto y grande, que contenía tal variedad de distintos grupos étnicos, tan distantes del centro imperial (Davies 1995: 168).

El Estado ejercía control sobre los territorios conquistados en otras formas, algunas de ellas relacionadas con el género. Por ejemplo, después de cada nueva conquista, se requería que el grupo derrotado levantara un templo al sol y que entregara aqllakuna, muchachas castas y preadolescentes de las comunidades que se asignaban al templo. Allí vivían junto con otras mujeres especialmente escogidas llamadas mamakuna, que también eran esposas del sol, y al igual que estas últimas hilaban y tejían telas, y preparaban alimentos y chicha para el Estado. Eran mantenidas por el Estado al que se les enseñaba a servir, la virginidad de estas aqllakuna era protegida rigurosamente. El Estado las usaba para distintos fines: algunas eran sacrificadas en ceremonias religiosas, otras se convertían en esposas del dios sol, al igual que sus mentores, o del Sapa Inca; y otras más eran entregadas como esposas a funcionarios importantes o a soldados en forma de recompensa por los servicios prestados al Estado. Como mostrase Silverblatt (1987), en tanto peones del Estado, las aqllakuna simbolizaban su dominio total de los pueblos conquistados. Su producción de ropa, alimentos y chicha con fines ceremoniales y rituales ayudaba a conservar el poderío incaico en todo el imperio.

> Al reclamar el derecho a apropiarse y redistribuir aqllakuna, el rey Inca afirmaba su control —en principio si no en la práctica— sobre la reproducción tanto social como demográfica de los grupos incorporados al imperio. Ellas eran piezas políticas, emblemas del poder del estado para controlar la reproducción de las comunidades incorporadas a la red de relaciones sociales que éste dominaba (Patterson 1991: 82).

Por último, además del ejército, los mitimaes y el tocricoc, un amplio código legal aseguraba la obediencia de la población campesina. Se dictaban castigos severos por el incumplimiento de las leyes imperiales. Estas penas iban desde castigos corporales por infracciones tales como mentir a quienes levantaban los censos o movieran los mojones de los campos, a torturas por no cumplir con la obligación de la mita, o a la ejecución por robos al Estado o relaciones sexuales con las aqllakuna, quienes estaban sexualmente vedadas.

Al igual que en todas las sociedades preindustriales, la posesión de la tierra constituía el recurso económico y social fundamental de la sociedad incaica. Como ya señalé, todas las tierras eran poseídas en teoría por el Sapa Inca y tenidas en usufructo por su población. En este sentido, el Inca conquistador no expropiaba pura y simplemente todas las tierras, por el contrario, decidido a establecer

buenas relaciones, el emperador respetaba los derechos y costumbres locales, y generalmente defendía el sistema económico predominante. Ello generalmente significaba que los campesinos seguían sembrando sus cultivos tradicionales en las tierras comunales, en tanto que los señores locales conservaban la mayor parte de sus tierras. Sin embargo, los incas sí expropiaban parte de las tierras conquistadas y ponían otras a trabajar, para asignarlas al culto religioso al Estado, o a los nuevos colonos mitimaes. Algunas personas recibían el derecho al uso de la tierra de parte del Inca por haber prestado distinguidos servicios militares o administrativos.

El principio del intercambio recíproco

El principio de intercambio recíproco y la redistribución sostenían al sistema político-económico de los incas. El comercio y los mercados, tal como los conocemos, no existieron entre ellos. En su lugar, los incas construyeron enormes instalaciones de depósitos hacia los cuales fluía el tributo reunido de la población (en forma de trabajo) para el funcionamiento del Estado. Reunido y almacenado en los grandes centros provinciales o en el mismo Cuzco, parte de este tributo (alimentación, ropa y otros bienes) era para el mantenimiento del ejército, la administración civil y la casa real. El resto se redistribuía entre los jefes de las comunidades y grupos conquistados para asegurar su lealtad y obediencia a los incas. De manera que, en ausencia de mercados y moneda, la producción excedente del imperio circulaba por todo el reino. En efecto, lo que «iba al Cuzco [...] venía entonces del Cuzco» (Davies 1995: 172).

Uno de los centros de almacenaje de tributo más grandes fue Huánuco Pampa, en los Andes centrales, a seiscientos kilómetros al norte del Cuzco. Allí se construyeron más de quinientos depósitos con una capacidad de más de treinta y siete mil metros cúbicos para almacenar comida, textiles y otras provisiones. Huánuco Pampa también servía como centro administrativo para el control de diversos grupos conquistados. Los jefes de estos grupos al parecer se dirigían a la ciudad para las grandes fiestas públicas y para recibir presentes del Inca o de sus representantes. Tal hospitalidad y beneficencia del Estado servía para cimentar su lealtad a los reyes Incas.

Por otro lado, gran parte del tributo iba directamente al Sapa Inca en el Cuzco, quien lo usaba para otorgar generosos presentes a los visitantes importantes, incluyendo la élite local de los grupos incorporados que llegaban a la capital desde zonas periféricas. A estos visitantes se les agasajaba con alimentos y chicha en la celebración de las grandes ceremonias y fiestas públicas auspiciadas por el Inca. Cuando éste viajaba por todo el imperio, siempre llevaba consigo gran cantidad de textiles y otros bienes que dar como presentes a los jefes locales.

Además de cimentar lealtades y otorgar prestigio a sus invitados, estos regalos del Inca contribuían a incrementar su propio respeto y autoridad.

A comienzos del siglo XX, los investigadores interpretaron este principio, singular y fundamental de la redistribución y el intercambio incaicos, como la base de un régimen socialista. Según esta noción, el Estado usaba su «renta» tributaria para mantener un extenso sistema de bienestar en el cual se cuidaba a viejos y enfermos. El antropólogo John Murra refutó la noción de un gran Estado de bienestar. Los bienes eran reunidos en gigantescas instalaciones de almacenaje y contados cuidadosamente por los quipucamayos, pero lo que sobrase después de cubiertas las funciones estatales pasaba a sustentar el suntuoso estilo de vida de la casa real, las panacas, la élite cuzqueña y los curacas locales. Esta versión presenta el panorama típico de una sociedad preindustrial gobernada por una pequeña élite privilegiada, mantenida con la producción excedente de una gran masa de campesinos sometidos.

«Archipiélagos verticales»

En reemplazo de los mercados, los incas y sus antiguos predecesores desarrollaron un sistema de autarquía que Murra denominó «archipiélagos verticales». Su objetivo era diversificar la producción y con ello el consumo, según las distintas ecologías y climas andinos. En este sistema, los centros de la sierra desarrollaron una serie de asentamientos en distintas alturas y microclimas —muchas veces a manos de colonias de mitimaes— donde producían alimentos y bienes con los que «complementaban» la producción comunal. La población de estos asentamientos estaba conformada por agricultores y pastores de llamas, quienes transportaban los productos hacia los centros. De esta manera, un centro en la sierra podía contar con la producción de la costa, como algodón, maíz y pescado; productos tropicales de las laderas orientales de los Andes y la región amazónica; y productos de los valles, laderas y nichos montañosos andinos.

Este sistema de archipiélagos verticales parece haberse desarrollado más en los Andes del sur, especialmente en la región del lago Titicaca. No parece haber sido practicado en los grandes imperios costeños de Chimor o Nazca, o en otras zonas que al parecer no eran adecuadas. Sin embargo, según Murra y Wachtel, la verticalidad se expandió y experimentó cambios importantes antes de la conquista española. Como ellos señalan:

> Una característica específica andina es que estas periferias complementarias eran a menudo multiétnicas. Los representantes de formaciones políticas sumamente distintas entre sí en las montañas, se encontraban en la periferia en una proximidad estrecha, aunque tensa. Estos asentamientos se encontraban a cinco, diez y

> hasta a más días de camino de sus respectivos centros de poder... de este modo, el archipiélago vertical implicaba un circuito económico algo cerrado, que vinculaba varios niveles mediante lazos de parentesco y subordinación política (citados en Davis 1995: 175).

No obstante el predominio del principio de verticalidad en el imperio inca, hay evidencias de que existió cierta forma de intercambios que involucraban el comercio y el trueque. Gran número de mercaderes aparentemente viajaba entre Chincha y Cuzco, así como al Ecuador. Tal vez llevaban conchas y pescado seco de la costa, y usaban piezas de cobre como una forma de moneda. Además, se dice que el piloto de Pizarro vio una gran balsa con una cabina y velas de algodón en las costas ecuatorianas, transportando un gran cargamento. También hay evidencias de mercaderes y mercados en Quito (Salomon). Sin embargo, hasta que contemos con más evidencias, parecería que el comercio fue mayormente marginal en el imperio incaico (Murra).

Al estudiar a los incas y sus logros, no podemos evitar que nos llame la atención la velocidad de sus conquistas (menos de un centenar de años) y la forma notable en que afirmaron su control sobre un imperio vasto y geográficamente variado. El reino del Tahuantinsuyo —la tierra de las cuatro partes— fue el más grande y, en cierta medida, el más complejo que el continente sudamericano jamás hubiese visto. Desde un núcleo compacto de no más de dos centenas de kilómetros alrededor del valle del Cuzco, donde se encuentran sus más importantes construcciones de piedra, terrazas impresionantes, obras de riego y templos minuciosamente decorados, los incas extendieron su dominio hasta integrar decenas de distintos grupos étnicos, alcanzando hasta doce millones de personas a lo largo de unos cuatro mil kilómetros del espinazo andino de América del Sur. Lograron este desarrollo recurriendo no sólo sofisticados medios militares y diplomáticos, sino un centralismo flexible que permitió a sus súbditos conservar buena parte de su cultura y tradiciones locales. Para controlar y administrar eficazmente un imperio tan extenso, los incas levantaron una formación política compleja que incluía una vasta burocracia, un sistema tributario, un complicado sistema de reasentamiento e integración, y una «lingua franca» común en un área lingüísticamente diversa.

Al mismo tiempo, debemos reconocer que a pesar de estos logros excepcionales, el reino de los incas no fue el paraíso socialista que una generación anterior de investigadores concibiera tan románticamente. Por el contrario, los incas construyeron una sociedad explotadora y jerárquica en la que una pequeña clase privilegiada se beneficiaba con la extracción del tributo, la mano de obra y los servicios de los pueblos sometidos. Para alcanzar este nivel de dominación impusieron un sistema de control que incluía un código legal represivo, un Estado

militarizado y el uso de la religión como un medio con el cual legitimar el poder y el control político.

A la clase dominante inca la unía su interés común de dominar y extraer excedentes del campesinado andino, sin embargo, a menudo se dividió en torno a cuestiones sucesorias y pugnas por el poder. Cuando estas divisiones se volvían extremas, el imperio, relativamente nuevo y en curso de formación, quedaba vulnerable a las guerras civiles, los levantamientos populares, por no mencionar la conquista externa. Uno de estos momentos tuvo lugar en 1525, cuando la muerte del Sapa Inca Huayna Cápac dividió a la clase dominante y expuso al imperio a una sangrienta guerra civil en torno a la sucesión regia.

Huáscar, uno de los hijos de Huayna Cápac, fue proclamado duodécimo Inca y debidamente coronado en el Cuzco. Sin embargo, fue desafiado por Atahualpa, otro hijo, supuestamente ilegítimo, pero con un sólido respaldo en Quito y la parte norte del imperio. Rostworowski sostiene que la lucha subsiguiente fue una pugna más entre facciones o camarillas rivales, que entre dos casas reales en pugna. Pease fue más allá, afirmando que la guerra civil enfrentó la supremacía política de los ejércitos del norte, que respaldaban a Atahualpa, con el *establishment* político-religioso del Cuzco, que favorecía a Huáscar. El objetivo de quienes respaldaban al primero era nada menos que desplazar el centro político del imperio hacia el norte y Quito.

De cualquier forma, no hay dudas respecto a la ferocidad de la guerra que Atahualpa ganó. La crueldad y el vandalismo proliferaron en ambos bandos, incluyendo la aparente masacre de toda la panaca, o casa real, de Túpac Inca y la quema de su momia sagrada a manos de las fuerzas de Atahualpa. Después de capturar a Huáscar y tomar el Cuzco, tuvo lugar una venganza inmisericorde contra los vencidos.

Sin embargo, el triunfo de Atahualpa no duró mucho. Mientras celebraba en Huamachuco la captura de Huáscar, el nuevo rey Inca recibió las nuevas de una pequeña expedición de forasteros que había desembarcado en la costa norte y tomado el pueblo de Tumbes. Un curioso Atahualpa envió de inmediato emisarios a ubicar a los recién llegados y les invitó a que se reunieran con él en Cajamarca, a donde viajaba para bañarse en sus célebres aguas termales luego de su gran victoria. El capitán de la expedición, un aventurero español llamado Francisco Pizarro, aceptó rápidamente y envió al Inca una fina camisa hecha en Holanda, y dos vasos de cristal veneciano como presentes tradicionales con los cuales sellar el acuerdo. Así comenzó el histórico choque de dos mundos, que alteraría dramáticamente el curso de la historia andina de ahí en adelante.

Capítulo II

El choque de imperios y la formación de la sociedad colonial, 1532-1600

El arribo al corazón del Tahuantinsuyo de la pequeña pero intrépida banda de conquistadores liderada por Francisco Pizarro en 1532, fue un suceso definitorio no sólo para la historia de la Sudamérica andina, sino para todo el mundo. Por un lado, representó una etapa temprana en el choque en curso entre Occidente y los pueblos no occidentales, que durante los cuatro últimos siglos ha sido un tema dominante en la historia universal. Al mismo tiempo, incorporó a los Andes, que habían estado aislados por milenios, a las corrientes más amplias del desarrollo mudial. Sin embargo, lo hizo con devastadoras consecuencias para los pueblos nativos, que por azar carecían de inmunidad biológica contra los virus introducidos por los invasores del Viejo Mundo. Por otro lado, la invasión española del Perú alteró radicalmente el curso de la historia andina. La captura relámpago del emperador Inca Atahualpa por parte de Pizarro en la plaza de Cajamarca, una portentosa tarde de noviembre en 1532, y la sangrienta masacre de su gran séquito militar, decapitaron, de hecho, al jefe de un imperio dividido que aún no había consolidado del todo su control de una enorme extensión de la Sudamérica andina. El resultado fue la apertura del imperio a las fuerzas del cambio radical y la «desestructuración», cuyas repercusiones actualmente siguen resonando en los Andes.

Los antecedentes iberos

Mientras el imperio incaico se expandía y florecía, la España cristiana buscaba expulsar a los moros que habían ocupado la Península Ibérica durante varios siglos, tras invadirla desde África en el año 711. Durante el largo periodo conocido como la Reconquista (711-1492), los sobrevivientes reinos cristianos liderados por Castilla empujaron gradualmente a los moros hacia el sur, abriendo grandes extensiones de tierra a una casta guerrera extraída de la nobleza y que estaba

organizada en tres grandes órdenes militares. El continuo conflicto representado por la reconquista y el hecho de que sólo la conquista y el pillaje hacían posible el ascenso dentro de la rígida estructura social ibera de la Baja Edad Media, se combinaron para infundir un fuerte espíritu militar a la sociedad española. Abrirse camino mediante grandes hazañas en combate con los moros y al servicio del rey: esto llegó a definir a un segmento de la nobleza baja —los llamados hidalgos—, que ambicionaba tierra, poder y estatus, y que pasó a ser el prototípico héroe social de la España de la Reconquista.

Los valores españoles de la tardía Edad Media se vieron configurados por un espíritu distintivamente aristocrático, derivado de las grandes familias de la nobleza que dominaban la sociedad castellana. Fue esta nobleza, también al servicio del rey, la que organizó y lideró la Reconquista. A cambio de sus servicios, la Corona de Castilla recompensó a hidalgos y grandes con inmensas mercedes de tierra en los territorios tomados a los moros. Para finales del siglo XV, entre el dos y el tres por ciento de la población de Castilla poseía el 97 por ciento de la tierra, más de la mitad de la cual estaba en manos de las grandes familias de la nobleza del reino. Una creciente escasez de mano de obra, debida en parte a los efectos duraderos de la Peste Negra en el siglo XIV, provocó que los grandes terratenientes del centro y sur usaran sus tierras para la crianza de ovejas, y que el comercio de lana pasara a ser la espina dorsal de la economía castellana.

La Iglesia católica fue un tercer gran contribuyente a la formación de la sociedad hispana durante la Reconquista. La Iglesia dio a la empresa de la expansión militar un impulso espiritual y una justificación ideológica que escondía los motivos económicos y políticos más elementales que sustentaban el movimiento. Impulsada por el deseo de derrotar y convertir a los moros paganos al cristianismo, la Iglesia, aliada cada vez más del Estado, inspiró y vitalizó la reconquista con un espíritu de cruzada que llegó a penetrar en todos los estratos de la población.

A pesar de este cuadro mayormente «feudal» de la tardía sociedad medieval hispano-castellana, los valores comerciales y burgueses no faltaban en la Península. Un estrato burgués de comerciantes y tenderos que se había desarrollado en los pueblos y ciudades de Castilla, comenzó a desafiar el dominio político de la aristocracia a finales del siglo XV. Es más, una poderosa clase de comerciantes mercaderes sobre todo en Aragón y la región de Levante, hacía tiempo estaba involucrada en el comercio del Mediterráneo, al igual que el puerto de Sevilla al sur, el cual quedaría incorporado a Castilla con la derrota de los moros. Aunque eran los predecesores del capitalismo mercantil ibérico en desarrollo, los comerciantes mercaderes de España siguieron bajo la sombra de la gran aristocracia terrateniente de Castilla. Sin embargo, sus esfuerzos empresariales jamás fueron evadidos del todo por los grandes, muchos de los cuales se dieron cuenta de que la acumulación de riquezas servía como base para mantener el estatus noble y aristocrático.

Entonces, los valores militares, aristocráticos, religiosos y los incipientes valores comerciales se combinaron durante las fases tardías de la larga reconquista para configurar la tardía sociedad medieval española en vísperas del encuentro de Colón con el Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, el Estado moderno comenzó a formarse a partir del entorno abigarrado de los reinos cristianos ocupados, bajo la dirección de Castilla, en el esfuerzo por expulsar a los moros de la Península Ibérica. Ayudado por la renta tributaria de los pueblos y las clases urbanas, el Estado expandió gradualmente su autoridad y atrajo a la aristocracia hacia el sistema administrativo que iba surgiendo. La expansión de un nuevo Estado nacional se desarrolló aún más con la unificación de los reinos de Castilla y Aragón mediante el matrimonio real de la reina Isabel y el rey Fernando en 1479. Los restantes reinos cristianos fueron incorporados gradualmente a la Corona, de tal modo que la incipiente unificación política de España estaba virtualmente completa ya en 1492, cuando el último bastión moro de Granada fue derrotado por el ejército invasor castellano.

El ímpetu final para la unificación tuvo lugar en 1492, a partir de la orden dada por la Corona de expulsar y confiscar las propiedades de todo judío o moro que no se convirtiese al cristianismo. Ostensiblemente dirigida a lograr la pureza étnica mediante la conformidad religiosa, la expulsión tuvo varias consecuencias significativas. Ella eliminó un segmento comercialmente dinámico de la población, cuyas consecuencias fueron adversas para el desarrollo del incipiente capitalismo ibérico, y reforzó la vieja noción medieval de la «pureza de sangre», o ascendencia cristiana, como precondición para ser un buen ciudadano en la emergente nación hispana. Llevada al Nuevo Mundo, la «pureza de sangre» se convertiría posteriormente en un sesgo racial contra los indios y otras personas de color. Para hacer cumplir el nuevo conformismo religioso, el Estado estableció la institución de la Inquisición, fundada en Castilla en 1483. Ella no solamente representaba otro refuerzo del vínculo entre Corona y Estado, sino que constituyó además uno de los primeros intentos efectuados por un Estado moderno para vigilar los pensamientos de sus ciudadanos.

El año de 1492 constituyó un hito para España por otro motivo más. En ese mismo año, después de un peligroso viaje transatlántico de descubrimiento de treinta y dos días, Cristóbal Colón desembarcó en una isla caribeña que él erróneamente pensaba se encontraba en las márgenes del gran imperio de la China. El «descubrimiento», en 1492, de lo que posteriormente fue percibido como un «Nuevo Mundo», dio una salida a las ambiciones materiales, militares y religiosas de la nación española recién victoriosa y unificada. En suma, 1492 fue, en palabras de Steve Stern (*JLAS* 1992: 2), un «símbolo de la salvación excluyente, la unificación política y la expansión imperial condensadas en uno».

Pizarro y la empresa conquistadora

Francisco Pizarro, un hidalgo con mejillas hundidas y barba rala de Trujillo, en Extremadura, representaba al típico aventurero arribista llegado a América luego del «descubrimiento» de Colón, en busca de fortuna. Según Varón Gabai (1997), era el hijo ilegítimo de un hidalgo trujillano no muy rico con una mujer de baja extracción, posiblemente una sirvienta. Al igual que muchos de sus paisanos extremeños, Pizarro se embarcó hacia las Indias en 1501 con la flota de Nicolás de Ovando, el gobernador de la Española. Aunque poco es lo que se sabe de los comienzos de su carrera en las Indias, en 1513 era el lugarteniente de Vasco Núñez de Balboa cuando este último descubrió el océano Pacífico. Al fundarse Panamá al año siguiente, Pizarro fue uno de sus vecinos más prominentes y miembro de su cabildo.

Panamá pronto pasó a ser una incubadora de rumores sobre una tierra rica que yacía al sur, a la cual los españoles llamaron Birú. Esto provocó que Pizarro formara una «compañía» con otros dos socios para montar expediciones de exploración y conquista hacia el sur, a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. Sus socios fueron Diego de Almagro y Hernando de Luque, un sacerdote que aparentemente representaba a un oidor local. Estas expediciones de descubrimiento y conquista en las Américas eran consideradas empresas comerciales especulativas, en las cuales los organizadores tomaban prestado y/o invertían su propio capital para preparar sus proyectos. Los reclutas tenían que llevar sus propios caballos, equipos y armas, y en lugar de salario recibían una parte previamente estipulada del botín. Pizarro proporcionaba las naves y otras provisiones.

En 1529 Pizarro recibió una capitulación de Carlos V (1516-1556), que le daba el rango de gobernador y capitán general de todo el territorio mil seiscientos kilómetros al sur de Tumbes, en la costa norte peruana. Ésta resultó ser una designación geográfica vaga que, según Hemming (1970), posteriormente pondría en duda si era Pizarro o su socio Almagro quien tenía jurisdicción sobre el Cuzco. También se le concedió el derecho a otorgar tierras y encomiendas (el control de los indios conquistados), y a organizar una nueva colonia según el modelo de las islas Canarias, el primer territorio hispano de ultramar.

En las expediciones de Pizarro había soldados profesionales, pero la mayoría eran experimentados combatientes de indios, una habilidad adquirida en otras partes de América antes de arribar al Perú. La mayoría de sus jefes tenían entre treinta y cuarenta años de edad, siendo Pizarro la excepción con cincuenta y cuatro. Entre ellos estaban Sebastián de Benalcázar, posteriormente conquistador de Quito, que llevó consigo treinta veteranos de Nicaragua, y el brioso Hernando de Soto. La formación educativa de los reclutas cubría una amplia gama, desde analfabetos hasta juristas e hidalgos (pero ninguno pertenecía a la alta nobleza).

Los más ilustrados eran los escribanos, contadores, notarios y unos cuantos mercaderes, en tanto que los menos ilustrados eran artesanos, marineros y labradores. Según Lockhart (1972: 42), «el grupo tenían un sabor global plebeyo [pero] su principal fortaleza, numérica y cuantitativamente, yacía en la gente del común capaz y que sabía leer y escribir, los profesionales de baja jerarquía y los hidalgos marginales». La mayoría de ellos estaban motivados, no por un espíritu aventurero, como usualmente se cree, sino por la pobreza, la rivalidad y la oportunidad de ganar algo.

En su tercer viaje en 1530, Pizarro supo de la amarga guerra civil librada por todo el imperio inca desde el deceso prematuro del Sapa Inca Huayna Cápac en Quito, posiblemente debido a la viruela, en algún momento entre 1525 y 1527. La enfermedad se había propagado rápidamente hacia el sur luego del primer encuentro colombino, asolando los pueblos amerindios del Caribe y Mesoamérica a medida que avanzaba la conquista.

Mientras se encontraba en Tumbes, Pizarro recibió emisarios de Atahualpa y supo que acampaba en los alrededores de Cajamarca, donde descansaba en los renombrados baños termales y esperaba nuevas de sus generales sobre la derrota final de las fuerzas de Huáscar, en la batalla por el Cuzco. Poco después, la pequeña fuerza de Pizarro, que constaba de 62 hombres de a caballo y de 106 de a pie, inició el largo ascenso de los Andes. Cuando ingresaron a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, la ciudad estaba virtualmente desierta. Los españoles, escribiría Felipe Guamán Poma de Ayala (citado en Dilke 1978: 108 [Felipe Guamán Poma de Ayala, *Nueva crónica y buen gobierno*. Madrid: Historia 16, 1987: 388]), autor de una crónica tardía, parecían estar «amortajados, toda la cara cubierta de lana, y que se le parecía sólo los ojos. Y en la cauesa trayya unas ollitas colorado [...]». Si bien su aspecto y ciertamente sus caballos eran curiosos, este destacamento de extraños resultaba una distracción menor para el poderoso Inca, cuyos ejércitos ya habían derrotado a su rival y tomado el Cuzco. Acampado con un inmenso ejército, que tal vez sumaba hasta ochenta mil tropas, el Inca reflexionaba probablemente sobre lo sucedido en el Cuzco y sus planes de dirigirse triunfante a la ciudad.

La subestimación no era la única ventaja que Pizarro y sus tropas tenían en Cajamarca. También sabían de la guerra civil inca y contaban con un plan de batalla ya probado: repetir la táctica seguida por Cortés en México de capturar al emperador y aliarse con sus enemigos, en una estrategia de divide-y-vencerás. Contaban con una tecnología militar superior: caballería, cañones, mosquetes y, sobre todo, las espadas fabricadas con acero de Toledo, las más finas de toda Europa. En otras partes de América, estas armas habían resultado ser inmensamente superiores, en campo abierto, a las fuerzas amerindias, no importa cuanto más numerosas, armadas únicamente con hachas de la edad de piedra, hondas y una armadura acolchada con algodón. El caballo, en particular, desconocido en las Américas,

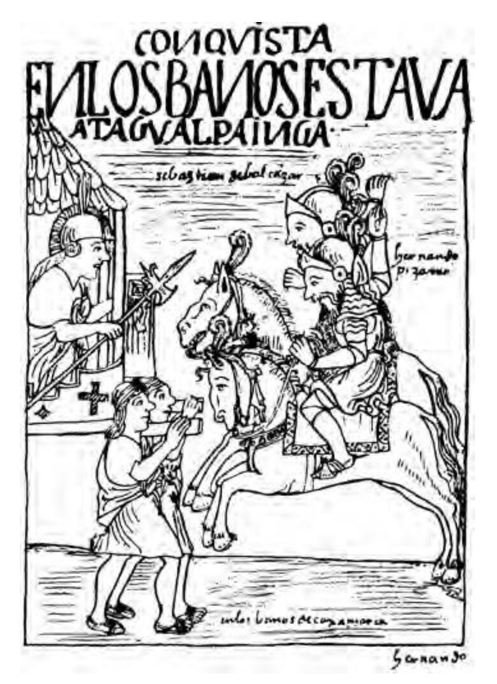
dio a los españoles una fuerza de caballería sumamente móvil capaz de romper formaciones nativas y, en general, de desatar el caos entre los soldados de a pie con una protección ligera.

La plaza desierta de Cajamarca, donde Pizarro acampó a sus tropas, era un lugar ideal para preparar una emboscada. Posteriormente, el Inca admitió a Pizarro que, paradójicamente, él mismo había planeado aplastar y capturar a los españoles en su fatídico encuentro en la plaza. Atahualpa dejó el campamento de su ejército avanzada la tarde del sábado 16 de noviembre e hizo una entrada ceremonial a la plaza. Tal pompa y ritual no eran raros en los encuentros incaicos con grupos étnicos que estaban fuera del imperio, una demostración calculada de poder que a menudo llevaba a negociaciones y a una ocupación pacífica.

> Luego la delantera de la gente comenzó a entrar en la plaza; venía delante un escuadrón de indios vestidos de una librea de colores a manera de escaques; éstos venían quitando las pajas del suelo y barriendo el camino. Tras éstos venían otras tres escuadras vestidos de otra manera, todos cantando y bailando. Luego venía mucha gente con armaduras, patenas y coronas de oro y plata. Entre éstos venía Atabalipa en una litera aforrada de plumas de papagayos de muchos colores, guarnecida de chapas de oro y plata.
> Traíanle muchos indios sobre los hombros en alto, y tras desta venían otras dos literas y dos hamacas, en que venían otras personas principales; luego venía mucha gente en escuadrones con coronas de oro y plata. Luego que los primeros entraron en la plaza, apartaron y dieron lugar a los otros, En llegando Atabalipa en medio de la plaza, hizo que todos estuviesen quedos...
> Jerez, citado en Morris y von Hagen 1993: 151 [Francisco de Xerez, "Verdadera relación de la conquista de la Nueva Castilla". *Biblioteca Peruana, primera serie*, I, Lima, Editores Técnicos Asociados, 1968: 227-28]).

Al no encontrar a ninguno de los españoles, que armados con todo su equipo de combate estaban escondidos en los edificios circundantes esperando lanzar su trampa, Atahualpa se sorprendió, creyendo, al parecer, que se escondían por temor a su gran ejército.

Entonces el sacerdote Valverde y un joven traductor se acercaron al Inca desde los edificios y comenzaron a presentar, en forma algo incoherente, el famoso *requerimiento* real, un llamado de formulación legalista para que los indios aceptaran el cristianismo o sufrieran una «guerra justa». También entregó al Inca una Biblia que Atahualpa examinó, y entonces éste, en señal de disgusto por la pretensión de que ella representara la palabra de Dios, la arrojó furioso al suelo. Cuando el Inca se puso de pie y dijo a sus hombres que estuvieran listos, Valverde gritó a Pizarro que iniciara el ataque. Según la versión del cronista español Zárate,



El primer encuentro en Cajamarca entre [Hernando] Pizarro (y Benalcázar) y Atahualpa en 1532, imaginado por Felipe Guamán Poma de Ayala (1615) en un dibujo titulado *Conquista/En los banos estava Atagvalpa Inga*..., de su *Primer nueva corónica y buen gobierno*, vol. 2, editada por John V. Murra y Rolena Adorno, traducciones del quechua de Jorge L. Urioste (Ciudad de México, 1980), p. 355. Reproducido por cortesía de Siglo Veintiuno Editores, Ciudad de México.

> [...] luego [Pizarro] mandó desparar el artillería, y los de a cauallo acometieron por tres partes en los indios y el Gouernador acometió con la infantería azia la parte donde venía Atabaliba, y llegando a las andas, començaron a matar los que las lleuauan, y apenas era muerto vno, quando en lugar dél se ponían otros muchos a porfía. ... y echando mano por los cabellos a Atabaliba (que los traya muy largos), tiró rezio para sí y le derribó, y en este tiempo los christianos dauan tantas cuchilladas en las andas, porque eran de oro, que hirieron en la mano al Gouernador, pero en fin él le echó [a Atahualpa] en el suelo y, por muchos indios que cargaron, le prendió. Y como los indios vieron a su señor en tierra y preso, y ellos acometidos por tantas partes y con la furia de los cauallos que ellos tanto temían, boluieron las espaldas y començaron a huyr a toda furia
> (Zárate, citado en Morris y von Hagen 1993: 152 [Agustín de Zárate, *Historia del descubrimiento y conquista del Perú*, ed. de Franklin Pease G.Y. y Teodoro Hampe. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995: 75-76]).

En la estampida subsiguiente, cientos de indios fueron aplastados mientras intentaban escapar de sus atacantes escalando los muros de la plaza de 1,80 m de altura, en tanto que otros eran muertos por las espadas de los españoles. Al

colapsar los muros, los jinetes persiguieron a los indios en fuga por la planicie circundante, rodeándoles y desbaratando otras unidades nativas, dando muerte supuestamente a centenares de ellos. Aunque Pizarro fue ligeramente herido por uno de sus hombres, los españoles no tuvieron ninguna baja.

Además de la gran carnicería inflingida a sus tropas, la sorprendente captura de Atahualpa significó que la conquista había comenzado con un jaque mate mortal. Una vez prisionero, Atahualpa pronto descubrió la obsesión española con los metales preciosos, y por lo tanto ofreció entregar un tesoro en oro y plata como rescate por su libertad. La oferta sorprendió aparentemente a los españoles, pero Pizarro estuvo de acuerdo. Durante los meses siguientes, un lote fabuloso de tesoros incas —unas 11 toneladas nada más en objetos de oro— recogido en todos los rincones del imperio fue entregado en Cajamarca. Después de su fundición, el botín total sumaría más de 1,5 millones de pesos, el equivalente de más de $75 millones en dólares de 1998. Pizarro distribuyó cuarenta kilos de oro y ochenta y uno de plata a cada jinete, y aproximadamente la mitad a los hombres de a pie, reteniendo trece partes para sí mismo pero asignando menos a Almagro, su socio, quien arribó después de la batalla con refuerzos desde la costa.

Una vez enriquecidos con el tesoro del Inca, los españoles incumplieron su acuerdo de liberar a Atahualpa. Circulaban rumores de un ataque inminente por parte de uno de sus comandantes, ordenado supuestamente en secreto por el mismísimo Inca prisionero. Los españoles entraron en pánico y acusaron a Atahualpa de traición. Aunque los cargos resultaron no tener base alguna, el Inca fue ejecutado sumariamente y sin juicio, con el garrote. Los españoles hubieran querido quemar al emperador como hereje, pero le ofrecieron el garrote si aceptaba ser bautizado. Atahualpa tal vez aceptó para así conservar su cuerpo debido a la tradicional costumbre incaica de dar culto a los ancestros con las momias de sus difuntos reyes. Por esta razón, Pizarro fue posteriormente reprendido por el rey, a quien no le placía la idea del regicidio.

El deceso de Atahualpa dejó al imperio virtualmente descabezado y políticamente convulsionado, permitiendo a Pizarro proseguir con su estrategia de divide y vencerás, aliándose con la facción de Huáscar. Hizo esto coronando emperador a Túpac Huallpa, el joven hermano de Huáscar, en una sofisticada ceremonia aunque apresuradamente preparada. Los españoles iniciaron entonces la marcha hacia el Cuzco, ganando aliados a lo largo del camino entre la facción de Huáscar para su enfrentamiento final con el norteño ejército iquiteño de Atahualpa, que aún controlaba la capital. Otros grupos étnicos como los huancas, que albergaban sentimientos antiincas, fueron en auxilio de los españoles en Jauja, que se veian amenazados por las fuerzas de Atahualpa.

Tras inflingir una serie de derrotas a los quiteños en retirada, los españoles y sus aliados indios culminaron el avance al Cuzco derrotando a sus adversarios

en las montañas encima de la ciudad a mediados de noviembre de 1533 (un año después de los eventos de Cajamarca). Descorazonado, el ejército norteño se desintegró y desvaneció, permitiendo a los españoles ingresar a la capital. Entretanto, Pizarro se había visto obligado a reemplazar a Túpac Huallpa, su emperador títere, quien falleció repentinamente durante el viaje al Cuzco, al parecer envenenado. Eligió entonces a otro hermano de Huáscar, el popular y capaz Manco, y juntos entraron en la capital encabezando al ejército victorioso. Tras ser recibidos como liberadores en una atronadora bienvenida por los cien mil habitantes de la ciudad, Pizarro hizo que Manco fuese coronado formalmente como emperador, en una artificiosa ceremonia.

Al evaluar la victoria española en el Cuzco y en otros lugares, en los cuales a menudo debían hacer frente a una desventaja numérica de mil a uno, resulta determinante la guerra civil incaica. Al escribir sus memorias años más tarde, Pedro Pizarro (citado en Patterson 1991: 128 [Pedro Pizarro. *Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1978: 49-50]), el hermano del conquistador, sostuvo que «si este Guaina Capa fuera uibo quando los españoles entramos en esta tierra era ynposible ganarse... y también si la tierra no estuuiera diuisa con las guerras de entre Guáscar y Ataualpa, tanpoco no la pudiéramos entrar ni ganar». Entonces, no cabe duda de que los indios aliados jugaron un papel sumamente importante. Otros factores, como la estrategia hispana de guerra total, en oposición al contenido sumamente ritual y ceremonial de la guerra incaica, también ayudan a explicar el resultado. Por último, gracias a la caballería hispana los ejércitos incas eran invariablemente derrotados cuando operaban a la descubierta, en llanuras o campos. En cambio, cuando los andinos enfrentaban a sus enemigos europeos en espacios angostos, como quebradas y pasos en las montañas, donde los caballos de sus adversarios no podían maniobrar, a menudo les inflingían fuertes bajas.

Después de la captura del Cuzco, los españoles lograron asumir rápidamente el control del núcleo del imperio, que correspondía aproximadamente al Perú actual. Siguiendo la costumbre andina, una vez caído el Cuzco y vencidos los quiteños, otros grupos étnicos aprovecharon la oportunidad para aliarse con los europeos, los nuevos contendores por el poder. Semejante táctica facilitaría su acceso a un lugar privilegiado en el nuevo orden colonial. En cuanto a las restantes partes del antiguo reino inca, al norte y sur, sus conquistas fueron llevadas a cabo luego por conquistadores llegados posteriormente, como Benalcázar en Quito y Almagro en Chile.

Tras la captura de la capital del Tahuantinsuyo, los españoles procedieron a saquear los magníficos templos y palacios reales. Un inmenso lote de objetos de oro y plata que efectivamente superaba el valor del enorme rescate inicial de Atahualpa

fue fundido. Una parte del mismo (en realidad el cuarenta por ciento), fue remitido a España para cumplir con el tributo a la Corona: el quinto real que llenó las arcas de Carlos V y sus sueños de expansión imperial en Europa. El resto fue distribuido a los soldados de Pizarro y a algunos jefes influyentes de la clase gobernante nativa. Además de crear millonarios instantáneos, este segundo botín, juntamente con el primero, desató una virtual «fiebre del oro» peruana que amenazó con despoblar las islas del Caribe y otras partes menos lucrativas de las colonias.

Aunque el arribo de los recién llegados sirvió para reforzar la invasión europea, conllevó también el empeoramiento del trato dado por los españoles a la población nativa, pues era inevitable que las expectativas de aquellos y de otros que no participaron en los repartos de Cajamarca y Cuzco, quedaran insatisfechas a medida que el tesoro incaico se agotaba rápidamente. Cada vez más enojado y frustrado, este nuevo grupo de inmigrantes fue responsable del rápido deterioro de las relaciones con los nativos, a quienes comenzaron a explotar despiadadamente para su beneficio personal. Este mismo sentimiento contribuyó también a los crecientes conflictos y peleas entre los españoles por el botín restante de la conquista. El resultado fue el descontento y la resistencia india, que alcanzó su clímax con la rebelión de Manco en 1536. Estos conflictos asimismo llevaron al estallido de una sangrienta guerra civil entre los seguidores de Pizarro y los de Almagro. Ambos acontecimientos se entrelazaron y por un tiempo complicaron enormemente la empresa española en el Perú.

Rebelión india y guerra civil

Pizarro pronto dejó el Cuzco y se dirigió a la costa, donde, entre otras cosas, fundó la ciudad de Los Reyes, o Lima, el 18 de enero de 1535. Situada a orillas del río Rímac, cerca del océano Pacífico, Lima dio a la nueva colonia tanto un acceso estratégico a las vías marítimas como un clima más agradable para los europeos que las grandes alturas de los Andes. También desarticuló, aunque no necesariamente eclipsó del todo, el lugar central del Cuzco, pasando Lima a ser el centro administrativo e institucional, fundado en la escritura, que conformaría la hegemonía hispana por todo el Ande. Es más, con su trazado inicial en cuadrícula y calles que salían de una plaza central, Lima se convirtió en modelo del desarrollo urbano en los Andes y en toda América del Sur. Las estructuras claves del dominio colonial, que juntas simbolizaban el nuevo ordenamiento imperial, rodeaban la plaza de armas y se miraban entre sí con una grandiosa, aunque silente, majestad: una inmensa catedral, la audiencia (el poder judicial), el ornado palacio virreinal (el poder Ejecutivo) y una ominosa picota.

Entretanto, en el Cuzco, el rey títere Manco era cada vez más víctima del acoso y los insultos del creciente número de vecinos españoles. Al parecer, en

todos lados, los nativos eran forzados ilegalmente a formar cuadrillas de trabajo o a la servidumbre personal, se les robaban sus productos y bienes, y se les obligaba a entregar sus mujeres para que fueran concubinas de los españoles. Debido a este deterioro en la conducta hispana, así como a una ofensa de los hermanos de Pizarro —Hernando, Gonzalo y Juan—, que habían quedado a cargo del Cuzco, un Manco cada vez más humillado abandonó repentinamente su papel colaboracionista y se rebeló en contra de sus antiguos aliados. Movilizando una gran fuerza estimada entre cien mil y doscientos mil hombres, a comienzos de 1536 Manco coordinó un ataque y el cerco subsiguiente del Cuzco, que estuvo peligrosamente cerca de aplastar a los ciento noventa españoles que ocupaban la ciudad. La rebelión también se propagó rápidamente por la sierra, con una serie de inesperadas victorias indias.

Lo que empeoró las cosas para Pizarro fue el retorno de un descontento Almagro al Perú tras una desastrosa expedición a Nueva Toledo, el actual Chile. Las relaciones entre él y Pizarro eran tirantes hacía tiempo, debido fundamentalmente al tema de la división del botín de la conquista. La poca precisión sobre quién realmente tenía jurisdicción legal sobre el Cuzco hizo que Pizarro persuadiera a Almagro para que dirigiera una nueva expedición para conquistar Chile, en donde se esperaba que encontraría suficientes tesoros con los cuales satisfacer sus ambiciones y las de sus seguidores. La organización de entradas, o nuevas expediciones de descubrimiento y conquista, fue un método común diseñado por las autoridades del Nuevo Mundo para calmar a estos descontentos. Aprovechando que, según los mitos europeos, era común creer que el nuevo Mundo albergaba numerosos El Dorado, las entradas buscaban desactivar y redirigir hacia zonas periféricas a las frustradas, díscolas y a menudo peligrosas personas llegadas tarde al Perú y otros lugares. Muchas de estas expediciones tuvieron un mal fin (la asesina incursión de Lope de Aguirre al Amazonas en 1562 es uno de los ejemplos más espectaculares), y la de Almagro a Chile no fue la excepción.

Almagro partió del Cuzco el 3 de julio de 1535 con quinientos setenta jinetes e infantes, y doce mil nativos proporcionados por Paullu, otro hijo sobreviviente de Huayna Cápac. Después de veinte meses, Almagro y los de Chile, como posteriormente se les llamaría, retornaron al Perú profundamente desilusionados. No solamente habían sufrido severas privaciones y derrotas a manos de los nativos, sino que además no habían logrado descubrir los tesoros esperados. Almagro, al enterarse de la rebelión de Manco, vio su oportunidad de deponer a Pizarro, tomar lo que creía era suyo, apaciguar a Manco, a quien percibía como un aliado potencial, y así salvar el Perú para el rey. Las cosas resultaron al revés. Aunque Almagro llegó a tiempo para salvar y luego tomar el control de la asediada guarnición del Cuzco, apresando a los hermanos Pizarro en el proceso, la alianza con Manco no se materializó.

Entretanto, Pizarro subió sus fuerzas de Lima al Cuzco para vencer a Almagro en la Batalla de las Salinas el 26 de abril de 1538, tras lo cual Almagro fue capturado, juzgado y ejecutado por traición. Esto, sumado a que Pizarro no hizo ningún intento por aplacar a los seguidores de Almagro mediante negociaciones o su cooptación, aseguró únicamente la continuidad de la vendetta entre ambas facciones. Tres años más tarde Diego, el hijo de Almagro, logró cierta venganza mediante una elaborada conjura, al asesinar a Pizarro en junio de 1541.

Respecto a la rebelión indígena, Manco desistió de ella al ver al ejército de Almagro entrar al Cuzco. Después de levantar el cerco de la ciudad, reunió los restos de su ejército fundamentalmente campesino —una gran parte del cual ya se había dispersado para cuidar sus campos— y se retiró a la selva alta virtualmente impenetrable por las laderas orientales de los Andes. Allí estableció un reino neoinca en Vitcos, en la región de Vilcabamba, que continuó existiendo —completo con una elaborada corte pero en miniatura— durante las siguientes dos décadas porque si bien no planteaba ninguna amenaza real al Perú hispano, únicamente podía ser tomado con grandes dificultades. No está claro por qué razón no llegó a ser un centro eficaz desde donde organizar una oposición india coherente frente a los españoles.

En cuanto a las revueltas civiles en el Perú hispano, el rey intervino ahora para intentar restaurar el orden. Sin embargo, en 1542, él mismo había contribuido a agitar las aguas del descontento al decretar las Leyes Nuevas que implantaban la abolición de la encomienda. Esta institución, singularmente española, implicaba la administración de un gran número de indios que el rey concedía a los conquistadores como recompensa por los servicios prestados en la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. Los encomenderos podían recibir tributo en forma de bienes o trabajo en nombre del rey. A cambio, asumían la responsabilidad de cuidar el bienestar material y espiritual de los indios, es decir proteger y cristianizar a sus encomendados.

Dada la dimensión original de la población indígena y su abundante producción, las encomiendas resultaron ser la fuente más grande de riqueza y movilidad ascendente que podía conseguirse en el Perú, con excepción del tesoro incaico. En 1536 había unos quinientos encomenderos en una población española total de unas dos mil personas. Diez años más tarde había el mismo número de encomenderos, pero ahora representaban apenas el 12,5 por ciento de la población total hispana, proporción que cayó a seis por ciento en 1555. Además, después de la merced inicial de encomiendas a los de Cajamarca, la mayoría de las concesiones posteriores fueron a españoles de elevado rango o influencia social y política, excluyendo así a la gran mayoría de recién llegados de condición y pasado modesto que ahora llegaban a raudales a la colonia andina.

El rey tenía bastantes motivos para reformar la encomienda, pero esta era una cuestión compleja. Para empezar, las relaciones de los abusos cometidos por los encomenderos con los indios que les habían sido encomendados se habían vuelto tan numerosas que los pedidos humanitarios de su abolición, planteada por primera vez en La Española por el fraile dominico y ex encomendero Bartolomé de las Casas (1484-1566), se hacían más intensos. Los cargos desataron en la corte un debate erudito pero acalorado, en torno al tema del trato dado a la población india en el Nuevo Mundo. En el Perú, varias personalidades humanitarias se unieron a esta causa, entre ellas fray Domingo de Santo Tomás (1499-1570), un fraile dominico que arribó allí en 1540. Evaluando rápidamente el deterioro de los derechos humanos de los nativos, Santo Tomás solicitó al rey que reglamentara lo que él y otros pensaban era la causa: las demandas excesivas y otros abusos contra los indios cometidos por los encomenderos.

Además del deterioro en la condición de los indios en el emergente orden colonial, la Corona estaba alarmada por los informes sobre las altas tasas de mortalidad entre la población indígena. Los opositores de la encomienda atribuían la causa del descenso de la población nativa a los difundidos abusos que los colonos hacían a través de la institución. Madrid se daba cuenta demasiado bien de que, para citar el conocido refrán, sin los indios no habría Indias. Una fuerte caída en la provisión de mano de obra amenazaba con poner en riesgo a toda la empresa colonial.

Por otro lado, el rey también sabía que la encomienda había constituido uno de los mecanismos impulsores de la empresa conquistadora. Ante la falta de financiamiento estatal, ella había brindado incentivos materiales concretos para las expediciones de conquista de personas y grupos privados. Aún más importante resultó el hecho de que las bases de toda la temprana «economía del saqueo» colonial se basaba, como veremos, en el sistema de encomiendas. Las quinientas concedidas en el Perú dieron lugar, asimismo, a la formación de una privilegiada élite señorial que teóricamente tenía el poder suficiente para desafiar a la autoridad real. Las luchas centralizadoras del emergente Estado en España, en los siglos XV y temprano XVI, provocaron que la Corona fuera particularmente sensible a este punto.

De modo que al final, dictaminando en contra de los encomenderos por unas pragmáticas razones de Estado, la Corona accedió a reformar la encomienda luego de considerables deliberaciones y vacilaciones. En lugar de abolir la institución, decidió convertirla en un privilegio no hereditario por una vida, abriendo así el camino para su abolición en el curso de una generación. Sin embargo, el rey tuvo entonces que vérselas con el espinoso problema de cómo hacer cumplir su decisión en una lejana colonia a miles de kilómetros de Madrid. Escogió precisamente un momento inoportuno para intentar establecer una reforma

que restringiría y minaría la encomienda, en que el Perú seguía azotado por las repercusiones del conflicto entre los seguidores de Pizarro y Almagro.

Las Leyes Nuevas fueron llevadas al país en 1544 por su primer virrey, el obstinado, destemplado y nada diplomático Blasco Núñez Vela, quien juzgó equivocadamente el sentir de los colonos y neciamente intentó hacerlas cumplir. Los encomenderos se rebelaron rápidamente bajo la jefatura de Gonzalo Pizarro, el hermano del líder asesinado, quien derrotó y dio muerte al nuevo virrey en una batalla cerca de Quito, el 18 de enero de 1546. Sin embargo, el subsiguiente gobierno arbitrario y brutal de Gonzalo Pizarro degeneró rápidamente, alienando a sus antiguos aliados entre la población colonial. De modo que cuando Pedro de La Gasca, otro oficial real, llegó al Perú en 1547 para restaurar la autoridad del rey, sabiamente efectuó una retirada táctica en la cuestión de la encomienda. Esta suspensión momentánea, juntamente con la confiscación y división de las grandes encomiendas de la facción pizarrista entre sus aliados potenciales, permitió a La Gasca reconstruir el respaldo de los colonos y ganar más aliados para el rey. En consecuencia, poco más de un año después tuvo éxito en organizar una fuerza pro realista que derrotó y ejecutó al rebelde Gonzalo Pizarro y sus seguidores.

La Gasca recuperó hábilmente la lealtad de los colonos aprovechando la bonanza financiera de las recientemente descubiertas minas de plata de Potosí (1545) para nombrar colonos en los cargos virreinales recién creados y así cooptarlos. Esta medida inauguró la práctica real de comprar la lealtad política de los colonos a través el patronazgo estatal, hasta ese entonces conseguida concediendo nuevas encomiendas que ya no estaban disponibles. Cuando su mandato terminó en 1551, La Gasca había restaurado en gran medida el orden y el control real en el Perú hispano.

La alianza andina y la economía del saqueo

La minería de plata

En medio de la rebelión de Gonzalo Pizarro en 1545, un indio llamado Diego Gualpa descubrió lo que habría de ser el «gran tesoro de España en América del Sur»: las minas de plata de Potosí. Buscando un santuario nativo arriba en las montañas, en el extremo sudeste del altiplano de Charcas, Gualpa fue supuestamente arrojado al suelo por un fuerte viento, que dejó al descubierto un bloque de metal de plata. Unos años más tarde, las extraordinarias vetas de plata descubiertas en Potosí producían de ciento cincuenta mil a doscientos mil pesos de plata semanalmente, rindiéndole al monarca español un quinto real de 1,5 millones de pesos al año. Según Humboldt, Potosí en sus primeros diez años produjo unos 127 millones de pesos que alimentaron la maquinaria de guerra de los Habsburgo y las pretensiones

hegemónicas de España en Europa. Además, en el medio siglo siguiente, la plata de Potosí dinamizó y articuló una amplia economía interna andina de producción e intercambio, que incluía el norte argentino, el valle central de Chile y la costa peruana y ecuatoriana. Este extraordinario desarrollo hizo que un virrey del Perú dijera que «sin minas no hay Perú».

Durante la primera etapa de desarrollo de las minas de Potosí, entre 1545 y 1565, fueron fundamentalmente indios quienes llevaron a cabo la producción de plata. Los incas se habían dedicado a la minería principalmente con fines decorativos, y desarrollaron una tecnología metalúrgica eficaz. Las técnicas y herramientas indígenas, tales como el proceso de fundición, se trabajaban mejor en la altura que las primeras técnicas hispanas. Un elemento fundamental fue el horno de fundición llamado *guayra* (quechua para «viento» o «aire»), un pequeño horno de forma cónica de unos noventa centímetros de altura que fundía el mineral molido, permitiendo separar la plata.

A sus lados se perforaban agujeros para que el viento produjera un efecto de alto horno en el fuego, alimentado con estiércol de llama o carbón. Durante el apogeo de la *guayra*, tantos hornos de viento operaban en las laderas de Potosí durante la noche, tal vez hasta unos 15.000, que Garcilaso de la Vega comparó la escena con una brillante y nueva galaxia celeste (Padden 1975: XV).

Un campamento minero de catorce mil habitantes rápidamente se levantó en Potosí, cifra que crecería hasta alcanzar una máximo de ciento sesenta mil en 1650. Eso la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo occidental en ese entonces, y sirvió para estimular la producción agrícola en los valles alrededor del altiplano (en aquella época en el Alto Perú, y hoy en la meseta boliviana), puesto que todos los alimentos debían ser llevados al enclave montaña arriba desde afuera. No obstante la considerable riqueza generada en aquellos años, las condiciones de vida siguieron siendo primitivas en Potosí:

> Las casas y edificios eran angostas; los techos eran bajos y las habitaciones pequeñas para conservar el calor. Las ventanas eran pocas y sin vidrio. Hasta los mineros ricos vivían en chozas miserables ventiladas cruelmente por grietas y fisuras. En invierno se esperaba un frío severo, pero en los días más templados de verano la temperatura jamás subía por encima de los quince grados centígrados. La combustión de carbón [de madera] en chimeneas pobremente ventiladas, o simples braceros, era la principal protección del frío eterno y presentaba sus propios peligros en forma del envenenamiento con monóxido de carbono, que era crónico. Tan dura fue la vida en la fase temprana, que durante los primeros cincuenta años ni una criatura nacida en Potosí de padres europeos sobrevivió por más de dos semanas. Las mujeres aprendieron a descender a los valles más bajos para dar a luz y permanecer allí con el niño durante su primer año de vida antes de regresar al Lugar Alto (Padden 1975: XVII).

Después de un gran envío inicial, la producción de plata de Potosí se desaceleró debido al agotamiento de las vetas superficiales, al cada vez menor contenido de plata del mineral extraído, y al persistente faccionalismo político que azotaba el país. La producción no aumentó sino hasta el descubrimiento de las minas de mercurio de Huancavelica en 1563, que permitió a los mineros de Potosí adoptar el más eficiente proceso de refinamiento de patio que acababa de perfeccionarse en México. Una vez instalada dicha tecnología en el Perú, a comienzos de la década de 1570, la plata se convirtió en el motor del desarrollo colonial. Hasta ese entonces, la «economía del saqueo» hispana siguió basada fundamentalmente en el sistema de encomienda.

La encomienda

El tributo de la encomienda comprendía las necesidades básicas que los colonos españoles requerían para mantenerse: alimentos (usualmente huevos, maíz y miel), el transporte de agua, leña y mercancías (ropa de lana); y la construcción de casas y obras públicas, como iglesias, caminos y puentes. Con los incas, el tributo se había recolectado únicamente en forma de trabajo mas no en especie, pero ahora alteraba la subsistencia aldeana y debía satisfacerse sin importar que las cosechas fueran buenas o malas. El caso de Pedro de Hinojosa, con su encomienda o repartimiento extremadamente rico del Alto Perú, no es la excepción en función de las obligaciones tributarias indígenas. Además de trabajo, Hinojosa recolectaba 1200 panegas de maíz y plata extraída de diversas minas, Potosí inclusive, valorizada en 27.300 pesos en 1559.

Aunque había reglas o leyes que reglamentaban la encomienda, las relaciones entre los encomenderos y sus encargados tendían con el tiempo a negociarse. Según Spalding (1984: 125), ellas fueron negociadas entre las décadas de 1530 y 1550, a medida que las exigencias de los encomenderos eran aceptadas o resistidas por la población hasta alcanzar un modus vivendi, a menudo inestable. Un sistema político burdo surgió en el transcurso de ese proceso de negociación frecuentemente violento y brutal, que duró por más de tres décadas». En consecuencia, la encomienda tendía a variar de lugar en lugar y su eficiencia en la apropiación de bienes y mano de obra dependía, en gran medida, de la habilidad de los encomenderos al negociar con los nativos.

Para facilitar estas relaciones y organizar eficazmente una encomienda, el conquistador-encomendero establecía alianzas con los *curacas*, los principales jefes indios que habían actuado como intermediarios entre el Estado inca y las comunidades étnicas locales. Ellos realizarían la misma función en el nuevo orden europeo, siendo responsables de la supervisión y la administración de los indios, así como de la recolección y entrega del tributo y de los trabajadores

asignados a los encomenderos. A cambio, tomaban parte del tributo para sí y recibían otros bienes hispanos y privilegios de estos últimos. En consecuencia, los *curacas* conservaron buena parte de su antiguo estatus de élite y alcanzaron un lugar importante en la sociedad de la posconquista. Al forjar estas alianzas con los *curacas* y colocarse en la posición de los representantes del antiguo Estado inca, los encomenderos lograron apropiarse del aparato andino ya existente para la extracción de excedentes.

Para maximizar las ganancias con este sistema de gobierno descentralizado e indirecto, los encomenderos rápidamente se dieron cuenta de que una buena relación de trabajo con los *curacas* aseguraba un flujo abundante de bienes y trabajadores. Buscaron, por lo tanto, cimentar tales relaciones con favores y presentes a sus aliados indios. Por ejemplo, en Huamanga, Diego Maldonado literalmente abrumaba con presentes —un esclavo negro, mulas, caballos, ganado y finas vestimentas incaicas y españolas— a sus curacas porque, según uno de ellos, «[Maldonado] se los debía por los servicios que le hacían» (Stern 1982: 31). Una generosidad similar era asimismo evidente en las abundantes cantidades de maíz, coca, sal, ají, carne, ovejas y lana recibidas por los indios de Maldonado en pago a su trabajo. De este modo, el astuto encomendero aplicó las reglas de la 'generosidad' andina para crear dependencias y obligaciones de intercambio 'recíprocas'».

Esto no significa que el conflicto, la violencia o el abuso, como los azotes, los robos y las violaciones de indios de encomienda por parte de los empleados de los encomenderos —españoles, negros o mestizos—, no hayan formado parte del sistema. Ni tampoco quiere decir que algunos españoles, usualmente aquellos que buscaban una ganancia rápida para así poder retornar a España, no hayan explotado duramente a sus indios cuando arrendaban su trabajo a otros (una práctica común en los primeros años). De manera que, las «relaciones tempranas entre los pueblos nativos andinos y los europeos mostraban una mezcla incómoda de fuerza, negociación y alianzas» (Stern 1982: 34).

En virtud a su riqueza en tributo y a su control de la fuerza laboral nativa, la clase de los encomenderos pasó a dominar la sociedad inmediatamente posterior a la conquista, en un sistema que reflejaba el feudalismo. Aunque la encomienda no era una merced de propiedad, sí permitía el establecimiento de una soberanía efectiva sobre la población nativa, actuando el señor encomendero como el principal árbitro y dispensador de justicia. En este sentido, su palabra era ley entre sus indios.

El mecanismo más importante de poder de los encomenderos fue el cabildo, formado para trazar y gobernar los primeros municipios españoles en los Andes, que ellos rápidamente lograron controlar. Cuando el rey finalmente comenzó a enviar corregidores desde Lima a finales de la década de 1560, éstos usualmente eran cooptados por los encomenderos y otros integrantes del cabildo, en alianzas

de interés mutuo. Semejante arreglo entorpecía la extensión de la autoridad real y ayudaba a fortalecer aún más el poder de la clase «encomendera» a nivel local. Por ejemplo, a mediados de siglo, según Ramírez, la docena aproximada de encomenderos de Trujillo, al norte de Lima, constituía una élite estrechamente ligada a una base económica común, intereses compartidos y cercanos lazos de parentesco. Al haber convertido virtualmente al cabildo en su propio club exclusivo, lograron ejercer un dominio casi total sobre la temprana sociedad trujillana.

Una de las funciones más importantes del cabildo era repartir solares en las ciudades y mercedes de tierras para cultivos y pastoreo a los colonos. Gradualmente, el crecimiento de los centros y mercados urbanos como el Cuzco, Lima y los campamentos mineros, permitió que muchos colonos, entre ellos los encomenderos pudieran apreciar las posibilidades de la agricultura comercial. Por lo tanto, estos últimos comenzaron a adquirir —por merced, venta o usurpación— tierras aptas para el cultivo y el pastoreo, a fin de producir y vender productos a la creciente población urbana. Aunque inicialmente conformaban parcelas fragmentadas —accesibles a los mercados vecinos y en zonas por lo general fértiles—, estas mercedes con el tiempo se consolidaron en propiedades más grandes. Este fue el origen de la hacienda, una institución que pasó a ser una marca distintiva del Perú colonial, pero que durante el siglo XVI siguió siendo pequeña y subdesarrollada. La adquisición de estas pequeñas propiedades se vio asimismo facilitada por el colapso demográfico de la población india, que dejó vacantes grandes extensiones de fértiles tierras en los valles, fáciles de tomar para los europeos recién llegados. A medida que la agricultura comercial se extendía, incentivaba el crecimiento de los mercados urbanos en la década de 1550; asi, el valor de la tierra, que durante las tres primeras décadas había sido insignificante en comparación con las encomiendas, comenzó a elevarse y a cobrar una importancia cada vez mayor.

Entonces, a mediados de siglo, la creciente demanda mercantil de productos agrícolas, tanto indígenas como europeos, fue satisfecha por el sistema de las encomiendas y las pequeñas haciendas en vías de crecimiento. Las primeras «recolectaban» alimentos, principalmente pero no exclusivamente indios, para venderlos en los pueblos, especialmente en las minas donde los trabajadores indígenas no solamente consumían grandes cantidades de coca y comidas nativas, como la chicha, la hierba mate y la carne seca, sino también ropa de fabricación burda. Esta última era fabricada en talleres rudimentarios denominados obrajes, a menudo establecidos por los encomenderos y sobre los cuales me extenderé posteriormente. Las haciendas tendieron a especializarse en la producción de los alimentos hispanos recién introducidos, como el trigo, el aceite de cocina, el vino y la carne, que eran más agradables para los gustos europeos y apropiados para su reventa urbana. Las funciones de transporte y comercio en esta economía colonial en desarrollo fueron llevadas a cabo por un número creciente de arrieros

y pequeños comerciantes que recorrían los principales circuitos comerciales del eje mercantil en expansión de Lima-Cuzco-Potosí.

Muchos españoles y no pocos indios resultaron ser hábiles para combinar la producción indígena con los métodos manufactureros, organizativos y distributivos hispanos y conseguir ganancias en esta economía. Ello fue especialmente cierto en el caso de los encomenderos más exitosos, los cuales mostraron una habilidad comercial y empresarial que no concuerda con su imagen anterior de simples rentistas que vivían un estilo de vida señorial, como barones feudales. No cabe duda que los encomenderos conformaron grandes unidades domésticas urbanas características de la tradición señorial, que constaban de los miembros de la familia y los parientes, así como un gran número de clientes, criados y empleados. De hecho, un número considerable de los artesanos, notarios, mayordomos, contadores y otros profesionales llegados de España se ligó a estas grandes unidades encomenderas. Sus señores, asimismo, gastaban dispendiosamente en un consumo conspicuo, no sólo para validar sus aspiraciones de un estilo de vida y estatus aristocrático, sino para mostrar su «poder» como grandes señores en la sociedad colonial. Si bien el ingreso que sustentaba a esas grandes familias llegaba en forma de «rentas» de tributo indio, estos bienes requerían una capacidad de procesamiento y comercialización que sugiere que una inclinación empresarial ya estaba presente entre los primeros inmigrantes españoles al Perú. Por ejemplo, era una práctica común entre los encomenderos reinvertir sus ganancias en el comercio. Uno de ellos, Lucas Martínez Vegaso, usaba los ingresos procedentes de la venta de los bienes del tributo de su encomienda en los mercados de Potosí para sustentar su gran unidad doméstica en Arequipa y montar extensos intereses empresariales, entre ellos la minería, la molienda, las viñas, las manufacturas, la ganadería y los navíos.

De igual modo, muchos indios —comunidades y particulares, comuneros y señores étnicos— también reaccionaron en formas innovadoras y empresariales, y buscaron aprovechar las nuevas condiciones. Los *curacas* sentaron la pauta con su acceso singular a las tierras y a la mano de obra india. Les siguieron los mineros, artesanos, comerciantes y agricultores nativos, quienes comenzaron a adaptarse a, y participar en, la nueva economía comercial europea en múltiples formas creativas y rentables. Por ejemplo, en 1588 don Diego Caqui, el hijo de un *curaca* de Tacna, poseía cuatro viñedos y una fábrica vinícola, una recua de llamas para transportar el vino a Potosí y dos fragatas, que operaban comercialmente entre Arica y Callao. Según Stern (1995: 77), esta práctica era común ya que los «grupos étnicos, encabezados por sus jefes, vendían y ocasionalmente compraban servicios; alquilaban, compraban y vendían tierras; producían, comercializaban y compraban mercancías de origen andino y europeo; e invertían en minas, obrajes y compañías comerciales».

Quienes adoptaron estas nuevas prácticas comerciales también estaban dispuestos a la incorporación de ciertos aspectos de la cultura y la religión europeas, aunque los interpretaron y asimilaron en función de su propio marco de referencia andino. Muchos también adoptaron, en diverso grado, las vestimentas, las costumbres, el lenguaje y los alimentos hispanos, y abrazaron el cristianismo, aun cuando subrepticiamente prosiguieron con sus viejas prácticas y adorando sus propias *huacas*, o lugares sagrados. Esta tendencia a la aculturación dio lugar a la aparición de los mestizos o *castas*, una nueva categoría étnica producto de la unión entre españoles e indígenas en la sociedad andina de la posconquista.

La temprana economía andina del saqueo, basada en una alianza entre los encomenderos y los nativos, con los *curacas* desempeñando un papel crucial como intermediarios, funcionó relativamente bien para extraer la riqueza andina y canalizarla hacia una incipiente élite colonial y hacia la metrópoli española. Sin embargo, dos razones hacían que el sistema resultara esencialmente vulnerable y fuese defectuoso para el desarrollo a largo plazo del colonialismo.

En primer lugar, desde el punto de vista del poder central metropolitano, el surgimiento y consolidación del poder de los encomenderos era en última instancia inaceptable, pues éste indudablemente implicaba el desvío de la riqueza andina de la metrópoli hacia una emergente élite local. Su creciente dependencia del quinto real de la plata andina para sus aventuras europeas, hizo que semejante arreglo fuese intolerable y determinó que se emprendiera un derrotero distinto, en el cual el Estado controlaría en forma mucho más directa la ruta del desarrollo colonial. En segundo lugar, la misma alianza andina como base para el colonialismo era defectuosa en última instancia pues, como sugiere Stern, ella dependía de que los indios cumplieran las demandas explotadoras de los encomenderos. Los *curacas* y sus clientes indios cooperaban por el momento en estas demandas, no sólo por el poder manifiesto de la fuerza armada hispana, sino también porque conllevaba ciertas ventajas hacerlo: los *curacas* retendrían su puesto privilegiado, y los grupos étnicos podían recurrir a la ayuda de sus encomenderos en contra de sus enemigos y rivales en otras comunidades.

Sin embargo, con el tiempo, lo que perturbó este modus vivendi fue la tendencia española a incrementar constantemente las cargas tributarias, en particular las demandas laborales a gran escala por el *boom* minero, a una población india que estaba descendiendo constantemente. En otras palabras, tres décadas después de su derrota, la sobreexplotación, en un contexto del desastre demográfico, hizo que los indígenas cuestionaran su adaptación inicial a sus conquistadores. Cada vez menos capaces o dispuestos a satisfacer las demandas tributarias de sus opresores, los indios rompieron la alianza andina sobre la cual descansaba todo el edificio del colonialismo, y en la década de 1560 se volvieron hacia formas de resistencia y rebelión abierta en contra de dicho sistema.

El colapso demográfico

La carga de las crecientes demandas tributarias recaía sobre una población nativa asolada por la difusión de las letales enfermedades introducidas por los europeos. En consecuencia, por todas las Américas, los nativos experimentaron un catastrófico colapso demográfico. Incluso antes de la aparición de Pizarro en la costa peruana, la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus, la gripe y hasta el resfriado común se habían propagado a América del Sur, llevados tal vez por los comerciantes nativos, y comenzaron a causar estragos entre la población biológicamente indefensa del Tahuantinsuyo. De hecho, se cree que la muerte de Huayna Cápac, que desató las desastrosas luchas dinásticas entre Huáscar y Atahualpa, se debió a una epidemia de viruela que azotó a Quito en algún momento entre 1523 y 1525.

Según Cook (1981), la población indígena peruana, estimada entre 4 y 15 millones de personas (y tal vez hasta 30 millones) antes del arribo de los españoles, cayó a 1,3 millones en 1570 (48,5 por ciento) y a apenas 700.000 en 1620. La caída fue particularmente aguda en la primera media centuria después de Cajamarca, pero varió de lugar a lugar, siendo por lo general más alta en la costa (96 por ciento entre 1525 y 1575) que en la sierra (67-75 por ciento). A diferencia de México, donde la población indígena alcanzó su punto bajo en la década de 1620, en Perú éste no llegó sino entre mediados y finales del siglo XVII [aunque los estimados se complican por las dificultades para contar el gran número de nativos que dejaron sus comunidades (los llamados *forasteros*) a fin de evitar pagar el tributo y evadir la mita de las minas de plata].

Son numerosas las causas de este desastre demográfico, único en la historia moderna del mundo. Ellas van desde las diversas calamidades de la guerra, a las penurias causadas por la naturaleza explotadora del nuevo régimen colonial, y a la difundida desmoralización psicológica de la población conquistada. Todos estos factores se conjugaron para intensificar la propagación de enfermedades letales en una población sin inmunidad alguna. Mientras que las guerras desatadas por la invasión española fueron de duración relativamente corta, la confiscación de la provisión nativa de alimentos a largo plazo a través de la exacción del tributo por parte de los invasores, minó severamente a una sociedad basada en la producción de subsistencia. Lo mismo hizo el envío de trabajadores de la encomienda y de las aldeas a una amplia gama de empresas, tanto públicas como privadas. A medida que la mano de obra en los pueblos era desviada de la producción nativa hacia otros fines, los sofisticados e intrincados sistemas andinos de terrazas e irrigación rápidamente cayeron en ruinas. Por ello no sorprende, entonces, que se produjera una fuerte caída en las cosechas, contribuyendo así a la creciente escasez de alimentos y a una extensa hambruna en el sector indígena. Todo ello produjo un círculo vicioso de hambre y muerte en las comunidades nativas.

La introducción de algunas técnicas agrícolas y pastoriles europeas en los Andes contribuyó a este ciclo de enfermedades y muerte. No contentos con seguir viviendo de la expropiación de alimentos indios (la encomienda), los conquistadores y sus sucesores rápidamente comenzaron a producir, como ya señalé, sus provisiones a las cuales estaban acostumbrados —diversas carnes, pan, vino, azúcar y aceite de oliva— en las despobladas tierras indias. Los colonos, asimismo, introdujeron ganado vacuno y ovino a los Andes por vez primera en milenios cuyos efectos fueron devastadores para la agricultura nativa. Las vacas y ovejas españolas, que se multiplicaron con asombrosa rapidez, invadieron y dañaron indiscriminadamente los campos de las vecinas aldeas indias. En suma, los animales hispanos al destruir la producción nativa contribuyeron a agudizar la difundida hambruna. Es decir, «cuanto más cultivos y ganado europeos había, tanto menos [eran los] indios» (Sánchez Albornoz 1984: 10). Un argumento contrario al de esta destrucción de la producción indígena es que la introducción de nuevas herramientas —los arados con punta de metal, por ejemplo, o la concentración de la producción en las tierras más fértiles— contribuyó, en realidad, a elevar la productividad agrícola, aun cuando la población caía dramáticamente.

El trauma psicológico de la derrota y la colonización intensificó aún más la disminución de la población indígena. «La rendición de la estima de sí mismos, de la riqueza, la prosperidad y la comodidad que los conquistados deben hacer al vencedor, inevitablemente tiene repercusiones sobre la crianza de los hijos, a quienes ya no pueden mantener»: así escribió el virrey marqués de Castelfuerte con respecto a la despoblación de la provincia del Santa (citado en Sánchez Albornoz 1984: 11). De hecho, la caída en las tasas de fertilidad, tanto como el alza en la mortandad causada por la desnutrición y las enfermedades, ayudó a reducir la población andina. Por ejemplo, en Huánuco, en los Andes centrales, el tamaño promedio de la familia bajó de seis miembros antes de la conquista a 2,5 en 1562, tanto por la reducción de la tasa de natalidad como por la desintegración de la familia. Los informes de abortos e infanticidios, para no mencionar aquellos sobre los suicidios, son numerosos en las crónicas y en la documentación oficial de la época. Por ejemplo, el etnohistoriador Nathan Wachtel (1977: 94 [Nathan Wachtel, *Los vencidos. Los indios del Perú ante la conquista española*. Madrid: Alianza Universidad, 1976: 147]) utilizó uno de los primeros informes gubernamentales que menciona que los «indios empujados al suicidio por desesperación y para escapar de los malos tratos; unos se ahorcan, otros se dejan morir de hambre, otros toman hierbas venenosas; y por último, algunas mujeres matan a sus hijos al nacer, 'para liberarlos de los trabajos que ellas padecen'».

Wachtel sostiene que la desmoralización generalizada de la población india al ver el colapso de su vida tradicional, la desprotección de sus dioses y la desorganización general del Estado inca les llevó a una desesperación total.

Citó, en particular, los informes del difundido alcoholismo en los indios como un indicio de que estaban intentando escapar de un mundo que ya no tenía ningún significado para ellos. En la época de los incas, embriagarse en casa o en el trabajo estaba estrictamente prohibido, salvo durante las fiestas religiosas, y se castigaba con severidad. Estas y otras señales de desintegración social, concluyó Wachtel, eran el resultado de la conquista y el desastre demográfico.

Al final, todos estos factores —la guerra, la explotación, el cambio socioeconómico y el generalizado trauma psicológico de la conquista— se combinaron para intensificar la propagación de las enfermedades epidémicas. Numerosas pandemias letales se expandieron desde el norte, asolando comunidades enteras en donde a menudo mataban a nueve de cada diez habitantes. Estas epidemias se dieron en 1525, 1546, 1558-1559 y 1585, sin dar a la población tiempo para recuperarse, dañando su capacidad de reproducción social. La epidemia más seria, que tuvo lugar entre 1585 y 1591, parece haber sido la combinación de varias enfermedades. El cronista Arriaga observó que «el cuerpo de las víctimas se cubría de pústulas; éstas obstruían la garganta impidiendo el paso de los alimentos y consumían los ojos; los enfermos exhalaban un olor fétido y se hallaban tan desfigurados que sólo podían hacerse reconocer por su nombre» (citado en Wachtel 1977: 96 [Nathan Wachtel, *Los vencidos. Los indios del Perú ante la conquista española*. Madrid: Alianza Universidad, 1976: 150]).

Con el tiempo —en el siglo XVII—, estas pandemias cedieron el paso a otras epidemias más localizadas igualmente letales. Por ejemplo, la fiebre amarilla se hizo endémica en la costa, cuya tasa de pérdida demográfica fue más elevada que la de la sierra, llevada por los esclavos africanos recién llegados y se propagó en un clima tropical similar al del continente negro. Irónicamente, también afectó fuertemente a la población europea, que para ese entonces se concentraba en las ciudades.

El mundo hispano-peruano

La inmigración española al Perú se aceleró a medida que las noticias de la conquista de los incas se esparcían por las Américas, y posteriormente a través del Atlántico a europa. Los colonos, al igual que su contraparte en otros lugares del Nuevo Mundo, provenían de un amplio espectro geográfico, social y ocupacional de españoles ordinarios, con muchos oficios y rangos: artesanos, profesionales, comerciantes y mujeres. Ellos representaban a toda la gama social de la sociedad hispana y a cada región del corazón de Castilla, e incluían un número nada despreciable de esclavos africanos y europeos. Básicamente, eran personas ordinarias, que habían oído hablar del Perú en las cartas entusiástas que sus amigos y parientes enviaban

a casa, y decidieron emigrar. A diferencia de los estereotipos posteriores, no eran opuestos al comercio y la mayoría participaba en todas las actividades empresariales comunes al capitalismo comercial que se iba desarrollando en Europa.

Los recién llegados se concentraron en los nuevos pueblos y ciudades que se iban fundando en los Andes. De hecho, desde el principio el mundo hispano-peruano tuvo un eje urbano, tal vez mucho más que la misma España. Aunque se efectuaban muchos viajes al campo, la residencia allí no era bien vista y se dejaba a los corregidores, cobradores de tributo y los párrocos rurales o doctrineros, que enseñaban el cristianismo a los nativos. Los principales difusores de la civilización hispana en el Perú fueron los encomenderos, los artesanos, las mujeres españolas y los negros hispanizados que vivían en las ciudades.

Por ejemplo, los negros africanos sirvieron como valiosos auxiliares, no sólo para derrotar a la población nativa sino también para «aculturar» a los indios a la forma hispana de vivir y de hacer las cosas, además de ser un elemento clave en la provisión de mano de obra. Los esclavos habían acompañado a Pizarro en todas sus expediciones desde Panamá y se dice que uno de ellos ayudó a salvar la vida de su socio, Diego de Almagro, quien posteriormente llevó ciento cincuenta negros en su expedición a Chile. Los esclavos africanos pronto fueron importados en gran número, en un contexto de virtual desaparición de la población indígena en la costa, para suministrar trabajadores para los repartimientos costeños, las encomiendas y las grandes mansiones de los poblados hispanos. Para 1586, Lima tenía cuatro mil esclavos africanos contra dos mil no africanos, una cifra que aumentó a quince mil contra nueve mil respectivamente en 1640. Dada su considerable utilidad, los esclavos alcanzaron un precio elevado a mediados del siglo, como lo ejemplifica la compra que Gonzalo Pizarro hiciera de «un esclavo y ciertas mercaderías» en quinientos pesos.

Durante los primeros años, la mayoría de los esclavos eran llevados al Perú desde otras partes de la colonia o de la misma España, en donde la esclavitud contaba con una larga historia. Por tanto, estaban completamente hispanizados y tendían a identificarse con sus amos en un medio ajeno y extraño de como Andes; de hecho, frecuentemente a menudo aterrorizaban a los nativos y los trataban duramente al actuar como intermediarios y emular a sus amos, lo que generó una fuerte antipatía entre ambos grupos. Valorados por su lealtad, habilidades y *know-how* en un mundo de frontera, los negros generalmente fueron considerados por encima de la población india en la estratificación social de la sociedad poscolonial.

Si bien los orígenes sociales y la ocupación ayudaron a estratificar al Perú hispano de similar modo que en la madre patria, la antigüedad en la conquista y la posesión de una encomienda también otorgaban prestigio y contribuían al fortalecimiento de la nueva jerarquía andina en evolución. La participación en la conquista de Cajamarca y el Cuzco, que a menudo conllevaba la recompensa

con una merced de encomienda, dio cuenta de buena parte de la movilidad social durante los primeros años de la conquista. La movilidad social sería más difícil posteriormente, ya que las encomiendas fueron adquiridas cada vez más por peninsulares llegados tardíamente, quienes arribaban directamente de España con dinero, estatus e influencia. Al mismo tiempo, la posesión de una encomienda desde el inicio transmitió al Perú el espíritu señorial que era el ideal predominante en España, por ello, como ya vimos, los encomenderos vivían como señores y se convirtieron en el centro económico y social de su nueva tierra:

> Eran los principales clientes de los artesanos y mercaderes; sus tierras y ganados alimentaban a las ciudades; sus indígenas trabajaban las minas; sus séquitos de parientes, huéspedes, sirvientes, empleados y esclavos negros los convertían en dirigentes de bandos independientes de hombres; en sus grandes casas compuestas de las ciudades no sólo estaban sus residencias, sino sus tiendas y almacenes, y las viviendas de una buena parte de la población, sobre todos los cuales los encomenderos ejercían una influencia patriarcal (Lockhart 1968: 230 [James Lockhart, *El mundo hispanoperuano, 1532-1560*. México: Fondo de Cultura Económica, 1982: 291]).

En términos demográficos, los primeros treinta años de la ocupación hispana atrajeron entre unos cinco mil a diez mil españoles al Perú. Las mujeres conformaron una clara minoría de los inmigrantes en este periodo, representando apenas entre cinco a diecisiete por ciento, una cifra que subió a 28,5 por ciento entre 1560 y 1579, conforme las condiciones se estabilizaban. Las motivaciones del viaje variaban, pero la mayoría de ellas «llegó para establecerse, ser protegida, [y] para labrarse un futuro mejor para sí mismas» (Lavrin, citada en Bethell 1984: 323). Sin embargo, no todas tuvieron éxito, como lo indican las numerosas cartas escritas a las autoridades reales por muchas viudas necesitadas y las hijas sin un céntimo de los conquistadores, y así como de los primeros colonos, solicitando pensiones y auxilio financiero. Contrayendo matrimonio fundamentalmente con sus compatriotas, ellas formaron familias y fueron particularmente importantes como «transmisoras de la cultura hispana doméstica y material, y de los valores religiosos y sociales».

Tal vez entre dos y cuatro mil de los cinco mil a diez mil inmigrantes eran pasajeros marginales, vagabundos, mendigos y bribones. Ellos recuerdan a los pícaros de España y fueron una fuente constante de problemas e inestabilidad, lo que hizo que las autoridades organizaran numerosas entradas como válvulas de seguridad y de control social. El número total de pobladores españoles fue igualado por el de los esclavos negros hispanizados. A estos se unió un gran número de indios hispanizados, llevados inicialmente desde Nicaragua y otras partes de las Indias. En la década de 1560, los indios «aculturados» que residían en o cerca de las grandes áreas urbanas los superaban en número. La abrumadora

mayoría de esta población vivía en pueblos y ciudades, residiendo la mitad de ella en Lima y Potosí en 1569.

La configuración social y racial de esta sociedad era compleja y ambigua. Los negros estaban en la sima del mundo hispano, pero por encima de la mayoría india sobre la cual ejercían algún poder. Los españoles comunes tenían esclavos negros y sirvientes indios en sus casas, pero eran tratados como inferiores por otros españoles, que eran sus superiores. Y una nueva categoría étnica —la del mestizo o casta, de sangre mixta— iba emergiendo rápidamente del encuentro biológico como cultural entre los vencedores españoles y los vencidos indios. La administración colonial intentó vanamente clasificar esta población diversa con el fin de cobrar impuestos y establecer categorías sociales de estratificación. Pero la «realidad de un 'mestizaje' incontrolable eventualmente dio el mentís a una nomenclatura racista desarrollada como mecanismo de control que permitió ubicar a la población en el espacio geográfico, así como en rígidos nichos sociales y económicos» (Castro-Klarén, «Lima: A Blurred Centrality», en Valdés 2003).

La Iglesia y la conquista espiritual

El establecimiento del Perú hispano no sólo implicó un flujo continuo de inmigrantes desde la madre patria y el establecimiento de la civilización ibérica en el corazón de los Andes. También conllevó la transferencia de instituciones hispanas, ninguna de las cuales fue más importante para el establecimiento del control europeo en los Andes que la Iglesia católica. Si bien en un nivel la conquista representó el choque entre fuerzas militares rivales que fue decidido en los campos de batalla de Cajamarca y otros lugares; en otro, ella representó la lucha de más largo aliento entre dos religiones, ideologías y visiones del mundo opuestas. Como en todos los conflictos coloniales, el resultado final dependió de la lucha por reemplazar un conjunto de creencias por otro: las deidades y tradiciones andinas por el cristianismo europeo.

La historia y la tradición prepararon singularmente a la Iglesia católica española para la conquista espiritual de los Andes. Primeramente, como ya se señaló, ella había tenido un significativo papel motivador y justificador en la reconquista de España al montar una cruzada, o guerra santa, en contra del moro infiel. Además, la unificación de la península en la reciente nación española bajo la Corona de Castilla, a finales del siglo XV, debió mucho al inmenso poder y riqueza de la Iglesia católica, que la Corona logró integrar a sus objetivos políticos. Esta unificación de Iglesia y Estado se logró fundamentalmente a través de una serie de bulas papales de finales del siglo XV y comienzos del XVI, que concedieron a la Corona el patronato real sobre la Iglesia de España. En efecto, Roma legitimó los derechos hispanos sobre los territorios recién descubiertos o

conquistados y otorgó al Estado el control sobre la Iglesia a cambio de la obligación de convertir sus habitantes (moros y posteriormente indios) al cristianismo. En virtud al patronazgo real, la Corona ganó el derecho a nombrar o ratificar todos los cargos eclesiásticos, asumiendo la obligación de pagar los salarios y levantar templos con las rentas recibidas de los diezmos gravados a la producción agraria.

Por último, considerado como un conjunto de valores universalmente aceptados, el cristianismo ortodoxo brindó la base ideológica para las tendencias centralizadoras de la monarquía castellana en su esfuerzo por unificar los reinos geográfica y políticamente diversos que conformaban la Península Ibérica. El Santo Oficio de la Inquisición, establecido por vez primera en Castilla bajo el control de la Corona en 1483, para asegurar la ortodoxia religiosa entre la población judía conversa contribuyó a la unificación nacional. Su papel fue ampliándose con la amenaza externa del herético reformismo protestante, que surgió en el norte europeo para desafiar a Roma y a la Iglesia universal a comienzos del siglo XVI. La lucha entre protestantismo y catolicismo durante la Reforma se convirtió en un conflicto político, además de religioso. A medida que la España de los Habsburgos asumía el papel de defensora de la Fe, la Iglesia, encabezada por la Inquisición, se hizo cada vez más militante y ortodoxa.

En este contexto de ortodoxia militante durante la Contrarreforma en Europa, los españoles, dirigidos por Pizarro y acompañados por unos cuantos sacerdotes, llegaron a Cajamarca en 1532. A diferencia del fervor misionero que caracterizó a la temprana Iglesia de Mesoamérica con un espíritu humanista, en el Perú ella reflejó desde el principio el ethos militante de un Estado en guerra. Por ello, en los Andes, el proceso de conversión de los nativos al cristianismo asumió un significado más político que misionero e idealista. Esto significó la aceptación, por parte de los vencidos, de la nueva autoridad que representaban sus conquistadores, al mismo tiempo que brindaba a estos últimos una útil racionalización y justificación de la conquista.

La recepción indígena del mensaje de conversión de los misioneros se vio facilitada no sólo por la omnipotencia de la religión de los conquistadores, sino porque ofrecía un alivio espiritual después de la brutalidad de la conquista. Sin embargo, esta aceptación no implicó un abandono total de las viejas creencias y rituales. Por el contrario, al mismo tiempo que los nativos prestaban una fidelidad superficial a la nueva religión como un acto político, o en formas espirituales más profundas en busca de un alivio a sus sufrimientos, continuaban adorando a sus viejas deidades y practicando sus rituales tradicionales sin mucha interferencia del clero hispano, por lo menos al principio de la conquista. En palabras de Stern (*JLAS* 1992: 20), «desde el punto de vista indígena, la cristianización implicaba no la sustitución de un panteón o marco religioso otro, sino una incorporación y un redespliegue selectivos del cristianismo, dentro del marco de una comprensión

indígena». Sin embargo, con el tiempo, la persistencia de las creencias y rituales religiosos nativos sería vista por las autoridades eclesiásticas como una «laxitud» en el proceso de conversión, lo que dio lugar, como veremos, a una campaña concertada, a mediados de siglo, para eliminar los ritos y ceremonias religiosos nativos.

Varias órdenes religiosas conformaron la «reserva estratégica» inicial de la Iglesia en la conquista espiritual de los Andes. Entre ellas estaban los franciscanos, llegados en 1534, seguidos por los dominicos, los agustinos, los mercedarios y los jesuitas (los últimos en arribar, a comienzos de la década de 1570). Estas cinco órdenes sagradas proporcionaron el grueso de los misioneros que jugaron un papel importante en la línea de combate de la conquista espiritual, estableciendo doctrinas o unidades de evangelización a nivel parroquial, diseñadas para hacer proselitismo y «civilizar» a los nativos con métodos que combinaban tanto la persuasión como la coerción.

Si bien las autoridades eclesiásticas recurrieron a la coerción contando con la sanción estatal a través de duras campañas periódicas realizadas para extirpar la idolatría, también diseñaron prácticas de persuasión más benignas. De esta manera, surgió una política cultural colonial que enfatizaba la propagación de la Fe a través de medios de representación visual, usando pinturas y grabados, así como el catecismo. Esto último, por ejemplo, se vio facilitado con la publicación y difusión de ayudas doctrinales y confesionarios tales como la *Doctrina christiana y catecismo para la instrucción de los indios* (1585). Respecto a la pintura colonial, fue estimulada por el Concilio de Trento (1545-1563), que recomendó la conversión mediante el uso de las artes visuales. El resultado de esta recomendación fue el desarrollo de importantes escuelas virreinales de pintura como la de Cuzco, Lima, Chuquisaca y Quito. Por ejemplo, el artista español Iñigo de Loyola llegó al Cuzco en 1545 habiéndosele pedido la decoración de los numerosos templos levantados en la antigua capital incaica, iniciando la preparación de artistas indios y mestizos en el arte de la producción de pinturas religiosas didácticas. Según Gisbert (1980: 104), con el tiempo el setenta por ciento de los artistas de la escuela cuzqueña, fundada por Diego Quispe Tito (1611-1681), fueron indios y ella producía no sólo iconografía religiosa para las iglesias, monasterios y conventos virreinales, sino también escenas de las grandes ceremonias y festividades públicas del virreinato, así como retratos de la nobleza española e india.

Si bien la evangelización andina inicial fue menos utópica e idealista que su contraparte mexicana, produjo una serie de personalidades que sobresalieron como ejemplos del humanismo europeo en el Perú. Una de ellas fue Domingo de Santo Tomás, el fraile dominico llegado al Perú en 1540, y que pronto se pronunció en contra de los abusos de la encomienda. Fue profesor de teología, especializándose en asuntos relacionados con los indios, a los cuales llegó a conocer estrechamente gracias a sus extensos viajes al interior. Corresponsal

y aliado de Bartolomé de las Casas, Santo Tomás trabajó en un proyecto que permitiría a los indios comprar su libertad a los encomenderos, y posteriormente publicó la primera gramática y lexicón de la lengua quechua en 1560; también participó en un debate itinerante ante público indio y español con Juan Polo de Ondegardo, un defensor de los derechos de los encomenderos. El debate se centró en el papel del encomendero en la sociedad andina posterior a la conquista, proponiendo Santo Tomás un orden colonial administrado con consejos de jefes nativos, en alianza con agentes de la Corona y la Iglesia.

El clero regular, cuyos integrantes se dedicaban básicamente a la evangelización, rápidamente fue superado en número por los seculares, quienes asumieron el papel principal de atender a la creciente población española en el Perú. De esta manera, se congregaron, al igual que sus feligreses, en pueblos y ciudades, evitando por lo general las zonas rurales fuertemente indias en donde los frailes evangelizadores trabajaban salvando almas. A nivel local fundaron parroquias y en sus actividades pastorales fueron notablemente menos idealistas y mucho más decadentes moralmente que sus contrapartes misioneras. Cuando entraban en contacto con la población nativa sobresalieron por extraer pagos excesivos por los servicios eclesiásticos, y a menudo se coludían con el encomendero y el corregidor en la explotación de los indios.

La Corona finalmente confió al clero secular la organización y el manejo global de la Iglesia en el virreinato. En la cima de la organización eclesiástica estaba el arzobispo, quien administraba toda la Iglesia virreinal desde Lima, establecida como arzobispado en 1546. Los obispos supervisaban diócesis u obispados específicos y administraban al Santo Oficio de la Inquisición, fundado en Lima en 1570 para proteger a los colonos de las herejías del protestantismo, del judaísmo y de corrupciones de la moral como las perversiones sexuales. En cuanto a la composición del clero, éste fue mayoritariamente blanco, reclutándose tanto a regulares como a seculares de los sectores peninsular y, con el tiempo, criollo (los hijos de padres españoles nacidos en el Nuevo Mundo) de la población. Los indios fueron generalmente excluidos del clero debido al etnocentrismo hispano, igualmente que los mestizos debido a su presunto origen ilegítimo hasta avanzado el siglo XVIII.

La crisis de la década de 1560

En la década de 1560 España enfrentaba una crisis cada vez más grave en su colonia andina. Si bien la mayoría de las guerras civiles y las rebeliones concluyeron cuando Pedro de La Gasca derrotó y ejecutó a Gonzalo Pizarro en 1548, la expansión del poder de la Corona y la consolidación del Estado seguían incompletas. Más importante es que la temprana economía del saqueo, basada en la extracción de la riqueza y el trabajo excedente de la población india por

parte de los encomenderos, había alcanzado su límite y estaba en decadencia. El ingreso proveniente de las encomiendas disminuía en gran medida debido a la caída demográfica de la población india, así como a la creciente reglamentación por parte de la Corona, que establecía los límites al monto de tributo que podía recolectarse. Además, el oro y el botín incaico se habían repartido y agotado, ya no existían nuevas encomiendas que otorgar, dejando a los inmigrantes recién llegados —que seguían dirigiéndose al Perú— escasas fuentes de ingresos fáciles. Por último, en la década de 1560 la fase temprana de la producción de plata en las vetas superficiales de Potosí y otros lugares había llegado a su fin.

Lo que más alarmó a la Corona en el contexto de la desaceleración económica era la posibilidad de una caída en sus ingresos. La España de los Habsburgos dependía ampliamente de su colonia andina para el financiamiento de sus ambiciosos objetivos geopolíticos en Europa Occidental y el Mediterráneo, pues que se había endeudado fuertemente contra los futuros ingresos americanos. Como lo resume Andrien (1991: 124), «la economía saqueadora de la conquista, establecida luego de 1532, había llegado a sus límites y sólo una drástica revisión política y económica del sistema colonial podía revitalizar el dominio hispano en los Andes».

Tal vez lo más onimoso, tanto desde un punto de vista económico como político, era que la alianza andina en la cual se basaba toda la empresa colonial, mostraba señales de desintegración. La población india, incluso aquellos sectores que inicialmente se habían aliado con los invasores, comenzaba a reconsiderar el arribo de los recién llegados, a quienes originalmente concibió como otros participantes más en una larga lista de contendores andinos por el poder, con los cuales aliarse o acomodarse. El continuo comportamiento violento y rapaz de muchos españoles y los drásticos efectos globales del nuevo ordenamiento colonial, hicieron que muchos nativos modificaran esta percepción. El crecimiento intermitente de las exigencias tributarias, sobre todo de trabajadores para las minas de plata, recaía inexorablemente sobre la economía aldeana que era diezmada cada vez más por el desastre demográfico. Fue en este clima general, que las autoridades españolas de Huamanga descubrieron, en 1564, el renacimiento religioso milenarista conocido como Taki Onqoy, que predicaba el rechazo total de la religión y las costumbres hispanas. El destape de este levantamiento indígena y antiespañol alarmó a las autoridades y al clero en particular, y mostró el peligro potencial de permitir que persistiera el último bastión incaico de Vitcos, en Vilcabamba.

Taki Onqoy

El Taki Onqoy, que literalmente significa «enfermedad de la danza», reflejaba la desmoralización y desilusión generales que impregnaban a los indios de la región de Huamanga tres décadas después de la conquista. Los miembros de la

secta manifestaban su conversión y su renacer espiritual con un repentino ataque en el cual temblaban y bailaban incontrolablemente, a menudo cayéndose y retorciéndose violentamente en el suelo. Los dirigentes del Taki Onqoy sostenían ser mensajeros de los dioses nativos y predicaban que una alianza panandina de las deidades indias destruiría a los cristianos desatando enfermedades y otras catástrofes naturales contra ellos. Según un testigo en la investigación oficial de la herejía emprendida por las autoridades,

> [...]quando el Marqués [Francisco Pizarro] entro en esta tierra, avía Dios vencido a las guacas [espíritus andinos] y los Españoles a los yndios; enpero que agora dava la buelta el mundo, y que Dios y los Españoles quedarían vencidos desta vez y todos los Españoles muertos, y las ciudades dellos anegadas, y que la mar avía de crecer y los avía de aogar, porque dellos no huviese memoria (citado en Spalding 1984: 247 [Cristóbal de Molina. «Relación de la fábulas i ritos de los ingas...». Cristóbal de Molina y Cristóbal de Albornoz, *Fábulas y mitos de los incas*. Edición de Henrique Urbano y Pierre Duviols. Madrid: Historia 16, 1989: 130]).

De este cataclismo o *pachacuti* emergería un nuevo mundo andino, regenerado y purificado, un paraíso libre de los opresores europeos y las enfermedades y la pobreza que ellos habían causado. Como preparación para la aniquilación venidera pedían a los nativos que abandonaran todo contacto con los españoles y renunciaran a toda cooperación con el régimen colonial. De hacerlo así, «no habría enfermedad o muerte, sino salud y el incremento de sus bienes». Wachtel considera que la visión milenaria que el Taki Onqoy tenía de la destrucción y regeneración del mundo, coincidía con la visión cíclica de la historia encarnada en la tradición andina. Se trataba de otra vuelta en el ciclo andino (siendo la última la invasión española), en la cual las «guacas harían otro mundo de nuevo y otras gentes» (Spalding 1984: 248; [citado en Nathan Wachtel, «Rebeliones y milenarismo». Juan M. Ossio A., antologista, *Ideología mesiánica del mundo andino*. Lima: Ignacio Prado Pastor, 1973: 137, n. 71]).

Las autoridades estimaron que de una población total de 150.000 habitantes en Huamanga, tal vez 8.000 fueron participantes activos en la secta del Taki Onqoy. Lo que más temían era la difusión fuera de Huamanga, puesto que los taquiongos llamaban a todos los grupos étnicos a unirse a su resistencia contra los españoles, en una alianza panandina. La invasión hispana había tenido éxito precisamente porque había aprovechado las divisiones estructurales del mundo andino multiétnico, mediante una estrategia de divide y vencerás. Ahora, el Taki Onqoy predicaba la idea revolucionaria de la unificación andina que, al combinarse con los esporádicos brotes guerrilleros del permanente Estado neoinca de Vitcos (Vilcabamba), o con el estallido de la rebelión de los huancas en 1565, tenía el potencial de derribar todo el orden colonial unas tres décadas después de Cajamarca.

Al igual que todos los movimientos sociales de masas, el mensaje del Taki Onqoy cayó en tierra fértil debido al deterioro gradual en las condiciones sociales y económicas del campesinado andino. Informadas las autoridades hispanas se movilizaron rápida y enérgicamente mediante una campaña antiidolátrica auspiciada por la Iglesia para erradicar la herejía antes que expandiera y se tornara violenta. Los líderes del movimiento fueron capturados, golpeados, multados o expulsados de sus comunidades, en una sistemática campaña represiva. Aunque hay cierto desacuerdo entre los investigadores en torno a la extensión del Taki Onqoy (Ramos 1993), su aparición reveló una profunda corriente de descontento entre la población india. De hecho, él añadió una dimensión más a la crisis política y económica general que el ordenamiento colonial enfrentaba en la década de 1560.

El virrey Toledo y sus reformas

Para enfrentar esta crisis y desarrollar un programa de reorganización que condujera al renacimiento de su «tesoro» peruano, la Corona envió en 1569 a uno de sus administradores y diplomáticos más hábiles, el aristocrático Francisco de Toledo, de cincuenta y tres años de edad, como quinto virrey del Perú. Toledo, posteriormente apodado el Solón peruano, tenía similares características a las de los estadistas europeos del siglo XVI, cuyo principal objetivo era expandir el poder y el ámbito del Estado nacional. Esta fue la época del auge del absolutismo real y el nombramiento de Toledo para el Perú por parte de Felipe II seguía la noción de «todo el poder al rey». En consecuencia, los objetivos de Toledo en el Perú eran engrandecer el poder hispano consolidando el gobierno virreinal y revivir el flujo de plata andina al tesoro metropolitano. Específicamente, su misión era frenar el descontento indio, poner en vereda a los encomenderos y reorganizar la economía.

Para alcanzar estos objetivos, Toledo, basándose en un tratado sobre el *Gobierno del Perú*, escrito en 1567 por el jurista español Juan de Matienzo, preparó un plan de reformas que se centraba en tres cambios fundamentales: (1) la concentración de la población india en grandes asentamientos denominados reducciones; (2) la regularización y monetización del sistema tributario; y (3) la creación de un sistema de reclutamiento de trabajo forzado para sectores cruciales de la economía, las minas de plata en particular. Aunque, como veremos, cada una de estas reformas tocaba diversos problemas, juntas buscaban resolver lo que para Toledo era el principal obstáculo para el desarrollo económico de la colonia: la movilización de la mano de obra. Según él, la población india continuaba firmemente la práctica de sus modos de producción e intercambios no monetarios, de subsistencia y de trueque anteriores a la conquista, al margen y mayormente divorciados del sector hispano de la economía en rápida expansión del cual dependía la futura prosperidad y estabilidad política de la empresa

colonial, Y para ello, dicho sector requería de una fuente constante y confiable de mano de obra.

A su arribo al Perú, entre 1570 y 1575, Toledo emprendió una extensa y prolongada visita a toda la colonia durante cinco años, viajando lenta y ceremoniosamente con una falange de setenta juristas, clérigos y criados. La visita estaba diseñada no sólo para evaluar las condiciones locales, sino para destacar su autoridad por todo el reino. Conocedor de la anterior conmoción del Taki Onqoy, le fue fácil percibir la amenaza potencial que el Estado neoinca de Vitcos planteaba para la colonia. Envió una fuerza expedicionaria en contra del remoto bastión inca y, después de una ardua campaña, logró vencerlo y capturar a Túpac Amaru, el Inca reinante. Cuarenta años después de Cajamarca, Toledo final y formalmente puso fin a la conquista ejecutando al último Inca en una ceremonia pública, en la plaza principal del Cuzco, en 1572. En palabras de Castro-Klarén («Lima: A Blurred Centrality» ms, p. 6), «[c]on la ejecución de Túpac Amaru, el Cuzco quedó descentrado y todos los ojos del virreinato tuvieron que volverse hacia Lima como la condensación del nuevo juego de poder».

Al mismo tiempo, Toledo montó una campaña concertada para desacreditar al imperio incaico a ojos de los nativos, legitimando y consolidando aún más el dominio español. Se nombró una comisión para que investigara al imperio y presentara a los Incas como tiranos y prolongados opresores de las masas andinas por largo tiempo. El informe final de la comisión reunió evidencias para mostrarlos como usurpadores de la tierra que esclavizaban al pueblo. El objetivo era justificar moralmente la invasión española presentándola como una liberación de las masas andinas de la opresión inca, y por lo tanto del demonio y del mismísimo mal.

Aún más, en la mente de Toledo y otros, la herejía del Taki Onqoy había mostrado plenamente el grado en el que las religiones nativas continuaban floreciendo entre los indios. En el contexto de rebelión general e incertidumbre antes del arribo de Toledo, la persistencia de las prácticas religiosas andinas constituía un desafío claramente subversivo y potencialmente peligroso para la prolongación del dominio colonial europeo. De esta manera, el nuevo virrey ordenó a las autoridades, eclesiásticas y estatales, iniciar «la extirpación de las idolatrías y hechicerías, y la neutralización de los sacerdotes indios de manera tal que la doctrina del Evangelio pueda ser plantada en tierra preparada para recibirla» (citado en Spalding 1984: 249).

La parte del león de esta campaña le tocó a la burocracia eclesiástica, cuya vanguardia estaba conformada por los doctrineros, que en 1572 atendían unas 451 parroquias indias en todo el virreinato (excluyendo al Alto Perú). En muchos sentidos estos doctrineros, que estaban investidos con el considerable poder del púlpito, el confesionario y los sacramentos, eran los perros guardianes del sistema colonial. Como eran los oficiales reales que tenían un vínculo más

estrecho y regular con la población nativa, los doctrineros se hallaban en una posición excepcional para realizar tales campañas, así como para descubrir otras actividades potencialmente subversivas en las comunidades, como el Taki Onqoy. Spalding (1984: 265) encontró semejanzas entre estas campañas en contra de las creencias y ceremonias nativas llevadas a cabo en las aldeas por los doctrineros y la Inquisición, definiéndolas como un «asunto brutal que esencialmente eran un acto de fe medieval». En efecto, la aceptación y la práctica del cristianismo por parte de la población nativa en la segunda mitad del siglo pasó a ser cada vez más una especie de prueba de la lealtad al régimen colonial. Por el contrario, su rechazo a favor de las creencias y rituales andinos tradicionales llegó a verse como una señal de deslealtad y subversión. Rodeados como estaban por un «mar de indios», no resulta difícil comprender por qué los españoles constantemente realizaban estas campañas a lo largo de la siguiente centuria.

Con la finalidad de facilitar las políticas de control social, así como la movilización de la mano de obra para la economía colonial, el virrey Toledo ordenó, como la siguiente medida en su programa de reforma, la realización de un censo de todos los indios del Perú entre los dieciocho y los cincuenta años. Los resultados, que tomaron algún tiempo compilar, mostraron una población laboral indígena de 1.677.697 hombres, pertenecientes a 614 *ayllus*. Con esta información Toledo decretó el reasentamiento y concentración de los indios, desde sus aldeas nucleadas y dispersas a reducciones o pueblos más grandes. El objetivo del reasentamiento masivo y forzoso, era establecer el control estatal directo y facilitar la cristianización de la población nativa, al mismo tiempo que mejorar el cobro del tributo y la asignación de trabajadores. En palabras del virrey, «la reducción de los indios a pueblos y doctrinas hace que sean más fáciles de manejar, de gobernar y de recibir preparación religiosa» (citado en Spalding 1984: 214).

Si la política de las reducciones, de «racionalizar» los patrones de asentamiento indígenas, parecía ser bastante lógica para los españoles, para los andinos fue exactamente lo opuesto, y en realidad fue eminentemente destructiva. Para empezar, era un golpe a las redes de parentesco dispersas y al patrón de archipiélago de los asentamientos andinos, que ubicaba pequeños caseríos «racionalmente» insertados en todo espacio disponible en el paisaje sumamente vertical y variado de los Andes, con sus múltiples zonas climáticas y productivas. Por otro lado, al concentrar la población en asentamientos relativamente grandes, la exponía a un mayor peligro de parte de las pandemias que bajaban del norte con regularidad durante todo el siglo XVI.

Al plan de concentración subyacía la política española de colonización en las Indias de crear dos «repúblicas», una de europeos y otra de indios. Si bien fue creada ostensiblemente para proteger a la población india de su explotación por parte de los colonos, la «república de indios se convirtió en el eufemismo de un

régimen de destribalización, regimentación, cristianización, tributo y trabajo forzado» (Richard Morse, citado en Bethell 1984: 82). El plan ordenaba la «reducción» de entre veinte y cien grupos étnicos o aldeas en dos o tres asentamientos nuevos, construidos según el plano de la cuadrícula. La supervisión general de estos nuevos pueblos indígenas fue asignada a los corregidores de indios (magistrados nombrados por la Corona a nivel provincial para supervisar a los indígenas). Ellos tenían a su cargo la administración general de justicia, el control de las relaciones comerciales entre indios y españoles, y el cobro del tributo. Les ayudaban los *curacas*, miembros de la élite nativa a quienes los españoles convirtieron, como ya vimos, en una nobleza provincial hereditaria vinculada con la burocracia estatal.

La reubicación de la población nativa en las reducciones bajo el mando del corregidor, fue el toque de difuntos del sistema de encomienda, al transferir el control efectivo del trabajo indio del encomendero al Estado. Al mismo tiempo, Toledo tomó medidas para eliminar dicho sistema, cooptando a los encomenderos restantes con corregimientos y otros cargos. En palabras de un historiador, «los corregidores sirvieron como agentes políticos o económicos locales del Estado, el cual retiró el control efectivo del campo de los encomenderos de mentalidad independiente» (Andrien 1991: 125).

Los corregidores usaron su cargo de la misma manera que los encomenderos, a quienes reemplazaron: para acumular riquezas, estableciendo alianzas de interés mutuo con la élite local y regional. Trabajando estrechamente con estas élites —*curacas*, funcionarios indios, funcionarios municipales, curas doctrineros, hacendados, comerciantes, mineros y otros, además de sus subordinados indios y mestizos—, los corregidores estaban en la cima de un grupo de poder local que —con su fácil acceso a los funcionarios e instituciones estatales y a la élite urbana— pasó a dominar la sociedad rural andina. Aún más, las alianzas forjadas entre estas élites quedaron muy a menudo fortalecidas por vínculos mutuos de parentesco, de amistad y por las relaciones patrón-cliente, tan omnipresentes en todo el mundo hispano.

Además de facilitar el máximo grado de control y explotación de la población nativa por parte del régimen español, estos nuevos pueblos indígenas —las reducciones de la «república de indios» toledana— se convirtieron también en puntos fundamentales de la transformación cultural de la población india. Fue en ellos donde la Iglesia instauró su presencia suprema y donde el clero evangelizador establecía estrechos vínculos con los nativos cotidianamente. Utilizando las ceremonias públicas y los sacramentos como elementos legitimadores, la Iglesia, más que nadie, incorporó a los pueblos andinos como súbditos legítimos del rey.

En la segunda gran reforma toledana, el virrey buscó regular el sistema tributario convirtiéndolo en una capitación. Toledo estableció una tasa fija basada en la capacidad de pago de un repartimiento, lo que se determinaba con un

censo periódico de sus recursos y población cada dos a cinco años. El tributo se calculaba entonces sobre la base de este censo y se gravaba a todos los hombres aptos entre dieciocho y cincuenta años de edad. Aún más importante fue que Toledo convirtiera el pago del tributo de especie a moneda.

La monetización del sistema tributario obligó al campesinado indígena a vender sus productos en el mercado por moneda (o entregarlos al corregidor, quien teóricamente fijaba el precio según su justo valor de mercado), o a buscar un trabajo asalariado afuera de la comunidad, en el sector hispano en expansión de la economía, para así poder pagar sus obligaciones tributarias con el Estado en efectivo (plata). De este modo, Toledo estableció un mecanismo clave no sólo para desplazar a la población nativa hacia la economía de mercado española, sino además para dinamizar la circulación de mano de obra entre los sectores indígena e hispano de la economía. Ello aseguraría, en teoría, una provisión adecuada de trabajadores para los sectores urbano, de transporte, minero, manufacturero (los obrajes) y agrario (las haciendas).

Es difícil estimar el monto exacto del tributo gravado, pero se ha calculado aproximadamente entre cuatro y siete pesos por persona. Si bien éste parece ser un monto relativamente pequeño a extraerse de cada unidad doméstica campesina, el agregado significaba una transferencia sustancial de ingresos del sector indígena de la economía al europeo. La distribución del ingreso en efectivo del tributo revela el uso que se le dio: salarios de funcionarios provinciales entre el trece y veinte y seis por ciento, salarios de doctrineros el veinte por ciento; salarios de los *curacas* entre el cuatro y diez por ciento, y para los encomenderos (antes de la estatización) entre el cuarenta y sesenta por ciento.

La tercera gran reforma instituida por el nuevo virrey consistió en una leva, en continua rotación, de los trabajadores indios de las reducciones, para que laboraran en las minas de plata de Perú y el Alto Perú (Bolivia). En teoría, este sistema de trabajo forzado, denominado mita en español (y *mit'a* en quechua, por «turno»), comprendía hasta una séptima parte de toda la población masculina hábil, la que cada siete años trabajaría hasta cuatro meses en las minas por un salario establecido. Los indios debían reclutarse en las dieciséis provincias serranas que se extendían desde el Cuzco, al sur peruano, hasta Bolivia. En la práctica, el porcentaje reclutado por los agentes del corregidor era generalmente más alto y su estancia en las minas más prolongada.

En la mente de las indios, esta nueva mita hispana recordaba la antigua práctica incaica, diseñada para las obras públicas. Sin embargo, existía una diferencia crucial. En el sistema incaico, la mita era un elemento del contrato social más amplio que implicaba beneficios recíprocos entre la comunidad y el Estado. La versión española, en cambio, era un mecanismo colonial básicamente explotador, sin ningún beneficio concreto de reciprocidad entre el Estado y la comunidad.

Aunque la mita buscaba principalmente asegurar una provisión regular de trabajadores nativos al sector minero, que había experimentado una escasez de mano de obra en la década de 1560, estuvo dirigida también a otras actividades consideradas importantes para el Estado. Dichas actividades incluían el trabajo en las haciendas productoras de alimentos para la capital virreinal o en empresas que brindaban servicios (correo y transporte) y lujos a la élite. Por ejemplo, la mita de Huarochirí abastecía de trabajadores a las minas del Nuevo Potosí y a las haciendas costeñas cerca de Lima para el mantenimiento y los servicios en los tambos en el camino de Lima a Cuzco y Potosí; así como para el corte y transporte de bloques de hielo de los glaciares con fines de refrigeración en Lima.

Al monetarizar y estatizar el sistema tributario y crear la mita, administrada por el recién nombrado corregidor de indios, Toledo había logrado un avance importante en el afinamiento del sistema de expropiación del excedente nativo en el que se basaba íntegramente el sistema colonial. Este proceso de apropiación fue mejorado más aún con una práctica notoria que, si bien era técnicamente ilegal y desaprobada por Toledo, fue ampliamente ejercida desde el siglo XVI por todos los integrantes de la élite colonial, y por los corregidores en particular: el repartimiento o reparto de mercancías, una venta forzosa de bienes a la población india.

Puesto que los gastos del cargo de corregidor superaban ampliamente su salario estatal, o su capacidad de usarlo para obtener ganancias privadas, fue práctica común que estos vendieran bienes a los indios. En efecto, los corregidores se convirtieron en mercaderes que recurriendo a sus poderes administrativos (judiciales y policiales) obligaban a los indios bajo su jurisdicción a comprar artículos europeos a precios fijos y altos. Estos productos incluían desde artículos útiles, tales como mulas, herramientas de hierro y cuchillos de acero, a otros de valor cuestionable para los hogares indígenas, como lienzos importados, piezas tejidas con lana, textiles y medias de seda.

Aunque un reciente estudio revisionista (Baskes 1996) muestra al reparto en México como una práctica más benigna y voluntaria, el peso de las evidencias historiográficas en los Andes lo retratan en términos fuertemente negativos. Morse sostuvo que fue una forma de extorsión: un «comercio para el control y la expoliación», que incrementó aún más el ingreso de los corregidores y demás integrantes de la élite colonial que lo practicaban (curas locales, hacendados, mineros y hasta integrantes de la élite curacal indígena). En el esquema mayor de la economía del saqueo, el reparto tenía la función real de dinamizar la circulación de bienes y efectivo entre los sectores indígena y europeo de una economía de mercado limitada. Si bien era ilegal, su importancia para el ordenamiento colonial fue reconocida y justificada por un virrey del siglo XVIII, quien sostuvo que «como es bien sabido que las provincias no pueden mantenerse a sí mismas sin un reparto, ni tampoco habría quien administre justicia en ellas, estos han

pasado a ser tolerados» (citado por Spalding en Collier *et al.* 1982: 333). Sin embargo, para entonces su volumen, en términos tanto del monto absoluto de dinero extorsionado, como de la incapacidad relativa de los indios para pagar la cantidad exigida, se había incrementado drásticamente desde el siglo XVI, provocando, como veremos, un fuerte trastorno político.

En conjunto, las reformas del ordenamiento colonial de Toledo tuvieron una importancia de largo alcance, tanto económica como políticamente. En primer lugar, la monetización del tributo, la creación de la mita y la práctica del reparto de mercancías incrementaron sustancialmente la capacidad del Estado y la sociedad coloniales para apropiarse de la producción y del trabajo excedente de los indios. En efecto, estos gravámenes los obligaron a otorgar parte de su trabajo y producción al sector europeo de la economía. En segundo lugar, el trabajo de la mit'a, junto con la inversión en nueva tecnología e infraestructura ordenada para Potosí, contribuyeron a un incremento sustancial en la producción peruana de plata. Dados los poderosos efectos multiplicadores de la minería de plata, este incremento a su vez generó una amplia expansión económica interna en el sector hispano de la economía, que también fue posible gracias a la mayor disponibilidad del trabajo indígena.

A nivel político, la naturaleza patrimonial del Estado quedó fortalecida gracias a las reformas toledanas. El incremento en los ingresos generados por el tributo, juntamente con el quinto real de la producción de la plata en crecimiento, se convirtieron en la base financiera del ejercicio del patronazgo por parte de la Corona. Este era un método tradicional del gobierno español por el cual los cargos políticos se repartían entre súbditos leales y dignos, asegurando un control real y efectivo del cuerpo político.

El éxito económico en el nuevo ordenamiento colonial dependía ahora tanto de la política como de la habilidad empresarial, ya que el Estado controlaba el acceso al factor clave de la producción colonial: la mano de obra indígena. En palabras de Spalding (1984: 167), «el poder del nombramiento a un cargo, juntamente con la autoridad para asignar el acceso al trabajo y bienes de la población indígena, pasó a ser un determinante fundamental de la posición social y económica de los integrantes de la sociedad europea en el Perú». Además, «al convertir al Estado en la fuente más importante de acceso al excedente generado por la población andina... el sistema colonial asignó a la esfera política un grado de control extremo sobre el desarrollo [económico] del virreinato». Para quienes sostienen, como Hernando de Soto (*El otro sendero*, 1986), que el actual subdesarrollo peruano se debe al legado duradero del Estado neomercantilista y patrimonial (esto esa la excesiva regulación, intervención y control de la economía por parte del Estado), dicho Estado encuentra aquí sus orígenes.

No obstante la evidente dureza de este nuevo sistema colonial y las penurias individuales que impuso a la población indígena en los Andes, ésta no fue del todo pasiva ni sumisa frente a su implantación. Por el contrario, los nativos casi siempre resistieron, se adaptaron y sobrevivieron al nuevo régimen con una admirable tenacidad andina ante la adversidad. También fueron ayudados en su supervivencia por ciertas tendencias favorables que disminuyeron las presiones extractivas sobre sus recursos. Por ejemplo, si bien el descenso poblacional erosionaba la mano de obra de la comunidad, a su vez reducía las demandas internas sobre sus propios recursos y su producción. Por otro lado, a los intereses del Estado o de la élite, que sistemáticamente extraían la riqueza y trabajo excedente de la comunidad india, no les convenía destruir su autosuficiencia y capacidad esencial para reproducirse.

En consecuencia, por razones prácticas y morales, el Estado fijaba límites estatutarios y reguladores a la expropiación colonial. Estas leyes permitían a los nativos apelar en las cortes en busca de un alivio a las exacciones que superaban a la población y a los recursos de la comunidad, otorgándoles la posibilidad de cuestionar los intentos efectuados por los colonos para usurpar sus tierras. Así, en un lapso notablemente breve, los nativos se hicieron diestros en el recurso a las instituciones legales españolas para defender sus intereses. También encontraron formas creativas de producir, comerciar y participar en la nueva economía comercial, sirviendo las ganancias para fortalecer la autonomía relativa de sus comunidades. Por ejemplo, las ganancias procedentes del arriendo de las tierras comunales pasaban a la caja comunal y podían usarse para pagar el tributo o pagar su reemplazo en la mit'a, reduciendo así o eliminando las pesadas cargas coloniales. De esta forma, los indios lograron de diversas maneras convertir la adversidad en ventaja y sobrevivir a las presiones inexorables, y a menudo brutales, impuestas por sus nuevos amos.

Aunque muchos historiadores mostraban un proceso social estático, determinista y unilateral de opresión colonial, en el que los indios aceptaban y se sometían de manera pasiva y fatalista a los invasores, nuevos estudios dejan traslucir una dinámica social más compleja de toma y daca, acomodación y resistencia, adaptación y compromiso en las relaciones entre indios y europeos en los Andes. Es más, podemos ver que cuando las relaciones de poder, que surgieron en el núcleo de la economía y la formación política andina, se fraccionaron en intereses opuestos, la población nativa rápidamente aprovechó la oportunidad para promover sus intereses, muchas veces con gran éxito.

Un buen ejemplo de este proceso en el macronivel fue la lucha por la justicia librada por elementos de la Iglesia y el Estado en beneficio de la población india, contra los intereses coloniales interesados en esclavizar a los nativos. Producto de esta lucha fue la eliminación de la encomienda y el desarrollo de una extensa

legislación social para proteger a la población andina de los excesos de la explotación colonial. Gracias a esta legislación los nativos se volvieron diestros en apelar en las cortes y tribunales de la sociedad colonial andina. «Los nativos aprovecharon al máximo la oportunidad y embrollaron las prácticas explotadoras de los colonos con sentencias judiciales laberínticas, cuyo resultado final era a menudo incierto» (Stern 1982: 115). De esta manera, los conflictos a nivel local entre las facciones de la élite, en torno al trato y el uso de la población nativa, les ofreció una posibilidad a través de la que podían defenderse de uno u otro abuso. En este contexto se alineaban a un lado u otro y a cambio podían solicitar ayuda en sus procesos judiciales.

Por admirable que el extenso código de legislación social hispana colonial en defensa de la población indígena resulte en retrospectiva, su proclamación tuvo un lado negativo. Por eficaz que fuera esta legislación y el proceso judicial para suavizar las cargas de la explotación, servían finalmente para fortalecer el sistema colonial contra todo desafío abierto, radical y revolucionario de la población oprimida. Asi pues, «el establecimiento de un sistema de justicia que funcionaba, y que a veces fallaba a favor de los nativos en detrimento de sus explotadores, no justifica el legado colonial. La justicia colonial jugó un papel crucial —tal vez indispensable— en la subyugación de los nativos a una experiencia explotadora que duró por siglos. Lejos de rechazar la experiencia explotadora, la 'justicia' la afianzó en el tejido de la sociedad colonial andina» (Stern, en Collier *et al.* 1982: 293). Y en ningún lugar era más visible la naturaleza cruel y brutal de la explotación virreinal que en las grandes minas de plata.

Las minas de plata

Después del impulso inicial en la producción minera luego de su descubrimiento, la producción de plata de Potosí cayó a medida que las vetas cercanas a la superficie se agotaban. Conforme las ganancias y salarios caían, también lo hacía la provisión de trabajadores indios, quienes descubrieron que el trabajo de extraer el mineral era cada vez más oneroso. El descenso en los ingresos y los informes sobre la escasez de mano de obra, entre otros factores, fueron un catalizador que llevó al rey a nombrar a Toledo para que reorganizara las minas y la economía, con miras a incrementar la renta de la plata. Desde la perspectiva de la Corona, «¿cómo podía el rey salvaguardar el poder de España en Europa, combatir a los franceses, repeler a los turcos y prepararse para la guerra con Inglaterra, si una fuente primaria del tesoro americano se agotaba?» (Larson 1988: 50).

Toledo concluyó que parte del problema de la producción decreciente de las minas se debía a una tecnología inadecuada. Al informarse acerca del nuevo proceso de patio y del descubrimiento de las minas de mercurio en Huancavelica,

autorizó la construcción de refinerías, conocidas como ingenios, en las que podía realizarse el proceso de amalgama aplicando mercurio para extraer químicamente la plata del mineral. De igual manera, aprobó el desarrollo de un sistema de suministro de agua que involucraba nuevas represas y canales para que brindara la fuerza necesaria para mover los ingenios, cuyo número subió a setenta y cinco a finales de siglo. El costo de estas inversiones, unos 3,5 millones de pesos, debía ser asumido por los dueños de minas; a cambio, de ello el Estado proporcionaría el mercurio y la mano de obra necesarios. La Corona cobraría el quinto real —una ganancia sobre el mercurio vendido en Potosí— y otras rentas fiscales, en tanto que los mineros retenían las cuatro quintas partes de la producción total. Para garantizar el control y una provisión constante de mercurio al Cerro Rico, Toledo expropió las minas de Huancavelica entregándolas posteriormente en concesiones sobre su producción a particulares.

El nuevo proceso de refinamiento del patio, introducido en Potosí en 1571, transformó la minería de la plata en un «gran negocio» al desplazar el poder de los productores agrícolas, muchos de ellos indios, a los relativamente pocos propietarios de las nuevas refinerías e ingenios (setenta y cinco de quinientos dueños de minas en 1585) y sus comerciantes fiadores. El resultado de este proceso fue la creación de una nueva élite mezcla de dueños de ingenio y mercaderes de plata, que llegaron a dominar la producción de este metal en los Andes.

Asimismo, Toledo se dio cuenta de que sin una fuente constante, confiable y barata de mano de obra, la minería (y la economía en general) no avanzaría lo suficiente. Como ya se señaló, para él tanto el mercado libre como el sistema de encomienda funcionaban imperfectamente en la movilización de suficientes operarios indios que realizaran las tareas de construcción urbana y de expansión agrícola, y las del sector minero. Para resolver este problema, Toledo estableció el sistema de reclutamiento laboral de la mita. En efecto, el virrey creó un subsidio especial para los mineros de Potosí al darles una provisión disciplinada y regular de trabajadores extraídos de las comunidades vecinas cuyo costo era aproximadamente la tercera parte del de un *minga*, o trabajador asalariado libre. Es más, este subsidio no incluía los costos de reproducción del trabajador, que era «costeado» íntegramente por la comunidad y no por el «capital», esto es, por los propietarios de minas.

Los primeros mitayos llegaron a Potosí en 1573, procedentes de las zonas vecinas. El área de reclutamiento para su mita fue ampliada inmensamente hasta cubrir un área de más de 648 mil km^2, comprendiendo buena parte del sur peruano y la actual Bolivia. Potosí captaba unos mitayos al año, o alrededor de cuatro mil quinientos que trabajaban una semana y tenían dos libres en cualquier momento. Si contamos a sus familias, que viajaban con ellos, tenemos que unas

cincuenta mil personas entraban y salían de allí cada año. El salario de los mitayos variaba en las minas, dependiendo del trabajo, entre 2,75 a 3,5 reales diarios, pero no incluía los fuertes gastos de viaje a través de grandes distancias, desde las comunidades a las minas (hasta dos meses y mil kilómetros). La práctica de la mit'a brindó amplias evidencias a los defensores de la llamada Leyenda Negra de la colonización española.

La mita tuvo un impacto particularmente negativo sobre las comunidades indígenas. A causa de ella, las comunidades enviaban trabajadores físicamente hábiles en un momento en el que experimentaban los efectos del colapso demográfico. De igual manera, hizo que muchos indios huyeran de sus comunidades para evadirla. Se ha estimado que para el siglo XVIII, entre cuarenta y sesenta por ciento de la población del arzobispado del Cuzco estaba conformada por forasteros, o emigrantes indios que habían dejado sus comunidades y ya no estaban sujetos a la mit'a. La producción de subsistencia disminuyó al existir menos trabajadores disponibles para trabajar los campos, extendiéndose la desnutrición y la hambruna, e intensificándose la letalidad de las enfermedades.

Si el impacto de la mita sobre las comunidades fue devastador, su efecto sobre los mitayos individuales fue igualmente destructivo. Abundaron los abusos y la mortalidad se disparó. Generalmente, se les obligaba a trabajar más de lo que les correspondía, con salarios inferiores a lo fijado por ley y en condiciones generalmente duras. Según un historiador, «la convocatoria a trabajar en las minas llegó a ser percibida como una virtual sentencia de muerte». Las peores condiciones prevalecieron en las minas de mercurio de Huancavelica, que contaban con dos mil doscientos mitayos en la década de 1620, es decir una sexta parte de la de Potosí. Allí, «las incomodidades y peligros sufridos por todos los mineros —la semioscuridad y el aire abombado por los cuerpos sudorosos y las heces humanas, el humo de pabilo y los moldes y polvos tóxicos— se agravaban con el envenenamiento con mercurio y su curso implacable y espantoso». En Potosí, «la labor más agotadora en las minas era la de llevar en la espalda una gran y pesada cesta de mineral, subiendo por miles de pies a través de túneles angostos y empinados, cogiendo sogas y encontrando dónde pisar en troncos muescados, luchando como las hormigas por llegar a la boca de la mina, donde el cuerpo exhausto y sudoroso era azotado por los vientos gélidos al salir» (Padden 1975: XX). Tres cuartas partes de los mitayos trabajaban en estas condiciones, en tanto que los indios libres sistemáticamente las evitaban. Aunque el trabajo mitayo fue utilizado por toda la sociedad colonial, no alcanzó en ningún lugar la misma magnitud que en la minería.

Hay que señalar que los mitayos conformaban una incuestionable minoría en la fuerza laboral de Potosí, pero debido a las condiciones verdaderamente

inhumanas en las que trabajaron tendieron a atraer la mayor parte de la atención de los observadores contemporáneos y de los historiadores posteriores. En realidad, en Potosí existió un sistema dual de trabajo que constaba de mitayos y trabajadores libres. En 1603, por ejemplo, sólo 4.500 de unos 11.000 a 12.000 mineros potosinos eran mitayos, siendo los demás *mingas (trabajadores libres),* aunque según Bakewell, algunos de ellos podrían haber sido mitayos en su día libre.

En suma, las reformas mineras de Toledo dinamizaron la industria minera en Potosí y otros lugares, y perfeccionaron la fuente de la cual la Corona dependió durante siglos. Con la introducción del proceso de la amalgama en patios, los trabajadores mitayos y otras reformas, la producción nuevamente se elevó casi seis veces entre 1575 y 1600, produciéndose en Potosí casi la mitad de toda la plata hispanoamericana.

Capítulo III

Transición y consolidación del orden colonial, 1600-1730

El último cuarto del siglo XVI vio, entonces, un renacimiento y una sextuplicación de la producción de plata. Las reformas de Toledo habían convertido al virreinato del Perú en el más grande productor de este metal en las colonias, rindiendo casi la mitad de la producción de toda Hispanoamérica. Sin embargo, este extraordinario periodo de renacimiento minero no duraría. A partir de 1600, la producción de plata del virreinato inició una larga caída que se prolongaría por más de un siglo. El impacto sobre la economía virreinal de este descenso de duración secular ha sido objeto de un debate considerable en la historiografía colonial.

La interpretación tradicional de esta economía fue que la producción de plata en Potosí constituyó una economía de «enclave», fluyendo la riqueza excedente hacia fuera, a la metrópoli, reinvirtiéndose poco o ningún efecto auxiliar o «multiplicador» del capital (o salarios y la demanda de bienes producidos localmente) en la economía local para dinamizar la producción interna. Según esta posición, el principal estímulo económico de la plata de Potosí se produjo en el comercio trasatlántico, en el que se intercambiaba por insumos importados (capital o maquinarias con las cuales manejar las minas) y artículos de lujo manufacturados en España y Europa, para ser consumidos por la pequeña élite colonial. De esta manera, el Perú se convirtió en una clásica economía «dependiente», desprovista de producción local y dependiente de la exportación de materias primas (plata) y la importación de productos manufacturados. Más tarde, con la decadencia de la producción de plata en el siglo XVII, el comercio trasatlántico basado en este intercambio colapsó y el Perú entró en un periodo de depresión que duraría un siglo.

La visión revisionista del desarrollo económico colonial muestra una panorama diferente. El historiador económico Carlos Sempat Assadourian sostuvo que una parte considerable de capital de la producción «dominante» de plata no fue enviado a la metrópoli, permaneciendo más bien en el Perú. Ello estimuló el desarrollo de lo que él llama el «espacio económico» andino, dedicado

a la producción e intercambio internos. La tesis de Assadourian fue llevada un paso más allá por Kenneth Andrien, quien sostuvo que en lugar de caer en una depresión debido al descenso en la producción de plata en el siglo XVII, la economía peruana experimentó más bien una reestructuración, desplazándose de la exportación de plata y el comercio trasatlántico a una producción más diversificada, autosuficiente y regionalizada. Ambos historiadores restan importancia a la imagen general de la colonia como un «enclave» y destacan, más bien, la capacidad del Perú en los siglos XVI y XVII para una producción e intercambio interno considerables.

La dinamización de la economía interna

A comienzos de siglo XVII, Potosí, en un extremo del principal «polo de crecimiento» colonial que se extendía desde el centro minero hasta su terminal en Lima-Callao, había alcanzado una población de cien mil personas. La mayor parte de los abastecimientos y provisiones de esta población minera venían de las zonas productivas andinas vecinas. Algunas de ellas estaban relativamente cerca. Por ejemplo, en 1603 las recuas de mulas llevaban a la ciudad trigo y harina (para el pan) y maíz (para la chicha) por un valor de más de dos millones de pesos. Para ese entonces, solamente la población india de Potosí consumía un estimado de un millón de jarras de chicha anualmente. Buena parte de estas provisiones procedían de la rica región agrícola del vecino valle de Cochabamba, principal zona productora de cereales del Alto Perú.

Cuando estas zonas ya no lograban satisfacer la creciente demanda de Potosí por sus limitaciones espaciales, su radio productivo se amplió para incluir otras regiones, mercados y productos más distantes. Por ejemplo, Tucumán y Córdoba, en el norte Argentino, se especializaron en la crianza y provisión de mulas, que era el principal medio con que transportar bienes hacia y de Potosí. De igual manera, el centro de Chile se convirtió en una gran zona productora de trigo que exportaba no sólo a Potosí sino también a Lima y a la costa, en particular después del devastador terremoto de 1687. Otros productos andinos eran la coca, la hierba mate, el chuño y el charqui.

Por último, deseo mencionar los obrajes textiles que surgieron en Cuzco, Ayacucho y al norte como Quito. Estos obrajes producían ropa hecha con lana barata y poco elaborada, suministrada por los rebaños de las alturas, para el floreciente mercado laboral de Potosí. Fue de esta manera como el virreinato peruano, desde Ecuador al norte y por el sur hasta la parte septentrional de Argentina y Chile central, quedó articulado o fue atraído a un único espacio económico racionalmente organizado en torno al principal «polo de crecimiento peruano» de Potosí-Lima.

Assadourian estima que estos y otros artículos andinos consumían aproximadamente la mitad de la plata producida en Potosí. Es decir, el metal precioso de este centro minero usado para comprar productos andinos en todo el virreinato ascendía aproximadamente a un sesenta-setenta por ciento del valor del flujo internacional de exportaciones de plata y manufacturas importadas que unían al Perú con Europa. Para Assadourian, este tipo de producción interna muestra que el desarrollo andino no puede caracterizarse como una economía de enclave, o concebirse como un pálido reflejo de los intereses comerciales metropolitanos. Más bien, un dinámico tráfico y producción internos surgieron para satisfacer la demanda popular de alimentos y bienes de consumo de bajo costo de los indios urbanizados y los mestizos que trabajaban en las minas de Potosí. De hecho, Assadourian mostró que el valor de este mercado popular era bastante mayor que el mercado de élite para los bienes europeos, importados para cubrir la demanda de los consumidores de la más acaudalada y pequeña población española y criolla.

Todos los segmentos de la población colonial participaron en el desarrollo de esta economía interna andina, incluso los indios. Lejos de resistir las nuevas fuerzas comerciales introducidas por los españoles y refugiarse en la autarquía comunal en defensa de la subsistencia y la integridad corporativa, muchos nativos andinos participaron cada vez más en los mercados locales. En el ámbito de la élite discutí ya el caso de don Diego Caqui, el hijo de un *curaca* que se convirtió en un empresario exitoso en Tacna. Para defender su autonomía e independencia, algunas comunidades producían cultivos comerciales para el mercado, adquiriendo el dinero necesario para litigar por derechos sobre las tierras o «arrendar» trabajadores para evitar el trabajo en la mita. Otras aldeas adoptaron la crianza de ganado para satisfacer la creciente demanda urbana, en tanto que otras más arrendaban tierras a los españoles, que estaban ansiosos por producir para el mismo mercado.

En consecuencia, algunos miembros de la sociedad india comenzaron a acumular tierras e ingresos más allá de sus necesidades de subsistencia, y a emerger junto a su contraparte europea en la economía de mercado andina. Esta situación llevó a Spalding a sugerir que, a medida que evolucionaba y maduraba, «la economía colonial del Perú no fue un sistema dual, sino un sistema económico integrado. En él la fuerza de trabajo y buena parte del volumen real de bienes que circulaban en el virreinato eran extraídos de las comunidades indígenas» (Spalding en Collier *et al.* 1982: 339). Stern (1995: 84), quien efectuó investigaciones pioneras en este campo, sospecha que la respuesta andina a las nuevas fuerzas comerciales reflejó «las genuinas ambigüedades y ambivalencias de la vida colonial, ... un intento de prevenir las pérdidas, o más exactamente de proteger el bienestar propio desarrollando relaciones socioeconómicas diversas y a

veces deliberadamente ambiguas, que posteriormente podían usarse, según fuera necesario, ya fuera en una dirección 'andina tradicional' o 'colonial europea'».

Si bien algunos indios buscaron usar creativamente el nuevo orden comercial en provecho propio, otros recurrieron a los ya probados principios andinos para apuntalar su posición posterior a la conquista. De esta manera, el pueblo lupaca intensificó el uso del tradicional trueque con otros grupos étnicos a orillas del lago Titicaca, para asegurar provisiones de chuño (papa secada helándola) y quinua para sus propias comunidades. Otros grupos reconstruyeron las microeconomías del «archipiélago vertical» para contrarrestar o «derrotar» el sistema toledano de las reducciones.

Al margen de las respuestas indígenas, el alcance evidente de este sistema comercial en evolución cuestiona el estilo tradicional de una aristocracia española que vivía parasitariamente a expensas de la producción de la masa indígena y desdeñaba la inversión en la producción y el comercio. La élite colonial generalmente lucía su riqueza en un suntuoso estilo de vida de consumo conspicuo. Este comportamiento señorial tuvo una función particular y calculada: mostrar a las diversas castas y órdenes coloniales las dimensiones del poder político y social de la élite. Existen abundantes evidencias procedentes de los siglos XVI y XVII que muestran que algunos de sus integrantes simplemente buscaban adquirir tierras, refugiarse en la autarquía y vivir de sus rentas en un estilo económico señorial y medieval, convirtiéndose en efecto en una clase rentista.

Sin embargo, es probable que así como los mineros buscaban mejorar la productividad y las ganancias, los encomenderos y hacendados adquirieran tierras para fines comerciales y productivos, empleando diversos medios: la ocupación de tierras indígenas vacías, la usurpación de las tierras de los nativos o de los campos vecinos, la recepción de mercedes de tierras del rey o los cabildos locales, y una compra regular. Sus haciendas frecuentemente estaban cuidadosamente construidas como unidades integradas, situadas específicamente en mercados regionales en auge alrededor de los centros mineros y político-administrativos. En este sentido, el temprano periodo colonial dio lugar a una lógica empresarial europea que además del modelo rentista más estancado, incluía también un patrón expansivo y agresivo de inversión-acumulación-reinversión. Sin embargo, ¿puede esta economía colonial en formación ser llamada capitalista? Stern (1995: 74) no lo cree así:

> El mercado colonial tenía reglas que mezclaban la coerción abierta con los incentivos mercantiles; sus trabajadores contratados jamás se convirtieron en un proletariado asalariado estable y en expansión; su escala, lógica y ciclos de crecimiento y caída contrastaban marcadamente con los que asociamos con las modernas economías capitalistas. Muy a menudo el mercado colonial uncía relaciones de producción no capitalistas con fines más modernos de acumulación de ganancias

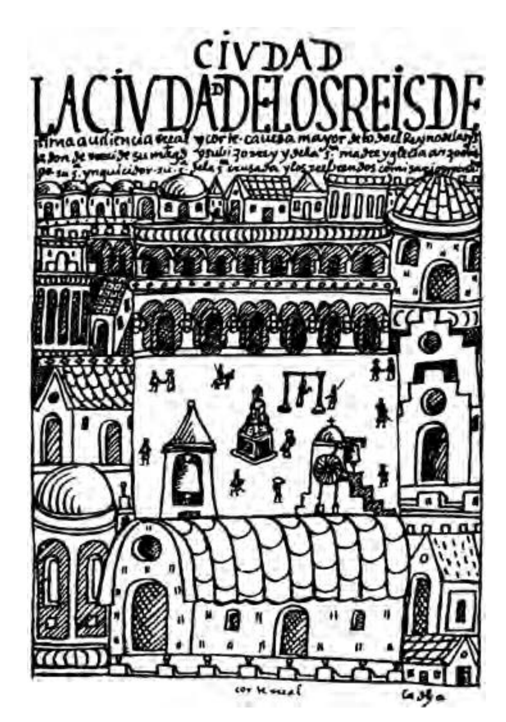
> a través de la inversión y la venta en los mercados. Estos rasgos distinguen la economía colonial del capitalismo moderno (y también de la imagen clásica de las economías precapitalistas).

Existían otras prácticas coloniales tradicionales, evidentemente no capitalistas. Una de ellas era el repartimiento de mercancías, o la venta forzada de bienes a la población india a precios elevados. Un aspecto negativo fue el fracaso en el desarrollo de mecanismos de crédito adecuados, pues la circulación de capital no fue dinámica, se limitó a unas cuantas personas exitosas, como un pequeño grupo de mineros de plata en Potosí; a diversos comerciantes en Potosí, Lima y otras ciudades provinciales; y, tal vez el más importante, a la Iglesia.

Esta última se convirtió en la fuente principal del crédito disponible en la sociedad posterior a la conquista, básicamente a causa de la considerable riqueza que adquirió tempranamente con legados, dotes y rentas. Sin embargo, buena parte del importante capital que acumulaba, que podría haberse empleado con mayor provecho en desarrollar la economía, fue destinado a la construcción de templos suntuosamente decorados que se esparcían a lo largo de los principales circuitos comerciales y asentamientos del temprano virreinato. De igual manera que el gran gasto de ganancias en un estilo de vida lujoso por parte de los encomenderos, hacendados y otras personas acaudalada; la Iglesia construyó sus impresionantes monumentos a Dios para enfatizar su poder y autoridad a las masas andinas.

Si bien la producción de plata de Potosí era la parte fundamental del sistema económico colonial en desarrollo, Lima era su eje. En tanto era la salida de sus barras de plata en el océano Pacífico, la ciudad capital y su vecino puerto del Callao también recibieron y distribuyeron los bienes manufacturados de la metrópoli a los asentamientos hispanos que iban desarrollándose a lo largo del polo de crecimiento. El flujo bidireccional de importaciones y exportaciones a través de Lima concentró en ella tanto las riquezas como la administración (pública y privada). En consecuencia, Lima se convirtió en el cuartel general de muchos de los más grandes hacendados; de comerciantes que establecían sus operaciones comerciales andinas con las fuentes de abastecimiento en España; y de todo tipo de proveedores de servicios, desde artesanos hasta abogados que necesitaban acceso al sistema desde un lugar central. No muy lejos estaban las organizaciones gubernamentales y eclesiásticas, establecidas para administrar el vasto virreinato. Por último, llegaron las grandes instituciones culturales como una universidad (1551) una imprenta (1583), y el teatro poco después, una vez que la población, el comercio y la administración alcanzaron una masa crítica.

Para fines de siglo, Lima era conocida por el gran volumen de su comercio y negocios, así como por el extravagante patrón de consumo de su élite. En



La Ciudad de los Reyes (Lima), imaginada por Felipe Guamán Poma de Ayala (1615) en un dibujo titulado *Civdad/La civdad de los Reis de Lima*..., de su *Primer nueva corónica y buen gobierno*, vol. 3, editada por John V. Murra y Rolena Adorno, traducciones del quechua de Jorge L. Urioste (Ciudad de México, 1980), p. 950. Reproducido por cortesía de Siglo Veintiuno Editores, Ciudad de México.

1610 su población había crecido a veinticinco mil personas y se estimaba que anualmente consumía unas 10.452 toneladas de trigo, 1.088 toneladas de maíz, 3.500 cabezas de ganado, 400 ovejas, 6,9 toneladas de arroz y doscientas mil botellas de vino. Bernabé Cobo, un observador contemporáneo, anotó en 1653 que en la ciudad había bastante más de doscientos carruajes de lujo, adornados con seda y oro, que valían tres mil pesos o más por unidad. Asimismo, calculó que el valor total del *stock* de joyas y metales preciosos con que contaba la ciudad, excluyendo ornamentos, tapices y artículos de culto, ascendía a veinte millones de ducados, habiéndose invertido otros doce millones en la gran población esclava. El consumo conspicuo impregnaba a todas las clases, hasta el punto de que era difícil distinguir los diversos estratos sociales sólo en base a la vestimenta. Los mercaderes de Madrid, limitados por las leyes suntuarias de la Corona, encontraron un mercado en expansión en la venta de sedas, brocados y finos lienzos en Lima. A pesar de todo, la relación de Cobo sugiere que buena parte de esta riqueza se derivaba de los salarios de eclesiásticos, burócratas y militares —en otras palabras, de las funciones administrativas y burocráticas de la ciudad— tanto como de su extenso comercio y producción.

La acumulación de riqueza en Lima permitió, asimismo, el desarrollo de una activa vida cultural, gran parte de la cual reforzaba las políticas imperiales de gobierno y el control de la sociedad colonial de la Corona. Para empezar, una importante vida cortesana giraba en torno al virrey y su administración, en la que juristas, clérigos e intelectuales de bajo nivel, poetas y artistas plásticos se mezclaban en la ciudad con el creciente número de mestizos e indios letrados y profesores, músicos, escultores y pintores. La Universidad Mayor de San Marcos, modelada sobre su contraparte de Salamanca, en España, se convirtió en un importante lugar donde los hijos de los colonos recibían la educación necesaria para ser elegibles a los puestos en la alta burocracia. En 1570 contaba con dieciséis cátedras, incluyendo una de quechua (reemplazada por la de matemática en 1678), y ofrecía cursos en artes, teología, medicina, derecho civil y canónico. Sin embargo, el acceso a la universidad estaba limitado a los varones españoles y criollos, quedando las castas y las mujeres excluidas.

La fundación del colegio jesuita un tiempo después en el Cuzco, fue asimismo importante para la educación de los hijos de la nobleza incaica a quienes la Corona había cooptado integrándolos a su proyecto colonial imperial. El supuesto era que, una vez asimilados a las costumbres hispanas, los jefes indios serían fieles vasallos del rey, e impartirían los conocimientos en sus comunidades y grupos étnicos de su propio pueblo. Una vez operativos, estos colegios comenzaron a producir graduados con gran dominio del español, que contaban con una educación equivalente a los graduados regulares de la universidad.

La vida escolar y universitaria de las colonias, así como la cultural, se vio remozada con el arribo de la imprenta a Lima en 1583, aunque inicialmente se imprimieron manuales de prédica y catecismos para la obra misionera. Sin embargo, los libros eran importados desde el principio y, a pesar de los controles estatales, un número sorprendente de títulos aparecieron tempranamente en las bibliotecas de ciudadanos prominentes y de las órdenes religiosas. Inclusive después del establecimiento de la Inquisición en 1569, diversos libros siguieron entrando al virreinato a través de medios ilícitos tales como el contrabando.

Las ceremonias públicas, los grandes desfiles y otros eventos públicos, también pasaron a ser una señal característica de la vida cultural en la capital virreinal (y en otras ciudades). Se realizaban periódicamente durante el año, ya sea con motivo de fiestas religiosas importantes, de la partida de la flota con la plata, o del arribo de un nuevo virrey, obispo u otro funcionario de elevada jerarquía. «El objetivo era construir para los súbditos de la América colonial, una sensación visible del poder del centro metropolitano que gobernaba sus vidas desde una gran distancia» (Castro-Klarén, «Lima», en Valdés 2003). En este sentido, estas ceremonias públicas constituyeron también un medio muy efectivo de comunicación de masas, diseñadas para transmitir a, y por lo tanto

perpetuar en, los sectores plebeyos de la sociedad colonial el poderío y la gloria de la Corona.

La transición de una economía minera a otra diversificada

La minería de la plata continuó siendo el eje de la economía virreinal durante la primera mitad del siglo XVII. A la vez que Potosí siguió siendo definitivamente el productor más grande del virreinato, otras vetas de plata fueron abiertas en Castrovirreyna, Cailloma, Chachapoyas, Pasco y Oruro, para nombrar algunas. La producción total conjunta de todas estas minas superó ampliamente la de la Nueva España hasta finales de siglo. Con todo, la producción fue descendiendo constantemente a medida que la centuria avanzaba. En Potosí, la caída de la producción fue abrupta, bajando su valor de algo más de siete millones de pesos en 1600 a casi 4,5 millones de pesos en 1650, para, finalmente, llegar a apenas dos millones en 1700. La producción disminuyó igualmente en las demás minas, aunque no tan abruptamente.

Las causas de la caída en la producción de plata variaban. Algunas eran estructurales, tales como las inundaciones debidas a los socavones cada vez más profundos, el incremento en el costo del mercurio para el proceso de refinación, y la baja en la calidad del mineral. Podemos atribuir otras causas a la deficiente administración de las remesas de mercurio, los impuestos más elevados, la creciente escasez de mitayos y los periódicos *toletoles* en minas aisladas. Todos estos problemas contribuyeron a elevar los costos y el descenso de la producción minera. Problemas similares afectaron la producción de mercurio en Huancavelica, que también cayó abruptamente de más de 598 mil kilos en 1582, a menos de 92 kilos en 1689.

La plata de las minas continuó siendo remitida por tierra al puerto de Arica, en el océano Pacífico, donde era cargada en naves para su viaje de diez días hacia el Callao. Con el fin de controlar las exportaciones de plata, Lima fue designada como el centro administrativo oficial de todo el comercio imperial en América del Sur. En el Callao, la Armada de la Mar del Sur recibía la plata a finales de mayo, desde donde la transportaba en un convoy protegido a Panamá, allí se descargaba el metal y se llevaba en mulas hasta Portobelo, en el Atlántico. Allí, las recuas de mulas cargadas de plata se encontraban con la flota del tesoro del Atlántico, que descargaba bienes manufacturados europeos en la feria anual de Portobelo, en la costa colombiana, y cargaba la plata peruana para su transporte a España. Los comerciantes limeños adquirían artículos en la feria, a cambio de plata en metal para su redistribución y reventa por todo el virreinato. Puesto que la Corona exigía que todas las importaciones y exportaciones se canalizaran a través de Lima, los comerciantes de la ciudad lograron un monopolio virtual de todo el comercio legal en la colonia.

Con la caída de la producción de plata en el virreinato, especialmente después de 1640, Lima y sus comerciantes comenzaron a experimentar un menor dinamismo en sus actividades. Otros factores se conjugaron para debilitar la economía de la capital virreinal y aflojar el control monopólico del comercio colonial. Los intrusos extranjeros atacaban los navíos españoles en el Pacífico con mayor frecuencia, elevando los costos al mismo tiempo que el de los bienes de España comprados por los comerciantes limeños también subían. Esto último se debió, por una parte, a la inflación provocada por la gran cantidad de plata americana que entraba a la metrópoli, y por otra, a la decadencia de las manufacturas españolas, lo que forzó a los comerciantes sevillanos a comprar manufacturas europeas. Para incrementar sus ganancias, los comerciantes limeños intentaron restringir el suministro de bienes al virreinato para así mantener los precios y márgenes artificialmente altos. Sin embargo, los precios más elevados y la caída en la producción de plata redujeron drásticamente el volumen del comercio trasatlántico, pues el número de viajes entre Panamá y Lima disminuyó en una tercera parte durante la segunda mitad del siglo XVII.

Durante largo tiempo, la caída en la producción de plata, el inestable comercio trasatlántico y la decadencia general de la misma España en el siglo XVII fueron interpretadas por los historiadores como la causa de una prolongada depresión en los virreinatos tanto de Perú como de Nueva España. Por ejemplo, en el primer caso, John TePaske y Herbert Klein mostraron que los ingresos que se suministraban a la caja real de Lima disminuyeron abruptamente en la segunda mitad del siglo. A partir de estos datos, concluyeron que entre 1650 y 1750 el Perú ingresó a una profunda crisis de un siglo de duración, sin que jamás recuperase su antigua grandeza y quedando superado cada vez más por México.

Sin embargo, Andrien cuestionó esta posición. Él sostuvo que la caída en la producción de la plata y en el comercio trasatlántico efectivamente sí perturbaron la economía peruana y causaron una caída dramática de los ingresos reales. A pesar de ello, no observó alguna evidencia de malestar o depresión sostenida en el virreinato debido a estas tendencias. Sostuvo, más bien, que la economía peruana experimentó una reestructuración hacia la reinversión interna, la diversificación y una producción más autosuficiente. Los comerciantes, mineros y productores simplemente desplazaron sus actividades empresariales del comercio trasatlántico a la producción para los mercados locales, un proceso que ya era visible a pequeña escala a finales del siglo XVI. El resultado fue un grado sorprendente de diversificación regional que estabilizó la economía virreinal y la aisló de la caída en la producción de la plata en el siglo XVII. En suma, este siglo se vio signado por la transición de una economía minera de orientación externa, a otra más diversa pero relativamente estable y autosuficiente de orientación interna.

El mercado para la producción interna y la sustitución de importaciones siguió conformado por los crecientes centros urbanos, convertidos cada vez más en focos de dinámicas economías regionales. Estas economías regionales comprendían no solamente al Rímac y a los vecinos valles de Lima, cuya población creció más de tres veces, de 25.000 a 80.000, entre 1610 y 1680, sino otros lugares como Zaña, al norte de la ciudad costeña de Trujillo; Cuzco, en la sierra sur; y Cochabamba, en el Alto Perú, sin dejar de lado a las localidades más lejanas de Quito, Guayaquil y Santiago. Ellas aprovechaban los ricos recursos naturales del virreinato y sus variadas zonas climáticas. Según un observador contemporáneo que escribió a comienzos del siglo XVII, «lo único que le falta al Perú son seda y lino, porque tiene en exceso de todo lo demás y no tienen necesidad de mendigar ni atender a ningún otro reino o provincia en el mundo» (citado en Andrien 1985: 18).

La economía rural peruana fue recuperándose a medida que la importancia de las minas disminuía. A lo largo de la costa, la población indígena colapsó pasando de 900.000 personas en 1530 a menos de 75.000 en 1630, abriendo los fértiles campos de los valles a los inmigrantes hispanos deseosos de tierras y oportunidades agrícolas. La europeización subsiguiente de la costa, en función de la población y producción, fue notable convirtiéndose en un rasgo duradero de la sociedad peruana. Se sembraron diversos cultivos europeos: azúcar y algodón en la costa norte, trigo y granos en los valles centrales, y uvas, olivos y azúcar en la costa sur. En toda la región costeña se produjeron frutas, vegetales y ganado en abundancia.

En la sierra, los agricultores, tanto hispanos como indios, sembraron una diversidad de cultivos y criaron ganado, dependiendo del clima y el suelo. En Arequipa, al sur, cultivaron uvas, azúcar, cereales, olivos y ají; en Huánuco, Cajamarca y Chachapoyas cultivaron algodón; en el Cuzco tabaco; en Huánuco, Huamanga, Cuzco y La Paz, entre otras zonas, coca y otros cultivos indígenas; y en toda la sierra papas y cereales. En el seco altiplano, menos idóneo para la agricultura, predominó el pastoreo y la producción de ganado. Los centros mineros y las ciudades de costa y sierra continuaron siendo una demanda constante para la producción tanto agrícola como ganadera.

Como ya señalamos, muchas regiones periféricas estaban vinculadas a los mercados urbanos del Perú. En Chile se producían olivos, uvas, cereales y ganado y exportaba el excedente a Perú. De las zonas de pastizales del Río de la Plata se enviaban productos como carne, cueros, lana y mulas, junto con vino de Mendoza y trigo, maíz y cebada de Tucumán y otras áreas. Incluso desde el distante Paraguay se importaba la hierba mate para Potosí. Al norte, Quito producía cereales, coca, papas, algodón, azúcar, lana y bestias de carga; en tanto que en Guayaquil se criaba la cochinilla y se cultivaba el cacao.

Los patrones de tenencia de tierra en estas regiones eran tan diversos como su producción. Usualmente dependían de las condiciones locales y de numerosos otros factores, incluso de la demanda de los consumidores, la distancia y dinamismo de los mercados, la disponibilidad de capital de inversión, el clima y la calidad de las tierras de cultivo. Las pequeñas propiedades o chacras se desarrollaron cerca de ciudades con una alta demanda y precios, y suministraban diversos alimentos que hoy en día se conocen como pan llevar. Por ejemplo, en el valle de Cochabamba predominaban las chacras productoras de trigo y otros productos para Potosí. El Cuzco también estaba rodeado de ellas, mientras que las haciendas más grandes enmarcaban el Camino Real, el camino a Potosí y a Lima. Alrededor de Arequipa, como mostraron Kendall Brown y Keith Davies, las chacras de uvas produjeron una industria rentable de vino y aguardiente, con ventas al Cuzco, las minas de plata del Alto Perú y Lima. Sin embargo, después de 1650 Arequipa perdió dinamismo debido a la creciente competencia de Ica, Nazca y Pisco, que captaron el mercado de vino y aguardiente limeño y parte del mercado del Alto Perú.

El latifundio típico surgido para satisfacer la demanda de los mercados urbanos a finales del siglo XVI y en el XVII fue la hacienda señorial. De mayor dimensión que las chacras, la extensión de estas haciendas señoriales todavía era relativamente modesta, por lo que no hay que compararlas con las grandes haciendas que surgirían posteriormente en el siglo XVIII. Ellas dependían de un número moderado de trabajadores serviles indios y abastecían productos básicos agrícolas y carne a los mercados urbanos de diversas y fluctuantes dimensiones. En 1689, el Cuzco tenía unas 705 haciendas, que tenían un promedio de entre quince y veinte trabajadores indios; el quince por ciento de ellas eran propiedad de mujeres (viudas a menudo), y otro siete por ciento de la Iglesia o las órdenes religiosas. Como eran unidades básicamente autosuficientes y con producción diversificada, estas haciendas podían adaptarse fácilmente a los cambios en la demanda, ampliando o contrayendo su producción según las condiciones del mercado.

En el Perú también existieron grandes plantaciones, principalmente a lo largo de la costa norte. Eran haciendas más capitalizadas, operadas por trabajadores africanos esclavos e inmigrantes amerindios, que se especializaban en cultivos comerciales de gran demanda —como el azúcar y el cacao— destinados a abastecer a mercados urbanos así como para su exportación. Las haciendas azucareras de Lambayeque, al norte de la ciudad de Trujillo, eran las más lucrativas del Perú. Más pequeñas que sus contrapartes brasileñas o del Caribe, producían fundamentalmente para mercados regionales antes que para los lejanos mercados europeos. El cuidadoso estudio que Ramírez hiciera de ellas muestra que las haciendas de Lambayeque florecieron entre 1650 y 1720, abarcaban entre 100 a 200 topos, empleaban menos de cincuenta esclavos e inmigrantes amerindios y remitían la mayor parte de su producción al mercado limeño.

Otro tipo de tenencia de la tierra era la estancia, una empresa de bajo capital e intensiva en mano de obra que se desarrolló por todo el virreinato. En la sierra norte, por ejemplo, se crearon numerosas estancias ovejeras a partir de las tierras indígenas y empleando trabajadores indios. También surgieron en el frío y árido altiplano de Puno, al sur, aunque las comunidades de indígenas que criaban llamas y ovejas tendieron a predominar en dicha región.

El trabajo en el sector agrario se vio afectado negativamente por la aguda caída de la población india en el siglo XVI y su lenta recuperación en el XVII. Aunque la escasez de trabajadores indígenas era un problema potencial para los terratenientes, la creciente disposición de los indios a dejar sus comunidades y moverse de un lugar a otro la compensaba. El programa toledano de las reducciones de la década de 1570 esencialmente había fracasado. Las reducciones fueron diseñadas para mejorar la administración de la población nativa (cristianización, cobro del tributo y organización de la mita), pero en general estaban mal ubicadas, a menudo en tierras marginales, y sufrieron una pérdida constante de población debido a las epidemias periódicas que asolaban los Andes. Por estas razones y para evadir la mita y el tributo, muchos indios las abandonaron y volvieron a sus antiguos hogares, se dirigieron a otras comunidades o buscaron trabajo en el sector hispano (minas, pueblos y haciendas) a cambio de un salario que se incrementaba por la escasez de mano de obra. Wightman estima que para la década de 1690 estos indios, conocidos como forasteros, conformaban más de la mitad de la población del obispado del Cuzco, habiéndose incrementado alrededor de un tercio respecto de 1645.

Quienes se asentaban en las haciendas pasaban a formar la base de una fuerza laboral permanente conocida como *yanaconas*, que recibía un salario y/o el usufructo de parcelas de tierra con las cuales mantener a su familia, otros obtuvieron empleo y se establecieron afuera de los pueblos españoles, en los vecinos «anexos» residenciales nativos. En ambos casos buscaban abandonar el estatus de «indígenas» sujetos al tributo y la mita, pasándose más bien al de *yanacona* o mestizo. Esta situación sugiere un proceso de ruptura del orden comunal andino y la disolución de las identidades étnicas, a medida que los nativos «huían» de las reducciones o de sus comunidades de origen. Según esta postura, los forasteros gradualmente cayeron dentro de la categoría general más amplia de «indio», una identidad que les fuera impuesta por el orden dominante español, convirtiéndose así cada vez más en símbolos de la dependencia y la explotación colonial.

Sin embargo, en sus estudios sobre los Andes del sur, Thierry Saignes observó un proceso mucho más complejo de «ruptura» seguido por una «recomposición», en el cual los emigrantes lograban desarrollar vínculos y forjar una identidad étnica con sus nuevas comunidades, o conservaban efectivamente los lazos mediante

periódicos regresos a sus viejas comunidades. En el primer caso, los emigrantes se integraban a los anexos residenciales de nativos, situados en las afueras de los poblados donde trabajaban, y adquirían las responsabilidades cívicas y religiosas que legitimaban su incorporación al nuevo lugar de residencia a través de los mecanismos tradicionales, como cabildos, cofradías y el compadrazgo. Cuando los forasteros llegaban a las comunidades ganaban aceptación e integración, legitimidad e identidad trabajando para los indios más acaudalados, contrayendo matrimonio con mujeres locales, desarrollando vínculos de parentesco y adquiriendo responsabilidades mediante las obligaciones festivas del sistema de cargos.

En cuanto a la conservación de vínculos con sus comunidades nativas luego de convertirse en forasteros, Saignes mostró que los indios seguían rutas migratorias que a veces trazaban un círculo de vuelta a sus antiguas comunidades, sólo para ser enviados por el cacique local a ser colonos en un nuevo archipiélago vertical, pero reteniendo su identidad étnica con los viejos *ayllus*. Al final, lo que Saignes describió fue un proceso fluido e intrincado en el cual los nativos andinos improvisaron estrategias económicas y políticas que les permitieron compensar las presiones del tributo, la mita y la caída de la población, y forjar nuevas identidades étnicas o conservar las viejas.

La comercialización de los productos agrícolas peruanos, que en su mayoría tendían a ser grandes y voluminosos, estaba severamente obstaculizada por las enormes dificultades que el transporte y las comunicaciones enfrentan en los Andes. Sin embargo, productos, como el azúcar y el vino, tenían un valor elevado y eran relativamente poco voluminosos, de tal modo que hallaron mercados rentables en lugares lejanos. Por otro lado, los mercados mineros tendieron a ser notoriamente volátiles por sus ciclos productivos de auge y colapso, lo que hacía que la producción y las ganancias de las haciendas vecinas fluctuasen enormemente. En los Andes, el principal medio de comunicación eran las recuas de mulas importadas de las estribaciones andinas del norte argentino que empleaban a gran número de arrieros en todo el virreinato.

El siglo XVII vio el desarrollo de las manufacturas en la colonia, aunque no en el mismo grado que las empresas agrarias. La manufactura textil floreció para satisfacer la demanda popular de prendas de vestir de algodón y lana de manufactura burda, así como frazadas, sombreros, sandalias y cordaje de nave, particularmente después de que la recesión europea de 1620 desacelerara la importación de textiles. Los obrajes más grandes se encontraban en las provincias de Quito, Conchucos, Cajamarca y Cuzco, y podían emplear hasta cuatrocientos trabajadores. En algunos casos, los dueños eran estancieros que también podían suministrar sus propias materias primas a sus talleres. Quito fue particularmente famoso por sus obrajes públicos y privados que crecieron más del doble, de 55 en 1620 a 117 en 1690. A fines del siglo, en el punto más alto de la industria, los

obrajes empleaban a más de diez mil trabajadores, que producían telas por un valor de entre uno y dos millones de pesos para su venta en Lima y Nueva Granada.

Otra industria importante desarrollada en el virreinato en el siglo XVII fue la construcción de navíos, como descubriera Larry Clayton. Esta industria se vio estimulada porque la costa occidental se hallaba aislada de los astilleros de La Habana y Europa, y por la demanda de naves para defender las flotas de plata que se desplazaban entre Lima y Panamá, además del creciente comercio Intercolonial en el Pacífico. Guayaquil estaba particularmente bien situado para desarrollar dicha industria. Allí se recibía madera suficiente de los bosques del interior, tela para las velas de los obrajes de la sierra, sogas y aparejos de Chile, así como betún y brea de Nicaragua. Con estos insumos, los astilleros guayaquileños mantenían los costos muy por debajo de los europeos y podían producir tres a cuatro naves al año para la armada y la marina mercante.

De igual manera que en las manufacturas textiles y en la construcción de navíos, el capital local sustentó también una dinámica industria vitivinícola en Arequipa y a lo largo de la costa sur. Los tempranos intentos hechos por Felipe II (1556-1598) para proscribirla e impedir su competencia con España fueron pronto dejados de lado por resultar poco prácticos, pasando así el Perú a ser un productor de vinos y aguardiente de gran calidad. La Corona se contentó con gravar la industria que aprovisionaba los mercados urbanos del virreinato y exportaba cantidades significativas a Chile y México.

Por último, un gran número de industrias artesanales de pequeña escala florecieron por todo el virreinato, suministrando los bienes de bajo costo que sólo llegaron esporádicamente de Europa durante la depresión del XVII. Entre ellos tenemos artículos de cuero, vidrio, armas, muebles, productos de madera y herramientas cuya producción en las ciudades, pueblos y haciendas ocupaba a un número significativo de artesanos españoles, amerindios, mestizos y negros.

A pesar de la regionalización de la economía peruana durante el siglo XVII, Lima continúo siendo el eje comercial del virreinato, aunque a un ritmo más lento que en el siglo anterior. Sus comerciantes eran activos, tanto en el comercio atlántico como en el que se desarrollaba en el Pacífico, recibiendo muchos de los bienes importados o producidos en otras partes del Perú y distribuyéndolos por todo el virreinato. Clayton señala que más de sesenta comerciantes contaban con activos por encima de cien mil pesos, y varios los tenían de quinientos mil a un millón de pesos. Organizados en un poderoso consulado, estos mercaderes ejercieron un considerable poder económico y político en el virreinato, que disminuyó, parcialmente, después con la creciente competencia comercial de Buenos Aires y Santiago.

Sin embargo, los mercaderes de Lima y en general toda la economía virreinal, sufrieron un gran golpe con el devastador terremoto que azotó la costa central peruana en 1687. La producción y distribución de alimentos experimentó

serios trastornos en la costa y las autoridades limeñas se vieron forzadas a controlar la venta y distribución del pan para prevenir el acaparamiento y la hambruna. Siguieron brotes de epidemias que hicieron que los amerindios en particular huyeran de la ciudad, cuya población bajó a la mitad en cinco años, de ochenta mil a cuarenta mil habitantes.

La producción agrícola se desmoronó debido, entre otras cosas, a los daños sufridos por las obras de irrigación a lo largo de la árida región costera. La importación de alimentos de la sierra no bastaba para impedir que los precios se dispararan en Lima. El del trigo, por ejemplo, subió de dos o cuatro pesos por arroba, a más de veinte o treinta. En consecuencia, los comerciantes comenzaron a importar grandes cantidades de trigo chileno, estimulando la producción en el valle central y permitiendo a Chile ocupar el lugar de principal proveedor de todo el virreinato. Este cambio infligió un gran golpe a los terratenientes peruanos de toda la costa, que jamás lograron volver a recuperar su posición dominante en el mercado.

Buenos Aires fue otra área periférica del virreinato que logró desarrollarse a costa de Lima durante el siglo XVII. Su crecimiento se había visto limitado por el hecho de que el Estrecho de Magallanes fue cerrado para impedir el acceso europeo al Pacífico, a fin de que la Corona pudiese mantener un rígido control sobre la exportación de plata a través de Lima y Panamá. Buenos Aires únicamente podía importar lo necesario para mantener a las colonias en el Río de la Plata. Sin embargo, a pesar de estos constreñimientos, esta ciudad se había convertido a finales del siglo XVI en un gran centro del comercio de contrabando y su población se incrementó de apenas mil habitantes en 1615 a más de siete mil en 1700. Utilizando su ubicación estratégica en el Atlántico, Buenos Aires pasó a ser un conducto para las importaciones ilegales europeas que tenían como destino los mercados mineros del Alto Perú a cambio de la plata peruana, estimada en 1620 en cien mil pesos. Después del terremoto de 1687, Buenos Aires siguió avanzando en este mercado, erosionando aún más la posición antes predominante de Lima en este comercio.

A finales del siglo XVII, Lima estaba en decadencia. Según Andrien (1985: 28), «la recesión en el comercio atlántico, la caída en la producción minera, el crecimiento de centros económicos regionales competidores y el terremoto de 1687, se conjugaron todos para minar el poder y la influencia de la capital virreinal». Al mismo tiempo, las economías regionales del Perú siguieron haciéndose más diversas, autónomas y estables. Andrien atribuye la diversificación a varios factores específicos. El primero de ellos era el crecimiento de la población europea. Aunque los estimados son riesgosos, para 1650 casi un cuarto de millón de personas había dejado Europa para establecerse en el virreinato. Buena parte de esta población se concentraba en Potosí, cuya población alcanzó su punto máximo en 1650 con unos ciento sesenta mil habitantes, mientras que Lima tal

vez llegaba a los ochenta mil durante el terremoto de 1687. El segundo factor era la población nativa, que para 1700 se había integrado cada vez más al sector europeo de la economía. De hecho, el objetivo de las reformas toledanas había sido forzar a la población andina a participar en la economía colonial en desarrollo como productores y consumidores.

Un tercer factor fue el número cada vez más grande de esclavos negros que se importaban de África occidental para trabajar en las haciendas productoras de azúcar, trigo y uvas a lo largo de la costa. La población negra se incrementó de tres mil en 1550 a más de sesenta mil un siglo más tarde, cubriendo la escasez de mano de obra causada por el colapso demográfico de la población nativa en la costa, y sumándose al mercado de consumo popular de bienes producidos en el virreinato.

El cuarto factor fue la disponibilidad de capital de inversión. Buena parte del mismo provenía de la Iglesia, que lo prestaba a los hacendados como crédito rural para financiar la expansión de la producción a una tasa de cinco por ciento de interés. Además, algunas instituciones clericales como la Compañía de Jesús, según lo mostraron los estudios de Cushner, invirtieron fuertemente en empresas agrícolas. Los jesuitas administraban exitosas empresas vinícolas, azucareras, ganaderas, de hierba mate, trigo y hasta textiles, con retornos en su inversión que en algunos casos (como el azúcar) eran de hasta diez por ciento. Sin embargo, la mayoría de las fuentes de crédito en la colonia eran las casas mercantiles, que asumían riesgos mucho mayores que sus contrapartes más conservadoras, pero cobraban tasas de interés más altas en sus préstamos. Aunque eran populares entre los prestatarios a pesar de dichas tasas, estos bancos a menudo tenían una existencia precaria, con muchos fracasos y una elevada tasa de rotación.

Un último estímulo a la expansión y la diversificación económica interna en el transcurso del siglo XVII provino del gasto gubernamental. Aunque los ingresos del gobierno (procedentes de los impuestos) disminuyeron durante la segunda mitad del siglo debido a la desaceleración de la producción minera y del comercio trasatlántico, la mayor parte de ellos permanecía en el virreinato en vez de ser enviada a España, como lo mostraron Andrien y otros. Aunque apenas el 36 por ciento de las rentas cobradas por el tesoro virreinal permanecía en el Perú en el tardío siglo XVI, esta cifra se incrementó hasta un 95 por ciento para finales del XVII.

La razón principal de este impresionante giro era defensiva. Más allá de Iberia, el interés europeo por el reino del Perú era creciente, al igual que el de los españoles, por los informes, tanto reales como exagerados, de las fabulosas riquezas descubiertas allí en el siglo XVI. Las noticias se hicieron más concretas cuando el aventurero inglés Francis Drake capturó 447.000 pesos en la costa peruana durante su viaje alrededor del mundo, entre 1557 y 1560. Inspirados

por el comercio y el botín potenciales, así como por los antagonismos religiosos y políticos con la España católica, los intrusos extranjeros navegaban alrededor de la punta de Sudamérica a través del Estrecho de Magallanes, y durante el siglo XVII comenzaron a operar con cierta frecuencia en el Mar del Sur, como entonces se llamaba la costa occidental del Pacífico. A los ingleses pronto se les unieron los holandeses, sobre todo Joris van Speilbergen, quien logró derrotar a la flota peruana en Cañete, en 1617, y Jacques l'Hermite, quien al mando de la flota de Nassau logró bloquear el Callao durante un tiempo en la década de 1620.

En el transcurso del siglo XVII, estas y otras expediciones extranjeras lograron perturbar y retrasar la partida de la flota de plata del Callao, y forzaron a las autoridades virreinales a tomar drásticas medidas defensivas. Entre ellas estaba un fuerte incremento en el gasto en armas, construcción de navíos, fundiciones de metal y provisiones para guarniciones, nuevas y ya existentes. En consecuencia, el porcentaje del gasto del tesoro limeño en defensa subió de 16,5 por cierto en 1610 a 25 por ciento en 1650 y 43 por ciento en 1680, en tanto que las remesas a España cayeron de 51 a 35 y 5 por ciento respectivamente. La mayor parte de estos gastos se efectuaron localmente, en producción y manufacturas relacionadas con la defensa, ofreciendo así un estímulo adicional al desarrollo interno.

Si los capitales locales, tanto privados como públicos, potenciaron el desarrollo económico en el virreinato en el siglo XVII, el comercio atlántico, aunque disminuido, seguía representando un monto significativo de la vida comercial de la colonia. Un indicio de su continua importancia, así como de los impuestos que pagaba, es que el tesoro limeño remitió más de cien millones de pesos a España en el transcurso del siglo. Es más, la desaceleración del comercio trasatlántico fue compensada con la expansión del comercio intercolonial en el Pacífico, que se hizo cada vez más atractivo para los comerciantes coloniales. Andrien (1985: 35) ofrece cierta idea del ámbito y la gama de este tráfico:

> Los comerciantes de Guayaquil enviaban madera tropical, carbón, cacao y telas a los mercados de Lima, América Central y México. Los productores en el centro y sur del Perú enviaban vino, aguardiente, azúcar, aceite de oliva, trigo, textiles y plata a los puertos del Pacífico, desde Chile hasta Acapulco. Jabón, azúcar, textiles, algodón y tabaco eran enviados desde Quito y el norte peruano a los mercados de Lima y Nueva Granada. Por último, Chile enviaba a Lima vino, trigo, carne, sal, sebo y mercancías del Río de la Plata tales como cueros y hierba mate.

Un comercio particularmente dinámico se desarrolló también a lo largo del siglo entre Perú y Nueva España. Los comerciantes de Lima enviaban plata, mercurio, vino y cacao al norte a cambio de textiles, ropa, joyas, artículos de cuero, libros y hasta objetos de lujo del Oriente. De hecho, estos últimos sumaban a veces hasta el noventa por ciento del tráfico en el que participaban los famosos galeones

de Manila, que unían el lejano Oriente con el puerto de Acapulco, en la Nueva España. Estos galeones enviaban grandes cantidades de plata americana a Oriente a cambio de seda, porcelana, almizcle, tapices, pimienta, marfil, jade, damasco y otros lujos. La demanda de estos artículos de lujo en Perú llegó a superar en realidad la capacidad de carga de los galeones de Manila, de modo que los comerciantes peruanos inauguraron un comercio directo entre los puertos de la Costa Occidental y Oriente.

En términos macroeconómicos, la demanda china de la plata americana sirvió para fortalecer los precios en Perú y México, y financiar al gobierno virreinal y al tráfico de esclavos. China absorbía alrededor de la mitad de la producción global de plata, el grueso de la cual provenía de las minas americanas. A cambio, los mineros de plata peruanos y mexicanos, y los comerciantes del galeón de Manila recibían la gran provisión de bienes de lujo de Oriente, consiguiendo grandes ganancias. Ellos, a su vez, hacían préstamos al gobierno real para que cubriera sus costos administrativos, y a los traficantes de esclavos, quienes financiaban así sus compras de esclavos africanos para las haciendas costeñas y otros lugares.

La Corona intentó infructuosamente detener el desvío de plata a Oriente colocando numerosas restricciones a este comercio. Sin embargo, el tráfico era tan lucrativo para los comerciantes americanos que dichas limitaciones simplemente incrementaron el nivel del contrabando. Un estimado contemporáneo efectuado en 1638 sólo para Lima, situaba el nivel del comercio oriental de contrabando en dos millones de pesos al año. Y éste solamente era parte del problema generalizado en todo el imperio del comercio ilegal. Por ejemplo, en 1668 se estimó que apenas la tercera parte del tráfico intercolonial era legal, esto es debidamente registrado y gravado por las autoridades. Para la década de 1690, los funcionarios limeños se quejaban amargamente del alto nivel del comercio ilegal efectuado entre Buenos Aires y Potosí. Irónicamente, hasta los miembros del consulado limeño estaban implicados en este tráfico ilícito.

Para resumir, el siglo XVII vio el paso de la minería argentífera de enclave del siglo XVI, a otra economía regional más diversificada y autosuficiente. Según Andrien (1985: 39), «la retención de más riqueza mineral en la colonia, el crecimiento de la población española, la integración más estrecha de las economías europea y amerindia, las inversiones más grandes hechas por grupos clericales y mercantiles en empresas locales, el desarrollo de facilidades crediticias y el comercio del Pacífico, estimularon la demanda agregada de bienes producidos localmente». Lejos de haber ingresado a un periodo de depresión o incluso a una «autonomía del estancamiento», como dijera un historiador, la economía peruana del siglo XVII se caracterizó por la diversidad regional y la estabilidad global, no habiendo evidencia alguna de una caída o malestar sostenido. Esto no quiere decir, claro está, que el ciclo económico haya estado libre de alzas y bajas.

Gobierno real, crisis fiscal y decadencia

Mientras que la economía del virreinato peruano experimentó una reestructuración sustancial en el siglo XVII, lo que llevó a una mayor diversificación y una estabilidad global antes que a la decadencia, la condición fiscal del gobierno virreinal se fue deteriorando severamente. Estructurado para recibir rentas del cobro de impuestos a la minería de la plata y el comercio trasatlántico, la caja real de Lima necesitaba modificar su estructura tributaria y encontrar nuevas fuentes de ingresos si iba a conservar el nivel de sus gastos y remesas a España. Para ello debía incrementar los impuestos a los sectores de una economía ahora más diversificada y regionalizada, una tarea nada fácil dada la oposición inherente de las élites criollas locales a la imposición de nuevos gravámenes a sus operaciones.

En términos estadísticos, el problema era que el setenta por ciento de las rentas reales provenían principalmente de los centros de extracción de la plata, mientras que diversos impuestos portuarios y alcabalas que se cobraban en Lima-Callao dependían del flujo del metal por la capital. A medida que la producción de plata descendía y las rentas reales caían, los virreyes recurrieron a los préstamos, retuvieron fondos normalmente enviados a España e impusieron nuevos impuestos sin intentar compensar el déficit reduciendo los gastos. Estas medidas esencialmente de corto plazo lograron sostener las rentas del tesoro hasta la década de 1660. Sin embargo, en este periodo la burocracia real no hizo intento alguno de imponer nuevos impuestos a los diversos miembros de las élites coloniales, como el clero, los hacendados y los comerciantes. De esta manera, cuando los ingresos cayeron abruptamente después de 1660, lo hicieron en un momento en que la madre patria se encontraba en una prolongada crisis financiera debido a los severos desafíos de mantener su posición política en Europa.

Andrien no atribuyó el problema de las rentas coloniales a la economía que, según él, no experimentó una depresión en el transcurso del siglo; lo adjudicó más bien, al fracaso institucional y administrativo del gobierno y la burocracia real. «De algún modo las instituciones del gobierno virreinal y las personas que las manejaban», dice, «le fallaron a su soberano sacrificando las necesidades de la metrópoli y la solvencia del gobierno colonial durante la crisis imperial del siglo XVII» (Andrien 1985: 75). Buena parte del problema se derivaba de la estructura del gobierno virreinal y la forma en que estaba diseñado para que funcionase desde su creación en el siglo XVI.

Como las Indias eran consideradas una posesión del Reino de Castilla, el Perú había sido gobernado en conformidad con las leyes e instituciones de dicho reino. Esto significaba que el principal responsable de las políticas en el virreinato peruano era el Consejo de Indias, establecido en Castilla para gobernar el reino.

Por lo tanto, el rey y sus principales ministros fijaban la política peruana después de consultar con este Consejo.

Dadas las enormes distancias entre Madrid y Lima, así como las amplias extensiones geográficas y el difícil terreno del virreinato, la Corona intentó conservar el control sobre un dominio tan alejado y sobre sus funcionarios administrativos mediante «la pluma, la tinta y el papel», en palabras de John Elliott, el eminente historiador de España y América, es decir, el reino erigió un sistema burocrático en Perú y América intentando legislar, y por lo tanto reglamentar, virtualmente todo aspecto de la vida colonial. Con el transcurso del tiempo, eso dio lugar a un gran corpus de unas 3.500 leyes y provisiones relacionadas con las Indias, que fueron compiladas y finalmente publicadas en 1681 en cuatro volúmenes como la *Recopilación de las leyes de Indias*. El resultado de un sistema tan legalista fue la total burocratización del gobierno colonial en Perú.

Mientras que la «pluma y la tinta» operaban para «encadenar» a los oficiales reales peruanos a Madrid, la difusión de la autoridad pasaba a ser otro mecanismo esencial del gobierno real en el virreinato. La Corona tenía virtualmente una fobia a la concentración del poder en el sector público y por lo tanto desarrolló un sistema burocrático repleto de extensos pesos y contrapesos, jurisdicciones superpuestas y líneas de autoridad generalmente ambiguas en toda su jerarquía administrativa. Esta difusión de la autoridad tuvo como resultado, interminables fricciones y conflictos entre los funcionarios reales que minaban la eficiencia del sistema. Este sistema aseguraba un control máximo desde Madrid, que podía enfrentar eficazmente a un funcionario con el otro y actuar como árbitro final en todas estas disputas. Al mismo tiempo, permitía la existencia de un amplio espacio en donde los funcionarios reales maniobraban y explotaban las debilidades de un sistema en el cual el poder estaba tan disperso. En realidad, la estructura y funcionamiento del gobierno regio en Perú sacrificaba la eficiencia administrativa al control metropolitano. A juzgar por el periodo extraordinariamente largo de dominio colonial relativamente estable en Perú después de las guerras civiles de la década de 1540, semejante sistema burocrático fue más un éxito que un fracaso, por lo menos desde la perspectiva de la metrópoli.

La principal unidad administrativa en este sistema era el virreinato. El primero de ellos fue establecido en la Nueva España en 1535, con su capital en Ciudad de México, siguiéndole poco después el de Perú en 1543, con su capital en Lima. En dicho año Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, arribó a Lima para asumir sus tareas administrativas como el funcionario administrativo más importante del nuevo reino. Los virreyes coloniales eran extraídos, por lo general, de las filas de la nobleza española y se les nombraba por periodos renovables de seis años. De los veinticinco virreyes designados para ocupar el cargo en la Nueva España entre 1535 y 1700, nueve de ellos lo fueron también para el Perú.

El virrey ejercía funciones tanto ejecutivas como judiciales, puesto que también actuaba como presidente de la audiencia.

A primera vista, en tanto álter ego del rey, el virrey parecía ser un funcionario poderoso en extremo, y en muchos sentidos lo era. Pero al igual que muchos otros importantes funcionarios reales en el Nuevo Mundo, también estaba limitado por el gran número de leyes y decretos que emanaban del lejano Consejo de Indias, en su intento de microadministrar la colonia y así controlarla. Es cierto que a los virreyes se les concedió cierta flexibilidad para mostrar su iniciativa y maniobrar con la regla del «obedezco pero no cumplo», que permitía a los oficiales reales retrasar la implementación de los decretos que parecían ir en contra de la situación o condiciones reales prevalecientes en la colonia. Con todo, hasta las manos del virrey quedaban atadas usualmente por las extensas y a menudo minuciosas instrucciones que recibía de Madrid. El y otros oficiales reales quedaban también sujetos a una exhaustiva investigación de su administración. Estas investigaciones se realizaron mediante *visitas* periódicas efectuadas por jueces independientes sobre asuntos específicos, o con *residencias* hechas al final del mandato. Ambos mecanismos permitían que las partes agraviadas presentaran cargos en contra de los funcionarios reales. Una de estas visitas hecha a un virrey en Perú generó un gigantesco informe de casi cincuenta mil páginas.

Otro contrapeso importante del poder virreinal lo constituía la Audiencia, la segunda rama más importante del gobierno real en América. En el siglo XVI se establecieron seis de ellas en el virreinato peruano: Panamá (1538), Lima (1543), Santa Fe de Bogotá (1548), Charcas (1559), Quito (1563) y Chile (1563). Cada una estaba conformada por oidores o jueces, que además de su función judicial e investigadora supervisaban el cumplimiento de las leyes reales y tenían a su cargo el virreinato entre el gobierno de un virrey y el siguiente. Aún más importante era que la audiencia de Lima asumía el mando cuando el mandatario fallecía o era depuesto.

Entre el virrey, los jueces de la audiencia y el cabildo se alzaban numerosos otros cargos reales. Por ejemplo, las jurisdicciones periféricas o de frontera estaban sujetas al mando de gobernadores o capitanes generales, con funciones militares especiales. El importantísimo asunto del cobro de impuestos era organizado por un ejército de oficiales de la real hacienda, con oficinas principales («cajas reales») en los centros económicos claves. Otra importante subdivisión administrativa del virreinato era el corregimiento, fundado sobre un área alrededor de una ciudad o pueblo y gobernado por un corregidor, nombrado ya fuera por el rey o el virrey, dependiendo de su importancia.

En la base misma del gobierno peruano se encontraban los que tal vez eran sus puntos de contacto fundamentales con la ciudadanía, las ciudades de españoles o pueblos, junto con su cabildo. No obstante su naturaleza mayormente

rural y la creciente importancia de las haciendas, el Perú hispano estaba organizado y giraba en torno a los centros urbanos, al igual que la mayoría de las sociedades mediterráneas. Incluso en los latifundios circundantes, el señor era considerado un vecino del pueblo más cercano y casi siempre tenía una residencia allí. De hecho, la jurisdicción del pueblo se extendía bien adentro del campo circundante.

Cada pueblo estaba gobernado por un cabildo, conformado por el corregidor varios alcaldes o funcionarios judiciales legos que atendían los asuntos legales, y los regidores que manejaban los asuntos del centro urbano. Las obligaciones del cabildo comprendían la imposición de impuestos locales y el control del abastecimiento y el precio del trigo y la carne, así como de la asignación de los solares. Los cabildos llegaron a estar dominados y ser instrumentos de las oligarquías criollas locales, conformadas por acaudalados comerciantes, mineros o terratenientes, debido a que este cargo era un nombramiento o, en el caso de elecciones estaba sujeto, a los requisitos de elegibilidad restringida basados en la propiedad. De esta manera, y en tanto era la única institución local con canales hacia la jerarquía de oficiales reales que se remontaba hasta el Consejo de Indias en Madrid, el cabildo no sólo era el instrumento más importante del gobierno local, sino el centro de las rivalidades familiares locales en la lucha por los recursos y el poder en la zona.

La naturaleza de este sistema de gobierno, con sus características difusas, descentralizadas y patrimoniales, estaba relativamente bien adaptada para los fines de extender la autoridad real al Perú en el siglo XVI. En ese momento, la Corona estaba particularmente interesada en proscribir el poder de los conquistadores y gravar las principales fuentes de riqueza: la minería y el comercio trasatlántico. El poder era disperso y limitado, dividido entre el rey, sus principales asesores, el virrey o representante del monarca en el Perú y las audiencias, y además subdividido aún más entre diversos otros funcionarios que administraban el sistema hasta llegar al ámbito local.

Sin embargo, la crisis fiscal del siglo XVII exigía un sistema administrativo diferente, más moderno y eficiente, capaz de concentrar el poder y las líneas de autoridad para realizar con éxito el desplazamiento fundamental de la carga fiscal a las recalcitrantes élites locales. Esta tarea requería una burocracia disciplinada, meritoria y profesional que pudiera defender los intereses de Madrid y que no fuera minada o corrompida por los intereses locales. En términos weberianos, esto significaba la creación de una moderna autoridad burocrática racional-legal, algo que la Corona sólo pudo hacer parcialmente en el transcurso del siglo XVII.

Madrid había logrado, en cierta medida, crear un cuerpo profesional de funcionarios gubernamentales con el cual ocupar los cargos de su imperio en el siglo XVI. Francisco de Toledo, el dedicado, leal y hábil virrey del Perú entre 1569 y 1581 fue —en cierta forma— la encarnación de este cuerpo y una prueba del éxito

de Madrid. Sin embargo, enfrentado a la caída general de los ingresos coloniales a medida que el siglo XVII se extendía, así como con la inminente bancarrota en casa y la derrota militar en Europa, el rey tomó una decisión fatídica y en última instancia desastrosa en 1633 . Desesperado por conseguir mayores rentas en todo el imperio, el conde duque de Olivares, el ministro más importante de Felipe IV, decidió vender, no obstante sus serias reservas, muchos de los cargos imperiales en el Nuevo Mundo, entre ellos todos los puestos de alto nivel del tesoro.

En retrospectiva los resultados fueron predecibles. Al venderse los cargos a los postores más altos, a menudo acaudalados criollos locales comprometidos, la calidad de las personas que ocupaban los cargos en el virreinato se deterioró rápidamente. Los funcionarios inexpertos, corruptos e ineficientes, firmemente ligados a los intereses locales, lograron alcanzar el control de muchos cargos importantes, entre ellos la caja real de Lima. Si bien se obtuvo una renta importante con la venta de estos puestos en el corto plazo, la administración y la toma de decisiones eficaces fueron severamente comprometidas con respecto a los poderosos grupos e intereses locales en el largo plazo. La autoridad virreinal se redujo estrepitosamente. Vista desde una perspectiva moderna, la venta de cargos en el periodo colonial podría explicar también el bajo nivel de moral pública actualmente existente entre los empleados públicos. Esta práctica debilitó indudablemente toda noción de un servicio público desinteresado e introdujo en la cultura política la corrosiva idea de que tener un cargo era una oportunidad para obtener una ganancia egoísta y privada, no para el bienestar de todos.

Las consecuencias inmediatas de la venta de cargos públicos en Perú fueron severas. En primer lugar y sobre todo, la calidad de la administración descendió. Mientras que hasta ese entonces la burocracia virreinal había estado conformada casi exclusivamente por peninsulares experimentados y supuestamente competentes, ahora un número significativo de criollos poco preparados tomó posesión de muchos puestos. En un caso de 1641, un acaudalado criollo compró un nombramiento en la real hacienda de Lima para su hijo de quince años, quien asumiría su cargo a los veinticinco años de edad. En tales circunstancias las normas para los ascensos se vieron severamente alteradas y la moral de los empleados públicos de carrera se desplomó.

En cuanto al tesoro y al problema crucial de la caída en las rentas durante la segunda mitad del siglo XVII, la venta de cargos resultó ser particularmente dañina para Madrid. La Corona hizo infructuosos esfuerzos concertados por ampliar la base fiscal para poder conservar sus ingresos. Los grupos aliados con las élites criollas locales y los intereses creados lograron comprar los puestos claves y bloquear todo intento de reforma fiscal, además de ganar una influencia creciente sobre la administración imperial. En consecuencia, las remesas enviadas a España cayeron precipitadamente, contribuyendo a la decadencia militar y política del

país. Es más, el tráfico de influencias y la corrupción se volvieron omnipresentes, en tanto que la influencia y la autoridad del virrey se diluían.

Por último, si la calidad y la efectividad del gobierno real en Lima decayó, la primacía de la ciudad de los Reyes en la economía virreinal también se vio seriamente minada. La decadencia financiera y política de la capital, la productividad decreciente de las minas, la recesión en el comercio trasatlántico, la diversificación de la economía colonial y las desastrosas consecuencias del terremoto de 1687 se conjugaron, como ya señalé, para debilitar la capital virreinal y su élite a finales del siglo XVII. La ciudad y su lugar en el virreinato fueron reemplazados por lo que Andrien (1985: 206) llamó «un virreinato más cantonal [...] conformado por regiones menos dependientes ya fuera de Lima o de Madrid».

Mientras que el gobierno real se debilitaba a lo largo del siglo XVII, la Iglesia, su otro brazo en el manejo del Perú, fue consolidando su formidable posición en la sociedad colonial, fundamentalmente porque siguió acumulando dinero y propiedades a una tasa constante. Los legados de los colonos fluían a casas religiosas particulares para ser usados como capellanías para decir misas por los difuntos, como dotes para hijas no casadas, o como cualquier otro fondo. El dinero adquirido de esta forma era usualmente prestado como crédito o censos, en tanto que las propiedades podían ser trabajadas directamente o arrendadas. De esta manera, en el Perú la Iglesia como institución se convirtió en una formidable potencia financiera y económica, aunque no en la misma medida que en la Nueva España.

De especial interés, debido a su capacidad en los negocios, fueron los jesuitas, quienes, como mostraron Macera y Cushner, adquirían astutamente propiedades y haciendas, y las administraban en forma productiva y empresarial. En el momento de su expulsión del Perú, en 1767, los jesuitas poseían once haciendas azucareras en la costa norte y central, así como la importante hacienda azucarera de Pachachaca y un gran obraje en Abancay. Todas sus posesiones en el Perú sumaban 5,7 millones de pesos. Los jesuitas fueron únicos en financiar sus adquisiciones, cuya producción a menudo se complementaba entre sí, con sus ganancias o préstamos externos, no simplemente con legados. Entre otras cosas, las ganancias de estas empresas financiaban sus extensas actividades educativas y proyectos urbanos en todo el virreinato.

Las donaciones, fondos y ganancias de empresas similares también financiaron el gran número de monasterios y conventos surgidos en el virreinato durante el periodo colonial. Estas casas religiosas albergaban un gran número de hombres y mujeres, no sólo los frailes y monjas de las órdenes y diversos novicios, sino también alumnos, sirvientes, esclavos y artesanos. Para 1621, más de mil frailes tan sólo en Lima pertenecían a las principales órdenes monásticas, y sus conventos eran espléndidas estructuras arquitectónicas que a menudo ocupaban una o más manzanas de la ciudad, repletas de trabajos barrocos en madera

elaboradamente tallados, pinturas de las escuelas cuzqueña y limeña, patios hermosamente decorados con azulejos, extensas huertas y enormes cocinas. Muchas de estas órdenes manejaban colegios que daban la oportunidad a mestizos y otras castas de aprender a leer y escribir y saber, lo que no les estaba permitido a nivel universitario.

En cuanto al clero secular, éste no solamente adquiría tierras, sino que además recibía un ingreso regular proveniente de los diezmos gravados a la población colonizadora para respaldar sus diversas actividades. Dependiendo de la población y la riqueza de una jurisdicción específica, los diezmos, juntamente con los donativos y presentes hechos con regularidad, podían convertir un obispado en particular en una gran fuente regional de crédito y de capital de inversión. Es así que, tanto la Iglesia secular como las órdenes religiosas fueron las principales instituciones financieras durante buena parte del periodo colonial.

El lugar preeminente de la Iglesia en la sociedad colonial se derivaba fundamentalmente, claro está, del papel central que la religión tenía en la sociedad virreinal. Lo que acentuaba una vida ritual, ya intensa, eran los peligros, la incertidumbre y la inseguridad comunes de la vida cotidiana. A las ciudades y pueblos les faltaban las instalaciones más rudimentarias de salud pública y sanidad, quedando la población expuesta, sobre todo en la costa tropical, a las enfermedades y epidemias. No existían los sistemas de retiro de la basura y drenaje fuera de las calles, y la higiene personal era mayormente desconocida. Dado el pobre estado de la medicina, los hospitales eran principalmente lugares de contagio y muerte, en los cuales dar a luz era especialmente peligroso para la salud de una mujer. En suma, uno podía contagiarse en cualquier momento por efecto de una plaga o epidemia y llevado al Más Allá.

Abundaban otros peligros para la vida y la salud. Los ataques de los piratas a lo largo de una costa escasamente defendida, se hicieron cada vez más comunes. Las calamidades naturales como El Niño precipitaban los cambios climáticos y llevaban a cosechas malas y hambrunas ocasionales. Los terremotos golpearon Lima en 1655, 1687 y 1746, para no mencionar sino a los más fuertes, causando numerosas bajas por la endeble construcción de las viviendas populares. Cuando las estructuras más sólidas de los templos también caían, cobraban a menudo un gran número de víctimas entre quienes paradójicamente buscaban en ellos una protección contra las continuas remecidas.

El crimen y los disturbios constituían otras fuentes de peligro cotidiano. Las ciudades eran reductos de riqueza y oportunidades para los criminales que operaban, en particular en los días festivos, ceremoniales o de mercado, cuando las calles estaban abarrotadas de gente, proveniente, en su mayoría, de los campos vecinos. Los más temidos eran los ataques de bandoleros, que actuaban en los caminos secundarios y hacían así que los viajes fuesen peligrosos, y los asaltos

que hacían grupos de esclavos o indios fugados. Aunque estas incursiones tal vez no eran frecuentes, a menudo se convertían en fuente de rumores o leyendas y propagaban el miedo en la imaginación popular.

Dadas estas peligrosas circunstancias, no sorprende que la población buscase la protección espiritual y el consuelo ofrecidas por la religión (aunque esta no es la única explicación), lo que se manifestaba de diversas formas, desde las celebraciones y ceremonias religiosas populares y la misa regular de los domingos, a la participación en cofradías o incluso en la vida conventual. Huelga decir que desde una perspectiva macropolítica, el gran número de estos fieles otorgaba una inmensa autoridad y poder a la jerarquía eclesiástica, desde el arzobispo hasta los curas parroquiales. Dicha autoridad, ejercida regularmente desde el púlpito y el confesionario, contribuyó al control social e ideológico globales de la población. Igualmente ayuda a explicar, como veremos en breve, el surgimiento de reverenciadas figuras religiosas populares como Santa Rosa de Lima (Isabel Flores de Oliva) y San Martín de Porres, un mulato barbero contemporáneo suyo. La vida de profunda devoción a la religión, y de servicio altruista de estos santos a sus prójimos, fueron la fuente de los milagros que eventualmente hicieron que ambos fueran canonizados por Roma.

El siglo XVII vio también un vigoroso y riguroso esfuerzo por parte de la Iglesia para alejar a la población india de sus prácticas religiosas nativas. Las causas de lo que parecería ser una campaña costosa y puramente vengativa para suprimir las idolatrías estaban, en parte, en el ámbito de los difundidos temores geopolíticos y religiosos de las colonias. En el siglo XVII, España se enfrentaba a una amplia gama de enemigos protestantes, decididos a derrotar en Europa el poder de la dinastía católica de los Habsburgos y anexarse su imperio americano y sus fabulosas riquezas en plata. El atractivo de estas riquezas llevó a una serie de intrusos extranjeros, bucaneros y piratas —ingleses, holandeses y franceses— al Caribe en el tardío siglo XVI, forzando a España a mejorar sus defensas, especialmente para proteger las flotas de la plata en ruta de México y Perú a Sevilla. La aparición de los holandeses en la mar del Sur y los ataques a los navíos y puertos peruanos a comienzos del siglo XVII incrementaron hasta el paroxismo el temor a los odiados y satanizados protestantes en Lima y a lo largo de la costa peruana.

La intensidad del temor a un ataque, o incluso una invasión extranjera creó un clima de recelo interno en contra de los «extranjeros», cuyo parecer o creencias podían ser contrarios a la ortodoxia establecida. Tal había sido el caso en la misma España, lo que se expresó con la intensificación de la Inquisición y la expulsión de judíos y moriscos a comienzos del siglo XVI. Según Pierre Duviols, esta misma psicología desencadenó la repentina y viciosa campaña eclesiástica para extirpar las idolatrías, es decir eliminar las creencias y ceremonias religiosas de los nativos. En términos geopolíticos, el temor era que una «quinta columna» india rebelde

o descarriada (los indígenas conformaban el sesenta por ciento de la población virreinal) pudiera de algún modo ser movilizada por los enemigos de España que amenazaban el poder hispano en Perú. Después de todo, la conexión entre lealtad política y la Fe en el catolicismo ortodoxo había quedado bien establecida en España y América desde la conquista. Esta fue exactamente la mentalidad que influyó en Francisco de Ávila, el temido «extirpador de la idolatría», quien pasó buena parte de su vida persiguiendo implacablemente a los nativos «incrédulos y herejes» con el pleno respaldo del arzobispo de Lima.

Existieron campañas de extirpación de idolatrías en las décadas de 1620, 1640 y 1660, y desde entonces se realizaron periódicamente hasta 1730, cuando parecen haber cesado. Después de la primera campaña un sacerdote y participante en ellas, Pablo José de Arriaga, publicó una guía para futuros investigadores que registraba cuidadosamente las creencias y prácticas nativas. Empleando los expedientes originales de los juicios, Spalding (1984: 255-56) describió las tácticas de tipo inquisitorial que acompañaron una campaña específica contra las idolatrías en la parroquia de San Lorenzo de Quinti, en Huarochirí, en 1660:

> La investigación comenzaba con una denuncia secreta dada por un informante anónimo, nombrando a una serie de personas como idólatras, brujos y sacerdotes de las ceremonias tradicionales. Estas personas eran llevadas para ser interrogadas y luego se las encerraba mientras duraba la investigación... Se las amenazaba y algunas fueron incluso torturadas para extraerles confesiones y descripciones íntegras de las prácticas ceremoniales tradicionales [...] Finalmente, el 28 de mayo se pronunció sentencia contra 32 personas de Quinti y las aldeas vecinas. [...] Las sentencias iban desde la humillación pública a los azotes e incluso el exilio y encarcelamiento en la Casa de la Santa Cruz, la prisión limeña para personas consideradas como las más recalcitrantes de los sacerdotes de las creencias nativas descubiertas por los inquisidores.

El giro de los indios hacia su cultura, hacia sus viejas religiones y creencias, era una reacción al duro y explotador colonialismo impuesto por los europeos y forma parte de lo que Burga (1988) detectó como el surgimiento de una añoranza colectiva de una nueva utopía andina en el siglo XVII. Esta hace referencia a un conjunto de actitudes y comportamientos, expresados en libros, rituales, pinturas, sincretismo religioso y hasta en las fiestas populares, que buscaban restaurar a la vencida sociedad andina. Semejantes manifestaciones muestran que en la imaginación colectiva popular, la idea de una restauración india era lo que hacía posible soportar la opresión y explotación del orden colonial. Para Burga, esto produjo una «revolución en las mentalidades andinas», porque si bien la población india puede haber estado externamente más alejada de sus divinidades y mitos, no podía abandonar sus rituales, su ordenamiento político o los principios fundamentales que regulaban el funcionamiento de su sociedad. En

última instancia, la utopía andina constituyó un poderoso mecanismo con el cual crear una nueva identidad indígena y un sentido de poder étnico preservando, a través del simbolismo y el ritual, la cultura tradicional de los indios como un medio de sobrevivencia en el mundo hostil del colonialismo hispano. Como veremos, esta restauración tendría un gran peso en el estallido del difundido descontento y las rebeliones andinas que conmovieron el ordenamiento colonial en el siglo XVIII.

Un ordenamiento social tripartito

En el siglo XVII, la sociedad peruana asumió cada vez más las características de una sociedad tripartita: indios, mestizos e hispanos. Semejante segmentación fue el resultado de la temprana política colonial hispana de separar a los indios en sus comunidades o república de indios de la república de españoles de los colonos europeos. La clasificación oficial de los «indios» sentó las bases para las demandas fiscales tanto del Estado como de la Iglesia, en tanto que figurar en los padrones de tributarios legalizaba el acceso de los comuneros (indios que vivían en las comunidades de indígenas) a las tierras comunales. Pero en el mundo real la política de *apartheid* de la Corona fue imperfecta puesto que, como ya se señaló, los lazos tanto comerciales como culturales entre los mundos nativo e hispano eran amplios y numerosos un siglo después de la invasión.

Por supuesto que los contactos entre las dos culturas inauguraron desde el principio los procesos de mezcla racial, desarraigo y mestizaje (aculturación). El impacto de la conquista y la colonización sobre la comunidad indígena fue devastador desde la perspectiva demográfica y de los derechos humanos, y causó un continuo flujo de salida de nativos de las comunidades que buscaban escapar, no sólo a las cargas coloniales de la mita y el pago del tributo, sino también a las letales consecuencias de las epidemias. Mientras que muchos de estos emigrantes fueron forasteros que se volvieron a establecer en nuevas comunidades nativas, otros fueron arrastrados a los asentamientos hispanos en crecimiento, donde eran atraídos por diversas ocupaciones y tareas que contaban con una gran demanda. Al afincarse en los pueblos y ciudades españoles (o, más bien, en los anexos indígenas en sus afueras), con el tiempo los nativos andinos y sus hijos engrosaron las filas del creciente sector mestizo de la población, asimilando elementos del lenguaje, la vestimenta, la religión y las costumbres de la dominante población hispana.

Sin embargo, en el contexto racial y religioso del Perú colonial, los mestizos y castas sufrían de un doble prejuicio a ojos de las élites europea y criolla. De un lado, se asumía que habían sido concebidos fuera del matrimonio y que por lo tanto llevaban consigo el oprobio de la ilegitimidad, considerada un pecado carnal por la Iglesia católica. En efecto, la tasa de ilegitimidad de Lima en el siglo XVII era elevada en todos los grupos: más de cuarenta por ciento entre los

blancos y mestizos, y setenta por ciento entre los negros y mulatos. Por otro lado, a los mestizos les faltaba la llamada pureza de sangre: la insistencia en la falta de toda sombra de judaísmo o no catolicismo, que en la cultura hispana era algo requerido de las buenas familias, linajes y ascendencias. En el caso de los mestizos, las sospechas de idolatría de su pasado indígena perduraban. Aunque revelaban el racismo persistente y profundamente arraigado en el mundo hispano, muchos de estos prejuicios estaban codificados por la ley española. Por ejemplo, la prueba de pureza de sangre era exigida a los candidatos a cargos públicos y a quienes postulaban a la universidad, y a su vez era un requisito para ejercer profesiones tales como el derecho.

En realidad, la construcción de categorías y divisiones sociales a lo largo del periodo colonial fue un asunto complejo. Con el tiempo ello involucró múltiples factores hispanos de raza, etnicidad, clase, estamento, ocupación y cultura, importados de la metrópoli después de 1532, sin olvidar la diversidad de los patrones étnicos del viejo imperio inca que se fragmentó después del colapso del Tahuantinsuyo, pero que tomó mucho tiempo para que desaparecieran, si alguna vez lo hicieron. En términos generales, los funcionarios hispanos ignoraron este mosaico étnico andino y recurrieron, en sus registros fiscales y censales, a la clasificación por fenotipo en tres grandes categorías: indio, mestizo y mulato. Para el siglo XVIII, la elaboración de semejante sistema de castas había alcanzado tal nivel de obsesión aparentemente patológica, que hubo intentos extraordinariamente elaborados de categorizar las variadas permutaciones y combinaciones de los emparejamientos interraciales. Esta clasificación iba acompañada con la idea de que se podía ascender en el orden social mediante el matrimonio con una contraparte racial más clara, produciéndose así un efecto «blanqueador» en los hijos. Cahill (1994: 119) descubrió uno de estos sistemas de clasificación genealógica en el Cuzco dieciochesco, que brindaba un gran total de veintiún categorías socio-raciales (español + indio = mestizo real; mestizo + india = cholo; tente en el aire + india = salta atrás y así sucesivamente). Sin embargo, este sistema clasificatorio de castas que semejaba una hidra, fue eventualmente superado por la noción económica de clase en el momento de la independencia y posteriormente.

El sector privilegiado del orden colonial estuvo conformado por los españoles blancos y sus contrapartes criollas americanas, quienes se hallaban, en virtud a la conquista, en una posición de mando en la sociedad peruana, por encima de los indios, las castas y los africanos —la llamada gente de color—. Si bien les gustaba pensarse a sí mismos como de extracción exclusivamente española, la considerable mezcla de razas luego de la conquista hizo bastante más que «manchar» las filas de los criollos. Aunque en el Perú del siglo XVI los encomenderos no habían logrado adquirir el estatus de una nobleza feudal, en el siglo XVII surgió una privilegiada oligarquía criolla cada vez más poderosa y

arraigada junto a la élite peninsular, a pesar de los esfuerzos que la corona hizo por evitarlo. La pertenencia a esta élite ascendente se basaba en el hecho de haberse radicado tempranamente en el Perú, en la adquisición de riquezas y en contar con unas conexiones influyentes. Unos cuantos conquistadores que consiguieron hacer fortuna y obtener encomiendas lograron sobrevivir a las guerras civiles peruanas y conservar sus caudales para formar parte de ella. Otros colonos que se enriquecieron, en particular en la minería o el gran comercio, también lograron entrar a esta clase privilegiada. Algunos criollos más consiguieron o mejoraron su estatus de élite estableciendo conexiones influyentes en la corte, para así ganar fuentes de patronazgo. Además, se arreglaban matrimonios entre criollos influyentes y oficiales reales u otros peninsulares importantes, que también tendieron a solidificar el estatus de élite, aun cuando el rey había prohibido expresamente tales uniones como algo que iba contra los reales intereses. La formación y el creciente poder e influencia de la élite criolla local fue estimulada por la debilitación de la autoridad real en Perú, que coincidió en general con la decadencia del poderío hispano en el siglo XVII.

Al igual que en todas las clases y castas, el núcleo de la élite emergente en Perú durante el periodo colonial fue la familia. Sus principales características eran la solidaridad y la cohesión. Las familias tendían a ser grandes, con numerosos hijos, en tanto que los hogares albergaban, con frecuencia, un número considerable de parientes de diversas edades y generaciones. Los matrimonios tendían a ser arreglados, uniendo a múltiples líneas familiares a lo largo de generaciones y a menudo traían propiedad en forma de dotes. El mayorazgo (la herencia por parte del hijo mayor) no era algo típico, de modo que la riqueza se redistribuía a los hijos, hombres o mujeres, en forma relativamente igual. Aunque los hijos intentaban colocarse en las empresas familiares en forma complementaria, no siempre era posible encontrar un lugar, de ellos eran conducidos al sacerdocio o al convento.

Las familias prominentes y sus rivales formaban básicamente alianzas o, en palabras de Lockhart, «se aglutinaban» en ciudades, pueblos y regiones, y colocaban sus miembros en posiciones políticas o económicas claves. Sus empresas podían ser manejadas por distintos integrantes de la familia, pero ellas tendían a operar estratégicamente en forma unificada y entrelazada. En esta unidad también se incluía a los miembros de la familia extensa, incluyendo a los parientes más pobres y lejanos. En combinación con las características relaciones hispanas de patróncliente que iban más allá del círculo familiar inmediato, esta unidad familiar conformaba una constelación jerárquica fuertemente ligada, capaz de competir con las familias rivales por el control o dominio de una localidad o jurisdicción particular.

El papel de las mujeres españolas en una familia tal también reflejaba los patrones iberos. Para la segunda mitad del siglo XVI, el número de mujeres hispanas en el Perú había alcanzado más o menos la paridad con el de hombres. Sin embargo,

paridad no quiere decir igualdad y ellas asumieron los papeles específicamente femeninos que les eran asignados en la cultura hispana fuertemente patriarcal. Los varones tenían la primacía por tradición y por derecho, aunque la protección legal de las mujeres sí estaba incluida en los códigos coloniales españoles. Los papeles femeninos básicos eran contraer matrimonio según el arreglo familiar (muy a menudo a la temprana edad de nueve o doce años), permanecer en la casa, criar hijos y practicar las artes domésticas. Estas no eran, por cierto, tareas sociales insignificantes puesto que ellas, como señalase Asunción Lavrín (*CHLA*, II, 1984: 323), servían como el medio primario de transmisión culatural al Nuevo Mundo «de la cultura doméstica y material hispana, y de los valores religiosos y sociales». Como ya se señaló, las alianzas matrimoniales eran cruciales para el establecimiento de redes sociales familiares de parentesco y amistades, que podían mejorar el estatus y la posición de la familia en la sociedad virreinal.

Sin embargo, estos papeles domésticos no impedían asumir el manejo empresarial de una hacienda u otra empresa bajo ciertas circunstancias, tales como la viudez. En efecto, recientes estudios han mostrado a un número sorprendentemente grande de mujeres españolas y criollas que administraban los negocios familiares. Según la ley, las mujeres no tenían prohibido heredar, poseer o disponer de propiedades. Al mismo tiempo, no es usual encontrarlas en las profesiones o en las jerarquías institucionales salvo en la Iglesia, a la que muchas veces se retiraban si no estaban casadas.

Una respuesta al dominio masculino en la sociedad colonial, en particular entre las mujeres de clase alta, podría haber sido la decisión de vivir en un convento. Órdenes tales como las de los franciscanos, agustinos, dominicos y carmelitas fundaron conventos en Lima y otras ciudades en el siglo XVII. En Lima, por ejemplo, había trece conventos de monjas que guardaban más de la quinta parte de la población femenina de la ciudad. Ellos estaban exclusivamente orientados a la vida contemplativa y eran mantenidos principalmente por benefactores acaudalados. Las postulantes acomodadas llevaban dotes como si estuviesen contrayendo matrimonio y muchas compraban celdas en sus conventos y llevaban consigo esclavas para que las atendieran. En su mayor parte, los conventos atraían mujeres que no se casaban, que eran sumamente religiosas y que buscaban cierto grado de independencia de una vida colonial normal. Como estaban fundamentalmente ligados a la élite, estos conventos, al igual que otras órdenes religiosas, acumularon riquezas y se hicieron instituciones económicamente importantes en la sociedad colonial, como Burns (1999) lo ha detallado para el Cuzco.

La religiosidad se expresó, asimismo, afuera de los conventos —cuya capacidad se vio cada vez más presionada y tensa en el siglo XVII—, entre el creciente número de mujeres que carecían de la dote necesaria para ingresar a

ellos. Estas mujeres formaban comunidades religiosas laicas llamadas beaterios que eran más austeras que los conventos, y cuyas integrantes extremadamente piadosas, denominadas beatas, llevaban a cabo diversos tipos de obras sociales entre los pobres. En la atmósfera fuertemente religiosa del Perú colonial, las beatas eran mujeres solteras sumamente respetadas que vivían de la caridad de las limosnas y presentes del público en general, y que dedicaban su vida a las labores religiosas y comunales de caridad. Una de ellas fue Isabel Flores de Oliva (1586-1617), la hija de una modesta familia española de Lima que se convirtió en el ideal de la mujer criolla, el centro de un culto religioso y una de las mujeres más reverenciadas de la sociedad colonial. Conocida por sus obras de caridad entre los pobres y con la reputación de haber efectuado pequeños milagros, Santa Rosa de Lima, como se la llegó a llamar, se convirtió en la primera santa del Nuevo Mundo, siendo canonizada por Roma en 1671.

Otra limeña igualmente famosa, aunque por motivos completamente diferentes, fue la Perricholi (Miquita Micaela Villegas, 1739-1819), quien tipificó a la tapada, otra arquetípica mujer colonial peruana. Las tapadas eran mujeres de moral dudosa, que agraciaban coquetamente las calles de Lima usando mantos para esconder su identidad como forma de ganar la atención y seducir a los transeúntes varones. La Perricholi era una actriz que fue el escándalo de la sociedad limeña en el siglo XVIII, entre otras cosas por seducir abiertamente al anciano virrey Manuel de Amat y Junient y convertirse en su amante. La fama de la Perricholi se hizo legendaria en el Perú y a lo largo de los años ha sido tema de óperas, obras literarias y películas. Al igual que las monjas, tanto las beatas como las tapadas fueron, tal vez, manifestaciones del desafío de las mujeres coloniales peruanas, constreñidas por una sociedad dominada por los varones.

Con la aparición de la primera generación de criollos nacidos en América en la segunda mitad del siglo XVI, el proceso de diferenciación de los peninsulares e identificación con su tierra nativa pasó a configurar cada vez más una cultura criolla distintiva. En la primera generación de criollos y mestizos se desarrolló, casi desde el principio, un sentido de separación y diferencia con respecto a los españoles recién llegados, manifestándose esta diferencia de diversos maneras, entre ellos el lenguaje. Por ejemplo, los españoles nacidos en América comenzaron a referirse a los peninsulares como «chapetones» o «cuernos de lata», y a sí mismos como «españoles americanos». Este sentido de diferencia se fortaleció también con el hecho de que más allá de Lima, los criollos interactuaban en diversos grados con la población nativa, absorbiendo inevitablemente aspectos de su cultura.

Con el tiempo, como lo mostraron Brading y Lavallé, una distintiva conciencia, o nativismo, criollo —un naciente reflejo de la autonomía frente a lo peninsular— se manifestó no sólo en una activa vida cultural criolla, sino también en la vida social. Ella se reforzó con la acumulación de riqueza en Lima y otros

centros urbanos del virreinato. En Lima, la vida de la élite criolla giraba en torno a las principales instituciones de la ciudad como el cabildo, la audiencia, los conventos o monasterios y las cofradías, así como la corte virreinal y las diversas ceremonias y celebraciones que se realizaban con regularidad en la «Ciudad de Los Reyes». Por último, gracias al auspicio del virrey y otros miembros acomodados de la élite, Lima gozaba de una activa vida teatral —fundamentalmente barroca—, artística y literaria.

Sin embargo, debido a la organización cerrada y jerárquica del orden colonial, estrictamente encapsulada por la reglamentación oficial y la censura impuesta por la Inquisición, la producción literaria e intelectual de la élite criolla y peninsular se limitó sobre todo al escolasticismo, a la pirotecnia verbal y a la gimnasia estilística del gongorismo (el estilo literario del poeta español Luis de Góngora) y el barroco. El escaso espacio que quedaba para las formas realmente creativas y socialmente críticas de la expresión literaria encontraban una salida principalmente en la sátira, como en la mordaz poesía satírica del poeta barroco Juan del Valle Caviedes (1650-1697). Es más, si el barroco se dirigía a las modas literarias eurocéntricas establecidas en la corte virreinal de Lima, su contraparte en la arquitectura colonial fueron los estilos mestizos cuyas fachadas y espacios interiores fueron moldeados y decorados por artesanos indios, quienes llevaron a su trabajo unos fuertes estilos, motivos y técnicas precolombinos.

Resulta interesante que, al igual que en la arquitectura, lo más duradero de la producción literaria e intelectual del periodo colonial fue, no la poesía barroca o satírica producida en los salones cortesanos de Lima, sino la de una nueva clase de intelectuales andinos, mestizos, indios y criollos. A ella pertenecieron los dos grandes intelectuales andinos, el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1609) y Guamán Poma de Ayala (ca. 1535-1615), cuyas obras buscaban recuperar la historia y la cultura de los incas que los españoles se habían esforzado en borrar desde Toledo. Garcilaso era hijo de una princesa real incaica y un capitán español de la conquista nacido en el Cuzco, que dejó el Perú por España a los veinte años; allí escribió su gran obra los *Comentarios reales de los Incas* (Córdoba, 1609). Guamán Poma, por su parte, escribió *El primer nueva corónica y buen gobierno* (ca. 1615), una larga y prolíficamente ilustrada historia del dominio inca e hispano, que asimismo incorporaba una petición/plan al rey de España, Felipe III, para el «buen gobierno». «El hecho de que ni Garcilaso ni Guamán Poma hayan sido residentes de Lima habla de su cuestionada centralidad» (Castro-Klarén, «Lima», en Valdés 2003).

Capítulo IV

De la reforma imperial a una independencia a regañadientes, 1730-1824

En el siglo XVII el Perú se había alejado de España de diversas formas: sus élites criollas se volvieron más poderosas política y económicamente, su economía se hizo más diversa y autónoma, y su población cada vez más mixta. Al mismo tiempo, la producción de plata de Potosí cayó marcadamente, el comercio transatlántico se desaceleró y las remesas fiscales a Madrid cayeron. Con la égida de una nueva dinastía reinante, España intentaría revertir estas tendencias a lo largo del siglo XVIII con miras a revivir la producción y las rentas coloniales, así como recuperar el dominio peninsular, y por lo tanto metropolitano, del gobierno virreinal. Semejante «recolonización» del Perú se lograría con un audaz intento de reforma en la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, aunque algo exitosas en sus fines inmediatos, las reformas españolas provocaron también el descontento de grandes e importantes segmentos de la población peruana, paradójicamente abriendo el camino a la independencia de 1824.

Minería, población y avance económico

La caída secular de la producción de plata peruana fue revertida en el transcurso del siglo XVIII, al igual que el descenso constante de su población india. En el caso de la plata, la producción de Potosí subió modesta pero constantemente desde la década de 1730 hasta la de 1790. La recuperación fue estimulada mediante una disminución en los impuestos (el quinto real fue reducido a una décima parte en 1735), la mejora en el suministro de mercurio, la creciente demanda y el alza en los precios europeos, la estabilización del suministro de mano de obra gracias a las tendencias demográficas positivas y la prolongación del sistema laboral de la mita. A pesar de estos cambios, la estructura de la industria siguió siendo precaria y arcaica, basada en la explotación draconiana de los mitayos, con un bajo nivel de inversión e innovación tecnológica, y con propietarios ausentes.

En comparación con la modesta recuperación de Potosí, la minería de la plata en el Bajo Perú, cuyo ritmo marcaban las minas de Cerro de Pasco (1630), avanzó bastante bien. Pasco se convirtió en el segundo gran productor del virreinato, subiendo el valor de su producción de unos modestos trescientos mil pesos en el primer quinquenio del siglo, a un pico de 11,2 millones de pesos en el último. Es más, en Cailloma (Arequipa) y Hualgayoc (Cajamarca) se abrieron nuevas minas, de modo tal que la producción global del virreinato se septuplicó desde un mínimo de 2,3 millones de pesos en la primera década del siglo XVIII a un máximo de 40,6 millones de pesos, antes de que cayera hacia finales del siglo. En consecuencia, la economía global del virreinato, estimulada por un renacimiento de la producción de plata, experimentó un crecimiento gradual, aunque a menudo regional, entre 1730 y 1770.

Las tendencias demográficas también tuvieron un papel importante en este avance. A diferencia de Nueva España, la población predominantemente india del Perú había seguido cayendo constantemente a lo largo del siglo XVII, alcanzando su punto más bajo entre 1688 y 1721. La recuperación fue lenta y a menudo estuvo interrumpida por otras epidemias, así como por las bajas producidas por una serie de rebeliones indias. Para el censo de 1792, la población global del virreinato sumaba poco más de un millón, subiendo tal vez seiscientas mil personas desde 1620. Sin embargo, esta cifra no incluía a Puno (parte del virreinato de Buenos Aires hasta 1796), de modo que la población total de lo que habría de ser el Perú ascendía a 1,2 millones, u 8,7 por ciento de los 12,58 millones de habitantes de todas las colonias hispanoamericanas.

Étnicamente, la población india representaba ahora aproximadamente un cincuenta y seis por ciento del total (sesenta y dos por ciento incluyendo a Puno) la española, un trece por ciento y la mestiza o de castas un veintisiete por ciento. Este último fue el sector de crecimiento más rápido del virreinato. Los esclavos y mulatos negros, situados principalmente en la costa y alrededor de Lima, sumaban unas cuarenta mil personas. En realidad, a mediados del siglo XVII la ciudad de Lima era medio negra, un testimonio de la omnipresencia de la esclavitud en esta ciudad esencialmente aristocrática.

Las tasas de natalidad variaban según las categorías étnicas, pero eran por lo general bajas. Las mujeres europeas en su mayoría presentaban una tasa más elevada que las indias, una inversión del patrón de las sociedades industriales modernas, en las cuales los estratos inferiores tienden a tener familias más grandes. Además, hacia finales de siglo las tasas globales de mortalidad comenzaron a bajar, aunque dubitativa y esporádicamente, afectadas posiblemente por los esfuerzos realizados para mejorar la salud pública, sobre todo en las urbes; los más importantes fueron las campañas de vacunación contra la viruela de 1780, 1797-1798 y de comienzos del siglo XIX. Con todo, la expectativa de vida al nacer

era de apenas unos treinta años hacia 1800. La población de Lima alcanzaba los ochenta mil habitantes antes de los terremotos de 1687 y 1746, cayendo, tras ellos, a cincuenta mil, manteniéndose constante esta cifra hasta finales de siglo. Por su parte la población de Potosí disminuyó por el mismo motivo a treinta mil (1750). Hubo varias otras ciudades con una población de más de diez mil personas, entre ellas Cuzco, Arequipa, Trujillo, Cerro de Pasco y Huamanga.

Entonces, una población en crecimiento lento y una revivida producción minera constituyeron los dos ingredientes del gradual, aunque desigual, crecimiento económico que se dio en Perú entre 1730 y 1770. La producción agrícola y ganadera se expandió paralelamente en respuesta a una demanda de consumo mayor. Sin embargo, salvo en el caso de las sumamente eficientes propiedades jesuitas, productoras de vino y azúcar, contamos con poca información estadística sobre los precios, la productividad o las ganancias en el sector agrario. El rendimiento de la inversión en una típica hacienda serrana probablemente era magro, no superando el cinco por ciento y dependiendo básicamente de los precios altos en las malas cosechas y la subsiguiente especulación inducida por la carestía.

Lo que está más claro es que durante el último cuarto del siglo XVIII, el virreinato estuvo enormemente influido, tanto económica como políticamente, por el programa de reforma imperial conocido como las reformas borbónicas. En términos económicos, las reformas tuvieron un impacto contradictorio en el Perú, aunque en general parecen haber contribuido a una recuperación económica en los Andes entre 1775 y 1810. Las que se aplicaron en el sector minero aceleraron la producción de plata, y la introducción del comercio libre en el imperio trajo consigo un marcado renacimiento del comercio extranjero. Las reformas administrativas radicales contribuyeron paradójicamente a disminuir el tamaño del virreinato al amputársele vastas regiones en sus periferias septentrional y meridional, reorientando así los flujos comerciales y desviándolos del centro y de Lima, su capital comercial y administrativa. En general, el programa de reformas coloniales emprendido en el tardío siglo XVIII por los Borbones significó un esfuerzo concertado de España por restaurar el alguna vez profuso flujo de ingresos provenientes de su tesoro andino.

Las reformas borbónicas

El cambio del gobierno Habsburgo al Borbón a comienzos del siglo XVIII, puso en marcha un proceso que llevaría a unas amplias reformas generales, primero en la península y posteriormente en las colonias. También inauguró más de un siglo de enemistad entre la España borbónica e Inglaterra, que duró hasta la independencia de 1824 y que, entre otras cosas, despertó el temor de una invasión inglesa en ciertos círculos peruanos. En 1700, el enervado Carlos II falleció sin un heredero,

desatando así una crisis dinástica que culminó con la Guerra de la Sucesión Española (1700-1713) y el ascenso al trono hispano de una rama de la familia de Borbón, los gobernantes de Francia. Con el ímpetu de los Borbones y las nuevas ideas que se infiltraban de la Ilustración francesa, España fue reorganizada como un Estado más absolutista con una economía algo más eficiente; una remozada estructura burocrática ministerial antes que de consejos; y un ejército relativamente moderno. El nuevo Estado borbónico inició, asimismo, una serie de reformas para afianzar su nuevo control administrativo de la Iglesia y otros asuntos eclesiásticos. Sin embargo, las reformas españolas no fueron extendidas en general a América hasta que Carlos III (1759-1788) subió al trono .

En el siglo XVIII, desde la perspectiva de Madrid, su imperio americano estaba amenazado tanto externa como internamente. La erosión del poderío naval hispano en el Nuevo Mundo había llegado a tal estado que los bucaneros e intrusos extranjeros no solamente habían penetrado en el Caribe, sino que también daban la vuelta al Cabo y eran activos en el Pacífico, amenazando los puertos de la costa occidental y capturando y saqueando Guayaquil en 1690. Aún más, en la década de 1680 los portugueses habían logrado establecer una colonia en Sacramento, en un estuario del Río de la Plata, desde donde un contrabando sustancial que incluía cantidades de textiles británicos, penetraba el monopolio comercial español en Sudamérica meridional.

Igual o más dañino para el control imperial era que mediante el soborno, la intriga y la venta de cargos, las élites criollas locales habían logrado forjar alianzas de conveniencia con los oficiales reales, en forma tal que comprometían seriamente los intereses imperiales. Para revertir estas amenazas internas y externas adversas a los intereses metropolitanos y revivir las fortunas imperiales, los Borbones necesitaban reafirmar el poderío militar español en América y recuperar el control sobre la administración colonial. Una vez alcanzados estos objetivos, España podía esperar restaurar sus flujos cada vez más rezagados de ingresos de las colonias mediante la introducción de las reformas económicas necesarias.

La toma de La Habana por parte de Inglaterra en 1762, durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763), finalmente motivó a España a tomar medidas para reavivar su posición militar en el Nuevo Mundo. Poco después comenzó a fortalecer sus defensas generales y a establecer milicias locales en el Caribe y Nueva España. En Perú, el virrey Amat (1761-1776) incrementó las fuerzas realistas a cien mil hombres, la mayor parte de los cuales eran milicias locales, lideradas por oficiales peninsulares y criollos. En 1776 una expedición realista expulsó a los portugueses y retomó Sacramento, en la banda oriental del Río de la Plata.

El afianzamiento de las fronteras coloniales estuvo acompañado por la dramática expulsión de todos los jesuitas del Nuevo Mundo, ordenada por el rey en 1767. Esta orden se había vuelto rica y poderosa en los dos siglos desde su



Mapa 4. Latinoamérica colonial: organización política. *Fuente*: Mark A. Burkholder y Lyman L. Johnson, *Colonial Latin America*, 3ª ed. (Nueva York, 1998), 257.

arribo a América, y en consecuencia era ampliamente aborrecida tanto por diversos criollos, como por peninsulares. En el Perú, unas noventa y siete empresas jesuitas, valorizadas en 5,7 millones de pesos, fueron tomadas por el Estado y subastadas al sector privado a una fracción de su valor. La expulsión produjo una considerable pérdida de eficiencia administrativa y empresarial en Perú, para no mencionar el importante complejo educativo jesuita de maestros, colegios y universidades en Lima, Cuzco y otros lugares.

La gran reforma y reestructuración de la administración colonial tuvo mayor alcance que la expulsión de los jesuitas. La creación de dos nuevos virreinatos a partir del antiguo Virreinato del Perú, básicamente con fines defensivos y comerciales, alteró radicalmente el equilibrio geopolítico y económico en América del Sur. El primero fue creado en Nueva Granada, en la margen septentrional del Perú y Sudamérica, en 1717, y se hizo permanente en 1739. El segundo fue creado en el Río de la Plata en 1776, luego de la expulsión de los portugueses de Sacramento. Más significativo para el Perú fue que la audiencia de Chuquisaca, en el Alto Perú (aproximadamente la actual Bolivia), fue desgajada del viejo virreinato peruano, de manera que la plata de, y los bienes a, Potosí ya no pasaban por Lima en el Pacífico, sino por Buenos Aires y el Atlántico. Con la ruptura del antiguo circuito de Lima-Potosí, la capital del virreinato sufrió una inevitable caída en su prosperidad —para decepción y protestas de su élite mercantil—, al igual que la sierra sur (Cuzco, Arequipa y Puno).

Además de estos grandes cambios jurisdiccionales, España estaba particularmente decidida a reafirmar su control administrativo de la burocracia colonial, que había entrado en decadencia el siglo anterior. La audiencia, corte suprema y consejo asesor clave del virrey, era un caso en cuestión. Ella estaba repleta de acaudalados abogados criollos que habían comprado su puesto en número cada vez mayor a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Según los cálculos de Burkholder y Chandler, esta tendencia alcanzó su punto máximo en la década de 1740, cuando 36 de los 66 cargos de la audiencia de Lima fueron copados por los criollos, las dos terceras partes de ellos mediante compra directa.

Como parte de las reformas introducidas por el ministro de Indias José de Gálvez (1776-1787), que había incubado una profunda antipatía por los criollos mientras fue visitador en México (compartida por los peninsulares que nombrase en el gobierno virreinal), el rey puso fin al nombramiento de todos los criollos a la audiencia. Asimismo, incrementó el tamaño de dicho cuerpo para que se pudiera nombrar a más peninsulares, seleccionando a menudo a españoles de estatus relativamente bajo, lo que irritó mucho a los criollos. En consecuencia, para 1810 el número de oidores criollos se vio reducido a aproximadamente una tercera o cuarta parte criollos en las audiencias coloniales. Una política eclesiástica similar reemplazó a los superiores criollos por españoles en las órdenes religiosas de todo

el virreinato. Esta política excluyente, que comprendía el fin de la venta de los cargos más altos en la década de 1750, provocó inevitablemente el descontento de todos los sectores de la clase criolla, el cual aumentaría peligrosamente con el paso del tiempo.

Otra gran reforma administrativa fue el sistema de intendencias, introducido en México por Gálvez en 1765 y llevado al Perú por el visitador Antonio de Areche en 1777. Los nuevos intendentes eran similares a gobernadores provinciales (eventualmente habría ocho intendencias en Perú), responsables, con la ayuda de los subdelegados a cargo de cada distrito, del cobro de impuestos, la promoción de obras públicas y el estímulo general de la economía. Burócratas profesionales de carrera y asalariados fueron enviados desde España, debiendo teóricamente permanecer independientes de las élites criollas locales a las que estaban autorizados a gobernar y controlar.

Se efectuaron otras reformas para incrementar el flujo de los ingresos procedentes del Perú, que en la primera mitad del siglo se habían reducido. La alcabala o impuesto a las ventas se incrementó de dos a cuatro y luego a seis por ciento; para asegurar su cobro se abrieron nuevas aduanas, estratégicamente situadas por todo el virreinato; asimismo, se introdujo una serie de otros gravámenes, como aquel sobre el aguardiente. Al mismo tiempo, se afinó el manejo de los asuntos fiscales. Por ejemplo, funcionarios asalariados de las cajas reales y de aduanas cobraban ahora los impuestos que antes habían sido dados en arrendamiento a particulares o a grupos contratados por la Corona. En consecuencia, los reformadores borbones alcanzaron su mayor cosecha en la esfera de la recolección de rentas, eliminando algunas de las ineficiencias y corrupciones del sistema gracias a un mejor manejo y modernización burocrática. Esta reforma se hizo evidente rápidamente con el alza en el ingreso del tributo en la caja real que superaba, en mucho, al incremento demográfico de los indios en el tardío siglo XVIII. Para Perú, los ingresos totales en 1789 ascendieron a 4,5 millones de pesos, proviniendo 1,2 millones de la minería de plata y novecientos veinte mil del tributo indígena.

Las reformas borbónicas estuvieron muy influidas por la Ilustración europea, cuyas ideas se esparcieron a América durante el siglo XVIII, sobre todo en el ámbito científico. Uno de los principales medios de su difusión al virreinato peruano fueron las numerosas expediciones científicas europeas que llevaron consigo las nuevas ciencias naturales: física, botánica, química, arqueología e historia. Estas expediciones fueron recibidas por intelectuales criollos, ansiosos de aplicar los nuevos conocimientos para aprender más sobre sí mismos, su medio y su sociedad. Por ejemplo, en 1735 una expedición francesa midió los límites geográficos del Perú y compiló una vasta gama de información descriptiva del virreinato. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos científicos españoles que formaban parte de ella, publicaron posteriormente un informe comprehensivo y crítico de la administración colonial.

De igual manera Cosme Bueno, un facultativo español, publicó *Descripciones geográficas del Virreinato del Perú* en una serie de almanaques limeños en las décadas de 1760 y 1770.

Aún más, el sofocante control del escolasticismo fue aflojándose gradualmente en los centros del saber como la Universidad Mayor de San Marcos, cuya ampliación del conocimiento en las ciencias naturales quedó resaltada en 1723, cuando la facultad de medicina aceptó la explicación de la circulación de la sangre. De igual manera, las escuelas jesuitas estaban enseñando las ideas de Descartes, Newton y Leibnitz mucho antes de la expulsión de la orden en 1767. Las nuevas corrientes de pensamiento de la Ilustración penetraron incluso en los círculos intelectuales del clero secular y las restantes órdenes monásticas. De hecho, para finales del siglo, el pensamiento ilustrado era algo relativamente común en los círculos intelectuales del virreinato, y muchas de estas ideas circularon abiertamente en las páginas del *Mercurio Peruano*, publicado a comienzos de la década de 1790.

Sin embargo, en general, el estado de la educación en el virreinato durante el siglo XVIII siguió siendo un lujo de una clase privilegiada y fue inhibido por una población urbana que «vivía alrededor de la plaza, el mercado y la iglesia, no el colegio» (Castro-Klarén, «Lima», en Valdés 2003). Según Macera, para finales del siglo XVIII sólo había cinco mil alumnos en las escuelas primarias, la mayoría de los cuales pertenecía a la aristocracia. La educación no era generalmente accesible a los sectores «medios» o plebeyos de la población, en tanto que la mayoría de los libros eran importados y se acumulaban principalmente en bibliotecas privadas o eclesiásticas antes que públicas, como la del intelectual ilustrado Hipólito Unanue.

Más allá de la esfera intelectual y cultural, el mayor impacto de las reformas borbónicas se dio en la esfera económica. Durante el siglo XVII, el nivel del comercio de contrabando había alcanzado proporciones abrumadoras en todo el imperio español en América. La debilidad militar de España permitió a sus rivales europeos operar virtualmente sin control alguno en las Américas, haciendo trizas, como vimos, al monopolio comercial de la Corona e introduciendo inmensas cantidades de bienes de contrabando en las colonias. Es más, a consecuencia de la Guerra de Sucesión Española, Francia, la aliada de España, obtuvo permiso para operar flotas mercantiles y comerciar libremente por toda la costa occidental. Entre 1701 y 1724, ciento cincuenta y tres naves mercantes francesas, que doblaban regularmente por el Cabo de Hornos desde el Atlántico, visitaron los puertos de la costa occidental, inundando la región con mercadería europea.

Estas acciones hicieron que el viejo sistema de flotas que operaba entre Lima, la feria de Portobelo y Sevilla fuera cada vez más marginal e irrelevante. Así, entre 1699 y 1713, únicamente una flota llegó a Portobelo, donde los comerciantes limeños adquirieron las mercancías acostumbradas, sólo para que sus precios fueran fuertemente socavados por la mercadería francesa a su regreso a Lima. El

arribo de naves mercantes extranjeras individuales al Callao y otros puertos de la costa occidental continuó, con conocimiento del virrey, durante la mayor parte del siglo, incluso después de 1713.

En 1788, el viejo monopolio comercial era virtualmente un caos, lo que hizo que el rey abriera el imperio a un comercio libre mayor. Por último, se puso fin al sistema de flotas y se permitió el tráfico dentro del imperio entre todos los grandes puertos de España y el Nuevo Mundo. Tan solo en la siguiente década, el comercio transatlántico se disparó a medida que las exportaciones registradas se triplicaban, las rentas de aduana subían en más del doble y las importaciones alcanzaban niveles sin precedentes. Dieciséis naves descargaron en el Callao bienes con un valor de veintidós millones de pesos tan solo en 1786.

Este dramático incremento en el comercio extranjero, el salto en la producción de plata y el incremento en los impuestos pronto se reflejaron en los ingresos recibidos por la caja real de Lima. Según TePaske, los reales ingresos subieron agudamente, de doce millones (1776-1780) a dieciséis millones (1781-1785) y a 18,5 millones de pesos (1786-1790). Además, a medida que la producción de plata se incrementaba, la demanda de manufacturas en Cerro de Pasco y otros lugares del Bajo Perú subía, dando a los comerciantes limeños un mercado alternativo a Potosí donde distribuir los bienes recibidos del exterior. Este mercado resultó ser tanto más importante cuanto que el sistema de reparto, aprovisionado fundamentalmente por los comerciantes limeños, fue cortado con la introducción del sistema de intendencias en 1784.

Según los estimados de John Fisher, la producción de plata en el Bajo Perú se duplicó, pasando de alrededor de doscientos cincuenta mil marcos en 1776 a más de quinientos mil marcos en 1792, alcanzando su punto máximo en 1799 con seiscientos treinta y siete mil marcos, desde donde comenzó a disminuir gradualmente hasta 1810. En comparación, la producción de las minas de Potosí se incrementó moderadamente en el mismo lapso antes de entrar en decadencia a partir de 1796, cuando los residuos de mineral se agotaron y el suministro de mercurio procedente de Europa fue cortado por la guerra. Fisher considera que se trata de un mito creado esencialmente por el consulado de comercio limeño para sostener que Lima estaba arruinada o que el Perú había entrado en depresión por las reformas administrativas de 1776, aunque sí reconoce que algo del comercio se vio inevitablemente desplazado de Lima a Buenos Aires. Por el contrario, él piensa que el renacimiento del comercio transatlántico después de 1778, junto con el incremento de la producción de plata en el Bajo Perú, no solamente contribuyó a una mayor prosperidad en todo el virreinato en el tardío siglo XVIII, sino que además sirvió para proteger a Lima de la pérdida del comercio de Potosí.

Aunque hubo algunas inevitables dislocaciones económicas con el desplazamiento comercial, parecería que las élites comerciales limeñas se adaptaron

a la nueva política del libre comercio. Después de todo, la ciudad estaba convirtiéndose en la fuerza principal en la rearticulación de importaciones y exportaciones del sur (el antiguo eje Lima-Potosí) al centro/norte (el eje Lima-Pasco/Hualgayoc), que se convirtió en el nuevo polo o núcleo de la economía virreinal en el siglo XVIII.

Si bien la actividad económica en general parece haberse recuperado en el último cuarto del siglo, a algunas mercancías locales peruanas no les fue muy bien. Esto fue particularmente cierto en el caso de las lanas andinas. La producción de lana para los obrajes, que surgiera a finales del siglo XVI para producir paños de baja calidad para el segmento inferior o popular de los mercados de consumo de Potosí y otras ciudades, se amplió rápidamente en el altiplano sureño, idóneo ecológicamente para la crianza de ovejas. La lana era entonces llevada a los obrajes de Huamanga (Ayacucho), Cuzco y otros lugares, o producida en las estancias alrededor de Cajamarca y Quito, que también tenían obrajes, convirtiéndose las cuatro ciudades en grandes centros textiles de los Andes.

El creciente flujo de grandes cantidades de textiles británicos baratos, importados durante el siglo XVIII, así como la abolición del reparto o venta forzosa de bienes a los indios por parte de los corregidores, golpeó el comercio formal de paños. La competencia extranjera finalmente forzó a la industria quiteña a pasar de la producción de telas de gran calidad para Lima, a paños de menor calidad para el mercado norteño de Nueva Granada. En Huamanga, los obrajes primitivos estudiados por Miriam Salas dependían casi exclusivamente del reparto y se vieron forzados a redirigir su producción hacia Lima después de las reformas de la década de 1780.

Aunque se beneficiaban por su mayor cercanía a sus mercados, los obrajes del Cuzco también se vieron afectados adversamente por las importaciones. El estudio de Tandeter y Wachtel sobre los precios de mercancías encontró un descenso drástico en el precio de los paños de lana remitidos por los obrajes del Cuzco a Potosí a comienzos del siglo XVIII. Los precios se estabilizaron entre la década de 1740 y 1781, pero en los diez años siguientes cayeron estrepitosamente debido al gran flujo de textiles británicos baratos importados a Potosí a través del puerto de Buenos Aires. Con sus operaciones rudimentarias, la mayoría de los obrajes andinos eran simplemente incapaces de competir con los textiles extranjeros importados.

La producción de por lo menos otras dos mercancías no llegó a ser robusta o fue negativa en la segunda mitad del siglo XVIII. Jacobsen sostiene que, fuera de los animados distritos mineros de Pasco y Hualgayoc, la demanda de ganado en el virreinato fue modesta en este periodo. En el caso de la producción de azúcar, se vivía una decadencia general luego de que alcanzara su apogeo a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Según Ramírez, la caída en los precios se debió a varios factores: la creciente competencia internacional del Brasil y el Caribe, la

competencia regional; la difusión de productores a pequeña escala; la eliminación del tráfico de esclavos, que suministraba la mayor parte de la mano de obra de las plantaciones; y el creciente endeudamiento de los hacendados. A pesar de ello, las cifras de producción indican para 1791 que el azúcar continuaba siendo un producto importante, con un gran mercado interno además de considerables exportaciones a Chile. Además, muchas plantaciones cambiaron su producción por derivados más baratos tales como el aguardiente, que desarrolló un mercado considerable en las comunidades mineras.

El estudio de otros cultivos costeños muestra un panorama mixto. La producción del trigo cayó, no como generalmente se cree debido al gran sismo de 1687, sino a las crecientes importaciones de Chile, que podían canjearse por azúcar. Según Flores-Galindo (1984), este intercambio fue rentable para los comerciantes limeños, que controlaban el tráfico y el negocio del pan, y que a través de préstamos y acuerdos de compra lograban dictar qué cultivos debían sembrarse en la costa. El resultado fue el desplazamiento del trigo por el azúcar y la alfalfa, estando esta última en expansión debido a la necesidad de mantener el número creciente de mulas necesarias para el transporte entre Lima-Callao y el interior. Para Flores-Galindo, este desplazamiento ayuda a explicar cómo la agricultura costeña se orientó cada vez más hacia la exportación (azúcar) a costa de la producción para un mercado interno (trigo).

Todos estos elementos se combinan para mostrar un cuadro económico más completo, aunque desigual, del virreinato en el último cuarto del siglo XVIII. El crecimiento económico agregado se reflejaba en la creciente producción de plata, el alza en el comercio extranjero y tal vez en el doméstico, la mejora en la producción agrícola y el incremento de los ingresos gubernamentales. Con su demanda de insumos y suministro de numerario, la minería de la plata, en particular, era un sector dominante. Sólo las manufacturas textiles registraron una baja en la década de 1780, pero se recuperaron ligeramente en la de 1790 debido a los conflictos internacionales. Al mismo tiempo, el centro de gravedad económica se desplazó del sur hacia el centro y el norte, a medida que el circuito Potosí-Lima era reemplazado por el de Cerro de Pasco/Hualgayoc-Lima. Con todo, la integración global de la economía virreinal se vio perturbada por la continua vitalidad de la economía de subsistencia nativa y los altos costos de transporte y transacción del escarpado terreno andino. La especialización regional siguió limitada a la zona azucarera de la costa norte, la cual se contrajo en la segunda mitad del siglo.

Este panorama económico en general positivo, se vio oscurecido a mediados de la década de 1790 debido al estallido de las guerras napoleónicas en Europa, que conllevó una fuerte caída en el comercio imperial y el ocaso de las reformas establecidas por España. Mientras que según Fisher, la producción minera siguió siendo relativamente fuerte durante la primera década del siglo XIX, al igual que

el comercio con base en Lima, otros sectores de la economía se estancaron cada vez más después de 1796.

La era de las insurrecciones andinas

El siglo XVIII es muy conocido en el Perú como la era de las insurrecciones andinas. Dos siglos y medios después de la conquista, una serie de levantamientos populares estremecieron el virreinato hasta sus mismos cimientos. Ellos amenazaron no sólo con derribar al antiguo régimen sino también, en algunas regiones, con reemplazarlo reviviendo el imperio inca bajo el gobierno de descendientes de los antiguos reyes. O'Phelan estima que entre 1720 y 1790 ocurrieron más de cien insurrecciones violentas contra el orden colonial, que involucraron a un gran número de campesinos andinos, dirigidos a veces por castas y criollos disidentes.

Dos levantamientos fueron particularmente notables. Uno de ellos fue encabezado por Juan Santos Atahualpa, un serrano mesiánico y autoproclamado descendiente del Inca asesinado, que en 1742 convocó a los indios y mestizos descontentos de los Andes centrales (véase el mapa en Stern 1987: 41) a una guerra de diez años con el régimen colonial. La otra rebelión fue dirigida por un curaca indio descontento —José Gabriel Condorcanqui—, que movilizó al campesinado de una inmensa región en la sierra sur a comienzos de la década de 1780.

En el siglo XVII, la montaña central (que linda con los actuales departamentos serranos de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho) fue centro fundamentalmente de misioneros, franciscanos sobre todo, en busca de almas, y de unos cuantos empresarios intrépidos que esperaban explotar sus recursos. Estos últimos descubrieron —probablemente mientras buscaban oro— unos valiosos depósitos de sal en el Gran Pajonal que los nativos campas o ashaninkas habían extraído y usado como una forma de moneda. Al igual que sus predecesores después de la conquista, los misioneros tuvieron que superar los abusos inflingidos a los nativos por los mineros de la sal, para así ganar la confianza necesaria para llevar a cabo su evangelización. Los nativos también estaban sufriendo con las enfermedades europeas, contra las cuales estaban virtualmente indefensos. Hacia mediados del siglo XVIII, los misioneros, según Millones (1995), habían logrado organizar treinta y dos misiones de aproximadamente trescientos habitantes cada una, o un total de nueve mil personas, administradas desde la intendencia de Tarma. A pesar de las buenas intenciones de los franciscanos, diversas rebeliones nativas sacudieron la región antes de la aparición de Juan Santos.

Además de la población indígena, los serranos (indios, castas y blancos) también emigraban cada vez más a la región por razones económicas o políticas. Algunos tomaban parte en el creciente comercio de productos de la selva (el bosque tropical), que además de la sal incluía hojas de coca, frutas, maderas,

algodón y otros recursos valiosos. Es más, los misioneros y terratenientes habían llevado sirvientes y trabajadores de la sierra; y negros, castas e indios disidentes de esa región se fugaron a las zonas más remotas en busca de refugio. En suma, en la montaña central una población mixta de nativos y serranos conformó una sociedad multiétnica y racial.

Lo poco que sabemos del rey Juan Santos Atahualpa Apu Inca Huayna Cápac, indio cristiano de la ciudad del Cuzco —como se le describiera en una crónica misionera—, proviene de diversos documentos del periodo. Era un indio o mestizo, probablemente nacido en la sierra vecina y educado en el Cuzco, que posiblemente viajó al África con un jesuita al cual también servía. Su arribo al Gran Pajonal coincidió ostensiblemente con una serie de terremotos y temblores, cuyo poder pronto se dijo poseía. Sosteniendo ser uno de los últimos reyes Incas, aparentemente llevaba la insignia de la familia real incaica y vivía la vida de un asceta, comiendo poco, mascando coca y evitando el contacto con las mujeres.

En mayo de 1742, Juan Santos declaró su intención de expulsar del Perú a todos los españoles y sus esclavos negros. Proclamando el fin de la opresión colonial, prometió instaurar una nueva era de prosperidad para «sus hijos». Además hablaba de restaurar el imperio, uno en el cual los indios propagarían sus propias formas de cristianismo. Semejantes sentimientos milenaristas no eran raros, en ese entonces, entre la población indígena andina.

Según Stern y otros autores, tales anhelos y creencias populares eran una respuesta a un descontento y una sensación de desesperación cada vez más profundos en la población india de las misiones, donde la vida no llegaba a ser la utopía originalmente imaginada por sus fundadores. Para empezar, los franciscanos tenían una mala opinión de la poligamia, una práctica difundida entre las tribus de la selva y entre sus caciques en particular. Más significativo era el terror asociado con la propagación de enfermedades desconocidas, las cuales resultaban más virulentas dentro de los confines de estos enclaves urbanos. La reglamentación de la vida en las misiones era igualmente desagradable para una población que daba gran valor a la libertad personal. Es más, si bien los franciscanos usualmente trataban bien a sus pupilos, los indios de las misiones y los demás eran a menudo víctimas de los abusos de los mineros europeos de la sal y de otros españoles que buscaban enriquecerse a costa del trabajo nativo. Por último, los investigadores han señalado la presencia perturbadora de indios fugados de la sierra («retirados»), los cuales lograron escapar de las condiciones más explotadoras del dominio hispano en las alturas. Su experiencia más directa con la opresión española podría también haber contribuido a la impaciencia de la población indígena de la selva.

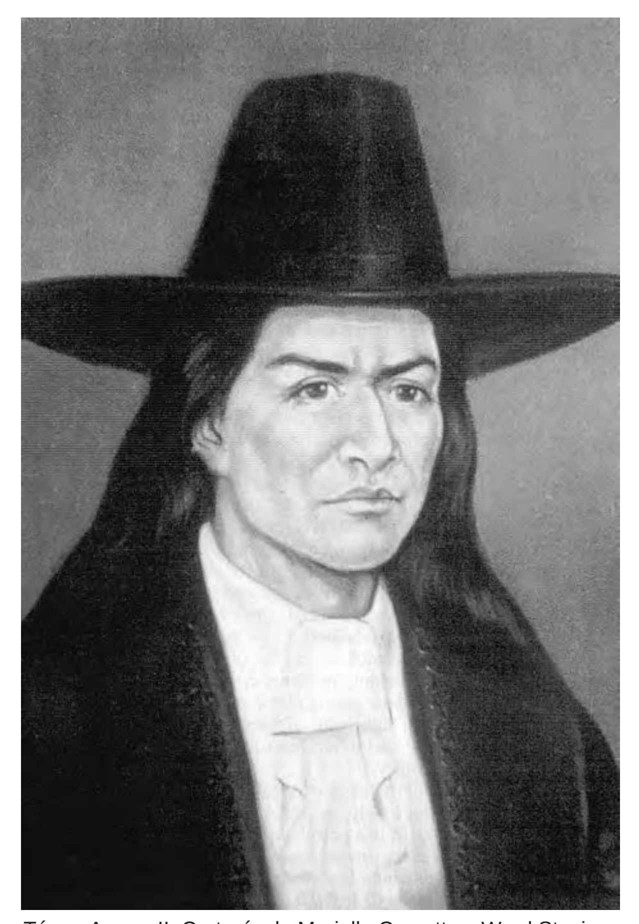
Reuniendo hasta dos mil nativos de diversas tribus, un número extraordinario considerando que la mayoría de las comunidades dispersas tenía cuando mucho unos cuantos centenares de habitantes, Juan Santos rápidamente obtuvo el control

del Gran Pajonal. La selva jamás había sido un área en la cual el control imperial, ya fuera de incas o españoles, fuese mucho más que nominal, de modo que cuando las autoridades intentaron sofocar este levantamiento enviando expediciones desde la sierra, fracasaron repetidas veces. Las formaciones de tropas y las tácticas europeas apenas si eran efectivas en los densos bosques tropicales amazónicos.

Más preocupante para los españoles era la amenaza que la rebelión presentaba en las áreas contiguas de la sierra central (los distritos de Huanta, Jauja, Tarma y Huánuco). De hecho, ella estalló en un punto estratégico de los Andes centrales, la montaña, en donde el tránsito de una zona a otra era comparativamente fácil. Resulta interesante que esta misma zona engendraría las guerrillas comasinas ciento treinta años más tarde, durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), descritas por Mallon (1983). Un área de tránsito similar entre sierra y tierras bajas es Huanta, en Ayacucho, donde en 1896 tuvo lugar la Rebelión de la Sal, historiada por Husson, y donde Sendero Luminoso operó en las décadas de 1980 y 1990.

En el caso de Juan Santos, el temor entre los funcionarios hispanos era que la rebelión alcanzara la población india de la sierra, donde al parecer sí contaba con algo de respaldo, y que por lo tanto se convirtiese en un levantamiento panandino aún más serio. En efecto, en 1752 las fuerzas de Juan Santos ingresaron levemente a la comunidad serrana de Andamarca. Pero éste resultó ser el último encuentro serio entre sus seguidores y las fuerzas coloniales. De ahí en adelante el movimiento parece haber amainado y su líder desapareció inexplicablemente, tal vez asesinado por uno de sus propios lugartenientes.

A diferencia de la rebelión de Juan Santos, sabemos considerablemente más sobre la otra gran rebelión andina de 1780, dirigida por José Gabriel Condorcanqui, quien adoptó el nombre de Túpac Amaru («serpiente real» en quechua) por el último Inca ejecutado por Toledo en 1572. Terrateniente, arriero y curaca de moderada fortuna, Túpac Amaru nació en 1738 en el pueblo de Surimana, a noventa km al sudeste del Cuzco. De figura físicamente imponente, tenía un metro setenta de altura, más que la mayoría de los indios, y llevaba la vestimenta de un noble español, incluyendo un saco de terciopelo negro, chaleco dorado, sombrero de piel de castor, medias de seda y zapatos con hebillas de oro. Una vez que estalló la revuelta, algunos contemporáneos dijeron que a menudo llevaba una insignia incaica alrededor del cuello. Esta insignia era significativa pues al igual que Juan Santos, Condorcanqui intentó aprovechar las corrientes milenaristas populares como el medio para unir a la población india en contra del régimen colonial. La guerra civil que siguió fue breve y cruel antes de que las fuerzas de Túpac Amaru II fuesen derrotadas y su líder capturado y ejecutado.



Túpac Amaru II. Cortesía de Mariella Corvetto y Ward Stavig

Las causas del descontento campesino en este periodo han sido objeto de muchos debates por parte de los investigadores andinos. Lewin y Fisher lo concibieron como una reacción a la opresión colonial, como un anuncio del estallido posterior de las guerras de independencia. Como veremos, O'Phelan enfatizó la política de reforma fiscal iniciada por los Borbones. Por su parte, Szemiñski vio la rebelión en términos más tradicionalmente andinos, esto es como algo que seguía una lógica y una cosmovisión andina profundamente arraigadas. Del mismo modo, Burga la atribuye a la resurrección o renacimiento de la idea de una utopía andina (un «renacimiento andino»). Por último, Flores-Galindo interpretó la rebelión como un movimiento anticolonial y protonacionalista, subrayando su énfasis en

la unión de todos los peruanos nacidos en el país con miras a la expulsión de los españoles. Aunque todas estas explicaciones contribuyen a nuestra comprensión de la rebelión, sobresalen las reformas borbónicas, en particular por su «ajuste de tuercas» de la explotación colonial mediante una creciente exigencia fiscal —y de otro tipo— por parte de la Corona en la segunda mitad del siglo XVIII.

Los asuntos fiscales, sobre todo los impuestos, estaban esencialmente en la raíz del descontento social colonial. Aunque diversos sectores del orden social experimentaron las consecuencias de este proceso, la población india fue quien soportó el peso de los cambios imperiales y quien se alzó en su contra en una violenta protesta. En ningún caso esto fue tan claro como en las reformas reales que tendían a intensificar el reparto de mercancías, o venta forzosa de bienes a los indios por parte de los corregidores. Desde la década de 1670, la Corona emprendió nuevas medidas que tuvieron el efecto de intensificar el sistema del reparto, en un esfuerzo por ampliar forzosamente los estancados mercados y revivir sus ingresos. Por ejemplo, se limitó el cargo de corregidor a cinco años y se puso en venta al mejor postor, junto con otros cargos. Dado que la remuneración del corregidor siempre había dependido del reparto, éste se hallaba ahora bajo un constreñimiento temporal específico dentro del cual beneficiarse con su «inversión» y pagar a sus acreedores comerciales los bienes que ahora «vendería». Con la decadencia del comercio transatlántico, los comerciantes limeños intensificaron, como lógica alternativa, sus vínculos con los corregidores para explotar el mercado interno aún más con el reparto.

Junto con la intensificación del sistema de repartos, la corona posteriormente tomó medidas para incrementar el tributo de la población indígena y la mita asignada a la minería (la «mita minera»). Jacobsen, por ejemplo, estimó que el cobro del tributo en el Cuzco se incrementó diez y seis veces entre 1750 y 1820. Estos tres mecanismos sirvieron para intensificar las demandas sobre la mano de obra para que aumentara la productividad, además de erosionar la legitimidad de los curacas, que tenían problemas para cobrar los impuestos y a quienes los Borbones posteriormente buscarían reemplazar. Frente a la falta de capital y nueva tecnología, la única forma de incrementar la productividad era intensificando el nivel de explotación de la mano de obra en minas, haciendas y obrajes. En el caso del reparto, Golte estima que la cantidad de horas-hombre movilizadas para saldar las deudas incurridas por los trabajadores indios con los corregidores subió en más del triple entre 1754 y 1780.

Una forma de asegurar un mayor número de trabajadores para los mineros, obrajeros y hacendados era revisar el censo a través del cual se calculaban el tributo y la mita. Esto fue ordenado por el virrey Castelfuerte en 1719. Castelfuerte pensaba que los funcionarios locales, sobre todo curas y corregidores, no estaban registrando el número exacto de indios de sus distritos para así desviar a sus bolsillos

las rentas reales procedentes del tributo y la mita. También tomó medidas para eliminar un vacío legal mediante el cual los campesinos indios intentaban librarse del tributo y sus obligaciones en la mita registrándose como mestizos mediante el pago de sobornos. El nuevo censo exigía que los mestizos, el sector de la población que crecía con mayor rapidez, produjeran evidencias documentales de su nacimiento. Comprensiblemente esta medida, que podía forzar a los mestizos a ingresar a la categoría de indio, provocó y ultrajó a este segmento de la población. Para la Corona significaba más tributarios, extraídos ahora tanto de los sectores indio como mestizo de la población.

La presión sobre las comunidades nativas de campesinos también se intensificó en el siglo XVIII de otros formas. Para empezar, la población comenzó a crecer nuevamente después de 1720, dando origen al deterioro en la relación hombre-tierra en las comunidades de indígenas. Al mismo tiempo, las propiedades agrícolas ampliaron sus fronteras a expensas de las tierras comunales, en reacción a los incentivos estatales para que incrementaran la producción. Una base territorial cada vez más pequeña y una población creciente no sólo hicieron más difícil para el sector de subsistencia campesino alimentarse o generar un excedente que se pudiera comercializar en el mercado externo, sino que además expulsaron su fuerza laboral a un mercado de trabajo cada vez más explotador.

El resultado de estas tendencias fue un deterioro en el nivel de vida del campesinado andino en la segunda mitad del siglo XVIII. Golte habló del «saqueo» de la sociedad rural peruana, en tanto que Larson describió «la pauperización gradual» del campesinado. Otro historiador más señaló que durante este periodo el sistema de explotación colonial perdió toda huella del paternalismo y adaptación que antes había tenido. En suma, en los Andes, el colonialismo español asumió su forma más desnuda y despiadadamente opresiva. Bajo estas circunstancias, las estrategias de resistencia indígena cambiaron de encubiertas y pasivas (las prácticas religiosas subrepticias, por ejemplo) a la confrontación abierta y violenta, iniciando la era de la insurrección andina. El blanco obvio de la ira indígena serían los corregidores, que simbolizaban los peores rasgos de la intensificada opresión colonial.

Aunque se produjeron esporádicamente revueltas desde la década de 1720 que fueron relativamente breves, limitadas y localizadas; la gran rebelión de Túpac Amaru que estalló en 1780 fue un movimiento de masas organizado que abarcó a todo el sur andino, desde Cuzco a La Paz. Significativamente, el epicentro del movimiento se hallaba en el centro del Perú indio y de los circuitos productivos y comerciales basados en las minas de Potosí, que estaban sujetos a las exacciones del tributo y la mita, pero la economía y política del Alto y Bajo Perú estaban sustancialmente integradas, y eran sumamente sensibles a toda presión fiscal y comercial.

Dicha unidad se quebró en 1776, cuando Carlos III repentinamente separó el Alto Perú del virreinato peruano y lo incorporó al recién creado Virreinato del Río de la Plata. A este cambio le siguió en 1778 la política del «libre comercio» en el imperio, que abrió los puertos americanos, Buenos Aires inclusive, al comercio irrestricto con España. Entre otras cosas, estas reformas perturbaron severamente las tradicionales rutas comerciales que habían unido económicamente a la región en los dos siglos anteriores. La plata de Potosí se dirigía ahora a Buenos Aires, en tanto que los bienes importados pasaban por el puerto atlántico al sur peruano, compitiendo con la producción textil del Cuzco. El estancamiento resultante de la economía cuzqueña afectó negativamente a la mayoría de la población, incluyendo a Túpac Amaru y a muchos de sus seguidores, quienes culparon al régimen colonial.

Estos importantes cambios administrativos y económicos fueron precedidos por un agudo incremento en la alcabala, del dos al cuatro por ciento en 1772, y luego al seis por ciento en 1776, y su cobranza se hizo más eficiente gracias al establecimiento de una serie de aduanas por toda la región. La ejecución de estas medidas fue encargada al nuevo visitador general, Antonio de Areche, quien llegó de España en 1777. El visitador ordenó también a los corregidores cobrar la alcabala. Dicho cambio llevó a que estos últimos fuesen el blanco de las protestas populares no sólo por parte de campesinos que resentían el reparto, sino también de hacendados y comerciantes mestizos y criollos, afectados adversamente por el cobro de la alcabala. En efecto, la triplicación de la misma en la década de 1770 perjudicó a un segmento mucho más amplio de la población colonial —hacendados, obrajeros, mineros, pequeños labradores, vendedores minoristas, arrieros y artesanos—, y principalmente a los sectores medios de pequeños productores y comerciantes, sobre cuyos modestos ingresos pesaba desproporcionadamente este impuesto tan regresivo. Este hecho implicó que la rebelión no se limitara a la población indígena como en las anteriores revueltas esporádicas, espontáneas y fácilmente reprimidas. Más bien conllevó a la conformación de un movimiento multiétnico y socialmente diverso, que involucró elementos mestizos y criollos de clase media y alta, capaces de convertir revueltas específicas y locales en una extensa rebelión regional.

Una parte de la participación criolla en la rebelión de Túpac Amaru puede atribuirse a la política «anticriolla» de José de Gálvez, el ministro de Indias de Carlos III (1776-1787). Como ya señalé, Gálvez hizo durante su mandato un esfuerzo concertado para limitar la participación e influencia criolla en el gobierno colonial, que él pensaba habían sido lesivas para los intereses españoles. En consecuencia, surgió una seria brecha en la sociedad colonial entre los criollos y española.

La gran corriente de descontento con la reformas fiscales carolinas estalló en la década de 1770 con un serie de revueltas —sesenta y seis según una cuenta—;

las más notables tuvieron lugar en Urubamba, La Paz, Arequipa y Cuzco. En Arequipa, por ejemplo, un motín popular inspirado por la élite local estalló en 1780, en protesta por el fuerte incremento de la alcabala. Por ello, la aduana recién construida fue incendiada y su director se vio forzado a huir para salvar su vida antes de que las autoridades lograran restablecer el orden.

Si bien estas rebeliones fueron sofocadas en cada caso por la Corona, ellas culminaron en la movilización de masas de 1780, dirigida por Túpac Amaru. José Gabriel Condorcanqui, cuyo padre era un curaca, había sido educado en el colegio jesuita de San Francisco de Borja del Cuzco, escuela fundada para formar a los hijos de la nobleza india. Al fallecer su padre en 1750, heredó 350 mulas que usaba para transportar bienes a Potosí, además de tierras, entre ellas haciendas cocaleras, y algunos intereses mineros. Diez años más tarde, José Gabriel se casó con Micaela Bastidas Puyucahua, mestiza de una comunidad vecina con quien tuvo tres hijos, y que posteriormente ocupó una alta posición de liderazgo en el ejército rebelde.

Sin embargo, la posición de José Gabriel como curaca fue desafiada desde varios lados y se vio envuelto en un extenso juicio para defender su derecho al cargo. En 1777 se vio obligado a viajar a Lima para defenderse, en un litigio con un rival que afirmaba también ser un descendiente legítimo de Túpac Amaru I. Mientras presentaba su caso en los tribunales hizo varias peticiones a las autoridades. Una de ellas era que se le concediera un título de nobleza hispano. Otra, a nombre de los indios de su distrito, solicitaba que se les exonerara de la mita de Potosí, señalando las terribles condiciones en las minas y la escasez de varones físicamente capaces en su distrito. José Gabriel se vio cada vez más frustrado y amargado con la administración colonial tanto en el litigio judicial como en sus peticiones, pues el primero seguía sin resolverse y su solicitud sobre la mita fue rechazada, al parecer por Areche, el nuevo visitador general.

Durante su estadía en Lima, José Gabriel tuvo contacto con las nuevas ideas provenientes de Europa que iban ganando espacio en los círculos intelectuales, así como con los acontecimientos que tenían lugar en los Estados Unidos. Aunque los libros y las discusiones sobre la Ilustración estaban prohibidos por las autoridades, las nuevas ideas circulaban en la Universidad Mayor de San Marcos, que José Gabriel visitó, así como entre los conocidos con los cuales se encontró. Su esposa Micaela, posteriormente, comentó que los «ojos [de José Gabriel] se abrieron» en este momento y Walker concluyó que algunos «fragmentos del pensamiento ilustrado y el creciente descontento con el colonialismo se le pegaron» (Walker, Ms. 1997: 19).

Una influencia ideológica más fuerte en José Gabriel se derivaba de las corrientes del renacimiento y nacionalismo neoincas —lo que Burga (1988) denomina la utopía andina—, que se propagaron por los Andes en la segunda

mitad del siglo XVIII. Desde por lo menos la década de 1750 y probablemente antes, los descendientes de la élite incaica intentaron recuperar y validar las tradiciones culturales andinas, encarnadas en una reafirmación nostálgica y romántica de las pasadas glorias y triunfos de los antiguos reyes. Una manifestación de este renacimiento era la veneración de los incas y la celebración de su legado por los miembros de la nobleza india del Cuzco. De hecho, un auténtico culto de la antigüedad incaica floreció en la vieja capital imperial alrededor de mediados de siglo. En ceremonias públicas en el Cuzco, los curacas se vestían orgullosamente con una sofisticada vestimenta inca y lucían otros símbolos de la cultura incaica, entre ellos banderas, pututos y el antiguo símbolo del dios sol y de los Incas. Según Rowe (1976), las pinturas y retratos de estos reyes también buscaban legitimar aún más el pasado regio incaico. Resulta interesante el hecho de que hasta algunos criollos adoptaran la vestimenta y los adornos incas.

Parecería que las fuentes de inspiración de este nacionalismo neoinca fueron versiones de la historia incaica como la de los *Comentarios reales de los incas*, de Garcilaso de la Vega, publicados por vez primera en 1609. Su reedición en 1722 resultó ser incendiaria para la nobleza india, como los curacas, quienes aprendieron en sus páginas no sólo la gloria y la justicia del pasado inca, sino también la crueldad y perfidia de los conquistadores españoles. La relevancia de los *Comentarios* se hizo más importante en el contexto de las reformas centralizadoras de los Borbones, que, en el caso de los curacas, fueron sentidas en la limitación de sus poderes y en la pérdida de estatus que experimentaron a manos de los corregidores. Al afirmar su legado inca, la aristocracia indígena intentaba reafirmar sus derechos corporativos establecidos con los Habsburgos, pero que ahora venían siendo restringidos por los reformadores borbónicos. El obispo del Cuzco señaló un vínculo directo entre la obra de Garcilaso, el renacimiento inca y Túpac Amaru II en 1781:

> Si los *Comentarios* de Garcilaso no huvieran sido la lectura e instrucción del insigne José Gabriel Túpac Amaru, si sus continuas invectivas y declaraciones contra los españoles, no se huviesen radicado tanto en su ánimo... Si éstas y otras lecciones que algunos autores regnícolas no huvieran tenido la aceptación del traidor en lo que ellas vierten sobre la conquista, no emprendería Túpac Amaru el arrojo detestable de su rebelión (citado en Brading 1991: 491).

El nacionalismo neoinca que floreció entre la nobleza india del Cuzco y otros lugares del sur andino estuvo acompañado por el resurgimiento de difundidos sentimietos milenaristas entre las masas indígenas de la región, que hacía tiempo creían en el milagroso retorno del Inca para liberarles de sus sufrimientos. En efecto, a lo largo de los siglos transcurridos desde la conquista, el milenarismo había avanzado y retrocedido entre la población nativa andina. Su eje era el

mito de Inkarrí, el antiguo dios creador andino Viracocha, quien regresaría para restaurar una utopía andina alternativa de justicia y armonía en las tierras del antiguo imperio. Por ello, muchos andinos creían que el cuerpo decapitado del último Inca estaba regenerándose bajo tierra y que en un momento predeterminado reaparecería liderando una recuperación del viejo orden mitificado. En el sistema de creencias andinas el tiempo era cíclico y los grandes momentos de cambio temporal, denominados *pachacuti* o cataclismos, eran liderados por representantes de Viracocha, de quienes se pensaba que habían vuelto a la tierra para derribar el injusto orden existente de las cosas.

Si al tomar el nombre de Túpac Amaru II, José Gabriel estaba intentando asumir el manto de tal redentor —según la mitología andina—, el potencial revolucionario del alias entre el campesinado indio, cada vez más irritado con el «nudo colonial» más ajustado, no pudo ser mayor. Es más, la adopción del nombre de José Gabriel llegó cuando las masas indígenas, según Flores-Galindo, estaban viendo el pasado incaico como una sociedad igualitaria idealizada, libre de los señores y amos del mundo colonial. En este sentido, la identificación del campesinado con los incas tuvo un timbre decididamente subversivo. Además, esta visión utópica del pasado se unió con la experiencia universal de la servidumbre colonial, simbolizada con el término indio, ahora usado comúnmente por los españoles para categorizar a todos los nativos, sin importar su origen étnico. El término sugiere a Flores-Galindo un estigma socioeconómico y racial que sirvió para construir una perspectiva colectiva andina de opresión compartida, que polarizó a la sociedad sobre la base de clase y raza en vísperas de la Gran Rebelión.

Frustrado por su incapacidad para lograr que los funcionarios reales de Lima adoptaran sus propuestas de reforma, Túpac Amaru II regresó a su hogar en Tinta y decidió montar una rebelión, ostensiblemente para forzar a las autoridades a emprender la revisión del ordenamiento colonial. Él y sus compañeros de conspiración eligieron el 4 de noviembre, santo del rey Carlos III, para dar inicio a su planeada rebelión. Al igual que otros dirigentes de levantamientos populares premodernos, Túpac Amaru II enarboló la bandera de la rebelión a nombre del rey, resumida con la frase «viva el rey y muera el mal gobierno». Su supuesta lucha era contra los subordinados inmorales del rey en las colonias, que subvertían las justas leyes del monarca y explotaban inmisericordemente a las masas indígenas para su propio beneficio. Expresar el movimiento de tal modo era, en ese entonces, la forma usual y acostumbrada de negociar los derechos y agravios políticos.

El suceso detonante del levantamiento fue el apresamiento, por parte de Túpac Amaru II, de Antonio de Arriaga, el ampliamente odiado corregidor de Tinta, a quien acusó de haber excedido los límites legales del reparto al vender más bienes y cobrar a los indios derechos más elevados de lo permitido. En subsiguientes declaraciones, los rebeldes pidieron la abolición de la alcabala,

el sistema del reparto y la mita de Potosí, así como la reducción del tributo en cincuenta por ciento. Túpac Amaru II también tenía motivos personales para detestar a Arriaga, pues éste le había estado persiguiendo para que cancelara las considerables deudas que tenía, no sólo con el corregidor sino también con la aduana. Los rebeldes juzgaron sumariamente a Arriaga y le condenaron por sus «crímenes», y el 10 de noviembre fue ahorcado en una ceremonia pública.

Luego de la ejecución, Túpac Amaru II encabezó una fuerza rebelde hacia la provincia de Quispicanchis, donde derrotó a una milicia española apresuradamente reunida en la batalla de Sangarará. Un informe calcula los muertos en 576 personas, entre ellas varios criollos y mujeres, muchos de los cuales se habían refugiado en una iglesia que fue incendiada por los rebeldes. Las noticias de esta supuesta atrocidad hicieron que el obispo del Cuzco denunciara a Túpac Amaru II, y que las autoridades presentaran el movimiento como una guerra de castas de los indios contra los blancos (criollos y europeos) en la propaganda subsiguiente. Esta versión costaría mucho a los rebeldes, puesto que habían esperado atraer a criollos y mestizos al movimiento. Asimismo, antes del combate, las fuerzas rebeldes habían saqueado dos obrajes en donde Túpac Amaru II, actuando como un Inca según las tradicionales normas andinas, tomó y distribuyó cantidades de textiles y coca a sus seguidores. Significativamente, luego de la batalla él y su esposa Micaela encargaron un retrato que representaba a ambos como un rey Inca y su coya, rechazando el sombrero emplumado tricorne y la vestimenta mestiza de antes.

En la provincia de Quispicanchis, los rebeldes decidieron dividir sus fuerzas en lugar de atacar el Cuzco, retornando una parte a Tinta para reunir refuerzos en tanto que la otra, encabezada por Túpac Amaru II, se dirigiría al sur para extender la ofensiva a la zona del lago Titicaca. Sin embargo, la demora en tomar el Cuzco resultó ser un gran error táctico, porque dio a las fuerzas realistas el tiempo necesario para desplazarse desde Lima y fortificar la ciudad. En consecuencia, cuando Túpac Amaru II retornó del sur y finalmente asedió la ciudad el 28 de diciembre, con alrededor de seis mil hombres, se topó con una fuerte resistencia, no sólo del ejército realista enviado allí a defenderla, sino también de indios leales movilizados por el clan rival de los Pumacahua. La resistencia de los indios leales revela los complejos antagonismos y divisiones étnicos entre las comunidades nativas andinas, que sería una de las razones principales de la derrota de la rebelión. Incapaz de tomar el Cuzco cercándolo, Túpac Amaru II retrocedió a su base original en Tinta el 10 de enero.

Al final, el cerco del Cuzco resultó ser el punto crítico de la rebelión, luego de lo cual las fuerzas de Túpac Amaru II experimentaron una serie de derrotas militares a manos de las tropas realistas y los indios leales de Pumacahua. Estos reveses culminaron con la captura y apresamiento de Túpac Amaru II y su esposa Micaela el 6 de abril, a manos de realistas dirigidos por el mariscal de campo José

del Valle, quien comandaba una fuerza de 15.000 hombres. Los jefes rebeldes fueron entonces llevados al Cuzco y juzgados sumariamente y condenados por traición. El 18 de mayo de 1781, delante de una multitud reunida en la plaza de armas de la ciudad, Túpac Amaru II fue obligado a ver el ahorcamiento de varios miembros de su familia y la ejecución de su esposa por el garrote. La horrenda escena quedó completa cuando el jefe rebelde fue decapitado, luego de ser torturado e infructuosamente descuartizado (los caballos no pudieron separar los miembros de su cuerpo).

Con la captura de Túpac Amaru II y su ejecución, la fase cuzqueña (o tupamarista) de la Gran Rebelión (1780-1781) llegó a su fin, aunque algunas de sus fuerzas siguieron operando bajo el mando de Diego Cristóbal en la región del lago Titicaca y el Alto Perú. Estas fuerzas tuvieron éxito en unirse brevemente a una rebelión similar dirigida por los hermanos Catari, que había estallado unos cuantos años antes en el Alto Perú (la actual Bolivia) y que amenazó con tomar La Paz en 1781. La insurgencia catarista duró hasta 1783.

Luego de la Gran Rebelión, Gálvez (ministro de Indias) tomó medidas para intentar «reconquistar» los Andes del sur y asegurar que otro levantamiento indio masivo no volviera a producirse en la región. Por ejemplo, se desató un reinado de terror no sólo contra Túpac Amaru II y su familia, sino contra todo aquel que hubiese mostrado el más mínimo respaldo a la rebelión. La tortura y ejecución de Túpac Amaru y la exhibición pública de sus miembros amputados por toda la región del Cuzco antes de su entierro sirvió como una advertencia brutal a los potenciales rebeldes. Una demostración aún más directa fue la aplicación del infame «quintado» (la ejecución de cada quinto hombre) en diversas aldeas tupamaristas en toda la región.

Es más, reconociendo que el nacionalismo inca podía servir como un medio para la rebelión de otro líder como Túpac Amaru II, las autoridades se movieron con presteza para intentar erradicarlo. Entre otras cosas, el gobierno decretó la abolición del cargo hereditario de curaca en 1787 y prohibió el uso de la vestimenta real incaica; la exhibición de toda pintura o símil de los antiguos reyes Incas; la producción de todo drama o espectáculo que mostrase Incas; el uso de todo símbolo incaico, como las banderas o pututos; e incluso los escritos del Inca Garcilaso de la Vega, y otros, que sirvieran para estimular la recuperación de la cultura incaica. En suma, todo vestigio del pasado inca que pudiera servir para revivir la idea general de una «edad de oro» imaginada fue prohibido por el Estado, en una campaña secular que recuerda los esfuerzos de la Iglesia casi dos siglos antes para extirpar las idolatrías.

Además del garrote, el régimen colonial también empleó la zanahoria para impulsar su estrategia de pacificación andina tras la rebelión. En el tema de la reforma del sistema de explotación colonial, que constituía la otra dimensión de

la rebelión de Túpac Amaru II, la Corona asumió una posición más conciliadora. Se estableció una nueva audiencia en el Cuzco en 1787, que sería abiertamente más receptiva a las necesidades y preocupaciones locales, especialmente a los pedidos de justicia por parte de la población indígena. Además, no solamente se abolió el reparto de mercancías en 1784, sino que los corregimientos fueron reorganizados y remplazados con el nuevo sistema de intendencias, de tal modo que el cargo popularmente odiado de corregidor fue eliminado. Lo reemplazaron nuevos funcionarios reales llamados subdelegados, que servían bajo la autoridad del intendente, pero que resultaron ser tan abusivos con los indios como los corregidores a los cuales reemplazaron.

El visitador Areche también intentó abolir a los curacas, alcanzando un éxito relativo porque los caciques nativos libraron una lucha prolongada en los tribunales para retener el control de sus cargos. Sin embargo, con el tiempo la aristocracia indígena se marchitó, perdiendo todo el estatus y posición que alguna vez tuvo como «intermediaria» en el ordenamiento colonial. Esta pérdida de estatus produjo un efecto nivelador gracias al cual todos los nativos fueron considerados cada vez más como «indios», como parte de la inmensa clase baja indígena cuyos derechos disminuían cada vez más y cuyas privaciones y humillaciones parecían intensificarse.

Aunque estas reformas administrativas, posteriores a la rebelión, cambiaron el rostro del sistema colonial, no alteraron su finalidad fundamental: cobrar el tributo a la población indígena, necesario para financiar la seguridad interna después del alzamiento y las interminables guerras en las que la España borbónica estaba involucrada en Europa. Como Sala i Vila (1996) muestra, en lugar del sistema curacal un gran grupo de criollos, mestizos y otros «forasteros» alcanzaron el control del cobro del tributo, ganando así acceso al trabajo y tierras comunales que explotaron y que tomaron en propiedad. Con ello, las corrientes subterráneas de alienación social y política continuaron agitando a la población indígena más allá de fines de siglo, generando protestas locales e incipientes movimientos separatistas que se convirtieron en un rasgo notable de la tardía sociedad colonial andina.

En cuanto a la seguridad interna luego de la rebelión, después de 1783, la Corona desplegó tropas regulares españolas en diversas provincias andinas y desmovilizó las milicias criollas en las cuales no confiaba. Reflejando así la concepción que la élite tenía de los peligros de una rebelión indígena, la defensa virreinal asumió una función interna de control social, además de su tradicional papel externo contra las posibles invasiones extranjeras.

En respuesta a los esfuerzos para Gálvez para pacificar la población nativa después de la Gran Rebelión, la población indígena comenzó a defenderse de diversas maneras. Uno de los más efectivos según Walker (1999), quien examinó más de mil expedientes judiciales que datan de entre 1783 y 1821, fue

recurrir a los tribunales para defender la autonomía comunal de los continuos abusos de subdelegados y otros funcionarios. Temiendo la renovada posibilidad del descontento y rebeliones nativas, y todavía fuertemente dependiente de la recolección del tributo, el régimen colonial a menudo respondió favorablemente a muchos de estos juicios en los tribunales. De esta manera, el pacto colonial siguió siendo constantemente renegociado y rehecho.

Al final, si incluimos el levantamiento en el Alto Perú, la Gran Rebelión de Túpac Amaru II costó más de cien mil vidas de una población total de 1,2 millones de personas, casi el diez por ciento de la población, y durante un siglo o más dejó en la conciencia popular peruana un legado traumático en las relaciones raciales andinas. De hecho, ella abrió una enorme brecha entre el Perú indígena y el hispano que aún no ha cerrado después de más de doscientos años después. Al mismo tiempo, la Gran Rebelión unió a criollos y españoles en una causa común contra la amenaza que las masas indígenas planteaban a sus posiciones privilegiadas en la cima de la jerarquía andina. El estallido de la revolución social mostró gráficamente a los criollos el peligro de movilizar a las clases subalternas en nombre de sus propios agravios y frustraciones, que se iban desarrollando frente a la dominante clase peninsular y el régimen realista. En este sentido, la incapacidad inherente de los rebeldes para forjar una alianza criollo-india viable, junto con las fundamentales divisiones étnicas y la atomización de la población indígena —eficazmente explotadas por el régimen realista—, condenaron al fracaso a la Gran Rebelión.

Por otro lado, al usar el pasado incaico y su carácter multiétnico, el movimiento de Túpac Amaru II mostró señales del surgimiento, por vez primera, de un proyecto político protonacionalista, contrahegemónico y anticolonial en los Andes. Aunque no logró articular una visión clara de la formación política andina poscolonial, el nacionalismo indígena que expresaba podía ser reformulado y volvería a encenderse en diversos lugares y momentos del país en el futuro. Sin embargo, en este momento de la evolución del Perú, su base social —la debilitada clase curacal y los pequeños sectores medios— era, como anota Walker, demasiado débil y anémica como para derribar el peso y el poder acumulados del ordenamiento colonial.

En cuanto a la independencia, le tocaría a un liberalismo criollo con base en Lima —definido en forma más estrecha y excluyente, y que contaba con la asistencia crucial de fuerzas externas— derrotar finalmente a los españoles y poner fin a tres siglos de dominio hispano en los Andes. Hasta entonces, el Perú seguiría siendo el bastión del poderío peninsular en el continente sudamericano por una generación más.

La caída del gobierno realista y el advenimiento de la independencia: 1780-1824

La interpretaciones históricas de los orígenes de la independencia peruana por lo general se agrupan dentro de tres posiciones. La postura tradicional o patriótica, impulsada por el Estado oligárquico antes de 1968, era que los peruanos de todos los grupos étnicos y sociales —indios, mestizos y criollos— fueron movilizados y liderados por «heroicos» líderes criollos en un levantamiento popular contra el dominio hispano. Esta versión oficial se enseñaba en las escuelas a todos los niveles y fomentaba el mito del «nacionalismo criollo» para unir la nación bajo el dominio de la élite.

La revolución nacionalista y populista de Velasco de 1968, cuyo símbolo fue Túpac Amaru II, buscando reivindicar e incorporar las masas indias a través de la reforma agraria y otros cambios, articuló un discurso alternativo sobre el «nacionalismo indígena». En esta versión, se incorporó al panteón de los héroes de la independencia peruana a líderes indígenas como Túpac Amaru II, junto a los ya conocidos héroes criollos, sirviendo así de igual manera para unificar la nación, pero esta vez en forma más inclusiva y popular.

Tanto la versión «criolla» como la «indígena» del nacionalismo, fueron cuestionadas por una escuela revisionista de historiadores marxistas, encabezados por Bonilla y Spalding (1972, 1981), y que surgió a comienzos de la década de 1970. Bonilla y Spalding sostienen que el nacionalismo no existía en el Perú en 1820 ya que los criollos no estaban convencidos de la necesidad de la independencia pues sus intereses económicos y financieros estaban íntimamente ligados al antiguo régimen. Aún más, temían, a la luz de la experiencia de la rebelión de Túpac Amaru, que movilizar las masas indígenas en nombre de la independencia podría producir una conmoción social más grande que amenazaría sus intereses vitales. En ese entonces, Bonilla y Spalding argumentaban que la población india todavía no se había recuperado lo suficiente de la derrota y represión posteriores a dicha rebelión, ni tampoco estaba libre de las tradicionales rivalidades étnicas y diferencias culturales como para unirse eficazmente en torno a la independencia. Por último, sostenían que los indios no tenían razón alguna para hacer una causa común con la clase criolla, a la cual veían como opresora junto con los peninsulares.

Esta imagen de la independencia resulta bastante plausible, en particular como una explicación al hecho concreto de que la independencia peruana fue más «concedida» que «ganada». Con este término, éstos historiadores quieren decir que el colapso del antiguo régimen se debió a la intervención de ejércitos extranjeros, primero las fuerzas del general José de San Martín del sur, y luego el ejército norteño del general Simón Bolívar, bajo cuya bandera las últimas

fuerzas realistas en Perú y en América del Sur fueron derrotadas en la Batalla de Ayacucho en 1824.

Desde la década de 1970, una nueva generación de historiadores aceptó los avances de los revisionistas, pero al mismo tiempo se movilizó para desplazar a Lima del estudio del colapso del viejo régimen hispano. Ellos describieron un movimiento mucho más complejo, fragmentado y regional en el cual la rebelión de Túpac Amaru II jugó un papel más decisivo, puesto que expresaba una visión multiétnica, transclasista y protonacionalista cuyos temas, como veremos adelante, seguirían resonando en diversas rebeliones provinciales que condujeron a la independencia.

La participación popular en el movimiento de la independencia a veces se dio a nombre de los patriotas, en otras en respaldo de los realistas. Esta ambivalencia confirió a la lucha características de una guerra civil, una disputa que involucraba una amplia gama de estratos sociales y grupos étnicos a nivel local. La movilización popular podía ser desde arriba, a través del reclutamiento (forzado o involuntario), o desde abajo, en forma más espontánea. En cualquier caso era promovida a menudo por líderes de comunidades campesinas o caudillos locales que lograban activar redes de clientelismo, o por jefes militares externos (realistas o insurgentes) que lograban el respaldo popular local. Dado lo sucedido en la rebelión de Túpac Amaru II, el dilema de los comandantes, tanto patriotas como realistas, era alcanzar suficiente control sobre estas fuerzas populares como para que no amenazaran a sus propios grupos de élite o propiedades.

Las montoneras, o fuerzas guerrilleras indias jugaron, por ejemplo, un papel importante en hacer retroceder al ejército realista en la sierra central, como lo mostrasen Rivera Serna (1958) y otros. Los esclavos negros también huyeron de las haciendas de la costa sur para unirse al ejército invasor del general San Martín. Por otro lado, el ejército realista, que logró evitar la derrota hasta la Batalla de Ayacucho, estaba formado en su mayoría por campesinos reclutados en las regiones del Cuzco y el lago Titicaca, en la sierra sur. Es más, según los estudios de Husson (1992) y Méndez (1996), hubo un considerable respaldo al ejército realista entre los indios iquichanos de la provincia de Huanta, que después de la independencia (1826-1828) se rebelaron en pos de la restauración de Fernando VII y el gobierno virreinal español. La forma en que las clases subalternas reaccionaban a la guerra de independencia dependía, como señalara Manrique, de la correlación específica de fuerzas en una localidad particular. Sin embargo, hablando en general, el grueso del campesinado indígena permaneció como un espectador pasivo en la lucha por la independencia, presintiendo correctamente que el resultado, en manos de la élite criolla, no produciría ningún cambio fundamental en sus condiciones de subordinación colonial.

La mayoría de los historiadores han encontrado los orígenes profundos de la independencia en el intento efectuado por la España de Carlos III de recuperar un estrecho control sobre las colonias en la segunda mitad del siglo XVIII. Como vimos, estas medidas incitaron las protestas de una amplia gama de grupos sociales y étnicos coloniales. Se orientaron, en particular, a alienar a los criollos, que habían obtenido un considerable poder político y económico de facto gracias a la decadencia de España y su separación de las colonias durante el siglo anterior. Aún más, en el proceso por obtener su autonomía, los criollos adquirieron una identidad propia más definida que llevó a que cada vez se diferenciasen más como grupo respecto a sus gobernantes peninsulares. Por ultimo, la Ilustración brindaba un marco intelectual de nuevas ideas y un espíritu crítico que alimentó, en ciertos sectores criollos, un discurso reformista y a veces radical que cuestionaba el antiguo régimen.

Como vimos, un golpe severo a la mayor autonomía criolla tuvo lugar cuando José de Gálvez, el ministro de Indias (1776-1787), comenzó a reemplazar a los funcionarios nacidos en América por españoles peninsulares. Para 1803 solamente un limeño, José Baquíjano y Carrillo, y otro criollo más, eran miembros de la audiencia, mientras que entre las décadas de 1740 y 1770 los criollos de Lima habían conformado una mayoría. Esta política anticriolla hizo que a partir de la década de 1790, los afectados exigieran constantemente que el rey nombrase a criollos para, por lo menos, una tercera parte o la mitad de todos los cargos gubernamentales.

A pesar de que los criollos peruanos se irritaban con estos esfuerzos por excluirlos de los cargos y con la existencia de otras reformas diseñadas para extraer mayores rentas con impuestos más elevados, muchos de ellos estaban bien integrados a la economía mercantilista colonial. Formaban parte de una élite colonial que comprendía a los hacendados de la costa norte, los comerciantes y navieros de Lima, y los mineros de plata de Cerro de Pasco y Potosí. En el centro de esta élite se hallaban los comerciantes-acreedores de Lima, que ocupaban una posición de mando en la economía virreinal en virtud a su ubicación crucial en la encrucijada del poder comercial, financiero y político. Los comerciantes-acreedores dominaban, a su vez, el Tribunal del Consulado, una poderosa corporación mercantil que mantenía estrechas conexiones con el aparato político y las instituciones del real gobierno e incluso la audiencia. A pesar de los agravios del sistema existente, los intereses fundamentales de esta élite colonial estaban en la conservación del gobierno real.

Esta situación hizo que Flores-Galindo (1984) concluyera que la clase dominante colonial no se fracturó en el Perú, como sí sucediera en otras partes de América Latina, evitando así por un tiempo los sucesos revolucionarios que se iban dando a lo largo del continente. Para él, la unidad esencial de la élite,

juntamente con su interés en la conservación del sistema, explica la razón por la que el Perú continúo siendo mayormente leal al rey hasta ser finalmente liberado desde fuera por San Martín y Bolívar. El análisis que Timothy Anna (1979) hiciera de la élite gobernante de Lima llegó a conclusiones similares aunque en forma algo distinta. De una población total de 63.809 habitantes en 1813, Anna calculó que el tamaño de la élite era de alrededor 1.500 personas, de las que apenas una tercera parte eran productoras de auténticas fortunas (la élite mercantil de Flores-Galindo). El resto, según él, dependía de conservar los cargos en la real administración y en el aparato eclesiástico. De tal manera, sus carreras y modos de vida estaban inextricablemente ligados con el régimen realista, lo cual explica su actitud ambivalente, pero especialmente leal con el rey.

Otra razón por la cual Lima siguió siendo un bastión del poder real hasta la independencia de 1824 se encuentra en la actitud de la élite hacia las clases subalternas. Aunque la élite limeña podía no estar dispuesta a poner en peligro sus intereses económicos y laborales fundamentales abrazando la causa de la independencia, también temía que los controles sociales de la colonia sobre las clases populares se desarticulasen con un conflicto de esta naturaleza. Por ejemplo, un tercio de la población limeña estaba conformada por esclavos negros, en tanto que las haciendas vecinas dependían fuertemente de la mano de obra esclava. Aunque Lima estaba bastante alejada y no fue amenazada directamente por la rebelión de Túpac Amaru II, que había desatado a las masas indígenas y evocado el espectro de la revolución social en los Andes, a los limeños les inquietaba la posibilidad de que se produjeran rebeliones de esclavos en la costa. Esta preocupación resultó ser cierta, dada la respuesta de los esclavos de la costa sur al llamado de San Martín para unirse a su ejército invasor, así como el breve motín de la plebe urbana que estalló en Lima cuando las fuerzas realistas evacuaron la ciudad el 5 de julio de 1821, cuatro días antes de que San Martín la ocupara.

Si Lima comprensiblemente siguió siendo un centro de la reacción y del dominio real durante el primer cuarto del siglo XIX, la situación en la sierra sur era diferente. La rebelión de Túpac Amaru II, que comenzó como una reacción en contra del absolutismo Borbón, sumergió a los Andes en un violento, aunque breve, levantamiento anticolonial. Si bien el alzamiento reveló unos profundos sentimientos protonacionalistas entre amplios sectores de la población serrana, también mostró la fuerte antipatía regional al dominio político limeño del virreinato. El resentimiento por el ejercicio del dominio real en los asuntos locales por parte de los funcionarios limeños era profundamente sentido en los círculos de las élites provincianas. Este resentimiento no sólo alimentaba las demandas de una mayor autonomía y de tendencias separatistas, sino que influiría asimismo en los debates posteriores a la independencia entre las fuerzas conservadoras, a favor

del centralismo, y los liberales, que defendían la descentralización y el federalismo respecto a la futura forma del gobierno republicano.

Aunque no existió ninguna gran manifestación en contra del dominio hispano desde el fin de la rebelión de Túpac Amaru II en 1783 y el cambio de siglo, en Lima continuaron las dudas respecto a la lealtad del Cuzco, que había expresado cierta simpatía por la rebelión, al menos inicialmente. Después de su supresión, la Corona tomó medidas para desmovilizar las milicias criollas, cuya lealtad al rey había sido cuestionada, y reemplazarlas con guarniciones de tropas regulares españolas en el Cuzco y en otros lugares de la sierra sur. Es más, la recién creada audiencia del Cuzco fue considerada como otro mecanismo de la dominación limeña, en vez de ser tomada como un instrumento con el cual descentralizar el poder en repuesta a la demanda de las provincias. Por último, la economía regional siguió experimentando la perturbación, de larga data, de los circuitos comerciales andinos con el Alto Perú, causada por la reorganización imperial de 1776, la decadencia de la producción de plata de Potosí y el advenimiento del comercio libre en el imperio en 1778.

Fue en este contexto de descontento administrativo, estancamiento económico y de una continua atracción por el nacionalismo cultural y el utopismo andino, que se descubrió, en 1805, una conspiración contra el régimen realista en Cuzco. Los protagonistas fueron dos criollos, el mineralogista Gabriel Aguilar y el funcionario de la audiencia Juan Manuel Ubalde, ambos representantes de la clase media provinciana, que planearon tomar el control del Cuzco, declarar rey a un Inca y expulsar a los españoles. Según Flores-Galindo (1987), lo notable de esta conjura, al igual que en la rebelión de Túpac Amaru II antes, fue su expresión de una dimensión cultural distintivamente andina que parecía apelar a diversas clases sociales: campesinos indígenas pobres y acaudalados indios nobles, criollos inquietos y mestizos empobrecidos. Estos últimos, según el censo de 1795, conformaban ahora el veintidós por ciento de toda la población virreinal.

A diferencia de la sierra sur, donde el estancamiento económico y el nacionalismo neoinca continuaron provocando respuestas anticoloniales, el descontento con el dominio colonial en la sierra central hundía sus raíces en problemas económicos. Como ya señalé, el siglo XVIII vio un gran desplazamiento del eje económico peruano, basado en la minería de la plata, de Potosí en el sur, hacia a Cerro de Pasco y Huarochirí al centro. Según cuenta Mallon (1983), la prosperidad y los efectos multiplicadores de la minería en la región, en la segunda mitad del siglo, generaron una burguesía emergente y ascendente de comerciantes y mineros, de orígenes relativamente modestos, que vieron limitado su ascenso por el monopolio social y político ejercido por la dominante élite peninsular local y sus aliados criollos. Para ellos, pues, la idea del libre comercio y un sistema económico y político más abierto era una alternativa atractiva al orden colonial

cerrado, lo que debilitó su lealtad hacia el rey. Como veremos más adelante, fueron precisamente estos grupos los que organizaron las montoneras, o bandas guerrilleras indígenas, que brindarían un importante respaldo a la independencia.

Poco después que la conjura cuzqueña de 1805 fuese expuesta y rápidamente controlada por las autoridades, el poder realista en Perú se vio sacudido por la invasión napoleónica de España en 1808. La captura de Carlos IV y su hijo Fernando VII (en quien se había visto forzado a abdicar), juntamente con la imposición del usurpador francés José Bonaparte como rey, cuestionaron la legitimidad de la continuidad del dominio español en toda Hispanoamérica. ¿La soberanía revertía al pueblo en ausencia del rey legítimo? Esta doctrina fue tomada por los círculos liberales de la Revolución estadounidense de 1776 y la Revolución francesa de 1789, pero también se basaba en viejas nociones neotomistas. Respondiendo afirmativamente a esta cuestión constitucional, los criollos disidentes de las colonias depusieron a las autoridades peninsulares y formaron juntas de gobierno local en La Paz, Quito, Caracas, Santiago y Buenos Aires entre abril y septiembre de 1810.

Esta deposición de las autoridades peninsulares no tuvo lugar en Perú, pero en el virreinato sí hubo una considerable confusión e incertidumbre entre 1809 y 1814. El colapso de la monarquía en España hizo que el virrey José Fernando de Abascal (1806-1816) se apresurara a asegurar la lealtad de la élite limeña adoptando una política de concordia, al mismo tiempo que tomaba medidas para fortalecer el control político realista en todo el interior. Al virrey Abascal le preocupaba fundamentalmente convertir al Perú en un bastión de defensa contra el principal centro rebelde surgido en Buenos Aires, en el virreinato del Río de la Plata y sus confines en el Alto Perú, inclusive La Paz. Con este fin nombró comandante militar del Cuzco y presidente de su audiencia al brigadier general José Manuel de Goyeneche y Barreda (1776-1846), un criollo leal nativo de Arequipa. Goyeneche reunió un ejército que incluía indios de los clanes Pumacahua y Choquehuanca, que logró derrotar a las fuerzas insurgentes de La Paz en 1811. Sin embargo, este exitoso esfuerzo realista impuso al Cuzco una considerable carga financiera y en hombres, que se sumó a su, ya de por sí, considerable lista de quejas contra el régimen colonial.

Para complicar aun más las cosas, entre 1809 y 1814 surgió una gran confusión en torno a la implantación del programa de reformas liberales de la Junta Central de Sevilla y las Cortes o parlamento de Cádiz, formados para gobernar en nombre del cautivo Fernando. El virrey Abascal, un administrador extremadamente capaz pero un absolutista desvergonzado, no veía favorablemente ningún intento hecho en España para liberalizar el dominio colonial, es decir que considerara desplazar parte del poder de toma de decisiones a los colonos o, lo que era aun peor, la abolición del tributo (aprobada en 1811), lo que habría comprometido

las finanzas virreinales severamente y minado todo el edificio del ordenamiento colonial. Para sorpresa de muchos liberales cuzqueños, él y la audiencia del Cuzco efectivamente intentaron obstruir la implementación de las reformas aprobadas por las Cortes. Además de declarar a España una monarquía constitucional, las Cortes pidieron también la elección de delegados por parte de los cabildos en toda América, para que presentaran sus agravios contra el domino español.

Hasta en Lima, la liberalización colonial tendió a animar momentáneamente a un pequeño grupo de liberales con la posibilidad del cambio. El liberalismo surgió en el Perú en la década de 1780, a medida que las ideas de la Ilustración se filtraban desde el extranjero en los círculos intelectuales, y los trascendía. Uno de sus principales defensores y exponentes fue José Baquíjano, cuyo discurso de bienvenida al nuevo virrey en 1781 dio inicio a toda una generación de debates en torno al sistema colonial español. El Real Convictorio de San Carlos, que albergaba la facultad de humanidades de la Universidad Mayor de San Marcos, era el centro de la Ilustración en el cual las ideas de Locke, Descartes y Voltaire circulaban entre profesores y alumnos. Fue en los salones de San Carlos y en las páginas de la influyente revista *Mercurio Peruano* (1791-1795) —cuya luz guía fue Hipólito Unanue, otro prominente intelectual limeño ilustrado— donde surgieron las primeras críticas al sistema colonial hispano, junto con un discurso reformista moderado que planteaba el cambio. Adoptando la libertad intelectual y el racionalismo, así como los derechos naturales y la igualdad del hombre, el bisemanal *Mercurio Peruano* también publicó numerosos artículos científicos que ampliaban el conocimiento de los recursos naturales y el medio ambiente distintivo del Perú.

Aunque la generación de Baquíjano y la que le siguió en 1808 produjeron una serie de intelectuales brillantes, incluyendo a Manuel Lorenzo Vidaurre, José Faustino Sánchez Carrión y el sacerdote Francisco Javier Luna Pizarro, pocos de estos llamados intelectuales precursores de la independencia promovieron realmente el separatismo o la causa emancipadora. Miembros de los círculos de la élite, o aspirantes a ello, ansiosos por obtener las sinecuras y beneficios del sistema colonial y eclesiástico, la mayoría dio un tono moderado a sus críticas respecto al trato a los indios o al sistema monopólico hispano, y más bien propugnaba un buen gobierno, la igualdad para los criollos y una mayor autonomía para el Perú. Eran reformistas y constitucionalistas, no separatistas o revolucionarios.

Si las esperanzas liberales de cambio y mayor autonomía se incrementaron con las reformas de las Cortes, expresadas en la nueva Constitución española de 1812, ellas se desvanecieron con la reacción conservadora que siguió a la restauración de Fernando VII en 1814. En general, hubo pocas acciones conspiradoras entre la élite limeña en todo este periodo, que terminó con la toma de Lima por San Martín en 1821. Las conjuras incubadas en Lima, principalmente después de la liberación de Chile en 1818, involucraron a una minoría pequeña y nada representativa de

la población, estaban mal concebidas y organizadas, por lo que fueron recibidas con apatía por el público en general, y se suprimieran rápidamente.

Sin embargo, este no fue el caso del resto del Perú, en particular en las provincias del sur, donde varios y serios levantamientos armados tuvieron lugar. Con todo, los criollos limeños respaldaron uniformemente la represión de estas revueltas por parte del régimen virreinal. Este respaldo refleja, entre otras cosas, su temor a que estos levantamientos provinciales se convirtieran en una amenaza al histórico dominio político limeño del país. La primera gran rebelión provincial contra el rey estalló en 1811 en Tacna, una región económicamente ligada al Alto Perú, al que suministraba vino, aguardiente, aceite, frutas y arroz, así como algunas manufacturas importadas. Fue importante por dos motivos: en primer lugar, por el deseo del sur peruano de reunirse con el Alto Perú y, en segundo lugar, porque mostró que los criollos provinciales estaban dispuestos a considerar alianzas con las masas indígenas para derribar el dominio hispano. La revuelta se deshizo al llegar las noticias de que el ejército rebelde de Buenos Aires, con el cual los insurrectos tacneños esperaban unirse, había sido derrotado por las fuerzas realistas del general Goyeneche en La Paz. Otras rebeliones provinciales igualmente infructuosas estallaron en Huamanga, Huánuco y Tarma en 1812, y en la intendencia de Arequipa en 1813.

Sin embargo, el desafío provincial más serio al dominio hispano en el periodo anterior a 1821 tuvo lugar en el Cuzco, en 1814. Durante un breve lapso, la rebelión se propagó por todo el sur peruano (incluyendo a La Paz, en el Alto Perú) y hasta pareció amenazar a la misma Lima. Sus jefes, los tres hermanos Angulo y José Gabriel Béjar, provenían de la clase media criolla y mestiza educada, letrada, elocuente, y ambiciosa de poder. La familia Angulo estaba integrada por hacendados locales que también estaban activos en la minería y el comercio, habiendo educado a sus hijos en la Universidad de San Antonio Abad del Cuzco, un centro de ideas disidentes. Iniciada como un movimiento esencialmente urbano, la rebelión fue respaldada por diversos sectores de la sociedad cuzqueña, incluyendo a miembros del bajo clero y al obispo del Cuzco. Posteriormente, se expandió al campo, ganando la lealtad de varios jefes indios, entre ellos el poderoso Mateo García Pumacahua, quien había jugado un papel clave en la derrota de Túpac Amaru II en 1781, y cuyo clan representaba uno de los «ayllus sagrados» del Cuzco. Ahora, con más de setenta años de edad, el viejo cacique indio estaba aparentemente resentido por haber sido reemplazado por el virrey como presidente de la audiencia.

Las causas de la rebelión eran tanto políticas como económicas. Ellas se derivaban, en parte, del conflicto entre quienes dieron la bienvenida a las reformas liberales de 1812 pero se vieron frustrados por el fracaso de la audiencia para realizarlas; y porque, las esperanzas liberales de reforma se desvanecieron del todo a finales de 1814, con la restauración de Fernando VII en el trono español, la abolición de la constitución liberal de 1812 y la reimplantación de un

régimen absolutista. Estos desarrollos coincidieron con el continuo estancamiento económico de la región y el traslado de hombres y recursos efectuado por el virrey Abascal para suprimir las revueltas por la independencia de La Paz.

Nuevamente se dieron manifestaciones de nacionalismo indio, en tanto que los dirigentes de la rebelión enfatizaban las dimensiones multiétnicas del movimiento. Ellos declararon su intención de crear un imperio independiente que abarcara el continente, con su capital no en Lima sino en el Cuzco. Flores-Galindo (1987) cree que este fue otro caso, al igual que el de Túpac Amaru II, en el que los rebeldes andinos usaron a los Incas para construir un movimiento anticolonial alternativo y contrahegemónico en la sierra sur. La obra del poeta arequipeño Mariano Melgar (1790-1815), ejecutado por su participación en la rebelión, ciertamente respalda esta postura. En ella se expresan fuertes sentimientos nacionalistas junto con un radicalismo progresista y —anticipándose al indigenismo— la preocupación por las oprimidas masas indígenas. El poema «Marcha patriótica» de Melgar, por ejemplo, celebra el triunfal ingreso de Pumacahua a Arequipa en 1814, en tanto que otros integraban innovadoramente el yaraví (canciones de amor prehispánicas populares, tocadas con guitarra; Castro-Klarén 2003).

Basadre (1973) piensa que de haber logrado éxito los rebeldes cuzqueños, la intervención extranjera habría sido innecesaria y la nueva nación peruana habría tenido una base multiétnica mucho más popular que la restringida república criolla concebida por las clases propietarias e intelectuales después de 1821. Al final, tanto la composición racial, las intenciones separatistas de los rebeldes, y los excesos de algunas de las guerrillas indias contra todos los «explotadores», bastaron nuevamente para que los criollos limeños se opusieran a la rebelión cuzqueña. De haber prestado su respaldo, el movimiento, casi con toda seguridad, habría logrado derribar al gobierno hispano en Perú. Sin embargo, el levantamiento fue finalmente dispersado por un ejército realista enviado desde Lima y sus líderes fueron arrestados, juzgados sumariamente y ejecutados por traición en 1816.

En los años que siguieron a la derrota de la rebelión cuzqueña, el centro de las actividades revolucionarias se desplazó de la sierra sur hacia a Lima y la costa. Sin embargo, por el momento hubo un hiato en las actividades que coincidió en el resto del continente con la concertada ofensiva realista que reconquistó los territorios rebeldes en Venezuela y Colombia, y obstaculizó la insurgencia en el Río de la Plata. Este resurgimiento realista puso fin a la primera fase de la lucha por la independencia y con la restauración del absolutista Fernando VII en España, a la posibilidad de reformar el pacto colonial a favor de mayor autonomía para América, e inclusive el Perú. En adelante, las opciones girarían en torno a alguna forma de monarquía (constitucional o absolutista) o a la independencia.

Abascal aprovechó la oportunidad para retirarse a España en 1816, entregando el poder a un nuevo virrey, Joaquín de la Pezuela, quien heredó un

formidable ejército realista que alcanzaba unos setenta mil hombres, aunque la mayoría eran integrantes de las milicias restauradas a partir de 1808. Sin embargo, Pezuela recibió una creciente crisis fiscal junto con un tesoro casi vacío, una producción de plata en serio descenso, una caída en la producción agrícola costeña y gastos militares cada vez mayores. El principal culpable era el declive de la economía, precipitado por una repentina y aguda caída en la producción de plata después de 1812, en particular en Cerro de Pasco, que ahora daba cuenta de entre un sesenta a setenta por ciento de la producción virreinal total. El descenso de la producción argentífera, junto con la incertidumbre política relacionada con las guerras por la independencia en otras partes del continente, se conjugaron para desacelerar la actividad económica general, y por lo tanto, la inversión de capital en todo el virreinato. Cuando el ejército de San Martín del Río de la Plata inesperadamente cruzó los Andes y logró capturar Chile en 1818, el lucrativo intercambio peruano de azúcar por trigo terminó abruptamente, dañando severamente la agricultura costeña y los intereses mercantiles de Lima.

Con la caída de Chile, la defensa del virreinato se hizo aún más imperativa. Ella fue financiada con impuestos más elevados y un incremento en las contribuciones de miembros acaudalados de la élite limeña, que absorbían el poco excedente disponible para reinvertir y sustentar una economía debilitada. Un estimado de cinco millones de pesos se habrían destinado al financiamiento de las campañas militares españolas en Europa entre 1777 y 1814, mientras que a partir de entonces estas «contribuciones» fueron a financiar los ejércitos realistas en Perú y en otras partes del continente. Un indicador de la crisis económica es que la producción total del país, de alrededor de 8,7 millones de pesos, era demasiado baja para cubrir las importaciones anuales que ascendían aproximadamente cinco millones de pesos; además, los gastos adicionales del gobierno, y los de defensa alcanzaban entre cuatro y cinco millones de pesos al año. El resultado de esta situación fue un gasto crecientemente deficitario por parte del gobierno virreinal, de manera que la deuda interna subió de ocho millones de pesos, al inicio de las guerras de independencia, a once millones en 1816, y a un mínimo de entre dieciséis-veinte millones de pesos en 1819.

Aunque los peruanos continuaron quejándose de la carga de los impuestos más elevados y las contribuciones forzosas para mantener las fuerzas realistas, la causa de la independencia atrajo pocas manifestaciones externas hasta el desembarco, en 1820, de los cuatro mil hombres argentinos y chilenos de la fuerza expedicionaria de San Martín en Pisco, a doscientos kilómetros al sur de Lima. Prometiendo la libertad a los esclavos de la costa sur, San Martín logró convencer a un gran número de negros de que cambiaran la hacienda por su ejército. Poco después de trasladar sus fuerzas por mar al puerto de Huacho, al norte, una serie de ciudades de la costa septentrional se proclamaron a favor de la independencia.

La más importante de ellas fue Trujillo, donde el intendente, el marqués de Torre Tagle, tenía un largo registro de agravios personales relacionados con sus frustradas expectativas de ser nombrado a cargos más altos.

La declaración de independencia de Torre Tagle estuvo acompañada por brotes de acciones guerrilleras contra las fuerzas realistas en la sierra central. Allí, el terreno montañoso, la cercanía a Lima, el gran número de arrieros vinculados a las minas de plata, así como de campesinos ligados a la economía de mercado, crearon las condiciones ideales para la organización de montoneras por parte de la burguesía disidente de mineros y comerciantes, en respaldo a la independencia. La posición de San Martín había mejorado aún más en 1820, cuando Fernando VII se vio obligado a restaurar la constitución liberal de 1812 y parecía estar más dispuesto a negociar un arreglo al conflicto colonial, puesto que España no estaba en condiciones de enviar más refuerzos a América.

En este contexto, el siempre cauto San Martín asumió la posición de aguardar a ver qué pasaba, esperando que su presencia atrajera a los peruanos a la causa rebelde y mostrara a las autoridades realistas lo fútil que era toda resistencia militar. Incluso inició unas breves negociaciones con el régimen virreinal, en las que manifestó su preferencia por un nuevo gobierno independiente pero monárquico, bajo un príncipe de la familia real española. Nada se logró con estas tratativas, aunque en medio de ellas Pezuela fue reemplazado en un golpe militar por el general José de la Serna.

Evaluando la situación militar, el nuevo virrey concluyó que no estaba en condiciones de defender la capital y llevó sus fuerzas momentáneamente a la fortaleza del Real Felipe en el Callao, y posteriormente a Huancayo, en la sierra central. Esta retirada tomó a San Martín por sorpresa y dejó a Lima completamente indefensa y sin autoridades durante cuatro días, lo que produjo el estallido de disturbios populares en los que las turbas atacaron los establecimientos comerciales de mercaderes peninsulares. Al entrar a la ciudad, sin oposición alguna el 10 de julio de 1821, San Martín rápidamente restauró el orden.

Tres semanas más tarde, el 28 de julio, San Martín proclamó la independencia, asumió el cargo de protector o gobernante provisional y convocó a la elección de un congreso. Un mes más tarde emitió una serie de decretos poscoloniales liberal-nacionalistas, que incluían la libertad para todo hijo de esclavos, la abolición del tributo indígena (no advirtiendo que en realidad se le había rebautizado como contribución una década antes) y del trabajo forzado, y la trascendental declaración de que en adelante todos los indios serían llamados peruanos (haciendo que todos ellos fueran en teoría iguales). De igual manera, ordenó que todos los peninsulares fueran expulsados del país y que se confiscaran sus propiedades, juntamente con las de sus aliados criollos realistas. De los diez mil españoles en Lima, sólo quedaron mil después de que la expulsión se llevó a cabo. Ya severamente debilitada por la

cesión de continuos préstamos y donativos para defender el poder real en América, la vieja clase dominante fue destruida con estas medidas confiscatorias.

Sin embargo, el entusiasmo inicial por San Martín y su nuevo gobierno republicano pronto se vio opacado por la creciente parálisis económica. La confiscación de haciendas realistas y el reclutamiento de esclavos en el ejército libertador dislocó la producción de alimentos en la costa y produjo severas carestías y el incremento de los precios de alimentos en la capital. La producción de plata prácticamente se detuvo causando una severa escasez de barras de metal con que comprar mercaderías extranjeras, y de monedas para el comercio interno. A medida que la economía se paralizaba, los ingresos fiscales, procedentes fundamentalmente de las aduanas y la minería, desaparecieron y el gobierno recurrió a más contribuciones forzosas y a la impresión de dinero a gran escala. En última caso, estas condiciones de deterioro avivaron los fuegos del descontento público y el resentimiento con el nuevo gobierno republicano y el dominio «extranjero». En efecto, la mayoría de los asesores de San Martín y las personas por él nombradas eran argentinos detestados universalmente por ser foráneos, en particular Bernardo de Monteagudo, el autocrático y arbitrario ministro de guerra.

Al quedar la marina impaga, el almirante Thomas Cochrane, un mercenario que comandaba la flota chilena, echó sal a las heridas al desertar y retornar a Chile con toda la reserva de plata del gobierno. Irónicamente, toda la flota de ese país estaba conformada por la marina mercante peruana que los navieros habían entregado al virrey para la defensa de Lima y el Callao, pero que ahora habían sido capturados por los chilenos. La pérdida de estas naves fue otro duro golpe para los comerciantes limeños, cuyo dominio anterior del tráfico en el Pacífico había sido asumido ahora por los puertos de Valparaíso y, en menor medida, Guayaquil.

Para mediados de 1822, apenas un año después de que San Martín ingresara triunfalmente a Lima y proclamara la independencia del Perú, con escasas posibilidades de liberar el interior, su gobierno era un caos. San Martín soportó más dificultades por el deterioro de su salud, pues había sufrido tuberculosis desde niño y cada vez más aumentaba su adicción al opio, que usaba en cantidades cada vez mayores como analgésico. Enfermo e incapaz de movilizar a su ejército para ascender a la sierra y desafiar a las todavía formidables fuerzas realistas del virrey, San Martín decidió viajar a Guayaquil en julio para reunirse con el general Simón Bolívar, cuyas fuerzas norteñas gradualmente venían cerrando sobre el Perú el otro brazo de la tenaza.

Esta reunión histórica entre los dos grandes libertadores de Sudamérica demoró cuatro días y en ella parece haberse alcanzado ningún acuerdo o cronograma específico sobre cómo liberar Perú. Como no se llevó ningún acta escrita de la reunión, lo sucedido no está del todo claro aunque Bolívar parece haber ofrecido enviar tropas al sur. Sí sabemos que a su retorno a Lima, un San

Martín enfermo decidió renunciar al protectorado, dándose tal vez cuenta de que el Perú no era lo suficientemente grande para ambos libertadores y percibiendo además el declive de su influencia política al ser otro extranjero más que gobernaba el país. En setiembre de 1822 presentó su renuncia al Congreso recién reunido y partió de inmediato a casa.

El Congreso de cincuenta y un representantes, conformado principalmente por abogados, médicos, hombres de Iglesia y oficiales militares, asumió el poder, nombrando primero a una junta que gobernó ineficazmente apenas unos cuantos meses. Posteriormente, presionado por el ejército que deseaba un liderazgo más fuerte, nombró como primer Presidente de la República al aristócrata limeño José de la Riva-Agüero, un viejo defensor de la independencia, en lo que Basadre llamó el primer golpe militar del país. Riva-Agüero pasó buena parte de su gobierno de cuatro meses enfrentado con el Congreso y negociando un préstamo extranjero de 1.2 millones de libras en Inglaterra. El Congreso depuso a Riva-Agüero cuando la ofensiva realista obligó a sacar al gobierno de Lima al Callao, nombró Presidente a Torre Tagle e invitó a Bolívar a entrar al Perú. Sin embargo, Riva-Agüero se negó a renunciar al poder o a reconocer al nuevo régimen y trasladó su gobierno a Trujillo, donde inició negociaciones con los realistas. Al desembarcar Bolívar en el Callao, el 1 de septiembre de 1823, se encontró con que el Perú tenía ahora dos presidentes y estaba virtualmente en bancarrota. Bajo la presión del ejército para poner fin al caos político, el congreso decidió nombrar a Bolívar dictador militar y comandante de las fuerzas armadas, a pesar de que muchos sospechaban que se trataba de un usurpador de corte napoleónico.

Durante un tiempo, ni siquiera el genio de Bolívar pudo revertir el retroceso de la independencia peruana y la pestilente anarquía política de Lima. Este decidió que no podía mantenerse la capital y se retiró a Trujillo, al norte, para así asegurar una base más viable desde la cual montar un ataque contra las fuerzas realistas en la sierra. Lima fue nuevamente ocupada por un ejército fidelista desde febrero hasta diciembre de 1824, y vio la extraordinaria deserción hacia el bando realista del Presidente Torre Tagle y de casi todo el liderazgo patriota. Para marzo de 1824, todo el Perú excepto el norte se hallaba nuevamente bajo el control hispano, y la causa patriota parecía perdida.

Bolívar insistió a pesar de todo y comenzó a reconstruir sus fuerzas en Trujillo. Tras entregar el manejo del gobierno al hábil y patriótico Sánchez Carrión, el Libertador reunió pacientemente un ejército de más de diez mil hombres, conformado por colombianos y lo que quedaba de las fuerzas patriotas. Estratégicamente, decidió ignorar a la costa y a Lima, para concentrar sus fuerzas contra el ejército realista en la sierra central. En junio de 1824, sus tropas ascendieron a la sierra, donde recibieron la ayuda de las montoneras que jamás habían dejado de operar a favor de la independencia. Después de vencer en un

breve combate en Junín el 6 de agosto, Bolívar dividió sus fuerzas, enviando a su lugarteniente Antonio José de Sucre en persecución de La Serna, quien se había retirado hacia adentro del altiplano de Ayacucho, mientras que él retornaba a la costa para retomar Lima.

Bolívar logró su objetivo de reocupar la capital en los primeros días de diciembre, a lo que le siguió Sucre poco después, el 9 del mismo mes, con la captura de los siete mil hombres del ejército realista de La Serna, poniendo fin, de esta manera, a casi tres siglos de dominio español. (Una dispersa resistencia realista fue sofocada por Sucre en el alto Perú en abril de 1825, asegurando la independencia de Bolivia, mientras que un pequeño destacamento de realistas que resistían en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, finalmente se rindieron después de un prolongado y brutal asedio el 23 de enero de 1826.) Luego de vacilaciones y luchas intermitentes, finalmente se había alcanzado el objetivo: el Perú por fin era libre. Pero su pueblo y sus líderes ahora debían enfrentarse al abrumador desafío de construir un nuevo gobierno viable, basado en principios republicanos no probados, capaz de ejercer cierto grado de unidad nacional sobre un vasto territorio que seguía básicamente sin definir.

Capítulo V

La utopía republicana y la inestabilidad posterior a la independencia, 1824-1840

El Perú republicano poscolonial se vio enfrentado a una serie de complejos problemas desde el inicio mismo de la independencia. Tal vez el más serio de ellos era la contradicción fundamental que subyacía a la nueva nación imaginada por los fundadores criollos, y que se expresaba en las nuevas constituciones del país. La élite bolivariana que alcanzó la separación de España basó su exitoso desafío a la metrópoli y el pacto colonial en las ideas «revolucionarias» de la soberanía popular, derivadas de la Ilustración europea del siglo XVIII. Por lo tanto, la república independiente del Perú se fundaba en los principios liberales de democracia, ciudadanía, propiedad privada y derechos y garantías individuales, los que, de una u otra forma, fueron incorporados a las diversas constituciones a partir de 1824 aun cuando ocasionalmente se les adaptaba para que encajaran en las circunstancias locales. Aunque esta noción de soberanía popular, que teóricamente convertía a todos los peruanos en iguales, fue aplicada eficazmente por los disidentes criollos para cuestionar el poder de la clase dominante peninsular, ella de ninguna manera correspondía a la realidad sociopolítica de los tres siglos de dominio colonial hispano, que Nugent describió como una «soberanía aristocrática».

El Perú colonial era, por el contrario, una sociedad altamente estratificada, jerárquica y sumamente desigual, creada sobre diferencias fundamentales entre sus pobladores. «Las distinciones basadas fundamentalmente en la raza (indios, mestizo, blanco), el género (femenino y masculino), la ascendencia (hispana o no) y la propiedad de la tierra segregaban la población en (lo que en teoría eran) categorías sociales fijas y heredadas que prescribían en gran medida las posibilidades de la vida de las personas que las ocupaban» (Nugent 1997: 15). Los gobernantes de este ordenamiento sociopolítico eran siempre seleccionados entre la élite masculina blanca de ascendencia hispana, la que a su vez detentaba la mayor parte de los beneficios de dicho ordenamiento. En semejante orden patriarcal, patricio y paternalista, las clases dominantes estaban a cargo de proteger a la inmensa mayoría de la población (indios, mestizos y mujeres), a la que en



Mapa 5. Perú circa 1830. *Fuente*: Paul Gootenberg, *Between Silver and Guano: Comercial Policy and the State in Postindependence Peru* (Princeton, NJ, 1989), 2.

esencia consideraban «menores de edad»: inferiores sociales e incapaces de encargarse de sí mismos. Por ello, en su concepción, y posteriormente durante la mayor parte de su historia republicana, el Estado se vio debilitado por el conflicto irresuelto entre dos nociones opuestas de legitimidad sociopolítica.

La condición de la inmensa mayoría indígena era característica de este conflicto. En la época colonial, los nativos andinos fueron relegados a la llamada república o pueblos de indios, donde estaban sujetos a los proyectos evangelizadores y civilizadores de los Reyes Católicos y sus sucesores. «Reducida» en estos pueblos de indios cristianizados, a los cuales se les concedió un autogobierno limitado bajo la supervisión de los oficiales reales, la población indígena supuestamente adquiriría las virtudes cívicas y el buen gobierno cristianos. Ella también estaba protegida por la Corona de la usurpación de integrantes de la república o pueblos de españoles, su contraparte en la organización de la sociedad colonial. Sin embargo, del mismo modo que la Corona inventó dos repúblicas (o naciones) distintas en la configuración de la sociedad colonial, de igual manera, los constructores criollos de la independencia procedieron a inventar o superponer la idea de una única nación peruana bajo la influencia de la Ilustración. En realidad, ésta fue una ficción de la cual los nativos andinos siguieron siendo excluidos. En palabras de Thurner (1995: 292), después de 1824 «la comunidad nacional imaginada por los criollos peruanos limpiamente dejó de lado a la mayoría indígena».

Sin embargo, los indios no aceptaron pasivamente esta nueva situación y a poco de la independencia comenzaron a «cuestionar», en ciertos lugares, esta concepción criolla de la nación, exigiendo que el nuevo Estado republicano poscolonial defendiera sus tradicionales «derechos indígenas», basados en las viejas repúblicas. Estas demandas se convirtieron rápidamente en la base de una negociación a escala local entre los caudillos, surgidos como nuevos actores y árbitros políticos del ordenamiento postindependentista.

Los caudillos eran el resultado de otro problema poscolonial. Con el colapso del Estado virreinal en 1824, las tendencias políticas centrífugas inherentes al Perú, pero generalmente controladas por el centro, Lima, resurgieron con fuerza. Por otro lado, el poder se dispersó por el campo, en donde afirmó su autoridad una red vagamente conectada y a menudo conflictiva de gamonales (hacendados señoriales), en asociación con los terratenientes más grandes (latifundistas). Estas élites rurales esgrimían un control político de facto sobre vastas áreas; frecuentemente, ocupaban cargos públicos y quedaban mayormente libres del control del débil Estado central republicano de Lima. El eje de su poder era su control de la tierra y el dominio sobre una fuerza laboral servil, conformada por campesinos indígenas de cuyo trabajo y servicios se apropiaban. En suma, al inicio de la era republicana, el Perú era un mosaico de sociedades agrarias regionales semejante a un orden feudal.

En este medio poscolonial contradictorio y fracturado surgió una serie de caudillos atávicos —los ubicuos jefes militares que gobernaron la América Hispana en el siglo XIX— después de 1824, que se disputó el poder político. La mayoría de ellos eran figuras militares que forjaron su reputación en las guerras de independencia y su base de poder en el ejército. Habiéndose extendido por un período prolongado, las guerras legitimaron el uso de la fuerza en la resolución de las disputas políticas, en tanto que el ejército, junto con la Iglesia, surgieron como las instituciones relativamente coherentes de la sociedad postindependentista. Sin embargo, esta coherencia no significaba que los militares estuviesen unidos. Por el contrario, estaban divididos por las rivalidades personales y el faccionalismo, que contribuyeron acrecentar la naturaleza caótica de la política después de 1825.

Manipulando hábilmente el personalismo y el clientelaje hispano, estos caudillos andinos movilizaron seguidores y extendieron la generosidad del tesoro y los nombramientos estatales de cargos como recompensa a la lealtad. Igualmente, establecieron alianzas con diversas élites terratenientes y comunidades indígenas, usando la fuerza o amenazado con hacerlo para derrotar a sus rivales, y negociando el respaldo de la sociedad civil para obtener el poder a nivel local, regional y nacional. El resultado de esta situación fue que la temprana sociedad republicana andina constantemente fue quebrada y desestabilizada, en un contexto de descontrolados conflictos de clase y regionales, y la inexorable rivalidad entre los oficiales y la élite. Repleto de diversas elecciones, anulaciones, conjuras, conspiraciones, golpes y rebeliones, el Perú experimentó no menos de veinticuatro cambios de gobierno —en promedio uno por año— entre 1821 y 1845, y la constitución fue reescrita un total de seis veces.

Si bien parecería que las décadas posteriores a la independencia fueron completamente caóticas y que los caudillos andinos desarrollaron una carrera personalista aparentemente sin sentido por el botín y el poder, lo cierto es que ellos promovieron programas identificables y representaron bloques regionales o sociales discernibles, como lo mostrasen Gootenberg (1989) y otros. Dicho de otra forma, «detrás del caos y las luchas descaradas por el poder yacían desacuerdos importantes sobre la relación entre Estado y sociedad» (Walker 1999: 158). De este modo, los caudillos andinos por lo general también se inclinaban por uno u otro lado de la línea divisoria entre liberales y conservadores, que caracterizó la política latinoamericana en el siglo XIX, aunque ello no les impidió cambiar de bando de manera oportunista, esconder las posiciones o ignorar la constitución con el propósito de alcanzar ventajas personales, algo que generalmente hicieron.

En general, los conservadores proponían un Estado centralizado fuerte, políticas comerciales proteccionistas y el mantenimiento de la configuración corporativa de la sociedad. Eran antiextranjeros, cayendo a menudo en la

xenofobia al mismo tiempo que criticaban la inclinación liberal a la importación de ideas e ideologías extranjeras. Por otro lado, los liberales favorecían un Estado menos centralizado y a menudo federal, el recorte de los poderes del Ejecutivo, el comercio libre y la restricción de los derechos corporativos, y ocasionalmente eran anticlericales. Sin embargo, ninguno de los bandos propuso cambios drásticos a la América Latina postindependentista, ya que compartían la idea de una «soberanía aristocrática» que encarnaba su visión esencialmente jerárquica, racista y elitista de la organización social.

Dos caudillos sobresalen políticamente en las revueltas de las décadas de 1820 y 1830: el General conservador Agustín Gamarra del Cuzco, y su amigo de la infancia y posterior archirrival, el general Andrés de Santa Cruz. Ambos llegaron a ser presidentes del Perú, Gamarra gobernó entre 1829 y 1833, y nuevamente de 1839 a 1841 y Santa Cruz lo hizo brevemente a comienzos de la década de 1820 y posteriormente fue el creador de la efímera Confederación Perú-Boliviana y su presidente entre 1836 y 1839 (y de Bolivia entre 1829 y 1839). Ambos caudillos combatieron bajo el mando de Bolívar en las guerras de independencia y participaron en las innumerables intrigas que caracterizaron la política de la temprana república.

Administrativamente, el Perú se adhirió a muchas de las jurisdicciones del régimen colonial, aunque los nombres cambiaron. Se retuvo, por ejemplo, la división fundamental del país en intendencias pero su nombre se cambió por el de departamentos, que eran gobernados por prefectos y a su vez estaban divididos en provincias, administradas por los subprefectos. Tanto los departamentos como sus capitales eran importantes centros regionales de autoridad que ejercían una considerable cuota de poder, dado que el gobierno nacional dependía de sus rentas, sobre todo de la recaudación del tributo indígena (ahora conocido como «contribución indígena»), del periódico respaldo militar y de la capacidad para conservar cierto nivel de orden en el interior. Los subprefectos de las provincias eran importantes porque supervisaban la recolección de impuestos a nivel local, reunían y difundían información y, en tiempos de guerra reclutaban soldados y proporcionaban suministros. Ellos trabajaban, a su vez, con los cobradores locales de impuestos —agentes de las autoridades comunales indias (los alcaldes) y un grupo de funcionarios *mistis* (la palabra quechua para «blanco») de menor jerarquía—, que asumían el papel de mediadores entre el nuevo Estado republicano y la sociedad indígena, antes ocupado por la extinta aristocracia curacal. Al igual que estos últimos, los funcionarios estatales de menor jerarquía crearon redes de clientelaje y formas de coerción que penetraron profundamente en la sociedad indígena postindependentista. A pesar de las constantes guerras civiles y perturbaciones que signaron la temprana república, el Estado central

siguió cobrando impuestos y funcionando en buena parte como lo había hecho en el periodo colonial. Por último, las fronteras peruanas, que continuaron siendo básicamente las del virreinato Borbón, eran cambiantes y fluidas, constituyéndose en el centro de la intervención extranjera y de la guerra.

Como ya señalé, la Iglesia fue una de las pocas instituciones que resultó relativamente intacta en la lucha por la independencia. En 1792 el virreinato del Perú contaba con 1.818 curas seculares y 1.891 religiosos, principalmente criollos, para atender a una población que alcanzaba un poco más de un millón de habitantes. En Lima había 67 iglesias y capillas, 19 monasterios y 14 conventos. A pesar de la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus empresas por el Estado en 1767, la Iglesia estaba ampliamente respaldada financieramente gracias a numerosas donaciones, rentas y derechos, incluyendo las ganancias —en el caso de las órdenes religiosas— procedentes de un gran número de haciendas y propiedades agrarias. En general, la reforma borbónica y su impulso estatista y centralizador logró subordinar a la Iglesia, aunque ésta continuó bien con el «despotismo ilustrado» y el paternalismo de la Corona.

Según Klaiber (1992), contrariamente a lo que se cree, la Iglesia no era «oscurantista» sino más bien bastante liberal al haber incorporado las ideas de la Ilustración, algunas de las cuales pasaron a ser el eje central del movimiento independentista. De hecho, el clero secular, que era predominantemente criollo, se identificó con la independencia, mientras que el regular, conformado principalmente por peninsulares, permaneció leal al antiguo régimen. Sin embargo, los desórdenes de la emancipación y sus secuelas afectaron a la Iglesia negativamente. Por ejemplo, en términos económicos, perdió muchas de sus riquezas debido a las guerras y, a diferencia del periodo colonial, perdió constantemente terreno respecto a la fiscalización a lo largo de buena parte del siglo.

Una de las cuestiones más importantes que la Iglesia debió enfrentar posteriormente a la independencia fue el esfuerzo realizado por el naciente Estado republicano por retener el control de la institución a través de los medios de patronazgo (antes real, ahora nacional) tradicionales. En consecuencia, luego de la independencia, el gobierno obligó a todos los obispos a abandonar su diócesis y Bolívar nombró otros unilateralmente. Sin embargo, el Papado de Roma rechazó este intento de establecer un patronazgo nacional y no fue sino hasta mediados de la década de 1830 que se llegó a un arreglo, dándole a Roma el derecho a aprobar a todos los nombrados.

De esta manera Roma se protegió del posible anticlericalismo de los gobiernos liberales, y gradualmente impuso su influencia ideológica más conservadora: la «romanización» de la Iglesia nacional peruana. Por tanto, los primeros obispos confirmados en el Perú en las décadas de 1830 y 1840, que serían responsables de la reorganización y la configuración de la institución en un futuro previsible

(incluyendo los seminarios, y por lo tanto, la producción de nuevos sacerdotes), eran tanto conservadores como ultramontanos. Este hecho hizo que Klaiber (1992: 47) afirmase que «el pluralismo que caracterizó a la Iglesia durante y después de la independencia (en el clero había realistas, liberales y moderados) se extinguió y fue reemplazado por una uniformidad intelectual en lo que respecta a la religión, la política y la sociedad».

Más allá del conflicto entre Iglesia y Estado después de 1824, en este periodo sobresale el debate respecto al tipo de política a seguir en el comercio: liberal o proteccionista. Del lado del libre comercio estaban, entre otras, los generales Orbegoso, Vivanco, Santa Cruz, caudillos liberales que representaban las aspiraciones librecambistas del regionalismo sureño. Sin embargo, ellos fueron derrotados por un grupo de nacionalistas conservadores mejor organizados, conformado por hacendados aristócratas, monopolistas del consulado y productores de la sierra pero con su centro en Lima y el norte. Dirigidos por los generales Gamarra, La Fuente, Salaverry y otros, estos nacionalistas conservadores lograron establecer una serie de regímenes proteccionistas en Lima que tuvieron la primacía hasta comienzos de la década de 1850.

Decadencia y recuperación económica

No cabe duda de que el Perú ingresó a la era postindependentista con una crisis económica. El país estaba geográficamente aislado, era políticamente inestable, se hallaba económicamente postrado y su futuro se avizoraba oscuro. Estas condiciones fueron plasmadas en las memorias de Hipólito Unanue, el primer ministro de hacienda del país, quien escribió en 1822:

> [E]l tesoro estaba vacío. Los campos agrícolas a treinta leguas de la capital no eran sino una vasta extensión desolada. Las minas estaban ocupadas por el enemigo. El Callao estaba en manos enemigas, estorbando el comercio. Los recursos económicos del pueblo habían sido drenados debido a los muchos impuestos y éste se había visto reducido al hambre por el asedio total que había sufrido. Dondequiera que se mirase, no se veía sino miseria y desolación (citado en Bonilla, *CHLA*, III, 543).

Tal vez el golpe más duro fue para la minería de plata, el puntal de la economía peruana, que sufrió un caída dramática en la década de 1820, cuando las inundaciones y el azote de las guerras afectaron la producción, sobre todo en Cerro de Pasco. Además, la sierra central, que experimentó el choque principal entre las fuerzas patriotas y realistas a comienzos de la década de 1820, estaba económicamente devastada. Allí, el rico botín agrícola del valle del Mantaro, por ejemplo, había sido severamente consumido para sustentar a los dos ejércitos

más grandes del continente, sin mencionar la destrucción general que causaron mientras maniobraban hacia su enfrentamiento en Junín.

En la sierra sur, la economía colonial tradicional, basada en lo que quedaba del eje comercial Lima-Potosí, también colapsó. Ello conllevó una fragmentación regional que, junto con la desintegración del gobierno central, favoreció el surgimiento de las élites locales, las cuales a pesar de todo continuaron siendo relativamente débiles hasta después de 1850. En términos generales, estos grupos consolidaron su poder sobre la población india propagando una ideología basada en su presunta superioridad racial —esto es biológica— sobre las masas indígenas. Al mismo tiempo, el poder político indio en las comunidades se deterioró con la desaparición de la clase de los curacas, quienes habían actuado como señores étnicos desde la época prehispánica.

La producción agrícola a lo largo de la costa central y norte estaba en un estado igualmente lamentable. La economía rural de esta región experimentaba una decadencia de larga duración, que se remontaba al periodo colonial tardío, debido a los desastres naturales, los cambios en los patrones comerciales, la expulsión de los jesuitas y los efectos de diversas reformas borbónicas. Las guerras de la independencia inflingieron aún daños a los productores de azúcar, algodón, vino y productos alimenticios, desde Cañete al sur de Lima hasta Lambayeque al norte. No menos importante era el problema en la provisión de mano de obra causada por el reclutamiento de esclavos y campesinos para los ejércitos opositores que disputaban la independencia. Después de 1824 la recuperación se vio retardada debido a las continuas conmociones políticas, la fuga masiva de capital y su escasez, así como la falta de disposición de los extranjeros para arriesgarse a invertir en un medio político y económico tan inestable.

En estas circunstancias, los hacendados costeños miraron hacia dentro, a los mercados urbanos e interregionales del Pacífico en búsqueda de posibilidades de revivir la producción y el intercambio. Esta es la base de la perspectiva esencialmente proteccionista de Lima y de la costa, donde los productores buscaban cerrar el paso a los alimentos extranjeros importados, sobre todo los de los intrépidos comerciantes y especuladores yanquis, atraídos a las costas del Pacífico por la escasez urbana desatada por la guerra. De hecho, para 1825 estos comerciantes proporcionaban casi dos millones de dólares anuales de harina, aceite de cocina, tabaco, ron, paños de algodón de baja calidad y otros artículos para los necesitados consumidores peruanos.

Por otro lado, los hacendados buscaban reactivar sus propiedades severamente dañadas con miras a su antiguo mercado en Chile, a donde habían enviado azúcar y tabaco a cambio del trigo que era molido y transformado en harina para los mercados de pan limeños. Este lucrativo comercio, que era realizado por la marina mercante peruana y sumaba más de un millón de dólares

en 1791, quedó completamente destruido por las guerras de la independencia. Su colapso abrió el camino a la decadencia de la posición antes dominante de Lima-Callao en el Pacífico y en el comercio internacional, y el surgimiento de los vecinos puertos de Valparaíso y Guayaquil. Este último se convirtió en el puerto de entrada preferido a la costa oeste para los bienes manufacturados europeos, transportados alrededor de la punta de América del Sur y no a través de la más costosa ruta ístmica. Frente a esta competencia, Lima y los grupos de élite norteños —hacendados, molineros y comerciantes— emprendieron una campaña concertada para intentar reestablecer el comercio con Chile.

En el sur emergió una formación y una perspectiva económica completamente distinta y contrincante. Allí, los agricultores, sobre todo los pequeños productores de Moquegua a Ica, con su centro comercial en Arequipa, históricamente habían orientado su producción de vino, aguardiente y productos alimenticios hacia los mercados mineros de Potosí y el Alto Perú. Estos artículos, así como los bienes manufacturados importados, eran transportados y vendidos por legiones de arrieros y comerciantes que abastecían este lucrativo circuito comercial desde la segunda mitad del siglo XVI, aun cuando el tráfico fue perturbado por Buenos Aires cuando pasó a ser sede de un virreinato en 1776. En consecuencia, después de la independencia, los agricultores, exportadores y comerciantes del sur vieron posibilidades de desarrollo en el establecimiento de vínculos comerciales de la región con la recién independizada Bolivia a través de una política de comercio libre.

A mediados de la década de 1830 se unieron a este grupo los productores y exportadores de lana (primero de oveja, luego de alpaca y, en menor medida, de vicuña y llama), quienes encontraron un creciente mercado de exportación en la industria textil británica. Ambos grupos compartían una larga antipatía por el monopolio que los comerciantes limeños habían ejercido en la región, por no mencionar a los políticos. El resultado fue un creciente sentir secesionista que se expresó en la efímera Confederación Perú-Boliviana (1836-1839). De manera que durante más de una generación, los intereses comerciales del sur, orientados hacia Bolivia y Gran Bretaña, y los de Lima y el norte, dirigidos hacia Chile, lucharon fuertemente por el control del Estado, contribuyendo, en el transcurso de ello, a su falta de unidad y a su debilidad.

La tercera gran región, que constituía la mayor parte de la economía peruana, era la sierra central, donde dominaban la minería y la agricultura. Las minas de plata de Cerro de Pasco, que reemplazaron a Potosí como el principal productor y exportador de metales en el siglo XVIII, no experimentaron en el siglo XIX el colapso que los historiadores antes creían. La producción sí alcanzó su nadir en el periodo 1814-1818 con 837.716 marcos (de 1.472.543 marcos en 1804-1808), a lo que le siguió una expansión general, en las dos décadas siguientes, interrumpida por periodos de alzas y bajas, hasta alcanzar un punto máximo de 1.690.328

marcos entre 1839 y 1843. Las caídas se debieron al costo de reparar y drenar algunas de las minas más grandes luego de los daños inflingidos durante las guerras. Junto con Huarochirí, Cerro de Pasco produjo alrededor del sesenta y cinco por ciento de la plata peruana (un alza de más de cuarenta por ciento) en las dos primeras décadas del periodo postindependentista. La mayoría de las minas eran producciones de pequeña a mediana escala, dispersas sobre un gran territorio, con tecnología rudimentaria y relativamente pocos trabajadores indios.

Entonces, la producción de plata brindó el estímulo económico a una sola región que se extendía desde Cerro de Pasco hacia el fértil valle del Mantaro al oeste, y hacia la jungla y el departamento de Huánuco por el este. La zona de producción agrícola más dinámica de esta región era el valle del Mantaro, cuyo sistema de tenencia de la tierra estaba (hasta ahora) caracterizado por minifundistas antes que por haciendas señoriales, como sucedía en el sur. Espinoza Soriano atribuye esta inusual tenencia de la tierra a una dispensa especial hecha por el rey Felipe II a los huancas, que cerró el camino a las haciendas en el valle, como recompensa por su alianza con Pizarro en contra de la facción cuzqueña durante la conquista. En consecuencia, y a diferencia del sur señorial, las comunidades indígenas del valle del Mantaro quedaron libres del dominio de haciendas, en tanto que su campesinado pasó a ser una fuerza dinámica, independiente y comercialmente dinámica de la región. Según Contreras (1987), algo típico de su energía e iniciativa fue que un tercio de la fuerza laboral de Pasco provenía de campesinos estacionalmente migrantes procedentes del valle del Mantaro, los cuales reinvertían sus ganancias en sus parcelas comunales.

El avance de la minería de la plata en la década de 1830 fue uno de los pocos puntos económicos brillantes del país, con exportaciones de mineral y monedas que sumaban entre el ochenta y dos y el noventa por ciento de las exportaciones, dotando así al país de plata para pagar una ola inicial de importaciones extranjeras durante la primera mitad de la década de 1820, bajo un efímero régimen liberal. Antes de experimentar una contracción económica en la posguerra después de 1825, el Perú se vio inundado con importaciones extranjeras baratas, valorizadas entre cuatrocinco millones de dólares anuales, principalmente de Gran Bretaña (millón y medio de dólares), pero también de Francia (ochocientos mil dólares) y los Estados Unidos ($1,2-$2 millones). Aunque beneficiaban a los consumidores, estas importaciones baratas —y sobre todo los textiles, que conformaban el noventa por ciento de las importaciones británicas— afectaron severamente a la clase artesana nativa, así como a lo que aún quedaba de la industria textil de la sierra (los obrajes) después de la tardía liberalización colonial del comercio a través de Buenos Aires. En consecuencia, el sentimiento proteccionista era fuerte en lugares como el Cuzco.

Las fortunas de la industria minera y su efecto multiplicador, configuraron el entorno de la producción agrícola y los circuitos comerciales de la sierra. El proceso de la minería o su retroceso, se tradujo, en mayor o menor medida, en periodos de autosuficiencia para las haciendas y comunidades indígenas durante la más recesiva década de 1820, mientras sus mercados mineros estaban deprimidos, a lo que le siguió el renacimiento de la producción y la actividad económica durante la recuperación de la siguiente década. En los aproximadamente diez años posteriores a la independencia hubo una disminución significativa de la población y en la importancia de las áreas urbanas (desurbanización), lo que tendió a reforzar los patrones indígenas de producción e intercambio. Entre otras cosas, esta caída hizo que Langer y otros sugirieran que el temprano siglo XIX fue un periodo de renacimiento de la economía étnica andina de las comunidades, como no se había visto desde mediados del siglo XVI.

Un indicio de semejante florecimiento económico indígena fue la creciente importancia de las ferias andinas, que sirvieron no sólo para facilitar el comercio intraandino a través de los tradicionales mecanismos andinos del trueque, sino también para vincular el sector indígena con la naciente economía exportadora de lana. Este fue el caso de, por ejemplo, la feria de Vilque en el altiplano, en las afueras de Puno, en el sur peruano, que en 1840 era un próspero lugar en donde los indios vendían principalmente fibras de camélidos (alpaca, llama, vicuña) y adquirían bienes de mercaderes forasteros. De hecho, la demanda internacional de diversas fibras de lana de la sierra creció en forma constante durante la década de 1830, valorizándose en seiscientos cincuenta mil dólares las exportaciones de lana no procesadas a Gran Bretaña en 1839. Esta demanda estimuló una importante expansión de los rebaños de animales, principalmente en las tierras indígenas del Cuzco a Puno, colectándose sus productos en ferias como Vilque y entregándolos a casas comerciales británicas con sede en Arequipa. La economía del sur se beneficiaba, asimismo, con la exportación de nitratos (trescientos mil dólares en 1839), y de quinina, cobre y algodón.

El panorama, oscuro en general, de la macroeconomía peruana inmediatamente después de la independencia, se refleja en el escaso conocimiento existente sobre la tendencia de los precios. Gracias a un estudio pionero sobre precios realizado por Gootenberg (1990), sabemos que el Perú experimentó una deflación general de los precios hasta mediados de siglo. La alteración en los suministros debido a los bloqueos, las carestías urbanas, las exacciones militares de la población civil, la severa destrucción agrícola en los valles de pan llevar de Chancay y el Mantaro, y la fuga de esclavos de las haciendas, fueron factores que contribuyeron a incrementar la aguda inflación inducida por la guerra entre 1815 y 1824. Los precios se elevaron hasta en cuarenta por ciento para 1822, lo cual podría muy bien haber desatado las presiones políticas existentes detrás de

la decisión de declarar el comercio libre en 1821. De ahí en adelante, los precios de las manufacturas importadas cayeron, compensando una aguda alza en los de los alimentos domésticos.

Los precios experimentaron una notable estabilización y deflación entre 1825 y 1846. Dos grandes guerras caudillistas (1833, 1836-1839) alteraron esta tendencia, de manera que junto con las guerras de la independencia de 1815-1824, la tendencia secular global de los precios entre 1800 y 1846 fue a la baja. En este lapso descendieron en promedio alrededor de uno por ciento al año. La producción parece haberse recuperado rápidamente en las haciendas costeras luego de la independencia, pero debido a las alteraciones en el mercado de exportación tradicional (azúcar y tabaco), éstas se pasaron al cultivo de alimentos para el asediado mercado doméstico urbano, cuya población y demanda siguieron deprimidas. Aún más, el precio de los textiles importados disminuyó en cincuenta por ciento debido a una fuerte baja en el precio de los fletes atlánticos y al gradual desmantelamiento de los aranceles peruanos. Los precios igualmente se vieron deprimidos por la escasez de circulante, ya que gran cantidad de monedas de plata eran exportadas (estimadas en 27 millones de pesos entre 1819 y 1825).

El mismo estudio sugiere que este periodo de prolongada deflación tuvo un «efecto democratizador» general en la población, acortando la distancia social entre la élite y las clases populares. El grupo más golpeado en esta época fue la élite mercantil urbana, cuyo ingreso cayó en tanto que el ingreso real de los jornaleros y los agricultores de subsistencia en realidad subió. Al mismo tiempo, las presiones sobre las tenencias de comunidades y de subsistencia por parte de las grandes haciendas disminuyeron a medida que los precios bajaban, los mercados se evaporaban y el valor de la tierra colapsaba. Esta situación hizo que Gootenberg concluyera que «en la era postindependentista muchas jerarquías sociales se debilitaron: entre hacendados y campesinos, artesanos y aprendices, amos y esclavos».

El estado de las finanzas nacionales durante los años deprimidos de la postindependencia fue asimismo oscuro. En el momento de la emancipación, el país ya estaba cargado con una deuda considerable del régimen anterior, además de los fuertes gastos militares efectuados para pagar a los soldados colombianos de Bolívar. Durante la primera mitad de la década de 1820 se contrataron los primeros empréstitos extranjeros con tenedores de bonos británicos, por un total de 1.816.000 libras esterlinas. Sin embargo, los inversionistas y especuladores de los mercados monetarios de Londres calcularon muy mal las posibilidades del Perú y poco después vieron su capital desvanecerse en la insolvencia. A finales de esta década, la deuda externa era cinco veces las rentas anuales del gobierno, y en 1848 había crecido a un estimado de 4.380.530 libras esterlinas. Asimismo, la deuda interna subió hasta un estimado de 6.646.344 pesos para 1845.

Es difícil calcular las rentas del gobierno en este periodo puesto que no se preparó ningún presupuesto estatal formal hasta la década de 1840. Los estimados de las rentas van de un millón quinientos mil a tres millones de pesos entre 1826 y 1849 y de cuatro millones quinientos mil a seis millones de pesos entre 1824 y 1849. Los datos de 1840 muestran que las fuentes de las rentas estatales variaban, proviniendo la mitad de ellos de los aranceles aduaneros, alrededor de un millón doscientos mil pesos de la contribución indígena y la de castas, con pequeños montos procedentes de diversos otros impuestos, rentas y derechos. Un Estado empobrecido siguió reuniendo fondos vendiendo de tiempo en tiempo sus activos, tales como tierras públicas o esclavos, y extrayendo préstamos y contribuciones forzosas de comerciantes acaudalados.

Sin embargo, todas estas fuentes de ingresos no bastaban para cubrir los gastos estatales en este periodo, de manera que los déficit presupuestarios fueron crónicos, alcanzando aproximadamente el treinta por ciento durante la era caudillista. Los gastos militares constituían la mayor parte del presupuesto debido a las frecuentes guerras y rebeliones durante el periodo postindependentista, alcanzando un estimado de cuarenta y ocho por ciento en 1827, cincuenta y nueve por ciento en 1831 y hasta setenta por ciento en otros años. Una renta sustancial era absorbida por la burocracia estatal, cuyo presupuesto, junto con el de los militares, resultaba difícil de controlar o reducir por el descontento que ello podía causar. De esta manera, los casos de quiebra estatal o incumplimiento de pago de los salarios burocráticos o militares perpetuaban un ciclo vicioso de descontento y guerra renovados, destrucción y confiscación económica, colapso fiscal y más levantamientos de caudillos.

Antes se creía que los regímenes en bancarrota crónica del periodo postindependentista animaron a los gobiernos a seguir una política comercial liberal. Se consideraba que los aranceles bajos aceleraban el comercio libre, y con ello también las importaciones, lo cual brindaría un flujo constante de recaudación aduanera al tesoro nacional. Al parecer, ocurrió exactamente lo contrario entre 1828 y 1841, es decir, la quiebra fiscal llevó al proteccionismo, no al librecambismo. La razón era que los caudillos buscaban un financiamiento de emergencia en forma de préstamos y bonos fiscales de la élite mercantil para cubrir el déficit inmediato. Entre 1821 y 1845, estos préstamos mercantiles sumaron un mínimo de dos millones setecientos mil pesos entregados al tesoro limeño. Puesto que los comerciantes y monopolistas de Lima se oponían drásticamente a la apertura de la economía a los comerciantes extranjeros, se creó un fuerte lobby a favor de una economía política proteccionista antes que liberal. De hecho, semejante sistema de crédito fácil para el Estado se institucionalizó en 1834 con la creación de un banco de préstamos mercantiles autónomo y cuasiestatal (el Ramo de Arbitrios), administrado por el todavía poderoso consulado de comercio. Este crédito aseguró

una simbiosis militar-mercantil a favor de una política nacionalista-proteccionista que ganó la batalla desde finales de la década de 1820 hasta la de 1840, y fue relativamente impermeable al desafío liberal. En efecto, el Estado fue íntegramente copado por la conservadora élite mercantil dominante y sus aliados hacendados.

Población y sociedad: cambio social y continuidad

Intentar evaluar las dimensiones y la distribución de la población peruana después de la independencia es algo parecido a entrar en una tierra de nadie demográfica. La debilidad y el desorden generales en el incipiente Estado republicano impidieron no sólo todo intento serio de llevar un presupuesto o registros, sino también cualquier esfuerzo concertado por contar la población. En ausencia de todo censo estatal efectivo, la Iglesia, que tenía un alcance nacional, era una fuente de registro estadístico importante. Llevando cuidadosamente el registro de los nacimientos, decesos y matrimonios, ella defendía tenazmente su monopolio estadístico, sin el cual el cobro de la contribución indígena o el reclutamiento de la fuerza laboral india para el ejército o las obras públicas habría sido imposible. Contar con un monopolio sobre el registro de estadísticas vitales simplemente incrementó su poder a lo largo del siglo XIX.

Gootenberg (1991) descubrió un censo oficial de 1827 y fijó la población posterior a la independencia en 1.516.693 habitantes. En base al censo de 1836, Basadre calculó una cantidad ligeramente más baja: 1.313.736 habitantes. Ambas cifras pueden compararse con la cuenta colonial previa de 1.076.000 en 1791, la cual excluyó a Puno (alrededor de 200.000 personas), y la de 2.699.000 del único otro censo relativamente exacto del siglo XIX, llevado a cabo en 1876. En base al conteo de 1827, las tasas compuestas de crecimiento anual llegaron a 0,56 entre 1791 y 1827, y a 1,18 entre 1791 y 1876. Dichas tasas de crecimiento encajan dentro del rango típico de lo que Gootenberg llama sociedades preindustriales boyantes. Si tomamos en cuenta el retraso de medio siglo en la tardía recuperación peruana del holocausto poblacional indígena a mediados del siglo XVIII, las tasas coinciden también con el patrón general de crecimiento demográfico experimentado a lo largo y ancho de la América Latina colonial después de 1700. De hecho, y al igual que en otros lugares, el Perú experimentó una elevada natalidad rural y una baja esperanza de vida hasta bien entrado el siglo XIX.

La distribución regional de la población peruana luego de la independencia revela un persistente patrón colonial, sugiriendo nuevamente una continuidad antes que un cambio. De esta manera, en 1791, el sur indígena tenía más de la mitad (52,6 por ciento) de la población, mientras que el centro mestizo, comercial y minero albergaba a un 28,3 por ciento, y el norte agrario un 19,1 por ciento. Este patrón se mantiene relativamente constante hasta la década de 1860, cuando el

boom guanero comenzó a atraer un número cada vez mayor de emigrantes a la costa. Con todo, en el periodo entre 1791 y 1876, las divisiones regionales claves de la costa y la sierra (incluyendo a la montaña) permanecieron relativamente constantes albergando alrededor de veinticinco y setenta y cinco por ciento de la población total, respectivamente. En dicho periodo la urbanización siguió siendo notablemente baja, reflejando más el carácter predominantemente rural del país.

Un importante descubrimiento hecho por los estudios demográficos del siglo XIX de Kubler (1952) y Gootenberg (1991), es la estabilización de la población india en aproximadamente sesenta y dos por ciento. Ella refuerza la noción de que la transición a la independencia fue de continuidad general antes que de cambio social, ya que implica la reversión no sólo de varios centenares de años de decadencia biológica, sino del asedio y la asimilación europea de las comunidades de indios. No fue hasta después de la Guerra del Pacífico (1879-1883) que el proceso de cambio social y cultural, así como el mestizaje concomitante, comenzaron a erosionar a la población india, de tal manera que el censo de 1940 registró que únicamente el cuarenta y seis por ciento del total era étnicamente indígena.

La continuidad antes que el cambio parece haber sido la norma en otras esferas de la sociedad postindependentista. Es cierto que los decretos liberales de la década de 1820, sobre todo la abolición de las distinciones de casta tales como el tributo indígena (1821) o el decreto bolivariano que declaraba a los comuneros propietarios privados de sus parcelas (1824), fueron transformaciones sociales potencialmente importantes. Según las predominantes doctrinas liberales, la finalidad de la «privatización» de las tierras comunales era crear una clase de prósperos granjeros independientes como base social del gobierno republicano, en tanto que la abolición del tributo indígena confirmaba las nuevas ideas de igualdad. Sin embargo, el indigente Estado republicano rápidamente rescindió estos decretos liberales y reestableció el tributo en 1826 (ahora con el nombre de «contribución indígena»). La contribución constituía el cuarenta por ciento de las rentas estatales que los gobiernos no podían darse el lujo de perder. Por su parte, el decreto «privatizador» de Bolívar, desató una masiva usurpación de tierras por parte de los *mistis* (personas no indias), de manera tal que en 1828 el congreso aprobó una nueva ley que limitaba enormemente la venta de dichas tierras.

La continuidad, antes que el cambio, es también visible en muchos otros aspectos. Los nativos siguieron cumpliendo con la mita (rebautizada como «servicio a la república») para trabajos involuntarios e impagos en obras públicas como por ejemplo los caminos. Aunque San Martín decretó la libertad de vientre, la esclavitud siguió existiendo hasta su abolición a mediados de siglo, y la élite dominante continuó siendo esencialmente la misma, salvo por el reemplazo de los peninsulares por criollos (Bonilla y Spalding 1972, 1981). Las instituciones coloniales, como la Iglesia y el ejército, se mantuvieron como pilares del nuevo

orden, en tanto que el colapso de la burocracia colonial privó a los nativos de la protección nominal de instituciones tales como la audiencia, a la que podían apelar en defensa de sus derechos. Es más, la desaparición de la aristocracia indígena (los curacas y demás nobles nativos), cuya posición y legitimidad fue sistemáticamente erosionada por el Estado después de la rebelión de Túpac Amaru II, conllevó que todos los indios fueron incluidos en un mismo saco —a ojos criollos— dentro de la monolítica clase baja étnica.

Por último, al restaurar la contribución, el Estado conservó tácitamente el viejo pacto colonial de tierra por tributo, es decir que a cambio de la aceptación de la capitación se permitía a los indios retener el control de sus tierras «corporativas» y ejercer la autoridad política en sus comunidades. Esta *pax republicana* también reafirmó la vieja división social colonial que seguía las líneas de casta y de raza, las que iban directamente en contra de la noción republicana de igualdad, pero que tenían asimismo la «virtud» de reconfirmar el dominio de la privilegiada élite criolla, la cual ahora controlaba al país. De manera que, como ya señalé, la división colonial en sociedades india y no india persistió después de la independencia.

En este sentido, la pretensión criolla de dominar a la clase baja continuó basándose en una actitud básicamente racista, que percibía esencialmente a los indios y a las «castas» restantes como «el otro» y que se constituyó en una ideología oficial. Fue así que la primera Constitución, preparada en 1823, virtualmente negaba a los indios la ciudadanía en la nueva república, puesto que se les prohibía aprender a leer y escribir, poseer sus propias tierras y ejercer una profesión titulada. En palabras de Méndez, «con la disolución del Estado colonial, los indios dejaron de ser *súbditos* del rey pero no se convirtieron en *ciudadanos* peruanos» (citado en Urbano 1992: 20). Algunos historiadores han sostenido que la tradicional línea divisoria cronológica que separa colonia y república es artificial, por el peso de semejante continuidad sociopolítica postindependencia, basada en la segregación y el dominio de facto.

Si este retorno al statu quo bajo el republicanismo parece externamente haber sido dañino para los indios, las condiciones económicas y políticas generales obraron en otras formas para favorecerles, tanto individual como colectivamente. Para empezar, la deprimida economía desalentó a los forasteros de usurpar sus tierras. De hecho, como reflejo de la economía global, la hacienda no estuvo en expansión sino en decadencia en lugares como el Cuzco donde su número se redujo, según Mörner (1978), 647 en 1785 a apenas 360 en 1845. Al contrario, la población indígena creció demográficamente ya que la mayor parte de ella —por lo menos en el Cuzco— permaneció en sus comunidades (ochenta y cuatro por ciento) en lugar de emigrar para escapar a las penurias o buscar refugio en las haciendas (dieciséis por ciento). Es más, la perturbación general de las comunicaciones y mercados debida a las guerras, juntamente con un sector hispano disminuido, permitió a la

población nativa operar más en sus propios términos y trabajar para revigorizar los tradicionales circuitos comerciales intraétnicos. Por ejemplo, en el valle del Colca, en la sierra sur, la sociedad tradicional *misti* de hacendados, mineros y comerciantes parecería haber desaparecido virtualmente después de la independencia, lo que permitió a los pastores indios entregar su lana directamente en Arequipa.

Al mismo tiempo, un Estado débil y dependiente del tributo para gran parte de sus rentas no estaba en posición de explotar al campesinado o permitir la alienación de sus tierras. Por lo tanto, las comunidades indígenas tuvieron un mayor espacio para maniobrar y negociar con funcionarios locales que, al no poder depender tanto del gobierno nacional o regional para hacer cumplir con el cobro del tributo, eran más flexibles y abiertos al establecimiento de buenas relaciones con los nativos. Además, cuando eran cuestionados, los indios defendieron vigorosamente sus derechos en las cortes y otros lugares, tal como lo habían hecho durante buena parte del periodo colonial. El hecho de que la población indígena pagase su tributo sin protestar hizo que Walker (1999) concluyera que con el nuevo régimen republicano ellos no se refugiaron en la autosuficiencia y que, en general, les fue mejor de lo que los historiadores antes asumieron.

En general, no fue sino hasta el renacimiento del Estado y el advenimiento de la expansión capitalista más entrado el siglo, cuando la sociedad indígena volvió a vivir las presiones externas (los cercamientos) que con el tiempo amenazarían su existencia y viabilidad. Hasta entonces, la desintegración económica y política luego de la independencia sirvió para mejorar los circuitos y la autonomía indígenas, y, en general, para revivir las costumbres andinas.

La esclavitud y la abolición

Si el sector comunal indígena del Perú experimentó cierto grado de estabilización y renacimiento gracias a la independencia, la población esclava también avanzó hacia la liberación, por lo menos a nivel individual más no en el colectivo. Aunque un total de nueve millones de esclavos fueron llevados a la fuerza a las Américas entre los siglos XVI y XIX, sólo un millón quinientos mil (diecisiete por ciento) llegaron a Hispanoamérica (el grueso fue a las colonias británicas en América del Norte y el Caribe, y a la Sudamérica portuguesa). De este total, poco menos de la mitad (setecientos mil) fue a Cuba, en tanto que el remanente se distribuyó por el resto de la América española.

El virreinato del Perú recibió alrededor de cien mil esclavos en este periodo, el cuarenta por ciento de los cuales se estableció en la capital, Lima, o se abrió camino a ella. En las ciudades, y sobre todo en la capital virreinal, los esclavos realizaban la mayor parte de la carga laboral cotidiana, sirviendo como artesanos, aguateros, arrieros y sirvientes domésticos. En la campiña costera predominaban

en las haciendas azucareras de la costa norte, donde trabajaban como peones, en los ingenios y como sirvientes. También eran utilizados intensamente en las haciendas de pan llevar en las afueras de toda gran ciudad costeña.

A pesar de la intensificación del tráfico de esclavos por toda Hispanoamérica entre 1790 y 1802, el número de esclavos del virreinato se redujo en el último cuarto de siglo antes de la independencia. De esta manera, en 1812 había 89.241 esclavos en el virreinato, de los cuales 35.696 (el cuarenta por ciento) vivían en la provincia y ciudad de Lima. Una década más tarde, la población esclava total había descendido a cincuenta mil cuatrocientos, lo que constituía apenas el 3,8 por ciento de la población total estimada para el virreinato en 1.325.000, pero era bastante más alto en la costa, donde estaban concentrados. Cuando se decretó su libertad en 1854, los esclavos apenas sumaban 25.505 en Perú. Sin embargo, había un número significativo y creciente de negros libertos, estimado en unos cuarenta mil después de la independencia.

Por toda la costa, los esclavos eran una parte significativa de la fuerza laboral. En las ciudades predominaban en ocupaciones tales como la venta de alimentos, aguateros y amas de leche, y colmaban las filas de artesanos y trabajadores calificados. En Lima, por ejemplo, los esclavos trabajaban como zapateros, albañiles, porteros, pintores, panaderos y guardianes, recibiendo a cambio una paga, parte de la cual entregaban a sus amos mientras que a veces ahorraban y acumulaban otra parte para comprar su libertad.

Era común encontrar esclavos como sirvientes en zonas tanto urbanas como rurales. Muchos de ellos estaban fuertemente involucrados en tareas tales como cocinar, limpiar, lavar ropa y —allí donde había criaturas— cuidar de niños. Unos esclavos bien vestidos conducían los carruajes y conformaban el séquito de las familias acomodadas en sus rondas diarias y en eventos sociales nocturnos, como el teatro. Sus contrapartes femeninas atendían las necesidades diarias de sus amas y a menudo se las veía llevando pequeñas alfombras a iglesias que carecían de bancas o asientos. El viajero inglés Clements Markham reporta que los esclavos eran ubicuos en las casas que visitó en el campo hacia mediados de siglo, sirviendo la comida y agitando abanicos para refrescar a los comensales y mantener a raya a las moscas.

La condición de los esclavos en el campo dependía, en gran medida, de las dimensiones de las haciendas, en un país en el cual había una gran diversidad en las unidades de producción de un lugar a otro. Por ejemplo, en las extensas haciendas azucareras y de viñedos en las costas norte y sur había grandes concentraciones de esclavos (unos seiscientos o más). En estas enormes plantaciones su suerte variaba, pero en general las relaciones entre amo y esclavo eran impersonales y menos directas que en unidades productivas más pequeñas. Los azotes y otros maltratos eran algo comunes, siempre ordenados explícitamente por los propietarios y llevados a cabo en público como ejemplo para otros. Los esclavos que fugaban

eran llevados de vuelta y forzados a trabajar con cadenas por tantos días como hubiesen estado ausentes de la plantación.

Para estimular el matrimonio, los hijos nacidos de parejas de esclavos fuera de él eran vendidos. Sin embargo, las mujeres casadas que daban a luz recibían una asignación laboral menos rigurosa, y mejor alimentación y alojamiento. La jornada laboral de los esclavos comenzaba a las 7 a.m. y duraba hasta las 4 p.m., con un descanso de dos horas al medio día para almorzar. Después de su jornada (y también los domingos) podían trabajar en sus parcelas, pero al terminar el día eran encerrados en los barracones de la plantación.

Las condiciones eran algo distintas en las haciendas de mediano y pequeño tamaño. El cuarenta y siete por ciento de las aproximadamente doscientas que había en la provincia de Lima en la década de 1820 no tenía más de 145 hectáreas y el dieciséis por ciento 73 hectáreas o menos. Cada una de estas haciendas tenía aproximadamente entre veinte y cincuenta esclavos. Sobre la base de sus investigaciones sobre la esclavitud, Hünefeldt estableció que en 1813 la hacienda media en la provincia de Lima tenía cuarenta y cinco esclavos. Los veintiún varones y trece mujeres de Pando, su ficticia hacienda prototípica, eran manejados por un mayordomo y su esposa, pues el propietario vivía en Lima. Los esclavos casados de Pando tenían acceso a pequeñas parcelas de subsistencia, donde podían cultivar varios productos y así asumir parte del costo de reproducirse a sí mismos. El excedente de estos campos, que vendían en mercados vecinos, les permitía además ahorrar para su manumisión y la de sus hijos.

Las condiciones y circunstancias de la esclavitud experimentaron cambios debido a la guerra por la independencia. Como ya señalé, ella dividió a la clase criolla, cuya actitud ambivalente prolongó la lucha y retrasó el resultado final. Una de sus mayores preocupaciones giraba en torno a la esclavitud y el temor a que el debilitamiento de la autoridad y los lazos sociales luego de la independencia propiciaría inevitablemente rebeliones de indios y negros. En la mente de los criollos continuaba fresco el recuerdo de la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, tanto que, según Hünefeldt, durante la mayor parte del periodo colonial los limeños tenían la noción disparatada de que algún día un jefe tribal africano llegaría desde el mar para dirigir a su pueblo en una rebelión.

Al mismo tiempo, el movimiento independentista elevó las presiones y expectativas de la abolición entre la población esclava. Ya a comienzos de siglo, las autoridades hispanas, apremiadas por los británicos, habían presionado para abolir la trata de esclavos, de manera que los últimos de ellos llegaron al Perú en 1812. El libertador San Martín —cuyo ejército expedicionario argentino de cuatro mil quinientos hombres a Chile constaba en su mayoría de esclavos, y al cual se sumaron los esclavos peruanos al aparecer en la costa sur— tomó medidas para mejorar la condición de estos últimos. Por ejemplo, en 1821 decretó la ley de vientre

libre, probablemente esperando ganarse nuevos reclutas. Sin embargo, el poder político y el conservadurismo social de la élite hacendada-mercantil, así como el propio escepticismo de San Martín con respecto a lo acertado de la manumisión, retrasó sustancialmente todo impulso hacia la abolición a comienzos de la década de 1820. Hasta Bolívar, quien era liberal, tomó escasas medidas que condujeran a ella, tal vez porque no podía o no quería afectar a la poderosa clase hacendada que escondía sus intereses con la imagen de que la emancipación causaría aún más daños económicos al país e impediría su recuperación.

No obstante, numerosos esclavos reclutados en los ejércitos de ambas fuerzas contendoras, sí recibieron la libertad en recompensa a su servicio militar. Otros, que no estaban dispuestos a unirse ya fuera al ejército patriota o al realista, aprovecharon la confusión de la guerra y su tendencia general a debilitar los lazos sociales para fugarse, uniéndose frecuentemente a las crecientes bandas de cimarrones (esclavos negros fugados), montoneros y salteadores que infestaban los caminos y el campo en las afueras de los principales poblados y ciudades costeños antes, durante y después de la independencia. Actuando en los márgenes de la sociedad, según Aguirre y Walker (1990), estas bandas atacaban haciendas, tambos y aldeas, y eran el motivo de constantes quejas por parte de la ciudadanía en general y de las autoridades. Ocasionalmente, estas bandas alcanzaban suficiente cohesión y organización como para que se las incorporara a las fuerzas patriotas, tal como lo reportase el general Miller para el sur. En general, pueden ser consideradas como una expresión del malestar social generalizado que acompañaba al deterioro económico y a la descomposición política que marcaron el colapso del ordenamiento colonial y el advenimiento de la independencia.

Si los criollos en general compartían la oposición de los hacendados a la abolición de la esclavitud, esto no impidió que sus ambiciosos y enfrentados jefes reclutaran esclavos negros para sus ejércitos informales en el transcurso de las guerras caudillistas, prometiéndoles la manumisión, de la misma manera que sus contrapartes en ambos bandos lo habían hecho durante la guerra de la independencia. Igual que antes, los caudillos, una vez victoriosos, inevitablemente renegaban de sus promesas, provocando una gran desilusión entre la población negra. Cuando la abolición finalmente llegó después de 1854, no se debió a ninguna campaña intensa a favor suyo o a un fuerte sentimiento liberal entre los criollos; ambas cosas tendieron a ser débiles y vacilantes en los años posteriores a la independencia.

La abolición se debió más bien tanto a la inercia, a la caída en el número de esclavos y a su persistente insistencia individual comprándose a sí mismos, como a los sentimientos altruistas de los criollos, apremiados por la presión internacional, o a cálculos egoístas tales como los presuntos beneficios del trabajo asalariado libre por parte de los hacendados progresistas. La abolición fue posible,

después de 1854, por la capacidad del Estado para compensar a los amos por su pérdida, además de los planes para reemplazar el trabajo esclavo con culís chinos contratados e importados, factores que también fueron cruciales para el fin de la esclavitud en otras partes de Hispanoamérica.

A lo largo de las tres décadas posteriores a la independencia y hasta la abolición final de la esclavitud, decretada por el Presidente Ramón Castilla en 1854, el principal argumento para conservarla provenía de los propietarios, quienes argumentaban que el progreso agrícola dependía de una fuerza laboral esclava en descenso pero todavía crucial, dadas las dificultades que había para atraer trabajadores nativos a las haciendas. El problema era que los indios se encontraban en la sierra, por lo que eran difíciles de reclutar y no eran del todo confiables porque estaban en libertad de dejar las haciendas y retornar a sus comunidades en época de la siembra, la cosecha o de sus fiestas. Es más, los propietarios de esclavos creían que estos eran más baratos que otras formas de trabajo, una creencia con base real según el estudio comparativo que Macera hiciera del costo relativo del trabajo asalariado, los culís chinos contratados y los esclavos en la era postindependentista.

El precio de los esclavos había ido cayendo desde comienzos de siglo, posiblemente por tratarse de una población en vías de envejecer. Por ejemplo, para 1800 Haitin fija el precio medio de un esclavo en 465 pesos, y el de una



Aguatero afroperuano en Lima circa 1830, acuarela anónima en el estilo de Pancho Fierro. Cortesía de la Embajada del Perú. Fotografía de Wendy Walker.

esclava en 494 pesos. Según Blanchard, entre 1824 y 1854, el precio máximo de un esclavo en Lima variaba entre 300 y 400 pesos. Sin embargo, tanto Aguirre como Blanchard calculan que su precio medio había descendido a 289 pesos en los aproximadamente diez años antes de la abolición (1840-1854), y el de las esclavas a 267 pesos. Además de su valor de mercado, el hecho de que se les pudiese alquilar por un salario y por lo tanto ganar un dinero de retorno para sus propietarios implicaba que los esclavistas tuvieran un gran interés financiero para oponerse a la abolición. Es más, con pocas fuentes disponibles de rentas, los caudillos que gobernaron después de 1824 no estaban dispuestos a alienar a un grupo de interés tan poderoso y acaudalado, y que estaba más que dispuesto a contribuir con fondos para uno u otro de ellos a fin de proteger su inversión.

A pesar de la permanencia de la esclavitud, el número de esclavos en el Perú posterior a la independencia siguió decayendo. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, que contaba con la mayor concentración de esclavos urbanos, esta población descendió, según Hünefeldt, en términos tanto absolutos como porcentuales de 13.482 en 1792 (25,6 por ciento) a 8.589 en 1818 (15,8 por ciento), 5.791 en 1836 (10,5 por ciento) y 4.500 en 1845 (6,9 por ciento). En general, esta disminución de larga duración de los esclavos en la ciudad y el virreinato puede atribuirse a la abolición de la trata negrera atlántica en 1808 y al debilitamiento y descontento social, juntamente con las conmociones económicas y políticas que acompañaron a las guerras de la independencia, además de la creciente incidencia de la manumisión individual por la autocompra de la misma población esclava.

De hecho, esta última había sido una vía importante a la manumisión ya en la época colonial, aunque era mucho más común en las haciendas pequeñas y más diversificadas alrededor de las ciudades que en las grandes y especializadas de azúcar y vino. Como Hünefeldt mostrase en su estudio de Lima, este fue un factor por el cual los esclavos rurales invariablemente intentaban ser transferidos a la capital. Los hacendados a menudo aceptaban estos traslados porque la productividad agrícola había venido cayendo desde comienzos del siglo XIX. De tal manera, la mejor forma de rentabilizar su inversión era permitir que algunos esclavos partieran a la ciudad y se contrataran como aprendices de artesano, así los propietarios recibirían parte de su salario, y por lo tanto tendrían otra fuente de ingresos.

La mayoría de los primeros y más exitosos esclavos en dejar las haciendas ubicadas alrededor de Lima fueron mujeres que, gracias a sus habilidades mercantiles y domésticas, podían abrirse camino con mayor facilidad en el mercado de la ciudad, o en la casa de personas acomodadas. Ya fueran aprendices o vendedores en los mercados, los esclavos encontraron una forma de acumular, con sus ganancias y salarios, lo necesario para comprar su libertad. Hünefeldt sostiene que en el largo plazo, esta tendencia sistemática de los esclavos individuales a

contratarse y autocomprarse fue erosionando la base de la posesión de los mismos, ya que su número continuamente disminuía, tanto en términos reales como en relación con la población negra libre. De hecho, Hünefeldt y Aguirre muestran que la voluntad individual —es decir las propias acciones de los esclavos— fue un poderoso impulso para el desgaste de la esclavitud. Por ejemplo, ellos desarrollaron una amplia gama de estrategias individuales para conseguir su libertad, entre ellas el recurso a los juzgados civiles y eclesiásticos, diversas apelaciones morales a menudo defendidas por la Iglesia, y astutas negociaciones con los dueños. Estas acciones llevaron a Hünefeldt (1994: 6) a concluir que los esclavos «aprendieron cómo usar las contradicciones internas de un sistema explotador en provecho propio, y a apropiarse de las herramientas de opresión y transformarlas en instrumentos de liberación».

Con todo, al considerar las posibilidades de la autocompra en Lima a finales del periodo colonial, debe tenerse en cuenta que existían relativamente escasas oportunidades ocupacionales y económicas para los esclavos. Según Haitin, la infraestructura manufacturera de la ciudad era relativamente pequeña: unos cuantos molinos de harina y fábricas de chocolate, varios obrajes textiles y algunas fábricas de cerámica, sombreros de lana y jabón. La fábrica estatal del tabaco fue cerrada en 1791. En consecuencia, el 76,9 por ciento de la población económicamente activa trabajaba en empleos relacionados con los servicios. Los artesanos conformaban el 16,9 por ciento. Los esclavos estaban representados en ambos sectores, pero no se les contaba oficialmente y por ello no estan incluidos en estas cifras.

No obstante este panorama desolador, las ciudades seguían siendo la principal esperanza de movilidad para los esclavos, y su constante transferencia a ellas explica el aumento en la población negra urbana en la primera mitad del siglo XIX, tanto esclava como liberta, y la caída concomitante del número de los esclavos rurales. Una vez en la ciudad, ellos buscaban estratégicamente establecer lazos con la comunidad negra, a menudo perteneciendo a las cofradías negras, y a través de vínculos familiares como el matrimonio. Ambas cosas servían como anclas y soportes en la búsqueda de la libertad. La comunidad negra de Lima era variada y diversa, estando compuesta por esclavos y libertos: cimarrones, mulatos, negros y zambos (mitad indio y mitad negro). Según Hünefeldt, esta diversidad racial, así como las diferencias de estatus social, explican la ausencia general de rebeliones esclavas, por lo menos en la ciudad de Lima.

El número de negros libertos siguió creciendo en las décadas posteriores a la independencia, principalmente a través de la autocompra, pero también con los actos generosos de sus amos. De hecho, Hünefeldt encontró, en su estudio de Lima, que la proporción de esclavos que compró su libertad fue similar al resto de América Latina: alrededor de cuarenta a sesenta por ciento. Del resto, alrededor de

un tercio fue liberado por sus amos. Por último, en función de género, alrededor de las dos terceras partes de los esclavos manumisos fueron mujeres.

Aunque los esclavos y negros libertos conformaban una parte importante de los artesanos y trabajadores calificados de Lima-Callao, la mayor parte de este importante sector socioeconómico de la capital era en realidad étnicamente mestizo. Desde la época colonial los artesanos de Lima, que sumaban entre tres mil y cinco mil en la década de 1820, eran empleados en la producción de bienes acabados de lujo para la élite de la capital. Estos bienes incluían muebles finos, artículos de cuero, piezas de ropa hecha a la medida, botones, hojalata, joyas de oro y plata y lujos tan exóticos y locales como las famosas sayas y mantas limeñas, usadas por las damas de moda de la ciudad. Los artesanos de Lima, organizados en unos cuatrocientos pequeños talleres y diversos gremios que estaban concentrados estratégicamente en la capital, se convirtieron, después de 1824, en una potente fuerza política favorable al proteccionismo y opuesta al comercio libre. De hecho, ellos reaccionaron rápidamente ante la inundación de artesanías y bienes producidos en masa procedentes del extranjero que llenaron los mercados locales a mediados de la década de 1820. Uniéndose a sus aliados naturales —la élite mercantil limeña—, los artesanos de la ciudad capital conformaron la base popular de la coalición pro arancelaria, nacionalista y proteccionista que logró elevar el nivel de los aranceles de cincuenta a noventa por ciento entre 1828 y 1840.

La política en la era de los caudillos, 1824-1845

Aunque nuestro conocimiento de la política peruana en las dos primeras décadas después de la independencia es análogo a un agujero negro académico, algunas recientes investigaciones han comenzado a iluminar el tema. Como ya dije, la línea divisoria más importante en la política de esta época seguía un eje norte-sur. Los conservadores estaban concentrados en Lima y en la costa norte, donde izaron una bandera proteccionista-estatista y buscaron conservar los intereses corporativos, revivir los monopolios coloniales y establecer controles sociales estrictos sobre la gente común. Eran intensamente autoritarios, a pesar de que su base social se encontraba en las clases populares o castas limeñas de color más oscuro, como los artesanos y los más marginales ambulantes, vagos e indios migrantes de la ciudad.

Los conservadores quedaron particularmente irritados con el plan liberal de Bolívar de abrir el país a los comerciantes extranjeros y recurrieron constantemente a una retórica patriótica que criticaba el papel de los extranjeros o de las ideas extranjeras en los asuntos peruanos, en tanto que supuestamente defendían la soberanía de la nueva nación. Su caudillo más importante fue el general cuzqueño

Agustín Gamarra, quien logró llevar a cabo la hercúlea tarea de ocupar la presidencia dos veces (1829-1833 y 1839-1841) y completar un gobierno de cuatro años, durante lo que esencialmente fue la época de «la puerta giratoria presidencial». El éxito de los conservadores en ganar y conservar el poder durante buena parte de este periodo se debió a su base estratégica en y alrededor de la capital, el centro nervioso histórico de la política, la administración y las finanzas nacionales.

La oposición más importante a los conservadores provino del bastión liberal en los Andes del sur, con su centro en Arequipa. A estos liberales se unió un pequeño grupo de intelectuales cosmopolitas y burócratas «neobolivarianos» de la capital que adoptaron un «internacionalismo» visionario del libre comercio, pero no contaban con ninguna base política tangible. Juntos buscaron desmantelar el Estado proteccionista, corporativista y centralista que giraba en torno a Lima y abrir el país a un creciente comercio extranjero. El principal problema político que debieron afrontar era su diversidad, y por lo tanto su incapacidad para unirse, su ausencia de una base social en las clases populares, y su lejanía (Arequipa) de los principales niveles de poder en Lima. Incluso cuando los liberales lograron ganar momentáneamente el poder en Lima, como sucediera con los caudillos y generales José de la Mar (1827-1829) y Luis de Orbegoso (1833-1834), se encontraban demasiado alejados de su base de poder sureña como para conservarlo por mucho tiempo, y así lograr imponer su agenda librecambista al resto del país. En última instancia, buena parte de sus energías se agotaron intentando promover movimientos separatistas en el sur, que terminaron fracasando invariablemente.

La Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), diseñada por el general Andrés de Santa Cruz, un boliviano que presidió Bolivia entre 1829 y 1839, constituye un caso ilustrativo. Santa Cruz dirigió brevemente el incipiente gobierno peruano después de que Bolívar se retirase a Colombia en 1826, en los caóticos días posteriores a la independencia. Una década más tarde vio la oportunidad de llevar a cabo el sueño bolivariano de unir ambos países, aprovechando las constantes guerras civiles que habían debilitado al Estado peruano. En los Andes del sur contó con un fuerte respaldo de los liberales, que hacía tiempo esperaban reconstituir los históricos vínculos comerciales con La Paz. Invadiendo el Perú y aliándose de forma oportunista con una u otra de las facciones, Santa Cruz logró capturar Lima y unir ambos países en una confederación en 1836.

Aunque existía una racionalidad esencial para la reconstitución de las fronteras geográficas, culturales y económicas del viejo virreinato (el Alto y el Bajo Perú), el destino de la Confederación probablemente estaba impregnado desde el principio por una serie de intereses nacionales e internacionales que jugaban en su contra. El principal de ellos lo constituían los conservadores nacionales, quienes criticaron el intento de imponerle al país la agenda librecambista del sur. Aún cuando Lima siguiera siendo la capital, a muchos peruanos les irritaba aceptar a un boliviano

como su presidente. Tal vez más importante fue el hecho de que la unificación de los dos países andinos amenazaba con alterar el equilibrio geopolítico del poder en la costa oeste, en contra de Argentina y Chile. Este último país en particular, veía la Confederación no solamente como una amenaza militar, sino también como un reto a su hegemonía comercial postindependentista en el océano Pacífico. En consecuencia, Chile y Argentina (Rosas era antiliberal) declararon la guerra a la Confederación en 1836-1837. A una fallida invasión inicial por parte de Chile en 1837 le siguió otra en 1838, respaldada por un gran contingente de exiliados peruanos, entre ellos el general conservador Agustín Gamarra, así como algunos liberales que se oponían al estilo autocrático de Santa Cruz. En enero de 1839, el ejército de Santa Cruz fue aplastado en la Batalla de Yungay, poniendo así fin a la confederación.

Con el colapso de la Confederación, el conservador Gamarra recuperó la presidencia (1839-1841) e impuso otra constitución centralista y antiextranjera más (la sexta desde la independencia). Sin embargo, fue muerto en combate mientras invadía Bolivia en 1841, originando otra guerra civil y la desintegración política del Perú entre 1841 y 1845. En 1844, hasta cuatro caudillos de distintas partes del país pretendían la presidencia.

Aunque después de la independencia, la política parecía ser de dominio exclusivo de la élite, las clases populares también jugaron un papel en las guerras civiles. Walker (1999) mostró cómo en el Cuzco, los debates políticos entre liberales y conservadores fueron seguidos por las clases bajas en la prensa, pues los periódicos eran colocados en lugares públicos y leídos en voz alta, allí y en las chicherías, a los oyentes analfabetos reunidos, ansiosos por obtener información. Por otro lado, las montoneras alrededor de Lima, que participaron en la lucha contra España durante la independencia, y que no se desmovilizaron de inmediato después de 1824, tendieron a atacar y saquear las haciendas y plantaciones propiedad de conservadores. Aguirre y Walker (1990) sugieren que también colaboraron, al parecer, con las facciones políticas liberales, ayudando así a prevenir una consolidación política conservadora durante la era de los caudillos. De otro lado, los conservadores lograron movilizar con regularidad a los artesanos mestizos, e incluso a las castas marginales, a favor de sus causas tales como el proteccionismo utilizando un discurso patriótico popular en defensa de la soberanía nacional.

Si la política costeña está relativamente clara en el periodo inmediatamente posterior a la independencia, no puede decirse lo mismo, en cambio, de los Andes. Sabemos, sí, que el valle del Mantaro, en los Andes centrales, que apoyó la causa independentista, parecía respaldar a la facción liberal en las guerras civiles, tal vez porque al igual que en Arequipa, al sur, la estructura de tenencia de la tierra estaba más dividida y era menos latifundista que en otras partes de los Andes.

Además, el valle era un granero fundamental para Lima, que podía inclinar a su población en contra de la política conservadora de intercambiar el trigo chileno por el azúcar norteña.

En 1825 estalló una rebelión popular contra el nuevo régimen republicano en la provincia de Huanta, del departamento de Ayacucho, que fuera un bastión realista desde la rebelión de Túpac Amaru II hasta la independencia. Según Méndez (1996), no fue en absoluto una vuelta anacrónica al viejo orden; sus causas yacían no sólo en las duras sanciones que Bolívar impusiera en 1825 a la población, en forma de impuestos, por haber militado en el ejército realista durante la guerra de independencia, sino también en la precipitada caída en el comercio local de coca con que Huanta abastecía a los consumidores de Huancayo, pero que en los últimos años se había desplazado a un centro de producción rival en Huánuco.

La rebelión, que reunió a un grupo de ex oficiales realistas, comerciantes españoles y mestizos así como a los indios de Iquicha, fue dirigida por un arriero indio analfabeto llamado Antonio Navala Huachaca. No viendo ninguna ventaja específica en la adhesión a un ordenamiento republicano que negaba la ciudadanía a los indios, los rebeldes buscaban, al parecer, volver al *ancien régime* en el cual por lo menos se les reconocía su estatus y posición, y el Estado hasta cierta punto les protegía. Aunque la rebelión fue aplastada por las fuerzas republicanas en 1828, sus jefes evitaron la captura en las punas de Huanta, donde organizaron exitosamente un «gobierno paralelo» que resistió al nuevo orden durante los siguientes veinte años. Méndez sostiene que este régimen separatista era algo más que una simple «resistencia» a la nueva autoridad política; más bien constituía una legítima demanda política de los nativos por ser reconocidos como parte integral del nuevo ordenamiento republicano. Los iquichanos también dieron su respaldo al general liberal Santa Cruz, cuyos rasgos y antecedentes indígenas eran palpables, y combatieron bajo sus banderas en pos de una unificada Confederación Peruano-Boliviana.

Walker también encontró en el Cuzco un considerable respaldo popular a la confederación de Santa Cruz. De otro lado, el conservador cuzqueño Gamarra, un ex prefecto, defendió lo que aún quedaba de los obrajes textiles con políticas proteccionistas y contratos estatales para abastecer de uniformes al ejército. Asimismo, tuvo éxito en captar el respaldo de la plebe urbana con un discurso que no solamente enfatizaba al «Cuzco primero», sino que estaba lleno de alusiones a los incas y al «pasado glorioso» de la ciudad. Sin embargo, en el campo, el campesinado indígena permaneció generalmente alejado de las guerras caudillistas, y en las décadas posteriores a la independencia ningún jefe militar logró captar su respaldo masivo. Al igual que en las guerras independentistas, las condiciones y relaciones locales probablemente dictaron la elección del campesinado para participar en uno u otro bando.

Capítulo VI

De mendigo a millonario: la era del guano, 1840-1879

La oportunidad del Perú de superar su aguda decadencia política y económica postindependentista, provino de una de las fuentes más inesperadas: las montañas de excrementos secos depositados por las aves marinas en unas cuantas islas de la costa central. Durante miles de años, estas aves subsistieron con los millardos de pequeños peces criados en las fértiles profundidades de la Corriente Peruana del océano Pacífico y depositaron sus excrementos en las islas de Chincha. Usado por los incas como un fertilizante natural para la agricultura, el guano quedó virtualmente olvidado con la frenética destrucción de la conquista, al igual que buena parte de los valiosos conocimientos incaicos de los Andes. Hasta la revolución agrícola de Europa, en el siglo XIX, no se redescubrieron las propiedades fertilizantes de este abono rico en nitratos, y su aplicación en los campos del hemisferio norte resultó ser una bonanza para el Perú. En el transcurso de las cuatro décadas siguientes, de 1840 a 1880, unas once millones de toneladas de guano fueron extraídas, transportadas y vendidas en los mercados europeos y estadounidenses, por un estimado de setecientos cincuenta millones de dólares. Un ejército relativamente pequeño de unos mil culís chinos importados extraía laboriosamente el guano, lo cargaba en carros y lo paleaba por unos vertederos a los navíos que esperaban para trasladarlo. En palabras de Gootenberg, para el Perú ésta (Gootenberg, 1993: 2; 1998: 18 [ed. en español]), «fue una historia de 'mendigo a millonario': un estilo de vida a la moda para las élites urbanas, presupuestos inflados, millones de importaciones caprichosas, una paz política comprada y el acceso ilimitado al crédito londinense». Sin embargo, cuando las reservas finitas de guano se agotaron en la década de 1870, se convirtió en la clásica historia latinoamericana de auge y colapso, provocando el incumplimiento de una gran deuda externa tras el colapso financiero y económico. Algo digno de resaltarse es que condenó a muerte a la apuesta por el crecimiento y el desarrollo

sostenido hecha por el Perú a mediados de siglo, y dejó un legado de subdesarrollo que perduraría hasta bien entrada la siguiente centuria.

El impacto y el legado del guano en el Perú han sido calurosamente debatidos por los historiadores. Una interpretación, sugerida por Jonathan Levin (1960), es que éste produjo la clásica economía de «enclave», con pocos eslabonamientos hacia delante o hacia atrás que estimulasen la producción nacional. En consecuencia, hubo pocos —si es que hubo alguno— efectos de desarrollo duraderos en el país. En esta versión, la riqueza del guano quedó aislada del resto del país, financiada y explotada por extranjeros, y trabajada por una fuerza laboral relativamente pequeña y servil, sin ningún poder adquisitivo. Las utilidades fueron remitidas al extranjero, dilapidadas por la corrupción y los malos manejos estatales, y consumidas por una pequeña élite en una orgía de importaciones suntuarias.

Hunt (1985, 1973) cuestionó la tesis del «enclave» argumentando que el guano produjo una típica economía «rentista», similar a la experiencia colonial con la plata. Una economía de este tipo era capaz de ganar una cantidad masiva de divisas extranjeras con la exportación de un recurso natural. Las ganancias del comercio guanero no se dispersaron en el extranjero, como sostenía el modelo de enclave de Lewin, sino que, más bien, se conservó en el país un setenta y uno por ciento neto de lo recibido por las ventas controladas por el Estado o por contratistas nacionales, quienes distribuyeron los beneficios en forma discutiblemente racional. Según esta interpretación, el verdadero problema fueron los grandiosos y mal diseñados proyectos de inversión estatal (por ejemplo, ferrocarriles), que no lograron diversificar la economía o crear una nueva clase de empresarios nacionales.

Paralelamente, la industria artesanal, y por lo tanto el potencial empresarial, quedó destruido con las masivas importaciones del extranjero inducidas por unas políticas librecambistas radicales y los dispendiosos hábitos de gasto de la élite. Sin embargo, tal vez el efecto más pernicioso de la economía rentista del guano fue psicológico. Los conocimientos y habilidades empresariales no se desarrollaron y quedaron atrofiados por que una economía como ésta produce riquezas, pero no gracias al esfuerzo individual, sino simplemente por tener la propiedad y la explotación de los recursos por parte de una fuerza laboral cautiva. De esta manera, el ejemplo de la plata colonial y los trabajadores indios se repitió en el siglo XIX con el guano y los culís chinos contratados.

Otros historiadores han emitido sus pareceres. Mathews (1968) encontró que el problema fundamental lo constituyeron las empresas extranjeras que intentaron abrir el país a un «imperialismo del libre comercio», cuando los peruanos sí lograron hacer algunos buenos negocios. Otros historiadores muestran las evidencias de diversificación y desarrollo que el guano produjo con el surgimiento de las haciendas de algodón y azúcar a lo largo de la costa (Burga 1976), el desarrollo del mercado y la modernización de la sierra central (Manrique 1987; Mallon

1983), así como la organización de una burocracia estatal y un sistema financiero en funcionamiento (Trazegnies 1980).

Tal vez la interpretación de la era del guano aceptada ampliamente provino de varios historiadores dependentistas y neomarxistas peruanos. Estos argumentan que la pérdida del desarrollo guanero peruano puede atribuírse directamente al civilismo, grupo aspirante a clase dominante que fracasó en la formulación de un «proyecto nacional hegemónico» para el país. Desde esta perspectiva, el Perú no logró producir una burguesía nacional capaz de poner al país en la ruta del desarrollo nacional y capitalista. Más bien, la élite del «guano» pasó a ser una clase «compradora» que mediaba entre el capital británico y el comercio guanero mediante un régimen liberal de comercio libre en un sistema imperialista global.

A pesar de estas interpretaciones, es evidente que el *boom* del guano dio al Perú una gran oportunidad para desarrollarse. Es igualmente importante, según Gootenberg, que éste trajo consigo un desplazamiento fundamental en la política económica, con trascendentales implicaciones de largo plazo. A partir de la década de 1840, el Perú comenzó a abandonar el régimen de corte nacionalista-proteccionista predominante desde la independencia, por una economía política decididamente más abierta y liberal. Lo que precipitó este histórico cambio de política fue la creciente toma de conciencia entre los caudillos militares y la poderosa élite mercantil limeña, en la era del guano, de que el liberalismo se adecuaba mejor a sus intereses políticos y económicos fundamentales que la permanencia del proteccionismo.

Por su parte, los caudillos militares inmediatamente vieron en el guano un medio alternativo de financiamiento de emergencia para el Estado. Su relativo aislamiento como fuente de ingreso estatal significaba que era inmune a los crónicos conflictos político-militares de la era caudillista. Esta toma de conciencia hizo que el Estado declarara inmediatamente su monopolio en 1841, y estableciera un sistema de «consignaciones» para su comercialización. En este sistema, el guano era subastado a comerciantes privados a cambio de préstamos o adelantos sobre ganancias estatales futuras. Pero resultó que las consignaciones tendieron a favorecer a los comerciantes extranjeros antes que a los nacionales, ya que aquellos estaban en mejores condiciones de desarrollar los mercados del guano en Europa y los Estados Unidos, y además contaban con un amplio capital con el cual hacerle préstamos al gobierno. Aún más, el hecho de que los comerciantes extranjeros facilitaran los intereses del Estado en la explotación llevó a que los caudillos militares vieran con mejores ojos el pedido que este sector hacía de una política liberal del comercio libre y una economía más abierta. Por lo tanto, se fueron alejando gradualmente de su vieja postura proteccionista, aunque para que adoptaran plenamente la idea de un régimen liberal tuvieron que pasar varios años y hubo de surgir un sistema político más estable.

En cuanto a la poderosa élite mercantil de Lima, su paso hacia el liberalismo económico se precipitó gracias al comportamiento cada vez más depredador de los caudillos a comienzos de la década de 1840, antes que la renta del guano alcanzara montos suficientes como para estabilizar al Estado. En ese momento, el país cayó nuevamente en una serie de fratricidas guerras civiles e internacionales que duraron cuatro tumultuosos años, de 1841 a 1845. Desesperados por financiar sus esfuerzos individuales en pos de consolidar el poder, los caudillos beligerantes procedieron a «canibalizar» los restantes recursos financieros de la élite mercantil dominante. Este proceso queda adecuadamente simbolizado con el «saqueo» que diversos caudillos hicieron del Ramo de Arbitrios, la institución establecida antes del descubrimiento del guano para «regularizar» el proceso de préstamos forzosos que financiaba al Estado caudillista. Su destrucción arbitraria, que llevo a la quiebra a una serie de prominentes comerciantes y financieros limeños, resultó ser la gota que colmó el vaso del respaldo de la élite comercial limeña al sistema de gobierno militar-caudillista predominante y su orientación nacionalista-proteccionista. Este hecho marcó el inicio de la transformación político-ideológica de esta clase, desde una obstinada postura proteccionista a la adopción del nuevo liberalismo librecambista. La destrucción del Ramo también hizo que la élite mercantil contemplara las ventajas de un régimen civil —aunque a esta idea le tomaría más tiempo germinar—, en particular tras el advenimiento de un orden impuesto por el general Ramón Castilla en 1845. El gobierno civil pasó a ser un proyecto político fundamental de las élites peruanas sólo en la década de 1860, al darse cuenta de que de esa manera obtendrían mayores ganancias del tráfico guanero, tanto a nivel individual como colectivamente, como clase.

Hubo tanto ganadores como perdedores en el histórico realineamiento de los mercados nacionales a los internacionales. Las casas comerciales extranjeras, que se incrementaron numéricamente en las décadas de 1830 y 1840, no solamente fueron actores importantes en el comercio internacional del guano, sino que además ganaron acceso al mercado peruano para sus importaciones, básicamente de objetos de lujo para el estrato superior del mercado doméstico: las clases medias y altas peruanas *chic*, enriquecidas por la bonanza guanera. Por su parte, la élite mercantil peruana prosperó como intermediaria de sus nuevos aliados extranjeros, proporcionando las salidas minoristas para las importaciones de lujo y facilitando los canales políticos y financieros para la comercialización del guano.

Los perdedores en esta apertura económica resultaron ser los antiguos aliados y clientes de esta élite mercantil: los pequeños comerciantes y artesanos, que ya no eran útiles y por lo mismo resultaban ser ahora prescindibles. Ambos grupos, que habían conformado la base popular de las políticas nacionalistas y proteccionistas de dicha élite, se vieron severamente afectados por la avalancha de importaciones extranjeras que siguió a la bonanza del guano y a la progresiva

caída de los aranceles después de 1845. En el caso de la clase artesanal, su mercado más caro quedó eliminado con la duplicación de las importaciones de lujo a finales de esta década. Del mismo modo, los canales de distribución minoristas fueron desplazados por las fuerzas conjuntas de los establecimientos minoristas del consulado y los extranjeros. Según Gootenberg (1989: 115), «un 'sector medio' próspero y nacionalista, que alguna vez había dominado Lima, iba siendo dejado de lado en la década de 1840, a medida que su economía comercial se internacionalizaba rápidamente».

Las implicaciones sociopolíticas de la internacionalización comercial en la era del guano fueron sustanciales. Los sectores medios empobrecidos y desclasados de artesanos y minoristas denunciaron las «opresivas» políticas librecambistas de la aristocracia mercantil «comeguano». Pasaron entonces a ser el «problema social» de la década de 1850 y salieron a las calles en más de una ocasión como sucediera durante los motines proteccionistas de diciembre de 1858, para protestar en contra de su decadencia y creciente pauperización. Sin embargo, para ese entonces su marginación política por parte de las élites liberales en ascenso era completa, y sus gremios y su antigua influencia se batían en plena retirada política.

Castilla y la *pax* andina

El primer caudillo en aprovechar el auge del guano y beneficiarse con él fue el general Ramón Castilla, quien asimismo resultó ser uno de los soldados-políticos más hábiles en la historia del Perú. Mestizo de primera generación, procedente de una familia de comerciantes en Tarapacá, al sur, Castilla ascendió hasta convertirse en la fuerza dominante de la política peruana entre 1845 y su deceso, en 1868. En este periodo fue dos veces presidente, de 1845 a 1851 y nuevamente de 1854 a 1862. Castilla inició su ascenso en la política como un oficial de ejército leal al general y presidente conservador Agustín Gamarra, logró establecer una base de poder regional en Arequipa, donde se vinculó con una de las familias más ricas de la ciudad por medio del matrimonio. Recurriendo al botín financiero cada vez más grande del guano, así como a su formidable habilidad política —que combinaba una inclinación pragmática, aunque liberal, con una predisposición a construir un consenso—, Castilla se movió hábilmente durante su primer gobierno para consolidar el poder de la presidencia y el Estado central. En consecuencia, un ordenamiento político estable, o *pax* andina, comenzó a aparecer por vez primera desde la independencia en un país que hasta entonces sólo había conocido revoluciones políticas y perturbaciones económicas.

El rápido incremento de las rentas del guano permitió a Castilla forjar su *pax* andina durante sus dos gobiernos. Las rentas estatales procedentes de la exportación del guano subieron de doscientos cincuenta mil pesos en 1846-1847 a

5 millones de pesos a mediados de la década de 1850, y a 18,5 millones de pesos a comienzos del siguiente decenio La creciente importancia de la renta guanera se refleja en que en 1846-1847 ella representaba apenas el cinco por ciento de los ingresos estatales, pero el ochenta por ciento en 1869 y 1875. Al mismo tiempo, las importaciones inducidas por el guano se duplicaron entre 1847 y 1851 a casi diez millones de dólares, brindando otros tres millones de pesos adicionales al tesoro en aranceles en 1851-1852.

Esta generosidad fiscal permitió a Castilla y sus sucesores forjar el inicio de un Estado nacionalista, con congresos que funcionaban, códigos y estatutos legales, agencias y ministerios ampliados y, por vez primera, un presupuesto nacional. Castilla también logró ejercer un patronazgo cada vez más considerable, el cual usó para consolidar el poder político en base a la ampliación del empleo y de obras públicas. Al mismo tiempo, expandió y modernizó las fuerzas armadas, afianzando así el poder del Estado central al mejorar su capacidad para sofocar las endémicas revoluciones políticas montadas por los caudillos regionales y locales que luchaban por el poder.

Por último, gracias a su mayor fortaleza fiscal, el remozado poder estatal permitió a Castilla limitar el poder de la Iglesia. Una generación anterior de liberales había logrado establecer el principio del patronato nacional, nacionalizando así la riqueza de los monasterios (1833) y aboliendo el fuero eclesiástico (1856) que durante largo tiempo brindó inmunidad de los juicios civiles a los hombres de Iglesia. Luego, en mayo de 1859, Castilla abolió los diezmos, la fuente principal de ingresos eclesiásticos desde la colonia. Aunque suavizó el golpe comprometiendo al Estado a pagar en el futuro el salario de todos los miembros de la Iglesia y a apoyar los seminarios y hospitales que ella administrase, en realidad, de aquí en adelante, el nivel de este respaldo disminuyó progresivamente a lo largo del siglo. El resultado fue el gradual empobrecimiento de la Iglesia, el cual, junto con la creciente secularización de la sociedad, minaron seriamente su capacidad para atraer y preparar nuevos miembros competentes para el sacerdocio a medida que pasaba el siglo.

Además de consolidar el Estado, Castilla alcanzó una fama duradera al abolir la contribución indígena y liberar a los esclavos en 1854. Ambas medidas ampliaron considerablemente su base social al inicio de su segundo gobierno y le ganaron el título permanente de «Libertador» en la historia peruana. La abolición de la contribución indígena redujo significativamente la base fiscal del Estado, haciendo que en el largo plazo fuera peligrosamente dependiente del guano, un recurso natural finito y cada vez más agotado. Además, también redujo significativamente la presencia del Estado de la era del guano en la sierra, ampliando así la brecha entre la sociedad indígena y el gobierno en Lima. Es más, dado que el pacto de «tierra por contribución» ya no era válido, según Thurner (1995: 306-07) los

gamonales locales ya no estaban limitados por los agentes del Estado central en sus relaciones con las comunidades. Esto hizo que se apropiaran ilegalmente de la contribución que antes iba a Lima, y que cometieran otros abusos y agresiones (cercamientos de tierra, por ejemplo) que intensificaron los conflictos sociales en la sierra durante la segunda mitad del siglo, sobre todo durante la Guerra del Pacífico y después de ella.

En cuanto a la abolición de la esclavitud, ella también resultó de alguna manera problemática. La manumisión afectó a unos 25.505 negros, ubicados principalmente en la costa. Los esclavistas recibieron una compensación de unos trescientos pesos por esclavo, a un costo total para el Estado de 7.651.000 pesos. Como veremos, parte de este capital fue reinvertido por los hacendados en incrementar la capacidad productiva del azúcar y el algodón, y así aprovechar el incremento en la demanda y los precios internacionales. Desde la perspectiva de los derechos humanos fue menos positivo el hecho de que al no poder conseguir una provisión alternativa de trabajadores entre los campesinos indios de la sierra, los hacendados comenzaron el tráfico de otra forma de esclavitud. Entre 1849 y 1874, unos cien mil culís chinos fueron enviados al Perú como sirvientes contratados, principalmente del sur de China a través de Macao. Las condiciones del viaje a través del océano Pacífico eran tales que la tasa de mortalidad entre los culís que llegaban al Callao fluctuaba entre diez y treinta por ciento. Los que sobrevivían eran enviados de inmediato a reemplazar a los esclavos en las haciendas azucareras y algodoneras de la costa, a trabajar en las islas guaneras, junto con un pequeño número de convictos y de polinesios, y posteriormente a construir los ferrocarriles que se convirtieron en la panacea desarrollista de la élite gobernante.

El tratamiento dado a los culís fue igual que el dado a los esclavos negros antes, aun cuando aquellos venían contratados hasta por siete años, tras lo cual técnicamente podían partir. Incluso entonces, el endeudamiento con sus empleadores por el pago del viaje y otros gastos incurridos en las haciendas o en la extracción del guano, forzó a muchos a permanecer en lo que Rodríguez Pastor (1989) llamó una «semiesclavitud». De igual manera que sus predecesores africanos, soportaron duras condiciones laborales y de vida, incluyendo los frecuentes latigazos, el encierro en los galpones de la hacienda al caer la noche y una explotación generalizada. Al no contar con compañía femenina (pocas mujeres fueron importadas como culís), la homosexualidad fue un rasgo común y el consumo de opio, a menudo vendido por los hacendados, se hizo habitual. En condiciones tan deplorables, no sorprende que se desarrollaran diversas formas de resistencia en las haciendas, entre ellas la fuga, el crimen, los motines y la rebelión.

Después de completar sus contratos, muchos chinos prefirieron eventualmente dejar su lugar de trabajo y dirigirse a los pueblos y ciudades a lo largo de la costa, Lima inclusive, para dedicarse al comercio minorista. Separados de la cultura

dominante por el lenguaje y las costumbres, ellos tendieron a congregarse en sus propios barrios étnicos, donde fueron el blanco de la discriminación y los *pogroms* en momentos de crisis, como sucedió durante la Guerra del Pacífico (1879-1883). En 1874 el tráfico de culís, que había enriquecido a un grupo de traficantes conocidos como «chineros», fue eliminado por el gobierno después de las fuertes y persistentes protestas de parte del gobierno chino y la comunidad internacional.

El Estado no podría haber emprendido la mayoría de estas medidas sin una reforma general y la estabilización del régimen fiscal, junto con el flujo creciente de rentas procedentes del guano, especialmente de préstamos de emergencia de los consignatarios. El problema no provenía sólo de las inevitables presiones ejercidas por diversos intereses en pos de incrementar los gastos, sino de los límites impuestos a los préstamos gubernamentales por las enormes deudas interna y externa. Estas deudas se debían al incumplimiento en el pago de los préstamos, así como a los reclamos por daños que se remontaban a las guerras de independencia y las subsiguientes guerra civiles. Ellas sumaban un estimado de cuarenta millones de dólares, y los gastos seguirían superando a los ingresos, con los persistentes déficits presupuestarios, hasta que el gobierno no le hiciese frente seriamente para así abrir el acceso a los mercados de crédito. Por ejemplo, mientras que la renta procedente del guano en forma de préstamos y adelantos sumó cinco millones quinientos mil dólares entre 1841 y 1849, ella únicamente cubrió la décima parte de los gastos estatales en dicho lapso. En 1847 y 1851 la brecha presupuestaria ascendía a veinte y veinticinco por ciento, respectivamente.

Para resolver este problema fiscal, Castilla emprendió la tarea de consolidar la deuda nacional, un proceso que tomó varios años y que fue completado únicamente por José Rufino Echenique (1852-1854), su sucesor. La consolidación de la deuda implicó un complejo proceso de reconocer, reestructurar y cancelar las deudas interna y externa entre 1846 y 1853. De un lado, los historiadores coinciden en que el reconocimiento y la reestructuración de la deuda externa sirvieron para restaurar el crédito peruano en los mercados monetarios de Londres, los cuales habían quedado cerrados al Perú desde los incumplimientos de mediados de la década de 1820. En 1849 se llegó a un acuerdo final con los tenedores de bonos británicos, mediante el cual el repago de la deuda consolidada se iniciaría en 1856. En ese momento, la casa comercial británica Anthony Gibbs and Company, la más grande consignataria desde comienzos de la década de 1840, depositaría en el Banco de Inglaterra la mitad de las utilidades procedentes de la venta del guano.

Por otro lado, hay un desacuerdo en lo que respecta al resultado de la consolidación de la deuda interna, que transfirió más de veinticinco millones de dólares a quienes reclamaban reembolsos por daños o préstamos estatales impagos, que se remontaban a la independencia en 1821. La interpretación dominante

concibe la consolidación como un fraude masivo que sirvió para reconstituir la tradicional clase dominante peruana. Estos reclamos subieron del modesto millón de dólares de 1845, a cuatro millones en 1849 y a más de veintitrés millones de dólares en 1853. Sin embargo, una interpretación revisionista hecha por Quiroz (1987) cuestiona la imagen de la consolidación de la deuda como una irrestricta codicia de clase. Él la ve, más bien, en función de una masiva especulación de parte de intereses tanto nacionales como extranjeros que, en realidad, privaron a las tradicionales familias terratenientes de su parte en el botín de la consolidación. En la década de 1840, estos intereses compraron astutamente los bonos incumplidos y sin valor en espera de que el Estado, enriquecido con la renta guanera, restaurase su valor original. Los principales beneficiarios de los dos mil tenedores de bonos, la gran mayoría de ellos residentes en la costa, fueron los cien que tenían el 62,3 por ciento del valor total de los mismos.

La consolidación de la deuda tuvo dos importantes consecuencias de largo plazo. En primer lugar, una nueva élite centrada en Lima, que constaba de funcionarios estatales, rentistas urbanos, caudillos retirados, hacendados costeños y sobre todo los comerciantes del consulado, fue capitalizada con la transferencia de fondos del tesoro público, y surgió en la década de 1850 como una plutocracia nueva y poderosa. Esta élite había comenzado a formarse en la década anterior a partir de las numerosas oportunidades que había para ganar con el *boom* guanero en curso y con la expansión estatal. Por ejemplo, sus integrantes obtuvieron valiosas sinecuras gubernamentales, licencias de importación y contratos públicos, e hicieron préstamos gananciosos al gobierno contra el ingreso proyectado del guano. Hay que decir que con estas y otras lucrativas empresas se beneficiaron de la ampliación de las oportunidades para la concusión y el peculado, en una sociedad cuya moral siempre había tomado el cargo público como una oportunidad para lucrar.

La formación de la plutocracia en la era del guano y la bonanza financiera estatal también sirvió para revivir y acentuar el poder económico y político de Lima y la costa. En este sentido, el *boom* guanero de mediados de siglo llevó a una profunda división de larga duración entre la costa modernizante y la sierra económicamente atrasada, frecuentemente resaltada por los investigadores. Lejos del *boom* guanero, la sierra no fue muy afectada, excepto por una creciente demanda limeña de provisiones alimenticias. Esta demanda, así como las necesidades moderadas del sector minero, estimularon cierta expansión en las estancias ganaderas de la sierra central (Manrique 1978) y el desarrollo comercial en el valle del Mantaro (Mallon 1983; Manrique 1987). Menos positivo, como lo mostrase Deustua (1986), fue el hecho de que el capital excedente generado por las minas de plata de la región fluía hacia el guano, beneficiando a la costa y no al interior. Al mismo tiempo, con la excepción de las lanas en el sur, la producción de

la sierra permaneció mayormente moribunda durante esta época, la cual actuó, en cambio, como un poderoso estímulo para el crecimiento y «desarrollo» de la costa.

Podemos observar dicho estímulo en la recuperación y expansión de las haciendas costeñas en la década de 1860, que vivieron una prolongada decadencia desde el decenio de 1790, exacerbada por las dislocaciones producidas por la independencia. La aparición del transporte transoceánico a vapor y la fiebre del oro de California en la década de 1850 revivieron la producción agrícola a lo largo de toda la costa occidental de América del Sur (Gilbert 1977; Engelsen 1977). Otro factor fue la creciente demanda y precios internacionales del azúcar y el algodón, esto último debido a las perturbaciones en la producción debidas al estallido de la guerra civil estadounidense. Un impulso final para la expansión, la modernización y la especialización de las haciendas de azúcar y algodón fue iniciado por la ola de leyes anticlericales que forzaron a la Iglesia a dejar buena parte de sus mejores campos agrícolas en la costa norte. Los beneficiarios fueron los arrogantes *parvenus* del *boom* guanero, a los cuales las viejas familias desdeñosamente tildaron como los «salidos del guano», una doble alusión a la fuente de su fortuna y a su origen social.

Así, la inversión en este proceso se debió a las utilidades provenientes del guano, la indemnización estatal a los hacendados por la liberación de los esclavos y el creciente crédito de bancos y casas comerciales, también capitalizados con el abono. La presencia en la provincia de Jequetepeque del futuro presidente José Balta (1868-1872), del constructor de ferrocarriles Henry Meiggs, y del consignatario guanero y financista internacional Auguste Dreyfus como nuevos y grandes hacendados, muestra en concreto la forma en que el capital guanero fue transferido a la agricultura de exportación en la provincia costeña de Jequetepeque (Burga 1976). La producción azucarera se concentró en los fértiles valles entre Trujillo y Chiclayo, en la costa norte, llegando a representan el sesenta y ocho por ciento de las exportaciones de azúcar en 1878. La producción subió de 610 toneladas en 1860 a 83.497 toneladas en 1879, cuando daba cuenta del treinta y dos por ciento del total exportado. En cuanto al algodón, su producción subió de 291 toneladas en 1860 a 3.609 toneladas en 1878, y también tendió a concentrarse en ciertos departamentos de la costa: Piura (catorce por ciento de las exportaciones), Lima (treinta y ocho por ciento) e Ica (cuarenta y dos por ciento) (Hunt 1985: 267). El desarrollo de ambas mercancías también se debió a su cercanía a Lima para el acceso al crédito, así como a las instalaciones portuarias para el fácil transporte transoceánico a los mercados extranjeros.

Sin embargo, fuera de la especialización en el azúcar y el algodón, la agricultura costeña permaneció mayormente estancada. Al final de la década de 1870 el valor de ambas producciones era de 47 y 55,5 por ciento, respectivamente, en tanto que el arroz representaba el cuatro por ciento, el vino y otros licores

el veintiocho por ciento y otros productos alimenticios el 15,5 por ciento. Las haciendas costeñas prestaron poca atención a la producción de alimentos, incluso con el alza en la demanda de los mismos por la construcción de ferrocarriles en las décadas de 1860 y 1870, dejando libre este mercado para ser ocupado principalmente por importaciones chilenas o del granero del valle del Mantaro, en la sierra central.

A diferencia del azúcar o del algodón en la costa, el comercio de las lanas en el sur peruano debió su constante evolución en este periodo, no al *boom* guanero, sino a la creciente demanda de las fábricas textiles británicas y a las políticas librecambistas estatales en evolución. De los productos de la sierra, únicamente la lana tenía un valor suficiente por peso de unidad, como para superar el elevado costo de su transporte a los puertos costeros para su exportación. Su valor creció cuatro veces, de £/122.000 en 1845-1849 a un máximo de £/489.000 en 1870-1874. Mientras que los hacendados producían una parte sustancial de la lana de oveja en sus fundos, buena parte de las más finas fibras de alpaca era producida en las comunidades indígenas. La lana fue inicialmente recolectada por grandes comerciantes peruanos autónomos, algunos de los cuales la exportaban ellos mismos. Sin embargo, a partir de las décadas de 1879 y 1880, la recolección era efectuada por rescatistas de las casas comerciales extranjeras de Arequipa, que atravesaban el altiplano del Cuzco a Puno regateando y coactando a los campesinos para obtener los mejores precios. Sin embargo, la mayor parte de su lana en bruto la conseguían en ferias anuales como la que congregaba entre diez mil y doce mil campesinos en Vilque, en el altiplano puneño.

El segundo impacto a largo plazo de la consolidación de la deuda, fue la creación de una base sociopolítica —la nueva oligarquía guanera, aliada con intereses extranjeros— que permitió finalmente el triunfo del Estado liberal. De hecho, puede considerarse la consolidación de la deuda en el Perú como el equivalente de las reformas liberales de la tierra que se dieron en el resto de Latinoamérica a mediados de siglo. Estas reformas «privatizaron» las tenencias corporativas de la Iglesia y las comunidades de indígenas, consolidando así nuevas élites bajo la égida del emergente Estado liberal y capitalista. De hecho, los revalorizados bonos de la consolidación de la deuda fueron la contraparte peruana de la «reforma agraria» como catalizador de la formación del capitalismo y el liberalismo latinoamericano a mediados de siglo.

Aunque la consolidación de la deuda nacional abrió el camino al liberalismo, su surgimiento final dependió de otras medidas importantes tomadas por el gobierno. En 1850 Anthony Gibbs and Company ganó una extensión a largo plazo de su contrato guanero con el gobierno, no obstante el esfuerzo concertado de un grupo de comerciantes nacionales —los llamados «hijos del país»— por ganar la concesión. En efecto, el gobierno no habría podido proseguir con la

consolidación de la deuda sin las formidables reservas financieras de Gibbs y Compañía que permitieron dispensar a sus demandantes, clientes y acreedores. Negociando duramente con Gibbs, el Estado logró elevar su parte de las ganancias del guano de un tercio a finales de la década de 1840, a casi las dos terceras partes en la siguiente década. Al mismo tiempo, la parte de las rentas del guano que cubrían los gastos de gobierno saltaron del seis por ciento del presupuesto de cinco millones de dólares en 1847, a más del cincuenta por ciento de los diez millones de dólares presupuestados en 1855 (posteriormente subiría a ochenta por ciento en 1869 y 1875). Se ha estimado que durante toda la era del guano, entre 1840 y 1880, el Estado peruano captó entre el sesenta y setenta por ciento de las rentas derivadas de este producto.

A comienzos de la década de 1850 se tomaron más medidas para consolidar un régimen liberal. Se firmó una serie de tratados comerciales con Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos que pusieron el comercio exterior peruano en una base ordenada y recíproca. Además, por primera vez desde la independencia, las elecciones a la presidencia trajeron consigo una transición pacífica del poder al general José Echenique (1852-1854), el sucesor de Castilla, en 1852. La comunidad comercial y financiera internacional dio la bienvenida a esta sucesión presidencial ordenada, como otro ejemplo de la creciente estabilidad y confiabilidad del Estado peruano en la era del guano. Por último, luego de una amarga lucha legislativa, en 1851 los liberales librecambistas lograron derrotar al lobby proteccionista sobreviviente de artesanos e industriales, y reducir los aranceles alrededor del quince al veinticinco por ciento. El triunfo del liberalismo era total con estas medidas y con la victoria de Echenique, quien hizo una campaña vigorosa a favor del comercio libre. Las normas y políticas liberales, respaldadas por una poderosa y nueva oligarquía, configurarían la política económica y dominarían la política peruana desde entonces hasta finales de siglo.

Sin embargo, es de señalar que la variante peruana del liberalismo fue una versión heterodoxa de su contraparte ideológica occidental. En efecto, ella estaba distorsionada de dos formas importantes. En primer lugar, el guano fue convertido en un monopolio estatal siguiendo una inclinación colonial por el mercantilismo y el estatismo, violando así el principio liberal del *laissez-faire* [dejar hacer]. De este modo, el recién adquirido liberalismo comercial y fiscal peruano quedó diluido por una institución fuertemente estatista que intentaba fijar precios, maximizaba las ganancias (más del setenta por ciento) e incrementó los gastos estatales por un factor de ocho a diez veces en el periodo de 1850-1870. Para los críticos del extranjero, una dosis tan pesada de estatismo, sin mencionar la posterior «nacionalización» del tráfico, al reemplazar a los comerciantes extranjeros por peruanos, cuestionaba seriamente el compromiso peruano con el liberalismo. Esta postura se reforzó aún más con la naturaleza de la consolidación de la deuda, que

sirvió no sólo para enriquecer a un pequeño grupo de plutócratas y especuladores, sino para abrir el Estado a una orgía de concusión, corrupción y peculados. Como Gootenberg expresara coloridamente, «al igual que el proteccionismo antes, el elitista comercio libre peruano giraba mayormente en torno a una relación simbiótica entre las élites del capital y el tesoro central, ahora convertido en un *ménage a trois* con su bienvenida seducción de los financistas extranjeros».

Aunque bastante contenidos, el regionalismo y la inestabilidad política no desaparecieron del todo, incluso ahora que la nueva oligarquía y el Estado liberal tomaban forma a comienzos de la década de 1850. El general Echenique, el sucesor de Castilla, resultó ser un líder inepto y corrupto, cuyo mal manejo de la última etapa de la consolidación —signada por un incremento masivo en los reclamos, muchos de ellos fraudulentos— produjo un creciente descontento y conmociones políticas. Castilla se dio cuenta de que Echenique estaba deshaciendo muchos de los logros que él había conseguido al estabilizar el país y ponerle en un curso financiero y desarrollista más sólido, y aprovechó los tumultos para volver al poder. Con el respaldo de Arequipa, Ayacucho y Huancayo preparó una exitosa rebelión provincial y derrocó a Echenique en 1854.

Fue durante su segundo gobierno (1854-1862) cuando Castilla se ganó el manto de Libertador al emancipar a los esclavos y abolir la vieja contribución indígena colonial (ambas en 1854). Por otro lado, el Libertador en persona dirigió su caballería de élite en la brutal represión de los tres días de motines proteccionistas de artesanos y pequeños tenderos que estallaron en Lima en diciembre de 1858. Aunque Castilla se alió con los emergentes liberales en este y otros asuntos, no estaba satisfecho con la aprobación de una nueva Constitución liberal hecha en 1856 por el Congreso. En 1860 logró reemplazarla con una Carta más conservadora, la cual restauraba muchos de los poderes y prerrogativas de un Ejecutivo y un Estado central fuertes: las bases políticas de su *pax* andina.

El apogeo del guano

El Perú alcanzó la cima de su paso —inducido por el guano— de mendigo a millonario en la década de 1850 y comienzos de la de 1860, bajo la égida del triunfante liberalismo exportador y la mano dura de Castilla. Las exportaciones de guano saltaron de $4,3 millones a $12,5 millones al año entre 1852 y 1857, antes de nivelarse alrededor de los veinte millones de dólares a comienzos de la década de 1860. El Estado logró recuperar más del setenta por ciento de las ganancias en estas exportaciones, lo que le permitió triplicar su desembolso presupuestal (ganancias más adelantos sobre futuras entregas) a veinte millones de dólares en 1860. De esta «afluencia fiscal», como la llamase Basadre, surgió el edificio de una moderna burocracia estatal. Sin embargo, estas señales externas de prosperidad

fiscal escondían el hecho de que el gobierno estaba incurriendo consistentemente en grandes déficit presupuestarios financiados, a su vez, por grandes empréstitos extranjeros garantizados con el guano.

El *boom* también actuó como un imán demográfico para Lima, incrementando su población de un punto mínimo de cincuenta y cinco mil personas después de la independencia, a 94.195 en 1857, y transformándola físicamente en una metrópoli «europeizada», *chic* pero sobrepoblada. Los grandiosos bulevares de Lima estaban ocupados por suntuosas mansiones, elegantes parques y nuevos e imponentes edificios públicos. Las fortunas familiares se incrementaban y las filas de la plutocracia crecían al mismo ritmo, no solamente con las ganancias de los comerciantes, que casi se triplicaron después de 1845, sino también con el regalo de veinticinco millones de dólares de la «consolidación» estatal. Los limeños emergentes, culturalmente orientados a Europa, lucían las últimas modas continentales y consumían añejos vinos franceses entre toda la amplia gama de bienes importados disponibles, valorizados en más de quince millones de dólares para 1860. Al igual que toda élite, esta liberalidad de la riqueza llevó a ocasionales orgías de exhibición pública y consumo conspicuo. Tal fue el caso del célebre baile realizado en Lima en 1873, en el cual los finos vestidos y joyas de cada dama habían sido importados de Europa especialmente para la ocasión, a un costo de diez mil a cincuenta mil soles cada uno. En una nota más seria, la mayor prosperidad contribuyó a desplazar el conflicto político de los campos de batalla de las guerras caudillistas al Congreso, donde los representantes de la élite ahora discutían y debatían el futuro nacional.

El atractivo del *boom* guanero peruano también actuó como un imán para la inmigración extranjera al Perú. Para 1857, la población de Lima era europea en un veintitrés por ciento (21.557). Si incluimos el número de inmigrantes latinoamericanos y chinos —veinticinco y tres por ciento, respectivamente—, resulta que más de la mitad de la población de la capital estaba conformada por extranjeros. En cuanto al país como un todo, unos cuarenta y cinco mil extranjeros vivían ese mismo año en el Perú, muchos de ellos atraídos por la construcción de ferrocarriles.

Uno de los inmigrantes más exitosos fue William Russell Grace, quien llegó al Perú en 1851 junto con un puñado de otros irlandeses que escapaban de la hambruna de la papa. Tras encontrar trabajo como proveedor de naves en el activo puerto del Callao, Grace pasó a ser socio y luego único propietario de la firma que eventualmente se convertiría en W.R. Grace & Co. Aunque William se mudó a Nueva York en 1862, donde posteriormente se convertiría en el primer alcalde nacido en Irlanda, Michael, su hermano menor, permaneció a cargo de las operaciones peruanas. Con el tiempo, como demostró Clayton (1985), la firma se expandió a la construcción de ferrocarriles, la minería de la plata, el azúcar, el caucho, los nitratos y sobre todo los fletes.

A pesar de estas historias de éxito, la era del guano decididamente tuvo su lado oscuro en la Ciudad de los Reyes. La brecha entre ricos y pobres crecía cada vez más. La inflación se disparó a alrededor de setenta por ciento entre 1855 y 1865, y más aún en los alimentos y productos de primera necesidad. En ese mismo lapso, el salario de los trabajadores urbanos disminuyó aproximadamente un veinticinco por ciento. Los pequeños minoristas y servicios fueron sacados del negocio por las aproximadamente cien firmas de mayor tamaño que llegaron a dominar los negocios de la ciudad, la mitad de las cuales eran de propiedad extranjera. Asimismo, el número de talleres se estancó y el ingreso de los artesanos locales cayó al nivel de 1830. Ambos grupos fueron las víctimas del torrente de las importaciones de lujo que inundaban la capital desde el extranjero. Para 1857, la tasa de desempleo permanente en la ciudad había alcanzado más del diecisiete por ciento de todos los trabajadores varones, una tasa sorprendente considerando que el *boom* guanero llegaba a su apogeo.

Con el incremento de las penurias populares en medio de tanta riqueza, estallaron unos brotes de descontento social. Ya en 1851, unos trabajadores ludistas destruyeron las señales del primer ferrocarril de Lima. Luego, en las secuelas de la rebelión liberal que depuso a Echenique en 1855, las turbas saquearon los hogares y negocios de los comerciantes y mercaderes guaneros más ricos y prominentes. Los extranjeros eran cada vez más el blanco de la ira popular después de cada cambio de régimen.

Sin embargo, el estallido más serio de descontento social tuvo lugar en 1858. Poco antes de Navidad, una marcha pacífica al Congreso en protesta por la reducción de los aranceles a la importación, efectuada por un grupo abigarrado de artesanos, jornaleros desempleados, vagos y radicales políticos, se tornó violenta. Siguieron tres días de motines cuyo resultado fue el saqueo de varias elegantes tiendas francesas y el incendio del ferrocarril a Chorrillos, un símbolo del progreso para la élite. El ejército finalmente restauró el orden, pero no antes de que el motín cobrase una docena de bajas.

Si la fortuna de los artesanos y los oprimidos de la ciudad alcanzó ahora su punto bajo, no sucedió lo mismo con la plutocracia, que unos cuantos años más tarde hizo un intento exitoso de retirar el control de la consignación del guano a Anthony Gibbs and Company, el viejo concesionario. El desafío peruano provino de la Sociedad Consignataria del Guano, conformada por los más poderosos comerciantes limeños, que desde 1850 habían estado activos en el tráfico en forma modesta. Capitalizados con la masiva transferencia de fondos procedentes de la reciente consolidación estatal de la deuda, la sociedad reemplazó a Gibbs en 1862 y se convirtió en el único consignatario a Gran Bretaña, el mercado de guano más importante de Europa.

A medida que las ganancias guaneras del grupo y su acumulación de capital se incrementaban, éste invirtió en diversas empresas, entre ellas los seguros, los ferrocarriles, el gas, la inmigración y posteriormente en las compañías de nitratos. Tal vez las más importantes de ellas fueron los primeros bancos del país, que obtuvieron inmensas ganancias especuladoras con préstamos públicos de corto plazo, a veces de hasta treinta y cinco por ciento. Así, el Banco del Perú se fundó en 1863 con un activo de diez millones de pesos. Muchos de sus accionistas eran también importantes miembros de la Compañía Nacional del Guano (antes Sociedad).

Los investigadores de la escuela dependentista sostienen que durante la era del guano se hicieron muy pocas inversiones productivas o de diversificación económica, salvo en las expansivas haciendas azucareras y algodoneras a lo largo de la costa. Sin embargo, esta postura descuida algunas importantes repercusiones económicas del *boom* guanero. Por ejemplo, los primeros bancos del país, capitalizados con las ganancias del guano, sirvieron para facilitar y modernizar las transacciones comerciales. Estos bancos emitieron billetes que circularon como dinero, aunque al principio no estaban regulados ni controlados por el Estado. Hasta entonces, las actividades comerciales habían sido limitadas por una crónica escasez de circulante, sobre todo de monedas de plata, que se exportaban marcadamente para cubrir los crónicos desequilibrios comerciales del periodo postindependentista. Esta escasez de circulante se hizo tan severa en las décadas de 1830 y 1840, que una gran cantidad de monedas nacionales y bolivianas devaluadas entraron en circulación. Para evitar este caótico sistema monetario, los comerciantes limeños introdujeron billetes comerciales para efectuar sus negocios. Este sistema arcaico quedó obsoleto con la emisión de billetes de banco después de 1860.

Igualmente importante fue la función crediticia de los nuevos bancos en la revitalización de la agricultura costeña. En 1874 concedieron créditos comerciales garantizados con las acciones y activos financieros de diversas compañías por un valor de unos cuarenta y dos millones de soles en los mercados de capital de Lima. También ayudaron a movilizar capitales en el sector exportador y fueron activos, al igual que los nuevos bancos hipotecarios. Estos, por ejemplo, facilitaron crédito a la agricultura comercial a tasas de interés muy por debajo del de las casas comerciales que tradicionalmente prestaban dinero a los hacendados, a cambio de una parte garantizada de sus cosechas. Estos préstamos eran conocidos como contratos de consignación. De este modo, el Banco de Crédito Hipotecario, fundado en 1866, extendió aproximadamente doce millones de soles a haciendas algodoneras y azucareras entre 1867 y 1881 (Quiroz 1993: 29-32). Si bien la ausencia de una regulación bancaria tuvo como resultado múltiples abusos, entre ellos los notorios favoritismos y la deshonestidad de algunos administradores y directores, no niega la contribución bancaria al crecimiento y desarrollo durante la era del guano.

Como era de esperarse, el creciente poder económico y financiero de la plutocracia guanera de comerciantes, financistas y hacendados se tradujo también en una creciente influencia política y social. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1860 se fundaron en Lima varios exclusivos clubes sociales que sirvieron para diferenciar esta nueva élite y promover su cohesión y solidaridad como aspirante a clase dominante. Al mismo tiempo, las nuevas ideas reformistas y desarrollistas de la élite comenzaron a aparecer en una de las más influyentes publicaciones de la capital, la *Revista de Lima*, fundada en 1860 por los banqueros-políticos Manuel Pardo y Lavalle y Luis Benjamín Cisneros, ambos antimilitaristas y fuertes defensores de la democratización política y del liberalismo económico. Pardo se convirtió en el principal ideólogo y fundador del Partido Civil, el primer partido político de base civil en desafiar el largo reinado militar del país. En efecto, el civilismo pasó a ser la expresión política de la nueva oligarquía. En 1872, Pardo se convirtió en el primer y exitoso candidato presidencial del partido, rompiendo así el control que los militares tuvieron sobre el poder político durante casi cinco décadas.

El surgimiento del civilismo

Nacido en una familia aristocrática en 1834, Pardo fue el más conocido millonario capitalista que se hiciera a sí mismo durante el apogeo de la era del guano. Educado en el Colegio de San Carlos de Lima y posteriormente en el Collège de France, donde estudió economía política, Pardo pasó a ser un importante consignatario, importador y financista. En 1862 fundó el Banco del Perú y fue presidente de la Compañía Nacional del Guano ese mismo año, al tomar la concesión de Gibbs. Para mediados de la década había dirigido su olfato empresarial en dirección de la política. En los siguientes doce años se convirtió en la figura política dominante del país, ocupando el cargo de ministro de hacienda en 1866-1867, el de alcalde de Lima entre 1869 y 1872, el de primer presidente civil del país de 1872 a 1876, culminando su carrera como reconocido presidente del congreso hasta su asesinato, en 1878.

En sus escritos de la *Revista* a comienzos de la década de 1860, Pardo se mostraba particularmente preocupado en canalizar las inmensas rentas estatales procedentes del guano hacia un desarrollo más diversificado y sostenible. Era sumamente consciente de que se trataba de un recurso finito que se iba agotando rápidamente; de igual manera sabía que el Estado venía dilapidando una gran parte de su bonanza en gastos improductivos e innecesarios. De hecho, ahora tenemos una idea mucho más precisa de cómo se gastaron los ingresos estatales en esta época. Más de la mitad se gastó en ampliar la burocracia civil (veintinueve por ciento) y las fuerzas armadas (24,5 por ciento). Otros gastos incluyeron la construcción de ferrocarriles (veinte por ciento), el pago de la consolidación

de la deuda interna y externa (11,5 y ocho por ciento, respectivamente), y la reducción de la carga fiscal a los pobres (siete por ciento). Por último, a Pardo le preocupaba la tendencia de la élite al sobreconsumo de costosas importaciones que había provocado un severo problema en la balanza de pagos. Según él, el Perú consumía tres veces más del extranjero de lo que producía, una condición que «no p[odía] ser eterna».

Su solución fue «convertir el guano en ferrocarriles» para así dinamizar la producción y la productividad nacionales, es decir, usar los ingresos estatales provenientes del guano, junto con préstamos extranjeros, en un gran programa de



Manuel Pardo, fundador del Partido Civil y primer presidente civil, 1872-1876. Reproducido con permiso de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

construcción de ferrocarriles a través de los Andes para abrir el interior al desarrollo. En este sentido, planteó que «[s]in ferrocarriles no puede haber hoy verdadero progreso material, y aunque parezca mucho decir sin progreso material no puede haber hoy tampoco en las masas progreso moral porque el progreso material proporciona a los pueblos el bienestar, les saca del embrutecimiento y la miseria: tanto vale pues decir que sin ferrocarriles tiene que marchar a pasos muy lentos la civilización» (citado en Kristal 1987: 61 [Efrain Kristal, *Una visión urbana de los Andes. Génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú 1848-1930*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1991: 68-69]).

Esta idea no era del todo novedosa, puesto que los ferrocarriles se habían convertido en los precursores del desarrollo industrial y en la panacea desarrollista en todo el mundo occidental. El estallido de la construcción ferroviaria se produjo en varios países latinoamericanos en la década de 1850, el Perú entre ellos, cuando se inauguró la primera línea operativa de América del Sur en Lima-Callao en 1851. Su éxito y la promesa particular que tenía para los Andes, conllevó numerosas propuestas e informes sobre el potencial que los ferrocarriles tenían para el desarrollo peruano. El plan de Pardo era importante no sólo porque fue propuesto por un influyente dirigente de la élite liberal civilista, sino por su tesis singularmente «desarrollista».

La interpretación dependentista dominante de este plan es que Pardo buscó aplicar el modelo occidental de expansión ferroviaria como un medio a través del cual modernizar y fortalecer la economía neocolonial peruana. Según los dependentistas, en lugar de integrar el país y abrir un mercado interno para la producción nacional, como sucedió en Occidente, este sistema ferroviario simplemente sirvió a los estrechos intereses de clase de la nueva oligarquía exportadora y ligó la economía neocolonial del Perú a los mercados extranjeros, en una relación de dependencia cada vez mayor.

Tras un cuidadoso examen de los escritos de Pardo, pareciera que su proyecto ferroviario no era en absoluto un plan para un «desarrollo exportador orientado hacia fuera». Más bien fue un llamado a desarrollar el potencial productivo del mercado interno y doméstico, es decir, un programa actual de industrialización por sustitución de importaciones. Una red ferroviaria hacia el interior reduciría los costos de transporte y de transacción, que, junto con la «protección natural» brindada por la sierra peruana, dinamizaría la producción interna y las manufacturas con miras al mercado de consumidores populares. Así, en su famoso tratado en *La Revista de Lima* sobre la provincia de Jauja (posteriormente publicado como *Estudios sobre la provincia de Jauja*, 1862), Pardo sostuvo que

> Habiendo baratura de jornal y de alimentación, materias [primas], carbón de piedra a discreción, y mejor que eso grandes y poderosas caídas de agua, por que no se habían

> de establecer fábricas de paños burdos, de tejidos toscos de algodón y de cáñamo, de loza ordinaria, de curtiembres de cueros y de preparación del cardencillo, de la potasa y cenizas gravelosas [...] por el contrario, las industrias que están al alcance de las clases secundarias son las que más propenden al bienestar de las poblaciones y al progreso de la Nación (citado en Gootenberg 1993: 84; 1998: 128)

Si el proyecto de desarrollo ferrocarrilero de Pardo tenía sentido fundamentalmente en función de crear una economía nacional más integrada, menos dependiente de las exportaciones y basada en una producción popular de pequeña escala, su mayor atractivo para la élite dominante a mediados de siglo se fundaba en otras actitudes y sesgos liberales más predecibles. Por ejemplo, el plan satisfacía la noción prevaleciente del paternalismo liberal al plantear la posibilidad de que los ferrocarriles y el desarrollo subsiguiente sirviesen para levantar la moral de, y civilizar a las oprimidas y aletargadas masas indias del Perú. Tal vez más importante fue que también prometía terminar, de una vez por todas, con las endémicas rebeliones caudillistas que estallaban constantemente y regularmente en las provincias para amenazar las aspiraciones hegemónicas del Estado central basado en Lima. De este modo, el programa de Pardo de comunicaciones y desarrollo nacionales, basados ambos en los ferrocarriles, encarnaba la misión política civilista de largo plazo de establecer un gobierno civil ordenado en todo el país. Cualquiera que fuere su atractivo, en 1861 el Congreso autorizó el plan y la rápida construcción de la primera línea troncal del país a Jauja.

Castilla fue reemplazado como presidente por el general Miguel de San Román en 1862, mientras ganaba impulso la construcción de ferrocarriles como medio para alcanzar el desarrollo. San Román falleció en el cargo en abril de 1863 y le sucedió otro general, el vicepresidente Juan Antonio Pezet (1863-1865). Éste inmediatamente debió hacer frente a una crisis internacional cuando España, después de la muerte de dos de sus ciudadanos en una hacienda norteña, intentó tomar como indemnización las ricas islas guaneras de Chincha. Los peruanos, Castilla entre ellos, naturalmente se sintieron ultrajados por esta afrenta a su soberanía nacional, pero Pezet prefirió capitular a las demandas hispanas ante la amenaza del bombardeo del Callao por una flota española que había sido enviada al Pacífico en 1865.

Esta capitulación hizo que el coronel Mariano Ignacio Prado (1865-1868), un liberal, derrocara a Pezet y tomara el poder. Prado organizó una defensa eficaz contra la agresión española reforzando las baterías de artillería en el Callao y forjando una alianza defensiva con Chile, Ecuador y Bolivia. Después de bombardear Valparaíso, la flota española fue repelida con una andanada de artillería al atacar el Callao, haciendo que España se retirara del Pacífico llevándose de las islas un cargamento sustancial de guano. Todo el episodio resultó

enormemente costoso y una mayor hemorragia para el tesoro ya apremiado del Perú, forzando al gobierno a tomar prestado aún más dinero en el extranjero, garantizado con unas reservas guaneras cada vez más exiguas.

Otro acontecimiento significativo durante el gobierno de Prado fue el estallido de una seria rebelión india en la provincia de Huancané, en Puno, en 1867. Esta rebelión marcó el inicio de la proliferación de rebeliones indígenas en el tardío siglo XIX, luego de una calma de más de tres cuartos de siglo tras el sofocamiento de la rebelión de Túpac Amaru en 1782. Este periodo de calma tal vez se debió a la incapacidad de los débiles Estado y sociedad republicanos, después de la independencia, para igualar el nivel de exacción al campesinado alcanzado por el mucho más eficiente régimen colonial tardío. La disolución, como ya señalé, parece haber provocado un florecimiento del sector indio y una mayor autonomía en las comunidades indígenas, lo cual también podría explicar la ausencia de rebeliones en el periodo postindependentista.

Sin embargo, en el sur peruano operaban unas fuerzas que alterarían esta situación. Las tierras indígenas, que daban cuenta de buena parte del floreciente comercio lanero, estaban sometidas a una presión creciente de los hacendados que deseaban obtener un mayor acceso a este lucrativo comercio. De tal manera, en la segunda mitad del siglo se dio un proceso de consolidación de tierras en la región, que vio su transferencia de los minifundistas a los hacendados y el incremento correspondiente en el número de colonos arrendatarios en las grandes haciendas. Expulsados cada vez más del comercio lanero, los campesinos indios experimentaron crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado, en un momento en el cual la renta guanera iba decayendo y el gobierno comenzaba a restituir la ya abolida contribución indígena, aunque en forma disfrazada y alterada.

La rebelión de Huancané fue encabezada por el Coronel Juan Bustamante, un político liberal, comerciante y defensor de las causas indígenas en Puno muy conocido. Ella estuvo orientada contra el incremento de impuestos a los campesinos, en particular contra la imposición de la contribución personal, un gravámen laboral establecido por Prado para ayudar a reparar carreteras y puentes. Éste y otros impuestos se dieron en un momento en el cual el precio de la lana iba cayendo, exprimiendo el ingreso de los minifundistas que se veían en apuros para pagar estos gravámenes. Las ambiciones políticas de Bustamante jugaron un papel en el levantamiento, pues era un firme defensor del gobierno liberal de Prado al cual los conservadores presionaban cada vez más. Según Gonzales (1987), la rebelión quedó sin embargo localizada y fue reprimida por las fuerzas que intentaban derrocar a Prado, después de un considerable derramamiento de sangre y la muerte de Bustamante en 1868.

Entretanto, Prado enfrentaba una guerra civil cada vez más fuerte en torno a una nueva constitución liberal promulgada por el Congreso en 1867. La nueva carta constitucional provocó la oposición del general Pedro Diez Canseco en Arequipa y del coronel José Balta en Lambayeque, quien encabezó una exitosa rebelión para deponer a Prado y restaurar la constitución conservadora de 1860. Las victoriosas fuerzas provinciales entonces le nombraron presidente (1868-1872).

Balta fue un oficial del ejército conservador que tuvo un gobierno nada distinguido de cuatro años, caracterizado por la ineficiencia y la corrupción, pero a pesar de todo fue significativo por varios motivos. En primer lugar, su ascenso al poder en 1868, el último caso en que un contendor presidencial alcanzó el mando a través de una rebelión provincial, representa el fin de la vulnerabilidad del gobierno central ante los desafíos regionales o provinciales. Parecería que los fondos y el masivo programa de construcción ferroviaria que llevó a cabo finalmente consolidaron el control de Lima sobre el resto del país durante la era del guano.

En segundo lugar, el enorme y costoso programa de construcción ferroviaria de Balta llevó a un masivo incremento en los préstamos extranjeros, que finalmente amenazaría la viabilidad financiera del país. Es más, en un intento por elevar los ingresos estatales provenientes del guano, Nicolás de Piérola, su ministro de hacienda, rescindió el contrato con la oligarquía y lo entregó a unos capitalistas extranjeros a cambio de la cancelación parcial de la deuda externa. Tercero, en reacción a este ataque a su base económica, la oligarquía civilista se movilizó políticamente para retirar a Balta del poder, capitalizando el desencanto público por la notoria corrupción del gobierno. Esta campaña abrió el camino para la reacción antimilitar popular que llevó a la elección como presidente de Manuel Pardo, el candidato del Partido Civil, en 1872. Por primera vez desde la independencia un civil, y no una figura militar, ejercería el poder político en el país.

Por último, durante el gobierno de Balta tuvo lugar una seria rebelión de culís chinos —la mano de obra principal de las haciendas costeñas— en Pativilca, en 1870. Conocida como la «rebelión de los rostros pintados» (Rodríguez Pastor 1979, 1989), ella involucró a unos mil doscientos a mil quinientos chinos que emprendieron una breve pero sangrienta embestida, saqueando, incendiando y destruyendo propiedades en una orgía de violencia espontánea, dirigida contra las duras condiciones de vida y trabajo prevalecientes en las haciendas. El ejército restauró el orden rápidamente; el saldo de esta rebelión fue unos trescientos chinos muertos.

Para construir el sistema ferroviario peruano en 1868, Balta se dirigió al norteamericano Henry Meiggs, quien acababa de completar más de doscientas millas de línea férrea en Chile. Meiggs, llamado el «Pizarro yanqui» por su más grande biógrafo, llegó a América del Sur en 1855 «huyendo» de la ley de California, donde había especulado excesivamente en bienes raíces y vendido acciones ferroviarias falsificadas. Durante la siguiente década en el Perú, Meiggs consiguió contratos que

sumaban más de ciento treinta millones de dólares para la construcción de 1.782 km de líneas, de los cuales 1.260 km fueron completados antes de su muerte. En el proceso amasó una fortuna, buena parte de la cual provenía de sobornos, estafas y comisiones, que gastó dispendiosamente en una vida lujosa y en donaciones de caridad. Murió pobre y fuertemente endeudado en 1877, víctima del colapso financiero peruano de la década de 1870. Sin embargo, su legado fue uno de los más espectaculares sistemas ferroviarios del mundo, habiendo enviado locomotoras a mayor altura de lo que jamás antes se había hecho.

Para construir sus colosales líneas, Meiggs reclutó un ejército de más de veinticinco mil indios peruanos y bolivianos, *rotos* (trabajadores urbanos) chilenos y trabajadores chinos. Aunque estos obreros estaban relativamente bien pagados y tratados para la época, miles de ellos fallecieron debido a los peligros de la altura, el clima y las enfermedades. Además de los trabajadores extranjeros, Meiggs virtualmente tuvo que importar todo lo que usó en la construcción de sus ferrocarriles: pólvora, medicinas, ropa para los trabajadores, vehículos ferroviarios, herramientas, maquinarias, materiales de construcción y madera, principalmente de los Estados Unidos. Prototípico promotor capitalista temprano, Meiggs combinaba una modesta capacidad como ingeniero con una colorida personalidad y un extraordinario talento financiero y empresarial. Tal era su reputación que entre veinte mil y treinta mil personas asistieron a sus funerales en Lima, la inmensa mayoría de los cuales eran los peones pobres sobre cuyas espaldas se erigió su sistema andino.

Para financiar la construcción de los ferrocarriles de Meiggs, así como otros proyectos extravagantes, Balta se dirigió a Nicolás de Piérola, su ministro de hacienda, quien preparó una reorganización fundamental del sistema de consignación del guano. Piérola, un tradicionalista católico e hispanófilo formado en un seminario, defendía no sólo los intereses de la Iglesia frente al anticlericalismo de los civilistas, sino también a las élites terratenientes rurales más tradicionales de la nueva plutocracia exportadora. No tenía tiempo que perder con Pardo y los civilistas, a quienes él y otros críticos de derecha atacaron en *El Proceso Católico* y *La Patria*, periódicos conservadores que respondían con desdén a las ideas progresistas enunciadas por los civilistas en la *Revista de Lima*.

Aunque el conflicto entre la vieja élite terrateniente y los nuevos exportadores agrícolas era cultural y político en igual medida, ambos grupos chocaban en torno a cuestiones fundamentales como el control de los trabajadores y el papel del Estado. La vieja clase hacendada dependía del control de la tierra y del dominio absoluto de la fuerza laboral indígena, en tanto que los nuevos terratenientes y agricultores argumentaban en favor de la eficiencia de un mercado laboral libre. Para estos últimos, la prosperidad dependía, en parte, de atraer trabajadores asalariados fuera del sector tradicional. En lo que respecta al Estado, la nueva élite

exportadora requería que fuese más activo y lograse extraer impuestos y rentas más altos, con los cuales construir la infraestructura necesaria para atender una economía exportadora. De esta manera, la nueva plutocracia civilista amenazaba la tradicional hegemonía económica y política de la vieja clase hacendada.

Piérola —que según Quiroz (1993: 36) se convertiría en «el heredero civil de la tradición caudillista» en la política peruana— planeaba financiar el programa de expansión ferroviaria de Balta con más préstamos en el extranjero. Hizo esto pasando el contrato de guano de 1869, de los consignatarios nacionales —a quienes Piérola y sus seguidores conservadores veían como una camarilla manirrota proclive al interés individual, a expensas de los intereses nacionales— a una compañía francesa encabezada por el financista internacional Auguste Dreyfus. Los civilistas respondieron tildando la medida como una claudicación a las finanzas internacionales, tomando para sí el manto de la soberanía nacional. Sea quien haya sido el que tenía razón, lo cierto es que una medida tan drástica en contra de los intereses fundamentales de la plutocracia inevitablemente debía provocar la enemistad duradera de los civilistas.

El producto de estas medidas fue un incremento masivo de la deuda externa peruana y una reacción predeciblemente amarga de la desplazada élite civilista. La deuda externa, que en 1865 sumaba únicamente nueve millones de soles antes de la Guerra con España, ahora se elevó de noventa millones en 1869 a ciento ochenta y cinco millones de soles en 1872. Sólo en este último año, el servicio de la deuda consumió trece millones quinientos mil soles del total de las rentas guaneras que sumaban quince millones de soles. Para empeorar las cosas, Dreyfus, que estaba decidido a monopolizar el mercado mundial del guano, resultó ser bastante menos prudente que Gibbs en asegurar unas reservas adecuadas del fertilizante con las cuales respaldar el incremento de las deudas del gobierno. Por último, el repentino ingreso masivo de fondos extranjeros desató una severa espiral inflacionaria entre 1869 y 1872, al igual que un breve *boom* de la banca especuladora. Por ejemplo, el número de bancos subió de cuatro en 1868 a dieciséis en 1873, lo que superaba con mucho la capacidad de la economía nacional. Esta situación sentó las bases de una severa crisis financiera en 1873, cundo la economía mundial cayó en una depresión.

Entretanto, la reacción política a una economía tambaleante, a la corrupción y las políticas erradas de Balta fue intensa. Encabezados por Manuel Pardo, el popular alcalde de Lima en 1869, los civilistas montaron una fuerte campaña para poner fin al gobierno militar y establecer un gobierno civil basado en el respeto a la ley, las instituciones republicanas y las garantías constitucionales. La clave, tal como la veían Pardo y sus camaradas civilistas, era reducir enormemente las abultadas fuerzas armadas. En palabras de Pardo, «[e]l Perú quiere obras públicas en vez de quince mil soldados» (citado en Kristal 1987: 66 [1991: 72]).

En su plan, se reestructuraría a las fuerzas armadas convirtiéndolas en un ejército profesional mucho más pequeño, incrementado por una guardia nacional que podía movilizarse en momentos de emergencia nacional.

Pardo y los civilistas también presentaron una agenda de desarrollo. Ella comprendía la construcción de obras públicas (ferrocarriles, caminos, irrigación) para facilitar la producción, el comercio y las exportaciones, y el estímulo a la inmigración europea, la cual traería técnicas y valores progresistas de Europa, al mismo tiempo que «mejoraba» —esto es «emblanquecía»— la composición racial de la nación. También requería la promoción de una ética laboral y el fin de la corrupción y las sinecuras gubernamentales, así como el estímulo de la inversión en industrias productivas en lugar de despilfarrar la riqueza en el consumo de bienes suntuosos. Por ese entonces, las proclividades en el gasto de algunas familias limeñas habían alcanzado dimensiones tan disparatadas que hasta importaban las puertas y ventanas de sus casas. Buena parte del programa civilista estuvo dirigido contra la oposición conservadora y lo que los progresistas consideraban el ethos decadente de la vieja clase terrateniente. En conjunto, el civilismo se oponía al viejo orden señorial que esperaba eliminar, y expresaba el nuevo espíritu capitalista y el espíritu «democratizador» de la nueva burguesía exportadora. De hecho, el programa sonaba como una clarinada actual en favor de la modernización.

Pardo obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de 1871-1872, pero un golpe militar en contra de Balta, organizado por el general Tomás Gutiérrez, ministro de guerra, y sus hermanos Marceliano y Silvestre, le impidió asumir el cargo. Lo notable del caso no fue la respuesta algo predecible de algunos elementos de las fuerzas armadas, sino el hecho de que el intento de golpe en contra del popular Pardo desató una orgía de motines en el pueblo limeño. En pocos momentos Balta fue arrestado y luego asesinado por sus guardias; Pardo fue rescatado del buque de guerra Huáscar, comandado por un oficial naval ampliamente respetado llamado Miguel Grau; y Tomás Gutiérrez fue capturado y linchado por una enfurecida turba de ciudadanos que acto seguido mutiló su cuerpo. No contenta con esto, la multitud colgó los cuerpos desnudos de Tomás y Silvestre de las torres gemelas de la catedral. Luego, después de decapitarlos, los amotinados incineraron los cuerpos caídos, junto con el de Marceliano, en una gran urna frente a la catedral.

El salvajismo de los motines y su horrendo final han sido interpretados de diversos maneras. Los observadores civilistas lo vieron románticamente como un heroico y espontáneo levantamiento popular en defensa del gobierno civil y la democracia electoral. En realidad Giesecke (1978) reunió evidencias considerables de que se trató de un movimiento más organizado y dirigido, conformado por elementos de la desposeída clase artesana, arruinada por dos décadas de comercio libre radical. Al final, el abortado golpe desacreditó aún más a las fuerzas armadas y legitimó el naciente movimiento civilista de Pardo.

La crisis económica y el descenso en el abismo

Sin embargo, la popularidad de Pardo sería severamente puesta a prueba por el inicio de una crisis económica que arrojaría al Perú a la bancarrota y finalmente a una catastrófica guerra con Chile a finales de la década. No bien asumiese la presidencia, Pardo tuvo que hacer frente al impacto en el Perú de la depresión mundial de 1873, que causó un fuerte descenso en las exportaciones del país. Por ejemplo, para 1878 la producción algodonera se había reducido a la tercera parte de su nivel anterior a 1872. Esta caída económica no pudo haberse dado en un momento más desfavorable para el sistema financiero peruano, inmensamente sobreextendido. Entretanto, los ingresos provenientes del guano, cuyas reservas estaban casi agotadas, cayeron en treinta y cinco por ciento, de £4 millones en 1869 a apenas £2,6 millones en 1875. En consecuencia, el Perú luchó por refinanciar su deuda externa mientras el desempleo se disparaba y el salario de los empleados estatales —cuyo número había crecido injustificadamente en anteriores gobiernos— quedaba sin pagar.

Pardo hizo frente a la crisis con un programa de austeridad que a pesar de todo no incluyó a su proyecto favorito de desarrollo ferroviario. La burocracia fue podada, las fuerzas armadas se redujeron en tres cuartas partes y se presentaron nuevos impuestos para incrementar las rentas. Pardo intentó reemplazar el decreciente ingreso del guano con los nitratos, un fertilizante que competía con aquel en el mercado internacional. Una serie de empresas peruanas, chilenas y extranjeras comenzaban a producirlos en la provincia de Tarapacá, en el sur peruano. En 1873, Pardo estableció un monopolio estatal del nitrato y dos años más tarde expropió estas empresas a cambio de certificados de nitrato emitidos por el gobierno. Sin embargo, las ventas resultaron ser decepcionantes y el gobierno pronto se atrasó en el pago de los certificados. La medida tomada por Pardo hizo que los anteriores propietarios, que se habían mudado a Chile y que también producían nitratos en el desierto de Atacama, cerca de la frontera con Perú, ayudaran a despertar la antipatía popular en contra del Perú y su aliada Bolivia.

El impacto de las medidas de austeridad tomadas por el gobierno y la caída económica cada vez más grande, rápidamente disiparon la popularidad inicial de Pardo. Sus medidas también alienaron a las instituciones poderosas como la Iglesia y las fuerzas armadas. La primera objetaba su esfuerzo por promover la ampliación y secularización de la educación, la cual era crucial para su programa de desarrollo, juntamente con la construcción de ferrocarriles. Pardo creía que el desarrollo económico y político giraba en torno a extender la educación entre las clases populares, en particular a las masas indias no integradas, y en hacer que la educación superior fuera menos filosófica y teórica, y más práctica y utilitaria. En cuanto a los militares, éstos no podían tolerar la drástica reducción en su

presupuesto y personal. En consecuencia, Pardo se vio obligado a sofocar varias revueltas militares en el transcurso de su gobierno, varias de ellas instigadas por su antiguo rival, Piérola, quien denunció, entre otras cosas, el anticlericalismo del presidente.

En el último año de su mandato, Pardo veía ante sí la posibilidad de un colapso bancario y financiero. El Perú tuvo que declararse en bancarrota al fracasar los intentos por refinanciar la deuda externa en enero de 1876, paralizándose las obras públicas (toda la construcción ferroviaria ya había quedado suspendida en agosto de 1875) y cayendo el valor de sus bonos de 77,5 por ciento en 1875 a 17,15 por ciento en 1876. El sistema bancario también estuvo al borde del colapso hasta que el gobierno intervino para garantizar su emisión monetaria. Ante el incremento del descontento civil y militar, Pardo paradójicamente no tuvo otra alternativa que persuadir al Partido Civil de presentar como candidato en las elecciones de 1876 a un jefe militar, el general y ex presidente/dictador Mariano Ignacio Prado (1876-1879).

Con Prado, el país de algún modo logró evitar temporalmente el colapso financiero, por lo menos hasta el estallido de la Guerra del Pacífico, en 1879. En 1876 el nuevo Presidente logró renegociar la deuda externa con el Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros de Londres. El acuerdo, conocido como el Contrato Rafael, estableció una compañía de acreedores extranjera, la Peruvian Guano Company, que manejaría los ingresos provenientes del guano para cumplir con el servicio de la deuda incumplida. Es más, el ingreso creciente de las exportaciones azucareras alivió la crisis de divisas extranjeras que acompañó a la crisis bancaria y al incumplimiento de la deuda en 1876. Con todo, Prado no logró calmar el antagonismo político cada vez más profundo entre Piérola y los civilistas, en particular después del asesinato de Pardo en 1878, cuyos seguidores sospechaban que había sido obra de los pierolistas.

Sin embargo, el estallido de la Guerra del Pacífico en 1879 puso fin a toda posibilidad de recuperación económica. En medio del conflicto, que enfrentó a Perú y Bolivia con Chile, su más poderoso vecino sureño, la Peruvian Guano Company y sus tenedores de bonos londinenses llegaron a un acuerdo con Inglaterra, que privó al Perú de sus ingresos provenientes del guano. Al mismo tiempo, el sistema bancario colapsó cuando el gobierno creó el Inca, una nueva moneda sin valor que no tenía respaldo alguno. De este modo, el Perú llegó al final de la era del guano virtualmente sin un centavo, habiendo dilapidado un tesoro casi tan cuantioso como la veta madre de plata descubierta en Potosí más de tres siglos antes.

Los historiadores aún debaten las razones del fracaso peruano en aprovechar esta oportunidad dorada. En forma hipotética, la idea de convertir la bonanza en proyectos de desarrollo útiles, a través del gasto estatal constituía evidentemente un programa racional para el progreso. El problema fue que dados los extremos

y singulares obstáculos geográficos a superar, los ferrocarriles eran un medio extraordinariamente costoso con el cual llevar a cabo el progreso económico. También resultaron más que integradores, orientados a la exportación, de manera que una vez terminada la guerra fomentaron un patrón de desarrollo orientado hacia el exterior.

Con todo, en el largo plazo, los ferrocarriles sí estimularon cierto desarrollo comercial y algo de modernización capitalista, por ejemplo en Junín, en los años posteriores a la debacle de la guerra con Chile. Sin embargo, incluso este eventual retorno parcial de la inversión quedó negado por el hecho de que los ferrocarriles cayeron en manos extranjeras (con el llamado Contrato Grace de 1886) debido a la quiebra provocada por la derrota peruana en la guerra. De esta manera, el Perú perdió el único legado concreto de la era del guano —un sistema de comunicación nacional— a manos de propietarios extranjeros que eventualmente adquirirían posesiones mineras sustanciales (ahora unidas con la costa por el ferrocarril), beneficiándose así aún más con la construcción de las vías férreas. No sorprende, entonces, que los historiadores peruanos hayan sido cualquier cosa menos generosos con la élite peruana de la era del guano, a la cual acusan, muchas veces correctamente, de una gran corrupción, ineptitud y extravagancia en el manejo de la bonanza guanera.

Hunt sostuvo que el fracaso en usar la formidable acumulación del guano para el objetivo de industrializar al país, como propuso Pardo, se debió más a la ausencia de una mentalidad burguesa en la nueva plutocracia de orientación mayormente «rentista». Manrique (1995) coincide con él pero añade que los límites del mercado interno en un país en el cual más del sesenta por ciento de la población era india, una gran parte de la cual vivía a nivel de subsistencia, proscribía toda inversión concertada en la industrialización. En este sentido, la visión profundamente racista de la oligarquía con respecto a la población indígena, impidió los esfuerzos por integrar el país en una forma que hubiese servido como base para la industrialización. Manrique concluye correctamente que la persistente fijación de la élite con España y el pasado hispano, así como el rechazo concomitante a utilizar la idea de un grandioso pasado precolombino —como sí lo hiciera México— para forjar una nación condenó al país a un subdesarrollo perpetuo.

Otra postura atribuye la debacle desarrollista peruana a las erradas políticas intervencionistas del Estado, que impidieron que el sector privado asumiera un control más firme de la economía nacional. Por ejemplo, el sistema bancario siguió continuamente minado por las lesivas políticas monetarias, y de otro tipo, seguidas por el Estado. Aún más importante es que, como Quiroz (1993) persuasivamente sostiene, si bien la propensión estatal a establecer monopolios primero sobre el guano y después sobre los nitratos, era consistente con las tradicionales prácticas

mercantilistas que se remontaban a los periodos colonial y postindependentista, ella exacerbó el problema de la deuda al facilitar el gasto no productivo en unas fuerzas armadas y burocracia estatal infladas, para no mencionar las oportunidades que creaba para una corrupción masiva.

Sean cuales fueren los méritos de estas interpretaciones, puede decirse con certeza que fuerzas mucho más grandes, como el impacto de la depresión mundial de 1873, junto con el agotamiento de los depósitos de guano y el estallido de la Guerra del Pacífico, pusieron fin a toda posibilidad que el Perú tuvo, a mediados del siglo XIX, de dar el gran salto desarrollista.

Capítulo VII

La Guerra del Pacífico y la Reconstrucción, 1879-1895

El origen de la Guerra del Pacífico se encuentra en el desierto de Atacama, improductivo pero rico en minerales, un gran espacio vacío y árido que se extiende unos mil ochenta kilómetros a lo largo del océano Pacífico. Al descubrirse depósitos de nitrato allí, la región pasó a ser el centro de las conflictivas pretensiones territoriales de Perú, Bolivia y Chile. El primero reclamaba una tira de cuatrocientos veinte y tres kilómetros de desierto que incluía las provincias costeras de Tacna, Arica y Tarapacá, Bolivia los siguientes cuatrocientos treinta y dos km al sur, comprendiendo la provincia de Antofagasta y desde el río Loa hacia el sur, hasta el paralelo veinticinco. Chile, sin embargo, cuestionaba estas pretensiones, proclamando su soberanía hacia el norte, hasta el paralelo veintitrés. Los tres países veían los depósitos de nitrato del desierto como una fuente potencial de ingresos importantes, en un momento de gran presión financiera durante la década de 1870.

Esto era particularmente cierto para el Perú, que había visto cómo su producción e ingresos guaneros se evaporaban justo cuando la economía mundial se precipitaba en la depresión de 1873. Dos años más tarde el país se declaró en bancarrota. Para el gobierno de Pardo, los nitratos constituían una fuente alternativa de ingresos y una solución potencial a sus dificultades financieras. Por ello estableció un monopolio estatal en 1873 para comprar los nitratos a los productores locales para su reventa en el mercado europeo. Sin embargo, este plan no resultó práctico debido a la caída de los precios, pues el gobierno no podía garantizar un retorno seguro para los productores. Pardo nacionalizó la industria, en 1875, con la esperanza de regular mejor la producción y los ingresos. Esto irritó a los productores de nitratos, muchos de los cuales eran chilenos o capitalistas europeos que entonces comenzaron a presionar por el retiro de la provincia de Tarapacá del monopolio peruano, y que ominosamente ayudaron a Chile a mejorar sus fuerzas militares.



Mapa 6. Guía de la expansión chilena. Llave: A. Frontera original entre Chile y Bolivia; B, Reclamado por Chile en 1842; a. Establecido por tratado en 1866, pero los ingresos del nitrato se dividieron equitativamente en A-B; C. Frontera original entre Perú y Bolivia; D. Frontera de Chile gracias a la Guerra del Pacífico, 1883, quedando D-E ocupado por éste por diez años; d. Frontera chileno-peruana por el acuerdo de 1929. Fuente: William Jefferson Dennis, Tacna and Arica (New Haven 1931).

Por ese entonces las fuerzas armadas peruanas estaban en decadencia. Ello se debía en parte a los problemas financieros del gobierno, que hacían necesario reducir el presupuesto, pero también a la filosofía del Partido Civil de Pardo de cortar el poder duradero de las fuerzas armadas en los asuntos políticos de la nación. En consecuencia, el ejército se había reducido de doce mil hombres en 1870 a sólo cuatro mil quinientos en 1875. Para compensar esta baja, Pardo reestableció la guardia nacional y fundó tanto una escuela militar como una academia naval para mejorar la preparación profesional y técnica. Aún más dañino que el corte en el personal fue que Pardo canceló los contratos de los nuevos navíos que podrían haber asegurado la superioridad naval en el Pacífico de la que el Perú gozaba desde la década de 1850. Hizo esto cuando Chile se reequipaba y adquiría nuevos buques para su flota.

Al mismo tiempo que Pardo contemplaba formas de extraer más rentas de los nitratos del sur, iba negociando una alianza defensiva con Bolivia. Él temía que los bolivianos decidieran establecer una alianza con Chile que no solamente pondría en riesgo los campos de nitrato peruanos, sino que además inclinaría el delicado equilibrio de poder en la región en favor de su viejo rival en el Pacífico. El tratado se firmó el 6 de febrero de 1873, acordando cada país acudir en ayuda del otro si su soberanía territorial era violada por un tercero. Perú infructuosamente intentó hacer que Argentina, que tenía su propia y prolongada disputa con Chile en la Patagonia, se uniera al acuerdo. Esto hizo que Chile sospechara que el tratado de 1873 no sólo estaba dirigido en contra suya, sino que tenía intención ofensiva y no defensiva, como se sostenía. Sin embargo, esta interpretación del tratado por parte de Chile no tenía valor alguno, dado el penoso estado de los preparativos militares de ambos países y su aparente incapacidad para llevar a cabo cualquier acto agresivo en contra de su mejor organizado país vecino. De manera que, además de la riqueza de los nitratos en el territorio en disputa, el conflicto fue alimentado por una profunda rivalidad geopolítica y comercial. La primera involucraba un incipiente equilibrio regional del poder en la parte sur del continente, que se remontaba a la ruptura del viejo régimen colonial y al surgimiento de varios nuevos Estados-Nación competidores entre sí en el periodo postindependentista. En cuanto a la segunda, la competencia comercial entre el Callao y Valparaíso por el control del tráfico a lo largo de la costa occidental, tenía sus origenes aún más atrás, en el periodo colonial, y había sido una de las causas de la guerra entre ambos países en 1836.

El acontecimiento precipitante de la Guerra del Pacífico fue un impuesto de diez centavos por quintal, gravado en 1878 por el gobierno boliviano a todos los nitratos exportados por la Compañía de Nitratos de Antofagasta, de propiedad anglochilena. Sin suficientes capitales o una burguesía que desarrollara sus propios depósitos de nitratos, Bolivia había entregado concesiones a la compañía y a

otros empresarios bolivianos y a sus asociados británicos, para que explotaran los depósitos. La compañía de Antofagasta había estado invirtiendo agresivamente capitales, capacidad administrativa y técnica, y mano de obra en Atacama para desarrollar sus posesiones hacía ya algún tiempo. De hecho, para finales de la década de 1870, ella y otras empresas europeas habían llegado a controlar casi la mitad de la capacidad productora de nitratos de Tarapacá, de la cual se vieron privadas por la nacionalización efectuada por Pardo. Esta expansión del capital y el conocimiento anglochileno del litoral boliviano, abrió el camino para el financiamiento extranjero de la modernización de la industria altiplánica de la minería de plata, ligando aún más los intereses del capital internacional con los intereses mineros bolivianos.

Aunque pequeño, el incremento de diez céntimos en el impuesto gravado a las compañías chilenas de nitratos violaba los términos de dos tratados anteriores entre Bolivia y Chile, en 1872 y 1874. Este último tratado había establecido la frontera entre ambos países en el paralelo veinticuatro y prohibió toda alza en los impuestos a los intereses comerciales o exportaciones chilenos de la región durante los siguientes veinticinco años. Cuando la compañía de Antofagasta se negó a pagar el impuesto, Bolivia impuso un embargo a sus exportaciones y arrestó a su administrador, provocando así que Chile enviara naves de guerra a la bahía de Antofagasta y que poco después, el 14 de febrero de 1879, ocupara militarmente el puerto boliviano ligeramente defendido, cuya población era chilena en un ochenta por ciento gracias al desarrollo de la industria de los nitratos. Bolivia respondió declarándole la guerra el 14 de marzo e invocó el tratado de alianza mutua con Perú, que forzaba a este país a entrar al conflicto a su lado.

El Perú apenas si estaba preparado para la guerra. La mayor parte de su flota languidecía en un dique seco para ser reparada y las unidades de su ejército estaban dispersas por todo el país. Inicialmente, intentó ganar tiempo mientras negociaba con Chile. Sin embargo, estas negociaciones, dirigidas por el historiador y diplomático José Antonio de Lavalle, llegaron rápidamente a un impasse porque Chile exigía que el Perú renunciara a su tratado con Bolivia y declarara su neutralidad. El Perú temía que su aliado cambiase de rumbo y arreglara con Chile con el fin de privarle de su provincia de Tarapacá, rica en nitratos. Ocupaba la presidencia Mariano Ignacio Prado, el ex presidente y héroe de la Guerra con España de 1866. Prado se negó a desconocer el tratado de 1873, no dejando otra alternativa a Chile que declarar la guerra al Perú y Bolivia el 6 de abril de 1879. En última instancia, Perú tenía un fuerte interés en proteger su sustancial industria del nitrato, sobre la cual el gobierno había basado sus esperanzas financieras y el futuro desarrollo del país.

Como señala St John (1992: 109), al principio del conflicto no habría sido fácil prever el resultado de la guerra pues ambos bandos contaban hipotéticamente

con ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, la ventaja que los aliados tenían en población total sobre un Chile más pequeño quedaba balanceada por la ciudadanía más homogénea y mejor educada y motivada de este último país. Con todo, en comparación con sus vecinos, Chile era una entidad política mucho más estable, que poseía un Estado fuerte e institucionalizado y un orden constitucional que había visto la transferencia ordenada del poder en seis ocasiones entre 1831 y 1879. Aun así, es claro que, por lo menos al principio, la población chilena ciertamente no estaba del todo unida respecto a la guerra, y durante toda la contienda bélica tuvo que enfrentar un severo conflicto político, al igual que el Perú. Chile estaba asimismo respaldado por Gran Bretaña, con quien había desarrollado fuertes lazos políticos y económicos desde la independencia. Estos lazos indudablemente se vieron reforzados por las posesiones de nitrato que el Perú había nacionalizado en Tarapacá y por los influyentes financistas británicos poseedores de bonos peruanos que ahora no valían ya nada debido a la declaración de bancarrota de 1875, y que esperaban fuesen redimidos con los pagos por reparaciones en caso de una victoria chilena. Por último, en comparación con sus rivales, el ejército chileno estaba sumamente bien organizado y equipado con modernos cañones Krupp y rifles de fabricación francesa.



Soldado peruano y su esposa hacia 1880. Cortesía de la Biblioteca del Congreso y Deborah Poole.

En última instancia, lo que probablemente selló el destino de los aliados fue la superioridad de las fuerzas armadas chilenas, y sobre todo su poderío naval y su estrategia global al iniciarse las hostilidades. Por ejemplo, su ejército estaba relativamente listo para combatir, pues en las últimas dos décadas había estado activamente ocupado en campañas en contra de los indios mapuches. Es más, a comienzos de la década de 1870, Chile se dispuso a desarrollar sus fuerzas navales para controlar el Pacífico, de modo que al estallar la guerra sus naves y marineros tenían una ventaja de tres a uno sobre Perú. Ella resultó ser crucial pues aunque la flota peruana logró hundir la corbeta chilena Esmeralda el 21 de mayo de 1879, en el primer gran choque naval de la guerra, su blindado Independencia encalló durante el combate en un arrecife en las afueras del puerto de Iquique. La pérdida del Independencia únicamente dejó al Perú el Huáscar, un blindado mucho más pequeño, con que desafiar al Blanco Encalada y al almirante Cochrane, sus más poderosas contrapartes chilenas. A pesar de esta desventaja, el Huáscar, contramandado por el almirante Miguel Grau, logró mantener en jaque a la flota chilena con una serie de brillantes maniobras navales durante los siguientes cinco meses. Ellas lograron ganar tiempo para el despliegue y concentración de unidades del ejército peruano al sur, que ahora se encontraban en condición de defender Iquique y unirse con el destacamento boliviano en Tacna.

El 8 de octubre la causa aliada sufrió un segundo y decisivo golpe en el mar con el Combate de Angamos. Allí, el Huáscar fue finalmente emboscado y capturado por los dos blindados chilenos y la mayoría de sus oficiales, incluyendo al legendario Grau, cayeron en combate. La heroica resistencia de Grau contra toda posibilidad le convirtió en uno de los pocos héroes peruanos auténticos surgidos en medio de la debacle generalizada de la guerra, y su recuerdo es aún hoy reverenciado por su país. Con todo, Chile ahora controlaba íntegramente las vitales rutas marítimas del Pacífico en la costa peruana, pudiendo así concentrar sus fuerzas para atacar y reabastecerse donde quisiera a lo largo del litoral. Asimismo, su supremacía naval le permitió imponer un embargo diseñado para cortar las exportaciones peruanas en un esfuerzo por dañar financieramente su capacidad de combate. Después de la pérdida del Huáscar, el final de los aliados parecía ser sólo cuestión de tiempo.

Y sin embargo, Perú logró posponer la derrota por más tiempo de lo que los observadores pronosticaban. De espaldas contra la pared, el país despertó un espíritu de resistencia que frustró el deseo chileno de un rápido y exitoso fin a la guerra. Por el momento, Chile siguió lentamente sus victorias navales con un desembarco de diez mil hombres en la costa sur el 28 de octubre, en Pisagua, de donde marchó hacia el norte y obtuvo una victoria sobre las fuerzas aliadas en San Francisco, lo que compensó su posterior derrota en Tarapacá, en noviembre. A partir de ese momento Chile ocupó toda la provincia de Tarapacá, cuyas

rentas procedentes de la producción de nitratos le permitieron ahora financiar su esfuerzo bélico, así como pagar el cincuenta por ciento de la deuda peruana con los acreedores británicos. Para junio de 1880, Chile había derrotado a las fuerzas aliadas del sur, capturado las provincias de Tacna y Arica, y forzado a Bolivia a abandonar la guerra. Sólo el heroico sacrificio de un destacamento peruano, comandado por el coronel Francisco Bolognesi, que defendía el puerto de Arica, brindó cierto consuelo a los reveses militares del país y rindió otro mártir más a una causa perdida.

En septiembre de 1880, una fuerza expedicionaria chilena de tres mil hombres, comandada por el general Patricio Lynch, desembarcó en la costa norte para saquear las ricas plantaciones azucareras. Su objetivo era conseguir fondos, privar al Perú de divisas extranjeras y obligarle a pedir la paz. Al final, la expedición Lynch, que fue particularmente inmisericorde al dejar tras de sí una huella de muerte y destrucción, tuvo el efecto opuesto de endurecer la resistencia peruana a los invasores.

Entretanto, ya antes, a medida que el Perú vivía esta serie de reveses militares y una crisis política cada vez más aguda, el Presidente Prado tomó la inexplicable decisión de abandonar el país en secreto el 18 de diciembre de 1879, para viajar a Europa en busca de préstamos con los cuales adquirir otros blindados más. Cuatro días más tarde, Nicolás de Piérola, su principal rival político, derribó a su gobierno e instauró una dictadura para salvar al país. Sin embargo, Piérola heredó un país debilitado por el creciente faccionalismo político y por una economía que iba colapsando. El comercio estaba estancado, los acreedores no estaban dispuestos a prestar dinero al gobierno y, lo que era peor, las islas guaneras, que seguían siendo una gran fuente de divisas extranjeras para el país, habían sido tomadas por los chilenos. Junto con la destrucción de la industria azucarera por parte del general Lynch, la pérdida de las islas perjudicó la vital capacidad y habilidad exportadora peruana para generar divisas extranjeras, y con ello sus posibilidades de proseguir con la guerra.

Además de estas dificultades económicas y financieras, los crecientes conflictos políticos entre Piérola y los depuestos civilistas minaron los esfuerzos por defender Lima del avance de otra fuerza expedicionaria chilena, que había desembarcado en diciembre de 1880 cerca de Lurín, al sur de Lima. Forzado a defender la capital con una milicia local apresuradamente organizada y los restos del ejército derrotado en el sur, Piérola no aprovechó la experiencia de muchos oficiales vueltos de la campaña meridional, de cuya lealtad política sospechaba. En vez de ello, reforzó la milicia con reclutas indígenas quechua y aimara-hablantes mal preparados, enviados y dirigidos por sus aliados, los hacendados provinciales, cuya propia experiencia militar resultó ser mínima. Al final, los diecinueve mil hombres de la improvisada milicia peruana, mal dirigida y equipada, desplegada por Piérola

a lo largo de dos extensas y mal diseñadas líneas de defensa en las afueras de Lima, no tenían muchas posibilidades contra la fuerza de invasión chilena integrada por veinticinco mil hombres mejor comandados y equipados, respaldados por artillería moderna. Ambos bandos sufrieron fuertes bajas en las decisivas batallas de San Juan y Miraflores, pero Lima cayó el 17 de enero de 1881.

Con la capital ahora en manos enemigas y sufriendo, como veremos, la depredación tanto del ejército invasor como de turbas enfurecidas, Piérola abandonó la ciudad en dirección de la sierra central para intentar organizar la resistencia peruana. Sin embargo, al abandonar Lima no dejó ningún gobierno con el cual negociar la paz, de modo que los chilenos instituyeron un gobierno títere encabezado por Francisco García Calderón, un prominente civilista, quien convocó los restos del Congreso de 1879 en el pueblo de La Magdalena, cerca de Lima. Este Congreso le ratificó como presidente interino, pero limitó su capacidad para negociar un acuerdo de paz al prohibirle la cesión de territorio nacional. Esa posición nacionalista, que coincidió con la oposición de la élite mercantil a perder el control sobre la valiosa provincia de Tarapacá, restó respaldo a Piérola en el interior y favoreció al gobierno de García Calderón. Estando la élite del país cada vez más dividida en torno a cómo seguir o poner fin a la guerra, el presidente intentó que Estados Unidos, que había sido en general favorable a la posición peruana en el conflicto, interviniera para llegar a un acuerdo de paz. Chile reaccionó aboliendo el gobierno de La Magdalena y exiliando a García Calderón a Santiago en septiembre de 1881.

Entretanto, la situación en el interior se había vuelto cada vez más confusa. En Arequipa, Puno y Ayacucho estallaron revueltas contra Piérola, quien hasta ese entonces se había abstenido de atacar a los invasores. Esto animó a declararse presidente al vicealmirante Lizardo Montero, a quien García Calderón había designado como su sucesor. Viendo que su respaldo popular se desvanecía, Piérola disolvió su gobierno y dejó el país, marchándose a Europa. De tal manera, el general Andrés Avelino Cáceres quedó como el principal organizador de la resistencia en la sierra central, donde había sido nombrado comandante guerrillero por Piérola.

Cáceres era uno de los oficiales peruanos más capaces, habiéndose distinguido ya antes al liberar un gran destacamento de tropas peruanas rodeadas y amenazadas con ser aniquiladas por el enemigo cerca de Arica. Su reputación se incrementó en la batalla de Miraflores, donde sus hombres combatieron heroicamente siendo él herido en combate. Luego de eludir a las fuerzas enemigas que ocupaban la capital, se recuperó de sus heridas y se unió a Piérola en Jauja, en abril de 1881.

Puesto a cargo de la resistencia en la sierra central, Cáceres canalizó hábilmente la furia campesina por las tropelías cometidas por el ejército invasor que había avanzado desde la costa para ocupar el rico valle agrícola del Mantaro, cerca de Huancayo. Con el botín de sus comunidades amenazado por el ejército de ocupación y siendo ellos mismos el blanco de los epítetos racistas

de los soldados chilenos, los campesinos indios respondieron prestamente al llamado nacionalista de Cáceres para organizar montoneras con las cuales defender sus queridas tierras y expulsar a los invasores. En unos cuantos meses, el ex hacendado quechua-hablante, que conocía íntimamente la idiosincrasia de sus hombres, había forjado un ejército guerrillero basado en una coalición multiclasista y multiétnica, dirigido por notables locales, que incluía a unos cinco mil campesinos mayormente indios. Esta fuerza procedió a acosar y sofocar al enemigo a lo largo de los años siguientes, inflingiéndole una gran derrota en el valle del Mantaro en julio de 1882.

Mientras Cáceres iba ganándose su reputación como «El Brujo de los Andes» en la que pasaría a conocerse como la «Campaña de la Breña», en la sierra norte el general Miguel Iglesias, un hacendado de Cajamarca que había sido ministro de guerra de Piérola y combatido heroicamente en la defensa de Lima, asumió el mando del Ejército de Resistencia del Norte, acuartelado en la ciudad de Cajamarca. Sin embargo, su defensa de esa zona contra la invasión chilena de Cajamarca a mediados de 1882 resultó ser algo tibia, y muy pronto dio su famoso «Grito de Montán», solicitando una paz negociada con Chile sin ninguna precondición territorial, a diferencia del mandato anterior del congreso de Magdalena. Dos distintos movimientos de resistencia, liderados por los hacendados Manuel José Becerra y José Mercedes Puga, surgieron en diferentes partes de Cajamarca en respuesta a esta postura «colaboracionista», mostrando así una vez más el grado de desacuerdo exiatente dentro de la élite sobre cuál era la mejor forma de hacer frente a la ocupación chilena. Ello no obstante, en diciembre de 1882, Iglesias convocó una Asamblea del Norte, conformada principalmente por sus parientes, amigos y aliados, que le «eligió» presidente y le autorizó a buscar un acuerdo de paz. Esta autorización llegó luego de fracasadas las negociaciones, mediadas por los Estados Unidos, entre el presidente Montero y García Calderón (desde su exilio en Santiago), y los oficiales chilenos.

Ante este impasse, Chile dio la espalda al gobierno de Montero y respaldó cada vez más a Iglesias, a quien ahora se enfrentaba Cáceres, el líder de la resistencia. Los «partidarios de la paz» de Iglesias fueron respaldados por los terratenientes que se oponían a que la guerra continuara en la sierra, lo que veían como una amenaza directa a sus haciendas y al control social que ejercían sobre el campesinado. A diferencia de la élite mercantil limeña, para ellos la posible pérdida de Tarapacá no tenía interés alguno, fuera de cierta vinculación sentimental, y estaban perfectamente dispuestos a sacrificarla a cambio de su supervivencia como clase dominante en la sierra (Manrique 1995: 177). En todo caso, las fuerzas chilenas que respaldaban a Iglesias lograron derrotar a Cáceres en la Batalla de Huamachuco el 18 de octubre de 1883, y procedieron a reconocer al general Iglesias como Presidente. Dos días después, ambos países acordaron el Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra.

Este acuerdo cedió la provincia de Tarapacá a Chile y estipuló que se llevaría un plebiscito a cabo en las provincias de Tacna y Arica luego de diez años, para decidir su destino. El vencedor del plebiscito debía pagarle al perdedor una indemnización de 10 millones de pesos chilenos, o su equivalente. La mayoría de las restantes claúsulas del tratado versaban sobre cuestiones referidas al guano y los nitratos, por los cuales la guerra esencialmente se había llevado a cabo. Por ejemplo, las islas guaneras fueron devueltas al Perú pero no antes de que un millón de toneladas fueran vendidas y divididas entre el gobierno chileno y los acreedores peruanos. Aunque en Perú hubo una considerable oposición al tratado por considerarse que sus condiciones eran demasiado favorables a Chile, éste fue ratificado el 10 de marzo de 1884 por una asamblea constituyente convocada por Iglesias.

Guerra civil, caos socioeconómico y reconstrucción

Al finalizar la guerra, la economía peruana estaba en ruinas. Las bajas y la destrucción eran sustanciales por donde quiera que las fuerzas chilenas hubiesen pasado. Después de la batalla de Miraflores, Lima —la perla del Pacífico de la era del guano— fue saqueada por los victoriosos soldados chilenos. Además, los vencedores echaron sal en las heridas llevándose a Santiago los cincuenta y ocho mil volúmenes de la Biblioteca Nacional. Del mismo modo, las maquinarias de la Escuela de Artes y Oficios, creada por el gobierno para volver a capacitar a los artesanos desplazados durante la era del guano, fueron enviadas a Chile. Al norte, la expedición punitiva de Lynch arrasó con las haciendas azucareras de los propietarios que rehusaron pagar fuertes cupos y envió a Chile sus valiosas maquinarias como botín de guerra. La producción azucarera, que floreció durante la tardía era del guano, descendió en dos terceras partes. El daño a los sistemas de comunicación, sobre todo al sistema ferroviario a medio construir, fue asimismo extenso.

La producción y los ingresos cayeron en todo el espectro económico. Un indicador es el Estado, cuyas rentas bajaron de alrededor de treinta y cinco millones de soles en 1879, a poco más de un millón en 1883. Las rentas del nitrato y el guano prácticamente desaparecieron, en tanto que los ingresos provenientes del azúcar, el algodón, la plata y otras exportaciones se redujeron a la cuarta parte del nivel anterior a la guerra. Con la decadencia de las exportaciones, las importaciones cayeron a los niveles de la década de 1840. La infraestructura financiera del país también se debilitó rápidamente. De los veinte bancos más grandes del país en 1877, sólo el Banco de Callao, de propiedad nacional, y el Banco de Londres, México y Sudamérica, extranjero, sobrevivieron a la debacle. La moneda fue asolada por una virulenta inflación inducida por la guerra y la devaluación, en tanto que la plata salía del país para pagar a los acreedores y las importaciones. Los ciudadanos particulares sufrieron, claro está, el peso del colapso económico

y financiero. Una tosca cuantificación del impacto en las clases sociales hecha por un observador contemporáneo estimó que las filas de los millonarios disminuyeron de dieciocho a cero, los ricos de once mil quinientos a mil setecientos veinticinco, y la clase media de 22.148 a dos mil. El número de mendigos que vagaban por el país se disparó a medio millón.

En tales condiciones, el conflicto social inevitablemente se vio exacerbado. El sistema prevaleciente de autoridad y control social, frágil en tiempos normales, se desarmó —con consecuencias a veces sangrientas— ante los ejércitos invasores o en las secuelas caóticas de la derrota. Por ejemplo, a lo largo del cinturón azucarero de la costa norte, los culís de las plantaciones reaccionaron ante el avance del ejército chileno aclamándolos como «libertadores» y saqueando las haciendas de sus amos. Una respuesta similar anterior había visto a unos mil culís chinos contratados rebelarse y abandonar las haciendas algodoneras cerca de Pisco para unirse a los invasores, a los que también vieron como «libertadores». Después de que Lima fuera tomada por los chilenos, las turbas atacaron el barrio chino y las tiendas de chinos esparcidas por la ciudad, en un espasmo de racismo y violencia. En varios pueblos a lo largo de la costa se dieron *pogroms* similares, que convertían a la población asiática en chivo expiatorio. Las mismas turbas limeñas también manifestaron su ira contra las personas acaudaladas de la ciudad, las cuales huyeron para salvar sus vidas a la embajada inglesa, en tanto que sus propiedades eran saqueadas antes de ser incendiadas.

Unos brotes similares de conflicto social, asociados con la movilización de las montoneras de Cáceres, acompañó la propagación de la guerra en la sierra central y norte. Además de atacar al ejército invasor, los campesinos también se volvieron contra algunos sectores de la clase terrateniente y confiscaron sus haciendas y ganado como botín de guerra, acusándoles de colaborar con el enemigo para así salvar sus propiedades. Los antropólogos Favre (1975) y Bonilla (1980) interpretaron estos actos, junto con el levantamiento de los culís chinos en las haciendas azucareras y algodoneras de la costa, como manifestaciones de una incipiente lucha de clases. Para ellos, la guerra minó el control social y la autoridad de la élite tradicional, liberando los resentimientos largo tiempo reprimidos de las clases populares con sus amos, en una sociedad profundamente dividida por el conflicto de clase. Es más, Favre y Bonilla sostienen que los campesinos que no tenían ninguna concepción de Estado-Nación, no lograron comprender quién era el enemigo invasor (malentendido como el «General Chile») y por lo tanto, en su confusión, no podían expresar una visión patriótica o nacionalista.

Esta última postura fue, sin embargo, cuestionada por los historiadores revisionistas Manrique y Mallon, quienes destacaron las acciones realizadas por las montoneras campesinas de Cáceres contra los invasores chilenos que amenazaban sus tierras, así como contra los hacendados «colaboracionistas». Estos autores

subrayaron que en algunos lugares, estas mismas guerrillas campesinas siguieron ocupando muchas de las haciendas de estos últimos y retuvieron su ganado una vez terminado el conflicto, considerándolo un legítimo botín de guerra, y algunos de sus jefes incluso articularon una visión política más amplia de una reforma democrática que buscaba alterar el tradicional monopolio del poder de la élite serrana. Para Mallon (1995: 213), éste era la génesis, o embrión, de un movimiento multiclasista, nacionalista y popular, con importantes implicaciones reformistas. En respaldo de su argumento, ambos historiadores señalaron que el valle del Mantaro era étnicamente homogéneo y comercialmente avanzado, con una población de comerciantes y pequeños agricultores orientados al mercado: justo la configuración socioeconómica que conducía a la formación de un proyecto alternativo de reforma popular.

La esperanza de que Cáceres pudiera respaldar estos intentos subalternos de redefinir la naturaleza de la ciudadanía y el poder político se desvaneció frente a las realidades de la política de posguerra dominada por la élite. Ahora Cáceres, que ambicionaba la presidencia, necesitaba contar con el respaldo político de la poderosa clase terrateniente a su campaña para deponer a Iglesias como presidente y jefe de la reconstrucción de la posguerra. Con este fin desconoció la ocupación campesina de las haciendas de los gamonales en Junín durante la guerra y pidió el retorno al sistema de tenencia de la tierra y al equilibrio de poder de la élite sobre el campesinado anteriores al conflicto. Aunque en algunas áreas logró negociar un compromiso entre las comunidades y los hacendados en torno a las propiedades en disputa, en otras, Cáceres y sus representantes se vieron forzados a adoptar una línea más dura. Por ejemplo, en Comas abandonó a sus antiguos aliados de las montoneras y tomó medidas para reprimir a aquellos campesinos que rehusaban cumplir su orden de restituir las tierras y ganados que expropiaron como botín de guerra. Con todo, el cumplimiento de dicha orden resultó difícil porque los campesinos, ayudados por el terreno local, lograron resistir durante algún tiempo los esfuerzos realizados por el ejército para expulsarles de las tierras de los antiguos propietarios. Tristemente, los campesinos de Comas, alguna vez vistos como valientes ciudadanos-soldados en la guerra con el invasor chileno, eran ahora pintados por el discurso oficial de la posguerra como indios atrasados, ignorantes y bárbaros.

A pesar de esta aislada resistencia popular, la estrategia seguida por Cáceres de garantizar el sistema preexistente de tenencia de la tierra consolidó el respaldo de la élite a su lucha con Iglesias. Además, una vez que los invasores chilenos se retiraron del país en agosto de 1884, Iglesias perdió el principal medio a través del cual mantener su control del gobierno. Asimismo, sufría políticamente porque en la imagen popular aparecía como alguien que había colaborado con el enemigo durante la guerra y que había cedido el patrimonio nacional en el impopular Tratado de Ancón, versión eficazmente popularizada por los seguidores de Cáceres.

En cambio, este último logró capitalizar su capacidad militar profesional y su imagen heroica como jefe de la resistencia antichilena durante el conflicto.

Sin embargo, el principal instrumento de Cáceres para deponer la presidencia de Iglesias serían sus leales montoneras, las que habían resultado tan eficaces contra los chilenos. Luego de ser inicialmente mantenidas a raya por el ejército en 1884, ellas finalmente lograron tomar la capital contando con un considerable respaldo popular en las calles de Lima, y forzaron a Iglesias a renunciar y exiliarse en diciembre de 1885. Cáceres se convirtió en presidente provisional por un año, en cuyo transcurso fundó el Partido Constitucional, bajo cuya bandera postuló y fácilmente ganó la elección presidencial subsiguiente. Entretanto, los civilistas, que se habían aliado con él contra Iglesias, se reagruparon bajo el liderazgo de Aurelio Denegri, un acaudalado comerciante y minero, mientras que Piérola y su Partido Demócrata se abstuvieron de votar. Con su elección, Cáceres se convirtió en la figura política dominante del país durante la siguiente década, un periodo de reconstrucción nacional que algunos historiadores han denominado el «segundo militarismo» (después del primero que siguió a la independencia en 1824).

Cáceres, la reconstrucción nacional y la era del segundo «militarismo», 1885-1895

Mientras Cáceres disputaba el poder con Iglesias, la guerra civil también asumió una dimensión social a comienzos de 1885 en el Callejón de Huaylas, un corredor de 150 millas de longitud entre dos cordilleras, en el departamento norteño de Ancash. El departamento seguía bajo el control de Iglesias cuando el prefecto iglesista, el coronel Francisco Noriega, anunció la reimposición de la contribución de dos soles de oro al campesinado indígena. Al sumarse a la devastación económica de la guerra, el impuesto pesó duramente sobre la población de esta región predominantemente agrícola.

Los jefes indios de los pueblos de la región, liderados por Pedro Pablo Atusparia, recurrieron al proceso normal con que se remediaban los agravios, presentando una solicitud ante el prefecto señalando su incapacidad para cumplir y solicitando una reducción y una postergación en el pago del impuesto. Aunque no hay huella alguna de que Atusparia haya tomado parte en las fuerzas guerrilleras de Cáceres que resistieron la invasión chilena, algunos de sus parientes sí lo hicieron. Noriega rechazó la petición afirmando, entre otras cosas, que su lenguaje era irrespetuoso y que constituía una amenaza velada en contra del orden establecido. Atusparia fue entonces arrestado junto con veinticuatro de sus asociados y torturado para que revelara al supuesto autor de la petición, dado que el *varayoc* o alcalde de pueblo era analfabeto y había dependido de un abogado para que redactara el documento. Parte de la tortura consistió en cortarle las

trenzas a él y a sus compatriotas, un símbolo de estatus indígena y por lo tanto una forma de castigo particularmente humillante.

Al día siguiente, una gran multitud de indios se congregó en la plaza principal de Huaraz para protestar por el arresto de sus jefes, sólo para que los asustados soldados les disparasen. Este acto encendió la movilización del campesinado, probablemente instigado por los seguidores *mistis* (no indios) de Cáceres. Al siguiente día, entre cuatro y cinco mil indios atacaron y tomaron la ciudad, liberando a Atusparia y los demás jefes, e incendiando las casas de los simpatizantes de Iglesias. En cuestión de días los principales pueblos del valle fueron atacados de la misma manera y los seguidores de Iglesias tomados como blanco.

Por su parte, los iglesistas intentaron revertir la situación en contra de sus atacantes recurriendo a una favorita herramienta discursiva criolla: acusar a la «indiada» de Atusparia de desencadenar una guerra de razas contra todos los blancos. Esta fue precisamente la táctica usada por las autoridades coloniales para ganarse la opinión pública contra Túpac Amaru II cien años antes, y tuvo el mismo efecto deseado de alarmar a Lima, donde el presidente provisional Iglesias, que seguía aferrándose al poder, rápidamente despachó fuerzas para que reprimieran el movimiento. Según Stein (1988), la táctica tuvo un efecto similar en Ancash, ya que los seguidores locales de Cáceres cerraron filas con los iglesistas alarmistas y se distanciaron del movimiento de Atusparia, convirtiendo el conflicto en principio estrictamente civil en una guerra social o de razas desde abajo.

En realidad, el objetivo del levantamiento indígena apenas si tenía motivaciones raciales, ni tampoco, según Thurner (1997), antifiscales, esto es contra el pago de impuestos, como concluyeron Kapsoli (1977) y Stein (1988). La oposición indígena a la contribución más bien se basaba en su falta de legitimidad, puesto que las condiciones de emergencia bélica en las cuales Piérola la había impuesto en 1879 ya no eran aplicables. En palabras de Thurner (1997: 422), «la contribución fue impuesta apresuradamente en un momento de severas penurias económicas por un régimen ilegítimo y colaboracionista, instalado por los chilenos y al que se oponía la mayoría de la población peruana de la sierra». Además, para ser legítimo a ojos del campesinado indígena en los años de la posguerra, todo impuesto debía conllevar la protección implícita de sus tierras por parte del Estado, tal como la vieja contribución indígena lo hiciera antes de su abolición en 1854 (o en efecto, el tributo del periodo colonial). Esta protección era considerada crucial, dado que los hacendados habían aprovechado las décadas transcurridas desde entonces cercando las tierras indígenas. Por último, las fuerzas de Atusparia se enfurecieron por la arbitraria forma en que Noriega vició el proceso tradicional de negociación, reprimiendo los intentos de los alcaldes indios de mediar en la disputa.

Al final, la Fuerza de Pacificación Norte, enviada desde Lima bajo el mando del coronel José Iraola, logró derrotar a los rebeldes en combate y forzó a Atusparia

a rendirse. Sin embargo, algunos de sus lugartenientes más radicales, dirigidos por el minero «Uchcu» Pedro Cochachín, que en realidad sí propugnaba el exterminio de todos los blancos, siguieron resistiendo hasta caer víctimas de una masiva ola represora en la cual pueblos enteros fueron arrasados por el ejército de Iraola. El número final de bajas fue de millares pero Atusparia, que intentó infructuosamente controlar a los radicales, fue finalmente perdonado y posteriormente absuelto de todos los cargos. Atusparia se reunió con el presidente electo en Lima dos días antes de la asunción del mando de Cáceres como presidente de la república, y a su hijo posteriormente se le concedió una beca del gobierno para que asistiera a la escuela. Aún más importante fue que Cáceres prometió escuelas, la liberación de la contribución y la protección estatal de las tierras comunales, promesas que posteriormente incumpliría.

Al asumir el mando el 3 de junio de 1885, Cáceres tuvo que enfrentar la abrumadora tarea de reconstruir un país arrasado por la guerra, cuya deuda externa por sí sola sumaba la enorme cantidad de entre cuarenta a cincuenta millones. Las transacciones comerciales estaban obstruidas por una moneda de papel malamente depreciada y un «sistema bancario» severamente reducido (sólo dos bancos privados sobrevivieron la guerra) incapaz de financiar la reactivación del comercio. De tal manera, los hacendados azucareros y algodoneros sobrevivientes estaban a merced del crédito de las pocas casas comerciales extranjeras, como Gibbs & Sons, W.R. Grace & Co. y Graham Rowe, que seguían siendo lo suficientemente fuertes como para efectuar negocios después de la guerra. Sus propiedades fueron severamente dañadas por la guerra y estaban afectadas por las fuertes hipotecas contraídas a finales de la era del guano, de modo que muchos no lograron sobrevivir la crisis, cediendo sus haciendas a sus acreedores extranjeros en una ola de traspasos posterior al conflicto bélico. Por ejemplo, en 1882 W.R. Grace & Co. embargó la hacienda Cartavio, propiedad de peruanos, y procedió a invertir sumas sustanciales en su expansión y modernización. Otros hacendados simplemente vendieron sus propiedades a competidores financieramente más fuertes y más eficientes. Como veremos, esta ola de concentración y penetración extranjera en la industria azucarera en la posguerra tendría importantes repercusiones políticas en el siglo XX.

La reestructuración del sistema financiero después del conflicto giró fundamentalmente en torno al cambio a una nueva moneda de patrón plata dado por el gobierno y los bancos sobrevivientes. Sin embargo, este paso era políticamente difícil de realizar puesto que una moneda fuerte era ventajosa para los acreedores, pero negativa para los numerosos deudores tales como los agroexportadores, quienes buscaban pagar sus deudas con la moneda depreciada. Es más, el público en general podía perder sustancialmente con el valor de la moneda de papel que tenía si los comerciantes se negaban a aceptarla, lo que comenzó a suceder a finales de 1887. Esta negativa produjo disturbios públicos como aquel en el pueblo

hacendado de Laredo, en la provincia de La Libertad, donde una turba atacó a los comerciantes chinos que rehusaban aceptar la moneda de papel pagada como salario a los trabajadores azucareros. El gobierno finalmente tomó medidas para estabilizar el valor de la moneda entre 1887 y 1888, recogiendo todos los billetes en circulación y cambiándolos por una nueva moneda con mejor respaldo. Tan poco valor tenían los viejos billetes que poco después de que el gobierno los retirara se encendieron hogueras por toda Lima, alimentadas con pilas de ellos. La erradicación de la vieja moneda trajo consigo un sistema financiero más estable, pero con repercusiones adversas tanto para los deudores como para los consumidores.

En un esfuerzo por propiciar la reconstrucción a nivel local y regional, Cáceres reestableció gradualmente la contribución personal indígena, suspendida durante la guerra. La renta del impuesto fue pasada a las juntas departamentales mediante la recién aprobada Ley de Descentralización Fiscal, para ser distribuida en proyectos y fines locales. Ambas medidas pueden ser vistas como favorables para la clase gamonal en la cual Cáceres se apoyó para alcanzar la presidencia, y de la cual el débil gobierno central siguió dependiendo para conservar la ley y el orden en el interior (Manrique 1995: 182). Al mismo tiempo, la disponibilidad de significativos fondos locales produjo intensas luchas entre diversas facciones de hacendados y sus seguidores por el desembolso de dichos fondos, que a menudo desembocaban en brotes de violencia y derramamiento de sangre. Estas disputas, juntamente con la persistencia del bandolerismo como consecuencia social del amplio empobrecimiento popular, provocaron que la pacificación del país fuera difícil durante los diez años de gobierno de Cáceres.

Sin embargo, el obstáculo más serio a la recuperación económica era la deuda externa, que se había agravado desde que el país declarase una moratoria unilateral de los pagos en 1876. Sin un acuerdo con los acreedores extranjeros para reestructurar la deuda, la inminente recuperación peruana impulsada por las exportaciones se demoraría por falta de acceso tanto al crédito como a la inversión extranjera. En consecuencia, a poco tiempo de asumir la presidencia, Cáceres inició extensas negociaciones con el grupo principal de tenedores extranjeros de bonos, representados por Michael A. Grace, quien llegó de Londres a finales de 1886. Tres años después, se llegó a un acuerdo final entre el gobierno y los tenedores que se conoce como el Contrato Grace, sumamente controvertido pero probablemente lo mejor que el Perú podía conseguir bajo esas circunstancias. A cambio de la cancelación de la deuda, el país aceptó conceder el control de su sistema ferroviario durante sesenta y seis años, entregar las exportaciones de guano que le quedaban y otorgar el libre derecho de navegación en el lago Titicaca, todo ello a la Peruvian Corporation, la compañía formada para ejecutar el acuerdo. También aceptó pagar ochenta mil libras anuales durante treinta y tres años y conceder dos millones de hectáreas en la selva central a la corporación.

Lo que el país ganó a cambio de estas concesiones fue la restauración del crédito en los mercados monetarios internacionales y la reconstrucción, y terminación de su seriamente dañado sistema ferroviario. Ambas cosas resultaron ser beneficiosas para el país en el corto plazo, dado que el empobrecido gobierno nuevamente pudo conseguir préstamos en el exterior, y la reparación y ampliación de la línea férrea en la sierra central a comienzos de la década de 1890, finalmente abrió los depósitos minerales extraordinariamente ricos y variados de la zona a su explotación intensiva. La apertura de estos depósitos resultó ser particularmente importante para facilitar el renacimiento de la producción de plata, que encabezó las etapas iniciales de la recuperación económica bajo Cáceres, con un valor total de casi treinta y tres millones de soles entre 1886 y 1895. Pero como los críticos del Contrato Grace rápidamente señalaron, la recuperación y el desarrollo a largo plazo del Perú nuevamente serían sumamente dependientes de la inversión y los mercados extranjeros. En consecuencia, los nacionalistas criticaron fuertemente el contrato y lucharon dura pero infructuosamente para derrotarlo en el Congreso. Fue aprobado a comienzos de 1889.

El Contrato Grace rápidamente tuvo los efectos deseados a medida que la inversión extranjera, en particular de Gran Bretaña bajo el liderazgo del mismo Michael Grace, comenzaba a fluir a la construcción ferroviaria, la industria petrolera, la minería, la manufactura de textiles de algodón y la producción azucarera. Sin embargo, este pequeño *boom* de inversiones entre 1890 y 1892 tuvo una corta duración. Su fin llegó con el estallido de la Crisis Barings, que desató la depresión internacional de 1893, y la repentina caída en el precio de la plata, lo que afectó a países como el Perú, que estaban en el patrón plata. Las inversiones de capital británicas cesaron en su mayoría, dejando el campo abierto, por el momento, a los capitalistas y financistas nacionales y, hacia finales de siglo, a los norteamericanos.

Junto con los esfuerzos por reconstituir la economía de exportación liberal, el Perú experimentó un importante estímulo en la posguerra gracias a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Ella se dio en respuesta a una moneda débil, la demanda revivida de necesidades por parte de los consumidores arruinados por la guerra, y el inesperado impacto proteccionista del arancel de 1886, aprobado fundamentalmente para elevar los ingresos. Sólo en Lima, el número de talleres de manufacturas y artesanales subió impresionantemente a medida que la recuperación se incrementaba, sumando unos ciento cincuenta en 1899 y dando empleo posiblemente a unos seis mil trabajadores.

Mientras el Perú luchaba por recuperarse económicamente, sus políticos e intelectuales, en un reflejo de la sombría atmósfera de críticas e introspección de la posguerra, buscaban explicar las causas de la debacle militar del país. Al formular esta crítica nacional también debatieron los remedios y el curso apropiado para

la reconstrucción y el desarrollo del Perú. Cáceres encontraba la explicación de la derrota en la ausencia de unidad social y política. Ella había permitido que los «oportunistas y colaboradores», que él asociaba con la perniciosa avaricia de los burócratas y capitalistas, minasen las posibilidades peruanas de victoria. Al negociar el Contrato Grace, Cáceres, al igual que Balta cuando el *affaire* Dreyfus, parecía estar despreciando a los capitalistas locales y prefiriendo a las empresas extranjeras en la búsqueda de la reconstrucción nacional.

Otros, como el escritor Ricardo Palma, cuyas simpatías políticas estaban con Piérola, la Iglesia y la oligarquía terrateniente tradicional, atribuían la derrota a la élite exportadora civilista y al atraso de la población india. De otro lado, en las filas civilistas apareció una respuesta variada y erudita con una nueva generación de intelectuales surgidos en los claustros de la venerable Universidad Mayor de San Marcos. Influida por los postulados del positivismo, esta generación revigorizó las filas del civilismo justo cuando la orientación del partido pasaba de asumir los intereses de la vieja plutocracia de la preguerra, a defender los de una nueva élite exportadora nacida con la recuperación económica de la posguerra.

El núcleo de esta generación comprendía a Javier Prado, filósofo e hijo del ex presidente; el sociólogo Mariano H. Cornejo, el profesor de derecho Manuel Vicente Villarán y el abogado y legislador progresista José Matías Manzanilla. Eran hombres imbuidos de las doctrinas racionalistas y materialistas del positivismo comtiano, que alababa la ciencia, el racionalismo, el conocimiento práctico, por oposición al escolasticismo, y el trabajo duro y la diligencia como la vía al desarrollo. En lo que respecta a la guerra y a las debacles nacionales del pasado, culpaban a los legados opresivos y retrógrados del pasado hispano, la Iglesia inclusive, cuyos valores y prácticas tradicionales —según ellos— habían obstaculizado el progreso. Aunque rechazaban el pasado hispánico, eran optimistas en cuanto al futuro, al que concebían dirigido por una élite progresista e ilustrada. En cuanto a la población india creían que su falta de asimilación había contribuido a la desunión y la derrota nacional, argumentando que con la educación y el progreso material los indígenas podrían, con el tiempo, ser integrados a la corriente principal del país.

Una crítica más radical y un discurso alternativo surgieron con la acerba pluma y oratoria del iconoclasta Manuel González Prada (1848-1918). Nacido en una aristocrática familia limeña de origen español y educado en el renombrado Seminario de Santo Toribio, González Prada sintió una profunda humillación con la resonante derrota militar peruana. Después de la guerra organizó el *Círculo Literario*, cuyos miembros debatían temas no sólo de literatura, sino también cuestiones políticas y económicas relacionadas con la reconstrucción y la unificación nacional, a la cual estaban dedicados.



Manuel González Prada (1848-1918), ensayista, escritor y radical político que ejerció gran influencia en la generación de la reforma de 1919. Reproducido con permiso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

Posteriormente, en 1891, poco antes de partir a Europa, González Prada convirtió el *Círculo* en un partido político al que llamó *La Unión Nacional*. El partido originalmente adoptó una serie de ideas civilistas (de hecho, González Prada había formado parte del civilismo antes e inmediatamente después de la guerra), tales como la necesidad de promover la inmigración europea como un medio para «mejorar las razas». Sin embargo, después de asimilar ideologías tan diversas como el positivismo, el romanticismo, el socialismo y el anarquismo mientras se hallaba en Europa, entre 1891 y 1898, el partido pasó a expresar

un discurso alternativo, radical, antioligárquico y populista, que habría de influir enormemente en futuros reformadores peruanos como Guillermo Billinghurst, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre.

González Prada atribuyó la derrota peruana a la indiferencia de la mayoría de la población indígena respecto a la guerra. Debido a su aislamiento y falta de educación, los indios no sentían obligación alguna de combatir por la nación, un concepto que según él no entendían. Dijo así que «[l]a mano de Chile despedazó nuestra carne y machucó nuestros huesos: pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre» (citado en Kristal 1987: 112-13 [1991: 113]). González Prada atribuyó este espíritu de servidumbre al pasado colonial español, así como al atraso e ignorancia de la aristocracia terrateniente. Fue esta aristocracia autócrata y ociosa, junto con sus corruptos colaboradores —los jueces, gobernadores y sacerdotes locales, que formaban lo que él llamó la «trinidad embrutecedora»—, la que había explotado y abusado del indio durante siglos. La referencia a los curas también resaltaba el firme anticlericalismo de González Prada y el hecho de que él consideraba que la Iglesia, si no el mismo catolicismo, era responsable de la condición de atraso de los indios, y por tanto de todo el país. Si bien en un principio confiaba en que la condición del indígena podía mejorar con el progreso material, los avances en el transporte y con la educación, su optimismo pronto se desvaneció y se convirtió en pesimismo. Luego de retornar al Perú en 1898 comenzó a adoptar posturas anarquistas y a incitar a la población india a que recurriera a la violencia para romper con sus cadenas de opresión. Curiosamente, a pesar de su énfasis en la necesidad de la redención del pueblo indio, González Prada en realidad jamás visitó la sierra para observar sus condiciones de primera mano.

Sin embargo, la atención que prestó a los indios sirvió para ayudar a revivir el indigenismo, un movimiento literario y cultural liberal de base urbana que se remontaba a la década de 1840, que reivindicaba el mejoramiento moral y material de los indios. El movimiento fue asimismo estimulado por la publicación de las novelas de la escritora cuzqueña Clorinda Matto de Turner (1854-1909), en particular su famosa novela *Aves sin nido* (1889), y posteriormente por la fundación de la Asociación Pro-Indígena. El repentino renacimiento del indigenismo en Lima y otros lugares fue también una respuesta al renovado brote de levantamientos campesinos en la posguerra, como la sangrienta rebelión de Atusparia de 1885, y el continuo tumulto del nacionalismo campesino en Junín, que se remontaba a la guerra misma.

Entretanto, el control político-militar que Cáceres tenía del país perduraba más o menos sin mengua. Impedido constitucionalmente de ser reelegido en 1890, Cáceres eligió como su sucesor a un buen lugarteniente, el coronel Remigio Morales-Bermúdez. A cambio, esperaba que el favor le fuera devuelto cuatro años

más tarde. Sin embargo, Morales-Bermúdez resultó ser un líder indeciso y falleció inesperadamente en abril de 1894. Insatisfecho con el ascenso de un vicepresidente civil al cargo, Cáceres llevó a cabo un golpe militar a favor del más flexible segundo vicepresidente, otro militar, que se ofreció a preparar su «reelección» en 1895. Esto no impidió que los principales partidos políticos se disputaran las posiciones para la venidera elección presidencial. Mientras que Cáceres, con el respaldo de su aliado presidencial, se preparaba para efectuar su propia «reelección», los civilistas y demócratas, cuya mutua enemistad perduraba desde que Piérola preparase el Contrato Dreyfus en 1869, acordaron una histórica reconciliación. La coalición subsiguiente preparó el escenario para que Piérola retornara de su exilio en Chile y convocara un movimiento popular de amplia base contra la planeada reelección fraudulenta de Cáceres, conocida como la «Revolución de 1895».

El «caudillo demócrata», como se le llegó a llamar, inició ahora la fase más productiva de su larga y controvertida carrera. Nacido en 1839 en Arequipa, hijo de un funcionario colonial hispano y de una madre criolla socialmente prominente y devotamente religiosa, Piérola recibió la mejor educación disponible en su época. A los catorce años ingresó al Seminario de Santo Toribio de Lima, donde su padre esperaba que se preparara para el sacerdocio. Sin embargo, después de la muerte de sus padres en 1857, el apuesto y enérgico —aunque impetuoso— joven fue atraído por el rápido ritmo del mundo comercial de Lima durante la era del guano. Pronto se vio igualmente atraído a la política conservadora, respaldando a caudillos como Vivanco, Pezet, Echenique y Balta. En 1869 se convirtió en ministro de hacienda de este último y diseñó el célebre Contrato Dreyfus, que le ganó el rechazo de la plutocracia liberal civilista.

El conservadurismo de Piérola fue moldeado por las tradiciones católicas e hispanas que insuflaban la vieja ciudad colonial de Arequipa, sus tempranos años familiares y la vida en el seminario. Él creía que el catolicismo y una firme mano autoritaria a la cabeza del Estado central eran los ingredientes políticos claves necesarios para mantener unida una sociedad geográficamente dispar, heterogénea y sumamente basada en las clases. Si algún caudillo popular podía ser la encarnación de semejante visión política era el mismo Piérola, que poseía los atributos requeridos: un porte aristocrático y elegante, una intensa devoción religiosa, una fe inquebrantable en su propio destino personal y una personalidad carismática que atraía a las masas.

Las condiciones para el asalto popular al poder efectuado por Piérola en 1895 estaban en la crisis económica de 1893-1894, parte de la depresión mundial que, entre otras cosas, desató el colapso del precio internacional de la plata, el motor principal de la recuperación de la posguerra. Esto hizo que el valor del sol peruano disminuyera de treinta y uno a veinticuatro peniques, una devaluación del treinta y cinco por ciento. Los subsiguientes problemas populares, sobre todo

entre los trabajadores y artesanos urbanos, alimentaron el llamado a las armas de Piérola contra un Cáceres cada vez más impopular. También persuadieron a los civilistas de retirarle su respaldo y de que aceptaran formar una coalición con Piérola y los demócratas para poner fin a la década de dominio militar del «héroe de La Breña». En un asalto breve pero sangriento sobre Lima bajo un manto de espesa neblina, las tropas irregulares de Piérola lograron derrotar a Cáceres en un combate casa por casa y tomar Palacio de Gobierno a pesar de las fuertes bajas sufridas por ambos bandos. El viejo héroe de guerra, que había permanecido demasiado tiempo en el poder, recibió un salvoconducto que le llevó por las calles regadas de cadáveres de la capital rumbo al exilio.

Capítulo VIII

La República Aristocrática, 1895-1919

El Perú ingresó ahora a un periodo singular en su historia moderna, signado por un raro consenso político, una amplia estabilidad política y un crecimiento y desarrollo autónomos, por lo menos en un principio. Conocido por lo general en la historiografía peruana como la «República Aristocrática», habría de extenderse, con breves interrupciones, desde 1895 hasta después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1919. El consenso se derivaba en parte del pacto entre los partidos Civil y Demócrata, que tenía grandes ventajas para ambos bandos, siendo una de los más importantes la unión de fuerzas para derribar al opresivo gobierno de Cáceres. Por su parte, Piérola comprendió que sin el respaldo de la emergente oligarquía civilista sería imposible gobernar. En cuanto a los civilistas, Nicolás de Piérola pronto pasó a ser su «hombre a caballo», el caudillo andino carismático, capaz de convocar un amplio respaldo popular y pacificar el país.

Sin embargo, en el largo plazo, los civilistas fueron los principales beneficiarios políticos de esta alianza. Luego de que los cuatro años de gobierno de Piérola llegaran a su fin en 1899, se sobrepusieron astutamente a sus rivales demócratas al obtener el control de puestos gubernamentales claves y en particular del aparato electoral, lo que les permitió alcanzar la presidencia en 1900. De ahí en adelante lograron conservarla hasta 1919 mediante la manipulación electoral y otras tácticas, salvo por un breve intervalo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial.

Bajo el gobierno de Piérola, el país logró un grado de modernización, diversificación y una expansión económica impresionantes, provocadas por una conjunción inusualmente favorable de factores. En primer lugar, el nuevo consenso político no sólo involucró a los dos partidos políticos más importantes, sino que abarcó una amplia gama de intereses económicos. Ellos incluían los de los hacendados azucareros de la costa, los de emergentes industriales y los de los comerciantes, así como los de las élites comerciales y terratenientes de distintas

partes de la sierra. Todos coincidían en la necesidad de crear un clima propicio para las inversiones y mecanismos de control social para las masas.

En segundo lugar, la desaceleración de la inversión extranjera después de 1892 hizo que se tuviera que volver hacia la acumulación de capital doméstico para sustentar la recuperación económica. La demanda internacional de una amplia gama de materias primas peruanas se levantó a medida que Occidente se recuperaba de la depresión de 1893-1894 e iniciaba un periodo de expansión industrial. Los exportadores peruanos, ayudados por una tasa de cambio favorable luego de la devaluación del sol en 1892, lograron ampliar la producción y la venta de productos agrícolas tales como azúcar, lana, algodón y café, así como de minerales industriales como cobre, zinc y plomo. Las ganancias fueron entonces reinvertidas en la modernización, como normalmente sucede, para incrementar la eficiencia y la producción.

Sin embargo, en este caso las ganancias también fueron reinvertidas en las manufacturas locales, a medida que los empresarios descubrían un creciente mercado interno debido al alza de la demanda de bienes locales por parte de los trabajadores asalariados, y de bienes de capital, ambos en el sector exportador. Por ejemplo, ya a mediados de la década de 1890 había 24.000 trabajadores azucareros y 66.600 mineros cuyos salarios alimentaban la demanda de consumo popular, abastecida cada vez más por fabricantes locales. Del mismo modo, los bienes de capital para la construcción de ingenios azucareros y fundiciones para la plata y el cobre eran manufacturados en fundiciones locales, al igual que los equipos con que extender los ferrocarriles hacia las zonas mineras.

Muchos prominentes hacendados azucareros, mineros y comerciantes exportadores estuvieron en la primera línea de esta tendencia manufacturera. Por ejemplo, el hacendado azucarero José Pardo, quien en breve llegaría a ser presidente, igual que su padre antes que él, fundó y administró la fábrica textil limeña La Victoria a partir de 1897. Ese mismo año, el empresario Eulogio Fernandini desarrolló una de las más grandes fundiciones de la sierra central con maquinarias arduamente llevadas en recuas de mulas a su hacienda Huaraucaca. Pardo, asimismo, estuvo involucrado en la fundación de una serie de bancos y compañías de seguros que movilizaron y dirigieron capital a las manufacturas, y cuyas juntas directivas incluían a muchos exportadores prominentes.

Podemos cuantificar de diversas formas esta poderosa, aunque relativamente breve, alza en la industrialización por sustitución de importaciones de finales de siglo. El número de empresas urbanas que fabricaban bienes de consumo masivo tales como cerveza, velas, jabón, cigarrillos, zapatos, camisas, muebles, vinos y textiles se incrementó en sesenta por ciento entre 1890 y 1902. Muchas de ellas eran firmas artesanales de escala relativamente pequeña abiertas por inmigrantes extranjeros, ítalo-peruanos en particular, cuyos antepasados emigraron a Lima

entre 1840 y 1870, antes de la Guerra del Pacífico de 1879. En forma similar, la participación de los bienes de consumo importados cayó de cincuenta y ocho por ciento en 1891-1892, a cuarenta y nueve por ciento en 1900 y treinta y nueve por ciento en 1907. La caída fue especialmente marcada en los textiles —más de cincuenta por ciento— entre 1897 y 1907. Ella se debió a la apertura de cinco nuevas fábricas textiles de algodón en una sola década —de 1892 a 1902—, financiadas y administradas por industriales nativos como Pardo. La producción local de textiles subió de menos del cinco por ciento en 1890, a cuarenta y dos por ciento en 1906. La producción comprendía principalmente telas más baratas o de tipo popular, lo que indica la naturaleza de masas de la demanda local. En general, para 1899 había tal vez unas 150 fábricas modernas que empleaban unos seis mil trabajadores; unos cuantos años antes, los industriales habían organizado su propio grupo de interés —la Sociedad Nacional de Industrias— a instancias de Piérola.

Una red financiera ampliada que incluía bancos y otras instituciones crediticias facilitó la movilización y el flujo de capital, tanto al sector exportador como al manufacturero. El capital bancario se cuadruplicó en una década, y en 1896 se abrió una bolsa de valores. El nuevo sistema financiero fue tan exitoso que en 1898 el gobierno logró financiar su déficit presupuestario íntegramente con la emisión de nuevos bonos.

El programa económico y fiscal de Piérola mejoró la tendencia hacia un crecimiento y desarrollo autónomos, así como a la centralización y mayor eficiencia del Estado. Por ejemplo, Piérola elevó los aranceles para proteger las nacientes industrias, e incentivó la construcción de caminos en el interior como un acicate al comercio, al autorizar la movilización de cuadrillas de trabajadores de las comunidades locales de indígenas. Además, el sistema tributario fue reorganizado por completo, abandonándose el viejo tributo indígena y estableciéndose una nueva agencia recaudadora estatal en reemplazo de la antigua práctica de arrendar el cobro de los impuestos. La abolición de la contribución personal buscaba minar la base de las rentas de las Juntas Departamentales descentralizadas de Cáceres. En su lugar, Piérola estableció un nuevo impuesto a la sal en 1896, un gravamen regresivo que golpeó a las familias campesinas con tanta dureza como el antiguo tributo, pero cuya renta ingresaba ahora directamente al tesoro nacional. El nuevo impuesto provocó una serie de protestas y resistencia popular, sobre todo en lugares como las provincias de Huanta y La Mar, donde las violentas protestas campesinas fueron reprimidas brutalmente por las autoridades (Manrique 1988; Husson 1992).

Asimismo, Piérola creó un ministerio de fomento, que inmediatamente emprendió la revisión de la anacrónica legislación que regía el comercio y la minería, parte de la cual se remontaba a más de un siglo antes, a las reformas borbónicas

del tardío siglo XVIII. Ansioso por fomentar una cooperación más estrecha entre el Estado y la sociedad civil, Piérola estimuló a los exportadores y a los mineros a que siguieran a los industriales y organizaran su propia Sociedad Nacional Agraria y la Sociedad Nacional de Minería. Irónicamente, en sus políticas económicas parecía ahora ser más un capitalista civilista modernizador que un tradicionalista católico e hispanófilo.

Por último, Piérola emprendió la reestructuración de las fuerzas armadas, una institución que había arrojado una larga sombra sobre el curso político del país desde la independencia. De hecho, en tanto que se trataba de una de las pocas instituciones relativamente coherentes en el transcurso del siglo XIX, ella fue el Estado mismo, como dijera Sinesio López (1978: 1000). La guerra y la dictadura de Cáceres tuvieron el efecto de engrosar las filas de los militares y, después del breve interludio del primer civilismo en la década de 1870, de devolverle su papel preeminente como árbitro de la política nacional. Como segundo civil en ocupar la presidencia en todo el siglo, Piérola era sumamente consciente de la necesidad de poner bajo control a este Leviatán andino, aunque sólo fuera para su propia supervivencia política. En consecuencia, el nuevo Presidente redujo el tamaño del ejército regular e importó una misión militar francesa para que reorganizara y profesionalizara la institución. Un resultado importante de este esfuerzo fue la fundación de una nueva academia militar en Chorrillos, en las afueras de Lima, para que preparara al cuerpo de oficiales en los métodos y técnicas más novedosas de la guerra moderna.

Aunque el Perú experimentó un periodo de progreso económico y estabilidad política durante el mandato de Piérola, el país siguió siendo gobernado en forma mayormente autocrática, paternalista y nada democrática. Por ejemplo, la enmienda constitucional de 1890, que estipulaba que los varones debían saber leer y escribir para votar, fue confirmada por el Congreso en 1895, argumentando que «el hombre que no sabe leer ni escribir no es, ni puede ser, un ciudadano en la sociedad moderna» (citado en Mallon 1995: 275). Dicho en otras palabras, la comisión original del senado sostuvo que «no es del interés nacional que muchos participen en las elecciones, sino más bien que quienes participen sí lo hagan bien», una receta perfecta para el surgimiento del gobierno oligárquico que sería la característica de la «República Aristocrática».

Basadre indudablemente tiene razón al pensar que el popular y carismático Piérola perdió una excelente oportunidad para integrar a las clases bajas al proceso político nacional. Es muy probable que lo haya hecho porque, al igual que los señores del Perú colonial, él se veía paternalistamente a sí mismo como el padre de su pueblo jactándose, a menudo, de que «cuando las personas están en peligro, vienen a mí». Más recientemente, Mallon (1995) ha mostrado cómo tanto Cáceres como Piérola consolidaron el nuevo Estado moderno aliándose abiertamente con

sectores de la clase hacendada en diversas regiones del país, y reconstruyendo las relaciones jerárquicas de autoridad y de clientelaje desgarradas durante las guerras externa y civil de la década de 1880. Donde dicha estrategia fracasaba, la represión y la exclusión, antes que la negociación y la incorporación, pasaban a ser el modus vivendi del Estado, enmascarado como invariablemente estaba en un discurso oficial que «otrizaba» a las clases subalternas y a sus aspiraciones de justicia y de una mayor participación política.

No obstante el incremento de su autoridad y de su control, el gobierno central siguió dependiendo, a pesar de todo, del poder regional de los gamonales para conservar el orden en las provincias. Estando el descontento campesino momentáneamente apaciguado tras las guerras, los poderosos clanes de terratenientes de la sierra movilizaron sus «clientes» y lucharon por el poder local. Los vencedores no solamente lograron controlar los cargos locales sino que además fueron «elegidos» al Congreso, en donde respaldaban al gobierno nacional a cambio de un virtual cheque en blanco para gobernar como les placiera en sus localidades o feudos particulares. Este quid pro quo entre el Estado central y las facciones terratenientes locales fue un rasgo definidor del sistema gamonal andino.

Hasta cierto punto, la economía de la sierra participó de la recuperación posbélica del país —por lo menos inicialmente— liderada por la expansión de la minería de plata en el centro durante la década de 1890. Esta actividad logró revivir rápidamente después de la guerra, y nuevos depósitos fueron descubiertos y explotados por los empresarios nativos en Casapalca, en la década de 1880, y en Morococha, en la de 1890. Para esta última fecha, la producción de plata había recuperado su nivel anterior al conflicto, pero el colapso del precio de dicho metal en 1892 y la suspensión de su acuñación por parte de Piérola en 1897, afectaron adversamente las ganancias de la industria. Sin embargo, a comienzos del nuevo siglo la exportación de este metal entró en un periodo de constante decadencia.

La demanda internacional de cobre eclosionó justo cuando las exportaciones de plata comenzaban a caer, a consecuencia de la segunda Revolución Industrial de Occidente. Al igual que la plata, la minería de cobre en el Perú estuvo inicialmente controlada localmente. Sin embargo, esta situación habría de cambiar drásticamente poco después del cambio de siglo, pues una vez que se completó el ferrocarril central a la Oroya en 1893, los ricos depósitos de cobre de Morococha y Cerro de Pasco, así como la fundición de Casapalca, se hicieron accesibles al desarrollo en gran escala.

Estos procesos prepararon el escenario para la repentina aparición, en 1901, de un poderoso sindicato de los EE. UU., capitalizado por las fortunas de personas como los Vanderbilt, Hearst y Morgan, que empequeñecían las dimensiones de los capitales locales e incluso rivalizaban con la capacidad financiera del mismísimo gobierno peruano. En poco tiempo, la nueva corporación estadounidense compró

la mayor parte de las minas poseídas localmente en Cerro y Morococha, y luego adquirió la principal fundición de Casapalca a finales de la Primera Guerra Mundial. La toma y rápida expansión de la industria cuprífera peruana, antes controlada localmente, por parte de la Cerro de Pasco Copper Corporation, marcó el inicio de una ola de penetración norteamericana en la industria minera que se extendió a lo largo del primer cuarto del siglo XX. De este modo, para finales de la Primera Guerra Mundial, las ricas minas de cobre de Cerro Verde, al sur, habían sido adquiridas por Anaconda, y diversos depósitos de cobre, plata y oro al norte fueron comprados por la American Smelting and Refining Company.

Según los historiadores económicos Thorp y Bertram (1978: 85), a diferencia de lo que usualmente se cree, no parece que los mineros nativos se hayan visto forzados a vender al capital extranjero ya sea por una crisis económica o por su incapacidad para desarrollar sus posesiones. Más bien, la decisión de vender parece haber sido dictada exclusivamente por el precio y las distintas evaluaciones hechas por los intereses mineros locales y los de los EE. UU. sobre el potencial futuro de la industria. Es más, los empresarios mineros nacionales que decidieron vender amasaron una gran e inesperada ganancia financiera con la venta de sus acciones.

Una pregunta sumamente compleja es si la toma extranjera de la minería fue buena o mala para el país en términos económicos y en el largo plazo. La minería de cobre probablemente se expandió con mayor rapidez gracias a la fuerte inversión de capital y tecnología extranjeras, pero la repatriación de las utilidades atrofió el desarrollo local. En el caso de Cerro de Pasco, el valor de retorno para el periodo comprendido entre 1916 y 1937 alcanzó entre el cincuenta y el sesenta por ciento de las ganancias, una cifra sorprendentemente elevada en Latinoamérica, en comparación con otras compañías del sector extractivo y propiedad de extranjeros (en Chile, la cifra para las tres compañías de cobre más importantes fue de apenas treinta a cuarenta por ciento). Con todo, el dominio de la minería por parte de compañías extranjeras como la Cerro inhibió el desarrollo de la experiencia y la administración locales, e incrementó el nivel de dependencia económica general, debido particularmente a la ausencia de regulaciones gubernamentales.

Dicho esto, no puede negarse que hubo algunos importantes efectos multiplicadores debidos a la expansión regional de la minería de plata y cobre, por lo menos en un principio, cuando el control local predominaba. De hecho, la expansión estimuló cierto grado de producción agraria y comercio a nivel local en la sierra central, así como el cultivo de café a lo largo de la ceja de selva, en las laderas orientales de los Andes. Las exportaciones de café se cuadruplicaron entre finales de la Guerra del Pacífico y 1902, también incentivadas por una fuerte demanda internacional. Aunque parte de las ganancias procedentes de estas tres exportaciones salieron inevitablemente de la región y fluyeron hacia Lima y el

extranjero, quedaban las suficientes para generar una producción y comercio locales articulados con el sector urbano, y en general para vigorizar la economía regional. En consecuencia, una nueva élite regional comenzó a configurarse en el centro, conformada tanto por mineros y hacendados progresistas, como por comerciantes y arribistas recién llegados de la costa.

A medida que las fuerzas del mercado se aceleraban en la sierra central, los hacendados y empresarios de mentalidad progresista buscaron ampliar sus tenencias bajo cultivo y/o introducir relaciones capitalistas de producción para incrementar la producción y maximizar las ganancias. Este crecimiento económico y demanda de mercado llevó a la expansión de las haciendas y al proceso concomitante de cercamiento de las posesiones de campesinos y comunidades. Manrique (1995: 197) sostiene que estas últimas eran vulnerables a dicho proceso tanto en el centro como en el sur, porque el conflicto con Chile había drenado sus hombres y buena parte de la producción agrícola para mantener el esfuerzo bélico. En consecuencia, muchas comunidades quedaron expuestas a la usurpación de tierras por parte de los latifundistas competidores durante la recuperación de la posguerra, que estuvo encabezada por el marcado incremento de la exportación de lana.

Por ejemplo, el volumen de lana de alpaca y oveja se incrementó considerablemente: de las 2.624 toneladas métricas producidas en la década posterior a la guerra, se alcanzó un máximo de 5.286 en la segunda década del nuevo siglo. Dado que abarcaba tanto al sector moderno como al tradicional de la economía, el modo de producción del comercio lanero del sur fue único. El grueso de la producción, principalmente lana de ovejas y alpacas de gran calidad, provenía de los pastores campesinos representantes del sector tradicional del altiplano, articulada por firmas comerciales con base en Arequipa que exportaban el producto a través del sector moderno, fundamentalmente a importadores británicos. Las haciendas de gran escala en el sector moderno asimismo producían montos significativos de lana de oveja de baja calidad, completando lo que esencialmente era una estructura triangular de producción e intercambio, que incluía a campesinos, comerciantes y hacendados. Estos dos últimos grupos conformaban la élite económica del sur y tenían unas cuantas conexiones con las élites regionales que se iban desarrollando en el centro y norte.

Paralelamente al incremento constante del precio internacional de las exportaciones después de la guerra, hubo un alza en el valor de los pastizales. Esta situación desencadenó un proceso de concentración y consolidación de tierras, ya que tanto el número como el tamaño de las haciendas se multiplicó a expensas de las tenencias comunales indias y de los minifundistas. En su afán de conseguir ganancias, los latifundistas recurrieron a la cobranza coactiva de deudas, así como a la compra, para incrementar el tamaño de sus haciendas. De hecho, el proceso de endeudamiento y cercamiento fue tan difundido desde finales de la Guerra del

Pacífico hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que hubo una expansión verdaderamente dramática en el número de haciendas en el altiplano de los departamentos de Cuzco y Arequipa. Por ejemplo, Manrique (1986) anota que el número de haciendas en Puno se incrementó de 705 a 3.219 entre 1876 y 1915. De igual modo, Jacobsen encontró que en la provincia de Azángaro, el número de latifundios subió de 110 en la década de 1820, a entre 250 y 300 en 1920, principalmente durante el periodo de descontento civil y perturbación económica posterior a la guerra, en la década de 1880.

Es más, este proceso no sólo implicó que un gran número de campesinos indígenas perdiera acceso a sus tierras, ya fuera en comunidades o en minifundios, sino también que las relaciones tradicionales de clientelaje entre hacendados y campesinos se hicieran tensas debido a los actos altaneros de los primeros en su búsqueda inescrupulosa de ganancias. Como veremos, ambos hechos contribuyeron juntamente al estallido de una ola de violentas revueltas campesinas que se propagó por la sierra sur durante la segunda década del siglo XX.

A pesar de que la recuperación y expansión de algunas exportaciones como la plata, el cobre, el café, la cocaína y la lana en la posguerra tuvieron un impacto residual en las economías regionales de la sierra, su desarrollo económico global palidecía en comparación con el crecimiento de las exportaciones costeras, que se dispararon durante las dos primeras décadas del siglo XX. De hecho, a fines de la Primera Guerra Mundial, el grueso de las exportaciones totales peruanas se concentraba en la costa y consistían, sobre todo, en azúcar (cuarenta y dos por ciento), algodón (treinta por ciento) y petróleo (cinco por ciento). Al mismo tiempo, el capital extranjero comenzó a predominar sobre los capitales locales, a medida que la producción de cobre, plata y petróleo caía bajo el control foráneo, en tanto que la de azúcar, algodón y leña permanecía en manos nacionales. Esta tendencia fue particularmente desfavorable después de 1920, dado que el volumen y las ganancias de las exportaciones en los sectores mineros dominados por extranjeros tendieron a subir notablemente, en tanto que la expansión y ganancia de las mismas se desaceleraron en el azúcar, el algodón y las lanas.

El lado bueno de estas tendencias fue que en la década de 1920 el Perú tenía un sector exportador mucho más diversificado que el de sus vecinos que comprendía cinco o seis productos importantes. Esta situación hizo que el país fuera relativamente más resistente a las caídas sectoriales del mercado internacional. En efecto, aunque la demanda de algunas exportaciones podía descender, otras subían, ejerciendo un «efecto cojín» en la economía global. Lo malo de esta estructura exportadora era el alto grado de control extranjero y la consecuente repatriación de las utilidades, en lugar de su reinversión en el país.

El principal cultivo de exportación de la costa era el azúcar, que se había expandido considerablemente en la década de 1860, pero que se vio afectada a

comienzos de la década de 1880 por el impacto de la Guerra del Pacífico. Una fase de consolidación y concentración tuvo lugar a medida que la industria luchaba por recuperarse después de la guerra. Algunos hacendados quebraron y sus propiedades fueron compradas o tomadas por sus acreedores, los hacendados sobrevivientes o nuevas familias de inmigrantes (por ejemplo, la familia italiana Larco y la alemana Gildemeister) con acceso a fuentes externas de capital, como sucediera en el valle de Chicama, cerca de la ciudad de Trujillo, en la costa norte.

La producción encaminada fundamentalmente hacia la exportación se disparó a mediados de la década de 1890 (en ochenta y tres por ciento en unos diez años) y nuevamente después del estallido de la Primera Guerra Mundial (en setenta y siete por ciento), de modo que tal que el azúcar pasó a ser la mercancía de exportación más importante del país. Al mismo tiempo, la industria tendió a concentrarse en la costa norte, alcanzando el setenta y cinco por ciento de la producción total a comienzos de la década de 1920. Debido la falta de estaciones marcadas, las condiciones climáticas son extremadamente favorables en dicha zona, lo que también permitió a los plantadores iniciar economías de escala, contribuyendo, a su vez, al proceso de concentración de la tierra.

Es más, la industria desarrolló eslabonamientos —por lo menos en un principio— con el resto de la economía mediante los progresos tecnológicos y la formación de capital. Sin embargo, estos eslabonamientos se dieron únicamente en el corto plazo, dado que después de 1900, la creciente mecanización mantuvo la fuerza laboral constante a lo largo de las dos décadas siguientes, y los pagos hechos al gobierno a través de los impuestos siguieron siendo pequeños. Además, la formación de capital a partir de las ganancias elevadas, en particular durante la Primera Guerra Mundial, fue reinvertida cada vez más en la expansión de la capacidad exportadora con el errado supuesto de que el *boom* en la demanda extranjera ocurrido durante la guerra persistiría. Un sustancial capital azucarero fue retenido, asimismo, en bancos de ahorros extranjeros durante el conflicto. En consecuencia, la proporción del valor de retorno del azúcar cayó en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, pero el exceso de oferta mundial y la baja en los precios durante la década de 1820 hizo que las ganancias y la formación de capital disminuyeran.

El algodón fue otro importante cultivo de exportación de la costa, que tuvo mayores eslabonamientos de demanda que el azúcar. La estructura de la industria algodonera difería del caso de la industria azucarera en que se trataba de una industria estacional que dependía de la aparcería, denominada yanaconaje (Peloso 1999). Los cultivadores de algodón daban tierras a estos aparceros a cambio de la mitad de cada cosecha, y contrataban trabajadores estacionales migrantes para que trabajaran sus mejores y más fértiles campos. Aunque los pequeños campesinos independientes también cultivaron algodón, la industria estaba dominada por

los grandes hacendados puesto que la irrigación era crucial para el cultivo. Los comerciantes, sobre todo las casas comerciales británicas como la Duncan Fox y Graham Rowe, llegaron a controlar la comercialización del algodón, brindando los préstamos necesarios mediante un sistema conocido como habilitación.

El cultivo y la exportación del algodón se expandieron rápidamente a lo largo de la costa después de la Guerra del Pacífico. El periodo de mayor crecimiento fue entre 1905 y 1920, cuando alcanzó en promedio el diez por ciento anual. La producción para el consumo interno también fue importante, a diferencia del azúcar, luego del surgimiento de la industria textil algodonera en Lima. Por ejemplo, la producción destinada a las fábricas limeñas subió del diecisiete por ciento en 1901 al veinticuatro por ciento en 1904. El cultivo de algodón tendió a concentrarse en Cañete e Ica, en la costa sur, donde desplazó al azúcar y los viñedos como el cultivo comercial preferido. La industria recibió un considerable estímulo entre 1908 y 1912 cuando el cultivador Fermín Tangüis produjo una planta resistente a las enfermedades que estaba especialmente bien adaptada a las condiciones ecológicas de la costa central y sur. Las áreas dedicadas a la agricultura del algodón siguieron creciendo gracias a la introducción de la variedad tangüis, así como a la caída en el precio del azúcar después de la guerra, sobre todo en el departamento de Lima, donde desplazó a esta última como cultivo comercial.

El valor de retorno del algodón resultó ser significativo, dado que la parte del león de las ganancias fue acumulada por los productores, incluyendo al gran número de campesinos o yanaconas. Es más, un número cada vez mayor de trabajadores migrantes bajaba de la sierra en la temporada baja, entre la siembra y la cosecha, y obtenía una ganancia adicional con la cosecha del algodón. Para 1916, el número de trabajadores algodoneros inmigrantes había subido a 21.000, y a 41.000 en 1923. Cuando ellos regresaban a sus comunidades en la sierra después de la cosecha, llevaban consigo ganancias que reinvertían en sus propias parcelas y gastaban en actividades comunales, como las festividades religiosas. En lo que respecta a los grandes productores, estos no solamente proporcionaban materias primas para la industria textil doméstica, sino también otros derivados del algodón que eran procesados y convertidos en aceite de semillas de algodón, jabón y velas. Aunque muchos productores fueron activos en el desarrollo de estas nacientes industrias, su actividad empresarial dentro la economía mayor y su peso político a nivel nacional no eran comparables con el de sus contrapartes de la industria azucarera. En suma, las ganancias algodoneras brindaron un estímulo significativo para el desarrollo tanto de la manufactura interna como del mercado doméstico.

Otro producto de exportación predominantemente regional, pero de duración relativamente corta, fue el caucho de los bosques tropicales de la Amazonía, al oriente (Stanfield 1998). El comercio del caucho se caracterizó por un ciclo de

auge y depresión relacionado con la demanda y la producción internacionales, y dio lugar a pocos eslabonamientos internos con la economía doméstica nacional. La expansión del caucho fue desatada por un *boom* en su demanda por parte del Occidente industrializado en la segunda mitad del siglo XIX. En la década de 1880 se comenzó a explotar sistemáticamente en la Amazonía brasileña y peruana. La industria, tal como se desarrolló, fue extremadamente primitiva, basada no en la organización de plantaciones sino en la recolección de los árboles de goma dispersos por toda la región hecha por trabajadores indios. El vertiginoso aumento de su producción que en 1912 alcanzó las 3.200 toneladas anuales, alrededor del treinta por ciento de las exportaciones totales, provocó que se amasaran grandes fortunas. Como reflejo de este próspero comercio, el asentamiento de Iquitos pasó de ser una pequeña aldea de pescadores con doscientos habitantes en 1851 a convertirse en una pequeña ciudad con una población de veinte mil hacia la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, durante este conflicto los precios internacionales comenzaron a caer, a medida que las plantaciones más eficientes del Lejano Este acaparaban el grueso de la producción, y la oferta mundial pronto superó a la demanda. En consecuencia, la economía regional amazónica, que vio cómo la mayor parte de las ganancias procedentes del comercio eran gastadas en importaciones de lujo para mantener los ostentosos estilos de vida de los barones del caucho (Carlos Fitzcarraldo, Julio Arana y los inmigrantes Kahn y Víctor Israel), colapsó y se hundió en el estancamiento. Sin embargo, los grandes perdedores fueron los miles de trabajadores indígenas inescrupulosamente uncidos a la producción y que fallecieron por el exceso de trabajo, la desnutrición y las enfermedades. El grado de explotación de la mano de obra en la región fue tal que produjo un escándalo internacional debido al trato dado a los indios locales a lo largo del río Putumayo por la Peruvian Amazon Company, entre 1908 y 1912. Al final el *boom* del caucho, que ya había concluido en 1920, tuvo muy pocas consecuencias duraderas. Sin embargo, sí ayudó a perpetuar el mito de un Dorado amazónico de riquezas y recursos potenciales ocultos, que en el futuro de algún modo podrían ayudar a sacar al Perú de su crónico subdesarrollo.

La industria petrolera fue otro sector de la economía peruana, rica en mercancías primarias, repentinamente estimulando por una súbita demanda extranjera y un valor creciente. Ésta cayó fuertemente bajo el yugo del dominio extranjero, en mucho mayor medida que la industria del cobre. Confinada en el extremo noroccidental del país, la industria petrolífera databa de la década de 1860, pero comenzó a desarrollarse a finales de siglo. Negritos fue de lejos el campo más grande y productivo, incrementándose de un cincuenta y nueve por ciento de la producción total en la década de 1890 a un ochenta por ciento en la de 1920. En general, la producción de petróleo creció espasmódicamente durante la década

de 1890 y a comienzos del siglo XX, pero realmente solo despegó en 1904 gracias a la demanda internacional e interna rápidamente creciente. Los precios subieron antes de la Primera Guerra Mundial, pero luego se estancaron durante el conflicto debido a las perturbaciones en el transporte. Las refinerías de Talara (Negritos) y Zorritos datan de la década de 1890.

La industria rápidamente adquirió muchas características de un enclave extranjero. Los campos se encontraban en la costa, en una aislada región desértica a seiscientas millas de Lima. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, la Standard Oil de Nueva Jersey comenzó a comprar campos petrolíferos peruanos, el más importante de los cuales fue Negritos, de propiedad británica, y consolidó sus posesiones bajo el control de la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria canadiense de la Jersey Standard.

Las ganancias de la IPC en las siguientes décadas fueron extremadamente altas y el valor de retorno fue concomitantemente bajo. Por ejemplo, Thorp y Bertram estiman que entre 1916 y 1934, la contribución de la IPC en divisas extranjeras a la economía local fue virtualmente inexistente. En ese mismo lapso las ganancias llegaron al setenta por ciento, con costos laborales de ocho por ciento, pagos al gobierno de apenas seis por ciento e insumos importados de quince por ciento. Los impuestos no sólo eran escandalosamente bajos, sino que no había ninguna reglamentación gubernamental. Dadas sus grandes ganancias, la IPC podía asignar grandes fondos para comprar la amistad de los gobiernos e influir impunemente en la legislación.

El surgimiento de la oligarquía

Un gran corpus bibliográfico, que data de la década de 1960, atribuye el crónico subdesarrollo peruano en el siglo XX a la formación de una red estrechamente entrelazada de personas acaudaladas, con intereses y orientaciones ideológicas similares, que llegaron a ejercer el dominio político y económico del país luego de la Guerra del Pacífico. Esta élite cerrada y paternalista (también denominada «burguesía» o «plutocracia»), formada mediante el matrimonio entre un pequeño círculo de prominentes familias, no sólo ganó supuestamente el control del Estado y sus recursos durante la República Aristocrática, sino que los usó para promover sus propios intereses individuales y de clase. Es más, la condena sugiere que faltó a esta élite un «proyecto nacional» para el desarrollo; que optó por una política de fomento de las exportaciones en vez de la industrialización; que operó «irracionalmente» en forma aristocrática y «rentista»; y que se alió con los gamonales de la sierra y los capitalistas extranjeros para asegurar su control sobre el país y promover sus propios intereses de clase, limitados y egoístas. El resultado, según esta postura dependentista, fue una sobreespecialización en la producción de mercancías para

la exportación, controlada por la élite, y una excesiva dependencia en el capital y los mercados extranjeros que creó una peligrosa subordinación económica y puso en riesgo el país.

No cabe mucha duda de que una oligarquía, conformada por exportadores y empresarios limeños vinculados a la economía exportadora en desarrollo, surgió en el Perú a finales del siglo XIX. Conformada por unas treinta a cuarenta familias notables con grandes intereses en la costa, este grupo y su expresión política —el reconstituido Partido Civilista— fue descrito por Basadre como sigue:

> [...] pertenecían a este partido los grandes propietarios urbanos, los grandes hacendados productores de azúcar y algodón, los hombres de negocios prósperos, los abogados con los bufetes más famosos, los médicos de mayor clientela, los catedráticos, en suma, la mayor parte de la gente a la que le había ido bien en la vida. La clase dirigente se componía de caballeros de la ciudad, algunos de ellos vinculados al campo, algo así como la criolla adaptación del *gentleman* inglés. Hacían intensa vida de club, residían en casas amobladas con los altos muebles del estilo Imperio y abundantes en las alfombras y los cortinajes de un tiempo que no amaba el aire libre y vestían chaqué negro y pantalones redondos fabricados por los sastres franceses de la capital. Vivían en un mundo feliz, integrado por matrimonios entre pequeños grupos familiares [...] (1968-69, XI: 127).

Según Gilbert (1977), en el núcleo de esta élite, un grupo informal, conocido como los Veinticuatro Amigos, se reunía regularmente en el exclusivo Club Nacional para discutir el manejo de los asuntos nacionales. Incluía a dos hombres que ocuparon la presidencia por un total de veinticuatro años (José Pardo y Augusto B. Leguía), por lo menos ocho ministros, entre ellos cinco de hacienda, tres presidentes del senado y los propietarios de los dos principales diarios de Lima. También se obtenían presidentes en los restos de las viejas élites regionales (Piérola y Eduardo López de Romaña del sur), así como entre los oligarcas del guano y del nitrato de antes de la guerra (Manuel Candamo y Guillermo Billinghurst, respectivamente). Es más, dos de las más poderosas familias de la oligarquía tenían diversos intereses económicos: los Aspíllaga en el azúcar, el algodón, la minería, la banca, los seguros y la construcción de navíos, y los Pardo en el azúcar, la banca, los seguros, los inmuebles y las manufacturas, pero la mayoría tenía como base una actividad económica particular. En términos sociales, la oligarquía formaba un grupo cerrado, cohesivo y estrechamente entrelazado —virtualmente una casta cerrada— ligado por los vínculos familiares y de parentesco.

Cultural e intelectualmente, la oligarquía contaba con otras características definidoras que se derivaban directamente de la influencia de la Europa de la *Belle Epoque*, hacia el cambio de siglo. París fue la Meca de la élite peruana, un hecho ilustrado por la carrera literaria del joven aristócrata Francisco García

Calderón, uno de sus más ilustres intelectuales y voceros. Hijo del presidente durante la ocupación chilena, García Calderón pasó la mayor parte de su vida adulta en Francia, donde escribió lo que venía a ser el manifiesto político de su clase. Redactado nada sorprendentemente en francés y no en español, *Le Pérou contemporaine* (1907) expresaba una perspectiva totalmente elitista del gobierno y la política que desdeñaba las masas, que serían controladas por lo que el denominaba «cesarismo democrático», esto es el gobierno de una élite natural autocrática, aunque paternalista.

Esta clase dominante, guarnecida feliz en Lima en su cómodo esplendor, era del todo eurocéntrica y afrancesada, pero apenas si sabía algo del resto del país, salvo por las visitas ocasionales a sus haciendas (principalmente en la costa). En consecuencia, su lejanía social de las masas y la imagen inherentemente racista de los indios y otras castas se vio acrecentada por su total ignorancia del interior, al cual muy pocos de ellos conocían de primera mano. Muchos, como la esposa de González Prada (quien a su vez jamás visitó la sierra), se espantaron durante la Guerra con Chile cuando miles de reclutas indios «invadieron» Lima a pedido de sus patronos, en un último intento de defender la ciudad del enemigo. Para ellos, el vasto interior peruano y su campesinado oprimido constituían una «barbarie» imaginada, que coincidía perfectamente con la famosa caracterización que D.F. Sarmiento hiciera de Argentina. De igual modo, Lima representaba la «civilización», en donde según el viajero decimonónico estadounidense Squier, por cada tres de sus habitantes más acomodados que conocían el Cuzco, otros treinta habían agraciado las calles de Londres.

Lo que puede cuestionarse en esta formación oligárquica del temprano siglo XX no es su existencia, sino el rango de su alcance y la extensión de su dominio político. Como veremos, la historia política del Perú entre 1895 y 1919 no sugiere semejante omnipotencia. Fue, más bien, un periodo desgarrado por los conflictos políticos, el faccionalismo y las rupturas partidarias, incluso dentro del dominante Partido Civil que ganó la presidencia en 1904 y la conservó, con algunas interrupciones, hasta 1919. Este conflicto se debía, en parte, al personalismo y a las intensas rivalidades individuales y entre los clanes que caracterizaban la política peruana. Víctor Andrés Belaunde, uno de los prominentes intelectuales conservadores peruanos de comienzos del siglo XX, llamó la atención sobre esto al señalar que «no se debiera tomar en serio a los partidos políticos, y aún menos lo que se les atribuye como programas o características. Nuestros partidos son ... sustantivos abstractos, agrupaciones personales inconsistentes y efímeras» (citado en Miller 1982: 105). Tres de los primeros partidos políticos peruanos estuvieron basados íntegramente en la lealtad personal a un caudillo: Cáceres (Constitucionalista), Piérola (Demócrata) y Durand (Liberal). Hasta en el más institucionalizado Partido Civil podemos distinguir varias facciones diferentes en

torno a una persona específica: los que seguían a Augusto Leguía, Rafael Villanueva y los Pardos, para no mencionar sino unos cuantos.

En el Congreso encontramos manifestaciones políticas similares; los presidentes Piérola, Leguía y Pardo consideraron que era conveniente colocar a sus hermanos en posiciones claves del mismo. Semejante gusto por el personalismo y el clientelaje fue satirizado contundentemente por González Prada, quien caracterizó el primer gobierno de José Pardo (1904-1908) del siguiente modo: «José Pardo en la presidencia, Enrique de la Riva Agüero como jefe de gabinete, un Felipe de Osma y Pardo en la corte suprema, un Pedro de Osma y Pardo en el puesto de alcalde del municipio, un José Antonio de Lavalle y Pardo en el puesto de fiscal, un Felipe Pardo y Barreda en la legación en los Estados Unidos, un Juan Pardo y Barreda en el Congreso» (citado en Miller 1982: 106). Para este sardónico autor se trataba de una dinastía retroactiva, decreciendo la inteligencia de sus miembros de generación en generación, mientras que su vanidad y orgullo se incrementaban.

Más allá de la evidente antipatía de González Prada por los Pardo, sus observaciones resaltan la fuerza impulsora del sistema político: la inclinación a ejercer el control sobre el botín estatal para satisfacer los intereses personales, familiares o del clan. Como dijera otro observador contemporáneo, «la administración pública es una cadena de compadres» en la cual, aludiendo nuevamente a los Pardo, «para ellos el gobierno es como una hacienda, con un patrón, empleados y peones» (citado en Miller 1982: 113). La lucha por crear y controlar tal red de patronazgo era intensa, desde la presidencia al congreso, y ella abría el camino para fuertes rivalidades personales que podían minar severamente la cohesión oligárquica.

Además de las rivalidades personales, las divisiones también seguían líneas económicas o regionales. Burga y Flores-Galindo (1979), por ejemplo, sostienen que podemos distinguir tres grupos en la oligarquía: uno con base en el azúcar de la costa, otro en los mineros y los latifundistas de la sierra central, y otro más en el comercio lanero del sur. Otros ven a la oligarquía como una entidad conformada principalmente por hacendados, exportadores, empresarios y banqueros costeños, que se cohesionaban en Lima en torno al Estado y que tenían vínculos con el capital extranjero (Flores-Galindo *et al.* 1978). El poder económico y la cercanía al gobierno facilitaban la penetración oligárquica y su control del centro, en tanto que las alianzas con los gamonales de la sierra aseguraban el control de las provincias circundantes, en donde el alcance del gobierno central seguía siendo débil y tentativo.

Gorman (1979), otro historiador, sostiene que la oligarquía representaba múltiples intereses sectoriales distintos, en una economía nacional no integrada y extremadamente heterogénea. Sin embargo, los partidos políticos existentes no lograron mediar entre estos intereses disímiles en el ámbito de la política estatal. Las evidencias a favor de esta última posición son bastante amplias cuando

consideramos simplemente las divisiones existentes entre los intereses agrarios. Por ejemplo, los hacendados del azúcar y el algodón discrepaban vehementemente sobre cuestiones puntuales, tales como quién debía pagar impuestos. Lo crucial para ambos grupos era un acceso lo bastante amplio al Estado como para asegurar el control sobre los funcionarios locales cuyos poderes policiales, judiciales y de distribución de las aguas constituían puntos neurálgicos para los intereses de los hacendados. Claro está que la oligarquía sí tenía una mentalidad y perspectiva común en lo que respecta a las cuestiones más amplias del papel del Estado en la sociedad, o la necesidad de controlar las clases populares.

Si las fuentes de desacuerdos y discordia dentro de la oligarquía fueron múltiples en este periodo, es en el Congreso donde parecen ser claramente evidentes. El número de ministros depuestos entre 1886 y 1919 fue notablemente elevado: según una cuenta, cincuenta y siete de justicia, sesenta y cuatro ministros de guerra, sesenta y cinco de hacienda y setenta de gobierno. Es más, la legislatura también rechazó los presupuestos enviados por el presidente para su aprobación en 1901, 1903, 1911, 1914 y 1917, y derrotó una serie de otras importantes iniciativas presidenciales. Esta discordia se debía principalmente al hecho de que la élite costeña y el presidente debían compartir el poder en la legislatura con un número desproporcionado de representantes de la clase gamonal del interior. Aunque ello trajo consigo cierta interdependencia entre las élites costeñas y los gamonales de la sierra en lo que respecta al control social, también explica las divisiones sobre cuestiones específicas que afectaron a la oligarquía y la economía de exportación, que iban desde el patrón de oro y las leyes bancarias y monetarias, a los impuestos a las exportaciones y las concesiones a extranjeros.

Si bien la oligarquía no era omnipotente, fue más moderna y empresarial de lo que hasta ahora se ha dicho. La postura dependentista plantea que ella fue una clase social regresiva de mentalidad rentista, que inhibió el desarrollo y fue incapaz de promover la modernización. En forma revisionista, Quiroz (1993) sostiene que por el contrario, fue una clase dinámica y empresarial que actuó en formas mayormente racionales y capitalistas, y que diversificó sus actividades económicas tradicionales del comercio y la agricultura a las finanzas, las manufacturas y el desarrollo urbano. El hecho de que la economía peruana titubeara en la década de 1920 y mostrara serios problemas estructurales, la dependencia entre ellos, se debió, no al presunto comportamiento anacrónico y señorial de esta oligarquía, sino a otras causas.

Es más, a esta oligarquía progresista no le faltó un proyecto de desarrollo capitalista para el Perú, como han sostenido usualmente los dependentistas. Pensando que el país contaba con un medio natural particularmente idóneo para el desarrollo agrícola y minero, las políticas que prescribió para el crecimiento y la modernización subrayaron la liberalización de las prerrogativas patrimoniales

del Estado; la atracción del capital extranjero; la mecanización de la producción agraria y minera; el desarrollo de la infraestructura, como líneas férreas, carreteras y obras de urbanización; la construcción de grandes proyectos de riego; y la atracción de la inmigración europea, de preferencia anglosajona. También fue importante la asimilación de las propiedades corporativas pertenecientes a la Iglesia y las comunidades indias al sector moderno de la economía, así como de los latifundistas «feudales», y la integración de la población indígena a una moderna fuerza laboral asalariada que sería capaz de fomentar la producción y el crecimiento capitalistas.

En vista de este programa de desarrollo y el uso del Estado para impulsarlo, podría cuestionarse la interpretación liberal y evolucionista que la élite supuestamente tuvo de la relación entre el Estado y la sociedad. Esta postura, tal como la expresara un investigador que ha estudiado el pensamiento económico de la élite, sugiere que la oligarquía creía firmemente que «el destino de la sociedad se decide fundamentalmente en el nivel individual y el Estado no es sino un factor orientador, que no tiene ni los medios ni la responsabilidad de predeterminar, y mucho menos realizar, un tipo de sociedad particular» (Gonzalo Portocarrero, citado en Love y Jacobsen 1988: 145). Sin embargo, semejante tipo ideal de liberalismo clásico de *laissez-faire* era, en realidad, mucho más complejo y complicado. De hecho, Jacobsen (1988: 146; 1993) sostiene que lo que caracterizó al gobierno de la élite durante la República Aristocrática, fue una combinación mucho más proteica de los enfoques liberal e intervencionista, en lo que respecta a las cuestiones económicas y sociales. Esta posición ciertamente encajaría con las tradiciones patrimonial e intervencionista del Estado peruano, así como con los patrones personalistas y clientelistas del comportamiento político de la élite antes mencionados. Tanto Jacobsen (1993) como Trazegnies (1980) enfatizan estas tendencias contradictorias (liberal y tradicional) de la oligarquía y sugieren que en el Perú, ella buscó llevar a cabo una modernización de tipo tradicional.

Buena parte de la fuerza impulsora del programa de desarrollo liberal y capitalista de la élite se derivó de su reacción a las desastrosas consecuencias de la Guerra del Pacífico. Ella vio no sólo cómo su patrimonio nacional era tomado, sino que además, su control absoluto del país se evaporó momentáneamente ante un invasor extranjero y un difundido levantamiento popular. Para evitar la repetición de semejante calamidad en el futuro, la élite pensó que el Perú debía fomentar unas sólidas políticas liberales y fiscales, diseñadas para desarrollar nuevas fuentes de riqueza que reemplazaran a la desastrosa sobreespecialización y los hábitos derrochadores de la era del guano.

Esta nueva actitud fue resumida por Augusto B. Leguía, el ministro de hacienda (1903-1908) y un prominente vocero de la élite civilista progresista, al afirmar que «aquella próspera y cómoda situación [la era del guano antes de la

guerra] sólo parecía serlo; estábamos siendo engañados, seguimos engañados y así sucumbimos. Hoy no vivimos con liberalidad, pero tenemos honestidad. Nuestros presupuestos están equilibrados». Otro miembro de la élite, Manuel Vicente Villarán, un civilista progresista y catedrático de derecho de inclinación positivista en la Universidad Mayor de San Marcos, expresó el nuevo espíritu capitalista de la época *trust* al afirmar que «ya no son los cañones los que logran el triunfo, sino, cárteles y *comptoirs*», y que «para nosotros, hoy la riqueza es más un asunto de dignidad, honor y tal vez independencia, que una cuestión de comodidad y cultura» (citado en Quiroz 1984: 54). Claro está que semejante forma de ver las cosas inevitablemente llevó a la oligarquía a forjar vínculos o alianzas con el capital extranjero, virtualmente la única fuente de inversión disponible para desarrollar la economía peruana, rica en diversos recursos naturales.

Pero unas serias fisuras políticas se manifestaron en la oligarquía a comienzos de la República Aristocrática, incluso cuando se justificaba al capitalismo liberal como un medio con el cual modernizar al Perú y fortalecer a la clase dominante. El acercamiento entre los rivales demócratas y civilistas, que permitió a Piérola triunfar en la «revolución del 95», comenzó a derrumbarse rápidamente a medida que los civilistas, bajo su astuto líder Manuel Candamo, maniobraban para alcanzar la primacía en la coalición gubernamental. En 1899, ambos partidos acordaron un candidato que sucediera a Piérola: el hacendado sureño y demócrata Eduardo López de Romaña (1899-1903). Sin embargo, los civilistas alcanzaron el control de la mayoría de los cargos políticos importantes durante su gobierno, incluyendo el crucial aparato electoral de la Junta Electoral Nacional. Ello permitió a Manuel Candamo, el jefe de este partido, ganar la presidencia en 1903. Desde entonces hasta 1919, la historia política del Perú estuvo esencialmente dominada por el Partido Civil.

Sin embargo, su dominio no puso fin a las divisiones oligárquicas o al faccionalismo político, pues el partido mismo se había dividido en grandes facciones. La división seguía fundamentalmente líneas generacionales y personales, antes que ideológicas o programáticas. La generación más vieja, encabezada por el dirigente partidario Isaac Alzamora, luchó por controlar el partido en contra del desafío de una generación más joven, dirigida por José Pardo, el hijo del primer presidente civilista Manuel Pardo. Candamo había logrado mantener la paz entre las dos facciones enfrentadas, pero su repentino deceso a comienzos de 1904 desencadenó una feroz lucha en torno a la elección de su sucesor. Pardo ganó la puja en 1904 y pacificó momentáneamente las facciones durante sus cuatro años de gobierno.

En 1908, Pardo eligió al empresario y «joven turco» civilista Augusto B. Leguía, su ministro de hacienda y máximo asesor político, como candidato del partido para la presidencia. Los miembros más conservadores y aristocráticos de

la vieja guardia recelaban de Leguía, a quien veían como un arribista de clase media que carecía de las conexiones necesarias con las familias más antiguas. Este, por su parte, aunque un leal hombre de partido, resentía este rechazo de la vieja guardia y después de su elección procedió arbitrariamente para marginarla de las posiciones de liderazgo en su nuevo gobierno. Esto, así como su intento de llevar a algunos demócratas prominentes a su administración, condujo a una división partidaria más profunda que culminó en una feroz lucha de ambas facciones por el control del Congreso.

Cuando el Presidente intentó arreglar las elecciones legislativas de 1911, sus oponentes civilistas formaron el «Bloque» con miembros de los partidos de oposición. Entonces, luego de un choque armado entre ambos bandos en el exterior del palacio legislativo el 13 de julio, el ala que se oponía a Leguía dejó el partido para formar el Partido Civil Independiente. Los arbitrarios intentos efectuados por Leguía para gobernar independientemente de la jerarquía partidaria fueron los que provocaron el sustancial debilitamiento del civilismo como fuerza política y no las diferencias ideológicas, económicas o sociales dentro del partido. Según González Prada, «gracias a Leguía, el civilismo dejó de ser la madera fuerte de la construcción, convirtiéndose más bien en un palo débil comido por los gusanos, útil sólo para tirar al fuego» (citado en Stein 1980: 32).

El orden social del país experimentaba algunos cambios fundamentales en el mismo momento en que el partido gobernante comenzaba a desarmarse. La población peruana había crecido lentamente en el último cuarto del siglo XIX, de 2,7 millones según el censo oficial de 1876, a un estimado de 3,7 millones en 1900, un crecimiento medio anual de alrededor de uno por ciento. Una década más tarde, en 1910, el número de habitantes había aumentado a 4,2 millones, y una década después, en 1920, alcanzó los 4,8 millones, incrementándose la tasa de crecimiento medio anual a 1,2 por ciento y 1,5 por ciento, respectivamente (Webb y Fernández Baca 1990: 97). La gradual tendencia ascendente en la tasa media anual de crecimiento coincidió con la recuperación y la expansión económica de la década de 1890.

En lo que respecta a la población de Lima, ésta permaneció virtualmente estacionaria —100.000 en 1876 y 104.000 en 1891—, reflejando así el impacto de la guerra y de las conmociones civiles de la década de 1880. Sin embargo, con la aceleración del ritmo de la economía, ella subió en 35,5 por ciento a 141.000 en 1908, y en cincuenta y nueve por ciento y 224.000 en 1920. El vecino puerto del Callao, el punto principal de transvase de la floreciente economía exportadora, tenía más de 34.000 habitantes en 1905. A diferencia de Lima, los restantes centros urbanos más importantes del país —Arequipa, Cuzco y Trujillo— tenían apenas 35.000, 18.500 y 10.000 habitantes en 1908, respectivamente. Buena parte del crecimiento poblacional de Lima en estos años reflejaba una corriente cada vez

más grande de emigración desde el interior al centro económicamente activo. Esta migración interna, que se incrementaría dramáticamente a lo largo del siglo en diversas oportunidades, es visible en el creciente porcentaje de la población limeña nacido afuera de la capital. En 1858 era 37 por ciento, 58,5 por ciento en 1908 y 63,5 por ciento en 1920.

Otro factor en el crecimiento de la población limeña —aunque no del país— a partir de la década de 1890 fue la mejora general en la salud pública desde comienzos de siglo. Con la urbanización y la modernización llegaron mejores instalaciones sanitarias y una mejor atención médica que ayudaron a reducir la incidencia de enfermedades letales como la malaria, la fiebre tifoidea y la viruela. La tasa de mortalidad comenzó a disminuir después de 1895, marcando así el advenimiento de la «modernización demográfica», esto es unas tasas de fertilidad y población en constante crecimiento. La conclusión, al fin, de los ferrocarriles central y del sur, que unían la costa con la sierra, también facilitó un mayor movimiento de personas desde el interior, aun cuando su objetivo principal era abrir el camino para la explotación de sus abundantes recursos naturales. El ferrocarril central entre Lima y La Oroya se completó en 1893, y luego se extendió al importante pueblo comercial serrano de Huancayo en 1909. El ferrocarril del sur se completó en 1908 y unió el puerto de Mollendo con el Cuzco, a través de Arequipa y Puno, en el lago Titicaca.

La formación de la clase obrera

A medida que la población peruana se expandía y urbanizaba gradualmente, y su economía de exportación se diversificaba y crecía durante la República Aristocrática, lo mismo sucedía con su mano de obra. En el sector moderno de la economía podía hallarse una concentración considerable de trabajadores en las haciendas azucareras (30.000) y algodoneras de la costa (35.000), en las minas de la sierra (plata, oro y cobre: 20.000-25.000), en los campos petroleros del extremo norte de la costa, y en los talleres del recién terminado sistema ferroviario. Los 300.000 trabajadores estimados en el caucho y la lana estaban más dispersos y aislados. Incluyendo a estos últimos, todos sumaban unos 80.000 a 120.000 trabajadores, o entre cinco y ocho por ciento de la fuerza laboral estimada en 1,53 millones en la década de 1890.

Sin embargo, a pesar del creciente número de trabajadores, varios factores retardaron su organización en gremios o sindicatos en estos enclaves. Entre ellos estaban el aislamiento y la lejanía de los sectores laborales urbanos más dinámicos, sobre todo en la capital, y el fuerte control de los empleadores, ayudados no sólo por el respaldo de las autoridades locales sino también del gobierno central. Las actividades y disturbios obreros se dieron ya en 1910 entre los trabajadores

azucareros de las haciendas en las afueras de Trujillo, en la costa norte, pero fueron sofocados rápidamente por las autoridades.

Sin embargo, las cosas fueron bastante distintas en Lima, donde podían encontrarse trabajadores en fábricas, molinos, tiendas y construcciones, así como en los muelles del vecino puerto del Callao. Si también incluimos la categoría de artesanos, el número de «obreros» creció en Lima de alrededor de 9.500 (9,5 por ciento de la población) en 1876 a casi 24.000 (16,9 por ciento) en 1908 y a más de 44.000 (19,8 por ciento) en 1920. Las cifras del Callao se elevaron por encima de 4.000 en 1905 y 8.400 en 1920. Dado que estaba concentrada en la capital, la clase obrera de Lima-Callao era más dinámica que sus contrapartes rural-provinciales. Como señala Blanchard (1982), los trabajadores tenían allí acceso a dirigentes políticos e instituciones nacionales y extranjeros, y a las ideas de periodistas e intelectuales, con los que podían contar para apoyarlos en sus demandas y en sus movilizaciones.

Su lucha colectiva se remontaba a finales de la década de 1850, durante la era del guano, cuando se formaron las primeras sociedades de socorros mutuos y la agitación laboral estalló en Lima y se esparció a algunas ciudades de provincias. Al igual que los gremios del periodo colonial, el mutualismo surgió para proteger los intereses de los artesanos de las amenazas de las incipientes manufacturas y las crecientes importaciones. A partir del cobro de cuotas, las sociedades también daban ayuda financiera a sus miembros que caían enfermos, quedaban incapacitados o desempleados, y para cubrir los costos funerarios.

Asimismo, una agitación laboral más militante, en forma de motines y huelgas, estalló ocasionalmente en esta temprana fase de la historia obrera. Sin embargo, hasta después de 1895 no comenzaron a producirse frecuentemente en Lima las protestas y huelgas industriales entre los obreros textiles, panaderos, bancarios y los trabajadores ferroviarios, estibadores y de fábricas, pero se limitaban a cada sector individual y por lo general involucraban la demanda de salarios más altos y mejores condiciones laborales. Dada su estratégica ubicación en la economía exportadora, los trabajadores ferroviarios y portuarios del vecino Callao por lo general tenían más éxito que otros en imponer sus demandas. El gobierno temía toda perturbación en el flujo de productos desde y hacia el extranjero que pudiera disturbar la economía y reducir las rentas, tanto en el sector público como en el privado.

Con todo, el progreso de los trabajadores fue relativamente lento hasta la Primera Guerra Mundial. El Congreso presentó una ley de riesgo profesional, que compensaba al trabajador por accidentes y daños ocurridos en el trabajo, pero ella no se convirtió en ley hasta 1911 debido a la oposición conservadora. (Aún así fue la primera ley de su tipo en América Latina y la segunda en el hemisferio, después de la de Canadá.) Para dicho año había sesenta y dos sociedades de

socorros mutuos, con un promedio de doscientos miembros cada una, agrupadas en una de las dos principales confederaciones laborales de Lima. En general, los trabajadores preferían una política de conciliación con el gobierno antes que de confrontación.

Sin embargo, no muy entrado el nuevo siglo, los anarco-sindicalistas emergieron como un desafío al mutualismo, que rehuía los enfrentamientos. El anarquismo era una ideología militante contraria al statu quo que se esparció por toda América Latina durante el tardío siglo XIX y comienzos del XX. Fue llevado al Perú nada menos que por Manuel González Prada, aquel rebelde inveterado y defensor de los oprimidos indios y las masas trabajadoras andinas. González Prada retornó al Perú en 1898 tras una estadía de siete años en Europa en la cual se convirtió, entre otras cosas, en un anarquista convicto y confeso. En la década de 1890 Europa rezumaba nuevos movimientos que cuestionaban las convenciones morales, políticas y artísticas de la época. Uno de los movimientos más extremos era el anarquismo, que propugnaba la justicia social y la total libertad individual en una sociedad sin Estado y con una propiedad privada limitada.

Si Europa, con su rápido avance industrial y creciente proletariado urbano, expuesto a las vicisitudes y la explotación del temprano capitalismo del *laissez-faire*, resultó ser un campo fértil para tales ideologías radicales, lo mismo sucedió con la versión neocolonial y orientada a la exportación del Perú. De hecho, el anarquismo resultaba atractivo para ambos sectores de la heterogénea clase trabajadora peruana. Los artesanos, que valoraban la empresa individual, lo vieron como una protección contra las dislocaciones con las que los amenazaba el avance inexorable de la mecanización y el sistema fabril. Para el naciente proletariado, que era un producto de estas mismas fuerzas, el anarquismo prometía un medio a través del cual cuestionar los bajos salarios, el desempleo periódico y las duras condiciones de vida en que vivían y trabajaban; ellas se ilustran en este testimonio sobre los alojamientos de los trabajadores en los ingenios textiles de Vitarte y La Victoria:

> [...] siguieron siendo pequeños, oscuros, húmedos [y] sin ventilación, agua potable o sanitarios, y ahora cada vez más costosos. Estaban situados en las partes más insalubres de la ciudad, donde enfermedades tales como la tifoidea, los desórdenes intestinales, la tuberculosis, la peste y la malaria eran endémicas: a orillas del río Rímac, cerca al hospital y el campamento de incurables, y cerca al lazareto, en donde estaban aislados los que sufrían de la peste. Las pilas de excremento eran algo común en estas zonas, sumándose a los riesgos para la salud (Blanchard 1982: 51).

Las condiciones laborales eran igualmente sombrías. La jornada laboral en Vitarte era de trece horas y media, en tanto que en San Jacinto iba de 7 a.m. a 10 p.m.

El anarco-sindicalismo prosperó en este medio socioeconómico. Los diarios anarquistas españoles y los libros de Proudhon, Bakunin, Malatesta y otros se conseguían con facilidad en Lima e incluso en ciudades de provincias como Trujillo y Arequipa. Pronto apareció una serie de diarios anarquistas de fabricación casera, comenzando con *Los Parias*, fundado por González Prada en 1904, y seguido por otros con nombres diseñados para atraer exclusivamente a los trabajadores, como *El Hambriento* y *El Oprimido*. Al comienzo, la principal contribución del anarquismo fue la promoción de una cultura marcadamente obrera. Surgieron diversos grupos teatrales, musicales y literarios con participantes de la clase obrera, que desarrollaban temas y causas definidamente proletarios. Asimismo, se organizaron círculos culturales para discutir las últimas ideas de Bakunin o Kropotkin, en tanto que en la fábrica textil de Vitarte los trabajadores crearon un día especial de celebración obrera, llamado la Fiesta de la Planta. Estas nuevas actividades educativas y culturales, así como la profusión de diarios que las promovían, sugieren la composición y el liderazgo predominantemente artesanal del incipiente movimiento de los trabajadores de Lima, dado el nivel relativamente alto de logros culturales y educativos.

La primera gran huelga bajo la influencia anarco-sindicalista tuvo lugar en 1904, entre los trabajadores portuarios del Callao. Aunque en última instancia no tuvo éxito, ella produjo el primer mártir del movimiento, y su entierro público dio a sus líderes una plataforma mediante la cual realizar una labor proselitista entre la fuerza laboral de la ciudad, al igual que una gran celebración por el Día del Trabajo al año siguiente, con González Prada como figura central. En adelante, ambos sucesos serían celebrados con regularidad por anarquistas y mutualistas por igual, con una marcha a la tumba del mártir, discursos y una velada de entretenimiento, recibiendo los trabajadores un día libre de sus empleadores. Aunque sin duda constituyeron una salida popular para un feriado de fiesta, según Blanchard, las celebraciones del Día del Trabajo también forjaron un sentido de unidad y de conciencia de clase entre la naciente clase obrera peruana.

Sin embargo, hasta 1911, la creciente influencia del anarco-sindicalismo más militante no se hizo sentir plenamente en el movimiento obrero. En ese año apareció *La Protesta*, un nuevo periódico anarquista editado por Delfín Lévano, hijo de uno de los primeros líderes del movimiento. Este año también vio la primera huelga general en Lima. La encabezaron los trabajadores textiles de Vitarte, que exigían salarios más altos, una jornada de diez horas y la eliminación del turno nocturno. Al arrestarse al comité de huelga, otros grupos, entre ellos los panaderos, chóferes de ómnibus y anarquistas se unieron para proclamar una huelga general en solidaridad. Al día siguiente la ciudad estaba virtualmente paralizada por la huelga y el gobierno se vio forzado a ceder a las demandas originales de los trabajadores. El paro resultó un gran éxito y reveló la renacida fortaleza del movimiento laboral

en vísperas de la elección de Guillermo Billinghurst en 1912, posiblemente el primer presidente populista en la historia del país.

En cierta forma Guillermo Billinghurst era un defensor inesperado de las nuevas clases trabajadoras de Lima. Nacido en 1851 en la provincia sureña de Arica, era hijo de un acaudalado hombre de negocios que hizo una fortuna con el comercio de nitratos en Tarapacá. El origen británico de la familia se derivaba de su abuelo, que combatió, al igual que varios de sus compatriotas, en las guerras de independencia de comienzos del siglo XIX. Dado que la fortuna de los Billinghurst provenía de los nitratos y no de la tierra, y que la familia tenía vínculos empresariales más fuertes con Santiago que con Lima, ella estaba al margen de las treinta o cuarenta familias que gobernaban la República Aristocrática.

Billinghurst no quería en modo alguno a la élite de poder civilista y respaldó al demócrata Piérola en la «revolución del '95», siendo recompensado con el nombramiento de primer vicepresidente. Sin embargo, sus aspiraciones de llegar a la presidencia se desvanecieron debido a las propias ambiciones políticas de Piérola, quien, esperando ubicarse para regresar posteriormente al cargo, mantuvo su alianza con los civilistas eligiendo como su sucesor al nada controvertido hacendado azucarero sureño Eduardo López de Romaña, que era aceptable para sus aliados.

Esta elección puso fin a la amistad de Billinghurst con Piérola y momentáneamente le llevó a las márgenes de la política y de vuelta a sus intereses empresariales. Con todo, presintiendo el potencial político de la emergente clase obrera, pronto volvió a la escena pública y ganó la alcaldía de Lima en 1909. Durante sus dos años como alcalde, Billinghurst emprendió una serie de reformas populares que beneficiaron a los trabajadores. Estas reformas incluían el subsidio para la carne vendida en barrios pobres; la persecución del alza ilegal de los precios por parte de los vendedores; la destrucción de algunos barrios bajos urbanos, incluyendo el barrio chino; la construcción de viviendas de bajo precio para los obreros; la mejora de la provisión de agua potable de la ciudad; y la intervención en huelgas en beneficio de los trabajadores. Al final de sus dos años de gobierno, y ya cercanas las elecciones presidenciales de 1912, Billinghurst era una figura popular entre las clases trabajadoras.

El hacendado azucarero norteño Antero Aspíllaga fue la elección de los civilistas para suceder a Leguía. Sin embargo, sus posibilidades eran inciertas, dadas las divisiones en el partido que llevaron a la formación del opositor Partido Civil Independiente el año anterior. Cuando estos últimos no lograron encontrar un candidato idóneo, un gran número de clubes obreros presentaron la candidatura de Billinghurst un mes antes de la elección. Alentados por su recién descubierto poder en la exitosa huelga general del año anterior, los obreros se organizaron en nombre del popular ex alcalde y demostraron la fuerza electoral de Billinghurst

el último domingo antes de los comicios con una inmensa manifestación en la capital que atrajo a más de veinte mil seguidores, contra los dos mil de Aspíllaga. El antiguo comerciante de nitratos fue apodado «Pan Grande» por la prensa popular, cuando unos cuantos seguidores desplegaron una banderola que contrastaba el futuro costo de este producto entre los dos candidatos —la hogaza más pequeña a veinte centavos en caso de ganar Aspíllaga, y a cinco si vencía Billinghurst— y se le urgió a que declarara formalmente su candidatura.

El problema era que Billinghurst tenía poco tiempo para organizar su campaña y Leguía rechazó su pedido de último minuto para posponer la elección. Con el aparato electoral gubernamental firmemente del lado de la candidatura de Aspíllaga y el sufragio limitado (el alfabetismo y las propiedades como requisitos) que restringía la participación popular, la negativa de Leguía hizo que los obreros convocaran otro paro general exitoso el día de la elección. Este paro tuvo el efecto deseado de perturbar tanto los comicios, que no se emitió el tercio necesario de los votos. En consecuencia, la elección cayó en manos del Congreso, en donde Billinghurst y Leguía hicieron un trato. A cambio de elegir al hermano del presidente como su primer vicepresidente, Leguía, que tenía la mayoría en el parlamento, ordenó a sus seguidores que votaran por Billinghurst el 9 de agosto. Por el momento la dubitativa oligarquía aceptó, no sólo por estar dividida, sino también por estar convencida de que por mucho que fuera un reformista, Billinghurst era uno de ellos y no pondría en peligro los intereses fundamentales de su propia clase.

Como presidente, Billinghurst tuvo que vérselas inmediatamente con una serie de huelgas ahora que los trabajadores pensaban que por vez primera tenían un auténtico defensor en el palacio presidencial. El presidente intervino a favor de los trabajadores en varias de ellas, lo que consolidó aún más su posición como su patrocinador. Él no solamente creía en su causa y deseaba pagar su deuda electoral, sino que, al no contar con un partido político propio ni con el respaldo de uno, dependía precariamente del de los trabajadores ante un Congreso hostil y conservador. Como *outsider* en la República Aristocrática, su única ventaja política real era su capacidad —como lo demostró su elección— para movilizar a los trabajadores en las calles para que presionaran al congreso y el *establishment* en pos de reformas. Sin embargo, finalmente, esta peligrosa táctica resultaría políticamente fatal al provocar que la oligarquía derribara a Billinghurst por la fuerza, después de apenas dieciocho meses en el cargo.

La inminente confrontación política no demoró en llegar y giró en torno a la cuestión constitucional de si el nuevo presidente podía evadir al Congreso al impulsar su nuevo presupuesto. Con poco respaldo en el parlamento, Billinghurst optó por negociar un préstamo de £500.000 de la Peruvian Corporation británica, y promulgar su nuevo presupuesto mediante un decreto presidencial. Una estipulación significativa del presupuesto era una reducción del nueve por ciento

en lo asignado a las fuerzas armadas. Los nacionalistas del país, particularmente los del ejército, se agitaron también con los rumores de que Billinghurst estaba a punto de vender las disputadas provincias de Tacna y Arica a Chile. Al aparecer noticias adicionales de una conspiración para derrocar al régimen, Billinghurst respondió movilizando manifestaciones de trabajadores, que se produjeron no sólo en Lima sino también en Arequipa, Trujillo y Cuzco, sumando esta última más de diez mil personas. Los editores del diario en lengua inglesa *West Coast Leader* parecían haber dado en el clavo al comentar que Billinghurst estaba decidido a llevar a cabo una «revolución social», en la cual «la concentración del poder en las manos de unos cuantos, la eliminación de la gran masa del pueblo como cualquier cosa salvo un factor pasivo en el gobierno de la nación, [iban siendo] minadas y derribadas» (citado en Blanchard 1977: 268).

Sin embargo, semejante participación directa de las masas en el sistema político elitista y tradicionalmente cerrado era un desafío inaceptable para la oligarquía. Ominosamente, la rumoreada conspiración en contra de Billinghurst involucraba a importantes miembros de los partidos políticos, la comunidad empresarial y el ejército. Después de que Billinghurst comenzara a repartir armas a sus seguidores la tarde del 3 de febrero de 1914 y de que éstos salieran a las calles disparándolas al aire, los conspiradores, encabezados por el coronel Óscar R. Benavides, comandante de la guarnición de Lima, arrestaron al presidente al amanecer del día siguiente y le exiliaron a Chile. Al final, la «indisciplina» de las masas y la perspectiva de que se armase a los trabajadores no podía ser tolerada por el cuerpo de oficiales. En lo que respecta a la oligarquía, el hacendado azucarero Ramón Aspíllaga lo expresó mejor en una carta a su hermano y candidato presidencial Ántero dos días más tarde, cuando achacó la causa principal del golpe a «la insolencia de las masas» y a su demostración del 3 de febrero.

El golpe dirigido por Benavides fue importante porque, entre otras cosas, prefiguró el papel futuro de las fuerzas armadas en la política nacional. Al mismo tiempo, era una consecuencia de la profesionalización de los militares iniciada en 1896 por Piérola. Esto último era paradójico, dado que no sólo buscaba revertir los pasados fracasos militares del país, sino además subordinar unas fuerzas armadas reformadas a la autoridad civil. Para ese fin, el francófilo Piérola había importado una misión militar francesa para que hiciera por el Perú lo que el general prusiano Emil Körner estaba haciendo por Chile, a saber, reorganizar, reestructurar y en general modernizar las fuerzas armadas.

El coronel Paul Clement, jefe de la recién nombrada misión militar francesa, emprendió su tarea con entusiasmo, hasta el punto de que adoptó la ciudadanía peruana y posteriormente pasó a ser su jefe de estado mayor. Bajó su dirección se fundó la Escuela Militar de Chorrillos en 1898 y se adoptó un nuevo código de justicia militar, inspirado por su contraparte francesa. También se adoptó el

reclutamiento militar de los varones entre veintiún y veinticinco años de edad, reduciéndose sustancialmente el enorme cuerpo de oficiales.

Benavides, integrante de una de las más influyentes familias peruanas, fue el producto de esta profesionalización de las fuerzas armadas. Se graduó en 1906 con el primer puesto de su promoción en la Escuela Superior de Guerra, la escuela de oficiales fundada en 1904, también siguiendo el modelo francés. Posteriormente, estudió en Francia y sirvió en misiones en Alemania y Austria, antes de regresar a casa a participar con distinción en un breve choque fronterizo con Colombia, en 1911. Dos años más tarde fue ascendido a jefe del estado mayor del ejército. A seis meses del golpe, el general, ahora presidente provisional, enfrentó la más seria crisis nacional desde el fin de la Guerra del Pacífico. En agosto de 1914 la Primera Guerra Mundial estalló en Europa; este acontecimiento arrojaría inicialmente a la economía peruana, dependiente de las exportaciones, a un descenso en barrena, al igual que al resto de América Latina.

La Primera Guerra Mundial y su impacto

El estallido de la guerra en Europa cerró los lucrativos mercados de exportación, hizo aumentar las tasas de los fletes y el precio de las manufacturas importadas, e interrumpió el flujo de préstamos y crédito de los bancos y mercados monetarios europeos. Estas perturbaciones provocaron, a su vez, que las fábricas de la periferia peruana cerraran y que el desempleo se incrementara. A medida que las mercancías destinadas a la exportación se apilaban en puertos y almacenes, la producción se detenía y los trabajadores eran despedidos. Por ejemplo, en las haciendas azucareras y pueblos de La Libertad, el setenta y cinco por ciento de la fuerza laboral fue expulsada del trabajo. En Lima, la fábrica textil El Inca recortó los salarios en cincuenta y cinco por ciento entre agosto y noviembre de 1914. Para empeorar las cosas, unos mil quinientos trabajadores peruanos desempleados arribaron a la capital por barco, luego de la suspensión de la producción en los campos de nitratos chilenos.

Los problemas financieros se incrementaron a medida que la fuerte caída en las importaciones europeas provocaba una masiva baja en los aranceles estatales, que cayeron de £616.491 en la primera mitad de 1914, a £568.351 en los siguientes doce meses. El crédito peruano en el extranjero quedó comprometido aún más, pues el país no pudo cumplir con los pagos de su deuda externa relativamente pequeña. Para empeorar las cosas, el sistema bancario colapsaba a medida que los depósitos caían, los préstamos eran recortados y las ganancias se reducían.

Estas inexorables presiones financieras sirvieron para agudizar aún más el deseo de Benavides de retirarse cuanto antes de la presidencia, cargo que le resultaba incómodo desempeñar como oficial de ejército profesional. Sugirió,

por lo tanto, que en 1915 se convocara a todos los partidos políticos para una «Convención de Partidos» que eligiera un presidente civil. La convención, la primera de su tipo en la historia, se reunió en agosto y eligió al ex presidente José Pardo y Barreda en la tercera votación. Aunque seguía profundamente dividida, la élite tradicional de la República Aristocrática, añorando nostálgicamente los «mejores días» del primer gobierno de Pardo, decidió confiar en un político conocido antes que buscar un nuevo liderazgo o dirección.

Una vez en el cargo, Pardo hizo frente de inmediato a los problemas financieros del gobierno elevando los impuestos e ingresos. La medida más importante fue un impuesto a la exportación de productos agrícolas y minerales, que aunque impopular con los productores de la élite, hizo mucho por estabilizar las finanzas del país. Por azar, el impuesto coincidió después de 1916 con una recuperación general y luego con el *boom* de las exportaciones peruanas a los beligerantes europeos, que para ese entonces enfrentaban una escasez crítica de las mercancías esenciales debido al conflicto bélico. Esto permitió al sol peruano estabilizarse y luego revaluarse, de modo que para julio de 1918 se le intercambiaba con la libra esterlina inglesa con una prima sustancial. La mayor renta tributaria permitió al gobierno reasumir el pago de la deuda, lo cual mejoró, a su vez, la posición crediticia del Estado.

Por diversas razones, la exportación de azúcar lideró la bonanza exportadora. En primer lugar, el canal de Panamá se abrió un año antes de la guerra, reduciendo a la mitad la distancia a Liverpool y cortando el viaje a Nueva York en sus dos terceras partes; en consecuencia, los costos del transporte cayeron. En adelante, los Estados Unidos reemplazaron a Gran Bretaña como principal importador del azúcar peruana. En segundo lugar, la industria había realizado sustanciales inversiones para incrementar la capacidad productiva entre 1908 y 1914. De modo que los productores peruanos se encontraban en condición de incrementar su producción rápidamente, una vez que la demanda extranjera se reinició después de las primeras perturbaciones comerciales inducidas por la guerra y que los precios comenzaron a subir. Las exportaciones se elevaron entre 1914 y 1920, excepción hecha de una mala cosecha en 1917, la tierra cultivada creció marcadamente y las ganancias se dispararon.

Podemos tener cierta idea de las ganancias inesperadas de los hacendados azucareros gracias a los balances de la hacienda Cayaltí, de los hermanos Aspíllaga, en el departamento de Lambayeque, que ganó £70.285 entre 1911 y 1913, y £71.713 únicamente en 1914, cifra que se elevó a £222.243 en 1919. Esto hizo que Antero Aspíllaga afirmara que «...al igual que muchos otros productores e industriales azucareros, les damos las gracias a los alemanes por la bonanza que nos ha tocado...» (citado en Albert 1988: 109). Como veremos, estas ganancias inesperadas no fueron compartidas por los trabajadores azucareros, cuyo número

se incrementó marcadamente, pero cuyo salario relativo en realidad descendió en el mismo lapso.

Por otro lado, la producción algodonera experimentó una dislocación inicial mucho más fuerte que el azúcar debido a la guerra, pero las exportaciones se recuperaron a mediados de 1915. El algodón alcanzó un nivel récord de exportaciones en 1916, tanto en volumen como en ganancias, y de allí en adelante subió constantemente, salvo en el año de sequía de 1917. En consecuencia, las tierras dedicadas a su producción se incrementaron en un estimado de setenta y cinco a cien por ciento durante el conflicto, en tanto que a la inversa, los productos alimenticios dejaron de producirse. Esto tuvo un serio impacto sobre la provisión y el precio de los alimentos urbanos, contribuyendo, como veremos, a la espiral inflacionaria ascendente y al concomitante descontento social en Lima hacia el final de la guerra.

Al igual que el algodón y el azúcar, las exportaciones de lana —el motor del crecimiento en la economía regional del sur peruano, con su centro comercial en Arequipa— también experimentaron una breve caída inicial y luego un *boom* a medida que se desarrollaba la guerra europea. Aunque el volumen exportado subió modestamente en respuesta a la demanda extranjera, los precios en alza hicieron que se cuadruplicara el valor así como las ganancias de los exportadores laneros en los quinquenios de 1910-1914 y 1915-1919. Esta bonanza tuvo también serias consecuencias sociales ya que agudizó el descontento campesino en la región, lo que llevó a la rebelión de Rumi Maqui en 1915-1916, a la cual volveremos en breve.

El estallido de la Gran Guerra tuvo un impacto similar en la industria minera, aunque con consecuencias algo distintas en el ámbito económico. A diferencia de los sistemas de propiedad de las haciendas que producían azúcar y algodón, en que predominaba la propiedad peruana o de inmigrantes (apenas el veinticinco por ciento de la producción azucarera estaba en manos de empresas extranjeras), cuando se produjo la Primera Guerra la minería era dominada en su mayoría por extranjeros. Por ejemplo, el noventa por ciento de la producción peruana de cobre era producida por dos compañías, Cerro de Pasco y Backus y Johnson. La guerra obligó inicialmente a cortar la producción en cincuenta por ciento, pero a partir de 1915 los precios y la producción subieron rápidamente hasta 1917, en respuesta a la demanda internacional. Las ganancias inesperadas de los propietarios de las minas fueron sustanciales y otra ronda de adquisiciones extranjeras tuvo lugar después de 1916. De este modo, la guerra aceleró y profundizó el proceso de desnacionalización y control monopólico de la minería, inhibiendo el desarrollo nacional mediante la remisión de utilidades y las limitaciones a la actividad empresarial nativa.

Ya en este momento, la industria petrolera estaba también bajo control extranjero y siguió un curso similar durante la guerra. La International Petroleum Company ejerció un monopolio virtual de la industria, permitiéndole desafiar exitosamente al gobierno en una serie de puntos. El más serio de ellos fue su decisión de no pagar el nuevo impuesto a la minería establecido por el gobierno de Pardo, quien fue atacado por los nacionalistas por «venderse» al imperialismo.

La guerra tuvo otro impacto importante en la economía. El conflicto marcó la creciente presencia comercial de los Estados Unidos. Esto es válido no solamente en el área de las inversiones y los flujos de capitales, como en la minería, sino también en el monto global del comercio entre ambos países. Ya en 1913, Estados Unidos daba cuenta del treinta por ciento de las importaciones peruanas y del treinta y tres por ciento de sus exportaciones. Buena parte de este comercio estaba dominado por la W.R. Grace & Co., que no sólo era la compañía comercial más grande del Perú, sino que además era dueña de la compañía azucarera Cartavio, controlaba casi la mitad de la industria textil en 1918, y era también activa en la banca, los seguros y otros negocios. La creciente presencia comercial estadounidense se debía en parte a la apertura del canal de Panamá en 1913, y al impacto adverso que la guerra tuvo sobre las relaciones comerciales británicas y alemanas con Perú y el resto de América del Sur.

Un lugar común en la bibliografía es que la perturbación de las importaciones a América Latina durante la Gran Guerra, estimuló un proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en la región. Sin embargo, esta tesis fue cuestionada por Albert (1988), quien mostró convincentemente que la ISI no fue muy importante en el Perú entre 1914 y 1918. Más bien, las importaciones se reiniciaron entre doce y dieciocho meses después del estallido de la guerra, a medida que la subsiguiente bonanza de los exportadores enriquecía principalmente a la élite, permitiéndole reasumir sus gastos suntuosos en bienes de consumo del extranjero. Las compras extranjeras en la industria minera incrementaron, asimismo, la riqueza y el gasto de la élite en importaciones. Al mismo tiempo, a medida que la bonanza exportadora se intensificaba durante el conflicto, la élite tenía poca inclinación a cuestionar ya fuera la tendencia hacia la desnacionalización de la minería, o a reemplazar el modelo liberal del crecimiento impulsado por las exportaciones con una política de ISI. A decir verdad, si el *boom* de la exportación de azúcar y algodón convenció de algo a los hacendados, fue de hacer grandes inversiones para incrementar su capacidad exportadora, en la errónea creencia de que la demanda y los precios extranjeros seguirían subiendo incluso después de terminada la guerra, lo que resultó ser imprudente.

Aunque hubo varias razones que explican la debilidad relativa del crecimiento manufacturero durante la guerra, la principal parecería haber sido el retiro de la élite o la disminución de su interés en las manufacturas desde el robusto periodo

de crecimiento de la ISI entre 1897 y 1907. Beneficiada como clase con el *boom* exportador, la oligarquía volvió a priorizar en su visión del desarrollo el crecimiento liderado por las exportaciones. De hecho, podían argumentar que mientras las exportaciones y las ganancias siguieran subiendo, en tanto que las importaciones permanecían relativamente constantes, la balanza de pagos peruana y su condición financiera general seguirían siendo favorables. Sin embargo, semejante postura ignoraba miopemente el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y generó el escenario para el incremento del descontento social en 1917, a medida que la guerra se aproximaba a su fin.

La primera señal de un serio descontento social debido a las perturbaciones económicas provocadas por la guerra se dio en los Andes del sur, con el estallido de la rebelión de Rumi Maqui en 1915-1916. La rebelión comenzó cuando varios centenares de campesinos indios atacaron las haciendas de dos prominentes terratenientes en la remota provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, el 1 de diciembre de 1915. Tras ser rechazados por los empleados fuertemente armados de la hacienda, que perdieron un estimado de entre 10 a 132 personas, su jefe, José María Turpo, fue cazado, brutalmente torturado y ejecutado seis semanas más tarde.

Resultó que Turpo había estado organizando a los campesinos juntamente con Teodomiro Gutiérrez Cuevas, un forastero que llegó a Azángaro originalmente en 1913 como el representante nombrado por Billinghurst para investigar el descontento campesino en la zona. Gutiérrez era un oficial de mediano rango del ejército que había ocupado diversos cargos gubernamentales en Puno desde comienzos de siglo, y que creía que la suerte de la población india podía mejorar con ciertas reformas educativas y legales. Después de huir a Chile tras el derrocamiento de Billinghurst, Gutiérrez, que parece haber tenido además inclinaciones anarquistas, asumió una posición más militante y en septiembre de 1915 regresó clandestinamente a Puno, donde se unió a Turpo y otros campesinos en sus esfuerzos organizativos.

Gracias a los pocos documentos sobrevivientes del movimiento sabemos que Gutiérrez asumió el nombre de «Rumi Maqui» (Mano de Piedra) y que, convocando la imagen benefactora de los incas, se nombró a sí mismo «General y Director Supremo de los pueblos indígenas y las fuerzas armadas del Estado Federal del Tahuantinsuyo» (Jacobsen 1993: 340). Procedió entonces a designar a una serie de funcionarios en los distritos distantes de este nuevo Estado federal, la mayoría de los cuales no fueron extraídos de las filas de las autoridades comunales establecidas.

El levantamiento estaba dirigido en contra de los terratenientes usurpadores de tierras y las abusivas autoridades locales, que buscaban monopolizar la producción y comercialización de la lana a expensas de las comunidades campesinas. Lo particularmente significativo de esta rebelión era su combinación de objetivos

socioeconómicos, con una agenda política que enfatizaba una mayor autonomía y un discurso milenarista que subrayaba la «indianidad». Sin embargo, según Jacobsen (1993: 239-342), este último recurso no era un retroceso romántico y atávico a la época incaica, como a veces se ha sugerido. Era, más bien, un medio a través del cual fortalecer a la comunidad frente a los esfuerzos de una nueva élite gamonal de catalogar a los indios en términos racistas como «bárbaros», a fin de justificar sus propios intentos de imponer una nueva dominación neocolonial, dura y explotadora a los nativos andinos en el contexto de la bonanza del comercio lanero.

Entretanto, el descontento comenzó a despertar en Lima y otros lugares, inspirado en parte por los acontecimientos internacionales. Los levantamientos de los trabajadores en Rusia pusieron en marcha la Revolución de 1917, y la subsiguiente toma del poder por parte de los bolcheviques en nombre del proletariado. Estos acontecimientos fueron publicitados por todo el mundo en los medios de comunicación y captaron la imaginación de trabajadores, intelectuales y el público, y no menos en Perú, donde los diarios de la clase obrera como *La Protesta* anunciaban el amanecer de un nuevo orden proletario mundial. Al mismo tiempo, el alza en el costo de vida y el estancamiento de los salarios provocados por la guerra europea brindaron un contexto social igualmente explosivo, gracias al cual podían tener gran resonancia los sucesos, ideas e ideologías revolucionarias que circulaban desde Rusia y Europa.

Aunque según Kammann (1990), el salario real no cayó en la industria azucarera, el costo de vida se elevó marcadamente, erosionando el nivel de vida de los trabajadores en una industria que había experimentado ganancias inesperadas durante la guerra. Buena parte de este deterioro puede atribuirse al incremento del precio de los alimentos, provocado por la masiva conversión de las tierras dedicadas a ellos en cultivos comerciales, precisamente para beneficiarse con el *boom* de las exportaciones. Diversas administraciones intentaron hacer frente a este problema requiriendo que las haciendas separaran una parte fija de sus tierras para el cultivo de productos alimenticios, sin conseguir resultado alguno.

A pesar del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores rurales durante la guerra, existían obstáculos significativos para su organización y movilización efectivas. Si bien por un lado, el considerable tamaño numérico y la concentración de los trabajadores rurales en el estratégico sector exportador del cual dependía la economía para crecer, y el Estado para el grueso de sus rentas, les daba cierta ventaja estratégica sobre el capital; por otro, las autoridades del gobierno y los empleadores tenían un interés vital en colaborar estrechamente para conservar el control sobre los trabajadores rurales del sector exportador. Además, lograr un alto grado de unidad no era posible para la fuerza laboral socialmente heterogénea y geográficamente fragmentada que trabajaba en este sector. Los

enclaves de trabajadores en las haciendas costeñas, las minas de la sierra y los campos de petróleo del norte no sólo estaban separados geográficamente uno de otro, sino que también estaban diferenciados étnica y racialmente, además de estar divididos según el tipo de trabajo que efectuaban, esto es, si eran permanentes, de corto plazo, contratados o aparceros. Todo ello implicaba que los trabajadores rurales podían tener distintos intereses y perspectivas que impedían la organización de un movimiento obrero eficaz y unificado.

Tomemos el ejemplo de la forma más común de trabajador rural en las haciendas, la categoría de los enganchados. Sus filas estaban conformadas por campesinos indios de la sierra, a los que se adelantaba el pago para que trabajaran por un plazo especificado y temporal, originalmente en el sector minero. Este sistema de mano de obra barata y migratoria se hizo más común después de la Guerra del Pacífico, debido al ruinoso estado de la industria azucarera de la posguerra y a la aguda escasez de trabajadores en las haciendas costeñas, una vez que el tráfico de culís chinos cesara en la década de 1870. A decir verdad, el enganche resultó ser un negocio lucrativo para los enganchadores —comerciantes locales, terratenientes y hasta funcionarios del Estado— que habían surgido en la sierra después de la guerra para organizar el sistema. A menudo, tenían la pésima reputación de aprovecharse de los reclutas más analfabetos y vulnerables con prácticas de contratación cuestionables. Sin embargo, los campesinos encontraron amplias razones para aceptar semejante trabajo en un número cada vez mayor, dada la necesidad de contar con suficiente efectivo con el que cancelar deudas, cubrir los gastos de las fiestas religiosas o llevar a cabo sus propias labores agrícolas. Con el tiempo, su explotación y manipulación a manos de los enganchadores contribuyó a una ola creciente de protestas rurales durante la segunda década del siglo, y los reformistas sociales urbanos hicieron numerosos llamados para que el gobierno incrementara su reglamentación. Por otro lado, el hecho de que fueran transitorios y que anduvieran yendo y viniendo de sus pequeñas parcelas a estos puestos temporales, hizo que resultara sumamente difícil la tarea de organizar en un movimiento obrero a este tipo de trabajadores que un historiador denominó «protoproletarios».

En cuanto a las divisiones étnicas y raciales, los trabajadores asiáticos contratados siguieron conformando una parte de la fuerza laboral rural de la costa, incluso después de que el tráfico de culís chinos fuera cerrado oficialmente en 1874. Dada la escasez de mano de obra después de la Guerra del Pacífico, el flujo de trabajadores contratados en China y Japón se reinició en 1899, aunque ahora estuvo mucho más reglamentado por el gobierno que antes. Unos 11.764 japoneses habían arribado al Perú hasta 1923, cuando se suspendió el tráfico, cifra semejante a la de los 15.000 trabajadores inmigrantes llegados desde China en aproximadamente el mismo periodo. El hecho de que los trabajadores asiáticos

gozaran, a menudo, de salarios y condiciones de vida relativamente mejores, dado que como inmigrantes se insertaban dentro de una categoría laboral mucho más reglamentada que sus contrapartes peruanas, provocó resentimientos y divisiones entre ambos grupos, que ocasionalmente estallaron en brotes de violencia. A decir verdad, al igual que sus pares urbanos que se amotinaron antes contra los chinos en Lima y otros lugares, los trabajadores rurales nativos tenían similares prejuicios en contra de los trabajadores asiáticos.

A pesar de estas y otras formidables divisiones y obstáculos a la organización de los trabajadores, durante la Primera Guerra Mundial, las huelgas en las áreas rurales se hicieron más comunes e intensas que en la capital. Los disturbios más serios se dieron en el valle costeño de Huaura en 1916, entre los trabajadores azucareros y portuarios, quienes exigían, entre otras cosas, un alza del cincuenta por ciento en sus salarios, junto con una jornada laboral de menos horas. La violencia estalló antes de que las autoridades lograran restaurar el orden y decretar una modesta alza salarial del diez por ciento. Asimismo, al año siguiente hubo violentos estallidos obreros en las minas de cobre de Cerro de Pasco y en las haciendas azucareras de La Libertad. La oligarquía culpó de estos disturbios a los agitadores anarquistas «foráneos» y si bien estos eran efectivamente bastante activos avivando el descontento obrero, a decir verdad simplemente encontraron un terreno fértil para su actividad militante en el deterioro de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores durante la guerra.

Los trabajadores, sobre todo los del campo, no fueron las únicas víctimas de la aceleración de la inflación y la caída de las condiciones de vida en los años que duró la guerra. Los sectores medios también sufrieron. Ellos experimentaron un crecimiento sustancial en las primeras dos décadas del siglo, en parte por la acelerada urbanización que se manifestó en un constante incremento en la población de Lima, de 172.927 en 1908 a 223.807 en 1920 (un incremento de treinta por ciento). El empleo en el comercio de importación y exportación, el sector tradicionalmente más activo de la ciudad, representaba un estimado del quince por ciento de la población masculina de Lima, más del doble que la proporción de obreros en las fábricas. A medida que la economía avanzaba, igual sucedía con el número de bancos (pasaron de cuatro en 1897 a doce en 1928), compañías de seguros (aumentaron de dos en 1899 a trece en 1928) y fábricas. Al combinarse con la expansión en la infraestructura del transporte y gobierno para atender a una economía más compleja, el número de empleados y de profesionales se incrementó. Éstos incluían oficinistas, pequeños burócratas, dependientes de tiendas minoristas, tenedores de libros, abogados, médicos, ingenieros, tenderos, maestros y estudiantes universitarios.

A comienzos del siglo, el número de empleados bastaba para merecer que en 1903 se fundara la Sociedad Empleados de Comercio (SEC). Desde su

concepción, la SEC no sólo asumió el de papel mutualista de cubrir los gastos médicos y funerarios de algunos de sus miembros, sino que presionó al gobierno en nombre de los empleados. Los padrones de la SEC crecieron con el estallido de la guerra y la concomitante espiral inflacionaria, y al igual que los obreros, la organización se hizo más militante en la presión sobre los empleadores y el gobierno en pos de reformas.

El crecimiento de la clase media puede apreciarse, asimismo, en la expansión del sistema educativo y en el incremento del sector de la población que sabía leer y escribir. Por ejemplo, la matrícula de estudiantes universitarios, los de la Universidad Mayor de San Marcos inclusive, subió a 82,5 por ciento en la década antes de 1917. En este periodo hubo un correspondiente incremento porcentual en el número de escuelas normales en donde se graduaba la mayoría de los maestros peruanos. Por último, el número de escuelas primarias y secundarias se elevó también en un cuarenta y ocho por ciento (de 220 en 1915 a 327 en 1919).

Estos índices educativos en alza sugieren una creciente masa de lectores que consumía un número cada vez más grande de diarios y revistas en circulación para finales de la Primera Guerra Mundial (de 167 en 1918 a 197 en 1920 y 473 en 1928). *El Tiempo*, periódico que atendía a la emergente clase media, y los anarquistas *Los Parias* y *La Protesta*, leídos por los trabajadores, se unieron durante la guerra a los dos diarios más importantes de Lima, *La Prensa* (demócrata-liberal) y *El Comercio* (civilista-independiente), que representaban distintos intereses oligárquicos.

Todo esto indica que en el transcurso de la República Aristocrática no solamente hubo una significativa expansión material, sino también cultural. Esta efervescencia cultural fue encabezada por una nueva generación de intelectuales, la llamada generación del centenario, que ahora tomó la palestra. Su perfil biográfico estaba en marcado contraste con su predecesora, la generación del novecientos. Esta última, dirigida por luminarias como José de la Riva-Agüero y Osma, Víctor Andrés Belaunde y Francisco García Calderón, tenía un origen social en la aristocracia criolla que había asumido la conducción política del país a comienzos de la República Aristocrática. Nacidos en la década de 1880, todos crecieron y se vieron conmocionados por la calamidad nacional de la Guerra del Pacífico, que les hizo enfrentar el reto de comprender qué era lo que había fallado en el país para que algo así ocurriera. Varios de ellos estuvieron influidos por las ideas del positivismo europeo, del cual extrajeron los preceptos «científicos» que darían forma al sostén intelectual y filosófico de la racionalización del Estado y la sociedad durante la República Aristocrática.

En cambio, la nueva generación del centenario, cuyas figuras prominentes fueron José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, nació en la década de 1890. Salvo por algunas excepciones, ellos fueron de origen mestizo y de clase

media. Esas diferencias étnicas y de clase los distinguían marcadamente de la generación aristocrática de 1900 que, en palabras de Luis Alberto Sánchez, «tenía todo a su favor: diarios, dinero, posición social, el favor oficial, una coincidencia de valores con la clase gobernante, teorías inofensivas, un idealismo insípido y su propia universidad» (citado en Chavarría 1979: 56). Varios integrantes de la generación del centenario también venían de provincias, parte de la creciente emigración de personas del interior a la capital, a medida que el centro económico de gravedad se desplazaba hacia el litoral. Sus orígenes provincianos tendieron a darles una perspectiva más nacional, lo que coincidió con una de sus mayores preocupaciones intelectuales: la creación de una cultura verdaderamente nacional, por oposición a otra centrada en Lima. A diferencia de sus predecesores, los integrantes de la generación del centenario fueron, por lo general, fuertes activistas políticos: en palabras de Sánchez, mucho más «pragmáticos». Por último, les interesaba mucho más examinar la historia y la cultura peruanas en busca de pistas con las cuales buscar soluciones a los problemas contemporáneos.

Las dos figuras más importantes de la generación de 1919 tenían ambas raíces provincianas, mestizas y de clase media. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en 1895 en Trujillo, en el corazón de la tierra productora de azúcar de la costa norte. Aunque por el lado de su madre contaba con vínculos aristocráticos con la vieja clase hacendada que se remontaban hasta el periodo de la independencia, por su familia y su profesión Raúl Haya, su padre, caía firmemente en las filas de la clase media provinciana. Nacido en una familia de maestros en Cajabamba, en el vecino departamento de Cajamarca, Raúl Haya se mudó a Trujillo, en donde contrajo un buen matrimonio e hizo carrera en los negocios, el periodismo y la política.

Durante la infancia de Víctor Raúl, Trujillo, una ciudad señorial y cuna de la independencia, así como su fértil *hinterland* agrario, vivían el paso desgarrador al moderno monocultivo de azúcar industrializada. El conflicto de clases resultante enfrentó a un proletariado rural emergente, conformado por pequeños agricultores dislocados y trabajadores emigrantes de la sierra vecina, con una nueva élite corporativa modernizante decidida a convertir las tradicionales haciendas de tipo patrimonial en operaciones más eficientes de tipo fabril. Descontentos con el sistema más disciplinado, regimentado, impersonal y explotador de la plantación, los trabajadores azucareros pronto comenzaron a organizarse y a protestar.

El joven Víctor Raúl fue testigo de este proceso y fue reaccionando a los conflictos provocados por el descontento laboral que incendiaron su antes plácida capital provinciana. Cuando era adolescente solía ir a la casa obrera local que quedaba calle abajo de su casa, donde se mezcló con el nuevo tipo de organizadores obreros, algunos de ellos enviados desde Lima, que propagaban sus nuevas y radicales ideas anarquistas. Ellas eran reforzadas por los diarios,



Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), fundador y jefe del Partido Aprista por más de medio siglo. Fotografía de la colección Alfred Métraux, cortesía de Daniel Métraux. Fotografía de Wendy Walker.

volantes y otra literatura radical que conformaban la improvisada «biblioteca» del local, en donde Víctor Raúl se sentaba fascinado por horas sin fin. Además, formaba parte de un grupo bohemio de jóvenes escritores, artistas e intelectuales locales que incluía al gran poeta peruano César Vallejo. Posteriormente asistió a la Universidad de Trujillo y luego, en 1917, se mudó a Lima y a la Universidad Mayor de San Marcos para seguir una carrera en leyes y sumergirse en la política estudiantil radical.

De otro lado, José Carlos Mariátegui nació en Moquegua, en la costa sur, en 1894. Su madre era una mestiza del pequeño pueblo de Chancay, no lejos de

Lima, que contrajo matrimonio con un miembro de la clase alta criolla de Lima. Sin embargo, su padre abandonó a la familia poco después de su nacimiento y creció sin él y en condiciones económicas modestas, mantenido por su madre costurera, y sufriendo por su débil salud desde temprana edad. Su madre lo llevó a Lima, luego de un accidente en la escuela en 1902, donde fue operado infructuosamente, quedando inválido por el resto de su vida. Tal vez la vida sedentaria de una larga recuperación lo llevó a su pasión por la lectura, y a los once años de edad devoraba ya las obras de Anatole France, Manuel Beingolea y Francisco y Ventura García Calderón.

José Carlos eventualmente se recuperó lo suficiente físicamente como para poder trabajar en 1909 como copista en *La Prensa*. Gracias a unas jornadas laborales de catorce horas y a su aguda inteligencia, el joven y precoz —aunque frágil— Mariátegui, que medía 1,55 m de altura y pesaba apenas algo más de cuarenta y cinco kilos, logró convertirse en reportero en 1911 y pronto ganó lectores para su divertida cobertura de la escena social limeña. Sin embargo, el joven y vehemente reportero dirigió cada vez más su atención a temas políticos y sociales en un momento en que la capital se hundía en las luchas laborales y las dislocaciones económicas provocadas por la Gran Guerra. Entretanto, a medida que Haya y Mariátegui alcanzaban la madurez política, resultaban ilusorias las grandes esperanzas que los civilistas habían tenido de que el retorno electoral de José Pardo a la presidencia en 1915 estabilizaría la República Aristocrática y la liberaría de las conmociones políticas y económicas de la guerra. Como presidente, Pardo recurrió al tipo de gobierno personalista y arbitrario que había agitado el partido una década antes, con Leguía. Es más, las medidas iniciales tomadas para estabilizar la economía no tuvieron sino un éxito momentáneo a medida que las exportaciones se recuperaban, pero luego despegaron y desataron una severa espiral inflacionaria.

El deterioro político y económico de la República Aristocrática llegó así a su desenlace. A medida que Pardo se acercaba al final de su gobierno en 1919, encabezaba un civilismo debilitado que era seriamente vulnerable a todo desafío. ¿Pero quiénes serían los nuevos contendores políticos? Ciertamente, no los candidatos de los partidos tradicionales, como el civilismo, que parecían débiles y divididos. Los demócratas, que desde 1903 habían sido marginados cada vez más gracias al control civilista del aparato electoral, habían colapsado virtualmente tras el deceso de su jefe Piérola en 1913. Asimismo, los restantes partidos dependían de líderes ancianos y personalistas: los constitucionalistas de Cáceres y los liberales del caudillo Augusto Durán. El Partido Liberal, derivado de una facción que rompió con los demócratas en 1899, jamás pasó en el mejor de los casos de ser un partido minoritario en las coaliciones parlamentarias de los años subsiguientes. El problema principal era que ninguno de estos partidos había desarrollado una nueva generación de dirigentes que estuvieran en condiciones de hacer frente

a los desafíos de la posguerra. De modo que en vísperas de las elecciones de 1919, los partidos de la élite se encontraban en un virtual estado de colapso. Como Stein (1980: 38) dijera en forma tan expresiva, eran «imponentes casas coloniales que aún eran propiedad de muchos de sus miembros más prominentes; fachadas impresionantes que escondían estructuras envejecidas abrumadas por la decadencia interna».

Las grandes huelgas de 1918-1919

En esta endeble superestructura política de la República Aristocrática estalló un suceso trascendental: la masiva huelga por la jornada de ocho horas en enero de 1919. Su causa subyacente fue el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera de Lima-Callao, cuyos salarios seguían estancados en medio de la espiral inflacionaria de la posguerra. Enfrentado con un creciente descontento obrero, Pardo presionó tardíamente al Congreso para que aprobara una serie de leyes laborales, varias de las cuales habían sido propuestas por José Matías Manzanilla hacía más de una década. Tal vez la más importante de ellas fue una ley firmada el 25 de noviembre de 1918, diseñada para proteger a mujeres y niños en su centro de trabajo. Paradójicamente, ella fue el principal catalizador de la huelga.

Más de mil mujeres trabajaban en las fábricas textiles, almacenes de ropa, fábricas de jabón, velas y galletas, la oficina de correos y el servicio telefónico de Lima-Callao. Sin embargo, su salario era bastante menor que el de sus contrapartes masculinas, de modo que ellas comenzaron a presionar en pos de un cambio. De hecho, ya habían mostrado una sorprendente militancia cuando formaron la Sociedad Labor Feminista y la Sociedad Progreso Feminista, esta última en 1916, conformada principalmente por costureras, pero que se arrogaba la representación de todas las mujeres trabajadoras. Cuando la ley fue finalmente aprobada a instancias de Pardo en 1918, se fijaron varios resguardos, entre ellos la jornada de ocho horas para mujeres y los niños de catorce a dieciocho años de edad.

En lugar de apaciguar a los trabajadores, la promulgación de la ley tuvo el efecto contrario; ella hizo que los obreros textiles varones también entraran en huelga reivindicando la jornada de ocho horas, con el mismo salario o uno más alto. Los propietarios de las fábricas reaccionaron negativamente a esta demanda porque el mercado de productos textiles había caído agudamente tras la guerra. Ellos vieron la huelga como una «bendición disfrazada» —una oportunidad para reducir la producción— y comenzaron de inmediato a cerrar las fábricas y a licenciar a sus trabajadores.

A los trabajadores textiles pronto se unieron los panaderos, curtidores y los operarios de aserraderos de la ciudad, todos los cuales exigieron también la jornada de ocho horas. Pronto se formó un Comité Pro Paro General, mientras

que militantes anarquistas como Nicolás Gutarra, Héctor Merel y Julio Portocarrero se movían rápidamente para ampliar la participación de los trabajadores en la huelga. Los anarquistas eran particularmente fuertes en la industria textil y en la panadera, y hacía tiempo que proponían la jornada de ocho horas. La difusión de la movilización recibió otro ímpetu con el estallido de huelgas, en enero, en los campos petroleros de Zorritos, en Piura, y en la fundición de cobre de Casapalca, en Cerro de Pasco, la primera en busca de la jornada de ocho horas y la segunda por un mayor salario y precios más bajos para los alimentos. Estas huelgas, que estuvieron acompañadas por una violencia esporádica y por pérdidas de vida, dieron la impresión de que el movimiento estaba esparciéndose fuera de Lima e hizo que sus organizadores en la capital anunciaran un paro general de cuarenta y ocho horas el 12 de enero.

En general, los trabajadores de Lima respondieron a este llamado, y al medio día, la capital y su puerto se encontraban virtualmente paralizados, sin mercados o fábricas, y el sistema de tranvía cerrado. En este momento, los universitarios se unieron al movimiento. La Federación de Estudiantes del Perú designó a tres representantes, entre ellos Haya de la Torre, para que asistieran la huelga. Sin embargo, en este momento no eran sino un grupo más que la respaldaba y su participación, que posteriormente tendría mayor importancia, fue relativamente menor.

A medida que la huelga se intensificaba, el gobierno de Pardo se encontraba ante un serio dilema. En particular, temía que cuanto más se prolongara, tanto mayor era la posibilidad de que terminara en un sangriento enfrentamiento entre los trabajadores en huelga y el ejército como había ocurrido apenas una semana antes en Buenos Aires en la llamada Semana Trágica. Es más, el gobierno se daba cuenta de que cuanto más durara el paro, tanto mayor sería el daño que inflingiría a la precaria economía de la posguerra y que la represión no serviría de mucho, dada la masiva respuesta de los trabajadores. Todas estas preocupaciones eran particularmente alarmantes para la élite del país, cuyo nivel general de ansiedad y aprensión por un posible descontento popular se había incrementado desde el estallido y las conmociones de la Revolución rusa de 1917. Por lo tanto, el 15 de enero Pardo cedió a las demandas de los trabajadores y decretó la jornada de ocho horas con los salarios existentes. Los jubilosos huelguistas respondieron poco después poniendo fin a la huelga.

Evidentemente, su resultado fue una gran victoria para los huelguistas y ha sido largamente interpretado como el momento fundador, en que el movimiento obrero peruano alcanzó la mayoría de edad. La postura revisionista de Parker (1995: 417) reconoce que los trabajadores ganaron una importante victoria táctica, pero cuestiona las afirmaciones obreras de que el gobierno capituló íntegramente a los huelguistas, y de que una nueva era de militancia obrera hubiese surgido. Es cierto que el resultado de la huelga tuvo el efecto, momentáneamente al menos,

de intensificar la unidad y la militancia de los trabajadores. La afiliación a los sindicatos se incrementó prestamente y se formaron otros, entre ellos la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú, que unió a los que se dedicaban a esta ocupación en todo el Perú en una sola federación nacional. Significativamente, el dirigente estudiantil Haya de la Torre, quien había trabado amistad con varios de los dirigentes anarquistas de la huelga, presidió el comité obrero que organizó la nueva confederación. En años venideros, esta amistosa relación entre Haya y los trabajadores textiles sería una fuente de apoyo crucial para el joven y aspirante político y reformador. Además, en la mente popular, Haya estaría prominentemente asociado con su exitosa lucha por la jornada de las ocho horas, uno de los primeros triunfos obreros de este tipo en toda América Latina.

Animados tal vez por su reciente éxito, pero malinterpretando la respuesta del gobierno de Pardo como una capitulación, los dirigentes de la huelga intentaron presionar su ventaja tomando otra candente reivindicación popular del momento. En abril se reconstituyó el Comité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias, formado originalmente en 1916 sin mucho éxito, que casi de la noche a la mañana reunió a una amplia gama de organizaciones laborales y populares, que representaban unos 30.000 trabajadores de Lima-Callao. La razón principal de su éxito era la intensificada espiral inflacionaria de la posguerra, que había visto duplicarse los precios de algunos de los alimentos de primera necesidad entre diciembre y marzo.

El jefe del nuevo comité era el apasionado orador y organizador anarco-sindicalista Nicolás Gutarra, quien había tenido un papel prominente en la exitosa huelga de enero. Al no recibir respuesta alguna del gobierno de Pardo con respecto a una serie de propuestas para abaratar el costo de las subsistencias, entre ellas el congelamiento del precio de los alimentos de primera necesidad, de alquileres y fletes, y medidas para forzar a los agricultores a que produjeran más cultivos, el comité convocó otra huelga general el 27 de mayo. La huelga había sido programada para aprovechar la incertidumbre política propiciada por las elecciones presidenciales para determinar el sucesor de Pardo, el 18-19 de mayo. En ellas, Antenor Aspíllaga, el candidato civilista del oficialismo, parecía haber perdido ante su contendor, el ex civilista, ex presidente e inconformista político Augusto B. Leguía (1908-1912). Aspíllaga apeló a la corte suprema solicitando un recuento de los votos, afirmando que se habían producido irregularidades en el sufragio en el campo, justamente donde se consideraba que él tenía buena parte de su caudal electoral.

A diferencia de la huelga anterior, esta vez hubo bastante violencia y saqueos, los cuales hicieron que Pardo recurriera al ejército e impusiera la ley marcial. El paro parecía haber perdido impulso una vez que el gobierno arrestó y encarceló a sus principales organizadores, y el comité declaró su levantamiento el dos de junio, tras lo cual se suspendió la ley marcial y el gobierno asumió una actitud más

conciliadora. La prensa posteriormente informó que la huelga había costado más de cien vidas y más de dos millones de soles en daños a la propiedad. Más de doscientas tiendas, en su mayoría propiedad de asiáticos, habían sido destruidas cuando los frustrados saqueadores se volcaron una vez más en contra de esta minoría altamente visible.

Ni bien acababa de volver la calma a la capital, cuando el punto focal de las protestas se desplazó a la venerable Universidad Mayor de San Marcos, donde la reforma venía gestándose hacía algún tiempo. Aunque los orígenes más antiguos del movimiento se remontaban a comienzos de siglo, éste recibió un nuevo impulso con los acontecimientos europeos ocurridos al final de la Primera Guerra Mundial. Para empezar, la magnitud de las muertes y la destrucción causada por el conflicto europeo produjo una profunda desilusión frente al orden capitalista occidental, en particular entre los jóvenes e intelectuales. Al mismo tiempo, el estallido de la Revolución rusa de 1917 y la aparición del socialismo y del comunismo, hicieron surgir la esperanza de que un nuevo orden, más humano y justo, estaba a punto de nacer.

Estos sentimientos se esparcieron inmediatamente a las universidades de América Latina, produciendo sus primeros resultados concretos en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en 1918. Allí, los universitarios declararon la necesidad de que la sociedad se limpiara a sí misma del sórdido materialismo y de los excesos capitalistas que ellos creían había causado la conflagración. Esta nueva corriente ideológica se fusionó con otra ya poderosa: la de sentimientos antiimperialistas contrarios a la intervención estadounidense y su «diplomacia del dólar»[1] en el Caribe, que databa de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. En San Marcos, la ascendente generación de 1919, cada vez más sensibilizada con las luchas sociales de los trabajadores al final de la guerra, comenzó ahora a vilipendiar al profesorado establecido como agente de la plutocracia local, aliada con los empresarios *yankees*. Para ellos, estos catedráticos eran culpables de «corromper» a la juventud latinoamericana con las falsas doctrinas del materialismo y del capitalismo irrestricto que identificaban con los postulados del positivismo, promovidos constantemente por la generación anterior del novecientos. Había llegado la hora de poner fin al monopolio que esta generación de catedráticos ejercía sobre la administración y el currículo de la universidad, y de establecer reformas amplias.

El catalizador para el estallido de la reforma universitaria en el Perú fue el arribo a Lima del socialista argentino Alfredo Palacios, en mayo. Palacios, un

---

1. «Dollar diplomacy», esto es una política exterior fortalecida por el poderío de los recursos financieros de un país; dícese en especial de la forma en que los EE. UU. conducían sus relaciones internacionales entre 1905 y 1910. N. del T.

potente orador, se presentó ante una gran multitud en la Universidad Mayor de San Marcos para explicar el movimiento de Córdoba. Su discurso tuvo el efecto inmediato de galvanizar al estudiantado a la acción y recibió una amplia cobertura en un nuevo diario progresista llamado *La Razón*, fundado por Mariátegui poco después de dejar *El Tiempo*, tras una disputa con su editor. De hecho, fue en las oficinas de *La Razón* donde varios trabajadores y alumnos de San Marcos se habían reunido antes para coordinar la estrategia a seguir en el segundo paro general de los obreros. En la universidad, los estudiantes exigían ya una serie de reformas que comprendían el retiro de varios catedráticos y la introducción del cogobierno estudiantil, esto es el derecho a participar en la administración universitaria, incluyendo la selección de profesores. El respaldo estudiantil para estas demandas se intensificó ahora con la presentación de Palacios en San Marcos. Entre los principales defensores de las reformas se encontraban los futuros historiadores Raúl Porras Barrenechea y Jorge Basadre; Haya de la Torre, el posterior fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA); y sus compañeros Luis Alberto Sánchez y Manuel Seoane.

Otra conmoción política estalló en medio de estos sucesos tumultuosos. El 4 de julio, Leguía llevó a cabo un golpe preventivo contra el gobierno de Pardo, luego de una serie de decisiones promulgadas por la Corte Suprema a favor de su oponente Aspíllaga, con respecto a las supuestas irregularidades en la votación de las elecciones de mayo. Leguía calculaba que ahora su victoria estaba amenazada por sus enemigos, de quienes se decía venían maniobrando para que la cuestionada elección se decidiera en el Congreso, donde contaba con pocos seguidores. Cuatro días después del golpe, Leguía ordenó la libertad de los dirigentes del paro general, los cuales procedieron a organizar una inmensa demostración a favor del nuevo presidente. Presentándose en el balcón del palacio presidencial, Leguía se dirigió a la masa popular en un emotivo discurso en el cual identificó plenamente a su nuevo gobierno y a sí mismo con la causa de los trabajadores.

Leguía, claro está, no era ningún recién llegado a la política peruana. Había sido ministro de hacienda en el primer gobierno de Pardo, y luego presidente entre 1908 y 1912. Sin embargo, su retorno a la presidencia en 1919, después de un largo periodo de «destierro político» como paria de su antiguo partido, revelaba la virtual bancarrota del civilismo y la debilidad de los partidos tradicionales de la República Aristocrática. También mostró la extraña habilidad de Leguía para uncir las fuertes corrientes de cambio político y social que azotaban al país a sus propias ambiciones políticas.

Capítulo IX

El desafío populista, 1919-1945

Augusto B. Leguía fue el capitalista por excelencia de comienzos del siglo XX, un hombre que alcanzó su alta investidura por sus propios méritos y esfuerzo. Su genio empresarial lo llevó a los círculos de negocios de la élite. Provenía de una familia de clase media modesta, pero con buenas conexiones en la costa norte. Educado en una escuela comercial británica en Valparaíso, Chile, Leguía dejó su primera huella en el mundo empresarial como agente y administrador de la New York Life Insurance Company. A partir de esta temprana conexión con los intereses económicos británicos y estadounidenses, adquirió una duradera fe en lo que un historiador llamó «el efecto de demostración extranjero». Así, él creía firmemente que la vía peruana al desarrollo estaba ligada a su habilidad para atraer capitales, tecnología, mercados y conocimiento empresarial de los países avanzados de Occidente, una «perspectiva modernizadora» que configuraría su carrera política.

Leguía emparentó, gracias a su matrimonio, con un importante hacendado azucarero británico llamado Henry Swayne, cuyas haciendas de la costa norte el joven empresario tomaría y transformaría, con la ayuda crediticia de los comerciantes-banqueros de Liverpool, en la rentable British Sugar Company. Posteriormente, diversificó su negocio exportador de azúcar en seguros, finanzas, construcción de ferrocarriles y extracción del caucho. Es más, a través del matrimonio de sus hijas con las prominentes familias Chopitea, Ayulo Laos y Larrañaga, Leguía cimentó sus vínculos con un poderoso grupo financiero respaldado por el crédito a gran escala de fuentes británicas y estadounidenses.

Su primer gobierno terminó mal, con un partido civilista profundamente dividido. Posteriormente rompió con el partido y fue obligado por Pardo a exiliarse en Londres y Nueva York, donde renovó sus vínculos empresariales y financieros con miras a la reconstrucción de la golpeada economía peruana de la posguerra. Percibiendo el vacío político de la República Aristocrática luego de la guerra, así como las posibilidades presentadas por el descontento social que amenazaba con

derribar dicho orden, Leguía retornó al Perú a comienzos de 1919 para convertirse en un candidato independiente a la presidencia.

Su contendor civilista era el viejo hacendado Ramón Aspíllaga Barreda, cuyos orígenes conservadores y aristocráticos resultaban muy poco atractivos para un público que exigía cambios. Leguía aprovechó su reputación anticivilista y pasó a la ofensiva contra sus antiguos compañeros, a quienes caracterizaba como anacrónicos y políticamente quebrados ante los formidables desafíos económicos y sociales que el Perú debía enfrentar en los años de la posguerra. Hábilmente, dirigió su atractivo hacia las desencantadas clases media y obrera, prometiendo recurrir a su pasado como empresario exitoso y a sus vínculos con las finanzas internacionales para emprender un nuevo programa de modernización y reforma nacional. Dicho programa estaba diseñado para crear lo que llamó la *Patria Nueva*, que comprendía un Estado más fuerte e intervencionista, capaz de reiniciar rápidamente el crecimiento económico, sobre todo en el sector exportador. El crecimiento así liderado sería estimulado por una gran inyección de préstamos e inversiones extranjeras, y facilitado por un masivo proyecto de construcción de carreteras con las cuales mejorar la infraestructura del transporte. En suma, Leguía prometía a las clases populares peruanas, agotadas por la inflación, una era de prosperidad y crecimiento económico sostenido.

Una vez en la presidencia, Leguía se movió rápidamente para consolidar su control, atacando a sus rivales en el Partido Civil. Consciente de que habían intentado bloquear su elección, el nuevo presidente inició una campaña sistemática de represión para desmantelar el partido y forzar a sus líderes al exilio. Este resultó ser otro clavo en el ataúd civilista.

Con la base de poder tradicional del civilismo golpeada y aislada, Leguía tomó medidas durante su primer gobierno para arraigar su régimen en un grupo social de contrapeso, la nueva clase media. Tal vez la mejor medida de este desplazamiento político fue la expansión de la burocracia estatal, que se multiplicó cinco veces durante el Oncenio de Leguía. De este modo, el número de funcionarios públicos subió de apenas 898 en 1920 a 5.313 en 1931, lo que provocó que un opositor del régimen, el respetado Víctor Andrés Belaunde, tildara a su gobierno en forma nada inexacta de «cesarismo burocrático».

El intenso crecimiento del empleo en el sector público también se vio reflejado, en distinto grado, en el incremento general de los grupos profesionales del sector medio (médicos, abogados, empresarios, ingenieros y técnicos, empleados públicos, contadores, periodistas y estudiantes) en Lima en el mismo periodo. Leguía los atrajo de diversas formas. Por ejemplo, en 1924 empujó al Congreso para que aprobara la Ley del Empleado, que resolvía muchos agravios de larga data de los profesionales. Asimismo, durante sus once años de gobierno también satisfizo el deseo de la clase media de contar con mayores oportunidades educativas

reorganizando, expandiendo y modernizando el sistema educativo, con la asesoría y ayuda de educadores norteamericanos importados. Durante el Oncenio, el número de alumnos del país se incrementó en sesenta y dos por ciento, de 195.000 en 1920 a 313.000 en 1930.

La expansión e incorporación de las clases medias urbanas no habría sido posible, claro está, sin el reinicio del crecimiento económico luego de las dislocaciones causadas por la Primera Guerra Mundial. Para alcanzar este objetivo, Leguía buscó enérgicamente atraer inversiones y préstamos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, cuyo comercio e inversiones en América del Sur se incrementaron enormemente, como ya se señaló, después de la apertura del canal de Panamá en 1913. Este crecimiento se produjo a expensas de los intereses británicos y europeos, que fueron eclipsados rápidamente por los de los Estados Unidos. De este modo, la participación norteamericana en las inversiones directas hechas en el Perú, que según Stallings (1987: 247) constituían el diez por ciento en 1900, subió a cuarenta por ciento en 1914, sesenta y nueve por ciento en 1919, y un pico máximo de setenta y cuatro por ciento en 1924. La parte estadounidense de las importaciones y exportaciones peruanas mostró un crecimiento similar, alcanzando en 1919 los niveles máximos de sesenta y dos y cuarenta y seis por ciento, respectivamente.

Durante el Oncenio, las inversiones directas estadounidenses y británicas en el Perú se elevaron de $161 a $209 millones. Hacia 1930, la participación de los EE. UU. en estas inversiones era de $143 millones, el ochenta por ciento de las cuales eran en minería y petróleo. La deuda externa peruana creció en forma aún más drástica durante aproximadamente el mismo lapso (1919-1931), de $12 a $124 millones, principalmente con la banca de Nueva York. En suma, la «Patria Nueva» de Leguía se basó en un modelo de «desarrollo impulsado por la deuda». El capital extranjero y los préstamos brindarían el ímpetu necesario, no sólo para promover el crecimiento económico sino para «modernizar» el país, esto es promover el capitalismo, algo que Leguía impulsaba con fuerza.

Aunque Leguía proponía la idea de una modernización a través del capital y las empresas estadounidenses, no está del todo claro qué significado tuvo esto en función del desarrollo nacional. Los historiadores Thorp y Bertram sostienen, al igual que Drake, que su intención era simplemente tomar préstamos en el exterior y efectuar concesiones favorables al capital extranjero para así estimular el crecimiento, financiar la expansión de la burocracia y abrir oportunidades para la concusión y corrupción de la nueva élite plutocrática favorecida y respaldada por su régimen. Es bajo esta perspectiva que evalúan los vastos proyectos de Leguía de construcción de carreteras y obras públicas, así como la ingente expansión del sector exportador en manos extranjeras (cobre y petróleo). Es más, según esta postura, desde el punto de vista del desarrollo nacional, las políticas económicas

seguidas por Leguía tuvieron como resultado el estancamiento o la decadencia tanto del sector exportador en manos nativas (azúcar, algodón y minería), como del sector manufacturero doméstico. Los únicos que realmente ganaron con su programa modernizador fueron las corporaciones estadounidenses (Foundation, Cerro, Standard Oil y Frederick Ley & Company).

Desde otra perspectiva, los historiadores Caravedo (1977), Burga y Flores-Galindo (1980) y Quiroz (1993) sostienen que Leguía buscó industrializar el país y por ello favoreció la formación de una burguesía industrial nacional. Desde este punto de vista, su programa de construcción vial y de obras públicas promovió la expansión del mercado interno mejorando el transporte y el acceso a los mercados, y generando un incremento del empleo asalariado (y de las planillas gubernamentales), la demanda y el poder adquisitivo de los consumidores. Lo mismo puede decirse de las elevadas tasas de inmigración a Lima desde las provincias y del surgimiento de la clase media durante el Oncenio, que implicaron un incremento perceptible en las cuentas de ahorros pequeñas de la banca local. Si bien el número de empresas manufactureras cayó durante la década de 1920 en comparación con la de 1895-1908, ello quedó compensado por el surgimiento de otras altamente capitalizadas en el sector construcción (carreteras, puertos, ferrocarriles, instalaciones sanitarias, de irrigación y refrigeración, entre otros), en las cuales los grupos domésticos participaban juntamente con el capital extranjero. Por último, según esta postura, las políticas arancelarias y crediticias fueron favorables para los fabricantes locales durante la segunda mitad del Oncenio.

Estas dos interpretaciones de la política económica seguidas por Leguía no son necesariamente incompatibles entre sí. La difusión del capitalismo se vio facilitada por las inversiones extranjeras y, dada la crónica dependencia de las exportaciones por parte de la economía peruana, tanto las inversiones extranjeras como las domésticas naturalmente se dirigieron hacia ese sector. Leguía percibía al Estado como un ente que facilitaba este proceso al ampliar la infraestructura y los servicios que mejoraban las exportaciones, y por lo tanto al crecimiento que ellas encabezaban. Con todo, esto no quiere decir que el desarrollo de las manufacturas domésticas y del mercado interno no constituyera también un importante objetivo económico. En sus discursos públicos, Leguía explicaba la importancia de la industrialización y el papel del capital extranjero. «El Perú se presenta en el mundo económico como un pueblo productor de materias primas», dijo. «Y ha llegado el momento de que las transforme en artefactos modernos [...] Es por tanto deber proponer el encauzamiento de las energías del país en el sentido industrial» (citado en Kristal 1987: 189 [1991: 181]). En otras ocasiones, Leguía planteaba que «somos tributarios del capital extranjero indispensable aún para construir nuestros ferrocarriles, higienizar nuestras ciudades, irrigar nuestras áridas costas, pero esto corresponde a una transitoria etapa de nuestro progreso, que [inevitablemente]

conduce a la futura independencia» (citado en Drake 1989: 221). El problema era que el capital nacional por sí solo no podía llevar a cabo «la imperiosa necesidad de crear industrias» (citado en Kristal 1987: 190 [1991: 181]).

En 1921, Leguía inició negociaciones con varios bancos de Nueva York para obtener su primer gran préstamo extranjero de $15 millones. Los términos eventuales del mismo, hechos por Guarantee Trust, muestran el fuerte grado de sumisión de Leguía ante los intereses extranjeros, y los estadounidenses en particular. Los bancos insistieron en una serie de garantías extraordinarias. La primera de ellas fue el nombramiento de un asesor financiero estadounidense en su círculo íntimo, a quien se le consultaría por adelantado toda nueva política económica y administraría el servicio aduanero nacional, así como cualquier otra agencia financiera recién creada. Leguía aceptó estas demandas y se nombró para el cargo a William Cumberland, un funcionario de comercio extranjero en el Departamento de Estado. Este había sido alumno de Edwin Walter Kemmerer, el profesor de economía de Princeton que recomendaría y ayudaría a impulsar unas reformas fundamentales en los sistemas monetarios, bancarios y fiscales de varios países latinoamericanos entre 1923 y 1931. Posteriormente, informó significativamente al Departamento de Estado que Leguía no estaba tan interesado en tales reformas, como en contar con alguien que pudiera facilitarle una línea de crédito en los bancos de Nueva York.

Después de investigar aún más la situación financiera del Perú, Guarantee Trust efectuó una serie de demandas adicionales, entre ellas la creación de un banco central y una opción exclusiva sobre todo préstamo futuro respaldado con la renta de las aduanas. En este momento Leguía se resistió a entregar el control total de las finanzas peruanas a un banco extranjero, pero sí creó el Banco Central de Reserva e incorporó a Cumberland en su directorio. Con la presión del Departamento de Estado, el Guarantee Trust finalmente hizo un préstamo de $2,5 millones en 1922 —avalado con las rentas petroleras—, considerablemente más pequeño que los $15 millones solicitados inicialmente. Leguía los gastó de inmediato en un mes.

El indigenismo y la rebelión india

Si el programa de Leguía estuvo dirigido políticamente —por lo menos inicialmente— a las clases media y obrera, también alcanzó por el momento al campesinado indígena y a sus defensores. Del mismo modo en que había respondido favorablemente a las demandas de los trabajadores en 1919, el nuevo presidente reaccionó positivamente al creciente descontento indio en los Andes del sur y su resonancia entre los intelectuales urbanos del movimiento indigenista. Como vimos, el precio de la lana se había derrumbado después de 1917, luego de un auge sin precedentes antes y durante la guerra. Por ejemplo, los precios pagados

por la lana de oveja peruana de primer nivel cayeron de 50,5 peniques la libra en 1918, a 39,5 peniques en 1920 y a 11,5 en 1921. Este desplome de los precios tuvo un nocivo impacto en el ingreso de los campesinos y de los terratenientes del sur, donde la producción y la exportación lanera constituían el motor principal del crecimiento económico.

En respuesta, los hacendados y comerciantes laneros intentaron recuperar sus ganancias exprimiendo a los productores campesinos de diversas formas, lo que implicó el incremento en las disputas por la tierra y otros motivos. El campesinado respondió a esta «sobreexplotación» defendiendo sus derechos y exigiendo reparaciones a las autoridades, recurriendo a menudo a demostraciones y enfrentamientos locales, y a acciones en pequeña escala: lo que James C. Scott llamó «resistencia pasiva». Los hacendados, por su parte, denunciaron estas acciones, exagerándolas para justificar su «represión» cada vez mayor y la clásica usurpación de tierras. Ellos pintaron esta resistencia pasiva al gobierno y al público como una incipiente revolución campesina que buscaba abolir todos los derechos de propiedad y exterminar a los blancos. Mientras el campesinado indígena se organizaba para resistir esta presión económica de los gamonales y sus agentes, fue buscando y consiguiendo aliados entre amplios sectores simpatizantes de las clases medias urbanas provincianas que emprendieron su defensa, muchas veces como abogados y periodistas. En este contexto, el movimiento indigenista revivió y se convirtió en una poderosa fuerza urbana en defensa de la causa indígena.

Las raíces «modernas» del indigenismo se remontan al periodo inmediatamente posterior a la Guerra del Pacífico, en 1884, cuando los indios fueron vistos como objeto de reformas políticas y sociales. En este momento, diversos escritores, académicos y activistas políticos formaron la escuela indigenista, que evolucionó de ser una forma literaria del liberalismo romántico decimonónico, a convertirse en un movimiento poderoso y militante en busca de la reforma social y política a comienzos del siglo XX. En el transcurso de este periodo, el indigenismo vinculó las radicales críticas sociales y políticas de la posguerra hechas en Lima por González Prada, con las provincias, donde vivían las oprimidas masas indias. Al hacerlo, abrió también los ojos de la intelectualidad limeña y del público en general a la desventura de los indígenas, hasta entonces ignorada por completo. Jorge Basadre sostuvo que este redescubrimiento del indio fue el suceso más importante de la historia peruana del siglo XX.

Tal vez la obra central que dio origen al indigenismo fue la novela *Aves sin nido* de Clorinda Matto de Turner, publicada en 1889. En esta temprana novela peruana, la autora expuso la explotación y opresión sistemática de los indios en un pequeño poblado andino por parte de un triunvirato que comprendía al gobernador, al cura local y al juez de paz. De hecho, era el secretario de este último, el infame tinterillo, quien usaba su poder y conocimientos para usurpar sus

tierras a los indios analfabetos e ignorantes. La novela fue una sensación en Lima y actuó como catalizador para la subsiguiente búsqueda del redescubrimiento del Perú indígena y la mejora de su condición.

Un hito en estos esfuerzos fue la fundación de la Asociación Pro-Indígena, en 1909, por Pedro Zulen, un joven alumno de la Universidad Mayor de San Marcos. La sociedad buscaba revelarle al público la terrible condición de los indios para así promover las reformas. Con este fin, publicó entre 1912 y 1917 el *Deber Pro-Indígena* en Lima. Influidos por el criticismo de González Prada y las ideas del positivismo social que por entonces circulaban en la universidad, aparecieron en este momento numerosos estudios científicos y eruditos sobre diversas temáticas indígenas que iban desde el imperio incaico a las costumbres indígenas y la forma de mejorar su condición. Incluso los integrantes liberales de la aristocracia tocaron el problema, afirmando que únicamente podría resolverse a través de la educación, las mejoras en la higiene y la religión. Este discurso liberal contrastaba con los pronunciamientos más radicales de González Prada, según los cuales el problema era de naturaleza fundamentalmente económica y social.

Después de la Primera Guerra Mundial, tanto el socialismo como el nacionalismo infundieron una nueva conciencia política al indigenismo. Los jóvenes indigenistas dieron la espalda al gusto de la generación anterior por el estudio del indio y pasaron a objetivos más militantes y revolucionarios. Algunos lo vieron como el agente de una revolución socialista-agraria, en tanto que otros enfatizaban un nuevo nacionalismo revolucionario, basado en lo que asumían como un glorioso pasado indígena largo tiempo ignorado.

Además de Lima, el otro centro de este floreciente indigenismo fue el Cuzco. Allí, la élite de la ciudad había cultivado la tradición inca a lo largo del siglo XIX, y muchos de sus integrantes proclamaron orgullosamente su noble linaje incaico hasta bien entrado el siglo XX. Más recientemente, la generación de 1909 se dedicó a restaurar la antigua preeminencia de la ciudad en la vida peruana. En 1911 Hiram Bingham, el arqueólogo de Yale, redescubrió la ciudad incaica de Machu Pichu, largo tiempo perdida, despertando así un renovado interés por la historia y la arqueología entre los estudiosos cuzqueños. En la década de 1920 una nueva escuela de pensamiento indigenista, denominada Grupo Resurgimiento, había aparecido en la antigua capital incaica y estaba conformada por Luis Valcárcel, el autor de *Tempestad en los Andes*; José Uriel García, autor de *El nuevo indio*; Dora Mayer de Zulen; y el pintor José Sabogal. Entre 1927 y 1930 publicaron *La Sierra*, que siguió una línea nacionalista no ideológica, aunque la mayoría del grupo simpatizaba con el socialismo.

La otra gran escuela indigenista se formó en Lima en torno a Mariátegui y *Amauta*, su revista declaradamente marxista que apareció entre 1926 y 1930, e identificó abiertamente el indigenismo con el socialismo. Para Mariátegui y Haya

de la Torre, que escribía en *Amauta*, el obstáculo fundamental para el progreso del indio era el sistema latifundista y la solución era una reforma agraria radical.

El indigenismo se expresó de diversos modos y formas. En las novelas, pasó de las obras de Matto de Turner a la ficción regional, como en los *Cuentos andinos* y *Matalaché*, de Enrique López Albújar, que captaron coloridamente la presencia de los indios en entornos provinciales. En las demás artes apareció en las pinturas de Sabogal, en la música de Daniel Alomías Robles (cuya ópera *El cóndor pasa* se estrenó en 1913), en los pioneros estudios arqueológicos preincaicos de Julio C. Tello en Paracas y Chavín, y en los ensayos sociales de Hildebrando Castro Pozo, para nombrar tan sólo a algunos de los más conocidos. Dado que buena parte de la efervescencia cultural y política del indigenismo tenía su centro en la capital, éste se hallaba sumamente alejado de su tema y por lo tanto venía a ser principalmente una abstracción imaginada. Por otro lado, en las provincias, el indigenismo encarnaba unas fuertes tendencias y reivindicaciones anticentralistas y regionales contra la tradicional preponderancia limeña.

Leguía fue inicialmente sensible a la problemática india y respondió políticamente a las nuevas corrientes indigenistas, así como a la intensificación de las protestas campesinas que se esparcían por la sierra sur. Por razones tanto políticas como económicas, el nuevo presidente encontró conveniente tomar medidas en contra del objeto principal de las protestas indias: la clase gamonal que durante largo tiempo fue la aliada de sus oponentes civilistas. Como propulsor del capitalismo modernizador y miembro progresista de la élite, él, en general, también percibía a los gamonales como reliquias «feudales» y como un obstáculo para el progreso. Al mismo tiempo, como el indigenismo había penetrado en grandes sectores de las clases mestiza, media y trabajadora urbanas, Leguía consideró la adopción de este movimiento como una ventaja política, lo que significaba ponerse del lado del campesinado indio en contra de los gamonales. En consecuencia, el presidente intentó forjar una alianza con elementos procedentes de la clase media provinciana, algunos de cuyos miembros habían asumido la causa campesina.

El objetivo de esta alianza era intentar llevar a cabo un desplazamiento fundamental en la correlación de poder entre terratenientes y campesinos a nivel local, fomentando así la difusión de la modernización capitalista. Esta tarea en modo alguno era fácil, dado el hecho de que el históricamente débil Estado peruano había dependido tradicionalmente de un quid pro quo con los hacendados provinciales, otorgándoles carta blanca en los asuntos locales a cambio de ejercer el control sobre los campesinos. Para modificar este arreglo, Leguía tomó medidas para expandir el poder y el alcance del Estado central, estableciendo una red de nuevas autoridades políticas a nivel local, cuya tarea era desafiar la tradicional hegemonía de los gamonales.

Al mismo tiempo que el «problema del indio» surgía como una cuestión clave en el debate en curso sobre la identidad nacional peruana, Leguía proclamó una política de «indigenismo oficial». Por ejemplo, creó una Oficina de Asuntos Indígenas en 1920, dirigida por el distinguido sociólogo Castro Pozo, y estableció un feriado nacional para celebrar el Día del Indio. Ambas medidas indicaron la intención que el gobierno tenía de asimilar institucionalmente al indio a la corriente principal de la nación. El mismo sentido tuvo el reconocimiento oficial de las comunidades de indígenas en la nueva constitución de 1920, el primero de este tipo en la historia de la república.

El gobierno buscó ahora ser el intermediario en las disputas por la propiedad entre hacendados y campesinos. Esta medida no sólo le permitió proteger al campesinado y ejercer un control sobre él, sino que además le procuró un mecanismo clave con el cual integrarlo a la economía capitalista en desarrollo. También tuvo el efecto de limitar el poder de los gamonales, que hasta ese entonces habían llevado las de ganar en las disputas con las comunidades y el campesinado.

En segundo lugar, a mediados de la década de 1920, Leguía creó una comisión gubernamental para que investigara las causas del incremento del descontento campesino en el sur y propusiera soluciones. Desde 1917, este descontento había dado lugar a más de siete mil quejas formales a las autoridades por parte de campesinos insatisfechos de la región, más de seis mil de las cuales se relacionaban con las disputas por la tierra. Cuando los comisionados llegaron a la provincia de Azángaro, en Puno, fueron recibidos por «8.000 indios en formación militar, llevando palos y unas cuantas armas de fuego», listos para presentar sus agravios (Jacobsen 1993: 345). Animados por la respuesta gubernamental a sus luchas, que incrementó sus expectativas de cambios reales, los campesinos comenzaron a organizarse políticamente para promover su causa. En junio de 1920, los emigrantes de la sierra formaron en Lima el Comité Central Pro-Derecho Indígena «Tahuantinsuyo», con ramas en el altiplano, que fue inmediatamente reconocido oficialmente por el gobierno. En los dos años siguientes se reunieron los congresos nacionales convocados por el Comité Central y aprobaron una serie de reformas: la creación de colegios y servicios médicos en comunidades y haciendas; la devolución de las tierras comunales, mejores salarios y condiciones laborales para los colonos de las haciendas, la separación de Iglesia y Estado, nuevas autoridades locales elegidas por las comunidades, y la abolición del trabajo forzado para la construcción de carreteras (recientemente introducido por Leguía). Según Jacobsen (1993: 346), «este programa reformista fue empaquetado con un discurso redentor que contenía elementos tanto milenaristas como anarco-sindicalistas». Entonces, fue difundido en las comunidades por delegados que regresaban de los congresos con bibliografía indigenista que se leía en voz alta en las reuniones comunales.

La posición predominante entre los historiadores sobre este ciclo de protestas y rebeliones en la sierra sur, entre 1915 y 1924, es que constituyeron movimientos milenaristas esencialmente espontáneos y no coordinados entre sí, con objetivos vagos, nada prácticos y mayormente inalcanzables (Burga y Flores-Galindo). Sin embargo, la posición revisionista planteada por Jacobsen (1993) pareciera ser más convincente, a saber, que los campesinos a menudo estaban sumamente organizados, que establecieron alianzas tácticas con el «exterior», y que promovieron una agenda política práctica que enmascararon con el lenguaje milenarista unificador del «reestablecimiento del Tahuantinsuyo». De hecho, el programa campesino coincidió en gran parte con el de sus aliados indigenistas de clase media. Por ejemplo, la capacidad del Comité Central de coordinar el movimiento a nivel nacional reflejaba los esfuerzos similares hechos por los campesinos a escala local para organizarse políticamente y defender sus intereses. Así, los indios de Toccroyoc, en la provincia de Espinar, en el Cuzco, que supuestamente contaba con la mayor población india de toda el área andina, se organizaron intensamente entre 1920 y 1921 bajo el liderazgo de Domingo Huarca. Su objetivo era liberarse del monopolio comercial de la lana establecido por los comerciantes y las autoridades en la capital provincial de Yauri, así como defenderse de los abusos de los gamonales.

El gobierno de Leguía se alarmó pronto con las señales de una creciente movilización y militancia campesina, que en algunos casos comenzaba a degenerar en actos de violencia. Estos incidentes incluían el saqueo e incendio de diversas haciendas, en los cuales también participaron sus colonos. Temeroso de que el movimiento se convirtiese cada vez más en una amenaza para el orden establecido, el presidente comenzó a retroceder en sus políticas pro indígenas y actos antigamonales.

El clímax del movimiento campesino llegó a finales de 1923 en la comunidad de Huancho, en la provincia de Huancané, en Puno. En un intento de liberarse de los patrones predominantes de comercialización de la lana, controlados por los gamonales, los comuneros intentaron boicotear el mercado urbano de Huancané y establecer su propio mercado. Esta idea prendió en otras comunidades, tanto en las provincias de Huancané como en las de Azángaro, donde los productores campesinos se movilizaron para crear sus propios mercados «autónomos». Los enfrentamientos con las autoridades se incrementaron hasta que los campesinos finalmente organizaron un ataque al pueblo de Huancané, la capital provincial. Éste fue repelido por su población y le siguió una represión despiadada organizada por las autoridades y el ejército. Al final, tal vez dos mil comuneros murieron en ambas provincias.

La represión de Huancané tuvo el efecto —juntamente con la mejora de las condiciones económicas causada por la recuperación de los precios de la lana después de 1923— de calmar la militancia campesina en todo el altiplano.

Aunque durante algún tiempo el bandidaje y el abigeato se convirtieron en formas endémicas de protesta social en la región, el campesinado permaneció mayormente tranquilo ante la resurrección del poder gamonal. Así fue incluso cuando Leguía cayó del poder en 1930 y las fuerzas populistas, lideradas por el partido aprista, desafiaron el poder oligárquico a comienzos de dicha década. Después de Huancané, el «indigenismo oficial» de Leguía degeneró en una retórica vacía y por lo general el statu quo precedente de la ley, el orden y el control social volvió al campo andino por lo menos por otra generación más, hasta la década de 1960. En el ínterin, el gobierno siguió adelante con su programa para modernizar el país. Abriendo la economía peruana al capital, los préstamos y el *know-how* técnico de los Estados Unidos en forma sin precedentes, Leguía no sólo favoreció enormemente a las compañías norteamericanas, sino que además alabó sobremanera a las instituciones y la vida estadounidense.

Además de contratar expertos financieros de los EE. UU., Leguía llevó al Perú especialistas norteamericanos para que reformaran el sistema educativo, reorganizaran la marina, reformaran la caja de consignaciones, fundaran una escuela de aviación, mejoraran la higiene y la sanidad urbanas, administraran el tráfico de automóviles en Lima, manejaran el Banco Agrario, reformaran el servicio secreto y planearan obras de regadío a gran escala. Incluso llegó a afirmar que su deseo era «poner un estadounidense a cargo de cada rama de las actividades de nuestro gobierno» (citado en Drake 1989: 217). Fue tal el grado de «yanquifilia» de Leguía, que ordenó que un retrato del presidente James Madison fuera colgado en el palacio presidencial e incluso declaró fiesta nacional al 4 de julio en honor a los Estados Unidos.

Con el apoyo de esta legión de asesores estadounidenses, Leguía estableció una plétora de nuevas leyes, diseñadas para hacer más eficientes a la administración pública y la economía. Se prepararon nuevos códigos para modernizar las actividades comerciales, mineras y agrícolas, que estuvieron acompañados por una nueva legislación bancaria, presupuestaria, tributaria y aduanera. El Banco Central de Reserva, la primera institución de su tipo en América del Sur, fue creado en 1922 y tuvo como modelo el Sistema de Reserva Federal de los EE. UU.

Además de hacer la administración pública más eficiente, Leguía buscó modernizar y ordenar Lima, que desde comienzos de siglo se había convertido en una próspera ciudad comercial, burocrática e industrial. El hecho de que el centenario de la independencia nacional (1821) y el aniversario de la batalla de Ayacucho (1824) se celebraran durante su gobierno, acicateó su programa de modernización urbana. Se contrató a la Foundation Company, una empresa constructora norteamericana, para que ampliara y pavimentara las principales calles y avenidas de la ciudad. La nueva cuadrícula vial se adaptó al creciente número de automóviles de la ciudad y llevó al desarrollo de los primeros suburbios en los

alrededores, donde floreció la construcción de casas para las clases media y alta. Al mismo tiempo, el viejo centro de la ciudad fue limpiado y muchos edificios deteriorados, tanto públicos como privados, demolidos y reemplazados por otros nuevos. En consecuencia, Lima se transformó durante el Oncenio en una ciudad hermosa y moderna, una de las más impresionantes en toda América del Sur, con amplios bulevares, espaciosos parques y elegantes tiendas y hoteles. Se convirtió en una galería de exhibición, no sólo para celebrar el centenario de la independencia, sino para atraer a los inversionistas y empresarios extranjeros con los cuales contaba el gobierno para el crecimiento económico. Al mismo tiempo, el *boom* en las construcciones y el empleo urbano estimuló la economía local. Se entregaron grandes contratos a los amigos y secuaces de Leguía y se abrieron empleos en la construcción para un gran número de inmigrantes provenientes de las provincias, atraídos a la capital por las perspectivas de salarios y condiciones de vida más elevadas.

La transformación de Lima estuvo acompañada por un esfuerzo concertado para mejorar el sistema de transporte crónicamente limitado del país. En 1920 el gobierno aprobó una ley, conocida como la ley de conscripción vial, que requería que todo varón entre los dieciocho y los sesenta años de edad trabajara entre seis y doce días al año en el sistema nacional de carreteras. Gracias a ésta y otras medidas, el número de kilómetros de caminos construidos durante el Oncenio casi se duplicó, de 10.643 en 1926 a 19.465 en 1930. La mejora en las comunicaciones con el interior no solamente ayudó al gobierno central a expandir su alcance a zonas remotas y extender su autoridad como nunca antes, sino que además aceleró el ritmo comercial en el interior. Algunos hacendados progresistas aprovecharon la creciente demanda de los mercados, y el mejor acceso a ellos, para ampliar sus linderos a expensas de las comunidades vecinas para así poner más tierras bajo cultivo, y tomaron medidas para modernizar y racionalizar sus operaciones. Sus actos tuvieron, a menudo, como resultado la dislocación y la proletarización de sus colonos, que perdieron sus prerrogativas tradicionales en el viejo sistema paternalista.

Las comunidades de indígenas no fueron inmunes a estos cambios. Las crecientes oportunidades comerciales, juntamente con la presión poblacional cada vez más fuerte, aceleraron el proceso de diferenciación económica y social en su interior. El resultado fue una mayor estratificación social, polarización y conflicto de clases. Unos ricos comerciantes y campesinos orientados al mercado surgieron al lado de los trabajadores y campesinos pobres y sin tierras, que se vieron empujados o fueron atraídos por el mercado laboral más amplio (minas, haciendas, pueblos, construcción de carreteras y ferrocarriles, y empresas similares).

La expansión y modernización de las haciendas, y sus consecuentes dislocaciones sociales, ya estaban en marcha en la sierra central desde antes de la

Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, allí el Grupo Olavegoya, con base en Lima, compró haciendas que racionalizaron y consolidaron una producción a gran escala, para satisfacer la creciente demanda de productos ovinos y vacunos de Lima y de los centros mineros. Este grupo, cuyas sociedades ganaderas estuvieron entre las sociedades anónimas más exitosas en la bolsa de valores de Lima entre 1910 y 1930, es un ejemplo del capitalismo y del espíritu empresarial en desarrollo que Leguía estimuló tanto a nivel regional como nacional.

La poderosa familia Fernandini y la Ganadera de Cerro de Pasco, esta última una división de la compañía cuprífera estadounidense que buscaba aprovisionar a su creciente fuerza de trabajo, llevaron a cabo un proceso similar de modernización. La Ganadera adquirió unas treinta haciendas, abarcando así 270.000 hectáreas (1.057 millas cuadradas) en la región. De hecho, el crecimiento y la concentración de las operaciones mineras abrieron un gran mercado potencial para su aprovisionamiento por parte de las haciendas vecinas y estimuló el desarrollo del capitalismo en el interior.

Como cabía esperar, dada la expansión del sistema de transporte y las dislocaciones ocurridas en la sociedad rural, un creciente número de personas se desplazó durante el Oncenio a las minas y haciendas costeñas, pero sobre todo a la dinámica y brillante capital. Unos 65.000 provincianos se mudaron a Lima entre 1919 y 1931, llegando a conformar el diecinueve por ciento de su población. Los emigrantes provenían de todos los estratos sociales, incluyendo las clases media y baja, siendo su transición y adaptación facilitada a menudo por los vínculos familiares y de parentesco con quienes ya se habían establecido en Lima. Muchas asociaciones regionales, conformadas por provincianos procedentes del mismo pueblo y provincia, y que llegaban a las cuarenta y cuatro en 1928, recibieron a estos recién llegados y les ayudaron a establecer un nuevo conjunto de relaciones sociales, que reemplazaron a la compleja red de las que dejaron atrás en el campo.

El flujo de inmigrantes desde el interior cayó sobre una ciudad que ya estaba viviendo un intenso proceso de «masificación», esto es el surgimiento de las clases populares en la vida y los espacios públicos de la ciudad, hasta ese entonces dominada y monopolizada por la élite. Dado que las masas habían irrumpido ya en la escena política en la década anterior, su emergencia en la década de 1920 tuvo más bien manifestaciones culturales. Un ejemplo particularmente prominente fue la transformación y popularización de los deportes, del fútbol específicamente, que de ser un pasatiempo predominantemente de la élite a comienzos de siglo, pasó a ser tomado por los subalternos limeños a finales de la Primera Guerra Mundial.

El fútbol había sido introducido en el puerto del Callao por marineros ingleses en la década de 1880. Al igual que muchas otras manifestaciones europeas, este deporte jugado principalmente por la pequeña colonia británica de Lima, fue

rápidamente asimilado por la élite, cuyos clubes deportivos comenzaron a contar con equipos de fútbol organizados, juntamente con los de polo, críquet, etc. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los trabajadores adoptasen este juego, en primer lugar en el Callao entre estibadores y marineros, y luego en los diversos barrios obreros y fábricas de Lima. Es más, un número creciente de clubes de fútbol surgió en las siguientes dos décadas, no sólo espontáneamente en el centro de trabajo y en los barrios como expresiones de una cultura obrera que, entre otras cosas, fomentaba la solidaridad y la cohesión, sino también auspiciado y organizado por los propietarios y gerentes de fábricas como un medio de control social de la élite. En este sentido, el fútbol «constituyó, entonces, un verdadero barómetro de la sociedad limeña, que en todas sus facetas se encontraba en pleno proceso de masificación» (citado en Stein 1986, Vol. I: 141).

En la década de 1920, la popularidad de este deporte había crecido inmensamente y comenzaba a ser cada vez más profesional, como indica la apertura del recién construido Estadio Nacional, la extraordinaria expansión de la cobertura en la prensa, y el surgimiento de una intensa rivalidad entre los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes. Alianza estaba conformado por jugadores del barrio negro y obrero de La Victoria, en tanto que Universitario, como sugiere su nombre, incluía sobre todo estudiantes universitarios de antecedentes de clase media y alta. Las subsiguientes competencias titánicas entre ambos equipos, consumidas ávidamente por la población de la ciudad, pueden interpretarse como una actuación simbólica en el campo de fútbol, de los conflictos de clase que dividían cada vez más a la sociedad peruana.

Al mismo tiempo, la inmensa aceptación de Alianza por parte del público limeño en la década de 1920 se produjo en el contexto de la adopción de la marinera afroperuana como baile nacional, la popularidad de las décimas de poetas populares negros, e incluso el florecimiento de la popular procesión religiosa anual del Señor de los Milagros. Aunque este último tiene antecedentes precolombinos que se remontan a Pachacamac, como lo mostrase Rostworowski (1992), también fue promovido como una celebración religiosa por las cofradías católicas de negros entre las políglotas clases trabajadoras. En todo caso, podemos interpretar estas manifestaciones como una valorización de lo negro y de las singulares contribuciones culturales de la comunidad africana desde la esclavitud. Asimismo, constituye otro ejemplo, junto con el indigenismo y la celebración misma del Señor de los Milagros, de la creciente influencia de la cultura popular en un espacio público que ya no era la reserva exclusiva de la élite limeña.

Aunque durante el primer gobierno de Leguía, su programa reformista y el crecimiento económico abrieron el camino a considerables transformaciones sociales, el Presidente hizo poco por revisar las instituciones políticas y la forma de gobierno del país. Detrás de un barniz reformista, él actuaba como un caudillo

tradicional, organizando sus propias redes de clientelaje político y otorgando favores y concesiones políticas a la nueva plutocracia que se beneficiaba con sus medidas. Con todo, Leguía, enmascarado durante un tiempo con un manto reformista que gradualmente se desvaneció, logró conservar cierta popularidad. Esta situación cambió abruptamente con la protesta popular estimulada por el anuncio hecho por el arzobispo Emilio Lissón el 25 de abril de 1923, de los planes que el gobierno tenía para consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús en una ceremonia pública presidida por el presidente como «Patrono de la Iglesia».

Desde la independencia y el advenimiento de la República, la Iglesia estuvo expuesta a periódicos ataques efectuados desde la sociedad civil. Su estructura jerárquica, autoritaria, corporativa y paternalista reflejaba el viejo ordenamiento colonial que ahora había colapsado formalmente y estaba inmerso en un proceso de lenta desintegración. Al mismo tiempo, a medida que las fuerzas del capitalismo moderno se intensificaban, impulsadas por el *boom* del guano de mediados de siglo, la Iglesia se encontró a sí misma cada vez más enfrentada con la creciente secularización de la sociedad.

Una manifestación de esta tendencia fue el descenso constante, a medida que avanzaba el siglo, del número de peruanos que ingresaban al sacerdocio. La vocación clerical, considerada durante largo tiempo como un refugio deseable que brindaba una vida acomodada y respetable para los integrantes de las clases alta y media, era ahora evitada cada vez más por los jóvenes, que encontraban mejores oportunidades en el sector capitalista en expansión de la sociedad. En consecuencia, a comienzos del siglo XX, la Iglesia enfrentaba una creciente escasez de sacerdotes peruanos calificados, algo ilustrado por el hecho de que en 1900, el diecisiete por ciento de ellos había nacido en el extranjero.

En el ámbito político, las reformas liberales de la primera mitad del siglo XIX culminaron con la exitosa toma del patronato real (ahora el patronato nacional) por parte del Estado republicano, lo que reestableció su control sobre la Iglesia. A medida que quedaba sometida más y más al Estado y que las fuerzas secularizadoras avanzaban, ella fue adoptando una posición cada vez más defensiva y conservadora. Esta tendencia ganó fuerza durante la embestida anticlerical de González Prada después de la Guerra del Pacífico, en tanto que la irreligiosidad (y el racismo) se pusieron muy de moda entre los intelectuales positivistas y la élite civilista. Para combatir estas fuerzas seculares dispuestas en su contra, la Iglesia mostró —desde la década de 1860 y hasta el Oncenio— un creciente espíritu militante mediante el cual intentó movilizar sus fuerzas —tanto eclesiásticas como laicas— para defender y proteger su posición en la sociedad (Klaiber 1992).

Fue en este contexto cuando el arzobispo Lissón —un abierto conservador, promotor de la Acción Católica (grupos laicos pro católicos militantes) y decidido defensor de la Iglesia— preparó la ceremonia de consagración al Sagrado Corazón.

Ella estaba programada para que antecediera la procesión pública anual de la orden, que había pasado a ser la expresión oficial de la Iglesia militante. Sin embargo, para muchos, la propuesta de Lissón parecía ser un descarado intento político del régimen por influir en el voto católico, en beneficio de la inconstitucional postulación de Leguía a una reelección para un segundo gobierno. También despertó sentimientos anticlericales de larga data en los círculos liberales y progresistas. Haya de la Torre, el veterano líder de la movilización de universitarios y trabajadores en pos de la jornada de las ocho horas en 1918-1919, y del movimiento de reforma universitaria, organizó rápidamente una masiva protesta contra el anuncio episcopal.

Beneficiándose políticamente con su liderazgo en estos movimientos, Haya logró ganar la presidencia de la Federación Estudiantil Peruana en octubre de 1919. Uno de sus primeros actos fue organizar un congreso nacional que se reunió en el Cuzco a comienzos de 1920 y aprobó una serie de resoluciones progresistas, la más notable de las cuales fue la de crear las llamadas universidades populares (UP), cuyo objetivo era fundamentalmente consolidar la alianza obrero-estudiantil de 1918-1919. Estas universidades populares, administradas por los universitarios, brindarían diversos servicios educativos y sociales a los trabajadores, buscando elevar su nivel cultural global y concretando así el ideal anarquista de una verdadera libertad y emancipación del proletariado. Las primeras UP fueron inauguradas por Haya en enero de 1921, en Lima y en el vecino pueblo fabril de Vitarte.

Las UP tuvieron un enorme éxito, atrayendo hasta mil trabajadores de ambos sexos en un sólo evento en Lima, en 1923. Para ese entonces, numerosas UP habían surgido también en diversas ciudades de provincias. Además de una amplia variedad de clases nocturnas enseñadas por los universitarios, se organizaron numerosos actos culturales para elevar el nivel de la conciencia cívica y nacional de los obreros, entre ellos homenajes músico-literarios a los incas, diversas campañas de sobriedad y picnics de «fraternidad» obrera-estudiantil en los bosques alrededor de Vitarte. Un año después de su fundación, se rebautizó a las UP en honor a González Prada (llamándose ahora UPGP), algo que los organizadores inicialmente evitaron por temor a molestar indebidamente a las autoridades. Y es que si bien el objetivo manifiesto de las UPGP era cultural y educativo, apenas si podía faltar una dimensión política con tantos universitarios-docentes de orientación política izquierdista.

Luego de que el arzobispo Lissón anunciara la próxima ceremonia del Sagrado Corazón, Haya y las UPGP pasaron inmediatamente a la acción y se convirtieron en el punto focal de oposición a la celebración. Después de trazar una «declaración de principios» en una asamblea pública en San Marcos, que se concentró principalmente en las demandas anticlericales de reforma de la Iglesia, los jefes del movimiento encabezaron a varios miles de manifestantes en una marcha a la plaza de armas el 23 de mayo. Allí se encontraron con la policía montada y

siguió un choque en el cual murieron dos de los manifestantes y tres policías. Siguió a esta marcha dos días más tarde una procesión fúnebre en memoria a los dos manifestantes «mártires», en la cual Haya declamó una electrizante oración fúnebre. Temiendo que las demostraciones de protesta galvanizasen una oposición más amplia a la reelección de Leguía, Lissón decidió suspender la ceremonia propuesta, declarando que la proyectada consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús había sido «convertida en un arma en contra del gobierno y las instituciones legítimamente establecidas» (citado en Klaiber 1977: 133). Haya, cuya reputación entre el pueblo se disparó gracias a las protestas, pasó ahora a la clandestinidad. Finalmente fue arrestado en octubre y enviado al exilio, despejando así el camino para que Leguía «arreglara» su elección un año después.

Mariátegui, Haya y la Nueva Izquierda

Con el exilio del activista Haya en 1923, el liderazgo de la izquierda peruana y su centro de gravedad intelectual pasaron a la figura de José Carlos Mariátegui, quien acababa de regresar de un exilio de cuatro años en Europa. En 1919 había aceptado un estipendio del gobierno para viajar al extranjero, una medida tomada por Leguía ostensiblemente para retirar a uno de los críticos más prominentes de su nuevo gobierno. París fue la primera parada de Mariátegui, donde quedó embriagado con su contacto inicial con la cultura y la política europeas de ese entonces.

De París viajó a Italia, donde habría de permanecer durante la mayor parte de su exilio, en parte porque su clima benigno era bueno para su delicada salud. En Roma conoció y contrajo matrimonio con Anna Chiappe y se convirtió en un agudo observador de la política italiana, como lo reflejan sus «Cartas de Italia», que relatan el ascenso del fascismo, la desintegración de la izquierda italiana y la fundación del Partido Comunista italiano. Al mismo tiempo leía, entre otros, a Benedetto Croce, Karl Marx y Georges Sorel. Reunido en Génova con otros tres peruanos en 1922, Mariátegui y sus compatriotas decidieron formar la primera célula comunista peruana.

El periodista brillante, joven y autodidacta emprendió así la misión fundamental de su vida: desarrollar el movimiento obrero en el Perú y formar un partido marxista, pues fue en Europa donde Mariátegui intensificó su compromiso político con el socialismo y el marxismo revolucionario. Es más, toda su experiencia europea sirvió para ampliar su visión del mundo, poniéndole en contacto con las principales corrientes políticas e intelectuales de la época. Al mismo tiempo, Europa le dio al joven marxista una perspectiva singular desde la cual ver los problemas del Perú y de América Latina. Como dijera, «descubrimos, al final, nuestra propia tragedia, la del Perú. Para nosotros el itinerario europeo ha sido el mejor, el más tremendo descubrimiento de América» (citado en Vanden 1986: 120). Por último

y como señalase Basadre, gracias a su estadía en Europa, Mariátegui dio el paso de periodista a teórico y pensador.

De regreso en Perú en noviembre de 1923, la casa de Mariátegui en la Calle Washington —conocida como el «rincón rojo»—, en el centro de Lima, pasó de inmediato a ser una colmena discursiva de los universitarios, activistas obreros, políticos e intelectuales más prominentes del país. Aquí surgió su inclinación por iniciar el diálogo comunal y el debate polémico, algo que posteriormente caracterizaría a su notable revista *Amauta*, fundada en 1926. Además de llevar esta efervescencia intelectual a sus clases en las UPGP, Mariátegui se lanzó nuevamente al periodismo.

Sin embargo, aproximadamente a un año de su regreso al Perú volvió a enfermar, experimentando al parecer una recurrencia de la forma de tuberculosis que sufría desde la infancia, lo que hizo necesario amputarle la pierna derecha. Ahora confinado permanentemente a una silla de ruedas, Mariátegui salió de una depresión temporal para dedicarse apasionadamente a la escritura, la lectura y la investigación. Su primer libro, titulado *La escena contemporánea*, se publicó en 1925 y recibió reseñas sumamente favorables, y un año más tarde emprendió una empresa editorial que le brindaría una fama duradera como editor de *Amauta*, que en quechua quiere decir sabio o profesor inca.

Amauta fue una revista de comentarios políticos y literarios que contenía una amplia gama de temas, todos ellos orientados a la perspectiva socialista del editor. Entre los contribuyentes se contaban no solamente las estrellas progresistas de la generación de 1919, sino también figuras mundiales como Henri Barbusse, Miguel de Unamuno y Diego Rivera. La fama de *Amauta* alcanzó dimensión continental e incluso llegó al otro lado del Atlántico, a Europa. En palabras de Mariátegui, la revista habría de ser «la voz de un movimiento y de una generación» (citado en Walker 1986: 84).

Walker identifica tres grandes temas en las páginas de *Amauta* y en los restantes escritos de Mariátegui, reunidos y publicados en sus *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* (1928). Ellos son el indigenismo, el marxismo y el nacionalismo. El indigenismo incorporaba un contenido diverso y heterogéneo que iba desde la defensa de la cultura y la sociedad indias —tanto del pasado como del presente— a la integración de los indígenas a la nación y las causas subyacentes de su explotación y discriminación. Si bien este movimiento había florecido en las provincias (Cuzco, Puno, Trujillo y Arequipa), así como en Lima, su impacto en la capital quedó reforzado, como dije, por el gran influjo de inmigrantes llegados del interior durante el Oncenio.

Como mostrase el historiador de la literatura Antonio Cornejo Polar, la parte más importante de la producción literaria y artística indigenista de Lima fue efectuada por integrantes de la clase media baja provinciana residentes en la capital, muchos

de los cuales contaban con vínculos familiares en el interior. En esta perspectiva, el indigenismo constituía una seria crítica de la sociedad peruana formulada por jóvenes intelectuales provincianos, quienes denunciaron a la arrogante y explotadora clase gamonal que dominaba sus pueblos y regiones natales. Estos intelectuales provincianos no solamente llevaron a la capital una nueva perspectiva simpatizante con los indios, sino que su radicalismo se intensificó con la recepción hostil y discriminadora que sufrieron por parte de la tradicional élite europeizada de la ciudad.

Mariátegui propuso una versión andina del socialismo como receta para los problemas peruanos:

> El socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas, de la clase trabajadora. Y en el Perú las masas —la clase obrera— son indias en sus cuatro quintas partes. Por lo tanto, nuestro socialismo no será peruano o no será siquiera socialismo si no se solidariza principalmente con las reivindicaciones indígenas (Mariátegui, citado en Walker 1986: 83).

Para Mariátegui, el Perú era un país subdesarrollado, principalmente agrario, integrado por una población cuya mayoría estaba ubicada en el interior rural andino y con un sector industrial y una clase obrera pequeños y relativamente débiles. De este modo, en las páginas de *Amauta* Mariátegui incluyó una amplia gama de temas indigenistas: el pasado incaico, la condición india y su lucha actual. Según Flores-Galindo, «sin la expresión de los poetas y ensayistas indigenistas, y sin los levantamientos campesinos del sur, el marxismo de Mariátegui habría carecido de una característica esencial: su desafío al progreso, esto es su rechazo de una visión lineal y eurocéntrica de la historia» (citado en Walker 1986: 83).

El último tema de la obra de Mariátegui —la preocupación que definía a la generación de 1919— era el análisis acerca de la forma en que el Perú, un país geográficamente fragmentado, étnicamente diverso y dividido en clases, podía consolidarse a sí mismo como nación. En este debate sobre la «cuestión nacional» desarrollado en la década de 1920, que puede seguirse sin dificultad en las páginas de *Amauta*, participó pronto la derecha en la persona de Víctor Andrés Belaunde (1883-1966), quien cuestionó varias de las afirmaciones hechas por Mariátegui en los *Siete ensayos*.

Nacido en Arequipa, en el seno de una familia de clase media a fines de la Guerra del Pacífico, Belaunde estuvo sumamente influido por el ethos socialmente más fluido, democrático y regionalista de la Ciudad Blanca, que contrastaba marcadamente con la oligarquía de la costa norte o la sierra sur señorial. Asimismo, fue un católico devoto al haber quedado embebido con las tradiciones católicas de su familia y su ciudad y su educación de bases religiosas. Luego de graduarse en la Universidad Mayor de San Marcos en 1901, donde fue influido por el positivismo,

Belaunde tuvo una distinguida carrera en la enseñanza y la diplomacia. En 1914 fue aclamado por una conferencia pública que diera en San Marcos, titulada «La crisis presente». En esta conferencia y en sus escritos exponía su idea de que la regeneración del país estaba en manos de la clase media, criticaba la explotación de los indios y pedía su protección por parte del Estado. Fue exiliado en 1921 por ser un abierto crítico de Leguía.

La réplica de Belaunde a Mariátegui apareció en *La realidad nacional*, publicada en 1930 como un contrapunto cristiano a la exégesis marxista de los *Siete ensayos*. Belaunde coincidía con el análisis de Mariátegui en una serie de puntos, tales como la influencia perniciosa de Lima y de la oligarquía norteña en el desarrollo del país, la necesidad de una descentralización política y económica, y la importancia de la religión en la vida peruana. Por otro lado, criticaba al autor de los *Siete ensayos* el hecho de haber polarizado los legados hispano e indio del país, alabando lo indígena sobre lo mestizo y reduciendo el problema del indio exclusivamente a la tierra y a su solución vía la colectivización. Los problemas peruanos, sostenía, no se fundaban únicamente sobre las clases, sino también sobre la cultura y lo racial, y las prácticas religiosas católicas entre los nativos no eran únicamente superficiales, contraproducentes y superfluas, sino una fe profundamente enraizada espiritualmente.

En cambio, Belaunde defendió enérgicamente a la Iglesia y su proyecto histórico de convertir y proteger a los indios, así como al legado católico e hispano del país. Al mismo tiempo, desde su perspectiva, la síntesis producida por la fusión de ambas razas conformaba la base a partir de la que unificar al Perú, en especial en términos psicológicos y espirituales. Es más, el problema indígena podía resolverse a través de la educación, una reforma agraria limitada (la expropiación de las haciendas improductivas) y, tal vez, la creación de cooperativas, que estaban más cerca de las tradiciones comunales andinas. En líneas generales, el Perú necesitaba alcanzar una fusión de lo mejor de la cultura y la política occidentales con su contraparte en las tradiciones católicas medievales y corporativas. En suma, Belaunde proponía para el Perú una suerte de socialdemocracia y corporativismo, no un colectivismo soviético o un capitalismo oligárquico.

Entretanto, Leguía proseguía con su versión de la construcción nacional centralizando el poder del Estado; ampliando su alcance mediante un ambicioso programa de construcción vial; y estimulando el flujo del comercio, el capital, la pericia y la cultura extranjeras, la norteamericana en particular. Por ejemplo, entre 1924 y 1928 el Perú recibió más de $130 millones en préstamos, diez veces más que en el lustro anterior.

Aunque ya antes el gobierno de Leguía había luchado para persuadir a los prestamistas internacionales de que abrieran sus bolsillos al Perú, ahora los bancos de Nueva York, rebosantes con el capital de los Dorados Años Veinte, comenzaron

a competir furiosamente para colocar préstamos en toda América Latina. Prestaron fondos para financiar la construcción de nuevos ferrocarriles, obras de irrigación, sanidad y, más controvertidamente, para la cuestionable práctica de cancelar la deuda interna (reemplazándola por otra externa), cuyo pago por sí solo requería considerables cantidades de divisas extranjeras, creando así problemas para el futuro. Dos de los bancos más grandes de los EE. UU., J. y W. Seligman y el National City Bank, acicateados por las evaluaciones favorables referentes a la estabilidad económica peruana y estimulados por el Departamento de Estado, colaboraron en la colocación de $100 millones en préstamos al Perú entre 1927 y 1928. Los bancos dejaron de lado toda prudencia e ignoraron las advertencias del presidente del Banco de Reserva del Perú, entre otros, generando una auténtica «danza de millones».

Este torrente de préstamos extranjeros coincidió con el ingreso de importaciones extranjeras y el incremento en el consumo de las emergentes y cada vez más prósperas clases medias urbanas, las cuales asimismo adoptaron los valores y la cultura extranjera. En Lima, por ejemplo, proliferaron los cafés exóticos, las carreras y apuestas de caballos y el deporte exclusivo del golf, al igual que numerosos colegios secundarios bilingües como el angloperuano, donde los hijos de los acomodados y los nuevos ricos aprendían el inglés y los valores estadounidenses o británicos. El resultado de esta orgía de consumo extranjero fue una reacción inevitablemente nacionalista, a menudo antiestadounidense, que ganaba fuerza a medida que transcurría la década.

Por último, los decididos esfuerzos de Leguía por resolver una serie de duraderas y sensibles disputas fronterizas contribuyeron a una creciente crítica nacionalista de su régimen. Por ejemplo, el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que fijó el río Putumayo como la frontera norte con Colombia, parecía favorecer a dicho país y fue extremadamente impopular en el Perú. Igualmente contenciosa era la enconada disputa por la disposición final de las provincias de Tacna y Arica, que Chile había tomado del Perú durante la Guerra del Pacífico. Cuando en 1925 se anunció un acuerdo entre ambas naciones para celebrar un plebiscito en las provincias disputadas que decidiera su destino, la reacción nacionalista fue tal que se desató una huelga general, un motín de los universitarios y el ataque de una turba a la embajada de los EE. UU., en protesta por la mediación norteamericana en la disputa. Aunque el plebiscito jamás se llevó a cabo, una reunión casual de diplomáticos de ambos países a bordo de una nave camino a una conferencia interamericana, tuvo como resultado la reanudación de las negociaciones y un inesperado acuerdo final. Según el Tratado de Lima de 1929, las provincias en disputa se dividieron entre los dos países, Tacna para Perú y Arica para Chile, juntamente con $6 millones e instalaciones portuarias para el Perú en la bahía de Arica. La solución de compromiso del régimen de Leguía irritó nuevamente a los nacionalistas, entre ellos a Mariátegui, quien manifestó su indignación en las páginas de *Amauta*.

Mientras Mariátegui infundía a las páginas de su revista los progresistas temas nacionalistas, indigenistas y marxistas de la época, también la usaba como un foro a partir del cual organizar a la clase obrera. Tal vez por este motivo, o por haber publicado un número de *Amauta* dedicado al tema del imperialismo, la revista fue cerrada y Mariátegui arrestado en junio de 1927 por las autoridades, acusándosele fraudulentamente de conspirar en un supuesto complot para derrocar al gobierno. Sin embargo, la protesta internacional de prominentes intelectuales logró su libertad luego de seis meses, y a comienzos de 1928 se permitió reiniciar la publicación de *Amauta*.

Ese mismo año marcó una importante ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre, cada uno de los cuales buscaba adaptar y moldear el marxismo a la realidad peruana en su propio estilo. Haya había sido exiliado después de encabezar la lucha contra el intento de Leguía de consagrar el Perú (y en consecuencia a su régimen) al Sagrado Corazón de Jesús en 1923. Luego de detenerse brevemente en Panamá y Cuba, donde hizo fuertes declaraciones antileguiístas y antiimperialistas, Haya llegó a México, donde vivió durante un tiempo gracias a un estipendio del Ministerio de Educación, dirigido por el solidario José Vasconcelos.

Al año siguiente, Haya proclamó la formación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), un movimiento continental de jóvenes dirigido contra la expansión del imperialismo norteamericano. El 7 de mayo de 1924, ante una asamblea de la Federación Nacional de Estudiantes de Ciudad de México, el joven Haya, de veintinueve años de edad, desenrolló la bandera roja del APRA, estampada con el mapa dorado de América Latina o Indoamérica, como le gustaba llamarla. Esto último expresaba su fuerte sentir indigenista, moldeado por su infancia cerca de las encantadas ruinas precolombinas de Chan Chan, y un viaje al Cuzco en 1917 que le abrió los ojos, y esto en un país en el cual el indigenismo, bajo la égida de Vasconcelos, se había convertido en la política rectora oficial después de la revolución de 1910. Al anunciar la formación del APRA en México, Haya también identificaba implícitamente a su incipiente movimiento con los ideales de la revolución mexicana.

Dos años después de formar el APRA en México, Haya presentó el programa oficial del movimiento en un artículo publicado en el *Labour Monthly* (1926), titulado «¿Qué es el APRA?». En él esbozó los posteriormente célebres cinco puntos del aprismo: la acción contra el imperialismo yanqui, la unidad política de América Latina, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del canal de Panamá y la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

Entretanto, el joven peruano viajó a Inglaterra, en donde se dirigió a los alumnos de la Universidad de Oxford y luego a la Unión Soviética, donde asistió al Congreso Mundial de la Juventud Comunista, que se llevaba a cabo juntamente con el Quinto Congreso Mundial de la Tercera Internacional. Sus viajes en este

momento, al igual que durante todo su exilio, fueron respaldados financieramente por una benefactora estadounidense llamada Ana Melina Graves, con quien trabó amistad mientras trabajaba como profesor en el Colegio Anglo-Peruano de Lima. En Rusia, Haya aprendió bastantes cosas que le serían útiles para desarrollar sus ideas y tácticas políticas. Quedó impresionado por la imponente figura de León Trotsky, no sólo como intelectual sino como hombre de acción, así como por el fervor con el cual la juventud rusa abrazaba al comunismo, casi como una fe religiosa con fuertes resonancias místicas y morales. Haya posteriormente intentaría uncir del mismo modo las energías religiosas de los peruanos, expresadas a través de la Iglesia y en ciertas formas religiosas populares, a sus propios fines políticos y los de su Partido Aprista.

Al final, aunque tomó prestados liberalmente algunos elementos del marxismo-leninismo, Haya decidió permanecer independiente del comunismo internacional y controlar su propio movimiento indoamericano. La ruptura con la Tercera Internacional llegó en 1927, en el Congreso Antiimperialista de Bruselas. Allí rehusó firmar una declaración que condenaba todo imperialismo, en base a su creencia de que éste era la primera y no la última etapa del capitalismo. Según Haya, esta inversión de la doctrina marxista-leninista era necesaria porque los países subdesarrollados necesitaban adquirir las inversiones, capacidades y tecnologías que les permitirían avanzar a la siguiente etapa del capitalismo, que entonces abriría el camino para la gran transformación socialista. Semejante herejía ideológica resultó ser un anatema para Moscú y provocó al año siguiente la ruptura con Mariátegui a causa de sus diferentes concepciones acerca de cuál era la línea revolucionaria «correcta» para el Perú.

La ruptura se precipitó con el anuncio hecho por Haya camino a casa en enero de 1928, desde México, de su candidatura a la presidencia del Perú como jefe de un nuevo partido llamado el Partido Nacionalista Libertador, que supuestamente ya operaba en el Perú. Adoptando el viejo slogan anarquista de «tierra y libertad», la nueva agrupación pedía la unión de todos los pueblos trabajadores, esto es una alianza transclasista de trabajadores, campesinos, intelectuales y clases medias. También asumió un programa radical y antioligárquico que incluía la propiedad de la tierra para quien la trabajara, la abolición de las leyes que favorecían al gamonalismo (el gobierno por parte de jefes y oligarcas locales), el antiimperialismo y la independencia económica.

Al llegar a Lima las noticias sobre el nuevo partido, éste fue rotundamente condenado por Mariátegui, quien lo vio como una jugada oportunista de un puñado de intelectuales, sin ninguna raíz o arraigo en las masas, para promover las ambiciones políticas de Haya. De hecho, Mariátegui lo asemejaba a la vieja política criolla conspiradora, asociada con el antiguo régimen que él y la izquierda condenaban y esperaban eliminar. Pero las críticas de Mariátegui a las tácticas de

Haya no se detenían aquí, sino que pasaban a mostrar profundas discrepancias ideológicas.

La concepción que Haya tenía del Perú se plasmó en una compilación titulada *Por la emancipación de América Latina: artículos, mensajes, discursos, 1923-1927*, publicada en Buenos Aires en 1927. Haya veía al Perú como un país esencialmente feudal, dominado por la clase terrateniente de los gamonales y con una débil base industrial, de modo tal que ni una burguesía nacional, ni tampoco el proletariado, se habían desarrollado lo suficiente. El capitalismo no se estaba desplegando internamente, sino que era más bien llevado al Perú por la expansión mundial del imperialismo. En consecuencia, el problema fundamental del país era «nacional» antes que de naturaleza clasista. Esto es, el imperialismo extranjero oprimía una amplia gama de clases, en particular a las capas medias que justamente ahora comenzaban a redefinir la nación. De este modo, la variable crucial en toda futura transformación revolucionaria era, para Haya, el nacionalismo y no la lucha de clases, tal como él creía que había sido el caso en la Revolución mexicana y en la formación del Kuomintang de Chiang-Kai-Shek, en China.

Para Haya, el socialismo no era posible inmediatamente en el Perú. Más bien debía estimularse el imperialismo, la primera etapa del capitalismo, que llevaba el capital y las inversiones necesarias, pero su impacto opresivo y negativo podía suavizarse con lo que Haya llamaba el Estado antiimperialista. Un Estado tal sería capaz de negociar los términos de la expansión capitalista en el Perú, de modo que los factores productivos necesarios progresaran, pero no a expensas de las clases populares. A partir de su experiencia en Trujillo, Haya vio que a diferencia de la clase obrera en las industrias azucarera, minera y petrolera, que en general tenía los mejores salarios de todo el Perú, las clases medias eran particularmente vulnerables a las distorsiones y al impacto absorbente producido por las corporaciones extranjeras.

Junto a un sector estatal fuerte, Haya proponía la cooperativización de las agroindustrias, como el azúcar, y un sector privado dirigido por una industria y un comercio nacionales. La base política del Estado antiimperialista de Haya sería un frente popular, o una alianza pluriclasista de campesinos, trabajadores, intelectuales y la clase media. Haya pensaba que el liderazgo de dicha alianza provendría de esta última, no sólo porque era más numerosa y estaba mejor educada, sino porque la clase obrera seguía siendo minúscula y era culturalmente retrógrada.

Mariátegui, de otro lado, veía el Perú en una forma esencialmente distinta. Él creía que el capitalismo se había desarrollado lentamente en el Perú desde la era del guano. El imperialismo en su etapa monopólica no solamente contribuía a este avance, sino que además era la causa fundamental de lo que él llamaba la condición semicolonial del Perú. La única forma de derrotar el colonialismo y el

imperialismo era, no mediante la construcción de algún Estado antiimperialista, como pensaba Haya, sino adoptando el socialismo.

Otra discrepancia resultaba aún más importante: Mariátegui rechazaba la idea de que la transformación del Perú pudiese ser liderada por la pequeña burguesía, un papel que él creía que únicamente la clase obrera podía asumir. Según Meseguer, se basaba para ello en su experiencia europea, donde pudo apreciar cómo la postura revolucionaria de la clase media degeneraba en la base política del surgimiento del fascismo. En cuanto a los sectores medios expandidos en el Perú durante el Oncenio, Mariátegui los percibía fundamentalmente como ávidos consumidores del imperialismo, tanto material como culturalmente, a duras penas la base con la cual construir o liderar un movimiento de liberación nacional. Por último, él creía que eran demasiado heterogéneos como para desarrollar la solidaridad de clase necesaria para llevar a cabo una revolución verdaderamente socialista. Únicamente la clase trabajadora, definida en forma amplia como los obreros y campesinos, auténticamente enraizados en la cultura nacional y organizados en su propio partido socialista podrían, según él, desarrollar la unidad y la conciencia requeridas para llevar a cabo tan grandiosa transformación. En el Perú, los vagos contornos de semejante vanguardia obrero-campesina se encontraban ya en el sector minero, cuyos salarios atraían a los emigrantes campesinos para trabajar en las minas, y donde muchos de ellos eran eventualmente proletarizados en una fuerza laboral permanente.

Haya y otros apristas que intentaban fijar una posición auténticamente nacionalista en la izquierda peruana, atacaron las ideas de Mariátegui como excesivamente «teóricas» y «europeizadas». Sin embargo, como señalan Burga y Flores-Galindo (1978: 192), él no era dogmático en absoluto en su adopción del marxismo y el comunismo. Consideraba, más bien, que la tarea era casar el marxismo con las condiciones históricas singulares de los Andes, integrando las ideas del indigenismo y basándose en la experiencia colectivista implícita en el pasado incaico peruano (el *ayllu*, por ejemplo), así como en la lucha por la jornada de las ocho horas y los levantamientos campesinos e indígenas de Atusparia y Rumi Maqui. Esta fusión creativa de la experiencia andina y el marxismo hizo que Mariátegui entrara en conflicto con la estricta ortodoxia comunista de la Tercera Internacional.

La ruptura final entre Haya y Mariátegui llegó en 1928. La precipitó un editorial del número de septiembre de *Amauta*, en el cual Mariátegui esbozó sus diferencias con Haya y aprovechó la oportunidad para redefinir abiertamente los objetivos y fines de la revista como clasistas y como un órgano socialista. Este desplazamiento coincidió con la fundación, en 1928, del nuevo Partido Socialista del Perú, que se adhirió a la Tercera Internacional (habiéndose suavizado sus conflictos previos con ella) y buscó solidificar sus vínculos con el movimiento obrero. Bajo la dirección de Mariátegui, el nuevo partido inició la unificación de los

trabajadores en un sindicato auténticamente nacional, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Sin embargo, el creciente activismo de Mariátegui presionó aún más su precaria salud, que comenzó a deteriorarse rápidamente a medida que la década de 1920 llegaba a su fin. Falleció el 16 de abril de 1930, a los treinta y cinco años de edad, al parecer por una infección con estafilococo mientras se le trataba en el hospital.

La debilidad económica y el inicio de la depresión

La muerte alcanzó a Mariátegui casi cuatro meses antes de que los militares derribaran a Leguía en agosto de 1930. La causa fundamental de la caída del dictador era el estado sumamente precario y vulnerable de la economía peruana en 1929, cuando la bolsa de valores estadounidense colapsó, desatando así una depresión mundial. Tras el fuerte endeudamiento externo contraído por Leguía para financiar su Patria Nueva, la «danza de los millones» del Perú llegó a su abrupto fin.

Un examen sectorial de la economía durante el Oncenio revela aún más la naturaleza artificial de la aparente prosperidad del país en ese entonces. El sector agroexportador, la clave del crecimiento desde 1900, perdió impulso después de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el sector minero, aunque progresaba, fue tomado casi íntegramente por las compañías extranjeras de modo que las utilidades eran remitidas al extranjero, permaneciendo bajo el valor de retorno y, por lo tanto, también la reinversión y la acumulación de capital. Por su parte, los productos agroexportadores tales como el azúcar, el algodón y la lana —puntales del crecimiento impulsado por las exportaciones entre 1900 y 1920—, se estancaron durante la década de 1920 y brindaron poca reinversión con la cual sustentar la demanda interna.

En el caso del azúcar, la bonanza inducida por la guerra en la década de 1910 provocó que los productores reinvirtieran erróneamente sus utilidades en duplicar la capacidad, en espera de un auge continuo de la demanda y los precios de su producto en el extranjero. Al final, ocurrió exactamente lo contrario y la capacidad mundial pronto alcanzó un exceso de oferta que hizo que los precios iniciaran una caída que se prolongaría durante una década. El subsiguiente recorte de las utilidades en el Perú conllevó que la industria se consolidara aún más y se concentrara en la costa norte. Al mismo tiempo, la acumulación y la reinversión de capital permanecieron débiles, y la influencia que los hacendados tenían en la política nacional decayó. Todo esto tuvo un impacto particularmente negativo en la economía regional de la costa norte y llevó, como veremos, al surgimiento del radical Partido Aprista.

Al decaer el azúcar, muchos hacendados del centro y sur se pasaron al algodón, que vivió una bonanza exportadora a comienzos de la década de 1920

gracias a la plaga del gorgojo de algodón que azotó la producción estadounidense en 1920. Este cambio coincidió con la introducción de una nueva variedad de gran calidad, resistente a las enfermedades y desarrollada por Fermín Tangüis, un cultivador de Pisco, y la introducción del algodón pima desde los EE. UU. por un comerciante local de Piura llamado Emilio Hilbck, en 1918. Las exportaciones a los EE. UU. crecieron hasta 1925, cuando la plaga del gorgojo de algodón cedió en ese país, y las severas inundaciones a lo largo de la costa en 1926, causadas por los efectos climáticos de El Niño, arrasaron al algodón peruano y afectaron adversamente a la productividad agrícola. El algodón ahora se encontró con el mismo problema con que se topó el azúcar en 1920, aunque su valor de retorno siguió siendo sustancial por ser de propiedad local y por el incremento del número de trabajadores empleados (de 21.000 en 1916 a 41.000 en 1923). Sin embargo, en ambas industrias, la caída de las utilidades fue rápidamente trasladada a los trabajadores, que en el caso del algodón sufrieron un descenso del treinta por ciento de su salario real, entre 1916 y 1930.

De modo similar al azúcar, el colapso del comercio internacional de lana después de la guerra arrojó al sur peruano —donde ésta representaba el setenta y tres por ciento de las exportaciones— a una recesión regional, constriñendo aún más las exportaciones peruanas en la década de 1920. El colapso del mercado lanero queda ilustrado por el descenso de la ganancia per cápita de sus exportaciones durante la década, que cayó de $362 en 1920 ($139 en el sur) a $176 en 1930 ($59 en el sur). Resulta significativo que el golpe que habría de derrocar a Leguía fuera organizado en el sur, en Arequipa, el centro comercial de la recesiva industria de la lana. Aunque tenía menos importancia a escala nacional, el colapso de la industria del caucho en la Amazonía peruana, cuya decadencia se inició en 1912, terminó de concluirse en la década de 1920. La subsiguiente depresión de la región provocó descontento político, varias revueltas militares infructuosas contra Leguía en Iquitos, y un fuerte respaldo al APRA en las elecciones de 1931.

Entonces, en términos generales, la década de 1920 vio un retroceso de la producción de algodón, azúcar y caucho, cuyo valor como porcentaje de las exportaciones totales disminuyó. Ello constituyó un desplazamiento significativo en la composición relativa de las exportaciones, dado que estos cuatro cultivos comerciales habían dominado su valor durante las primeras dos décadas del siglo. Al mismo tiempo, el valor de las exportaciones de cobre y petróleo como porcentaje de las exportaciones totales se incrementó marcadamente en el mismo lapso.

La producción de cobre mejoró enormemente con la construcción de una nueva y gigantesca fundición y refinería en La Oroya, en la sierra central, por parte de la Cerro de Pasco Corporation. Después de que la refinería abriera en 1922, el nivel global de la producción del metal en el país se incrementó en más de cincuenta por ciento. Las plantas independientes más pequeñas no pudieron competir, de

modo que la Cerro ganó el control total de la fundición y el refinamiento de todos los minerales en la región. Además, tomó el control de la Northern Peru Mining and Smelting Company, en la sierra del departamento de La Libertad. Según Dore, para 1929 (1988: 103), estas dos compañías, juntamente con una tercera empresa estadounidense, daban cuenta de más del noventa y siete por ciento de las exportaciones peruanas de mineral.

Poco después que la refinería de La Oroya abriese, la emisión de partículas contaminantes de las chimeneas de la planta comenzó a dañar los cultivos y animales en un radio de veinte millas. En consecuencia, treinta comunidades campesinas y veintiocho dueños de haciendas enjuiciaron a la Cerro por daños. Esto conllevó que como parte del arreglo subsiguiente, la compañía no solamente instalara equipos de control de contaminación en sus chimeneas, sino que además comprara más de 200.000 hectáreas de tierras en la región, presumiblemente a precio de ganga. Junto con sus restantes posesiones agrícolas, la Cerro era ahora el más grande terrateniente del Perú, y su División Ganadera comprendía 325.000 hectáreas.

Para la década de 1920, «la Compañía», como se conocía ampliamente a la Cerro de Pasco Copper Corporation, había llegado a dominar virtualmente todos los aspectos de la vida en una gran parte de la sierra central. Su ampliación original del ferrocarril central hasta sus principales posesiones y el subsiguiente crecimiento y demanda de suministros, abrió el valle agrícolamente rico del Mantaro a la comercialización y la capitalización. Al mismo tiempo, la demanda de la compañía de tierras y trabajadores había servido para proletarizar a grandes sectores de la población campesina. No solamente era la más grande terrateniente, sino también la más grande empleadora del país. Como señala Dore (1988: 121), «la Compañía» poseía virtualmente todo en su vecindad, desde los caminos, el agua y la energía eléctrica, hasta las escuelas, los hospitales, los políticos y los sacerdotes; hasta imprimía y circulaba su propia moneda, con la que pagaba a sus trabajadores para que gastaran en sus almacenes.

La industria petrolera experimentó también un incremento bastante marcado de la producción en la década de 1920, multiplicándose diez veces, pasando de tres mil barriles anuales en 1920, a treinta mil en 1929. Sin embargo, aunque entre 1916 y 1937, el valor de retorno de las utilidades de la Cerro de Pasco Copper Corporation rondó en promedio el cincuenta por ciento, el del petróleo fue de apenas dieciséis por ciento del ingreso entre 1916 y 1934, o tan solo $1,4 millones. La International Petroleum Company (IPC), cuya concesión más importante yacía escondida bajo un manto legal en lo que respecta a los pagos fiscales por los derechos del subsuelo, que se remontaban a 1824, protegió su lucrativa posición e intereses efectuando pagos a diversos gobiernos, muchas veces en momentos de crisis fiscal. Así fue con Pardo en 1915, y nuevamente con Leguía en 1922, cuando

la IPC le dio $1 millón. A cambio, el gobierno promulgó una nueva legislación petrolera que, entre otras cosas, puso un tope a las regalías en diez por ciento de la producción de crudo, reconoció los largamente cuestionados derechos de propiedad de la IPC y la dispensó de los pagos de regalías sobre la producción, congelando al mismo tiempo sus impuestos a la exportación por cincuenta años. Este dulce acuerdo produjo una comprensible protesta de los nacionalistas.

En lo que respecta al sector industrial doméstico de la economía, éste prosiguió su decadencia de larga data, iniciada en 1908. La industrialización por sustitución de importaciones fue débil durante la Primera Guerra Mundial y el sector entró en un periodo de estancamiento en la década de 1920, debido a la demanda interna cada vez más débil de bienes producidos localmente, por oposición a las importaciones extranjeras que eran generalmente favorecidas por los consumidores urbanos. Por ejemplo, entre 1918 y 1933 las nuevas empresas manufactureras sumaron apenas cuarenta y dos, un incremento del trece por ciento en quince años, y el empleo global en general permaneció estancado, cayendo incluso en los textiles. Culpables de esta situación eran una tasa de cambio estable, la caída de los aranceles, la creciente inflación local y la disminución de las tasas internacionales de los fletes, todo lo cual favorecía a los bienes importados. Es más y como ya señalé, hubo pocos excedentes domésticos disponibles que invertir en las manufacturas, ya fuera del débil sector agroexportador o del sector minero, dominado mayormente por extranjeros.

El cuadro de los ingresos y salarios era asimismo oscuro en la década de 1920. En general, el salario promedio subió constantemente en las dos primeras décadas del siglo, luego con fuerza durante la Primera Guerra Mundial, y alcanzó su punto máximo en 1920, a partir de este momento cayó y luego se estabilizó a mediados de esta década. Sin embargo, el salario real se contrajo fuertemente durante el conflicto debido a la desaceleración económica inicial, y luego a la posterior inflación galopante de finales de la década de 1910. En la siguiente década, los sueldos y salarios reales en general crecieron lentamente, en tanto que el empleo en el sector exportador cayó. Sin embargo, el descenso durante la guerra del ingreso real había sido tan grande que diversos grupos ocupacionales no lograron recuperar su nivel de vida anterior al conflicto sino hasta finales de la década de 1920. La desigualdad en el ingreso se amplió, asimismo, en este periodo, dado que únicamente unas cuantas personas o grupos se llevaban la parte del león de la expansión de la producción algodonera, o eran favorecidos por los peculados del régimen en los gastos gubernamentales. Esto fue particularmente cierto en el área de las mejoras urbanas. Dos empresas extranjeras, la Foundation Co. y Frederick Ley & Co. fueron las principales beneficiarias del *boom* de la construcción en Lima, entre 1921 y1925, cuando el valor de los bienes raíces se duplicó en la ciudad, quintuplicándose en las zonas circundantes. El favoritismo

político, la corrupción, la especulación rampante, la importación de bienes suntuarios, la fuga de capitales: éstas fueron las marcas de una economía inundada de préstamos extranjeros y gasto gubernamental. Un observador contemporáneo señaló que estos préstamos

> [...] incrementaron ficticia y considerablemente el poder de compra de los peruanos. [...] Toda persona que obtuviese parte de estos fondos, honestamente o no, pero con relativa facilidad, se convertía en un gran consumidor de lo que se llaman las «cosas buenas de la vida», tales como joyas, autos, vinos, vestidos, materiales para la construcción de sus chalets, etc. (citado en Thorp 1984: 87).

Aunque la exitosa búsqueda de préstamos extranjeros por parte de Leguía sirvió para apuntalar la economía generalmente débil durante buena parte de la década, ello solamente podía tener éxito en el corto plazo y provocó que el Perú resultara extremadamente vulnerable a todo *shock* externo. El comienzo del fin llegó a finales de 1928, cuando los banqueros estadounidenses restringieron los futuros préstamos al Perú, concluyendo finalmente, luego de numerosas advertencias, que sus inversiones ahora estaban en peligro por el excesivo gasto, despilfarro y corrupción del gobierno. Esta evaluación coincidió con un desplazamiento general de los fondos de inversión de los Estados Unidos, de bonos extranjeros a acciones locales, durante la orgía especuladora que llevó al colapso de Wall Street en octubre de 1929, disminuyendo aún más el capital disponible para Perú y otros países latinoamericanos.

En lo que respecta a la corrupción gubernamental y el mal uso de los préstamos, los bancos estimaban que no más del treinta por ciento de estos pasaron en realidad a proyectos de obras públicas. El resto fue consumido por los fraudes y la corrupción estatal. Los ejemplos abundan, muchos de ellos expuestos a la luz pública por las investigaciones efectuadas después de la caída de Leguía. El proyecto de irrigación de Olmos es un caso paradigmático; enormes sumas del gobierno fueron gastadas en expropiaciones de tierras que beneficiaban a favoritos políticos, entre ellos el hijo del Presidente. De hecho, Juan Leguía fue una figura notoria de la administración que usó su posición para ordeñar a innumerables empresas extranjeras que hacían negocios en el país. Según un banquero extranjero, él intentaba lucrar con cualquier extranjero que llegase al Perú e intentara hacer negocios allí, con miras a apoderarse de cualquier comisión o transacción que pudiera conseguir» (citado en Stallings 1987: 259). Un soborno en particular llegó a más de $400.000.

Cuando finalmente sonó la hora nona y la «danza de los millones» tuvo un final abrupto, Leguía y sus sucesores se vieron forzados a cortar dramáticamente el gasto estatal —cincuenta por ciento entre 1929 y 1932— después de que este se hubiese cuadruplicado en los diez años anteriores. Sin la prolongación de los

préstamos extranjeros y las ganancias en el ingreso procedente de los impuestos a las exportaciones, el gobierno se hallaba al borde de la quiebra. Esta situación amenazaba, a su vez, la solvencia de los bancos peruanos, que al igual que sus contrapartes extranjeras habían hecho fuertes préstamos al gobierno. Al mismo tiempo, los precios de las principales exportaciones peruanas, que en realidad comenzaron a bajar ya en 1926, colapsaron después del Martes Negro, haciendo que el valor en dólares de las exportaciones se redujera en setenta y dos por ciento entre 1929 y 1932 (cobre, sesenta y nueve por ciento; lana, cincuenta por ciento; algodón, cuarenta y dos por ciento; azúcar, veintidós por ciento). En este periodo las importaciones también descendieron en cincuenta por ciento, a medida que el poder adquisitivo de los consumidores disminuía debido a la devaluación de la moneda nacional, las restricciones al crédito y los cortes salariales y despidos de los trabajadores.

Los habitantes de Lima fueron golpeados en forma especialmente dura. En noviembre de 1931, el veinticinco por ciento de la fuerza laboral de la ciudad estaba sin empleo. El mayor desgaste fue en la construcción, que soportó todo el peso de la cancelación de los proyectos de obras públicas, y cuya tasa de desempleo alcanzó un asombroso setenta por ciento. Este fuerte deterioro tendió a concentrar su impacto en el gran número de inmigrantes rurales a la ciudad, relativamente poco capacitados y empleados como trabajadores en la industria de la construcción. En respuesta, el gobierno urgió a muchos de ellos a que regresaran a sus hogares en el interior. En cambio, los trabajadores mucho más capacitados de la industria textil apenas si experimentaron un desempleo del doce por ciento. El despido de obreros fue también dramático en el antes próspero sector minero, donde el empleo cayó dramáticamente de 32.000 mineros en 1929 a 14.000 en 1932.

El advenimiento de la depresión no dislocó únicamente a las clases trabajadoras a medida que los productos de exportación se apilaban en los muelles y el consumo y la producción internos colapsaban. El sufrimiento de las clases medias fue también intenso. El ingreso de abogados, médicos y otros profesionales disminuyó en forma marcada, la burocracia estatal quedó impaga, las universidades se clausuraron y no se pagó a los maestros.

Al igual que muchas de sus contrapartes en toda América Latina, Leguía no logró capear la tormenta política que siguió a este colapso económico y social. Al parecer inconsciente de lo precario de su régimen, fue apresado la tarde del 25 de agosto de 1930 por un grupo de oficiales del ejército, a su regreso a Palacio de Gobierno de una de sus dos acostumbradas visitas semanales al hipódromo. El golpe fue organizado por el teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro, el comandante de la guarnición de Arequipa. Llegado a Lima cuatro días después, el joven oficial fue recibido como un «libertador» por multitudes estimadas en cien mil personas, la más grande demostración espontánea de masas en la historia peruana. Un

observador limeño describió el acontecimiento como «una suerte de resurrección del caudillismo romántico que caracterizó los primeros años de la república» (Víctor Andrés Belaunde, citado en Stein 1980: 85). Habiendo derribado la longeva dictadura, el audaz y cobrizo Sánchez Cerro pasó a establecer estrechos vínculos como héroe popular con grandes sectores de la población limeña, que posteriormente le catapultarían a la victoria en las elecciones presidenciales de 1931.

Nacido en 1899 en circunstancias modestas en la ciudad norteña de Piura, Sánchez Cerro fue hijo de un notario público que apenas si pudo enviar su hijo a la escuela pública. Después de terminar la secundaria a los dieciséis años eligió una carrera militar, ingresando a la Escuela Militar de Chorrillos, en las afueras de Lima. Varios años más tarde, cuando fue ascendido de teniente a capitán, tenía la nota de examen más alta de todos los candidatos.

No pasó mucho tiempo antes de que se manifestara la sed de poder que el joven oficial tenía, al mutilarse un dedo en un intento de golpe en contra del gobierno de Benavides (por lo cual se ganó el apodo de «El Mocho»). Durante el Oncenio tomó parte en dos infructuosos golpes contra Leguía, motivo por el cual el dictador lo exilió a Europa. Aparentemente nada arrepentido, se comenta que dijo en una conversación celebrada en casa de Mariátegui a su regreso por segunda vez, en 1929, que él derrocaría al tirano y sería presidente. Cumpliendo su palabra, la tercera conspiración de Arequipa tuvo éxito. El *Manifiesto de Arequipa* de los golpistas denunciaba al dictador y prometía «moralizar» el gobierno y liberar al país del dominio de los acreedores extranjeros.

Para llegar al poder, Sánchez Cerro había calculado con exactitud el decreciente respaldo a Leguía de los militares y la élite. Por ejemplo, el sentir proleguiísta entre los oficiales jóvenes había cambiado tras el controvertido arreglo que el dictador hiciera en 1929 con Chile, con motivo de la disputa sobre Tacna y Arica, y con la precipitada caída de sus salarios debido a la depresión y la subsiguiente devaluación de la moneda. Los descentralistas de Arequipa, durante largo tiempo un semillero del sentir regional, se oponían al centralismo de Leguía en los asuntos administrativos y fiscales, y comenzaron a constituir el Partido Descentralista, fundado poco después del golpe en 1931. Conformado principalmente por elementos procedentes de los sectores medios, este partido buscaba una mayor autonomía provinciana de Lima, y un mayor énfasis en el desarrollo regional. Los exportadores ya se habían alejado de Leguía en 1928, cuando el presidente prestó oídos sordos a sus pedidos de ayuda gubernamental en respuesta a la fuerte caída de los precios internacionales del azúcar y de las materias primas, y de sus ganancias. El inicio de la depresión únicamente amplió la brecha con la oligarquía, la cual rápidamente pasó a adoptar a Sánchez Cerro como un hombre fuerte capaz de controlar a las inquietas masas y revivir la fortuna económica y política de la élite.

Sánchez Cerro gobernó el Perú por seis meses, entre septiembre de 1930 y febrero de 1931, como jefe de una junta militar. En dicho lapso emprendió una serie de medidas que consolidaron su popularidad entre las masas, sobre todo en Lima. Como su legitimidad inmediata se derivaba de los fuertes sentimientos contra Leguía, hizo encarcelar al dictador y orquestó una campaña de enjuiciamiento y persecución de muchos de los seguidores de Leguía, a los cuales se acusaba de corrupción pública y abuso de confianza. Su popularidad se vio asimismo apuntalada gracias a la abolición de la odiada conscripción vial, el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio, y sobre todo por el reparto de raciones de alimentos —en las estaciones de policía— a la creciente legión de desempleados de Lima. De hecho, junto con el alcalde de Lima, Luis Antonio Eguiguren, el Presidente impulsó una serie de populares medidas sociales y obras de caridad diseñadas para aliviar la condición de los pobres.

Al mismo tiempo, Sánchez Cerro mostró un populismo esencialmente conservador, rodeándose de asesores extraídos de la élite civilista de la antigua República Aristocrática. En este sentido, representaba la vuelta al poder de la antigua oligarquía civilista, marginada políticamente por Leguía durante el Oncenio. En primera fila entre sus seguidores estaban los hacendados azucareros y algodoneros, los cuales le persuadieron para que interviniera a su favor con ayuda gubernamental para sus respectivas industrias. También le convencieron de que invitara a Edwin Kemmerer, el economista de Princeton que había asesorado a varios gobiernos andinos recientes en reformas fiscales y financieras, para que viajara a Lima con este mismo fin.

Sin embargo, la oposición al gobierno surgió a partir de las maniobras hechas por Sánchez Cerro para arreglar su «elección» a la presidencia. Cada vez era más atacado en la prensa. Además, la oposición a él en las fuerzas armadas se daba ahora entre los oficiales de mayor rango, que resentían el mando de un subordinado en el palacio presidencial, y entre algunos oficiales de menor jerarquía que participaron en la rebelión de Arequipa pero que no fueron recompensados lo suficiente con los ascensos prometidos. En consecuencia, estalló por todo el país una serie de revueltas militares que también incluían elementos del régimen leguiísta. Incapaz de controlar la situación, el presidente renunció repentinamente a la junta el 1 de marzo y anunció que emprendería un exilio voluntario. Ello desató la incertidumbre en el gobierno sobre quién debía gobernar. Unos días más tarde, el coronel Gustavo Jiménez, ministro de guerra, rival de Sánchez Cerro y propulsor del naciente Partido Aprista, preparó la instalación de una nueva junta dirigida por el veterano político cuzqueño y viejo pierolista David Samanez Ocampo. Entretanto, Sánchez Cerro fue escoltado a un navío en la rada del Callao por una multitud embelesada, que mostró que la mística popular del «héroe de Arequipa» seguía intacta.

Una importante medida tomada por la nueva junta de Samanez Ocampo fue la promulgación de una nueva ley electoral, en mayo de 1931. La ley retiraba las restricciones de propiedad al sufragio y establecía el voto secreto, de modo que ahora todo hombre de más de veintiún años que supiese leer y escribir podría participar en las elecciones venideras. En consecuencia, el tamaño del electorado subió un cincuenta y nueve por ciento, de 203.882 en 1919 a 323.623 en 1931. Este incremento de los votantes elegibles constituyó la base para la organización de los partidos políticos de masas por vez primera en la historia peruana.

La junta de Samanez Ocampo también recibió a la misión Kemmerer en marzo de 1931. En un mes, la misión había diseñado un programa de ajuste y reforma para el alicaído sistema fiscal y financiero del país. El plan recomendaba la contracción crediticia y monetaria, reservas elevadas en el Banco Central y la liquidación de varios bancos grandes. Otras recomendaciones para la reforma incluían la banca, el presupuesto, el abandono del patrón de oro, el código tributario (para que incluyera impuestos a la renta y a las propiedades), el código de aduanas y la deuda. La junta adoptó rápidamente el plan, en principio con la esperanza de que las recomendaciones restaurarían la confianza en la economía, pero su implementación resultó extremadamente desigual. Para empezar, el régimen se negó a aplicar las recomendaciones dirigidas al sector agroexportador, que respaldaba con fuerza al gobierno.

Por ejemplo, las reformas bancarias de Kemmerer, que incluían la reorganización y el fortalecimiento del Banco Central (que pasó a ser el Banco Central de Reserva) con medidas tales como la obligación de contar con más reservas y un mayor poder para el superintendente de banca, ayudaron a modernizar las transacciones financieras y salvaron a los bancos de la quiebra durante la depresión. No puede decirse lo mismo de sus reformas fiscales, que buscaron cortar el creciente déficit presupuestario debido al colapso de las rentas estatales. Aunque los gobiernos posteriores a Leguía paralizaron fuertemente las obras públicas en 1930-1931, no pudieron o no quisieron reducir la burocracia estatal, cuyas filas habían crecido en veinte por ciento y su salario en treinta y tres por ciento desde 1926. El principal problema era cómo superar la fuerte oposición de los empleados públicos, sindicatos y miembros de las fuerzas armadas, particularmente dado que el valor del sol, y con éste el de sus salarios, había caído en cincuenta por ciento desde 1930.

Entretanto el descontento laboral crecía, primero en los distritos mineros de los Andes centrales, en Malpaso (cerca de La Oroya) y otros lugares. Le siguió una ola de huelgas sin precedentes entre los trabajadores textiles, azucareros y petroleros, así como de los choferes y telefonistas de Lima. En Malpaso, la medida de los trabajadores fue precipitada por los sindicatos dirigidos por los comunistas, que organizaron a los trabajadores mineros en septiembre y octubre de 1930, y declararon una huelga general en contra de la Cerro de Pasco Copper

Corporation. Esta estrategia de confrontación directa fue adoptada después de la muerte de Mariátegui por Eudocio Ravines, el nuevo jefe del Partido Comunista (PC), creyendo que desataría un levantamiento general de los trabajadores en todo el país. El supuesto subyacente era que el derrumbe de Wall Street en 1929 y el advenimiento de la depresión mundial marcaban el colapso final del sistema capitalista internacional, tal como lo predijeron Marx y Lenin.

Sin embargo, la nueva estrategia del PC de confrontación en las minas fracasó estrepitosamente. El gobierno juró aplastar a los comunistas y la represión estatal subsiguiente en Malpaso y otros lugares dejó al PC aislado e ineficaz. Ello, a su vez, despejó el camino para el nuevo partido nacional-populista, el APRA, dirigido por el carismático Haya de la Torre, como única alternativa política viable de izquierda. Como veremos, el APRA aprovechó plenamente el error táctico del PC, en el mismo momento en que las masas peruanas emergían a la arena política por primera vez en la historia.

El gobierno tomó una firme posición nacionalista en lo que respecta al pedido hecho por Kemmerer de que el Perú iniciara negociaciones con la comunidad bancaria internacional sobre el pago de la deuda externa. No se desvió de la



Trabajadores ferroviarios en Cuzco, 1928. Fotografía de Martín Chambi, reproducida con permiso de Teo Allain Chambi.

posición previa de Sánchez Cerro, quien supuestamente había declarado en privado que «todos los banqueros son ladrones», y que «Perú no puede pagar [...] uno por ciento de su deuda externa. Hacerlo sería como pedirle a un hombre que se muere de hambre que entregue los alimentos necesarios para su vida» (citado en Drake 1989: 240). De modo que el gobierno suspendió oficialmente la mayoría de los pagos de la deuda externa el mismo día que Kemmerer entregó su informe final. Así, el Perú se convirtió en el segundo país sudamericano, después de Bolivia, en incumplir su deuda, aunque sí continuó reconociendo su obligación y pagando por lo menos una fracción de la misma. El gobierno peruano no reinició el pago total de la deuda suspendida hasta 1952. Kemmerer dejó el Perú a finales de 1931; su trabajo fue alabado en general por los banqueros y la élite del país, pero fuertemente criticado por la izquierda, la cual lo denunciaba como una herramienta del «imperialismo» y la «dominación financiera» estadounidense.

Entretanto, la campaña electoral se calentó en julio de 1931 con el retorno de Sánchez Cerro de un exilio de cuatro meses, para postular en las elecciones de octubre a la presidencia. Los vehículos políticos de su campaña fueron el recién organizado Partido Unión Revolucionaria (UR) y el periódico *La Opinión*. Sánchez Cerro, asimismo, se ganó el respaldo de Eguiguren, el popular alcalde de Lima, y del importante diario *El Comercio*, editado por el intensamente antiaprista Antonio Miró-Quesada. Según Stein (1980: 114), buena parte del sustento popular de Sánchez Cerro descansaba en los trabajadores no capacitados y en el lumpen proletariado limeño: humildes vendedores ambulantes y de mercado, obreros de construcción, barrenderos y trabajadores de pequeñas industrias artesanales. Muchos eran inmigrantes recientes, caracterizados como grupo por su elevado grado de pobreza y desempleo, y por la ausencia de toda representación sindical. Ellos se identificaban con el aspecto mestizo del candidato; «es un cholo como nosotros» era un estribillo ampliamente oído en las manifestaciones públicas. La plebe urbana respondía, asimismo, al carisma del candidato, su emocionante oratoria y su imagen como hombre fuerte y caudillo que había derribado al odiado dictador. Sorprendentemente, una red de cien a ciento cincuenta clubes vecinales sanchezcerristas débilmente organizados surgieron espontáneamente en los barrios de clase baja de Lima, como el Rímac, La Victoria y Barrios Altos, alcanzando tal vez los veinte mil integrantes en el clímax de la campaña electoral.

El respaldo en los estratos superiores provino de los integrantes de la vieja oligarquía civilista, que estaban fuera del poder desde 1919, y que si bien desdeñaban los modestos orígenes sociales de Sánchez Cerro, a pesar de todo aceptaban su programa conservador y su estilo caudillista como algo adecuado para su propia agenda política y económica. En particular, veían en él al proverbial «hombre a caballo» que podía restablecer el control social sobre las masas, ahora desatadas en las calles por la debacle económica. Sin embargo, el núcleo de su

movimiento provenía de un grupo de nacionalistas derechistas de los sectores superiores de la clase media, con inclinaciones políticas fascistas y antiguos vínculos con la República Aristocrática. Estos nacionalistas eran particularmente críticos frente a lo que consideraban la «traición» de Leguía con respecto a la disputa por Tacna y Arica, y tenían fuertes sentimientos revanchistas frente a Chile.

El programa del candidato era de tono esencialmente conservador y corporativista, en tanto que su estilo era populista. Antes que emprender una nueva reestructuración radical del país, Sánchez Cerro prometía restaurar el orden siguiendo los tradicionales lineamientos sociales y económicos luego de la desastrosa dictadura de Leguía. Ofrecía por igual mecanismos de seguridad social a los empleados y profesionales, y la ciudadanía plena y la protección de las comunidades a los indios. Adoptaba la reforma agraria, pero planteada en función de abrir nuevas tierras a la colonización antes que realizar una redistribución. Para hacer frente a la depresión se proponían políticas económicas ortodoxas y deflacionarias. Al mismo tiempo, acusó al candidato opositor aprista Haya de la Torre de anticatólico, antimilitar y antinacional.

En el ínterin, Haya había retornado al Perú en agosto, después de siete años en el exilio, para organizar su incipiente Partido Aprista y oponerse a Sánchez Cerro con su propia candidatura presidencial. Trajo consigo las influencias tanto del fascismo como del comunismo europeos mientras emprendía la construcción de un partido de masas, basado en la idea del «frente popular» o alianza populista pluriclasista entre los sectores medios y las clases trabajadoras organizadas. Estas influencias ideológicas se manifestaron particularmente en la estructura rígidamente jerárquica del partido, cimentada en una cadena de mando que semejaba un ejército civil, con una rígida disciplina impuesta desde arriba a los militantes.

El programa del partido Aprista era más progresista que el de la UR de Sánchez Cerro, pero en modo alguno proponía una reestructuración radical y «revolucionaria» de la sociedad. De hecho, Bertram (1991) sostiene que los programas de ambos partidos eran notablemente similares, siendo sus diferencias una cuestión de matices. Es más, mientras que Haya sonaba algo radical en los discursos de su campaña, en privado aseguraba al embajador estadounidense en Lima que él no representaba ninguna amenaza para el capital extranjero. El programa aprista mismo proponía poner fin a la corrupción gubernamental; la creación de una administración pública eficiente y de orientación tecnocrática; la futura nacionalización de las operaciones mineras y petroleras; la separación de Iglesia y Estado; la adopción del sufragio universal, incluyendo a mujeres, mayores de dieciocho años y analfabetos; y la creación de un sistema de seguridad social. Para emprender esta programa, Haya concibió la creación de un Estado fuerte e intervencionista (el Estado antiimperialista), administrado eficientemente por cuadros de tecnócratas altamente calificados. Estos, siguiendo lineamientos

corporativistas, convertirían el Estado en una «democracia funcional», diseñada para arbitrar entre los distintos grupos de interés y sectores de la sociedad contendores. Al final, decía Haya, para resolver el problema fundamental del subdesarrollo peruano se aplicaría lo mejor de las soluciones capitalista y socialista.

Haya atrajo sobre todo a los trabajadores organizados, al proletariado azucarero rural de su nativa costa norte, a los pequeños y medianos terratenientes y empresarios, a las clases profesionales y a la burocracia estatal. En varios sentidos, estos eran los mismos estratos sociales que antes habían apoyado a Leguía y que ahora se desplazaban naturalmente a Haya. Sin embargo, ellos le planteaban un problema delicado, ya que si bien deseaba el voto de los antiguos partidarios de Leguía, en la atmósfera políticamente cargada contraria al caído dictador, no podía hacer ningún llamado abierto a sus seguidores.

La campaña, reflejo de la polarización política producida por la crisis económica, fue una de las más amargas del siglo. Los dos candidatos y sus seguidores intercambiaron acusaciones y contraacusaciones, recurriendo a menudo a los insultos más personales que pudiera imaginarse. Sánchez Cerro fue pintado por los apristas como una herramienta de la oligarquía y caracterizado personalmente como un loco y hasta como un gorila. Los sanchezcerristas respondieron ridiculizando a Haya y sus asociados como «pequeños niños ricos» y al APRA como anticatólico, basándose en la protesta dirigida por Haya contra el Sagrado Corazón de Jesús en 1923. También acusaron al partido de ser antipatriota, ya que tenía su propia bandera e himno, y a Haya de ser un criptocomunista, debido a las referencias en sus discursos y escritos a Marx, Engels y Lenin. Los apristas fueron condenados como partidarios de Leguía y los sanchezcerristas como civilistas.

Como mostrase Vega Centeno (1991), el atractivo del APRA iba más allá de su ideología y de su programa. Este partido tomaba los atributos de una cruzada moral, exhortando a sus seguidores a convertirse en ejemplos del «nuevo hombre» aprista: moralmente puros, autodisciplinados y físicamente en forma. El movimiento mostraba también un simbolismo y tintes marcadamente religiosos, constituyendo, en palabras de Stein (1980: 175), una «suerte de catolicismo popular». En la propaganda partidaria Haya era asemejado a Cristo rodeado por sus acólitos, pintados como leales apóstoles y discípulos. Lemas tales como «sólo el aprismo salvará al Perú» no solamente reflejaban el estado polarizado del electorado, sino que constituían además un llamado a la salvación y redención mediante la adhesión al partido. En ciertos sentidos, semejante discurso absolutista y de «salvación» —característico de muchos partidos populistas latinoamericanos— resultó ser antitético y contradictorio con la ideología democrática abrazada por el partido, dado que dejaba de lado el diálogo y el consenso con la oposición, a la que retrataba como el enemigo nefando. Al mismo tiempo, Haya asumía el manto del caudillo carismático, una figura paterna y profesoral que instruiría y protegería

a sus «hijos» (las masas peruanas) de la tormenta económica que los engullía. En suma, estas características singulares permitieron al APRA forjar una relación estrecha y duradera con una minoría sustancial del electorado que seguiría a Haya durante más de medio siglo, no obstante sus numeroso zigzagueos programáticos e ideológicos y su respaldo a sus anteriores perseguidores de la oligarquía (la convivencia, 1953) y las fuerzas armadas (1979).

En lo que Basadre califica como una de las elecciones más justas de la historia peruana, Sánchez Cerro derrotó a Haya por un margen de 152.062 votos (50,7 por ciento) contra 106.007 (35,4 por ciento) en las elecciones de octubre de 1931. A escala nacional, Sánchez Cerro ganó en su departamento natal de Piura, al norte; en el sur, donde inició su «revolución» contra Leguía; y en el centro, incluyendo la populosa Lima-Callao. Haya tenía la mayoría en su región nativa de la costa norte y en el departamento amazónico de Loreto, donde capitalizó el descontento causado por la cesión de una parte de este mismo a Colombia en agosto de 1930.

Sánchez Cerro inauguró su gobierno el 8 de diciembre. Los siguientes dieciséis meses de su presidencia estuvieron signados por la insurrección civil, las penurias económicas y la guerra externa. Apenas pasaba un mes sin algún tipo de disturbio violento o levantamiento militar. La atmósfera polarizada se intensificó al volver Haya a su bastión en Trujillo luego de las elecciones y sostener que Sánchez Cerro podría estar ocupando el palacio presidencial, pero que él era en realidad el «presidente moral del Perú».

Aproximadamente al mismo tiempo, la recién electa asamblea constituyente se reunió en Lima para preparar una nueva constitución. En el transcurso del mes siguiente ella fue el escenario de acalorados debates entre derecha e izquierda en torno a una serie de cuestiones, entre las cuales una de las más importantes se relacionaba con el viejo problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los apristas asumieron una postura cada vez más anticlerical, aunque Sánchez Cerro había decretado el matrimonio civil obligatorio y el derecho al divorcio casi inmediatamente después de asumir el poder. Estas propuestas, juntamente con otras que comprendían la educación laica y el derecho de la mujer al voto, impulsaron a la Iglesia a emprender una vigorosa defensa de sus prerrogativas tradicionales, bajo el liderazgo de los intelectuales conservadores Víctor Andrés Belaunde y José de la Riva-Agüero.

En lo que respecta a la extensión del sufragio a las mujeres, los liberales temían que el clero las manipulase para que votaran en forma conservadora. Finalmente la asamblea, que se convirtió formalmente en congreso después de promulgar la nueva constitución en 1933, aprobó los decretos de Sánchez Cerro sobre el matrimonio civil y el divorcio, dándoles la condición de ley en 1934. Asimismo, la asamblea confirmó nuevamente que únicamente podían votar los ciudadanos que

supieran leer y escribir de veintiún años o más (y que no sirvieran en las fuerzas armadas), y reafirmó la sagrada unión de la Iglesia y el Estado.

Los apristas asumieron una posición extremadamente obstruccionista durante el debate de estos y otros temas importantes, como la descentralización, la intervención estatal en la economía, la adopción de un sistema presidencial o parlamentario, la protección de las comunidades indígenas y otros más (Balbi y Madalengoitia 1980). Sánchez Cerro reaccionó en febrero de 1931, expulsando y luego deportando a veintitrés miembros de la célula parlamentaria aprista y al coronel Jiménez, cuyas simpatías pro apristas y actividades conspiradoras eran ampliamente conocidas. El Presidente ya había invocado la «Ley de emergencia» en respuesta a una serie de violentos incidentes ocurridos por todo el país, que él atribuía al APRA y al PC.

El Perú se precipitó rápidamente hacia el abismo de la guerra civil. En marzo, el Presidente fue herido severamente en un intento de asesinato cometido por un grupo de apristas mientras asistía a misa. Haya fue arrestado en mayo, acusándosele de subvertir el orden público, y en medio de su juicio fue sofocado en el puerto del Callao un motín naval de inspiración aprista. Luego, en julio, estando Haya en prisión y los principales dirigentes del partido exiliados, los apristas locales organizaron un levantamiento masivo en Trujillo.

La revuelta fue dirigida por trabajadores azucareros militantes, cuya tradición anarquista les predisponía a tomar acciones directas. Lograron capturar el cuartel local del ejército y tomar el control de la ciudad antes de que pudieran arribar refuerzos desde Lima y recuperarla. En el ínterin, los insurgentes ejecutaron a docenas de miembros del ejército y la guardia civil, retenidos en la prisión de Trujillo.

Este violento acto desató las sangrientas represalias del gobierno una vez que el ejército recuperó el control de la ciudad. Miles de sospechosos de ser rebeldes fueron arrestados y fusilados en las ruinas precolombinas de Chan Chan. Estas acciones inauguraron una severa represión y persecución del partido que se prolongaría durante años y que le hizo desarrollar una psicología colectiva de martirio que le ayudó a sobrevivir. Al mismo tiempo, la ejecución de los oficiales por parte de los rebeldes desató un intenso encono entre las fuerzas armadas y el partido que se extendería durante más de un siglo, y que hasta 1978 le cerró el paso a Haya a todo cargo. Desde la fundación misma del APRA, la jerarquía de las fuerzas armadas había recelado del partido y de su fundador, cuyas opiniones veían como revolucionarias, antimilitares y antiperuanas.

Mientras luchaba por restaurar el orden y la estabilidad política, era poco lo que Sánchez Cerro podía hacer para detener la crisis económica de la depresión. Su respuesta se limitó simplemente a emprender más gastos deficitarios. El objetivo no era un constructivo afinamiento keynesiano, sino más bien cumplir con la planilla estatal (gubernamental y militar) y anticiparse a toda amenaza política a

su régimen. De este modo, la administración redujo las reservas del Banco Central en cuarenta y ocho por ciento, forzando así al país a abandonar el patrón oro en mayo de 1932, lo cual causó otra fuerte baja en el valor del sol, esta vez de 28 a 16 centavos. Al mismo tiempo, la oferta monetaria o dinero en efectivo en circulación, así como el crédito disponible, se contrajeron fuertemente, limitando severamente el comercio. A comienzos de 1933, la economía había tocado fondo.

Tal vez para desviar la atención pública, Sánchez Cerro aprovechó un incidente fronterizo con Colombia para movilizar las fuerzas armadas. La crisis se precipitó en septiembre de 1932, cuando una banda armada de peruanos, organizada por los intereses caucheros y azucareros que habían perdido tierras con la solución dada por Leguía a Leticia (el tratado Salomón-Lozano de 1922), retomó ilegalmente la zona, siendo subsiguientemente respaldados por unidades del ejército peruano en el área. Colombia logró expulsar a los invasores a comienzos de 1933, forzando a Sánchez Cerro a llamar de Europa al ex presidente general Óscar Benavides, un viejo seguidor y héroe del conflicto con Colombia de 1911, para que asumiera el mando de las fuerzas peruanas. También ordenó el enrolamiento en el ejército de todo varón entre los 21 y los 25 años de edad.

Varias semanas más tarde, Sánchez Cerro cayó víctima de las balas de un asesino mientras era trasladado de una revista de las tropas que iban a ser enviadas al frente. El victimario, muerto de inmediato por la multitud enfurecida, resultó ser un miembro del Partido Aprista de diecisiete años llamado Abelardo Mendoza Leyva. Entre otras cosas, la muerte del presidente tuvo el efecto de confirmar la opinión derechista de que el APRA era realmente una organización violenta y subversiva que debía suprimirse para conservar el orden público. También catapultó a la presidencia a Benavides, quien, en general, era respetado dado que la asamblea constituyente lo eligió de inmediato para que terminara el mandato de Sánchez Cerro (hasta 1936).

Divisiones en la élite, la Segunda Guerra Mundial y el realineamiento del APRA

Desde la perspectiva de la élite gobernante, el nuevo mandatario llevó consigo unas credenciales y habilidades correctas a la presidencia, precisamente cuando la deprimida economía finalmente comenzaba a revivir. Para empezar, él era el héroe de la guerra con Colombia de 1911 en los distritos caucheros del Putumayo, la misma zona disputada en el conflicto de Leticia de 1932-1933. Dos años más tarde, en 1913, Benavides fue nombrado jefe de estado mayor a los treinta y siete años. Luego, preparó el derrocamiento del gobierno populista de Guillermo Billinghurst (1912-1914) y pasó a ser presidente provisorio (1914-1915) durante los tormentosos años iniciales de la Primera Guerra Mundial, antes de que devolviese

el país al dominio civilista. Al reemplazar al caído Sánchez Cerro, se enfrentaba a una situación semejante a su anterior y exitoso paso por el cargo.

Al final, Benavides logró establecer un gobierno viable y moderadamente conservador entre los extremos políticos de derecha e izquierda. Su lema —»paz, orden y trabajo»— era adecuado para el sentir público, cansado del partidismo político, la violencia y las penurias económicas de los últimos años. Aprovechando rápidamente sus credenciales militares y nacionalistas, el nuevo Presidente negoció exitosamente un acuerdo de paz con Colombia (concluido en 1934) con respecto



El dos veces presidente y general retirado Óscar R. Benavides y Señora, miembro de las «cuarenta familias» de la élite peruana, 1940. Reproducido con permiso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

al conflicto de Leticia, que él pensaba que el Perú no estaba preparado para arreglar militarmente.

Con la paz asegurada, Benavides intentó disminuir las tensiones políticas domésticas poniendo fin a la ley marcial y declarando una amnistía política general para todos los prisioneros políticos, incluyendo al encarcelado Haya de la Torre. Sin embargo, el temor a que el APRA ganase las elecciones parlamentarias de 1934 hizo que el gobierno las cancelara. El APRA reaccionó preparando una serie de conspiraciones para derrocar a Benavides. El resultado fue un ciclo renovado de conjuras e insurrecciones tanto de derecha como de izquierda, marcado por rebeliones militares, el exilio de varios líderes apristas y el asesinato de Antonio Miró-Quesada, el editor rabiosamente antiaprista de *El Comercio*, a manos del militante aprista Carlos Steer.

En medio de estos sucesos, la economía inició una vigorosa recuperación encabezada por las exportaciones. En términos comparativos, Perú fue uno de los países latinoamericanos menos afectados por la depresión, recuperándose con mayor rapidez —a partir de 1933— que sus contrapartes en otros lugares, salvo México y Chile. Dos razones de ello son que las empresas extranjeras, que representaban el cincuenta por ciento de las exportaciones, fueron quienes sufrieron el peso de la caída inicial, y que el algodón, que tenía un elevado valor de retorno y un significativo efecto multiplicador, encabezó la recuperación de las exportaciones. Además, el incumplimiento del pago de su deuda en 1932 hizo que Perú duplicara su capacidad importadora casi de la noche a la mañana, lo que tuvo el efecto saludable de estabilizar de inmediato la tasa de cambio.

En términos de política, en lugar de intentar emprender una dirección radicalmente nueva, el Perú reaccionó a la crisis en formas esencialmente predecibles. Después de «ajustarse» incumpliendo su deuda, el gobierno simplemente esperó a que el mercado internacional —esto es la demanda y los precios— de sus mercancías más importantes volviera a subir. Cuando ello sucedió, primero con la plata, el oro y el cobre en 1932, y luego con el algodón y el azúcar en 1933, el Perú simplemente reasumió su tradicional modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones. A diferencia de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, no recurrió a políticas de industrialización por sustitución de importaciones. Thorp y Bertram atribuyen esta decisión a que Perú no contaba con una burguesía nacional que fuera capaz de promover semejante agenda industrial. En la década de 1930 los aranceles permanecieron fundamentalmente sin cambios, subiendo nominalmente de diecinueve por ciento en 1927 a veinte por ciento en 1936. En consecuencia, el sector manufacturero únicamente experimentó un crecimiento lento (ayudado por la devaluación monetaria que encareció las importaciones, pero entorpecido por el desempleo y la reducción de los salarios, que deprimieron el consumo local).

A mediano plazo, esta recuperación liderada por las exportaciones mejoró con un alza global en el valor de retorno, a medida que el dominio extranjero disminuía y concomitantemente el control local aumentaba. Por ejemplo, los porcentajes del cobre, la plata y el petróleo controlados por extranjeros descendieron en el total de las exportaciones, de más de cincuenta por ciento en 1930 a veintitrés por ciento en 1950, en tanto que las exportaciones de plomo, zinc y oro se ampliaron bajo una nueva generación de propiedad local. Al mismo tiempo, el azúcar y el algodón controlados localmente, recuperaron su posición dominante en las exportaciones, subiendo de veintinueve por ciento en 1930 a cincuenta y tres por ciento en 1945, en tanto que el café y la lana, los anteriores puntales de la exportación, también incrementaron su parte. En suma, el total de las exportaciones agrominerales producidas por compañías extranjeras descendió del sesenta por ciento de las exportaciones totales en 1930, al treinta por ciento en 1950, abriendo el camino para un mayor control, valor de retorno y efectos multiplicadores locales.

La mejora en la economía ayudó, a su vez, a Benavides a tomar medidas paternalistas de bienestar social, y a elevar de los impuestos y los gastos gubernamentales. Entre 1933 y 1936, por ejemplo, se aprobaron leyes que establecían un salario mínimo, la compensación y pensiones laborales, y los beneficios de la seguridad social. Para administrar esto último se creó un nuevo Ministerio de Seguridad Social, financiado con las contribuciones de las corporaciones, los trabajadores y el gobierno. Además, Benavides atacó el desempleo con un programa de obras públicas que para finales de la década había dado trabajo a treinta o cuarenta mil personas. Estas medidas, junto con la permanente represión policial —una política de la zanahoria y el garrote, por así decirlo—, sirvieron para controlar una ola de huelgas encabezadas por la Confederación de Trabajadores Peruanos que el APRA fundó en 1934.

La mejora en la economía y el clima social también permitió a Benavides proseguir el proceso electoral previsto para cuando concluyese el periodo de gobierno de Sánchez Cerro, en 1936. Sin embargo, la élite estaba dividida en torno a la forma de actuar frente al APRA que persistía en su estrategia conspiradora de subvertir las fuerzas armadas y la policía en contra del régimen. Una facción de derecha, encabezada por la familia Miró-Quesada y el oligarca algodonero Pedro Beltrán, proponía tratarlo con mano dura, en tanto que los moderados, dirigidos por la familia Prado y el mismo Benavides, asumían una actitud más conciliadora.

Las fisuras en la oligarquía se hicieron aún más visibles al no poder la derecha coincidir en un único candidato. En la extrema derecha estaba Luis A. Flores, líder de la Unión Revolucionaria, el viejo partido de Sánchez Cerro. Flores, un ex ministro del interior, era un declarado fascista que organizó una fuerza paramilitar de seis mil militantes partidarios de camisa negra para atacar a la izquierda, al APRA y al PC. Otro candidato de la derecha era el Dr. Manuel Vicente Villarán, un antiguo

civilista al que respaldaban Beltrán, el intelectual ultra conservador José de la Riva-Agüero y varios prominentes hacendados de la costa y la sierra.

Durante la década de 1930, Riva-Agüero fue la voz más elocuente de la derecha católica. Junto con Belaunde ayudó a convertir a la Universidad Católica, fundada en 1917, en un centro importante de la derecha política, y al renacer intelectual de la Iglesia. Al mismo tiempo, Riva-Agüero era un entusiasta apologista de Mussolini y al igual que otros integrantes de la oligarquía y los sectores tradicionales de las clases medias, veía en el fascismo una profilaxis efectiva contra el contagio del bolchevismo. Aunque en última instancia no tuvieron éxito en llegar al poder, los fascistas peruanos siguieron siendo, a pesar de todo, una fuerza potente en la década de 1930 y fueron fuertes defensores de Franco y los falangistas durante la Guerra Civil Española.

En oposición a la extrema derecha, los conservadores moderados de la oligarquía respaldaban al Frente Nacional, creado por Benavides en un intento de ocupar el espacio político centro-derechista. Era éste un conglomerado de partidos centristas encabezados por Jorge Prado y Ugarteche, un oligarca aliado de Benavides y ex primer ministro. También debiera mencionarse la creciente participación de la Iglesia en la política en este momento, principalmente a través de la organización de una serie de grupos católicos laicos que la jerarquía había venido estimulando desde la década de 1920. Uno de ellos era la Unión Popular (UP) que, inspirada por las enseñanzas sociales de la Iglesia en la encíclica *Rerum novarum* (publicada en 1931), proponía reformas siguiendo el modelo de una social democracia gobernada por un Estado corporativo. Otro de ellos fue la Acción Católica, que se originó ya en 1929 en el ámbito parroquial en Lima, pero que posteriormente se esparció a provincias y pasó a ser una organización nacional en 1935. Aunque estos grupos fueron activos en el proceso electoral a favor de uno u otro candidato, no eran partidos políticos, claro está, pero prepararon el camino —intelectualmente y en otras formas— para el surgimiento del Movimiento Demócrata Cristiano después de la Segunda Guerra Mundial (Klaiber 1992).

En las elecciones de 1936, el APRA presentó a Haya de la Torre como su candidato, pero con serias dudas sobre si el gobierno de Benavides permitiría unas elecciones limpias. Por lo tanto, para asegurarse prepararon otro complot más, involucrando esta vez a David Toro, el Presidente de Bolivia. A cambio de armas y respaldo para un levantamiento, el APRA prometió apoyar las aspiraciones de la mediterránea Bolivia de acceso a un puerto, perdido en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, el gobierno de Benavides descubrió el complot y lo usó como pretexto para descalificar la candidatura de Haya. Con el APRA fuera de carrera, Eguiguren se retiró del Frente Nacional y presentó su propia candidatura, creyendo que los apristas votarían ahora por él como el candidato más progresista. Al tomar Eguiguren una temprana ventaja en los comicios de octubre, Benavides suspendió

el conteo y reemplazó su gabinete con otro conformado exclusivamente por militares. Presionado por el Presidente, el Congreso anuló las elecciones alegando que los apristas realmente habían votado por Eguiguren, y extendió el mandato de Benavides hasta el 8 de diciembre de 1939. El presidente disolvió luego el Congreso y asumió plenos poderes dictatoriales durante los siguientes tres años.

Benavides siguió beneficiándose con la mejora en la economía durante el resto de su gobierno. El ingreso nacional subió sesenta y uno por ciento entre 1935 y 1939, fundamentalmente por el buen desempeño de las exportaciones de algodón, petróleo y otros minerales. Este mayor ingreso permitió al presidente incrementar el gasto social, ampliar los proyectos de obras públicas (vivienda, carreteras e irrigación) y elevar los impuestos a los más acaudalados, pero conservando aun así el presupuesto equilibrado. Al mismo tiempo mantuvo el gasto militar en alrededor del catorce por ciento de los gastos totales, buena parte del cual iba a la compra de nuevas armas y equipos. De este modo, gracias a la recuperación económica Benavides logró más que duplicar el gasto público, de un mínimo de 91 millones de soles en 1932 a 221 millones en 1938. Al terminar su gobierno en 1939, maniobró a favor de Manuel Prado y Ugarteche, quien dirigía una alianza electoral moderada llamada la Concentración General de Partidos (una réplica del Frente Nacional de Benavides).

Manuel Prado pertenecía a una de las familias más acaudaladas y prominentes del Perú, y era un miembro destacado de la facción moderada-conservadora de la oligarquía. Era hijo del general Mariano Ignacio Prado, quien fuera presidente en los años previos a la Guerra del Pacífico (1876-1879), y cuya reputación quedó permanentemente manchada al haber abandonado el país en vísperas del conflicto, supuestamente en busca de armas en Europa. Junto con Benavides, sus hijos Jorge y Manuel habían planeado el derribo de Billinghurst en 1914 y luego se opusieron al gobierno de Leguía en la década de 1920. Benavides escogió a Jorge como candidato presidencial en las malhadadas elecciones de 1936, en tanto que Manuel formó parte de su gabinete en 1939. Antes de postular a la presidencia, Manuel presidió el Banco Popular, el más importante del Perú, y tenía extensas posesiones en la industria de seguros, la manufactura de textiles y la crianza de ganado en la sierra central.

Al coincidir con los momentos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la elección giró en torno a la cuestión del fascismo. La Concentración General de Prado constaba de sectores no fascistas y antifascistas, entre ellos industriales y sectores moderados de la oligarquía que defendían un mayor gasto estatal, inversiones de capital en la industria y la liberalización política. El ala derecha fue representada por la plancha presidencial de José Quesada Larrea y Luis Flores, siendo nuevamente respaldada por el periódico intensamente antiaprista *El Comercio*. Ella incluía a la derecha oligárquica, dirigida por el hacendado

algodonero Pedro Beltrán, quien defendía las tradicionales políticas económicas liberales y librecambistas, así como un Estado autoritario. Por su parte, el APRA, seguía proscrito oficialmente y en la clandestinidad, pero se inclinaba hacia Prado, considerando que su moderación y decidido antifascismo eran más ventajosos para el partido que su rival de línea dura. Favorecido por el conteo gubernamental de los votos y por la preferencia aprista que lo consideraba como un «mal menor», Prado ganó fácilmente las elecciones con 187.000 de los 339.000 votos emitidos (cincuenta y cinco por ciento). Para asegurar la lealtad de las fuerzas armadas, varios de cuyos oficiales no estaban a favor de la elección de Prado, Benavides tomó la precaución de incrementar su salario en dieciocho por ciento poco antes de la votación.

Prado era un «conservador modernizante» que puso al Perú en un camino más democrático después de una década de dictadura, al establecer un clima de mayor tolerancia hacia el APRA y la izquierda. El nuevo presidente reconocía que su elección se debía fundamentalmente a los votos apristas. También pensaba, al igual que Benavides, que la mejor forma de neutralizar la naturaleza radical y conspiradora del partido era mediante la cooptación y no la confrontación. En consecuencia, Prado estableció una alianza tácita con el APRA, siguiendo una política fiscal más expansiva diseñada para ganarse la considerable base de clase media del partido. En líneas generales esto significa que con el gobierno de Prado (1939-1945) y de su sucesor José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948), el Perú continuó su modesto tránsito hacia un Estado y una economía política más expansivas, iniciado por Benavides. En consecuencia, durante la década de 1940 fue uno de los principales exponentes latinoamericanos de la expansión fiscal, incrementándose el gasto gubernamental más de cuatro veces y media entre 1939 y 1948.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial ejerció una gran influencia sobre la presidencia de Prado. Inicialmente oscureció las perspectivas económicas de un país que dependía de las exportaciones y de los mercados extranjeros. Encontrándose Europa en problemas, Prado advirtió que la continua prosperidad del país dependía de mejorar las relaciones con los EE. UU. como comprador de mercancías peruanas. Por su parte, ese país estaba deseoso de fortalecer las relaciones y la defensa hemisférica, lo cual significaba, entre otras cosas, tener acceso a las muy necesarias materias primas peruanas. Ellas incluían el caucho, la quinina, el azúcar y ciertos minerales para sus industrias bélicas, como el cobre, el vanadio y el molibdeno, además del petróleo.

La política de conciliación entre ambos países se consolidó aún más cuando el APRA comenzó a suavizar su retórica anticapitalista y antiestadounidense. Por ejemplo, al estallar la guerra en 1940, Haya declaró que los «veinte países indoamericanos, aislados y divididos, únicamente subsisten porque los EE. UU. garantizan su existencia y soberanía», pidiendo entonces «un interamericanismo

democrático purgado del imperialismo» (citado por Drake en Rock 1994: 123). Semejante moderación marcó el inicio de un gradual desplazamiento global del partido hacia la derecha, a medida que buscaba realinearse a sí mismo con la nueva correlación internacional de fuerzas (las democracias versus el fascismo) y explotar su apertura con el más dispuesto Prado, para así ganar su legalización y su legitimación en el sistema político. Esto último indudablemente fue impulsado por la brutal represión a la cual el partido estuvo sujeto durante la década anterior. La moderación hacia los EE. UU. fue influida aún más por la política contraria a la intervención en América Latina del *New Deal*, llamada del Buen Vecino, así como por el reformismo radical local, todo lo cual coincidía muy bien con la doctrina aprista. De este modo, el APRA no solamente abandonó su estridente campaña contra el imperialismo yanqui, sino que además urgió la cooperación con los EE. UU., y la apertura a sus inversiones de capital. El socialismo vendría, decía Haya ahora, únicamente cuando el Perú se hiciera más capitalista, y esto sólo se produciría con el flujo de inversiones estadounidenses.

Durante la guerra, el Perú recibió una serie de misiones procedentes de los EE. UU., relacionadas con asuntos económicos, culturales, médicos y militares. Por ejemplo, en el lado económico y militar se firmaron acuerdos bilaterales de comercio y de préstamos y arriendos, sumando estos últimos más de $18 millones. El gobierno de Prado también permitió a los EE. UU. instalar una base militar en Talara. Tal vez más importante fue que el Perú aceptara la imposición de un control de precios a las materias primas durante la guerra, lo cual ayudó al esfuerzo bélico estadounidense, pero redujo las ganancias peruanas en minerales y otras mercancías. Por lo tanto, sus reservas de divisas extranjeras fueron bajas en comparación con las de otros países latinoamericanos, al igual que su avance hacia una mayor autosuficiencia económica. Sin embargo, el país sí recibió un mayor flujo de inversiones de los EE. UU., lo cual sirvió para aliviar la incertidumbre económica y estimular el crecimiento.

En términos diplomáticos, Prado respondió al estallido de la guerra pasando de una posición de neutralidad declarada en 1939, a una ruptura en las relaciones con las potencias del Eje en 1942, y finalmente a una plena declaratoria de guerra en 1945. Después de Pearl Harbour ordenó la deportación de 1,800 residentes japoneses para que fueran internados en los EE. UU. y la confiscación de sus propiedades (pero no la de alemanes), las cuales distribuyó entre sus amigos y aliados políticos. Esta fue la culminación de una fuerte presión popular y de la élite en contra de los intereses comerciales y empresariales japoneses, inflamados por una virulenta campaña propagandística antinipona de la UR en la década de 1930. El APRA y Haya también se unieron al generalizado ataque a los japoneses, esperando así captar el favor de los EE. UU. en su campaña en pos de la legalidad.

En las relaciones laborales podemos ver otro efecto importante de la guerra y las mejores relaciones con la izquierda. De hecho, durante el mandato de Prado el gobierno tomó las primeras medidas tentativas para incorporar al movimiento obrero, severamente reprimido y marginado en las décadas de 1920 y 1930. En primer lugar, gracias a la guerra, tanto los dirigentes obreros apristas como los comunistas se abstuvieron de la agitación laboral, lo cual redundó en beneficio de la economía y el gobierno, y calmó el descontento de derecha. Al mismo tiempo, el APRA dejó de complotar en contra del régimen con algunos sectores de las fuerzas armadas, nuevamente como parte de su estrategia para ganar un acceso formal al sistema político. De otro lado, los comunistas estaban dispuestos a colaborar con el gobierno pro estadounidense porque la Unión Soviética se había unido a los Aliados después de que Hitler la atacase en 1941.

Prado respondió a estos gestos conciliadores disminuyendo el nivel general de represión, liberando a muchos dirigentes apristas encarcelados y permitiendo al partido reiniciar sus actividades organizativas, no obstante seguir estando oficialmente proscrito. Este clima de mayor tolerancia política se extendió a los trabajadores organizados, subiendo el número de sindicatos reconocidos por el Estado de 33 durante el gobierno de Benavides, a 118 durante la guerra.

La influencia del APRA en el gobierno de Prado se manifestó, asimismo, en otras formas. Por ejemplo, a insistencia del partido, el Presidente adoptó una postura más nacionalista en el tema de la industria petrolera bajo control extranjero, negándose a conceder derechos de explotación a compañías foráneas ya fuera en la amazonía o en la sierra. Esta negativa resultaba particularmente significativa porque para 1938 la producción en los campos de la IPC de La Brea y Pariñas, en la costa norte —que había subido marcadamente en la década de 1930, brindando al gobierno de Benavides el doce por ciento de sus rentas— comenzó a caer precipitadamente. En consecuencia, la producción petrolera descendió de un punto máximo de quince millones de barriles en 1936 a uno mínimo de diez millones en 1940, una cifra que se mantuvo constante durante el resto de la década.

La imposición de controles gubernamentales fue otra área que sugería la alianza tácita de Prado con el APRA. Después del estallido de las hostilidades, la escasez de provisiones alimenticias y el alza de los precios amenazaron al bloque políticamente sensible de los consumidores urbanos del país. La inflación, por ejemplo, subió de 8,2 por ciento en 1941 a 14,3 por ciento en 1944. El gobierno reaccionó estableciendo controles de precios a los alimentos en 1943, e incrementando el subsidio a los productos de primera necesidad al año siguiente. También elevó el porcentaje mínimo de tierra dedicada a la producción de alimentos en la costa, que estaba orientada a la exportación. Por último, la comercialización de arroz, cuyo cultivo había crecido espectacularmente en la costa norte durante la década anterior, fue asumida por el Estado. Aunque estas medidas intervencionistas

protegían a los consumidores urbanos y prevenían las protestas populares, desincentivaron a los productores y agravaron la tendencia adversa en los términos del intercambio interno, perceptible ya en la década de 1930.

Del mismo modo, Prado estableció cuotas azucareras en el mercado local, para así asegurar que la oferta bastaría para satisfacer la demanda interna, y al mismo tiempo, incrementó los impuestos a las exportaciones de azúcar. La fortuna de la industria había mejorado desde la situación deprimida de sobreoferta en la década de 1930, a la escasez en el mercado y la creciente rentabilidad durante la guerra. Sin embargo, al exprimir la industria en pos de rentas fiscales y restringir el área dedicada a las exportaciones, Prado y su sucesor Bustamante irritaron a la todavía poderosa élite azucarera.

El gobierno incrementó también los impuestos a las exportaciones de algodón, que encabezaron la recuperación económica en la década de 1930 pero que cayeron luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El precio mundial del algodón se recuperó rápidamente después de 1932, de modo que la participación peruana en el mercado mundial se duplicó, de 1,5 por ciento en 1932 a 3,0 por ciento en 1939. En este lapso, el área dedicada a la producción de algodón creció de 130.000 hectáreas en 1933 a más de 190.000 en 1938, casi la mitad de la tierra cultivada en la costa. Sin embargo, en adelante, el área dedicada al algodón retrocedió a 125.000 hectáreas en 1943, debido a una fuerte disminución en la demanda de los combatientes, que habían acumulado grandes *stocks* en espera de la guerra. Con todo, el sector algodonero se benefició con un sustancial acuerdo de compra con los EE. UU.

En cuanto al sector manufacturero de la economía, el estallido de la guerra y las carestías subsiguientes provocaron un breve crecimiento de alrededor del diez por ciento anual entre 1938 y 1942. La década anterior había visto cierto dinamismo en las industrias locales durante los primeros años de la depresión, sobre todo en la producción de textiles, calzado, jabón, productos farmacéuticos, sombreros y pinturas. Sin embargo, las tasas de crecimiento a comienzos de la década de 1930 fueron considerablemente menores que las de Argentina y Brasil, que en ese lapso vieron crecer las manufacturas en siete y ocho por ciento, respectivamente. El crecimiento industrial perdió impulso luego en la segunda mitad de la década para recuperarse a finales de la misma y luego evaporarse y estancarse nuevamente entre 1943 y 1947.

Un hito importante en el gobierno de Prado fue el censo nacional de 1940, el primero en tres cuartos de siglo. El conteo reveló que la población del país casi se había triplicado desde el censo de 1876, pasando de 2,6 a 6,2 millones de habitantes. De éstos, 2,2 millones eran urbanos en tanto que 4,0 eran rurales, confirmando la naturaleza todavía predominante agraria del país.

En base a estas cifras, la tasa de crecimiento de la población promedió 1,3 por ciento entre 1876 y 1940, variando a nivel regional de 1,6 por ciento para la costa y selva, a 1,15 por ciento para la sierra. Sin embargo, estas cifras medias esconden el hecho de que la tasa de crecimiento poblacional se incrementó constantemente a lo largo del periodo. El crecimiento urbano fue aún más rápido, expandiéndose Lima a un cuatro por ciento anual entre 1920 y 1940, acelerándose también el de las demás ciudades. En términos regionales, la población costeña subió más de 2,0 por ciento al año, y las ciudades más de 3,0 por ciento entre 1920 y 1940.

Si el censo de 1940 reveló la creciente tendencia urbanizadora de un país todavía predominantemente rural, también puso en evidencia la composición mayoritariamente mestiza del Perú, fenómeno que Manrique (1995: 266) destaca como una revolución en el pensamiento sobre la composición racial de la población peruana. Este censo, uno de los últimos en clasificar la población por razas, registró al 52,89 por ciento de la población como blanca y mestiza, 45,86 por ciento como india, 0,47 como negra, y 0,68 como oriental. Estas cifras mostraban que el Perú era un país principalmente mestizo, y ya no aquel abrumadoramente indio postulado por los indigenistas de la década de 1920.

Tal vez el acontecimiento más importante producido durante la época de Prado fue el estallido de una guerra fronteriza con el Ecuador en julio de 1941 a causa de una serie de incidentes fronterizos ocurridos en territorios disputados por ambos países en el océano Pacífico, y en un área mucho más grande en la Amazonía oriental. Ni Prado —sensible a la manchada reputación de su padre en la Guerra del Pacífico—, ni los militares peruanos —que habían sufrido serias derrotas no sólo en aquella guerra, sino también con Colombia por Leticia, una década antes— estaban dispuestos a aceptar otro resultado que una victoria total.

Prado prefería buscar una solución diplomática. Sin embargo, el ejército, bajo el mando del sumamente competente general Eloy G. Ureta, ansiaba luchar calculando sus posibilidades frente a un enemigo considerablemente más pequeño, cuyas fuerzas armadas y población eran superadas por más de tres a uno. Después de renovados choques fronterizos, Ureta dio un ultimátum al gobierno en junio de 1941, exigiendo atacar en la región de Tumbes o, en caso contrario, ser derrocado por los militares. Ureta, entonces, sobrepasó sus órdenes con un avance a gran escala, juntamente con operaciones coordinadas con el ejército en el Oriente y con la marina en la costa del Pacífico.

La campaña conjunta fue sumamente eficaz y la resistencia ecuatoriana se evaporó en menos de tres meses. Ansiosos por fortalecer la unidad continental ante el conflicto en Europa, los EE. UU. presionaron en pos de un rápido arreglo del conflicto en la reunión de los cancilleres del hemisferio en Río de Janeiro, en enero de 1942. Por el subsiguiente Protocolo de Río de Janeiro, Ecuador aceptó

ceder unos 13.500 kilómetros cuadrados a Perú en el Oriente, aunque veinte años más tarde, en 1962, desconoció el acuerdo y reabrió la disputa a futuros conflictos. El resultado favorable del conflicto incrementó el respaldo público al gobierno de Prado, pero también convirtió en héroe y posible rival político al general Ureta. Manuel Odría, un joven oficial y futuro presidente, también se ganó su reputación en esta guerra.

Si bien habían estado temporalmente unidas durante la guerra, las fuerzas armadas, al finalizar ésta, experimentaron un renovado faccionalismo acentuado por las aspiraciones presidenciales tanto de Ureta, el héroe de guerra, como del ex presidente Benavides, quien seguía siendo popular en la institución. La descarada política de ascensos e intensa disputa por el respaldo de los soldados entre los dos aspirantes a presidente, provocaron el disgusto de oficiales de menor jerarquía de inclinación reformista, encabezados por el mayor Víctor Villanueva, quien organizó clandestinamente el Comité Revolucionario de Oficiales del Ejército (CROE). En cierto sentido, su descontento era una reacción generacional contra el intenso partidismo político que habían caracterizado las relaciones entre civiles y militares mientras ellos ascendían en las filas en la tumultuosa década de 1930. Desdeñoso frente a sus superiores, a quienes acusaba de «jugar a la política» y de un comportamiento groseramente «poco profesional», el CROE exigía reformas civiles y militares fundamentales, sobre todo en el ámbito de los ascensos, la preparación y la justicia militar (Masterson 1991).

Entretanto, en la escena política nacional, un nuevo espíritu democrático, fomentado por los EE. UU., impregnó toda América Latina al resultar cada vez más evidente que los aliados iban a salir victoriosos del conflicto mundial, justo cuando el gobierno de Prado se acercaba a su fin en 1944. Esta inspiración democrática tuvo el efecto de intensificar las tendencias hacia la incorporación del APRA y los trabajadores organizados en el cuerpo político peruano, dos temas propiciados cada vez más por los EE. UU. Del mismo modo, Vicente Lombardo Toledano, el jefe del movimiento obrero mexicano y líder de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), visitó Lima y urgió a Prado a que permitiera la formación de una nueva federación obrera. Esta delegación logró que en 1944 el Presidente permitiera al APRA y al PC organizar la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), que se afilió a la CTAL.

La fundación de la CTP coincidió con el despertar de la actividad obrera, ya que su militancia se incrementó a la par que crecía la producción en tiempos de guerra y se elevaba la inflación (ochenta y tres por ciento entre 1939 y 1945). A finales de 1944, el APRA convocó una exitosa huelga general que, entre otras cosas, le ayudó a ganar el control de la CTP a los comunistas al año siguiente. Sin embargo, al acercarse las elecciones, el partido urgió un mayor autocontrol

a la militancia obrera, a medida que sus propias posibilidades en los comicios aumentaban.

Las maniobras políticas en torno a la sucesión presidencial se intensificaron al acercarse las elecciones, programadas para julio de 1945. El mariscal Benavides retornó al Perú para probar las aguas electorales, pero en lugar de ello se convirtió en un mediador en busca de un candidato civil de consenso que fuera aceptable para los militares. Al mismo tiempo, el general Ureta se presentó como candidato respaldado por el clan de los Miró-Quesada, parte del viejo partido UR, y los sectores de derecha de las fuerzas armadas. Para contrarrestar a la derecha se formó en Arequipa una alianza reformista pluriclasista —el Frente Democrático Nacional—, que representaba a los nuevos grupos industriales y a los sectores medios surgidos durante la guerra. El Frente eligió como su candidato presidencial a José Luis Bustamante y Rivero, un distinguido jurista y diplomático de familia de clase media. Católico progresista, de elevados principios pero con poca experiencia política, Bustamante buscó audazmente poner fin en Perú al patrón de gobierno alternante oligárquico-militar aliándose con el APRA para llevar a cabo un programa de democratización y reforma social. Como condición para su candidatura insistió en la legalización del APRA y su inclusión en la coalición del FDN.

Percibiendo los fuertes vientos políticos en favor de la democracia y en contra de un candidato militar, Benavides se retiró de la carrera pero no antes de manifestarse a favor del deseo de la legalización del FDN y el APRA. Benavides esperaba cerrar el paso a la elección de su rival Ureta y además evitar otra división entre las facciones rivales de los militares. Sin embargo, el APRA seguía desconfiando del compromiso de Prado con unas elecciones completamente libres y abiertas, por lo que revivió sus tácticas conspiradoras trabajando subrepticiamente con el mayor Villanueva, el jefe del CROE, quien estaba preparando un levantamiento cívico-militar.

El levantamiento, programado para comienzos de 1945 en la base aérea de Ancón, fue descubierto y frustrado por el gobierno, pero no antes de que Haya de la Torre le retirase el respaldo del APRA luego de un pacto formal con Bustamante, según el cual el partido respaldaría su candidatura a cambio de su legalización. Prado siguió el ejemplo y poco después legalizó el partido. Después de casi trece años continuos de persecución oficial y funcionamiento clandestino entre 1932 y 1945, el APRA (ahora rebautizado como Partido Aprista Peruano —PAP— para evitar la prohibición constitucional de los partidos «internacionales») salió finalmente de las «catacumbas» y presentó una lista de candidatos al Congreso en la elección. El grado en que el APRA y Haya se habían desplazado hacia la derecha queda ilustrado por un célebre discurso que este último pronunciara el 20 de mayo de 1945, apenas a unas cuantas puertas y a oídos del oligárquico Club Nacional. En

el sostuvo que «no es [necesario] tomar la riqueza de quienes la tienen, sino crear nuevas riquezas para quienes no las tienen» (citado en Masterson 1991: 82).

La campaña subsiguiente entre el FDN de Bustamante y Ureta, el candidato de la Unión Nacional Democrática (UND), fue relativamente tranquila. El primero, que incluía tanto al PAP como al PC (ahora Vanguardia Socialista), presentó un programa fundamentalmente aprista que incluía la autonomía de los sindicatos, la promoción de relaciones más «justas» entre los trabajadores y el capital, una reforma agraria moderada, la protección de las libertades civiles, la «descentralización» política y económica, la reforma tributaria y fiscal, la promoción de industrias y exportaciones, y el crecimiento de la educación pública. Ureta y la UND se limitaron a hacer un llamado más general en pos de la protección de la familia y de la Iglesia, y el forjamiento de la unidad nacional. El resultado de esta elección relativamente abierta y justa dio a Bustamante y el FND una abrumadora victoria con un margen de dos a uno (305.590 a 150.720). Bajo el paraguas del FND también se eligió a 18 senadores y 46 diputados apristas, de un total de 46 senadores y 101 diputados. Aunque no alcanzó la mayoría, el PAP era la célula parlamentaria más grande del nuevo congreso. Los resultados de la elección incrementaron de inmediato la influencia de Haya de la Torre en el nuevo gobierno, una realidad política que impulsó una cena en su honor en casa de Pedro de Osma Gildemeister, integrante de una de las cuarenta familias peruanas. El APRA había dado un giro de casi 180 grados con respecto a su posición original de atacar a la oligarquía a abrazar a su viejo adversario.

Capítulo X

Democracia y dictadura, 1945-1963

La reforma frustrada: el «trienio» de Bustamante y Rivero, 1945-1948

El triunfo del reformista José Luis Bustamante y Rivero, el primer presidente libremente electo desde 1931, condujo al Perú a la «primavera democrática» de la posguerra. Las grandes esperanzas que ella concitó se debían no sólo a la nueva era de libertad política y democratización que inauguraba, sino también a que jamás habían sido mayores las posibilidades de una reestructuración y reforma económica. Y sin embargo, en tres años, la promesa democrático-reformista de 1945 fue hecha trizas por un golpe militar que dio inicio a una dictadura en octubre de 1948. No volvería a repetirse una oportunidad similar durante toda una generación, hasta comienzos de la década de 1960.

Los objetivos del presidente Bustamante al inicio de su gobierno eran democratizar el país, efectuar reformas sociales e integrar al APRA al sistema político. Su esperanza más grande consistía en reemplazar el dominio oligárquico-militar de las últimas dos décadas con un gobierno genuinamente democrático basado en la justicia social, y así prevenir la posibilidad de una violenta conmoción revolucionaria. Este último objetivo era factible ahora que el APRA parecía haber «revisado» su antiimperialismo, su inclinación a la violencia y su agenda socialista. Aunque seguía recelando de las tempranas tendencias revolucionarias y autoritarias del partido, Bustamante creía que podía guiar al APRA a lo largo de un camino moderado, basándose en los elementos positivos antes que en los destructivos de su programa de reforma.

En retrospectiva, este no parece haber sido un cálculo realista. Para empezar, Bustamante apenas si contaba con una experiencia política que le permitiera rivalizar con sus aliados, en particular con el astuto y taimado Haya de la Torre, cuyo partido había logrado sobrevivir en las catacumbas, durante una generación, a oleadas sucesivas de una severa represión estatal. Aún más, en contraste con

la unidad y cohesión del APRA, Bustamante era un independiente político sin partido. Él encabezaba una colección frágil y endeble de partidos y agrupaciones —el Frente Democrático Nacional (FDN)— unidos únicamente en su oposición a la persistencia del dominio militar-oligárquico, y en su fe en la necesidad del cambio. De modo que si bien el FDN de Bustamante tenía una clara mayoría en el Congreso (cincuenta y cinco por ciento), el APRA dominaba la alianza con setenta y cuatro de sus ciento ocho parlamentarios (sesenta y nueve por ciento). Tenía veintiocho de las treinta y cinco curules del FDN, de un total de cuarenta y seis en el senado, y cuarenta y seis de los setenta y tres representantes del FDN en la cámara de diputados, de un total de 1019. En suma, el APRA dominaría el nuevo congreso y no sería una presa fácil de manipular para un Presidente cuya propia base política era, en el mejor de los casos, tenue.

A decir verdad, Bustamante contaba por el momento con la aprobación tácita de la oligarquía, ahora dispuesta a aceptar a un APRA más moderado en el juego político. Pero toda medida que se inclinara hacia una reforma que pudiera amenazar la hegemonía agroexportadora oligárquica desataría su oposición de inmediato. Por último, Bustamante manifestó no ser un «político» en medio de una atmósfera tan cargada, que requería precisamente del tipo de habilidad política con que Haya contaba. Por popular que semejante declaración «antipolítica» hubiese sido durante la campaña electoral, no era muy auspiciosa para un presidente que necesitaba una habilidad negociadora práctica para mantener unida a su coalición frente al altamente disciplinado, politizado y expectante partido aprista.

Sean cuales fueren las posibilidades que Bustamante tenía de alcanzar sus objetivos, ellas se opacaron desde el principio cuando los dos líderes se reunieron por vez primera desde la elección. Sus distintas personalidades —el gregario Haya contra el reservado Bustamante— ya habían parecido enfriar sus contactos anteriores. Pero, dejando de lado la química personal, cuando Bustamante no le ofreció al APRA sino dos de los ochos puestos del gabinete del nuevo gobierno, la oferta fue rechazada categóricamente por Haya, quien además esperaba ser nombrado primer ministro. Tomando en cuenta el peso de los votos apristas en la elección de Bustamante, Haya consideró la oferta como una afrenta personal y se negó a proseguir con las negociaciones. El nuevo gobierno comenzaba con un tono bastante discordante.

Una vez en el cargo, Bustamante tuvo que hacer frente a diversos problemas. El final de la guerra trajo consigo dificultades económicas, tales como una debilitada balanza de pagos y presiones inflacionarias por la demanda contenida causada por los controles de tiempo de guerra. Ellos habían sido también los causantes de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores; buscando recuperarlo, el movimiento obrero, libre de las restricciones anteriores, desató una serie de huelgas. Maniatado por una victoria electoral de base eminentemente

popular, Bustamante no podía hacer mucho para controlar la nueva militancia de los obreros organizados. Después de todo, éstos habían sido fuertemente reprimidos durante dos décadas, estaban ahora mayormente bajo el control del APRA y tenían unas altas expectativas de cambio.

Desairado políticamente por los nombramientos ministeriales del presidente, el APRA procedió a mostrar su poder en el Congreso diseñando el cambio de una votación de dos tercios a una mayoría simple para superar el veto presidencial. Con el APRA controlando el cincuenta por ciento de las curules, Haya aseguró la disciplina partidaria haciendo que todos los representantes apristas le entregaran sus cartas de renuncia sin fecha. El partido introdujo entonces su propio programa legislativo y bloqueó las propuestas de austeridad del gobierno, diseñadas para reducir el gasto y elevar los impuestos. Incapaz de contrarrestar el control aprista del Congreso, Bustamante finalmente se dio por vencido después de seis meses y a comienzos de 1946 aceptó incorporar tres apristas a lo que posteriormente se llamaría el «gabinete aprista». Esta medida abrió el camino para una legislación que, juntamente con la creciente demanda de exportaciones y la baja en las importaciones debida a la escasez mundial de manufacturas, permitió abordar los problemas económicos y apuntaló momentáneamente la economía.

Habiendo superado hábilmente al nuevo presidente en el frente político, era de esperar que el APRA presentase un significativo programa de reformas, dadas sus viejas inclinaciones populistas y el peso electoral recién demostrado. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a su acuerdo preelectoral con Bustamante y con la oligarquía de abstenerse de impulsar su programa radical primigenio a cambio de la legitimidad política. Esta táctica fue confirmada por el barón azucarero Augusto Gildemeister poco después de las elecciones, en una carta dirigida al magnate algodonero Pedro Beltrán, en la cual decía que el APRA estaba diciendo a «nuestros trabajadores [...] que todo seguirá como está, sin ninguna división de tierras ni otras propiedades o dinero, sino la creación de *nuevas* riquezas para todo el Perú a través de ellas. Realmente es muy gracioso» (citado en Portocarrero M. 1983: 88). Aunque a Gildemeister le divertía el giro del APRA, la nueva posición planteó un problema importante para el liderazgo del partido: cómo justificar esta aguda desviación de sus orígenes filosóficos y programáticos a sus militantes. Este dilema podría explicar, por lo menos en parte, el ambiguo liderazgo de Haya en años subsiguientes, así como la intensificación de las divisiones internas y el conflicto en el partido, entre militantes y moderados.

En todo caso, el APRA y el Perú perdieron una importante oportunidad para emprender las reformas. El gobierno, ahora con el APRA dominando tanto el Congreso como el gabinete, siguió un curso decididamente moderado. Por ejemplo, evitó el nacionalismo económico al firmarse un nuevo acuerdo de exploración petrolera con la IPC, el mismísimo símbolo del imperialismo extranjero. Tampoco

se propuso ninguna ley de reforma agraria, aunque en 1947 sí se aprobó una que reglamentaba el yanaconaje en la costa (Ley de Yanaconaje). La política fiscal y monetaria, que consistía en el control de las tasas de cambio y de precios, sobre todo de los alimentos, siguió siendo esencialmente la misma que en la época de Prado. Tal vez lo más revelador es que el populista APRA no hizo esfuerzo alguno por ampliar el electorado.

De otro lado, este partido sí logro reinterpretar hábilmente el significado de «crear riqueza antes que redistribuirla», reafirmando así sus credenciales populistas aunque no las «revolucionarias». No era posible impulsar una política de redistribución a través de la reforma agraria o de la nacionalización de las industrias, pero sí mediante el crecimiento del Estado; por ejemplo, incrementando los sueldos, salarios y beneficios de los trabajadores. En el sector educativo, el salario de los maestros se elevó en sesenta por ciento, y se estableció la educación universal hasta la secundaria. El gobierno asimismo amplió su programa de obras públicas, en particular en las áreas de la construcción de escuelas e instalaciones de salud pública. Por último, se siguió subsidiando los alimentos básicos de los consumidores urbanos, aunque a expensas de los productores rurales, frecuentemente de pequeña escala.

Los obreros fueron los principales receptores de las nuevas políticas redistribuidoras del cogobierno APRA/Bustamante. Por ejemplo, según los Colliers (1991: 324), la tasa de reconocimiento oficial de los nuevos sindicatos subió de una magra tasa anual de diez por ciento con Benavides y veinte por ciento con Prado, a noventa entre 1945 y 1947. Un total de 264 sindicatos fueron reconocidos oficialmente en dicho lapso. Un punto aún más importante para los trabajadores fue la neutralización del creciente costo de vida durante la posguerra, que se incrementó en más del doble entre 1944 y 1948. Los negociadores obreros lograron igualar e incluso superar ligeramente esta tasa de incremento para el salario de los trabajadores, por lo menos hasta 1947, después de lo cual nuevamente volvieron a perder terreno. Asimismo, las condiciones laborales mejoraron sustancialmente debido al impulso de acuerdos de negociación colectiva iniciados por el Estado. Gracias a estas políticas, los trabajadores fueron incorporados por vez primera al tejido político y económico de la sociedad. En un ámbito puramente político, dicha inclusión quedó simbolizada por un marcado incremento en la representación de la clase trabajadora en el Congreso durante el trienio del APRA/Bustamante (seis diputados obreros apristas, cuatro del PC y un senador obrero del APRA).

Los obreros no fueron los únicos receptores de la generosidad estatal dirigida por el APRA, que emanaba de su control del Congreso. El partido intentó «incorporar» a los sectores medios urbanos para solidificar el otro componente de su base política. Con este fin se decretaron generosos incrementos salariales a los empleados, en particular en el sector público. Además, a medida que el Estado

crecía, el partido se aseguró de insertar burócratas «leales» en la administración. El objetivo era doble: distribuir el patronazgo a su clientela política e «infiltrar» el sector público con apristas que constituían «células» partidarias leales a Haya y al directorio aprista. El APRA penetró del mismo modo en los sindicatos, las escuelas secundarias y las universidades, que cayeron entonces bajo un control partidario. En consecuencia, «el Partido Aprista fue acusado de 'hegemónico', 'totalitario', proclive a monopolizar subrepticiamente el control del gobierno, incapacitando al Ejecutivo» (Cotler 1978: 267).

Sin embargo, la política relativamente moderada del APRA fue bien recibida en Washington, que había observado complacido el alejamiento del partido de su estridente antiimperialismo y su postura nacionalista de la preguerra. Tal vez resultara aún más importante y alentador para Los Estados Unidos, en un momento en que el estallido de la Guerra Fría se avizoraba en el horizonte, el abierto anticomunismo de Haya. De hecho, durante la posguerra, el APRA había empleado ventajosamente su acceso al poder y los recursos estatales, en su pugna con el Partido Comunista por el control del movimiento obrero. En 1947, el embajador estadounidense en Lima informaba al Departamento de Estado que él era «de la opinión de que Haya merece nuestro respaldo moral en una lucha apropiada en contra del comunismo» (citado en Haworth 1992: 184).

Aunque el principal esfuerzo político del APRA se concentró en las zonas urbanas, el partido no estuvo inactivo en el campo. Allí, los trabajadores rurales se impacientaban en espera del cambio con el nuevo gobierno reformista. En las haciendas azucareras se incrementaron las actividades de los sindicatos, mayormente inactivos desde comienzos de la década de 1930, multiplicándose las huelgas y paros en reclamo de salarios más altos y mejores condiciones laborales. De igual modo, los aparceros, llamados yanaconas en las haciendas algodoneras de la costa sur (Ica) y el extremo norte (Piura), se organizaron para presionar a fin de alcanzar sus demandas de mayor seguridad y contratos escritos. Los hacendados del sector algodonero habían dependido durante largo tiempo del yanaconaje para expandir la producción, en un sistema en el cual la oferta de capital y crédito era siempre relativamente pequeña.

Los esfuerzos por mejorar la condición de los yanaconas se iniciaron a principios de la década de 1930, cuando el Partido Socialista, fundado en Piura en 1930, comenzó a organizar la Federación General de Yanaconas y Campesinos del Perú. Asimismo, una gran parte del programa agrario del APRA en 1931 buscaba, asimismo, mejorar las condiciones de yanaconas y otros colonos en granjas comerciales. Debido a la creciente presión de estos últimos, los hacendados comenzaron a expulsar a yanaconas y colonos, y a reemplazarlos por trabajadores asalariados no sólo en la costa sino también en las haciendas comerciales de la sierra. Los primeros eran aparceros en las haciendas comerciales costeñas, en tanto

que los colonos eran trabajadores de los latifundios serranos que a cambio de diversas tareas no asalariadas en ellos recibían pequeñas parcelas en usufructo.

Los yanaconas resistieron estos intentos y lucharon no solamente por asegurar sus derechos, sino también para obtener un mayor grado de independencia del control terrateniente. En las elecciones de 1945, el APRA les hizo promesas extravagantes para conseguir su voto, tales como la eliminación de los pagos de renta e incluso que les serían distribuidas las tierras de las haciendas. Presionado para que cumpliera con estas promesas después de las elecciones, el APRA auspició la «Ley de yanaconaje», aprobada por el Congreso y firmada por Bustamante en 1947. Ella prohibía la expulsión de los yanaconas, exigía contratos escritos y fijaba condiciones mejores. Pero resultó que los hacendados lograron evadirla a menudo de modo que el proceso de expulsión persistió.

La movilización de los trabajadores rurales y la agitación aprista no se limitaron a la costa. Los colonos y los terratenientes modernizadores entraron cada vez más en conflicto particularmente en la sierra, donde la red de actividades comerciales siguió ampliándose durante las décadas de 1930 y 1940. A medida que los mercados locales se abrían y la tierra se hacía más valiosa, tanto los colonos como sus señores intentaron maximizar sus oportunidades comerciales. Para estos últimos, ello implicaba generalmente restringir o incluso expulsar a los primeros de sus parcelas y reorganizar a los trabajadores sobre una forma de trabajo asalariado más rentable. Los colonos, por su parte, se organizaron con ayuda del APRA para resistir su expulsión y proletarización.

Los conflictos sobre el colonato comprendieron no solamente el acceso a las parcelas en las haciendas, sino los derechos de pastoreo en las estancias de ganado vacuno y ovino. El incremento de la demanda de ambos tipos de producción en las ciudades, plantaciones y enclaves mineros, impulsó a los estancieros a racionalizar sus operaciones intentando eliminar los tradicionales arreglos pastoriles y de otro tipo, y pasar a una mano de obra asalariada. Esto provocó que los trabajadores de las estancias y los pastores (*huacchilleros*) se organizaran y resistieran, al igual que los colonos.

El equilibrio del poder en esta disputa se inclinaba mayormente a favor de los hacendados debido a las tendencias demográficas. La aceleración del crecimiento de la población alteró el mercado laboral de la sierra, de uno de escasez relativa a otro de creciente sobreoferta. Por ejemplo, la tasa de crecimiento demográfico subió de 1,9 por ciento al año en 1940 a 2,2 por ciento en 1950, y a 2,7 por ciento en 1961. (Burga y Flores-Galindo [1980: 66] mostraron una tendencia algo más aguda; por ejemplo, de 1,5 por ciento en 1910 a 3,0 por ciento en 1960). Según la información de los censos, la población rural subió de 1,6 millones en 1876, a casi 4 millones en 1940 y a 5,2 millones en 1961. Este incremento se debió en parte al marcado descenso de la tasa de mortalidad posterior a la Segunda Guerra

Mundial, que bajó de 27 por millar en 1940, a 15 por millar en 1961. Durante la guerra se desarrollaron muchas medicinas nuevas, entre ellas la penicilina, la estreptomicina, la sulfa y la cortisona, las cuales estuvieron disponibles cada vez más en el Tercer Mundo después del conflicto. Al mismo tiempo, se multiplicaron los programas e instalaciones de salud pública, primero en las ciudades y luego se extendieron a las áreas rurales, a medida que los gobiernos y fundaciones privadas asignaban fondos para la erradicación de enfermedades que ahora se podían tratar con estas nuevas drogas «milagrosas».

La proliferación de la oferta de mano de obra, impulsó el interés de los hacendados a dar por finalizados los arreglos de colonato y recurrir al creciente «ejército de reserva» de trabajadores dispuestos a aceptar salarios relativamente bajos para trabajar sus tierras. Con todo, no obstante lo favorecidos que se vieron por estas tendencias beneficiosas, los terratenientes modernizadores no siempre triunfaron en la lucha en torno a los acuerdos de colonato, y a menudo cayeron en un punto muerto debido a la tenaz resistencia de colonos y *huacchilleros*.

Las mismas tendencias demográficas afectaron a las comunidades indígenas de la sierra, agudizando la lucha perpetua entre hacendados y comunidades en pos del acceso a la tierra, el agua y la mano de obra. Dada la creciente población de campesinos en una base relativamente fija de tierras cultivables —con un deterioro constante en el equilibrio en la relación hombre-tierra—, el conflicto resultaba inevitable. Esta situación se vio agravada en lugares como la sierra central, donde el crecimiento del comercio iba provocando el alza en el valor de la tierra. En estas condiciones de creciente escasez, los campesinos invadieron cada vez más los campos en disputa después de 1945, intentando recuperar así las tierras usurpadas a sus comunidades por las haciendas adyacentes.

Como ya mostrase Mallon (1983), los conflictos internos por el acceso a los recursos se produjeron también dentro de las comunidades, donde la diferenciación social iba intensificándose bajo las presiones gemelas del crecimiento demográfico (una relación hombre-tierra en vías de deterioro) y la comercialización (el surgimiento de una capa de campesinos enriquecidos). El cada vez menor acceso a la tierra implicó que muchos comuneros se vieran forzados a dejar sus hogares y emigrar a las minas, plantaciones y ciudades en busca de trabajo. Según los datos procedentes de los censos, la proporción de emigrantes en la población se incrementó agudamente, de 9,5 por ciento en 1940 a 23,2 por ciento en 1961, y a 26,4 por ciento en 1972.

En este contexto de cambios demográficos, conflicto rural y creciente movilización, los organizadores y abogados apristas, muchos de los cuales acababan de ser liberados de la cárcel, realizaron actividades a nivel local entre el campesinado después de 1945. Sin embargo, a nivel nacional, el partido no estaba dispuesto a poner en peligro su legalidad duramente ganada organizando un ataque a gran

escala en contra del sistema señorial andino. De hecho, un desafío tal habría constituido un ataque a la clase terrateniente de la sierra (los gamonales), que aún conservaba una representación desproporcionada en el Congreso y un poder desmesurado a nivel local (parte de su viejo quid pro quo con el Estado). Es más, los beneficios políticos de un asalto tal eran limitados, dado el escaso potencial político de los campesinos en su mayoría atomizados, dominados y sin derecho al voto. Como ya se señaló, el partido no intentó ampliar el sufragio a pesar de su control del Congreso.

Para los dirigentes partidarios tenía más sentido hacer frente a los problemas de la moderna sociedad costeña y urbana, donde vivía el grueso de su base política obrera y de clase media, que a los de las áreas rurales. Así, en comparación con otros países latinoamericanos de ese entonces, el APRA representaba un clásico fenómeno político populista de orientación urbana. Con todo, esta postura no excluía la posibilidad de que los apristas colaborasen en el ámbito local con los grupos campesinos para presionar a favor del cambio.



Pareja matrimonial, Sicuani, 1934. Fotografía de Martín Chambi, reproducida con permiso de Teo Allain Chambi.

Muchos contemporáneos interpretaban el descuido relativo del partido con respecto a la cuestión rural como un ejemplo más del «revisionismo» ideológico y programático que éste había seguido desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, las divisiones internas del APRA se acentuaron y se volvieron más enconadas durante el trienio. No obstante su cacareada unidad y solidaridad, el partido estuvo dividido desde sus primeros días entre una facción moderada que estaba más comprometida con la reforma y la democratización, y otra ala más militante y revolucionaria. Esta fisura fue obviada durante la represiva década de 1930 por el imperativo más urgente de conservar la disciplina interna y sobrevivir mediante una estructura organizativa jerárquica y semimilitar. Sin embargo, las divisiones internas estallaban, a menudo violentamente, cuando el partido salía de la clandestinidad de tiempo en tiempo durante las «aperturas» políticas, como sucedió después de las elecciones de 1945.

Tal vez para hacer frente a este faccionalismo, o debido a él, Haya desarrolló un estilo de liderazgo ambiguo que prometía, en efecto, «todas las cosas a todos los hombres» (Davies 1971). Ello, no necesariamente iba en detrimento del partido mientras este se hallara confinado en las catacumbas, teniendo el enemigo y el objetivo crucial de la supervivencia claramente definidos. Sin embargo, cuando el APRA ganó una parte del poder a mediados de la década de 1940, este tipo de liderazgo, de hecho vacilante e indeciso, se convirtió más bien en una desventaja. En la práctica, Haya desarrolló la tendencia, incluso el patrón, de estimular al ala militante y luego retirarse e incluso ponerse de lado de los moderados. Ello fue particularmente evidente al quitar consistentemente su respaldo en el último minuto a conspiraciones militares que, a menudo, habían sido estimuladas originalmente por él y encabezadas por la facción militante.

Frustrados por tales actos, así como por la moderación general del régimen, los militantes del partido tomaron la ofensiva a comienzos de 1946. En abril iniciaron varios ataques en contra de la prensa establecida, usualmente antiaprista. Según Haworth (1992: 182), Bustamante poco después admitió candorosamente al embajador estadounidense que al asumir la presidencia debió haber organizado de inmediato una fuerza policial antiaprista, y que ciertamente había sido un error limitar las actividades de la policía secreta. La ola de violencia aprista culminó con un atentado con explosivos en la casa del ministro de gobierno en diciembre de 1946, y el asesinato de Francisco Graña Garland, el aristocrático editor de *La Prensa*, en enero de 1947.

Bustamante respondió forzando la renuncia del «Gabinete Aprista» y reemplazándolo por uno fundamentalmente militar, nombrando como ministro de gobierno y policía al general Manuel A. Odría, héroe de la guerra de 1941 con el Ecuador y decidido antiaprista. Sin embargo, estas medidas no bastaron para calmar la ira de la élite agroexportadora, que ya estaba indignada con la

política económica «estatista» del gobierno, incluyendo los controles sobre la tasa de cambio y los precios, sus políticas prolaborales y el alza de los impuestos a las exportaciones, todo lo cual limitaba sus ganancias.

Dado el fuerte incremento en el gasto social, la única forma en que el gobierno podía equilibrar su presupuesto y evitar un déficit era subiendo los impuestos, en particular sobre las exportaciones. En la medida en que la demanda y los precios internacionales del azúcar y del algodón estaban disparándose en la posguerra, las ganancias inesperadas de los productores pasaron a ser un blanco evidente para la obtención de nuevas rentas gubernamentales. En consecuencia, entre 1945 y 1948, los impuestos como porcentaje de las exportaciones subieron, según Portocarrero (1983: 123), de 7,5 por ciento a 31,7 por ciento en el azúcar, y de 8,4 por ciento a 21,5 por ciento en el algodón. Visto de otra forma, el sesenta por ciento del incremento del cuarenta por ciento que se había dado en el presupuesto gubernamental de 1946, provino del alza en el impuesto a las exportaciones de azúcar.

El creciente descontento de la élite con el régimen durante 1947 debe considerarse, asimismo, en el contexto global de una situación económica en declive. Luego de experimentar un incremento del doce por ciento en 1946, las exportaciones peruanas cayeron en los siguientes dos años en dieciocho y veintiuno por ciento, respectivamente, así como los precios recibidos por los exportadores, y esto a medida que los combatientes europeos se recuperaban gradualmente después de la guerra. Al mismo tiempo, las importaciones crecieron veintitrés por ciento en 1946, treinta y seis por ciento en 1947 y 11,7 por ciento en 1948, en tanto que los precios a los consumidores subieron gradualmente. Al darse junto con el incremento salarial dictado por el gobierno, la expansión global del presupuesto nacional y los crecientes precios al consumidor, el deterioro en la balanza comercial y de pagos condujo inevitablemente a un alza en la inflación. Por ejemplo, el costo de vida se incrementó en sesenta por ciento entre 1944 y 1947, a pesar de los permanentes controles gubernamentales.

El resultado fue la creciente escasez de bienes básicos de consumo en el mercado, el surgimiento de un mercado negro y el establecimiento, por parte del gobierno, de un sistema de racionamiento. Éste enfureció a la opinión pública, pues ahora el pueblo no solamente debía soportar carestías y precios elevados, sino también largas colas y un sistema de racionamiento que favorecía a los miembros del «gobernante» Partido Aprista. En suma, a mediados de 1947, el mal manejo gubernamental, juntamente con unas tendencias internacionales adversas, hicieron surgir el espectro del caos económico. Estos temores económicos, sumados a la creciente violencia aprista, enfurecieron a la oligarquía y le dieron la justificación para atacar y finalmente derrocar al régimen.

En ese entonces, el líder y vocero más importante de la derecha era Pedro Beltrán. Acaudalado hacendado algodonero de Cañete, había recibido una gran dosis de liberalismo económico en el London School of Economics; tras su regreso al Perú, compró *La Prensa* junto con Gildemeister y otros oligarcas, diario que se convirtió en un crítico vociferante del APRA y del gobierno a través de su línea editorial. A medida que las condiciones económicas empeoraban y la violencia aprista crecía, Beltrán formó la Alianza Nacional, una coalición de partidos unidos para oponerse al gobierno.

El ascendiente de la derecha y su contraataque político concertado en contra del cogobierno del APRA y de Bustamante, culminó a mediados de 1947 con un boicot del Congreso llevado a cabo por los parlamentarios conservadores e izquierdistas que impedía que hubiese quórum y que paralizó efectivamente al gobierno. Paradójicamente, era una táctica similar a la empleada por el APRA durante los seis primeros meses para obstaculizar al gobierno de Bustamante y forzarle a nombrar el «gabinete aprista».

El cierre del Congreso incrementó notablemente la tensión política y resonó en las fuerzas armadas, institución que siempre había sido pluralista y con grandes divisiones internas, no sólo entre el ejército y la marina, sino también entre los oficiales de baja y mediana jerarquía, y los de alto rango. Al mismo tiempo, había serias divisiones entre los reclutas y los oficiales en todos los servicios en función a la clase, la etnicidad, la lengua y la educación. Esta división, a menudo, tenía como resultado el abuso de los conscriptos, y en general minaba la moral y unidad de las fuerzas armadas.

Con el gobierno paralizado efectivamente por el estancamiento político producido entre el Congreso y el Ejecutivo, y una economía caótica, el país entró en una espiral ascendente de polarización política, conspiraciones militares y violencia. El APRA respondió al boicot del Parlamento convocando a una huelga general, que a su vez forzó a Bustamante a suspender las garantías constitucionales por treinta días. Al mismo tiempo, el APRA conspiraba para derribar al gobierno, al preparar sus militantes una conjura militar que involucraba a la marina, diseñada para desencadenar una revuelta popular en febrero de 1948.

De todas las ramas de las fuerzas armadas, la marina era la que sufría las divisiones más agudas entre oficiales y reclutas, y el APRA esperaba aprovechar esta escisión. Los oficiales formados en la Escuela Naval eran usualmente admitidos tanto en función a su extracción familiar de clase alta y sus conexiones, como al mérito académico. De otro lado, los reclutas estaban mal educados y tenían pocas oportunidades de alcanzar el entrenamiento y los conocimientos necesarios para ascender, lo cual contribuía a una generalizada moral baja en las filas. El APRA había explotado este descontento anteriormente, cuando inspiró un infructuoso levantamiento de suboficiales en dos cruceros en mayo de 1932. Ocho marineros

muertos en esa vana revuelta fueron posteriormente consagrados por el partido como mártires de la causa aprista.

Esta vez, la conjura del APRA se concentró en las unidades navales del Callao, pero las autoridades, respaldadas por unidades de la fuerza aérea y del ejército, la descubrieron y sofocaron rápidamente en febrero de 1948. Tras ella, los elementos civiles y militares de derecha, entre ellos el ministro de gobierno Odría, urgieron a Bustamante a que nuevamente pusiera al APRA fuera de la ley. El Presidente, sin embargo, se negó. Aparentemente esperaba jugar un papel intermedio, moderador y mediador entre los extremos políticos de lo que ahora llamaba la «secta» (el APRA) y el «clan» (Beltrán, Gildemeister y la derecha oligárquica), pero con poco respaldo político o popular. La negativa del Presidente provocó que Odría renunciara al gabinete y comenzara a complotar contra el gobierno. A mediados de 1948, Bustamante se encontraba completamente aislado entre ambos grupos y ahora, el derrocamiento de su gobierno era sólo cuestión de tiempo.

El primer intento de deponerlo se produjo en octubre y provino de la derecha, aparentemente preparado por Odría, pero el gobierno lo frustró. Luego, en las primeras horas del 3 de octubre, estalló una gran rebelión naval en el Callao que involucró a quinientos marineros y cien civiles, organizada por elementos militantes del APRA bajo el mando del mayor Víctor Villanueva, el ex jefe del CROE. Los organizadores, al parecer, iniciaron la rebelión sin órdenes de Haya de la Torre, pues temían que retrocediera en el último momento a favor de un golpe que venía siendo organizado por oficiales pro apristas de mayor jerarquía del ejército. Sin embargo, sin el respaldo pleno de la dirigencia partidaria, la causa rebelde estaba condenada al fracaso. Para que la rebelión hubiese tenido éxito, los apristas hubieran tenido que salir a las calles en gran número para mostrar un amplio respaldo popular a ella. Este no se materializó y el alto mando del ejército se recuperó suprimiendo finalmente la revuelta, pero a costa de fuertes choques y la muerte de sesenta combatientes y 175 civiles, lo que, según Masterson (1991), convierte esta insurrección en la más seria desde la de Trujillo de 1932.

Bustamante respondió autorizando una represión generalizada de las personas sospechosas de estar involucradas en la rebelión del Callao, y emitió tardíamente un decreto poniendo al APRA fuera de la ley. Más de mil civiles, junto con 800 miembros del personal naval (diecisiete por ciento de los 4.800 oficiales y reclutas), fueron arrestados e interrogados luego de la rebelión. Ahora, el sentir general en el cuerpo de oficiales se volvió fuertemente en contra del APRA.

Odría y el alto mando de las fuerzas armadas llevaron a cabo un golpe de Estado exitoso contra el gobierno el 29 de octubre, sobre un telón de fondo de una inflación y una escasez de alimentos cada vez más graves. Al día siguiente, Bustamante fue exiliado a Buenos Aires y Odría, quien había organizado el golpe

desde Arequipa, llegó a Lima para asumir la presidencia provisional. Toda la conjura se había llevado a cabo sin que los conspiradores hicieran un solo disparo.

La reacción: la dictadura de Odría, 1948-1956

El golpe de Odría siguió estrechamente el patrón de otros ocurridos antes en el siglo. Al igual que el de Benavides en 1914 y el de Sánchez Cerro en 1930, este golpe fue un esfuerzo por contener las fuerzas del populismo insurgente. Las fuerzas armadas nuevamente asumieron su papel histórico como guardianes de los intereses de la élite ante el desafío populista. En este papel, Odría encaja con el tradicional estilo personalista y caudillista característico de sus predecesores militares.

Odría, uno de los oficiales del ejército más vehementemente antiapristas, nació en 1897 en una próspera familia de Tarma, una ciudad en los Andes centrales. Su abuelo fue un oficial de carrera del ejército que se distinguió en la defensa del Perú de la invasión española de 1866. Odría siguió los pasos de su abuelo iniciando su carrera militar en la Escuela Militar de Chorrillos donde se graduó, obteniendo el primer lugar de su clase, en 1915. Su trayectoria progresó sin mayores acontecimientos hasta que comandó la Primera División Ligera en el conflicto fronterizo con el Ecuador de 1941, del cual emergió como un héroe. Según Masterson (1991: 99), Odría, en el momento de su nombramiento en el gabinete de Bustamante en 1947, era conocido como un general astuto y políticamente duro, además de ser considerado como un excelente juez del carácter humano.

Tras tomar las riendas del poder, Odría reprimió duramente al APRA y a la izquierda (PC); ambos fueron proscritos. Más de mil apristas fueron arrestados, entre ellos los dirigentes partidarios Ramiro Prialé y Armando Villanueva del Campo, aunque Haya de la Torre evadió su captura. Los sindicatos vinculados al APRA fueron cerrados o dirigidos por simpatizantes del régimen. En las fuerzas armadas, Odría persiguió a la facción pro aprista, muchos de cuyos miembros fueron encarcelados o exiliados, como el mayor Villanueva. Por último, en enero de 1949, Haya salió de su escondite y buscó asilo diplomático en la embajada colombiana, donde pasaría los siguientes cinco años porque el gobierno se negó a darle un salvoconducto para que saliera del país. Su prolongado confinamiento no solamente se convirtió en una causa célebre fuera del país, sino que privó al ahora clandestino APRA de su jefatura, la cual fue asumida por sus cercanos lugartenientes Manuel Seoane y Luis Alberto Sánchez.

El gobierno de Odría estuvo inicialmente marcado por su vinculación con la derecha oligárquica, representada por los Miró-Quesada, Pedro Beltrán y Ramón Aspíllaga. Según Masterson, varios integrantes del «clan» habrían financiado el golpe de octubre con una suma de ocho millones de soles. De modo que, al menos

por el momento, Odría siguió el liberalismo económico del clan abandonando rápidamente los controles impuestos por los gobiernos anteriores de Prado y Bustamante, y regresando a las medidas económicas «ortodoxas» pro exportadoras. Beltrán fue nombrado jefe del Banco Central y el país reinició los pagos de su deuda externa por vez primera desde que Leguía los incumpliera en 1930. Esta medida abrió el camino para el arribo de la inversión extranjera, que alcanzó $800 millones en 1956, incluyendo $300 millones provenientes exclusivamente de los Estados Unidos entre 1950 y 1955.

Al mismo tiempo, advirtiendo la necesidad de contar con el respaldo popular mientras consolidaba su poder, Odría firmó un decreto que amplió enormemente la cobertura del seguro social para los trabajadores. También ordenó alzas salariales para los oficiales del ejército y la policía (de entre quince y veinticinco por ciento) y la construcción de un moderno hospital militar en Lima. En términos globales, Odría incrementó el presupuesto militar en cuarenta y cinco por ciento en su primer año. Estas medidas anticiparon el clientelismo y el paternalismo que signarían su régimen y atemperarían el liberalismo económico, tan caro a sus seguidores de la derecha.

Si bien había prometido elecciones, Odría no tenía intención alguna de dejar el cargo a favor de algún otro candidato. Tampoco estaba dispuesto a convertirse en prisionero de la derecha, dejando que su futuro político dependiera del clan. Es más, el ascenso al poder del oficial del ejército Juan Perón en la vecina Argentina, basado en un respaldo populista, no pasó inadvertido para Odría. Por todos estos motivos, el general peruano encontró políticamente conveniente incrementar fuertemente las obras públicas y posteriormente auspiciar el crecimiento de las barriadas que iban surgiendo alrededor de Lima, en respuesta a una mayor inmigración procedente de la sierra.

Los medios con los cuales financiar estas políticas sociales populares pero costosas, coincidieron fortuitamente con el estallido de la Guerra de Corea en 1950. Durante la guerra, los precios y la demanda de exportaciones de metales peruanos, principalmente el cobre, tuvieron un *boom* repentino, dando al tesoro unos ingresos inesperados con los cuales cubrir los costos de diversos proyectos de construcción auspiciados por el Estado. Sin embargo, los exportadores estaban irritados por el mantenimiento de los duros controles monetarios (crédito) diseñados para mantener la tasa de cambio del mercado libre, lo que provocó la renuncia de Beltrán al Banco Central en marzo de 1950. Para los conservadores, estos controles olían a las mismas y costosas políticas «estatistas» seguidas por Bustamante en 1948 para apaciguar a los trabajadores urbanos y a la clase media.

Odría decretó, asimismo, una comprehensiva Ley de Seguridad Interior en julio de 1949, a través de la cual concedió al gobierno amplios poderes de búsqueda y captura, y suspendió el derecho al habeas corpus ante la sospecha de un crimen político. Aunque la ley estaba dirigida contra el APRA, podía ser utilizada contra

todo oponente político potencial. Esta era una medida particularmente ominosa, considerando que Odría había prometido realizar elecciones libres.

A comienzos de enero de 1950, Odría anunció que las elecciones presidenciales y parlamentarias se efectuarían en julio. Sin embargo, el gobierno invalidó al candidato de oposición y Odría fácilmente ganó la reelección. Una vez «electo» dio inicio a un programa de populismo militar, modelado a imagen y semejanza del de su contraparte en Buenos Aires. Al igual que Perón, el blanco político de Odría eran los pobres urbanos, que a lo largo de la década anterior habían emigrado a la capital en busca de trabajo y de una vida mejor. En efecto, entre 1940 y 1961, la población de Lima metropolitana creció explosivamente de casi 600.000 personas a cerca de 2 millones, un promedio de poco más de cinco por ciento al año. Una gran parte de estos habitantes eran emigrantes del campo, fundamentalmente de los departamentos de Ancash, Ayacucho y Junín, que se asentaban en las barriadas que rodeaban cada vez más la ciudad en tres de sus lados.

Estos asentamientos eran un fenómeno completamente nuevo en Lima y para 1961 tenían más de 300.000 habitantes (el setenta y cinco por ciento de los cuales eran emigrantes), o veinte por ciento de la población metropolitana. También formaban parte de lo que Hernando de Soto (1989) posteriormente denominaría economía informal, dado que las relaciones legales, de propiedad y empleo de estos pobladores con el Estado se situaban fuera de los límites formales. Al construir una relación paternalista con estas nuevas comunidades populosas, Odría esperaba evitar una situación potencialmente más peligrosa: un intento del APRA o de la izquierda de movilizar la población de las barriadas para presentar demandas radicales y tal vez violentas al Estado, amenazando así al statu quo. Como mostrase Collier (1976), Odría, anticipándose a esta posibilidad, decidió canalizar diversos tipos de asistencia y favores a estos asentamientos, a fin de incorporarlos al Estado y forjar una clientela política leal a su gobierno cada vez más autoritario.

Esta asistencia incluía facilitar el acceso a la tierra y a diversos servicios, las actividades de caridad, y el impulso a obras públicas que buscaban dar empleo a los recién llegados. Aunque esta ayuda resultaba algo costosa al Estado, buena parte de la misma no restaba nada al presupuesto nacional. Un ejemplo notable de ello fue el establecimiento del Centro de Asistencia Social María Delgado de Odría, organizado por la esposa del Presidente, quien asumió sus funciones de Primera Dama imitando el estilo de Eva Perón. El centro canalizaba la caridad de los particulares a las barriadas, en varias actividades sumamente visibles que recibieron una amplia publicidad en los medios.

Otro ejemplo fue el uso que el Presidente hizo de su cargo para promover la formación de barriadas individuales. En este caso Odría intervenía personalmente en un momento o etapa particular del proceso de invasión (la toma de tierras desocupadas) para asegurar su éxito y así legitimarla. El establecimiento de

asociaciones de barrio leales a Odría sirvió para canalizar el respaldo en forma de demostraciones políticas y otras manifestaciones a favor del régimen. Al mismo tiempo se suprimieron los esfuerzos del APRA y del PC para organizar y movilizar a la población de los barrios.

Un importante e inesperado efecto del apoyo prestado por Odría a la formación de este tipo de asentamientos fue el estímulo a una mayor inmigración del campo, y con ello a la urbanización. Los proyectos de obras públicas, que propiciaron un *boom* en el empleo y la construcción en Lima durante su gobierno, tuvieron el mismo efecto. Tales políticas servían también, ya fuera conscientemente o no, para apaciguar las tensiones y conflictos entre hacendados y campesinos en el sector rural. De este modo, la emigración rural sirvió como una «válvula de seguridad» para distender las presiones populares que se iban acumulando contra los latifundios tradicionales, y por lo tanto retrasaron el eventual colapso de la clase gamonal y el orden rural tradicional hasta finales de la década de 1960.

Otra similitud con Perón fue la actitud paternalista de Odría hacia los trabajadores organizados. Es cierto que intentó extirpar despiadadamente la influencia aprista en los sindicatos y reemplazó a muchos líderes sindicales con personas que le eran leales. Pero eso no significaba necesariamente que tuviese fobia a los trabajadores, sino simplemente que era antiaprista. Por el contrario, el presidente decretó siete incrementos salariales en todas las categorías durante su mandato, y muchos peruanos pensaban que hizo más para mejorar la condición de los trabajadores que nadie en la historia peruana. Sea como fuere, uno de los principales objetivos de Odría era minar la relación entre los trabajadores y el APRA y conseguir el control del movimiento.

En términos económicos, el ascenso de Odría al poder constituyó una importante vuelta a la promoción de las exportaciones. En efecto, a partir de 1950, el Perú experimentó una gran ola de expansión exportadora que persistiría hasta mediados de la década de 1960. En este periodo, el volumen de exportaciones subió tres veces y media, habiéndose duplicado únicamente en la década de 1950. Adoptando una perspectiva ligeramente más amplia, de 1942 a 1970, las ganancias provenientes de las exportaciones crecieron a una tasa admirable de alrededor de diez por ciento al año, la más alta en la historia del país.

En el sector agroexportador, Odría revivió la idea de Leguía de promover obras de irrigación a gran escala financiadas por el gobierno y estimuló asimismo los proyectos privados. En consecuencia, el área total irrigada a lo largo de la costa creció un diecinueve por ciento entre 1952 y 1962. El incremento fue absorbido íntegramente por los dos principales cultivos peruanos de exportación —el azúcar (cuarenta y dos por ciento) y el algodón (cuarenta y cinco por ciento)—, lo que permitió que su producción creciera un sesenta y tres y un cincuenta y nueve por ciento, respectivamente. Sin embargo, como el consumo doméstico del azúcar había

venido elevándose desde la década de 1930, este incremento en la producción sirvió únicamente para mantener los niveles de exportación constantes en números absolutos. Así, la proporción de azúcar exportada descendió de ochenta y siete por ciento en la década de 1930, a menos del cincuenta por ciento a comienzos de la de 1970.

En la década de 1950, las exportaciones peruanas de azúcar se dirigían fundamentalmente a Chile y Japón. Una década más tarde, Perú enviaba el grueso de sus exportaciones a los Estados Unidos, que abandonó a Cuba, su principal proveedor, después de la revolución castrista de 1959. La mayor parte del alza en la producción azucarera en este periodo provino del incremento en la inversión, en particular en mecanización, que tuvo el efecto de desplazar mano de obra. Al caer la demanda de trabajadores azucareros e incrementarse la emigración de la sierra, se formó en la costa un mercado de mano de obra excedente por vez primera. Esto provocó que los plantadores abandonaran finalmente el sistema de enganche, que desapareció por completo de los valles costeños en esta misma década.

En cuanto al algodón, la demanda extranjera creció en la década de 1950 estimulada por la Guerra de Corea, lo que le permitió reasumir su liderazgo en las exportaciones totales. El número de hectáreas dedicadas a la producción algodonera subió marcadamente, de un punto bajo de 120.000 en 1947 a un máximo de 230.000 en 1956, permitiendo que la producción se expandiera un setenta y cinco por ciento. La capacidad de crecimiento de los sectores algodonero y azucarero tuvo un impacto global favorable en la economía en este periodo. Al ser intensiva en mano de obra y redistribuidora del ingreso, la producción algodonera contribuyó a estimular la demanda de consumo de yanaconas y trabajadores. Por su parte, la producción de azúcar, intensiva en capital y con un alto valor de retorno (estimado en promedio en alrededor del ochenta por ciento), brindó importantes fondos de inversión y eslabonamientos con la economía local. Por ejemplo, a finales de la década de 1950, el gigante azucarero W.R. Grace & Co. producía montos sustanciales de papel con el residuo de la caña, así como productos químicos en complejos integrados con sus ingenios azucareros de Cartavio y Paramonga.

Durante el gobierno de Odría, la industria pesquera inició lo que en las siguientes dos décadas sería una expansión espectacular. Ella se remontaba, en realidad, al periodo de la temprana posguerra. La producción de pescado enlatado, que estaba en menos de seis mil toneladas métricas en 1945-1949, creció más del triple en la década de 1950 hasta alcanzar un máximo de 21.000 toneladas métricas entre 1955-1959. Los pioneros de la industria fueron un grupo de empresarios de clase media que incluían al futuro barón de la harina de pescado, Luis Banchero Rossi.

Aunque el sector agroexportador (incluyendo la pesca y la ganadería) conformaba el grueso del total de las exportaciones peruanas en las décadas de 1940 y 1950, su porcentaje en las mismas cayó constantemente de sesenta y cinco por ciento en 1945, a cuarenta y ocho por ciento en 1960. Coincidentemente, el porcentaje de las exportaciones de minerales (fundamentalmente de cobre, plomo, zinc y hierro) subió con respecto al total de las exportaciones de treinta y tres por ciento a cincuenta por ciento en el mismo lapso. Sin embargo, el petróleo prosiguió con su declive de largo plazo, desde la década de 1930 hasta la de 1960.

Los precios favorables en el mercado mundial y una nueva ley de minería que liberalizó el sistema tributario aprobada por Odría en 1950, constituyeron estímulos favorables para el alza de la producción y las exportaciones mineras. Los empresarios locales, que habían resurgido tras el retiro de las empresas extranjeras a partir de la depresión, alcanzaron su cenit a comienzos de esta década y luego comenzaron a retroceder. Sin embargo, en este momento el capital extranjero comenzó a ingresar nuevamente en la minería. El ejemplo más notable fue la formación, en 1952, de la Southern Peru Copper Corporation, que invirtió $200 millones para desarrollar los inmensos depósitos de Toquepala, cerca de Tacna. La Cerro de Pasco Copper Corporation comenzó también a desarrollar sus depósitos de plomo-zinc en Pasco y Casapalca, al igual que Marcona los de hierro. En consecuencia, el control extranjero de la minería, por oposición al local, revirtió su caída y subió de un punto bajo de cuarenta y nueve por ciento en 1950, a setenta y tres por ciento en 1960. Los efectos multiplicadores de esta alza global en el sector minero fueron significativos, en particular en bienes de capital producidos localmente y en compras de provisiones locales. Asimismo, el gobierno de Odría intentó impulsar la producción de petróleo estimulando la inversión extranjera en las exploraciones, pero con poco éxito en el descubrimiento de nuevos depósitos. En consecuencia, la producción petrolera siguió cayendo, alcanzando apenas el uno por ciento de las exportaciones en 1964, en tanto que en 1960 las importaciones subieron a cuatro millones de barriles al año para cubrir la creciente demanda doméstica.

En vista del reinicio del crecimiento impulsado por las exportaciones, Odría apostó el futuro económico de su régimen por ellas y, en consecuencia, hizo poco por estimular la industrialización por sustitución de importaciones. No se esforzó en elevar los aranceles, en tanto que las importaciones aumentaron al levantarse los controles y el crédito del Banco Industrial cayó. El crecimiento industrial logró subir a un ocho por ciento al año, pero la mayor parte del mismo estaba limitado al procesamiento de exportaciones y suministros para operaciones mineras de pequeña y mediana escala, no a la producción de bienes de consumo. Sólo cuando una recesión en las exportaciones interrumpió el crecimiento al final de la Guerra

de Corea, en 1953-1954, Odría tomó una actitud más positiva con respecto al sector manufacturero.

Sin embargo, las empresas estadounidenses comenzaron a incrementar sus inversiones en este sector en la década de 1950. Un buen ejemplo de ello fue W.R. Grace & Co., cuyas operaciones azucareras en realidad pasaron a ser secundarias frente a la fabricación de una serie de productos tales como papel, productos químicos, galletas, maquinaria, textiles y pintura. Esta situación hizo que Goodsell (1974: 52) observara que «apenas si hay un peruano que participa en la economía monetaria que no coma, vista o use algo procesado, fabricado o importado por la Casa Grace».

Mientras que las agroexportaciones se ampliaban rápidamente en la década de 1950, la producción doméstica de alimentos apenas si podía mantener el ritmo de la creciente demanda causada por la urbanización y el alza constante en el nivel de vida. Tradicionalmente, la producción alimenticia había sido relegada a la sierra, en tanto que la costa se especializaba en exportaciones. Sin embargo, históricamente, la producción agrícola tendió a retrasarse en la sierra, donde la tierra era menos productiva, había menos recursos disponibles y las políticas gubernamentales eran más discriminatorias. En la década de 1950, la tasa de producción agrícola en esa región, según un estimado reconocidamente esquemático, sumaba apenas un poco más del uno por ciento al año. Pero la producción en ciertas zonas, como el valle del Mantaro que abastecía a Lima, era sumamente robusta.

La costa también era una fuente de productos alimenticios, pero sobre todo cuando la demanda de exportaciones era baja. Sin embargo, debido al auge exportador de la década de 1950, había divisas extranjeras con que importar alimentos para satisfacer la creciente demanda. La proporción entre las importaciones de alimentos y el total de las mismas en la década de 1950 subió moderadamente de 13,6 por ciento en 1951 a 15,7 por ciento en 1955, cayendo luego a 14,4 por ciento en 1960. En general, entonces, el suministro de alimentos cubrió aproximadamente la demanda en la década de 1950, a pesar de un fuerte incremento en el producto nacional bruto (PNB), una baja inflación (en promedio de siete-ocho por ciento al año, algo más elevada en los alimentos) y modestas importaciones. Este equilibrio entre la oferta y la demanda probablemente se debió a que en este periodo el crecimiento del ingreso per cápita, y por lo tanto el consumo, permaneció bajo, si no mayormente estancado.

El Estado se hacía el desentendido continuamente frente a las necesidades que la agricultura tenía de créditos, asistencia técnica, inversión pública, etc. Por ejemplo, los pequeños agricultores, que representaban el ochenta por ciento de la fuerza laboral agrícola, recibían apenas el veinticuatro por ciento del crédito dado por el Banco de Fomento Agropecuario entre 1948 y 1953. A la inversa, la agricultura de exportación de gran escala en la costa (fundamentalmente azúcar,

algodón y arroz) se benefició del grueso del crédito, tanto estatal como de la banca comercial. En general, esto tuvo el efecto de desincentivar la inversión en la agricultura que no era de exportación, con respecto a otros sectores más rentables de la economía.

Si bien el *boom* exportador generado por la Guerra de Corea sirvió para consolidar el poder de Odría a comienzos de la década de 1950, ello no impidió que surgiera una oposición tanto en las fuerzas armadas como en la derecha oligárquica. Dentro del ejército, el creciente autoritarismo, paternalismo y manipulación de los ascensos por parte de Odría irritó a aquellos oficiales que eran fuertes defensores del profesionalismo y la reforma. Algunos vieron la necesidad de modernizar la misión de las fuerzas armadas más allá del concepto tradicional de la defensa y el orden interno. Desde su perspectiva, ambas cosas estaban íntimamente vinculadas a problemas sociales más amplios, tales como el subdesarrollo y la falta de integración de la población indígena, de la cual el ejército dependía para conseguir la mayoría de sus reclutas.

Varios oficiales, entre ellos el general José del Carmen Marín, uno de los principales intelectuales y teóricos del ejército, presionaron para que se creara un centro de preparación y estudios especializados que formara mejor a los oficiales para el mando. Ellos pensaban que semejante capacitación no debía limitarse a asuntos estrictamente militares, sino que debiera incluir el estudio de otras cuestiones relacionadas con los aspectos sociales. Tras presionar varios años, se fundó el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en 1950. Tuvo como modelo el National War College de Washington, fundado tres años antes, y centros similares de otros países, como Francia. Odría intentó inicialmente minar la importancia del CAEM haciendo que solamente asistieran oficiales cerca del pase al retiro a los primeros cursos del Centro. Sin embargo, la persistencia del general Carmen Marín, nombrado primer director del centro, logró que muchos de los oficiales jóvenes más prometedores ingresaran y se graduaran en el CAEM, cuya importancia y prestigio crecieron notablemente.

Al mismo tiempo, se intensificaron las discusiones en el CAEM en torno a la doctrina de seguridad nacional del país y se fue desarrollando un consenso en torno a la necesidad de establecer una redefinición del papel de la defensa nacional que incluyera el desarrollo social y económico. Este parecer reflejaba la generalización de la opinión de que las amenazas a la seguridad interna, derivadas de los problemas sociales del país, eran tan serias como la amenaza tradicional de invasiones a través de las fronteras. La seguridad nacional dependía tanto de encontrar formas con que aliviar los problemas del subdesarrollo y de cerrar la gran brecha que separaba y marginaba a la población india, como de incrementar la modernización tecnológica de las fuerzas armadas y su preparación para combatir a un potencial enemigo externo. Ésta línea de razonamiento se remontaba en

realidad a las teorías francesas de pacificación colonial de comienzos de la década de 1920, derivadas del papel que ese país tuvo en la profesionalización de los militares peruanos en las primeras décadas del siglo.

Mientras que el CAEM iba arraigándose como un nuevo centro progresista de preparación y estudio para los mejores y más brillantes militares, Odría tomaba medidas para apuntalar el tradicional papel de combate de las fuerzas armadas. El general, que había mostrado un fuerte compromiso con el anticomunismo, logró desarrollar vínculos cordiales con el gobierno de Eisenhower en los primeros años de la Guerra Fría. Estos lazos llevaron a la firma de un importante pacto de asistencia militar con los Estados Unidos en 1952, que formalizó la creciente relación de este último país con las fuerzas armadas peruanas desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Según Masterson, mediante este acuerdo Estados Unidos multiplicó su asistencia militar al Perú pasando de apenas $100.000 en ese año, a $9,1 millones a finales del gobierno de Odría, en 1956.

La oposición al régimen se intensificó cuando el *boom* exportador se convirtió repentinamente en una recesión al finalizar la Guerra de Corea en 1953-54. Enfrentado a un creciente déficit comercial que alcanzaría los $70 millones en 1953 y la subsiguiente depreciación del sol, que provocó el estallido de un serio descontento laboral, el Presidente recortó las garantías constitucionales y quebró varias huelgas a la fuerza. También se vio forzado a restringir el gasto en obras públicas y reducir el presupuesto militar, una propuesta riesgosa hasta para un presidente-soldado. Inmediatamente después de estos sucesos Odría, ahora cada vez más amistoso con el sector más moderado de la oligarquía, dirigido por Prado, decidió permitir que Haya de la Torre abandonara el país y se fuera al exilio. Esta medida que enfureció aún más a la derecha, tanto civil como militar, buscaba aliviar la oposición de los trabajadores organizados dominados por el APRA.

Haya salió entonces de la embajada colombiana, donde había pasado los últimos cinco años leyendo y reflexionando sobre el curso futuro del APRA, más convencido que nunca de proseguir por la senda de la conciliación con el capitalismo, la oligarquía y los Estados Unidos. También continuó tratando de convencer a los funcionarios de los EE. UU. para que presionaran a Odría a fin de que restaurara las garantías constitucionales y legalizara el partido.

Afortunadamente para el régimen, la economía salió de la recesión y reinició su crecimiento liderado por las exportaciones en 1954, mientras el dictador frustraba una serie de intentos de golpe de sus rivales en las fuerzas armadas. Dejando perplejos a sus críticos, que le acusaban de querer permanecer en el poder luego de finalizado su mando en 1956, Odría anunció que las elecciones nacionales tendrían lugar en junio de ese año y que no postularía. Tres candidatos presidenciales aparecieron para disputar la elección, jugando el APRA una vez más

el papel decisivo. Odría apoyó la desabrida candidatura de Hernando de Lavalle, un abogado y banquero que buscó de inmediato el respaldo aprista.

Un candidato más formidable era Fernando Belaunde Terry, el arquitecto y profesor universitario de cuarenta y cuatro años de edad que había sido elegido para el Congreso en 1945 como miembro del FDN. Belaunde fue respaldado por sectores progresistas de la nueva clase media surgida desde la Segunda Guerra Mundial, principalmente estudiantes universitarios, profesionales y técnicos. Muchos de ellos habían respaldado las ideas de Bustamante y fueron atraídos por el estilo carismático y la brillante oratoria de Belaunde. Su popularidad recibió un fuerte impulso cuando Odría infructuosamente intentó que la Junta Nacional Electoral anulase su candidatura. Joven, apuesto y garboso, Belaunde también resultaba atractivo para las mujeres, quienes finalmente ganaron el derecho al voto un año antes, en 1955, gracias a los esfuerzos de María Delgado de Odría.

El tercer candidato era el ex presidente Manuel Prado, de sesenta y siete años de edad, quien retornó inesperadamente de París para participar en la campaña. Aunque el APRA no pudo presentar su propia lista presidencial, sí inició negociaciones con cada candidato para asegurar una promesa de legalidad a cambio del respaldo del partido. Haya de la Torre inmediatamente encontró desagradable la candidatura de Belaunde, en parte por su antipatía personal hacia el candidato y en parte porque las ideas reformistas de su joven y advenedizo contendor constituían un serio y competitivo desafío al APRA.

Al final, apenas unos cuantos días antes de las elecciones, el experimentado Prado llegó a un acuerdo con el APRA en el llamado Pacto de Monterrico. A cambio del respaldo aprista, Prado aceptó legalizar el partido y permitir que Haya postulara a la presidencia en 1962. Odría aceptó el pacto, sabiendo bien que su candidato Lavalle no tenía ninguna posibilidad de ganar y porque Prado le aseguró que no investigaría las acusaciones de corrupción hechas a su régimen. Conocida como la política de la «convivencia», el acuerdo dio a Prado el respaldo necesario para ganar las elecciones con 586.000 votos (cuarenta y cinco por ciento) contra la votación sorprendentemente grande de Belaunde de 457.000 votos (treinta y seis por ciento) y los 222.000 de Lavalle. Significativamente, el tamaño del electorado se había triplicado desde 1950 a 1,25 millones de votantes (con el añadido de las mujeres, aunque los analfabetos seguían excluidos, y con ellos más de las dos terceras partes de la población total en edad de votar).

Prado, la «convivencia» y la crisis agraria, 1956-1962

La inauguración de Prado como presidente en 1956 constituyó el apogeo final del gobierno oligárquico directo en el siglo XX. El gobierno de Prado se caracterizó por una estabilidad relativa y por el retorno a un régimen democrático luego de

ocho años de dictadura. El Presidente tuvo poca oposición militar y únicamente se produjo un fracasado intento de golpe a comienzos de 1958. Aunque a un año de iniciado su mandato hubo una recesión internacional, el crecimiento económico liderado por las exportaciones se reinició en 1959 y avanzó con fuerza hasta el final de su mandato. Si bien el desempleo creció entre 1957 y 1958, al igual que el descontento laboral, el firme control aprista del movimiento sindical permitió a Prado capear el temporal. Por último, aunque las tomas de tierra y las tensiones entre los campesinos y los hacendados se intensificaban en la sierra, hubo diversas propuestas de reforma agraria que fueron hábilmente obstruidas por las maniobras de la élite en un Congreso controlado por el Presidente. En suma, Prado representaba un enfoque de «ningún cambio» ante los problemas a que el país debía hacer frente, incluso cuando se hacía cada vez más evidente que era necesario efectuar reformas fundamentales.

En términos económicos, la larga ola de crecimiento impulsado por las exportaciones, que se extendió desde 1948 a 1968, iniciaba ahora su fase madura. El crecimiento de los volúmenes exportados se aceleró, desde un diez por ciento al año en la década de 1950, a un notable veintiún por ciento entre 1959 y 1962, antes de caer a cinco por ciento a mediados de la década de 1960. En consecuencia, el PNB real aumentó de un 4,7 por ciento al año entre 1950 y 1959, a un 8,8 por ciento de 1960 a 1962, para caer de ahí en adelante a un 3,9 por ciento hasta 1968. El crecimiento per cápita del PNB a lo largo del mismo periodo fue de 2,4, 5,9 y 1,3 por ciento, respectivamente.

La total integración del Perú en el mercado internacional durante este periodo fue acompañada por un flujo, grande y continuo, de capital extranjero. Las compañías extranjeras apreciaban no sólo la economía ortodoxa y de mercado libre del país, sino la virtual carencia de restricciones a la repatriación de utilidades. En las décadas de 1950 y 1960, el Perú se convirtió en uno de los países sudamericanos más propicios para la inversión y estuvo dominado cada vez más por el capital extranjero.

A pesar de la favorable tendencia general de la economía, Prado tuvo problemas en la primera mitad de su gobierno debido a los efectos de la recesión internacional de 1957. Los Estados Unidos, en particular, elevaron los aranceles de los productos minerales y comenzaron a deshacerse del *stock* excedente de algodón en el mercado mundial. En consecuencia, el desarrollo peruano liderado por las exportaciones fue detenido momentáneamente en estas mercancías, lo que tuvo repercusiones sociopolíticas más amplias. Prado respondió con políticas deflacionarias que le hicieron entrar en conflicto con los trabajadores organizados. Al mismo tiempo, la oligarquía se irritaba por sus ganancias decrecientes que no podía compensar con cortes significativos en los salarios debido a la defensa que el APRA hacía de los sindicatos. La aguda crisis económica, plasmada en una balanza

de pagos cada vez más desfavorable y en el incremento de la fuga de capitales, provocó una fuerte crisis política que culminó cuando el congreso extendió un voto de desconfianza al gobierno en 1959, derribando así al gabinete.

Prado reaccionó girando a la derecha y nombrando nuevamente a Pedro Beltrán como primer ministro. Este aplicó un programa de estabilización monetarista para intentar apuntalar la deteriorada economía. Aunque este programa provocó una ola momentánea de huelgas en los sectores minero, petrolero, de construcción, fabril y bancario, el APRA jugó un papel importante en la mediación del gobierno en estas protestas laborales. Aun resultó más significativo el hecho de que tres componentes de la diversificada economía de exportación peruana brindaran el ímpetu principal para una recuperación económica en la segunda mitad del gobierno de Prado. La producción de harina de pescado despegó, las nuevas y gigantescas minas de cobre de Toquepala entraron en línea y las exportaciones de azúcar a los Estados unidos vivieron un *boom* luego de la Revolución cubana de 1959.

La producción de harina de pescado se disparó en Perú a mediados de la década de 1950. Su auge se produjo debido a las oportunidades de mercado y a las innovaciones tecnológicas. Las fábricas de harina de pescado, por ejemplo, pasaron de diecisiete en 1954 a sesenta y nueve en 1959 y a 154 en 1963. Al mismo tiempo, la producción se incrementó por un factor de veinte entre 1954 y 1959, triplicándose luego en1963.

Aunque la élite local y las compañías extranjeras tuvieron una pequeña participación en su ascenso meteórico, la industria pesquera era fundamentalmente la creación de un nuevo grupo de empresarios de clase media. De origen tanto nativo como inmigrante, ellos incluian a las familias Banchero, Elguera, Madueño y del Río. A iniciativa de Banchero formaron un exitoso cártel en 1960, que comprendía al noventa por ciento de los productores nacionales y que logró contrarrestar la caída en los precios a comienzos de la década de 1960 reduciendo la producción. Por su parte, la mayoría de la élite establecida dejó los riesgos a los recién llegados, prefiriendo participar en el *boom* indirectamente a través de su control del financiamiento.

La bonanza en la producción de harina de pescado y las exportaciones impulsó notablemente la economía global. Para empezar, su valor de retorno era extremadamente alto, de alrededor del noventa por ciento, y los efectos multiplicadores de sus eslabonamientos hacia atrás, al sector de bienes de capital y el consumo interno (incluída su cuenta salarial]), eran poderosos. En efecto, el *boom* de la harina de pescado generó una fuerza laboral grande y bien pagada, conformada mayormente por emigrantes no calificados de la sierra a la costa. Con su centro en la costa norte en el puerto de Chimbote, que creció explosivamente durante las décadas de 1950 y 1960, la industria desvió la población emigrante de la superpoblada Lima.

Si bien la producción de harina de pescado ayudó sustancialmente a la economía peruana a salir de la recesión de 1958, también empujaron en el mismo sentido los avances del cobre y del azúcar. Cuando las inmensas minas de cobre de Toquepala comenzaron finalmente a producir en 1960, después de casi una década de desarrollo, su producción pronto comprendió más de una tercera parte de la producción total de cobre del país. En cuanto al azúcar, Perú obtuvo una gran parte de la cuota cubana en el lucrativo mercado estadounidense en 1961, después de que la revolución de 1959 agriase las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. La producción se incrementó rápidamente hasta la máxima capacidad puesto que también satisfacía a la demanda interna.

Los últimos tres años de gobierno de Prado se caracterizaron, entonces, por un restablecimiento del crecimiento encabezado por una fuerte alza en las exportaciones (veintiuno por ciento al año en volumen, 1959-62). Aunque los principales beneficiarios de esta renovación de la larga ola de crecimiento impulsado por las exportaciones (1948-1968) fueron los sectores urbanos, costeños y modernos de la economía, ciertas regiones de la sierra, en particular aquellas con acceso de mercado a la costa, experimentaron un «despertar comercial» propio. Webb (1977: 27) utiliza el término «despertar» para referirse a «un rápido incremento en el movimiento de dinero, bienes y personas» en el transcurso de las décadas de 1950 y 1960. Es más, el impacto de este fenómeno no fue geográfica o socialmente uniforme; estuvo confinado principalmente a las regiones de la sierra con un fácil acceso a Lima y a la costa central, y a una burguesía rural conformada por comerciantes, artesanos, burócratas, pequeños a medianos agricultores y los restantes pobladores de pequeños pueblos y ciudades provinciales.

Uno de estos notables «hinterland» de la costa, sobre todo de Lima, fue el valle del Mantaro, en la sierra central del departamento de Junín. Merced a Huancayo, su bulliciosa ciudad-mercado y capital, y a su estructura de tenencia de la tierra relativamente dividida, el Mantaro se convirtió en la despensa limeña, suministrando a la capital una gran parte de sus necesidades alimenticias y laborales. Huancayo mismo había crecido de 27.000 personas en 1940 a 64.000 en 1961 (alrededor de un 4,2 por ciento al año). Desde la década de 1920 se había ido desarrollando como un centro organizador de la economía minera, que estableció importantes eslabonamientos con la economía más amplia de Junín. También se convirtió, según Long y Roberts (1984: 66), en el tercer centro manufacturero más grande fuera de Lima y Arequipa, impulsado por textiles, curtiembres y cervecerías.

Gracias al dinamismo económico de la ciudad, Huancayo atrajo a una gran cantidad de inmigrantes, tanto de las aldeas en los valles (para trabajar en las fábricas textiles) como de Lima (para trabajar en el comercio y los negocios), estos últimos nacidos a menudo en el extranjero. Entre 1950 y 1967 el salario medio

global de Junín subió cuarenta y siete por ciento, o 2,3 por ciento al año, más del doble que en otros departamentos de la sierra y tres veces más alto que la muy indígena sierra sur (Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Huancavelica y Puno). Otra área cuyo «hinterland» alcanzó un crecimiento dinámico fue el valle del río Santa, en el departamento de Ancash, que en el nivel salarial figuraba justo por debajo de Junín pero muy por encima de otros departamentos de la sierra.

Aunque han sido menos estudiados, los departamentos norteños de La Libertad, Cajamarca y Piura también mostraron señales similares de modernización rural en las décadas de 1950 y 1960. Las demandas de mano de obra y productos alimenticios en las haciendas azucareras, algodoneras y arroceras de la costa norte en particular, dinamizaron la producción en los pueblos y aldeas adyacentes, y en la campiña de la sierra vecina. En la provincia de Cajamarca, el arcaico sistema de hacienda fue transformado en unas rentables empresas de productos lácteos, estimuladas por unas políticas estatales que desincentivaban la producción alimenticia tradicional y fomentaban el capital transnacional y a los terratenientes modernizadores. Según Deere (1990: 179), a mediados de la década de 1950, funcionaban cuarenta y cuatro grandes granjas lecheras; casi todas habían sido formadas a partir de antiguas haciendas productoras de alimentos, mediante su compra o arrendamiento. La fuerza laboral tradicional de las haciendas fue igualmente reorganizada y reducida para que coincidiera con una industria menos intensiva en mano de obra. En este proceso, muchos de sus colonos fueron expulsados de sus parcelas.

Al mismo tiempo, los pequeños productores campesinos aprovecharon el mercado lácteo sumamente rentable y en vías de desarrollo para desplazar su producción de los productos de subsistencia o alimenticios al ganado lechero. El ingreso de las familias campesinas se monetizó cada vez más con la producción lechera (según Deere, setenta y nueve por ciento en 1973), en tanto que, en consecuencia, los productos «importados» de la costa, como el arroz, los fideos y la cerveza, aparecieron en los estantes de los pequeños almacenes de las aldeas. Con la difusión de las relaciones capitalistas por toda la provincia, las tierras se compraron y vendieron cada vez más y la mano de obra asalariada se expandió, lo cual llevó a una mayor diferenciación social entre el campesinado de la región.

Al igual que estas regiones de «hinterland» de la sierra, algunos poblados situados en las regiones más remotas de los Andes mostraban también señales de un desarrollo comercial e ingreso crecientes. Por ejemplo, Paucartambo, la capital distrital de Cuzco, creció rápidamente en la década de 1950 luego de completarse la pista que lo unía con la carretera central. Sicuani, un pueblo más grande y capital de la provincia de Canchis, en el Cuzco, creció en 3,2 por ciento al año (a 10.664) entre 1940 y 1961, en tanto que la provincia como un todo únicamente creció un 0,4 por ciento. Juliaca, una ciudad situada en un área extremadamente pobre en

el departamento sureño de Puno, duplicó su población en el mismo lapso. Otras ciudades más grandes de la sierra crecieron a diversas tasas anuales entre 1950 y 1966: Cuzco, 3,5 por ciento; Ayacucho, 1,7 por ciento; Cajamarca, 2,4 por ciento; Puno, 2,4 por ciento; Jauja, 2,0 por ciento; y La Oroya, 3,0 por ciento.

Si bien parece estar claro que la burguesía de los pequeños poblados, ciudades y provincias alejadas de la costa tomaron la parte del león de los beneficios del «despertar» comercial de las décadas de 1950 y 1960, ¿qué podemos decir de la población campesina que vivía fuera de esta área en la región en general? Ella comprendía alrededor de las dos terceras partes de la población total de la sierra, el cuarenta por ciento de la cual estaba concentrada en los cinco departamentos sureños más pobres de la sierra meridional.

La producción agrícola global per capita de la sierra únicamente creció 0,8 por ciento al año entre 1950 y 1966, lo cual, según Webb, probablemente se aproximaba también al ingreso per capita. Esta cifra sugiere que la inmensa mayoría del campesinado, fundamentalmente en el sur más atrasado e indígena, siguió atrapada en la subsistencia y el estancamiento, cuando no en una abierta decadencia, muy lejos de estos «hinterland» más prósperos y modernizados de la sierra, donde los campesinos vivían mejor. Sus técnicas productivas anticuadas y rudimentarias, y su aislamiento de los mercados, ya fuera en haciendas o en comunidades, frustraban cualquier posibilidad de competir con las importaciones baratas y con las políticas estatales de alimentos subsidiados (eso, por no mencionar el creciente costo de insumos tales como las herramientas, fertilizantes y así por el estilo), que desde la década de 1940 provocaron unos términos de intercambio por lo general cada vez más adversos entre la ciudad y el campo. Es más, los desastres naturales como la sequía de 1957 y la hambruna subsiguiente en la sierra sur, particularmente en Puno, causaron una aguda caída en la producción y en el ingreso per capita, y un incremento en la emigración campesina a las ciudades.

En términos macroeconómicos y sociológicos, la creciente diferenciación social y las desigualdades que caracterizaban a la población campesina de la sierra a medida que el capitalismo y el mercado interno avanzaban en su acostumbrada forma variegada y nada uniforme, prepararon el escenario para el incremento del descontento rural y la movilización campesina que repentinamente estalló a finales de la década de 1950, alcanzando su clímax a mediados de la de 1960. Tanto los perdedores —cuyos ingresos cayeron y que o bien permanecieron en el campo o decidieron emigrar a las ciudades— como los ganadores —que se incorporaron y beneficiaron con el mercado interno en expansión— veían cada vez menos razón de ser a la persistencia del sistema gamonal tradicional y comenzaron a hacer campaña con miras a su cambio.

Al mismo tiempo, el viejo quid pro quo entre el Estado y la clase gamonal para conservar el orden en el interior, se vio minado por el alcance cada vez mayor del gobierno a través de nuevos caminos y agentes enviados a los rincones remotos del país. Es más, la mejora de los medios de comunicación (por no mencionar el impacto revolucionario pero poco estudiado de la radio) y el corpus cada vez más grande de emigrantes rurales en las ciudades brindaron los medios a través de los que difundir la protesta agraria, no sólo en rincones aislados de la sierra, como antes, sino por todo el Ande. En el flujo de ida y vuelta de la emigración, muchos emigrantes rurales recientemente urbanizados difundieron y diseminaron de diversos modos en sus comunidades de origen las nuevas ideas y formas de organización política que habían conocido en las ciudades.

El primer gran brote de descontento campesino tuvo lugar en Pasco, hogar de la Cerro de Pasco Corporation, a finales de 1959. Pasco, el departamento más pequeño de la sierra, tenía 138.000 habitantes en 1960 pero , según Handelman (1975) y otros, su campesinado era uno de los más avanzados de esta región geográfica. Aunque era predominantemente quechua-hablante (sesenta por ciento), el noventa por ciento de la población también hablaba español, en contraste con el reducido porcentaje de hispano-hablantes —treinta a treinta y cinco por ciento— en la sierra sur. Su tasa de alfabetismo era de cincuenta y dos por ciento, en oposición a la tasa de apenas veintitrés por ciento en Apurímac.

Debido a su altura, Pasco era en términos agrarios una economía esencialmente ganadera que producía lana de llama y criaba ovejas. En 1960, diecisiete familias y corporaciones, la Cerro incluida, poseían el noventa y tres por ciento de todas las tierras arables y pastoriles del departamento. Estos latifundios eran sumamente capitalizados y eficientes, con una fuerza laboral asalariada, en contaste con sus contrapartes más «feudales» del Cuzco y el sur. Las tensiones y conflictos en torno al acceso a los pastizales existían hacía tiempo entre las comunidades indígenas y los ranchos corporativos de Pasco, y la Cerro había atraído un gran número de comuneros a un empleo alternativo mediante la emigración estacional a las minas.

Sin embargo, esta «válvula de seguridad» para el empleo comunero comenzó a desaparecer con el advenimiento de la depresión a comienzos de la década de 1930, cuando la Cerro tomó medidas para recortar su fuerza laboral y mecanizar aún más sus operaciones para así reducir sus costos. Desde 1940 a 1960, la población de Pasco creció un cuarenta por ciento, pero el número de trabajadores de las minas de Cerro y la refinería de La Oroya únicamente se incrementó en tres a cuatro por ciento. Los comuneros emigraron en busca de trabajo a otras ciudades de la sierra —como Cuzco y Huancayo— en número cada vez mayor, inflando la población de esas ciudades de 80 a 140 por ciento en el mismo lapso. Expuestos

a la modernidad y a la idea del progreso, ellos conservaron sus vínculos con sus comunidades, en donde se convirtieron en agentes del cambio.

En 1958 Estados Unidos redujo su cuota de cobre, desatando despidos en gran escala en Pasco, a lo que siguió una serie de violentas huelgas y protestas. Un importante vocero de los mineros fue el profesor de la escuela local llamado Genaro Ledesma Izquieta, que recientemente había emigrado a Pasco desde la costa. En negociaciones con la compañía y luego directamente con el gobierno de Prado, Ledesma ligó los agravios de los mineros con los de los comuneros que buscaban la distribución de las tierras de las estancias de la compañía. Al quedar la disputa sin resolver, los comuneros comenzaron a invadir las tierras de las haciendas. Estos actos involucraban a grupos de hombres, mujeres y niños que anunciaban ceremonialmente la ocupación marchando a las tierras de las haciendas haciendo sonar trompetas, ondeando banderas peruanas y esgrimiendo rastrillos. Entretanto, Ledesma, que era aprista, había sido nombrado alcalde de Cerro de Pasco por Prado a instancias del APRA. Su nombramiento creó un clima más favorable para las tomas de tierra de los campesinos, al igual que la asistencia que Ledesma dio a la fundación de la Federación de Comunidades de Pasco.

Sin embargo, Prado, al multiplicarse las tomas de tierras, depuso a Ledesma y le encarceló. Pero no obstante este y otros actos policiales, el número de invasiones en el departamento siguió creciendo durante los siguientes dos años. Estas acciones culminaron en 1962, cuando tuvo lugar una masacre en la Hacienda Pocayán, en que la policía mató entre diez y quince comuneros e hirió a cincuenta. Una ola de protestas populares se produjo de inmediato en varias ciudades, entre ellas Lima y Cerro de Pasco, donde los mineros siempre habían mantenido vínculos estrechos con las aldeas en que venían produciéndose las tomas de tierras.

El descontento campesino también iba desarrollándose en este momento en el valle de La Convención, situado a noventa millas al noroeste del Cuzco, en la montaña de las laderas orientales de los Andes. Desde la década de 1940, un gran flujo de comuneros de los vecinos departamentos de los Andes del sur había emigrado a La Convención, cuya población nativa era relativamente escasa. Fueron reclutados por hacendados que estaban abriendo el valle al cultivo de cacao, azúcar, café y té. Atraídos por la promesa de tierra a cambio de trabajo y esperando convertirse en granjeros independientes, los recién llegados inflaron la población del valle de 28.000 personas en 1940 a 62.000 en 1960.

Debido a su educación así como a sus ambiciones, los comuneros emigrantes de lugares tales como el Cuzco no compartían la mentalidad «feudal» de muchas de sus contrapartes en otros lugares, que habían vivido un sistema prácticamente de servidumbre en las haciendas. En modo alguno pasivos y resignados, tenían grandes expectativas de avanzar que se vieron frustradas por las medidas subsiguientes tomadas por sus nuevos hacendados. A medida que el precio del café subía en

1.200 por ciento después de la Segunda Guerra Mundial, de 1,2 soles en 1945 a 14,8 en 1954, muchos empresarios agrarios dedicaron sus campos íntegramente al cultivo comercial. Mientras tanto, a medida que la producción se triplicaba en el valle, los hacendados buscaron incrementar su bonanza incumpliendo los contratos originales, expulsando a sus colonos y realizando sus operaciones íntegramente mediante trabajo asalariado. Los colonos, por su parte, resistieron estos actos ilegales y contrataron nuevos inmigrantes, llamados suballegados, para que les sustituyeran en sus obligaciones laborales en las haciendas y así poder dedicar toda su atención al cultivo de café en sus propias parcelas.

Los colonos habían formado ya en 1952 un sindicato para defender sus intereses, pero este no logró muchos progresos hasta 1958, cuando varios sindicatos de haciendas formaron la Federación de Trabajadores Campesinos de La Convención y Lares (FTC). Conformada tanto por colonos como por allegados, la nueva federación recibió la asistencia de abogados radicales del Cuzco y estableció vínculos con la Federación de Trabajadores de esta ciudad, controlada por los comunistas. En 1960, la FTC comprendía ya 130 sindicatos con una membresía total de 11.000 campesinos.

Ese mismo año la FTC hizo una serie de demandas a los hacendados. Ellas incluían una reducción de las faenas, el pago del arriendo en efectivo, la venta directa de su café al mercado sin interferencia de los hacendados, y el arriendo de largo plazo (seis a ocho años) de las parcelas. Al enterarse de las tomas de tierra en Pasco, el sindicato convocó también una huelga y pidió a sus miembros que dejaran de pagar la renta de sus parcelas. Esta medida coincidió con el arribo a La Convención de Hugo Blanco, un agrónomo trotskista del Cuzco cuyo suegro había ayudado a formar la FTC varios años atrás y que hablaba fluidamente en quechua. Blanco, quien arrendó una pequeña parcela como allegado de una hacienda, esperaba politizar y radicalizar el movimiento como punta de lanza de una rebelión campesina más amplia, que, según él vislumbraba, se esparciría por toda la sierra.

Con el liderazgo de Blanco, la huelga se extendió hasta incluir a todo el valle y los campesinos tomaron el control de facto de sus campos. A finales de 1962, ellos incluso habían logrado tomar 40 de las 380 haciendas de la región antes de que Blanco fuese forzado a retirarse a la selva para evitar ser arrestado por las autoridades. Su huída, junto con la represión estatal de las tomas de tierras en Pasco, puso fin a la que fue la primera fase de la movilización campesina en la sierra, desarrollada durante la segunda mitad del gobierno de Prado, entre 1959 y 1962.

Para ese entonces, la Revolución cubana de Fidel Castro y la Revolución china de Mao Tse-Tung habían reorientado el pensamiento de muchos militantes de la izquierda, entre ellos el de jóvenes urbanos radicales como Blanco, en lo que respecta a la posibilidad de una revolución campesina andina. Aunque Mariátegui

y otros marxistas, así como el APRA, habían pensado movilizar al campesinado indígena para la causa revolucionaria hacía una generación, ellos concentraron sus esfuerzos organizativos fundamentalmente en la radicalización de trabajadores o segmentos de los sectores medios en las ciudades y enclaves. Blanco fue el primero que realmente intentó un movimiento campesino a favor de la causa revolucionaria (en la década de 1930, Hildebrando Castro Pozo intentó organizar a los campesinos de la sierra piurana para el Partido Socialista), aunque éste no tuvo lugar exactamente en la sierra. Además, según Handelman, es claro que el carisma de Blanco inspiró a los estudiantes universitarios de ciudades andinas como Cuzco, Ayacucho y Huancayo, muchos de los cuales tenían antecedentes campesinos, para que volvieran al campo a organizar y promover una revolución agraria.

La respuesta del gobierno de Prado a la creciente ola de descontento campesino fue doble. En primer lugar intentó reprimir el movimiento por la fuerza, concentrando sus esfuerzos principalmente en la zona estratégicamente situada de Pasco, donde la Cerro de Pasco Copper Corporation esgrimía un inmenso poder político y económico. La Convención simplemente era una región demasiado remota y aislada, y estaba conformada por hacendados que tenían demasiado poco peso político o económico fuera del valle, como para merecer una atención similar. Esta política tuvo éxito en el corto plazo en detener la propagación del movimiento, pero la segunda respuesta —una reforma agraria— planteó la posibilidad de una solución de más largo aliento. En realidad, Prado había establecido una comisión para que estudiara la cuestión de la reforma agraria al inicio de su gobierno en 1956, mucho antes del estallido del descontento rural. Además de ser una posible forma de mejorar la productividad, y con ello la eficiencia y el la producción agrícola, esta reforma era vista como un medio con que revertir la ola de emigrantes a las ciudades, donde conformaban una amenaza potencial al orden establecido.

La comisión, encabezada por el primer ministro Beltrán, quien estaba resueltamente opuesto a la redistribución como un medio de resolver estos problemas, languideció durante cuatro años. Entonces fue repentinamente revivida en medio del estallido de la movilización campesina en Pasco y La Convención, y emitió su informe en 1959. Este reconocía que el gobierno necesitaría, tal vez, emprender una reforma agraria limitada, pero únicamente mediante una remuneración adecuada a los dueños. Aunque era el primer reconocimiento efectuado en círculos oficiales de la posibilidad de una reforma agraria, el informe hizo pocas propuestas concretas y el Congreso jamás actuó en conformidad a él.

Entretanto, nuevas corrientes de cambio se iban despertando en las fuerzas armadas a medida que el descontento rural crecía durante la segunda mitad del gobierno de Prado. Dada la ausencia relativa de tensiones entre civiles y militares, ellas pudieron concentrarse en los temas de la profesionalización y modernización que hacía un tiempo se venían infiltrando en su seno. Entre ellos sobresalía la

cambiante misión de las fuerzas armadas, de una postura puramente defensiva a otra que promovía la seguridad a través del desarrollo o la «construcción nacional».

La opinión a favor de semejante misión revisada aunmentó rápidamente gracias a la creciente influencia del CAEM, donde un número cada vez más grande de oficiales fue graduándose durante el gobierno de Prado. Para 1962, el setenta por ciento de los generales del ejército se habían graduado en él; allí, los alumnos, estudiaban con instructores civiles temas tan diversos como sociología, desarrollo agrícola, banca, climatología, estadística y teoría del desarrollo. De este modo, los oficiales fueron preparados para que enfocaran la cuestión de la seguridad peruana desde la perspectiva más amplia que los científicos sociales tenían del desarrollo y la construcción nacional.

El auge del descontento campesino andino después de 1958, así como la exitosa guerra de guerrillas librada por Castro en Cuba, subrayó la urgencia de un enfoque «desarrollista» como este. En efecto, en el cuerpo de oficiales no pasó desapercibido que una vez en el poder, Castro procedió a destruir las fuerzas armadas cubanas regulares. La autopreservación institucional pasó a ser un poderoso argumento en el desarrollo de un amplio consenso en torno a la necesidad de alterar la misión histórica de defensa propia de los militares, para que incluyera los nuevos conceptos de acción cívica y contrainsurgencia.

El desarrollo de vínculos más estrechos con los Estados Unidos durante el gobierno de Prado, fue otro factor que permitió alcanzar este consenso. Entre 1956 y 1962, Perú recibió de los Estados unidos más de $70 millones en asistencia militar, una de las cifras más altas en América Latina. Este monto no sólo incluía asistencia técnica y logística, así como la entrega de equipos militares, entre ellos varias naves; también brindaba ayuda para programas de acción cívica, tales como la construcción de carreteras y proyectos de desarrollo, que los Estados Unidos promovieron cada vez más después de 1960 como respuesta a Castro. Además, un gran número de oficiales peruanos comenzó a recibir una capacitación regular en la guerra de contrainsurgencia en las escuelas de mando y estado mayor en los Estados Unidos, como la de Fort Leavenworth, en Kansas.

La Iglesia, el otro pilar tradicional del dominio conservador en el Perú, también comenzaba a cambiar a finales de la década de 1950, cuando se hizo más abierta a las corrientes ideológicas internacionales y tuvo un mayor interés social. Aunque no hay un solo factor que explique esta transformación, varias personas y sucesos contribuyeron a ella. Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se fundó en 1956. Bajo el liderazgo de Héctor Cornejo Chávez, un ex secretario de Bustamante, el PDC llegó a ejercer una importante influencia intelectual progresista muy por encima del tamaño relativamente pequeño de sus partidarios, profesionales de clase media con un fuerte sentido de conciencia social.

La inmensa figura eclesiástica de Juan Landázuri Ricketts (nacido en Arequipa en 1913) fue asimismo enormemente influyente en el cambio de dirección de la Iglesia. Landázuri fue nombrado arzobispo de Lima en 1955 y se convirtió en su virtual patriarca hasta que dejó el cargo en 1990. Líder y «diplomático» excepcionalmente dotado, no sólo modificó y reorganizó el aparato burocrático de la Iglesia, sino que la hizo asumir un papel social más activo. Este se hizo evidente en 1957, cuando anunció un plan para hacer frente a los desafíos pastorales que presentaba atender a los barrios populares de Lima, que habían crecido rápidamente hasta alcanzar los 120.000 habitantes. Landázuri tuvo, asimismo, un papel crucial en la carta pastoral de los obispos de 1958, que pedía a los cristianos que cambiaran la sociedad en forma positiva y criticaba «la acumulación de riqueza en las manos de unos cuantos» como algo que contribuía enormemente a la gestación de una crisis social en el país (Klaiber 1992: 256).

A medida que el gobierno de Prado se acercaba a su fin, el pueblo peruano se volcó en 1962 en elegirle un sucesor. En ese momento, el país era, en varias maneras, inmensamente distinto al que le había elegido dos décadas antes para su primer gobierno. La población total había crecido un cuarenta y tres por ciento, pasando de poco más de siete millones en 1940 a casi diez millones en 1960. Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento poblacional se aceleró en más de un punto porcentual, de 1,7 a 2,8 por ciento al año.

Sin embargo, este incremento global escondía el dispar ritmo de crecimiento de la población urbana —cuya tasa alcanzó el 3,7 por ciento— y de la población rural —con una tasa de sólo 1,2 por ciento—. En efecto, la primera creció tres veces más que la segunda entre 1940 y 1961. Esta urbanización acelerada se reflejaba también en el incremento de la proporción de ciudades con poblaciones por encima de las cinco mil personas, de veintiuno a treinta y ocho por ciento, una tendencia que persistiría hasta el mismo fin de siglo. Lima había crecido más del doble, pasando de albergar una población de 645.172 en 1940 a una de 1.652.000 habitantes en 1961. Desde 1940, el Perú había visto un gran desplazamiento demográfico, del interior serrano a la costa. En 1961, el porcentaje de la población en la sierra había disminuido de sesenta a cincuenta y uno por ciento, en tanto que la población de la costa había subido de treinta y cuatro a treinta y nueve por ciento.

Una implicación fundamental de largo plazo de esta tendencia hacia la urbanización, fue el aumento de las presiones sobre el Estado para que estimulase la industrialización y así creara suficientes oportunidades de empleo que absorbieran a las masas de recién llegados a las ciudades, a Lima en particular. Otra, fue el creciente imperativo gubernamental de estabilizar el suministro de alimentos y su costo, para así prevenir el potencial descontento urbano por el alza en los precios y su escasez. Ello llevaría a importar cada vez más alimentos del extranjero, así como a un creciente subsidio gubernamental de los productos básicos para estabilizar los

precios, dos hechos que minaban la producción agrícola nacional. De este modo se introdujo un sesgo urbano en las políticas gubernamentales, sin importar qué partido o grupo político lograba ganar el poder.

La urbanización transformaba, asimismo, cada vez más el paisaje cultural del país posterior a la Segunda Guerra Mundial. Muchos intelectuales se desplazaron a Lima desde las provincias en sucesivas oleadas migratorias que fueron cambiando la capital, de su mítica naturaleza virreinal e hispana a otra de creciente «cholificación». Esta revolución demográfica, con sus profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, tuvo también un enorme impacto cultural.

Uno de los acontecimientos culturales más importantes fue la aparición de las novelas de José María Arguedas, cuya obra maestra *Los ríos profundos*, publicada en 1958, describe la compleja sociedad rural indígena del sur donde nació. Arguedas, un autor bilingüe, hizo, a través de estas y otras novelas, una seria crítica a los autores indigenistas, muchos de los cuales, como Jorge Icaza, el autor ecuatoriano de la novela *Huasipungo* (1934), habían escrito desde una perspectiva ajena al mundo indígena. Según el, estas novelas indigenistas retrataban erróneamente a los indios, pintándolos como víctimas sin esperanza privadas de voluntad. Aunque estos escritores de clase media tenían las mejores intenciones, sus novelas no eran sino caricaturas. Arguedas puso énfasis en la necesidad de hacer trabajo de campo al estudiar a las comunidades indígenas, y situó al indio como agente de su propio saber.

Mientras que la población peruana se trasladaba masivamente del campo a las ciudades, el país daba señales de estar cada vez más organizado. Ya en 1960 los campesinos invadían las tierras de las haciendas en la sierra y organizaban sindicatos para exigir la reforma agraria, crédito y más servicios estatales. Los inmigrantes de Lima y otras ciudades costeñas se unieron también para efectuar sus propias invasiones de tierra y formar sus propias asociaciones de autoayuda, basadas muchas veces en su origen regional común. Ellos exigían servicios elementales del Estado para sus nuevas casas improvisadas, entre ellos agua potable, electricidad, calles pavimentadas y transporte, así como más oportunidades de salud, educación y empleo.

Asimismo, la clase trabajadora en expansión se organizó mejor en sindicatos, que proliferaron con gran rapidez e hicieron cada vez más demandas al gobierno. Las clases medias también habían aumentado gracias al crecimiento económico constante y pedían mayores oportunidades educativas y de empleo en el sector público. Por último, los industriales emergentes presionaron al gobierno en pos de aranceles protectores más altos y crédito para expandir el sector manufacturero. En suma, una variedad de grupos importantes se organizaron como nunca antes para lograr sus demandas de tener una mayor voz en la administración del país, y un Estado más grande que satisficiese sus crecientes necesidades y aspiraciones.

Para 1960, esta creciente presión en pos de una mayor participación y acción política puso al tradicional Estado oligárquico más a la defensiva que en ningún otro momento desde 1930 o 1945. Por ejemplo, las élites dominantes siguieron divididas en torno a cómo responder a las demandas populares, hecho reflejado en los dos diarios más importantes del país. De un lado, *La Prensa* expresaba los intereses económicos de la élite agroexportadora, que propugnaba una economía de mercado abierta y un Estado limitado de *laissez-faire*, juntamente con la adopción de una línea dura frente a la disidencia popular. Del otro lado, *El Comercio* propugnaba una agenda reformista y nacionalista, más a tono con los emergentes elementos de una burguesía industrial en las nuevas clases medias y con las fuerzas armadas. También mantuvo una constante andanada opositora al APRA.

Por último, los vientos del cambio se intensificaron en las fuerzas armadas a comienzos de la década de 1960. Las implicaciones del nuevo y más amplio concepto de defensa nacional fueron profundas. El subdesarrollo crónico no solamente abría la puerta a la rebelión popular, sino que además debilitaba la capacidad nacional de confrontar a Chile, su rival tradicional, más desarrollado y mejor organizado. Asimismo, abría el camino para que el «comunismo internacional» se infiltrara en el país bajo la forma de movimientos guerrilleros que, teniendo como modelo al exitoso foco (una estrategia de guerrilla rural) castrista en Cuba, tomasen la causa de los oprimidos. Por lo tanto, una defensa nacional efectiva y comprehensiva demandaba un ataque concertado a las causas del histórico subdesarrollo peruano, así como una planificación nacional que trajera consigo el desarrollo. En suma, aunque seguía siendo propugnada por una minoría de los oficiales, la opinión a favor de lo que podría llamarse una reforma «cooptadora» comenzaba a difundirse en las filas de los militares.

Estas expandidas fuerzas del cambio en pleno proceso de aceleración colisionaron con las del orden establecido en las elecciones de 1962. Prado, que había adoptado la convivencia con el APRA durante su gobierno, hizo más de lo que le tocaba al respaldar oficialmente la candidatura de Haya. Éste, por su parte, dio garantías a la élite de que el APRA seguía plenamente comprometido con un programa conservador, que enfatizaba el anticomunismo y era pro capitalista. Es más, el hecho de que durante el gobierno de Prado solamente hubiese habido un intento de golpe aislado e infructuoso, mostró a la oligarquía que el partido finalmente había abandonado la vía conspirativa al poder. Sin embargo, el desplazamiento constante del APRA hacia la derecha creó un vacío en la izquierda que fue rápidamente llenado por varios nuevos contendores políticos.

Por ejemplo, la convivencia ya le había costado al APRA su facción de extrema izquierda en 1959, al escindirse un grupo denominado el APRA Rebelde. Éste, que cambió su nombre en 1962 por el de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), era liderado por el ex aprista Luis de la Puente Uceda. Sus orígenes se

remontaban al fracasado levantamiento popular del Callao en 1948 y reafirmaba su intención de seguir la vía armada a la revolución. A finales de 1962, el MIR estableció contacto con Hugo Blanco y comenzó a preparar la campaña guerrillera en la sierra que eventualmente iniciaría en 1965. La izquierda «no violenta» se vio reforzada también con la aparición de varios partidos pequeños, entre ellos el Movimiento Social Progresista, que fue más influyente en la formulación de una doctrina que en el ámbito político mismo.

El contendor más fuerte de Haya y el APRA fue el dinámico Belaunde Terry. Desde su buen desempeño en 1956, el joven arquitecto se había estado preparando para la siguiente elección presidencial. Al año fundó Acción Popular y comenzó a viajar extensamente por todo el país. Buscaba no solamente conocer la «realidad» peruana, sino presentarle además al público su visión nacionalista y tecnocrática del cambio y el desarrollo. Con el mismo fin, el ex profesor universitario publicó en 1959 *La conquista del Perú por los peruanos*.

El libro, cuyo título era un obvio llamado al nacionalismo, presentaba las ideas de Belaunde para el desarrollo del país. Ellas incluían una promesa de reforma agraria; la creación de programas locales de autoayuda llamados Cooperación Popular; un gobierno más activista; programas de acción cívica para los militares; una mayor autonomía y financiamiento de los gobiernos locales; y un arreglo favorable de la vieja disputa con la International Petroleum Company. El recurso subyacente al nacionalismo incluía, asimismo, una imagen idealizada del imperio incaico, juntamente con elogios de la singular mezcla multiétnica peruana de culturas y razas.

El único contendor presidencial de la derecha resultó ser el ex presidente Manuel Odría, quien formó la Unión Nacional Odriísta para promover su candidatura. Autodenominándose como un «socialista de derecha», el ex general preparó un llamado populista a las barriadas que había auspiciado extensamente como presidente. Sin embargo, su candidatura despertaba poco respaldo entre los militares cada vez más profesionalizados, que vieron en su gobierno un retroceso anacrónico al caudillismo. También era un anatema para Pedro Beltrán, quien había sido uno de sus críticos más prominentes y que intentó infructuosamente lanzar su propia candidatura antes de dar su respaldo a Haya de la Torre.

La elección resultó ser una de las más intensamente disputadas y significativas en años, dado el gran respaldo popular de los tres grandes candidatos. Por primera vez en largo tiempo, ella era una expresión del creciente sentir reformista y nacionalista del país, y una clara elección contra el usualmente victorioso bloque oligárquico, representado ahora por el APRA. Era revelador que todos los candidatos intentasen manifestar el espíritu de reforma y cambio que se respiraba en la atmósfera política.

Con todo, había serias dudas de que los militares aceptasen los resultados electorales si Haya y el APRA ganaban. Reflejando el predominante sentimiento antiaprista en las fuerzas armadas, el ministro de marina advirtió al embajador estadounidense que ciertos partidos «que originalmente bebieron en fuentes comunistas» habían cambiado sus programas políticos en una cínica puja por el poder (citado en Masterson 1991: 170). Otro oficial de alta jerarquía se refirió a la muy comentada homosexualidad de Haya y la vieja vendetta contra el partido de una generación de oficiales que había sido fuertemente adoctrinada contra el APRA.

Las preferencias de los militares se inclinaban abrumadoramente por Belaunde, a quien muchos veían —sobre todo en el ejército— como el tipo de tecnócrata civil que podía llevar a cabo la tarea de modernización que el país necesitaba urgentemente. Belaunde, por su parte, estimuló este sentimiento mientras presentaba su candidatura como la alternativa al inaceptable Haya.

Belaunde fue tomando una estrecha delantera a medida que los votos se sumaban después de las elecciones del 10 de junio, pero fue superado en los conteos extraoficiales a medida que el recuento proseguía. Los resultados oficiales finales daban a Haya 558.237 votos (32,98 por ciento), 543.828 a Belaunde (32,13 por ciento) y 481.404 a Odría (28,44 por ciento). Dado que el porcentaje de Haya era ligeramente menor al 33,33 por ciento que la constitución estipulaba para la victoria, el proceso de selección fue encargado al congreso. El hecho de que el cuarenta por ciento de las curules estuvieran en manos del APRA parecía descartar toda posibilidad para Belaunde u Odría, quienes inmediatamente iniciaron negociaciones con Haya. Éste rechazó las propuestas de Belaunde pero llegó a un acuerdo con Odría el 17 de julio, según el cual el ex dictador asumiría la presidencia con el líder aprista Manuel Seoane como primer vicepresidente, y con el APRA controlando el congreso. Esta «superconvivencia» resultó insoportable para las fuerzas armadas, que depusieron a Prado al día siguiente, diez días antes de que terminara su mandato, y anunciaron la formación de una nueva junta de gobierno.

El gobierno institucional de las fuerzas armadas, 1962-1963

A diferencia de los anteriores golpes personalistas de Sánchez Cerro en 1931 y Odría en 1948, esta vez se instaló un gobierno militar «institucional», estando cada rama de las fuerzas armadas representada en una junta militar. Dirigida por el general Ricardo Pérez Godoy, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, esta nueva junta declaró anuladas las elecciones del 10 de junio. También suspendió las garantías constitucionales por treinta días y declaró un límite de un año a su mandato, luego de lo cual convocaría a nuevas elecciones y retornaría a

los cuarteles. La reacción pública al golpe fue mayormente apática y los partidos políticos permanecieron inactivos.

El golpe de 1962 constituyó la primera manifestación de lo que Stepan (1978) designó como el «nuevo profesionalismo» de las fuerzas armadas, que vinculaba la seguridad interna con el desarrollo nacional. También expresaba la magnitud de la antipatía que los militares sentían frente a Haya y al APRA, tan fuerte que estaban dispuestos a asumir el control del gobierno debido a los resultados electorales. Resulta interesante constatar que la motivación de los militares para su postura antiaprista había girado 180 grados en años recientes. El tradicional temor al radicalismo del APRA del conservador *stablishment* militar, había cedido su lugar a la preocupación de los oficiales reformistas de que un partido ahora abiertamente conservador (como lo evidenciaba su convivencia con la derecha) bloqueara las reformas requeridas para producir el desarrollo nacional efectivo, necesario para fortalecer la seguridad interna. Por lo tanto, el nuevo gobierno militar procedió a iniciar cautelosamente una modesta serie de reformas diseñadas para hacer frente a los crecientes problemas sociales que el país enfrentaba al comenzar la década de 1960.

Inicialmente, los Estados Unidos, que habían respaldado la candidatura de Haya, mostraron su insatisfacción por la interrupción del gobierno democrático rompiendo relaciones diplomáticas y suspendiendo toda asistencia, con excepción de la ayuda humanitaria. Sin embargo, renuente a poner en peligro las inversiones estadounidenses que sumaban $850 millones, la administración Kennedy cedió y reconoció a la Junta el 17 de agosto a cambio de la restauración de las garantías constitucionales y la programación de elecciones libres para el siguiente mes de junio.

Durante su año en el poder, el nuevo gobierno militar mostró lo que algunos analistas han calificado como tendencias «nasseristas», aludiendo a su inclinación reformista que le impulsaba a hacer frente a los problemas de la pobreza y el subdesarrollo. Otros han destacado las formas relativamente suaves de represión instituidas por la Junta, la cual describieron como una «dictablanda», por oposición a la más tradicional «dictadura». Una de sus primeras reformas, basada en un amplio consenso entre los militares, fue la creación del Instituto Nacional de Planificación, cuyo objetivo fundamental era proyectar el desarrollo nacional. La junta también anunció un programa de vivienda para aliviar las deprimidas condiciones de vida de los pobres urbanos de Lima.

Resulta tal vez más significativo el hecho de que el gobierno emprendiera por vez primera un programa de reforma agraria en La Convención (Cuzco), por modesto que fuera. Se anunció un proyecto piloto de tres años según el cual 14.000 colonos recibirían títulos de propiedad a cambio de diversas formas de pago de largo plazo. Veintitrés haciendas serían asimismo expropiadas o adquiridas por el gobierno

y redistribuidas, compensándose a los dueños. Sin embargo, cuando los militares dejaron el poder al año siguiente, solamente una hacienda había sido realmente expropiada y un pequeño número de colonos había recibido títulos.

Aunque la situación en La Convención se apaciguó, en diciembre estallaron unos sangrientos motines de trabajadores en las refinerías de cobre de La Oroya y en una hacienda azucarera de la costa norte, cerca de Chiclayo. Estos disturbios fueron rápidamente reprimidos por la policía, pero no antes de que se produjesen varias muertes y millones de dólares de daños a equipos, instalaciones y cultivos. La Junta culpó del estallido a «elementos comunistas» y ordenó un arresto masivo de más de ochocientos supuestos «izquierdistas» (apristas inclusive) la noche del 4 de enero. Sin embargo, fueron pocas las evidencias que presentó para respaldar sus acusaciones y la mayoría de los prisioneros fueron liberados en unos cuantos meses.

Poco después de esta represión —un indicio más de la sensibilidad general de los militares a las amenazas de la izquierda—, el gobierno emprendió un abrupto giro a la derecha. En la madrugada del 3 de marzo, Pérez Godoy, jefe de la Junta, fue expulsado a la fuerza del palacio presidencial bajo el pretexto del caudillismo. Le reemplazó el general Nicolás Lindley López, un integrante más conservador de la Junta. El «golpe dentro del golpe» mostró una vez más las profundas fisuras ideológicas que dividían las fuerzas armadas; ellas no solamente reflejaban las divisiones de la sociedad en general sino que seguían minando la unidad institucional.

El país se aprestaba ahora para las venideras elecciones de junio que iban tomando cuerpo como una repetición de las de 1962, con Haya, Odría y Belaunde nuevamente como los candidatos principales. Lo que había cambiado en el año de gobierno militar fue la creciente percepción de que la hora de una reforma agraria había llegado inexorablemente. Para comenzar, la amenaza de la Revolución cubana convenció a muchos sectores progresistas de la élite terrateniente de que la reforma podía prevenir la revolución. Esta era la receta propugnada por la Alianza Para el Progreso, el programa hemisférico de reforma diseñado por la administración Kennedy en 1961 y que los Estados Unidos promovían con fuerza por toda América Latina. Resulta significativo que los principales candidatos presidenciales propusieran algún tipo de reforma agraria

Para Belaunde la cuestión tenía un atractivo político particular. El arquitecto había orientado su campaña hacia el campo al advertir la necesidad de ampliar su caudal electoral más allá de los nuevos sectores medios y al notar que un nuevo electorado iba surgiendo en el sector campesino de la sierra. Belaunde visitó cientos de comunidades en la serranía, prestando atención —la primera vez que un candidato presidencial hacía algo así— a este nuevo bloque electoral y prometiendo a su población la reforma agraria, escuelas y otros tipos de asistencia desarrollista de base comunal. El joven arquitecto también apuntaló sus posibilidades formando una alianza estratégica con el pequeño pero influyente Partido Demócrata Cristiano

(PDC). Fuerte defensor de la reforma agraria, el PDC aceptó no presentar su propio candidato y respaldar más bien a Belaunde. A cambio, éste prometió que un integrante del partido encabezaría el Ministerio de Agricultura y la oficina de reforma agraria de su nuevo gobierno.

Belaunde se benefició también con el respaldo de la izquierda, buena parte de cuyos líderes seguían en la cárcel, motivo por el cual sólo pudo presentar un candidato insulso. Los militares por su parte seguían a favor de Belaunde en la medida en que representaba una alternativa a Haya y al APRA, y que asumiría con seguridad su programa de reforma gradual, dirigido por civiles. Con más de cien mil nuevos votos del PDC, la izquierda y los bastiones campesinos en el sur, Belaunde logró una estrecha victoria alcanzando el 36,2 por ciento de la votación, contra el 34,4 por ciento de Haya y el 25,5 de Odría. Sin embargo, su partido, Acción Popular, no logró ganar una mayoría en el congreso, lo cual abrió el camino a una alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odriísta del ex dictador, con el potencial ominoso de bloquear las reformas del nuevo presidente y frustrar las expectativas populares de cambio.

Capítulo XI

De la reforma a la revolución desde arriba, 1963-1975

FERNANDO BELAUNDE TERRY heredó las riendas de un país que había vivido un periodo de crecimiento y cambios sin precedentes, pero que aún enfrentaba enormes desigualdades y problemas sociales. Durante la década de 1950 y a comienzos de la de 1960, la población peruana había crecido a 9,9 millones (un setenta y cinco por ciento), el producto nacional bruto (PNB) se incrementó en 180 por ciento, las exportaciones se cuadruplicaron y la deuda nacional aumentó diez veces. Con todo, a pesar de contar con un gobierno relativamente estable, una tasa de inflación baja pero en vías de aceleración, y un flujo sustancial de inversión extranjera (el mayor de América Latina con la única excepción de México), el *boom* de las exportaciones de las últimas dos décadas que había alcanzado su punto máximo en 1962, comenzó a descender en adelante. Y si bien el sector manufacturero mostraba señales de crecimiento, una década de estancamiento —y tal vez de decadencia— en la producción agrícola doméstica estaba forzando al país a importar cada año millones de dólares de alimentos, ello sin mencionar su contribución altorrente emigratorio del campo a Lima y otras ciudades. En el largo plazo, el gasto en la importación de alimentos subió de $40 millones en 1940 a $134 millones en 1965.

El Perú, en términos socioeconómicos, tenía a comienzos de la década de 1960, tal vez la peor distribución del ingreso y la más alta concentración de la riqueza de todos los países de América del Sur. Por ejemplo, el cinco por ciento de la población más rica recibía un cuarenta y ocho por ciento del ingreso nacional; más notable resultaba el hecho de que el diecinueve por ciento se concentrase en el uno por ciento de la población. En cambio, los dos deciles más pobres apenas se repartían el 2,5 por ciento del total.

Esta disparidad de la riqueza y el ingreso se plasmaba también en el ámbito geográfico. En 1961, el ingreso promedio per cápita era de $280 al año en la

sierra sur, pero de $870 ($1.230 si incluimos las propiedades) en Lima, con grandes variaciones dentro de cada región. Sin embargo, la cifra anterior incluye un sesgo urbano, que de eliminarse mostraría que el cuartil más pobre de la sierra —fundamentalmente los pequeños agricultores de subsistencia (un ochenta por ciento del total)— ganaba entre $40 y $120 al año. Estos agricultores eran fundamentalmente campesinos indios quechua y aimara-hablantes de los cuales el setenta por ciento era analfabeto y que en promedio se ganaban la vida con 0,9 hectáreas, tres cabezas de ganado y unos cuantos otros animales, complementados con su desempeño como mano de obra estacional.

Esta masa de pobres rurales, falsamente pintada por las estadísticas como unificada y cohesiva, estaba, por el contrario, sumamente fragmentada; se encontraba dispersa por el campo, viviendo en haciendas, aldeas y comunidades, o independientemente como agricultores de subsistencia. Podemos atisbar a estos pobres del campo como incrustados en una sociedad que constaba de «múltiples pirámides sociales pequeñas e independientes, cada una de ellas con una mezcla distinta de los que eran relativamente ricos y pobres» (Webb 1977: 13). Lo que les mantuvo fragmentados y atomizados a lo largo del tiempo fue un proceso de dominación social basado en una serie de relaciones jerárquicas verticales con los hacendados locales (los gamonales), quienes ejercían su influencia, poder y autoridad fundamentalmente a través de mecanismos tradicionales como el paternalismo y el clientelismo.

Por ejemplo, los peones de hacienda estaban ligados a los hacendados por el clientelismo, compitiendo cada uno de ellos por los favores del patrón y por su protección. Los terratenientes ofrecían su «protección» de diversas formas, principalmente frente al Estado, que imponía impuestos (la «contribución a la república»), levas laborales (la ley vial), o reclutaba arbitrariamente campesinos para el servicio militar. De este modo, la clase gamonal, que también controlaba los gobiernos locales, ejercía un fuerte control social sobre su fuerza de trabajo rural.

La élite terrateniente tenía, claro está, mucho que proteger, dado que según el índice Gini de distribución de la tierra, su control del sistema de tenencia de la misma era el más extenso de cincuenta y cuatro países examinados en 1961. Según un estimado, setecientos hacendados poseían aproximadamente una tercera parte de los campos productivos del país. En el otro extremo de la escala social, un cuarto de millón de familias —el veinte por ciento de todas las del campo— laboraba en las modernas haciendas costeñas. Otro veintidós por ciento (275.000) eran pequeños agricultores cuyos ingresos cubrían toda la gama, desde aquellos relativamente ricos a los que eran pobres. Alrededor del cuarenta por ciento de la población vivía en comunidades que tenían menos de una cuarta parte de las tierras productivas del país. Los niveles de ingreso de todas estas familias rurales variaban enormemente. Aquellas que vivían en las ricas haciendas costeñas ganaban el doble

que sus contrapartes en las comunidades de la sierra. En consecuencia muchas de estas últimas —tal vez unas 250.000— buscaban trabajo estacional y temporal (como «eventuales») en las haciendas.

La tierra era, claro está, un recurso extremadamente escaso para la inmensa mayoría de los campesinos. McClintock (1998: 168) estima que antes de la reforma agraria, más del treinta por ciento de las familias de los agricultores no tenían tierras (jornaleros, aparceros y trabajadores migrantes). La relación hombre-tierra en Perú en 1960 era de 21 hectáreas de tierras o pastizales por campesino, la mitad de la de los vecinos países de Bolivia, Chile y Ecuador, y una de las más bajas del mundo. Como la agricultura representaba el veintitrés por ciento del PNB del país y daba empleo al cincuenta y ocho por ciento de su población económicamente activa, es lógico que los aproximadamente setecientos hacendados más importantes se llevaran la parte del león del ingreso. Muchos de ellos ganaban hasta cien veces el ingreso de sus empleados.



Pastores de llamas en el altiplano sureño. Reproducido con permiso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

Si estas inmensas desigualdades rurales presentaban un enorme desafío a las reformas del nuevo gobierno de Belaunde, igual sucedía con la concentración de la riqueza y el poder en el sector moderno de la costa, simbolizada por Lima. Entre 1954 y 1959 el ingreso per cápita de la costa, por ejemplo, creció en cuatro por ciento, en tanto que el de la sierra descendió en siete por ciento. Lima, la capital, tenía en este momento 1,8 millones de habitantes, aproximadamente una quinta parte de la población total del país, y acaparaba alrededor del cuarenta por ciento del PNB. También era el hogar de una creciente clase media que constituía entre un quince y un veinticinco por ciento de la población total y que, como mostrase Parker (1998), se definía o identificaba a sí misma principalmente en esta categoría social. Sus filas crecieron desde la Segunda Guerra Mundial gracias a la urbanización, la expansión del Estado y el alza continua de las exportaciones, recibiendo en general, según Webb, alrededor del 11,4 por ciento del ingreso nacional.

En general, la clase media tenía características similares de raza, nivel educativo, ubicación residencial, ingreso, ocupación, estilo de vida y patrones de consumo. Asimismo, existía bastante movilidad ascendente (y descendente) entre las clases debido al desarrollo general de la economía y un número relativamente grande de inmigrantes (a juzgar por los apellidos extranjeros entre la élite) llegaba a la cima. Debajo de los peldaños superior y medio de la escala social se hallaba una clase trabajadora considerable y organizada, juntamente con la masa siempre en expansión de los inmigrantes recientes que poblaban las barriadas que rodeaban la ciudad.

En virtud a su elección, Belaunde ocupó ahora el sillón presidencial en la cima de esta jerarquía sociopolítica sumamente problemática. De inmediato tuvo que hacer frente a una segunda oleada de tomas de tierra por parte de los campesinos, quienes creían llegado el momento de la reforma agraria. Después de todo, ¿acaso el Presidente no había hecho campaña en la sierra prometiéndola? De modo que en cuanto el nuevo mandatario asumió su cargo, muchos campesinos asumieron automáticamente que tenían derecho a «ocupar» las tierras en disputa. Esgrimiendo a menudo títulos coloniales, marchaban sobre las tierras disputadas de las haciendas en grupos que variaban de un puñado a varios millares, y colocaban banderas peruanas para indicar que estaban retomando campos que eran suyos por derecho. El uso de las banderas sirvió para conseguir respaldo y daba un aura de legitimidad y nacionalismo a estas invasiones.

Significativamente, los comuneros se vieron asistidos en sus esfuerzos por los sindicatos rurales y por las federaciones campesinas que proliferaron por toda la sierra en el transcurso de esta segunda oleada de tomas de tierra. En efecto, los contactos más amplios con los estudiantes, abogados, sindicatos y otros grupos urbanos permitieron al campesinado articular mejor su movimiento y abrieron canales hacia el sistema político a través de estructuras formales ya existentes.

Una de estas asociaciones fue la Federación Nacional de Campesinos Peruanos (FENCAP) controlada por el aprismo, que en la década de 1930 comenzó a organizar a los trabajadores azucareros y a los pequeños agricultores, muchos de los cuales habían emigrado de la sierra. La FENCAP expandió sus actividades en la serranía a comienzos de la década de 1960, buscando capitalizar las movilizaciones campesinas que allí tenían lugar.

Los nuevos sindicatos campesinos dirigieron también sus actividades a la población de colonos, aislados y encerrados en el sistema de haciendas. Al igual que los comuneros, el objetivo de los colonos era la tierra, ya fuera mediante la recuperación de campos usurpados por las haciendas en el proceso de proletarización o a través de la distribución total de las tierras de los latifundios. Además, los sindicatos de colonos exigían la eliminación de los tributos serviles y los servicios que los hacendados demandaban de sus campesinos. Pedían que se reemplazasen estas «reliquias feudales» por salarios y horas de trabajo regulares, además de la creación de escuelas, instalaciones médicas y otros servicios. En otras palabras, las demandas acostumbradas de los sindicatos y los trabajadores del sector industrial, fueron presentadas ahora en el campo. Para imponer estos cambios, los colonos y sus jefes recurrieron al uso igualmente novedoso de las huelgas, una herramienta que Hugo Blanco había utilizado eficazmente en La Convención unos cuantos años antes, pero que hasta ese entonces era virtualmente desconocida en la sierra.

Sin embargo, el movimiento de los comuneros y el de los colonos no lograron unirse en un solo esfuerzo u organización concertado a pesar de los intentos hechos por la Confederación de Campesinos del Perú, fundada en 1947. El problema fundamental era que los dos grupos tenían intereses rivales ya que ambos reclamaban las mismas tierras de las haciendas. De este modo, los comuneros reclamaban la propiedad anterior de las áreas disputadas o usurpadas, mientras que los colonos reclamaban el derecho a los mismos campos en tanto trabajadores de los latifundios.

Podemos dividir la segunda ola de movilizaciones campesinas geográfica y cronológicamente en dos partes, la primera de ellas en la sierra central y norte, sobre todo Pasco y Junín, y la segunda en Cuzco y el sur. La respuesta de Belaunde al nuevo brote de descontento campesino fue inicialmente conmiserativa y conciliadora. En septiembre presentó al Congreso una nueva, larga y complicada ley de reforma agraria; ella incluía 240 artículos distintos diseñados para satisfacer las demandas de tierra de los campesinos, así como mantener la producción agrícola. Entre los principales rasgos de la propuesta estaban la expropiación compensada (con bonos de largo plazo), la formación de cooperativas y la asistencia técnica y financiera del gobierno. Significativamente, la ley sólo afectaba en forma marginal a las grandes haciendas azucareras de la costa, cuya eficiencia y fuerza laboral

relativamente mejor pagada eran consideradas esenciales, particularmente por el APRA, para el bienestar de la economía.

La reforma agraria propuesta no fue bien recibida por el Congreso, dominado por el APRA y la Unión Nacional Odriísta. La Coalición replicó con su propia ley diluida, que incluía la compensación en efectivo, ninguna restricción al tamaño de las posesiones de una hacienda, enfatizaba los proyectos de colonización y excluía íntegramente a las haciendas azucareras controladas por el APRA. En el transcurso de los siguientes ocho meses, el Congreso discutió en torno al curso de la reforma. Cuando finalmente se aprobó una versión de compromiso en mayo, que excluía a las grandes haciendas costeñas, el premier Óscar Trelles declaró que la reforma había «nacido muerta» por su escasa consistencia, el abuso de trámites burocráticos y la severa escasez de fondos. Durante los prolongados y encendidos debates sobre la reforma, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) acusó al gobierno de abandonar su compromiso con la reforma y rompió su alianza con Acción Popular. Este hecho tuvo mayores ramificaciones políticas para el gobierno.

Entretanto, mientras la ley se encontraba entrampada en el Congreso, los acontecimientos ocurridos en la sierra obligaron a Belaunde a decretar la expropiación de cien mil hectáreas de tierras de haciendas en Pasco y Junín. Por primera vez, el gobierno se incorporó también a las negociaciones con los grupos campesinos, cuyo poder electoral y capacidad de perturbar el sistema le forzaron a sentarse en la mesa de negociación. Este reconocimiento del gobierno del poder del campesinado marcó un hito histórico en su lucha.

Sin embargo, cuando las tomas de tierra y huelgas se extendieron al Cuzco y al sur, el nuevo gobierno tomó una posición más dura. Mientras su programa de reformas seguía empantanado en el Congreso, Belaunde envió tropas especiales de asalto de la Guardia Civil a la región para que sofocaran el movimiento. Siguieron varios choques sangrientos, uno de ellos en el pueblo de Ongoy (Apurímac) en octubre, y otro en Sicuani (Cuzco) en febrero de 1964. Cuando por fin la diluida ley de reforma agraria fue aprobada y comenzó a amainar la oleada de tomas de tierra y huelgas, más de trescientos campesinos habían muerto en el sur.

El resultado final de la primera ley de reforma agraria comprehensiva en la historia del Perú fue decepcionante. Según la administración belaundista, durante los siguientes cuatro años fueron expropiados 873.000 hectáreas de tierra, beneficiando a 12.000 familias, en tanto que el subsiguiente régimen velasquista dio la cifra de 783.000 hectáreas, que beneficiaron a 7.224 familias (Masterson 1991: 209; 236, n. 26). En cualquiera de los dos casos, el total representa apenas el tres por ciento de las tierras que podían ser expropiadas y unos cuantos miles de familias de por lo menos un millón de ellas. Paradójicamente, los beneficiarios de la ley resultaron ser los campesinos que se aferraron tenazmente a las tierras que tomaron durante los primeros dos años del gobierno de Belaunde.

Mientras los esfuerzos oficiales por efectuar una reforma agraria se veían mayormente frustrados gracias a la oposición de los círculos oligárquicos en alianza con el APRA (la Coalición), comenzó a producirse una versión «privada» o de facto de la distribución de tierras en ciertas partes de la sierra. Presionados por la movilización campesina e incapaces o sin disposición para resistirla, muchos terratenientes individuales prefirieron cada vez más frecuentemente vender sus propiedades, ya fuera *in toto* o mediante su parcelación en lotes individuales. Después de esta «reforma agraria» privada, las tierras antes arrendadas se convirtieron en propiedad personal de los compradores campesinos y en consecuencia, el número y porcentaje de minifundistas comenzó a crecer sustancialmente en la sierra.

Esta forma de distribución privada de tierras tuvo un impacto especial en la Iglesia cuyas órdenes religiosas habían sido tradicionalmente las más grandes terratenientes del país. Buscando evitar una confrontación con los campesinos e influida por un espíritu cada vez más profundo de reforma, la arquidiócesis del Cuzco, por ejemplo, emitió una carta pastoral en 1963 que ordenaba la parcelación de las haciendas de la Iglesia en términos favorables al campesinado local. Según Burga y Flores-Galindo (1980: 92-94), esta «reforma agraria» eclesiástica no sólo puso fin al poder tradicional de la Iglesia como terrateniente, sino que sirvió además para romper la alianza histórica que la unía a la clase gamonal en el interés común de controlar al campesinado de la sierra.

No obstante estos esfuerzos, la cuestión de la reforma agria quedó, en general, entrampada en una selva de trámites burocráticos y otros obstáculos. Entretanto, el problema siguió ardiendo en medio de la represión gubernamental. En este contexto, un movimiento guerrillero estalló repentinamente en 1965. Sus orígenes se remontaban a las convulsiones provocadas en la izquierda peruana por la Revolución cubana de 1959, la ruptura chino-soviética de 1960 y el surgimiento de una nueva generación de estudiantes radicalizados.

Efectivamente, la rápida expansión de la educación desde mediados de la década de 1950 había producido un gran número de estudiantes en todo nivel. El crecimiento de la educación superior fue particularmente asombroso. Por ejemplo, en 1955 solamente había seis universidades en el país, pero su número aumentó drásticamente a treinta a finales del gobierno de Belaunde, en 1968. Entre 1956 y 1962 se duplicó la cantidad de universitarios, pasando de poco más de 20.000 a casi 41.000, volviendo a duplicarse la cifra a 94.000 en 1968. Al final del mandato de Belaunde, el gasto educativo había alcanzado casi el cinco por ciento del PNB y el veinticinco por ciento del presupuesto nacional, situando al Perú entre los países latinoamericanos con un mayor nivel de gasto educativo en el periodo 1960-1968.

Previsiblemente, la extracción social de los estudiantes universitarios se amplió considerablemente. En 1966, el ex rector de San Marcos comentaba que

«la mayoría de los alumnos [de esta universidad] —más del sesenta y cinco por ciento— son de las clases media baja y trabajadora en comparación con lo que era hace veinte años, cuando el noventa y cinco por ciento de los alumnos provenía de hogares de clase media y clase media alta». Muchos alumnos de esta universidad habían llegado de las provincias y, al igual que otros, enfrentaban unas limitadas posibilidades profesionales al graduarse, así como los fuertes prejuicios culturales y étnicos prevalecientes entre la élite limeña.

Cuando la población estudiantil eclosionaba en la década de 1960 y las frustraciones de los universitarios crecían, el éxito repentino e inesperado de la Revolución cubana, así como la fragmentación del comunismo internacional, captaron rápidamente su atención e imaginación. Estos sucesos quebraron también a la vieja izquierda, que comenzó a dividirse en una serie de nuevos partidos revolucionarios que abrazaban diversas ideologías y programas, desde el maoísmo al castrismo. Por ejemplo, tras la ruptura chino-soviética, el Partido Comunista del Perú (PCP) se dividió y la mayor parte de su ala joven abandonó la égida de Moscú para formar el PCP Bandera Roja, de orientación maoísta. Bandera Roja volvió a dividirse, formando el grueso de sus integrantes el PCP Patria Roja, en tanto que quienes permanecieron en él se aliaron con los comunistas albaneses. Por último, un tercer grupo, situado en Ayacucho, formó el PCP Sendero Luminoso, que abrazaba una versión fundamentalista del maoísmo.

Entretanto, el ala izquierda del APRA, frustrada por el giro de Haya hacia la derecha e inspirada por la Revolución cubana, rompió con el partido en 1960 y formó el APRA rebelde, que posteriormente se convirtió en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Su líder era Luis de la Puente Uceda, el hijo de un hacendado trujillano y un pariente lejano de Haya de la Torre, que había sido un miembro militante y dinámico del movimiento de las Juventudes Apristas. De la Puente viajó a La Habana poco después de que Castro llegara al poder en 1959 para asistir a una conferencia y, según Manrique (1995: 305), allí conoció a Hilda Gadea, una ex dirigente de las juventudes apristas que se había casado con el Che Guevara. A su regreso al Perú, se graduó en derecho en la Universidad de Trujillo, con una tesis titulada *La reforma del agro peruano* (1966).

Pronto, él y sus camaradas del MIR estaban listos para emprender un movimiento guerrillero mediante el cual probar la teoría insurreccional del foco, desarrollada a partir de la experiencia de Castro en la Sierra Maestra. Este planteamiento, expuesto en 1960 por el Che Guevara, contradecía la ortodoxia comunista largo tiempo defendida, afirmando que «no siempre es necesario esperar hasta que existan todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas» (citado en Gott 1971: 381); esto es, una pequeña vanguardia guerrillera puede ganarse el respaldo de los campesinos en un área aislada y desde allí iniciar una guerra revolucionaria exitosa.

En 1965, De la Puente y el MIR establecieron su cuartel general en la meseta de Mesa Pelada, en la cordillera oriental de los Andes, cerca del Cuzco y no lejos de La Convención, uniéndoseles otros jefes guerrilleros para planear las operaciones conjuntas de otros dos grupos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado por Héctor Béjar y con vínculos con el PCP, y Túpac Amaru, una facción del MIR dirigida por Guillermo Lobatón. Dos años antes, el ELN había enviado un pequeño grupo de jóvenes intelectuales que retornaban de Cuba para que ayudaran a Hugo Blanco en La Convención. El destacamento incluía a Javier Heraud, un poeta laureado de veintiún años de edad, proveniente de una familia limeña de clase alta. Cruzando la frontera desde Bolivia, el puñado de aspirantes a revolucionarios arribó el 15 de mayo a Puerto Maldonado, en Madre de Dios, pero fueron detectados rápidamente por las autoridades y arrestados. Heraud y un compañero lograron huir, pero fueron capturados y muertos al día siguiente por una cuadrilla de policías y terratenientes locales.

Desafortunadamente para los «foquistas» peruanos de Mesa Pelada, las fuerzas armadas peruanas estaban más que preparadas para hacer frente al inminente desafío guerrillero. Las tácticas de contrainsurgencia no eran nada nuevo para el ejército y se remontaban a la influencia de las misiones de entrenamiento francesas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, que prepararon a los oficiales a partir de sus propias experiencias coloniales. Las fuerzas armadas aprovecharon esa preparación cuando reaccionaron rápidamente a la victoria guerrillera de Castro en 1959. Además del entrenamiento antisubversivo desarrollado en la Escuela Superior de Guerra y en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), se envió a oficiales a la Escuela de las Américas de los EE. UU., en la zona del Canal de Panamá, así como al Army Special Warfare Center and School (Centro y Escuela del Ejército de Guerra Especial) en Fort Bragg, Carolina del Norte. De hecho, entre 1949 y 1964, 805 oficiales peruanos fueron preparados en la Escuela de las Américas que, después de 1960, se orientó cada vez más a las tácticas de contrainsurgencia. Según Masterson (1991: 212), a comienzos de la década de 1960, existía dentro del ejército una unidad de contrainsurgencia plenamente equipada y lista para responder al brote guerrillero dirigido por De la Puente.

Así, cuando las guerrillas efectuaron su primera acción en junio de 1965, las fuerzas armadas reaccionaron rápida y eficazmente al reto. En seis meses, los tres focos guerrilleros habían sido derrotados en una masiva campaña que costó la vida no sólo a De la Puente y a Lobatón, sino también a más de ocho mil campesinos indios, víctimas de estos enfrentamientos. La derrota de la insurgencia tuvo tanto que ver con las severas debilidades de las guerrillas, como con la capacidad contrainsurgente de las fuerzas armadas.

Fuertes discrepancias internas dividieron a los grupos que componían el movimiento guerrillero. El MIR y el ELN jamás habían coincidido en cuestiones

ideológicas o tácticas y el PCP de orientación moscovita, reprimido duramente por el gobierno militar en 1962-1963, jamás comprometió sus recursos en la empresa. Sin mucho respaldo urbano fuera de unos cuantos atentados con explosivos y robos a bancos, las guerrillas, formadas principalmente por jóvenes de clase media de las ciudades, debían además enfrentar la barrera lingüística y cultural que les separaba de la masa de campesinos quechuahablantes a los cuales intentaban instigar. La falta de respaldo campesino podría explicarse también por la persistente esperanza que este sector tenía de conseguir una reforma agraria estatal largamente anhelada, que todavía permitía vislumbrar la posibilidad de un cambio pacífico antes que violento. Otros errores tácticos, tales como el establecimiento de un centro de mando fijo en Mesa Pelada, condenaron a la empresa al fracaso desde el principio.

Los efectos inmediatos que la propagación del descontento social tuvo sobre la producción agrícola en la década de 1960 fueron, por cierto, sumamente negativos. Para empezar, la expectativa de que algún tipo de reforma agraria era inevitable, ya fuera legal o de facto, provocó que los hacendados comenzaran a limitar su inversión y sus operaciones. La reacción de un hacendado cajamarquino en 1963 fue típica:

> La Ley de Reforma Agraria pronto será aprobada y ella ciertamente afectará [la hacienda] Udima. Por lo tanto debemos planear dedicar toda nuestra atención en los años en que la empresa todavía pueda hacerlo, a extraer el máximo excedente posible del colonaje y del ganado de la hacienda [...] Debemos eliminar los establos y la fábrica de quesos, los alfalfares, los proyectos de recuperación de tierras, etc., la compra de concentrados alimenticios y todas las actividades que obligan a la hacienda a gastar dinero que jamás se convierte en ganancias. (Citado en Thorp y Bertram 1978: 283)

Merced a razonamientos similares, la agricultura entró en la década de 1960 en una etapa de fuerte caída por el descenso en las inversiones, la descapitalización y la transferencia de activos a otros sectores más rentables de la economía, tales como manufacturas, construcción y finanzas. La producción per cápita de los cultivos alimenticios prácticamente se estancó a lo largo de la década, subiendo de un índice de 100 en 1961 a apenas 103 en 1967, y cayendo luego a un mínimo de 99 en 1969, cuando tuvo lugar la arrolladora reforma agraria impulsada por los militares. El hecho de que en el largo plazo, una reforma agraria propiciaría una agricultura más eficiente, hizo poco para aliviar esta falta de inversión en el corto plazo.

Si bien el panorama en el sector agrícola resultaba desalentador en esta década, el proceso de industrialización estaba acelerándose. Podemos rastrear la industrialización en América Latina desde a la década de 1950 y aun antes, cuando muchos gobiernos latinoamericanos comenzaron a aplicar políticas de

industrialización por sustitución de importaciones (ISI) como un medio a través del cual incrementar tanto el empleo doméstico, en particular en las ciudades que estaban en rápido crecimiento, como el crecimiento económico, al mismo tiempo que se prevenía el descontento social. El Perú se resistió a las políticas de ISI hasta más tarde, prefiriendo seguir fiel a su gastada estrategia exportadora de crecimiento económico. Sin embargo, la recesión de 1958, las decrecientes oportunidades de inversión en las exportaciones (fuera de la harina de pescado) y la devaluación de la moneda (una protección arancelaria de facto) en ese mismo año, sirvieron para estimular el tránsito a una política económica basada en la ISI.

Al año siguiente, el congreso aprobó finalmente la Ley de Promoción Industrial de Prado (presentada en 1956), que daba generosos incentivos arancelarios y tributarios a las empresas industriales. Los inversionistas domésticos y extranjeros trasladaron su atención al sector manufacturero una vez que la economía se recuperó y el consumo interno comenzó a crecer. Una mayor protección arancelaria se alcanzó en el gobierno desarrollista de Belaunde, que decretó mayores incrementos a las tasas en 1964 y 1967.

Estas medidas ayudaron a estimular la expansión industrial y a diversificar la economía en la década de 1960. Sin embargo, por diversas razones esta expansión industrial no fue integradora ni autosostenida; fue sumamente dependiente del capital y el *know-how* extranjeros y, lo que es más importante, no logró atraer suficiente capital doméstico y con ello mejorar la posición de una «burguesía industrial». Las compañías extranjeras resultaron ser las mayores beneficiarias, triplicando sus inversiones en las manufacturas entre 1960 y 1966.

Aunque el desarrollo industrial y la reforma agraria eran elementos importantes en la estrategia desarrollista de Belaunde, la pieza central de su programa era la construcción de una gran carretera de norte a sur a lo largo de la margen oriental de los Andes. Su finalidad era abrir la región amazónica a la colonización y el desarrollo, un sueño largamente anhelado por los peruanos desde la independencia e incluso antes. Tal como fue concebida, la carretera recorrería mil millas de terreno a lo largo de la ceja de selva y generaría ramales subsidiarios al este, bajando por las laderas al vasto bosque amazónico, y al oeste, a la sierra y la costa.

Como arquitecto, el proyecto era cautivante para Belaunde y a lo largo de los años se convirtió en una especie de obsesión para él, incluso durante su segundo gobierno, en la década de 1980. Los visitantes de Palacio de Gobierno (este autor inclusive) eran invariablemente llevados a una sala donde se encontraba, elaboradamente dispuesto, un modelo del proyecto con un código de colores para las distintas fases; el arquitecto-presidente iniciaba entonces una animada conferencia, puntero en mano, acerca de los méritos, problemas y avances de la carretera.

Belaunde dio preferencia a este proyecto sobre todos los demás de su programa, incluyendo el de la reforma agraria que también apoyó. En efecto, abrir un acceso a nuevas tierras en el Amazonas era políticamente más fácil que arrancárselas a la atrincherada, aunque cada vez más débil, clase gamonal. Políticamente, la Marginal tenía otras ventajas tales como constituir un estímulo al empleo y un imán para el financiamiento internacional de las agencias de asistencia. El proyecto también era fácil de vender al público y a medida que fuera avanzando rendiría presumiblemente un considerable dividendo político al arquitecto-presidente. Por último, encajaba bien con la nueva doctrina de seguridad nacional de los militares que privilegiaba la adopción de acciones cívicas y del desarrollismo.

La escala y el costo de la Marginal, cuya ejecución se estimó tomaría más de veinticinco años, sugerían asimismo que se iniciaba un periodo de expansión del gasto fiscal sin precedentes desde la era de Leguía, en la década de 1920. De hecho, el gobierno de Belaunde incrementó fuertemente el gasto gubernamental no sólo en obras públicas, sino también en programas sociales tales como educación, salud pública y vivienda. El resultado, según Cotler (1991: 461), fue un aumento del gasto de 11,5 por ciento del producto bruto interno (PBI) —una de las cifras más bajas en América Latina en ese entonces— a dieciséis por ciento en 1968 —una de las más altas en la región—. Y como la Coalición bloqueó exitosamente los esfuerzos por subir los impuestos con que pagar tales gastos, el gobierno recurrió a un gasto deficitario, que se incrementó en noventa y cinco por ciento cada año entre 1965 y 1967.

Esta expansión del gobierno constituyó un giro considerable para un país que contaba con uno de los sectores estatales más pequeños de Latinoamérica en las décadas de 1940 y 1950, e incluso antes. Anteriormente, el Estado oligárquico había concentrado el gasto principalmente en la defensa nacional y en el mantenimiento del orden interno (la policía). Por otro lado, el gasto redistributivo estatal fue relativamente insignificante hasta comienzos de la década de 1940, e incluso entonces, en el rubro conjunto de salud y educación, sumó un extremadamente modesto 3,8 por ciento del PNB en 1958. Esto era bastante menos que el promedio de 5,5 por ciento que tenían muchos países pobres comparables con el Perú en ese mismo año.

La educación es un caso destacable. En 1950, el gasto en el sector educativo sumaba únicamente el 1,6 por ciento del PNB y el catorce por ciento del presupuesto. Una década más tarde, los porcentajes habían subido modestamente a 2,6 y 18,3 por ciento respectivamente, concentrándose el gasto durante el gobierno de Prado fundamentalmente, como vimos, en la expansión de la matrícula a nivel secundario y universitario. Las tasas de analfabetismo entre la población de más de quince años disminuyó de cincuenta y tres a treinta y nueve por ciento. Para

1960, el crecimiento económico de la posguerra, la expansión concomitante de las clases medias y el incremento de la presión de otros grupos (campesinos, migrantes y sindicatos) había generado una fuerte y creciente demanda pública de educación a todo nivel. Por ello, el gasto educativo pasó a ser uno de los rubros de crecimiento más rápido del gobierno de Belaunde.

Dejando de lado la política, el Presidente tecnocrático y de inclinación desarrollista, respaldado por sus aliados reformistas en las fuerzas armadas y los partidos políticos progresistas, creía que un sistema educativo ampliado sería la clave del progreso. Las universidades brindarían el capital humano calificado necesario para fomentar el desarrollo, mantener el crecimiento de la economía y mejorar, en general, la capacidad del gobierno. Por otro lado, nadie parecía prever que la economía no se expandiría con la suficiente rapidez como para crear suficientes empleos para el conjunto cada vez mayor de graduados. De hecho, esta situación se produjo justo cuando la economía se estancaba en la década de 1960, contribuyendo así a frustrar las expectativas, a la radicalización de los estudiantes y al giro hacia la izquierda del cuerpo político en las dos décadas siguientes.

Estas tendencias, juntamente con la crisis política y social cada vez más profunda del país, configuraron una nueva generación de artistas, escritores e investigadores que se vieron marcados también por la Revolución cubana y la Guerra Fría. Conocida como la Generación del 50, ésta saltó cada vez más al primer plano en las décadas de 1960 y 1970, y generó un notable florecimiento cultural protagonizado por una extraordinaria generación de poetas, según Higgins, (1987) sin parangón en ninguna otra parte de América Latina; científicos sociales que promovieron distintas disciplinas, como la arqueología (Luis Lumbreras), la antropología y la sociología (Julio Cotler y Aníbal Quijano), la historia (Pablo Macera, posteriormente Manuel Burga y Alberto Flores-Galindo) y la etnohistoria (Luis Millones, Franklin Pease G.Y.); músicos, dramaturgos y artistas (Fernando de Szyszlo y Armando Villegas); y lo más notable, escritores (Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, Manuel Scorza y Julio Ramón Ribeyro) cuyas obras de ficción llegaron a un gran público internacional por vez primera.

Aunque Belaunde logró lo que deseaba en el tema del gasto educativo a través del Congreso, no tuvo éxito en la mayoría de sus restantes iniciativas legislativas. Cooperación Popular, el sensato programa presidencial de autoayuda y desarrollo rural, modelado parcialmente en la Alianza para el Progreso, no recibía generalmente suficientes fondos del parlamento con el argumento de que incitaba a los campesinos a tomar las tierras. Ya señalé cómo el Congreso destruyó el programa de reforma agraria, de modo que pocas tierras fueron jamás redistribuidas al campesinado. Si bien estaba dispuesto a asignar fondos para sus propios programas partidarios, el parlamento dominado por la Coalición (sesenta y uno por ciento de las curules en la cámara de diputados y cincuenta y seis por ciento en el

senado) se negó sistemáticamente a elevar los impuestos para cubrir los crecientes gastos del gobierno. Además, continuamente daba un voto de «desconfianza» a los ministros de gobierno, lo que provocó la censura y al reemplazo de noventa y cuatro ministros en los cinco años del gobierno de Belaunde. Si a este cuadro de obstrucción parlamentaria le sumamos el todavía considerable poder que la oligarquía tenía para influir en la prensa, controlar el acceso al crédito y esgrimir el poder a través de asociaciones tales como la Sociedad Nacional Agraria (SNA), no sorprende que las fuerzas de la reforma que se fueron acumulando durante la década de 1960 se sintieran cada vez más frustradas y descontentas.

Virtualmente prisionero por lo que Haya denominaba el «primer poder» del Estado —el Congreso—, Belaunde recurrió a una política de gobierno «de la zanahoria y el garrote», que dependía de una represión selectiva aunque relativamente suave, al mismo tiempo que incrementaba liberalmente el gasto social. Sin embargo, los subsidios que favorecían la sustitución de importaciones y el consumo de alimentos, el creciente gasto en obras públicas como la Marginal y los nuevos proyectos de vivienda para la clase media urbana pusieron el presupuesto en rojo, al mismo tiempo que el volumen de las exportaciones, que había ido creciendo desde 1950, se estancó y las inversiones estadounidenses comenzaron a declinar. Al mismo tiempo, aumentaron las importaciones, financiadas a través del incremento de la deuda externa de $235 millones en 1963 (ocho por ciento del PNB) a $680 millones en 1968 (18 por ciento del PNB). Entretanto, el congreso, controlado por la oposición, se negó a aprobar una iniciativa gubernamental para reformar el sistema tributario e incrementar así los ingresos. Todo esto contribuyó al alza de la inflación, que promedió catorce por ciento entre 1964 y 1967, y fue aún más alta en el políticamente sensible sector alimenticio, que llegó a setenta por ciento en el mismo lapso. En septiembre de 1967, el deterioro de la situación económica forzó al presidente a devaluar el sol en cuarenta y cuatro por ciento, luego de haber dicho repetidas veces que no lo haría.

El fracaso de Belaunde en resolver la vieja disputa con la International Petroleum Company tuvo efectos similares o incluso más dañinos para las fortunas. La IPC virtualmente controlaba la industria petrolera del país, un componente vital de la economía y de la defensa nacional. Ella extraía el ochenta y cinco por ciento del petróleo peruano de sus campos en La Brea y Pariñas y en el de Lobitos, refinando al mismo tiempo el sesenta por ciento de la producción del país en sus instalaciones de Talara. Belaunde había enfatizado expresamente en su campaña la promesa de que lograría un rápido acuerdo negociado con la IPC en torno a los derechos de propiedad y a los impuestos atrasados. Sin embargo, cuatro años más tarde, la disputa seguía sin resolver, perjudicando el prestigio personal del presidente, irritando los sentimientos nacionalistas, minando las relaciones con los Estados Unidos y despertando la animosidad de las fuerzas armadas.

En una medida que se asemejaba a la nacionalización mexicana de la industria petrolera en 1938, Belaunde reclamó los derechos del subsuelo de los campos petrolíferos de la IPC y unas sustanciales reparaciones (diversamente estimadas, según Cotler [1991: VIII, p. 464], entre $200 y $600 millones) de impuestos impagos, considerados libres en el contrato original. Sin embargo, la posición legal de la IPC estaba sustentada en el acuerdo alcanzado en 1922 con el gobierno de Leguía (véase el capítulo 9), que no decía nada sobre los derechos del subsuelo. La oposición nacionalista a la compañía fue liderada por la familia Miró-Quesada, cuyo periódico *El Comercio* atacó persistentemente al gobierno de Prado por permitir que la IPC efectuara grandes incrementos en el precio. La opinión de los militares en torno a este punto estaba dividida, pero una comisión del CAEM, dirigida por el coronel Francisco Morales-Bermúdez, concluyó en 1964 que la IPC debía ser tomada por la Empresa Petrolera fiscal (EPF), la compañía estatal creada en 1946 por el gobierno de Bustamante.

En sus prolongadas negociaciones con la IPC, Belaunde estaba atrapado entre las estridentes demandas que pedían la nacionalización de la compañía, encabezada por *El Comercio*, y el Departamento de Estado de los EE. UU., que la defendía y ejercía presión congelando los fondos de la AID destinados al Perú. Es más, la posición de negociación del Presidente se vio seriamente debilitada por el deterioro de su propia popularidad después de 1965, juntamente con una creciente oposición en el Congreso y dentro de su propio partido, a favor de la nacionalización. Por su parte, el general Morales-Bermúdez, en este momento ministro de hacienda de Belaunde y principal negociador del gobierno, adoptó ahora una posición más conciliadora con la IPC que en su anterior informe del CAEM.

Sin embargo, la posición del ejército representada por Morales-Bermúdez estaba lejos de ser unitaria. El general Juan Velasco Alvarado, nombrado jefe del Comando Conjunto en marzo de 1968, encarnaba la facción de línea dura a favor de la nacionalización. Velasco, que había nacido en Piura, cerca de sus instalaciones de Talara, donde la compañía esgrimía un enorme poder e influencia sobre los asuntos locales, detestaba a la IPC. Como capitán de infantería durante la guerra con el Ecuador, Velasco se irritó aún más cuando, según Masterson (1991: 226), la compañía se negó momentáneamente a permitirle usar sus vehículos de la refinería para llevar sus tropas al frente.

A pesar de estas presiones, Belaunde anunció un acuerdo con la IPC que inicialmente parecía ser bastante favorable a su gobierno y al país. Según la llamada Acta de Talara del 13 de agosto de 1968, la compañía aceptó renunciar a sus derechos al subsuelo, entregar los campos de La Brea y Pariñas al gobierno, y a dejar de insistir en todo contrato futuro. A cambio, el gobierno aceptó cancelar todo reclamo de deudas contra la compañía y que el petróleo extraído de los campos de la IPC se vendiera a sus instalaciones de Talara para que fuese refinado

y comercializado. Sin embargo, inmediatamente después de que se concluyera el acuerdo, el ex director de la EPF sostuvo en televisión que «la página once» del convenio, que contenía el precio de venta, faltaba misteriosamente. El escándalo subsiguiente, pregonado por la prensa de oposición, privó a Belaunde del respaldo del público y del parlamento. También provocó la expulsión del partido del candidato presidencial de AP, el vicepresidente Edgardo Seoane, culminando así una larga lucha entre facciones rivales por el control del partido.

A medida que la controversia de la IPC llegaba a su fin en medio de una economía tambaleante y de convulsiones políticas cada vez mayores, fueron surgiendo los rumores de un golpe de Estado liderado por elementos desilusionados de las fuerzas armadas. Políticamente, Belaunde era mayoritariamente considerado como alguien cada vez más irrelevante, incapaz de controlar hasta a su propio partido y mucho menos de efectuar las reformas que había prometido al país. La opinión pública se agrió aun más cuando el gobierno fue remecido por una serie de escándalos de contrabando que involucraban a funcionarios de alto nivel.

En esta atmósfera de estancamiento político, escándalo público y frustración reformista, los partidos de izquierda comenzaron a ganar adherentes, fortalecidos por los descontentos del APRA, de AP y de otros partidos reformistas. Esta tendencia fue particularmente evidente en la política universitaria, donde el APRA perdió su hegemonía tradicional ante la emergente izquierda revolucionaria. En las universidades de todo el país, las ideologías radicales, energizadas por la Revolución cubana, penetraron tanto en el alumnado como en el profesorado. Esta misma radicalización incipiente se dio entre los grupos de trabajadores y el movimiento sindical. Por ejemplo, la formación en 1967 de la independiente Confederación General de Trabajadores del Perú, por parte de la izquierda, desafió el tradicional liderazgo aprista en el movimiento obrero.

Las crecientes señales de impaciencia de los militares y el respaldo que iba ganando la izquierda convencieron a Haya del peligro cada vez mayor de un golpe de Estado y decidió que el APRA tendría que ir al rescate del naufragado gobierno de Belaunde. En efecto, las políticas obstruccionistas de la Coalición habían tenido demasiado éxito, desacreditando no sólo al Presidente ante la opinión pública, sino también al frágil sistema democrático. En consecuencia, el débil régimen belaundista nombró otro gabinete más, respaldado por el APRA y liderado por el conservador ministro de hacienda Manuel Ulloa. Éste logró impulsar una fuerte política de ajuste estructural, junto con otras reformas que momentáneamente lograron estabilizar la economía y estimular el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el repentino estallido del escándalo de la «página once» privó al régimen de la legitimidad que aún le quedaba, abriendo el camino a un golpe militar. En las primeras horas del 3 de octubre de 1968 el palacio presidencial fue rodeado por tanques y el presidente fue escoltado nada ceremoniosamente al aeropuerto,

desde donde fue enviado a Buenos Aires y al exilio. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA), que era como el pequeño grupo de oficiales de alta jerarquía llamaba a su movimiento, emprendió ahora un experimento radical de «transformaciones desde arriba» dirigidas por los militares.

La revolución «militar» de 1968

La razón por la cual las fuerzas armadas decidieron tomar el poder en este momento es una cuestión intrigante. Ellas ciertamente habían mostrado, desde la década de 1930, una abierta hostilidad a las ambiciones populistas del a menudo violento Partido Aprista y su jefe, Haya de la Torre. Esta oposición coincidió con la fobia de la oligarquía al APRA, que constituyó la base de la alianza entre ella y los militares. Desde entonces, el cuerpo de oficiales predominantemente conservador había vetado con regularidad los esfuerzos concertados del APRA por llegar al poder. Sin embargo, más de tres décadas después, un cuerpo de oficiales más liberal, cuyo origen social se ubicaba en los ascendentes sectores medio y medio bajo antes que en la élite, había revertido sus razones para oponerse a Haya y al APRA, que también había vivido una metamorfosis ideológica y política, aliándose, desde la convivencia de 1956, con la vieja oligarquía y con el capital extranjero.

En consecuencia, muchos jóvenes oficiales progresistas vieron al APRA como el obstáculo más importante que bloqueaba las reformas estructurales que ellos pensaban eran necesarias para modernizar el país y detener el peligroso avance de la izquierda radical. De modo que a partir de la década de 1960, el ejército, junto con muchos profesionales de clase media, sectores de la Iglesia y otros, respaldaron la estrella política en ascenso de Belaunde, el reformista autoproclamado, cuyo llamado al nacionalismo y su visión tecnocrática de la modernización eran compartidos por muchos oficiales. Cuando Belaunde no solamente no cumplió con las reformas prometidas sino que además se vio manchado por el escándalo, el cuerpo de oficiales —cada vez más seguro de que ellos tenían la voluntad, la responsabilidad cívica y los conocimientos necesarios para llevar a cabo la transformación del país— intervino para deponer su régimen e instituir un cambio radical.

Es más, la división y el descrédito de AP, y el reducido tamaño del PDC, daban toda la ventaja al APRA y Haya para vencer en las elecciones presidenciales programadas para comienzos de 1969. Aunque Haya era ahora un político anciano cada vez más conservador, seguía encabezando el partido mejor organizado y disciplinado del país. De modo que el veto militar fue aplicado nuevamente contra su enemigo histórico, esta vez por razones distintas. En este contexto, el fiasco de la IPC no solamente planteó una preocupación auténticamente nacionalista, sino que además simplemente constituyó el pretexto necesario que el GRFA requería para justificar su toma del poder.

El descontento con Belaunde y el posible ascenso de Haya y el APRA al poder en 1969, no explican por sí solos la reorientación básica de las fuerzas armadas y su creciente inclinación a las reformas. Como ya señalé, entre las décadas de 1930 y 1960 los militares que hasta entonces habían sido una organización conservadora cuyos oficiales se extraían principalmente de las clases altas y cuyo objetivo real era preservar el poder oligárquico, se transformaron en una institución más «progresista», basada socialmente en las clases media y media baja y que cada vez más propugnaba reformas sociales. Esta transformación institucional, reflejada a mediados de la década de 1960 en las principales revistas militares del país, explica el surgimiento de lo que Stepan (1978) denominó un «nuevo profesionalismo» de las fuerzas armadas, que veían la seguridad nacional en términos desarrollistas antes que estrictamente geopolíticos y militares. Ya a mediados de la década de 1950, y luego en forma más acelerada con el impacto radical de la Revolución cubana a comienzos de la de 1960, los militares se vieron frustrados por lo que ellos percibían como un persistente fracaso de los gobiernos civiles para avanzar más en la vía del desarrollo nacional.

La primera gran manifestación de esta frustración y nueva orientación de los militares tuvo lugar en 1962-1963, cuando las fuerzas armadas anularon el resultado de las elecciones nacionales, tomaron el poder y emprendieron una serie de reformas moderadas. La Junta asimismo sentó las bases para la elección, al año siguiente, de Belaunde, el candidato presidencial de su preferencia, por encima del proscrito Haya. Sin embargo, el estallido del movimiento guerrillero en 1965 tuvo una profunda influencia en el cuerpo de oficiales, a quien recurrió el presidente para suprimir el movimiento; esta experiencia permitió a las fuerzas armadas comprobar de primera mano la asfixiante pobreza y opresión del campesinado de la sierra y afianzar su fe en la crucial interrelación entre seguridad y desarrollo nacionales. Con el tiempo, sus jefes se sintieron cada vez más frustrados con los fallidos esfuerzos del gobierno civil de Belaunde de impulsar las reformas y alcanzar el desarrollo nacional. En consecuencia, algunos elementos del ejército, en particular el Servicio de Inteligencia, que había estado profundamente involucrado en la campaña para suprimir las guerrillas, se sintieron cada vez más angustiados con los problemas de la reforma agraria, el conflicto entre trabajadores y patrones y la amenaza a la soberanía nacional que, para ellos, representaba la IPC.

El jefe del golpe, que se había ido gestando a lo largo de varios meses, era el general Juan Velasco Alvarado, Comandante del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Velasco nació en 1910 en Castilla, un suburbio de clase baja de la ciudad de Piura que aparece en la novela *La casa verde*, de Mario Vargas Llosa, donde se narran las vivencias de esta «casa», el burdel más importante de la ciudad. Fue precisamente este tipo de desprecio estereotipado

por parte de las élites provinciales, lo que tanto irritó a Velasco durante su niñez y juventud.

Fue uno de los once hijos nacidos de un asistente de medicina, y creció en lo que él llamó una «digna pobreza», supuestamente yendo al colegio descalzo. Según uno de sus amigos cercanos,

> [...] desde su niñez, en su juventud, él siempre era un líder: en el colegio, en la calle. Y ha sentido desde niño —en carne propia probablemente— la injusticia social en que vivía el Perú en los años treinta. Nunca se quejó de haber nacido humilde, o pobre. Eso lo tengo que rechazar enfáticamente. Lo que mucha gente ha dicho, que tenía un complejo de inferioridad, porque había sido pobre, o incluso humilde. Yo estoy convencido que no. El más bien peleaba por pequeños detalles de injusticia. Y creo que le motivó, desde pequeño, las injusticias por las que pasaba el Perú [...]. Yo pienso que desde su niñez ha sufrido la desesperanza, la injusticia. E incluso, ya disminuido, me dijo: 'Yo sentía una lástima' no en el sentido peyorativo sino porque el destino le había dado de esa manera. (citado en Kruijt 1991: 116-117)

De talla promedio y modales toscos, Velasco recordaba a algunos al ex presidente Sánchez Cerro, él también un oficial del ejército e hijo nativo de Piura. En el transcurso de sus carreras militar y política, el general sería conocido afectuosamente como «El Chino», en alusión a sus ojos rasgados.

En 1929 Velasco viajó de polizón en una nave chilena con destino a Lima, mintió con respecto a su edad y se enroló en el ejército como soldado raso. (Por error se puso en la línea de reclutamiento equivocada, puesto que su objetivo era ser oficial). Posteriormente fue aceptado para estudiar como oficial en la Escuela Militar de Chorrillos, después de alcanzar el primer lugar en los exámenes de ingreso. Tras graduarse en cuatro años con el primer puesto de su clase y con grandes distinciones, Velasco avanzó por las filas en forma constante, aunque no espectacularmente. Sus puntos fuertes parecen haber sido una aguda habilidad para medir el talento, sus inclinaciones políticas y, sobre todo, la lealtad potencial de sus camaradas. Sin embargo, al no haber mostrado ningún don intelectual particular no fue escogido para asistir al prestigioso CAEM, de orientación progresista, y por lo tanto dejó su huella como comandante de tropas antes que como oficial de estado mayor.

Aunque sus opiniones políticas no son fáciles de encasillar, varios colegas observaron un fuerte sentido de justicia social en el oficial en ascenso. Según Kruijt, el agregado militar de los EE. UU. en Lima durante el gobierno de Belaunde mencionó que Velasco, a menudo, expresaba su disgusto con la oligarquía terrateniente del país y la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria efectiva. Velasco aparentemente admiraba al general De Gaulle, a quien conoció siendo



El general Juan Velasco Alvarado (1910-1977) dirigiéndose a la nación poco después de tomar el poder. Reproducido con permiso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

agregado militar en París, no tanto como héroe militar sino como soldado-político, ya que estabilizó al endeble gobierno francés mediante un fuerte liderazgo. Mientras estuvo en esta ciudad también conoció a Haya de la Torre, pero en sintonía con la posición del ejército jamás mostró mucha simpatía por el APRA, al que veía en ese entonces como un partido esencialmente de derecha.

De otro lado, Velasco fue atraído por la PDC y el Movimiento Social Progresista (MSP), partidos cuyos líderes abrazaban un humanismo cristiano compatible con su propia perspectiva filosófica. De hecho, Klaiber (1992) afirma que los conceptos más importantes de los reformistas militares fueron tomados prestados de la Democracia Cristiana, en particular la idea de una «tercera vía» entre capitalismo y comunismo. Además, tal vez debido a su mente militar, ni el socialismo ni el comunismo atraían mucho a Velasco, pero sí tenía fuertes posiciones nacionalistas, lo que le hizo adoptar posturas antiimperialistas y antioligárquicas. Al igual que la mayoría de los peruanos educados había leído a Mariátegui, junto con muchos otros grandes autores peruanos, y estuvo

fuertemente influido por el antropólogo indigenista Hildebrando Castro Pozo, quien fue su profesor.

Tal vez por encima de todo, Velasco creía profundamente en las virtudes militares: autoridad y respeto por la ley y el orden; sin ellas, ninguna sociedad, creía él, podía esperar progresar. De hecho, él gobernaría el país igual que lo hiciera con sus tropas y posteriormente el ejército: por decreto. Esta es la forma en que uno de sus asociados del ejército, que fue de sus colaboradores más cercanos durante su gobierno, describió la postura del general:

> La sociedad debería ser organizada reconociendo la necesidad de una autoridad, [es una noción que él] evidentemente tenía. Viene directamente de su propia profesión: que no haya desgobierno ni anarquía, pero que haya mando. 'El comando nunca muere', dijo; era su principio. Buscaba un gobierno fuerte. Debería ser un gobierno paternalista con respecto a las masas. [...] Cree que él debe dirigir, que hay que crear organismos para las masas. Que ellos no pueden crearlas libremente, decir lo que quieren decir, hacer lo que quieren hacer. O sea: en el fondo no era demócrata. [...] Era un gobierno tipo fuerte, militar, autoritario, pero velando por la mayoría, por las necesidades del hombre. Tratando de sustituir todo aquello que dañaba. Dar todo lo que fuera subsistencia, satisfacer necesidades básicas. Eso era su motor, su idea básica, su plan de gobierno. (Citado en Kruijt 1991: 129)

Por último, debe decirse que Velasco fue impecablemente honesto y un ferviente hombre de familia que no aceptaba absolutamente ninguna intromisión en su vida privada, pero que sí gozaba ejerciendo el poder y las gollerías del cargo.

Aunque Velasco encabezó el golpe, éste fue concebido fundamentalmente por sus asociados, varios de los cuales estaban conectados con el Servicio de Inteligencia del Ejército. El «Plan Inca», como fue denominado, comenzó como un plan de contingencia, del tipo de los preparados, a menudo, por un estado mayor sobre la política nacional. (Fue publicado sólo en 1974, siendo reescrito con mucho mayor detalle para rechazar las acusaciones de la naturaleza improvisada de las reformas.) El plan fue adquiriendo cada vez más importancia entre los conspiradores a medida que la situación política se deterioraba, en particular después de que en abril de 1968 el Congreso acusara de corrupción al gobierno de Belaunde. En general, demandaba grandes reformas estructurales en las áreas de industria, tenencia de la tierra, impuestos, banca y gobierno. Inicialmente, cuatro coroneles prepararon el plan, pero el grupo finalmente incluyó a Velasco y a otros cuatro generales que trabajaban en el máximo secreto. En los últimos días de la conspiración, los planes intelectuales y técnicos del golpe fueron coordinados en la academia militar de Chorrillos, bajo el mando del general Edgardo Mercado Jarrín.

A diferencia del golpe de 1962, cuyos organizadores se cuidaron de involucrar a todas las ramas de las fuerzas armadas en lo que constituyó un movimiento «institucional» relativamente unificado, la conspiración se incubó exclusivamente dentro del ejército, sin la participación de la marina o la fuerza aérea. Posteriormente, Velasco repartiría equitativamente los cargos en la Junta y en su gabinete ministerial entre las tres ramas, de modo tal que el golpe adquirió la apariencia de un régimen institucional con cierto grado de unidad. Pero ello disimulaba la existencia de serias diferencias entre la vieja y la nueva guardia en las fuerzas armadas, entre la marina y la aviación, y entre las facciones derechista e izquierdista del ejército.

Los objetivos del golpe no estaban del todo claros en el primer manifiesto emitido por el nuevo gobierno. Es más, el todavía secreto Plan Inca era necesariamente general y breve en lo que respecta a cosas específicas. De hecho, uno de los principales participantes en el golpe dijo poco después de ocurrido: «Escuchen, nuestra revolución ciertamente no ha nacido con un programa. Es un grupo de individuos de buena fe y con buenas intenciones, que presenta lineamientos para una transformación [...] pero cuya aplicación práctica debe ser estudiada» (citado en Graham 1992: 41).

En retrospectiva, el GRFA percibía que la desunión y el subdesarrollo constituían los principales problemas del país, siendo sus causas la «dependencia externa» del capital extranjero y la «dominación interna» por parte de una oligarquía poderosa. Esta era una vieja crítica nacionalista y antioligárquica abrazada por los sectores progresistas de la clase media ya en la década de 1930, al fundarse el APRA, y expresada cada vez más por los nuevos partidos reformistas (por ejemplo, AP y PDC) surgidos en la década de 1960, juntamente con sectores de la Iglesia y de las mismas fuerzas armadas. La solución, según el GRFA, era la erradicación de los «enclaves del imperialismo extranjero» y el paso a un modelo económico de crecimiento y desarrollo autónomo en lugar de uno liderado por las exportaciones.

Según el Plan Económico Quinquenal establecido para los años 1971-1975, esta estrategia antiimperialista/antioligárquica estaba diseñada para conseguir el control nacional del excedente económico y redirigirlo a un amplio estrato de empresarios locales antes marginados. Los autores de este plan pensaban que desde comienzos de la década de 1960, el Perú había retrocedido debido a la falta de disposición de los extranjeros y de la oligarquía a reinvertir lo suficiente en la economía para así alcanzar un crecimiento y desarrollo adecuados. De ahí que la ruptura del capital monopólico (usaban la metáfora del desembalse de una represa que bloqueaba la reinversión en la economía) serviría para producir un alza en la reinversión, lo que restauraría el dinamismo y la vitalidad a la economía. Un Estado reestructurado y expandido sería, claro está, el mecanismo a través del cual llevar a cabo esta revitalización económica.

Para alcanzar estos objetivos desarrollistas fundamentalmente populistas, el nuevo gobierno militar pedía que se estableciera una solidaridad social y la armonía entre las clases bajo la tutela del Estado. Semejante plan corporativista estaba sustentado por el pensamiento católico de Santo Tomás de Aquino, Thomas More, Francisco Suárez y el papa León XIII, quienes percibían que la función del Estado, además de conservar el orden, era promover activamente el bien común. También se incluían referencias a encíclicas papales como *Populorum progressio* (1967), que trataba los problemas tercermundistas del hambre, la pobreza y la dependencia económica, y reforzó aún más la agenda del gobierno hacia una reforma social radical. Este enfoque católico-corporativo de la «reforma desde arriba» sirvió además para desviar las acusaciones hechas por la oposición conservadora de la existencia de tendencias «comunistoides» en el GRFA y prevenir el posible estallido de los desórdenes populares que usualmente acompañan las transformaciones revolucionarias. Aunque populista y corporativo por naturaleza, el plan de reformas del GRFA también incorporó la nueva preocupación de seguridad nacional de las fuerzas armadas que era prevenir el surgimiento de cualquier conflicto de clases potencial promoviendo el desarrollo nacional y diseñando su desactivación. De este modo, un Perú unido y socialmente cohesionado podría hacer frente al doble desafío de un potencial agresor extranjero allende sus fronteras, y de los movimientos guerrilleros revolucionarios dentro del país.

En cuanto al viejo problema de la opresión de la población indígena, se consideró que ella era de naturaleza fundamentalmente socioeconómica antes que cultural. Mientras que Túpac Amaru II se convertía en el símbolo de la revolución, el término «indio» fue reemplazado mayormente en los decretos y leyes gubernamentales con la palabra «campesino». Sin embargo, esto no significaba que el nuevo régimen militar ignorase a los indios, dado que sus políticas culturales y educativas incorporaban el indigenismo y lo andino. Por ejemplo, el glorioso pasado incaico siguió siendo alabado en la bibliografía y los pronunciamientos oficiales, y el quechua fue proclamado la segunda lengua nacional del país. Aunque se ordenó que los indios en las escuelas de la sierra aprendieran español, debía enseñárseles en su lengua nativa.

Para llevar a cabo este plan, el gobierno emprendió dos reformas fundamentales en lo que ahora se conoce como la Primera Fase, o etapa velasquista (1968-1975), del Docenio militar. Primero instituyó una reforma agraria global que eliminó del sistema agrario del país a las viejas haciendas y a la élite terrateniente, incluso a las compañías extranjeras. Aunque, como veremos, la reforma tenía serios defectos, ella afectó a casi el sesenta por ciento de las tierras agrícolas del país, redistribuyendo más que las revoluciones mexicana o boliviana. Cuando finalmente se completó la reforma, la mitad de las tierras cultivables habían sido transferidas a un estimado de 375.000 familias (una cuarta parte de la población

rural), principalmente a trabajadores y colonos de las haciendas. Sin embargo, todas estas familias no se beneficiaron del mismo modo con la reforma. En general, los campesinos de las haciendas costeñas más prósperas —tal vez el diez por ciento del total— se beneficiaron sustancialmente, en tanto que sus contrapartes en la menos desarrollada y más atrasada sierra (los comuneros y colonos) ganaron poco o nada con la reforma. Entre estos últimos surgiría posteriormente el respaldo al movimiento subersivo de Sendero Luminoso en la década de 1980. Es más, la reforma dejó completamente fuera de ella a alrededor de un millón de «eventuales».

El segundo cambio fundamental fue el intenso crecimiento del Estado, que por vez primera asumió un papel cardinal en la economía y el proceso de desarrollo. Su blanco era fundamentalmente el sector dominado por los extranjeros, que en la década de 1960 había alcanzado una posición significativa en la economía, representando el treinta y tres por ciento de la producción del sector corporativo. Por ejemplo, al finalizar el gobierno de Belaunde en 1968, las tres cuartas partes de la minería, la mitad de las manufacturas, las dos terceras partes de la banca comercial y un tercio de la industria pesquera estaban bajo control extranjero directo. En cambio, en ese mismo año el Estado únicamente controlaba el dieciséis por ciento del PBI.

El gobierno de Velasco revirtió este patrón, duplicando la participación del sector estatal en el PBI a treinta y uno por ciento. Aparecieron nuevas empresas estatales en la minería (Mineroperú), la pesca (Pescaperú), el acero (Siderperú), el petróleo (Petroperú) y la industria (Moraveco). Para 1975, estas empresas daban cuenta de más de la mitad de la producción minera, las dos terceras partes del sistema bancario, una quinta parte de la producción industrial y la mitad de la inversión total en la economía.

El impulso esencial del programa de desarrollo de Velasco era pasar de una economía de *laissez-faire* a otra «mixta», y reemplazar la estrategia de desarrollo impulsada por las exportaciones por una de industrialización por sustitución de importaciones. En palabras de Velasco, la construcción de lo que venía a ser una forma de capitalismo de Estado no debía ser «ni capitalista ni comunista». Al mismo tiempo, el Estado impulsó una serie de medidas sociales populistas diseñadas para proteger a los trabajadores y redistribuir el ingreso, ampliando así el mercado doméstico. El efecto neto del crecimiento del Estado fue la creación de 150 nuevas empresas públicas y el empleo de unas 670.000 personas, más del doble (300.000) de las que había en 1970. El gasto y la inversión públicos también crecieron enormemente.

La expansión del aparato estatal se caracterizó por el surgimiento de una élite tecnocrática de planificadores y asesores, y por la militarización del personal clave. En cuanto a los primeros, una serie de importantes asesores civiles estuvieron vinculados al Comité de Asesoramiento de la Presidencia (COAP), creado por

Velasco casi inmediatamente después del golpe del 3 de octubre. El COAP estuvo conformado inicialmente por seis coroneles del ejército sumamente confiables y dos coroneles adicionales asignados por los otros dos servicios, pero pronto incluyó a civiles como el sociólogo Carlos Delgado; Héctor Cornejo Chávez, jefe del PDC; y Alberto Ruiz Eldredge, fundador del pequeño pero influyente Movimiento Social Progresista (MSP). A diferencia de la Junta y de los miembros del gabinete —más conservadores, aunque nacionalistas—, los integrantes del COAP eran los representantes ideológicamente más radicales de la GRFA. A partir de su papel inicial asesorando al Presidente, los especialistas del COAP funcionaron como los «guardianes políticos del proceso revolucionario». De hecho, con el tiempo su director se convirtió en una suerte de «super ministro», encargado de asegurar que los diversos ministros y ministerios llevaran a cabo los decretos revolucionarios del Presidente.

La militarización del aparato estatal comenzó como un esfuerzo por «moralizar» lo que según el GRFA era una burocracia no solamente ineficiente y letárgica, sino también plagada de corrupción y deshonestidad. Se asumía de algún modo que los valores éticos de las fuerzas armadas —encargadas de la misión más amplia de la defensa nacional e imbuidas por un *esprit d' corps* profesional— eran inherentemente más elevados que los de los políticos civiles, de quienes se pensaba eran incapaces de anteponer los intereses nacionales a las ambiciones personales egoístas y mezquinas. Es más, una vez que las nacionalizaciones comenzaron a multiplicarse, los oficiales militares, tanto activos como en retiro, pasaron a ser una fuente obvia de personal calificado y confiable para administrar las nuevas empresas estatales. Ello provocó que a finales del Decenio, entre un cuarenta a un cincuenta por ciento de los oficiales de mayor jerarquía fueran ejecutivos políticos y administrativos del gobierno.

Para hacer frente al doble problema de la dependencia y del subdesarrollo, el nuevo gobierno militar adoptó el concepto del «Tercer Mundo». El Perú pasó a ser una fuerza impulsora de la creación de un Pacto Andino en 1969, diseñado para ayudar a aminorar las tensiones geopolíticas y militares, y a crear un mercado común con políticas comerciales y de inversión coordinadas, que ostensiblemente abrirían a las manufacturas peruanas el camino a sus países vecinos. También se convirtió en líder del «grupo de los 77», el llamado movimiento de países no alineados del Tercer Mundo. Es más, en un esfuerzo concertado para poner fin a la dependencia económica y política de los Estados Unidos, el gobierno de Velasco diversificó sus relaciones internacionales efectuando pactos comerciales y de asistencia (económica y militar) con la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, así como con Japón y las naciones de Europa Occidental. Además, estableció relaciones con China (antes de la visita del presidente Nixon) y se negó a alinearse con los Estados Unidos en su bloqueo comercial a Cuba. Por último, el Perú impuso un límite territorial de 200 millas náuticas en el océano Pacífico, una

demanda presentada por el gobierno de Bustamante por vez primera después de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión de la nacionalización de las compañías estadounidenses puso inmediatamente a ambos países en pugna.

Unos cuantos días después del golpe de 1968, el Perú expropió a la IPC y se negó a compensarla arguyendo que el contrato inicial entre la compañía y el Estado no era válido. El gobierno procedió entonces a reorganizar la vieja compañía petrolera estatal como Petroperú, que tomó el control de las instalaciones de la IPC en el norte. También comenzó a efectuar exploraciones en busca de nuevos depósitos en la selva, en parte en empresas conjuntas con compañías petroleras extranjeras. En respuesta a la expropiación, los Estados Unidos amenazaron con aplicar la Enmienda Hickenlooper, que establecía el corte de todo crédito y asistencia de los Estados Unidos y las agencias internacionales afiliadas, como el Banco Mundial, a los países que nacionalizaran propiedades estadounidenses sin efectuar una compensación. En 1974, después de extensas negociaciones, ambos países llegaron a un acuerdo en torno a los niveles apropiados de compensación.

Sin embargo, hasta dicho año, las relaciones siguieron agitadas por los intentos peruanos de diversificar sus compras de armas fuera de los Estados Unidos, y su insistencia en hacer respetar su frontera territorial de 200 millas en el Pacífico. En el primer caso, los oficiales peruanos se habían exasperado por la negativa de los Estados Unidos, ya a mediados de la década de 1960, de permitir que se vendiera napalm al Perú para que su fuerza aérea lo empleara contra las guerrillas en la sierra. Luego, en 1967 se negó a vender nuevos aviones a reacción a la fuerza aérea. Esta política provocó el resentimiento dentro de los círculos militares por la «dependencia» peruana de las armas estadounidenses, argumentándose que en caso de una guerra externa, sus fuerzas armadas estarían a merced de los EE.UU. En ese entonces el gobierno de Belaunde respondió comprando cazas Mirage a los franceses, lo cual, claro está, no fue bien recibido por los Estados Unidos.

Fue este malestar por las políticas de asistencia militar estadounidenses lo que provocó que Velasco reconociera a los países del bloque soviético y se volviera a la Unión Soviética en busca de asistencia comercial y militar. A finales de 1968, se establecieron vínculos diplomáticos con ella y a partir de entonces se llegó a una serie de acuerdos comerciales y de compra de armas que produjeron un incremento del comercio entre ambos países, de $23 millones en 1968 a $283 millones en 1975. En efecto, la compra de armas soviéticas en este periodo puso al Perú en el segundo lugar hemisférico en este rubro, después únicamente de Cuba.

Estos acuerdos implicaron la llegada de aproximadamente un centenar de asesores técnicos soviéticos al Perú en la década de 1970, en tanto que más de ochocientos miembros del ejército y la aviación fueron a Moscú para ser capacitados. Sólo la marina, más conservadora, permaneció alejada de estos arreglos y adquirió sus naves y equipos en Italia y Alemania Occidental. Los vínculos estrechos con

la Unión Soviética se vieron facilitados por la rápida respuesta humanitaria de dicho país al masivo terremoto que el 31 de mayo de 1970 azotó al Callejón de Huaylas, en la sierra norte, dando muerte a 70.000 personas y dejando a otras 500.000 sin hogar.

En cuanto al límite territorial de 200 millas, la marina peruana lo defendió vigorosamente, capturando las naves atuneras estadounidenses que pescaban en «sus aguas». Estos incidentes desataron la llamada Guerra del Atún en febrero de 1969, cuando los EE. UU. respondieron a una captura particularmente controvertida suspendiendo la asistencia militar al Perú, que, en respuesta, expulsó a la misión militar estadounidense del país. En consecuencia, se puso fin a medio siglo de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países, las relaciones diplomáticas se enfriaron y Perú intensificó su giro hacia la Unión Soviética y otros países en busca de asistencia militar y de todo tipo.

De otro lado, el anuncio hecho por Velasco seis días después del golpe de la expropiación de las posesiones de la IPC, confirió una popularidad inmediata al nuevo régimen militar y a él en particular. Conmemorado (hasta el segundo gobierno de Belaunde) como el Día de la Dignidad Nacional, la estatización contrarrestó, en efecto, la apatía inicial de la opinión pública con respecto al golpe del 3 de octubre. En el trascurso de unos cuantos años, el gobierno anunciaría significativas nacionalizaciones en otros sectores de la economía, entre ellos la minería, la electricidad, el transporte, la pesca y el comercio exterior.

El caso de la minería fue aleccionador en cuanto al nuevo curso nacionalista emprendido por el gobierno. Cuando, en reacción a la toma de la IPC, las compañías cupríferas de propiedad extranjera retrocedieron en sus planes de explotar los inmensos depósitos nuevos del sur, sus concesiones fueron canceladas. Para comercializar todos los minerales y explotar nuevos depósitos se formó Mineroperú, una nueva empresa estatal. La lista de compañías extranjeras expropiadas se multiplicó durante la Primera Fase e incluyó a la ITT (1969), el Chase Manhattan Bank (1970), la Peruvian Corporation y la refinería de petróleo de Conchán (1972), y la Marcona Mining (1975). Gracias a estas nacionalizaciones, el nivel de capital extranjero en la economía se redujo, según Fitzgerald (1979), a cuarenta por ciento de lo que fue en el periodo belaundista.

Entretanto, a los seis meses de tomar el poder, Velasco decretó una ley de reforma agraria que se convertiría en el eje de su revolución. Citando el grito atribuido a Túpac Amaru II —«campesino, el patrón no volverá a comer de tu pobreza»—, el Presidente anunció el Decreto Ley 17716 que eliminaba la hacienda el 24 de junio de 1969. Ideológicamente, la amplia ley de reforma agraria se basaba en influencias tan diversas como el cooperativismo demócrata cristiano, el colectivismo marxista y el tradicional espíritu comunitario andino (el *ayllu*). La ambiciosa reforma tenía tres objetivos: eliminar la tradicional

aristocracia terrateniente (los hacendados de la costa y los gamonales de la sierra); eliminar todo potencial descontento e insurgencia campesina (la nueva doctrina de seguridad nacional de los militares) redistribuyendo el ingreso; y mejorar la eficiencia productiva de la agricultura, que había sido erosionada desde la década de 1960 en un momento de explosivo crecimiento demográfico. El general Velasco añadió otra razón más: generar un capital excedente adicional en la agricultura para reinvertirlo en la industrialización urbana.

La reforma se aplicó primero en la costa norte expropiando las plantaciones azucareras. Pero se hizo en una forma planificada para no poner en peligro el desempeño de estas empresas modernas, rentables e intensivas en capital. Por lo tanto, su subsiguiente reestructuración en cooperativas retuvo las eficiencias de escala al mismo tiempo que se distribuía el ingreso de forma más equitativa. La creación de las cooperativas azucareras también tenía una importante finalidad política, además de económica: eliminar el poder político de la oligarquía azucarera largo tiempo reinante y minar al viejo Némesis del ejército —el Partido Aprista —, cuya base política (el «sólido norte») descansaba sobre la fuerza laboral organizada de las plantaciones.

Además de las empresas azucareras, la ley de reforma agraria decretó la expropiación de todas las haciendas de cualquier tamaño e importancia y su conversión en cooperativas autogestionarias. Aunque los dueños de las haciendas expropiadas fueron compensados con bonos del gobierno a veinte o treinta años, el monto real que recibieron se vio reducido fuertemente con el paso del tiempo por la aceleración de la inflación. Se crearon dos grandes tipos de cooperativas: las cooperativas agrarias de producción (CAP), principalmente las grandes haciendas costeñas rentables, y las sociedades agrarias de interés social (SAIS), que comprendían las mejores tierras de la sierra. Juntas, las CAP y las SAIS conformaban el setenta y seis por ciento de las propiedades expropiadas; el resto fue distribuido en parcelas individuales a «grupos», cooperativas o comunidades campesinas.

Los miembros de las CAP y de las SAIS eran los antiguos trabajadores permanentes o campesinos de los latifundios, que ahora se convirtieron simultáneamente en trabajadores, administradores y accionistas de la empresa. Los «eventuales» o trabajadores temporales de la costa, y los arrendires de la sierra, fueron excluidos de las asociaciones y por ello no fueron incorporados a la reforma. Los campesinos tuvieron voz en la administración de las cooperativas a través de diversas asambleas y consejos, pero el manejo diario y el diseño de las políticas fue encargado a los tecnócratas, agrónomos por lo general, nombrados por el Ministerio de Agricultura. El gobierno era la única fuente de crédito externo y de fondos de inversión para las cooperativas, y después de 1976 tenía el poder de intervenir directamente en el funcionamiento de cualquiera de ellas.

Las SAIS de la sierra, que comprendían alrededor de una sexta parte de todos los beneficiarios de la reforma, resultaron ser su programa más problemático. Habían sido diseñadas para vincular las ex haciendas con las comunidades campesinas de los alrededores, conservando las mejoras modernas de las primeras al mismo tiempo que brindaban beneficios a las segundas. Sin embargo, estallaron serios conflictos sociales en torno a la adjudicación de las tierras «disputadas» entre los campesinos de las comunidades que pedían su devolución, y los que ahora se beneficiaban de las haciendas cuyo interés, al igual que el de sus antiguos patronos, era conservarlas. También surgieron tensiones entre los administradores nombrados por el Estado y los miembros de las cooperativas que tenían el poder de despedirlos cuando lo consideraran conveniente.

Los resultados de la reforma agraria fueron mixtos. La hacienda, que había sido durante siglos la marca característica del sistema señorial de tenencia de la tierra en el Perú, había desaparecido ya en 1979. Unos 8,5 millones de hectáreas, lo que representaba el sesenta por ciento del ingreso agrícola del país, habían sido adjudicadas a 375.000 familias, esto es el veinticinco por ciento de todas las familias agricultoras. Los claros ganadores con esta reforma fueron los 140.000 ex trabajadores de las haciendas costeñas altamente capitalizadas y rentables, que representaban apenas el diez por ciento de todas las familias de agricultores. Se convirtieron en miembros de cooperativas cuya participación promedio en la propiedad, según McClintock (1998: 174), sumaba $1.900, y cuyo nivel de vida en la primera década de la reforma mejoró considerablemente. Incluso antes de ella, su ingreso superaba cuatro veces el de la familia campesina promedio que vivía en las zonas más empobrecidas de la sierra.

De otro lado, la abrumadora mayoría de los campesinos de la sierra —el cuarenta por ciento del total— se benefició mucho menos de la reforma. Por ejemplo, una sexta parte de todos los beneficiarios fueron campesinos de haciendas serranas mal capitalizadas y atrasadas, que formaron «grupos» y decidieron recibir y trabajar sus campos individualmente. El valor de la tierra que recibieron fue en promedio de $350, una sexta parte del valor recibido por sus contrapartes en las cooperativas costeñas. De igual modo, los campesinos de algunas comunidades serranas —tal vez la tercera parte del total de beneficiarios— recibieron algunos pastizales de haciendas vecinas valorizados en apenas $50 o menos. Por último, la mayoría de los campesinos de la sierra sur, más pobre y menoscabada, no se beneficiaron en nada con la reforma. Por ejemplo, McClintock calcula que éste fue el caso, en 1975, del ochenta y siete por ciento de ellos en Ayacucho, principalmente comuneros; del ochenta y dos por ciento en Apurímac; y del cincuenta y cuatro por ciento en Huancavelica.

Igualmente problemático resultaba el hecho de que la población no residente en las chacras y otras propiedades agrícolas (los «eventuales») fuera

mayoritariamente excluida de la reforma y, al no formar parte de las cooperativas, siguió siendo perjudicada por sus miembros, tal como sucediera en el antiguo sistema. De hecho, la disparidad en el ingreso entre ambos grupos —esto es, entre los trabajadores permanentes de las haciendas y los temporales— se amplió significativamente a consecuencia de la reforma, llegando a ser de dos a uno, según estimaciones de McClintock.

Estas disparidades y desigualdades en la reforma agraria no fueron corregidas mediante políticas gubernamentales más equitativas de crédito, inversión o de precios, todo lo cual tendió a favorecer al moderno sector costeño. Por ejemplo, mientras que los préstamos del gobierno se duplicaron en términos reales entre 1970 y 1976, el cuarenta-cincuenta por ciento de los mismos se dio para los principales cultivos de exportación en el sector moderno. Por otro lado, si bien la inversión pública en la agricultura creció sustancialmente en la década de 1970, la mayor parte (sesenta y cuatro por ciento en 1978-1979) fue para la construcción de proyectos de irrigación a gran escala, como los de Chira-Piura, Majes y Tinajones. Por último, el precio de los alimentos entre 1969 y 1974 fue ajustado por el gobierno a la tasa general de inflación para así ayudar a los pobres urbanos. Pero el precio de las papas, el cultivo más importante para los campesinos, subió menos que el de otros productos alimenticios y se mantuvo muy por debajo del precio permitido para mercancías tales como el azúcar, la carne y la leche, producidas por empresas bien capitalizadas.

Al finalizar el periodo de la reforma, apenas una cuarta parte de la población rural había conseguido acceso a la tierra, lo cual, según Masterson (1991: 253) implicaba que el Perú tuviera, junto con la India, la peor relación hombre-tierra del mundo (apenas 0,18 hectáreas de tierras cultivables por persona). Es más, la reforma hizo poco por alterar la miseria de los campesinos en las partes más pobres del país, como Ayacucho, donde la subversión de Sendero Luminoso surgiría una década después. Este hecho sugiere que el objetivo principal de la reforma agraria —desactivar el potencial de una insurgencia rural— fue esencialmente un fracaso, probablemente al haber hecho que se desvanecieran las expectativas que los campesinos tenían de mejorar en lugares como Ayacucho. Pero su fracaso, en un sentido más amplio, también se debió a los defectos inherentes a su diseño y al apuro y a la falta de planificación con la cual se concibió e implementó.

El legado económico de la reforma agraria es más difícil de evaluar. De un lado, la producción agrícola global parece haberse elevado ligeramente en la década de 1970, en comparación con los diez años precedentes. La producción subió de 12,6 billones de soles en 1960 a 15,8 en 1978 (medidos en precios de 1973). Pero este incremento no se acercaba ni siquiera remotamente a la posibilidad de mantener el ritmo del rápido crecimiento de la población peruana de tres por ciento anual, o de la demanda alimenticia de cuatro por ciento al año en ese mismo

lapso. Además, la producción de alimentos se rezagó con respecto a la produccción de ganado y mercancías, de modo que entre 1972 y 1974 las importaciones de alimentos del país crecieron de quince a veinticinco por ciento de la producción total. Este déficit se exacerbó entre 1978 y 1980 por la peor sequía del siglo, que hizo que la producción agrícola global descendiera a un 4,7 y un 5,3 por ciento en 1979 y 1980, respectivamente. Los cultivos dependientes del agua, como el azúcar y el arroz, fueron especialmente golpeados y su producción cayó hasta en un treinta por ciento en 1980.

Una vez comenzada la implantación de la reforma y que los campesinos vieron los resultados de las transferencias de tierra, estos comenzaron a formar organizaciones de base generalmente espontáneas para defender o ampliar sus ganancias. Con el tiempo, el gobierno se dio cuenta de que sin un respaldo organizado, popular y de base como éste, e incluso sin la formación de un partido político oficial, el programa global de transformación y reestructuración radical de Velasco naufragaría. Según un general prominente, «nadie hablaba de eso al comienzo del proceso revolucionario. Se hablaba de la participación del pueblo en el proceso, pero no se hizo nada» (citado en Mauceri 1996: 18). En cierta medida, la alianza táctica del régimen con el Partido Comunista Peruano, similar a la de Odría en la década de 1950, y la de la Junta de Pérez Godoy a comienzos del siguiente decenio, desempeñó una función similar, pero ello no bastaba para mantener el ritmo de la revolución. El problema fue posteriormente enunciado de este modo por uno de los generales:

> ¿Y cómo organizar a los simpatizantes? No teníamos un partido. Teníamos un diálogo interno: de crear un partido o no. ¿Cómo formar, pues, un partido? no éramos, pues, un organismo político. ¿Cómo entonces, cómo organizar, cómo movilizar a las masas sin crear un partido? (Citado en Kruijt 1991: 206)

Los militares desconfiaban de toda asociación con los partidos existentes, cuyo desmedido clientelismo y oportunismo consideraban había sido la causa principal del golpe. Velasco tampoco respaldaba la idea de la creación de un nuevo partido ligado personalmente a una figura militar, por considerarlo como algo potencialmente divisorio, negativo y corruptor. En consecuencia, el gobierno eligió otra opción, una «organización auspiciada burocráticamente» (Stepan 1978) que denominó Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social SINAMOS («sin amos»), y que se convirtió en el brazo popular de la revolución en julio de 1971.

El principal objetivo del SINAMOS era «conseguir la participación consciente y activa de la población nacional en las tareas exigidas por el desarrollo económico y social». En otras palabras, su papel era movilizar un respaldo popular controlado para convertir la revolución en una realidad. Con este mandato, el SINAMOS

rápidamente creció hasta convertirse en la organización oficial más poderosa del gobierno revolucionario, con una compleja estructura piramidal conformada por un número de «técnicos» que oscilaba entre siete y ocho mil, inspirados por la dedicación y la disciplina necesarias para movilizar y canalizar el respaldo popular a la revolución. Dirigida por una serie de generales, la complicada estructura burocrática del SINAMOS llegaba hacia abajo hasta el nivel comunal, donde operaba fundamentalmente en las cooperativas agrarias, las comunidades industriales y, lo más importante, en los «pueblos jóvenes» alrededor de Lima (las barriadas, rebautizadas de ese modo por el gobierno de Velasco para mejorar su imagen ofensiva).

Fuera de ciertos casos en los pueblos jóvenes, el SINAMOS fue esencialmente un fracaso y se topó con una fuerte oposición desde diversos ámbitos. Los tecnócratas gubernamentales objetaron que inyectaba al proceso de planificación un impediente político, las comunidades rechazaban su manipulación desde afuera y los partidos políticos y sindicatos se opusieron a que se entrometiera en sus dominios locales. Resultó, además, que el SINAMOS no pudo controlar a muchos de los grupos de masas que organizó. Su creación reveló la orientación tecnocrática de los militares, así como su fuerte desconfianza de la política, los políticos y los sindicatos tradicionales.

Como ya señalé, el SINAMOS fue más eficaz en los asentamientos humanos que habían crecido enormemente, a medida que la migración interna de los pobres del campo se fue acelerando en el transcurso de las décadas de 1950 y 1960. Aunque este flujo migratorio llenó ciudades del interior como Piura, Huancayo y Arequipa de campesinos atraídos desde los «hinterlands» adyacentes, Lima recibió la masa más grande de emigrantes internos. En efecto, ya en 1970 alrededor de una tercera parte de los 3,5 millones de habitantes de la capital vivían en pueblos jóvenes. Estos asentamientos constituían urbanizaciones en vías de desarrollo, cuyos orígenes eran casi siempre ilegales y cuya ubicación estaba, por lo general, en la periferia de la ciudad. También eran el resultado de masivas invasiones de tierras como la que ocupó Comas, un nuevo distrito de Lima, en 1958. Esta invasión, la más grande en la historia de Lima, fue llevada a cabo, de una forma organizada, por unas diez mil personas en un lapso de cuarenta y ocho horas. En 1972, la población del distrito había eclosionado hasta formar una «ciudad» satélite de 173.000 habitantes.

Demográficamente, estas nuevas barriadas eran un microcosmos de la diversidad racial, étnica, lingüística y regional del país. En 1970, cuatro de cada cinco residentes en ellas habían nacido fuera de Lima y más de la mitad tenía menos de cuarenta años de edad. Muchos de ellos eran hablantes bilingües de quechua o aimara y español. El examen de un pueblo joven reveló que la cuarta parte de su población hablaba quechua. En este sentido puede hablarse

de la creciente «andinización» de Lima y de otras ciudades a medida que los habitantes del interior llegaban en número cada vez mayor a los pueblos jóvenes trayendo consigo su cultura. Étnicamente, la inmensa mayoría de sus habitantes se clasificaban (y todavía lo son) como cholos, un término urbano ligeramente desdeñoso y condescendiente para un indio inmigrante reciente o «urbanizado» (Dietz 1998: 107). Tal vez la marca distintiva de la cultura chola de Lima era su música, denominada «chicha», una combinación de la música del huayno o danza folklórica andina, y la cumbia colombiana. La producción y consumo de música chicha proliferó y se expandió a través de la radio juntamente con los valses, huaynos y yaravíes andinos y con la música criolla, como la marinera; a un ritmo semejante creció el número de compositores, músicos, cantantes y danzantes.

En respuesta a la explosión de los pueblos jóvenes en Lima y otros lugares en la década de 1970, el régimen de Velasco, además de cambiarles el nombre, creó una nueva agencia estatal para mejorar sus condiciones de vida y coordinar los esfuerzos para desarrollarlos. Sin embargo, para desalentar otras nuevas invasiones de propiedad privada, el gobierno militar adoptó una línea dura contra toda futura invasión de tierras. Con todo, las expectativas populares no pudieron ser contenidas por mucho tiempo y en mayo de 1971, miles de limeños pobres organizaron una invasión del distrito de Pamplona, que fue enfrentada violentamente por la policía. Tras un acuerdo de compromiso negociado entre el gobierno y la Iglesia, los invasores aceptaron mudarse a un nuevo lugar preparado por el gobierno llamado Villa El Salvador, que albergó más de cien mil habitantes en el lapso de un año. El gobierno inició, asimismo, una campaña para crear centros de desarrollo comunal en los pueblos jóvenes de Lima, abriendo más de mil en solo dos años en la capital y en otras grandes ciudades del país que brindaban una amplia gama de servicios sociales.

Los resultados de la creación de estos nuevos centros comunales por parte del gobierno fueron contradictorios. Por un lado, ellos reproducían y fomentaban el clientelismo que fue común en los regímenes oligárquicos de Odría y Prado. Del otro, provocaron una transformación revolucionaria al desatar sin querer «un movimiento popular incontrolado, que [con el tiempo] ayudaría a producir la caída del régimen militar mismo» (Stokes 1995: 36-37). Este movimiento se plasmó no sólo gracias al surgimiento espontáneo de organizaciones comunales participativas y autónomas de pobladores de los pueblos jóvenes, sino también por obra del SINAMOS, que organizó comités vecinales de autoayuda sumamente eficaces, vinculados al Estado.

Sin embargo, una vez que SINAMOS y el régimen colapsaron después de 1975, estas asociaciones de asentamientos tomaron vida propia. Como veremos, en la década de 1980 se convirtieron en genuinas organizaciones autónomas de base, capaces de enfrentarse a la que sería la más grande crisis económica y

social del siglo. Al mismo tiempo, muchas de ellas serían tomadas o replicadas por cuadros de los diversos partidos políticos, los marxistas en particular, o por los representantes progresistas de la Iglesia católica, que a menudo propugnaban la teología de la liberación.

Como era previsible, la Iglesia había establecido desde un principio una presencia importante en los asentamientos humanos. Inicialmente, la obra eclesiástica en estos lugares fue concebida como de tipo «misional», en tanto que la mayoría de los sacerdotes y del personal religioso que participaban en esta tarea eran extranjeros o financiados desde allí. Cada distrito tenía un grupo religioso específico a cargo, como los Padres de Maryknoll en Ciudad de Dios, o los jesuitas en El Agustino. Cada parroquia incluía además una serie de servicios en los pueblos jóvenes, entre ellos una posta médica, un comedor popular, un centro de capacitación vocacional y un centro educativo para niños. Este último era particularmente importante puesto que los inmigrantes andinos habían decidido trasladarse a la ciudad no solamente en busca de trabajo, sino también en pos de oportunidades educativas para sus hijos.

En 1968, el mismo año en que Velasco llegó al poder, la Iglesia nombró a Luis Bambarén, el progresista obispo auxiliar de Lima, como su principal representante en los pueblos jóvenes. No sorprende que ocasionalmente surgieran tensiones entre ambas entidades, dada la superposición desarrollista entre la Iglesia y el gobierno en los nuevos asentamientos, así como el hecho de que las parroquias pasaron a ser, a menudo, el punto focal de la comunidad. Un temprano ejemplo fue el breve arresto del obispo Bambarén, después de que éste expresara su solidaridad diciendo misa a los invasores de Pamplona en 1971.

Sin embargo, las relaciones entre la Iglesia y los militares reformistas fueron en general cordiales. En efecto, las reformas fueron respaldadas por la Iglesia durante los primeros años del gobierno de Velasco, al mismo tiempo que ellas reforzaban las tendencias progresistas que iban transformando a dicha institución. Estos cambios ocurridos en la Iglesia en las décadas de 1960 y 1970, al igual que los que se dieron en otras partes del continente, fueron estimulados por las encíclicas sociales de los papas Juan XXIII y Paulo VI, las reformas del Vaticano II en 1959, la difundida revolución de las expectativas crecientes, el arribo de misioneros extranjeros progresistas, la explosión demográfica de los asentamientos marginales y la difusión de la teología de la liberación. De hecho, esta última fue creación de Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano que fue asesor de la conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano celebrada en Medellín, Colombia, en 1968, y fue influyente en el desarrollo de su mensaje social para los católicos latinoamericanos en las cuestiones de justicia social, los derechos humanos y la dependencia económica.

Gutiérrez nació en 1928 en una familia limeña de clase media baja y se educó en la Universidad Mayor de San Marcos, donde estudió medicina y participó en Acción Católica, un grupo laico que promovía el desarrollo social. En 1950 ingresó al seminario de Santiago de Chile y posteriormente obtuvo una beca de estudio en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, donde uno de sus compañeros de estudios fue el sacerdote colombiano Camilo Torres, muerto posteriormente en 1966 como guerrillero izquierdista. Ordenado sacerdote en Lima en 1959, Gutiérrez se unió a la facultad de la Universidad Católica de Arequipa y se involucró con un grupo progresista de sacerdotes y laicos, que en 1968 comenzó a propugnar muchas de sus ideas sobre la teología de la liberación y la renovación progresiva de la Iglesia peruana. Tres años más tarde, publicó su célebre obra titulada *Teología de la liberación* (1971). El libro resultaba particularmente significativo porque su énfasis en que la misión de principio de la Iglesia latinoamericana era la justicia social para los pobres, venía a ser una suerte de declaración de independencia de la Iglesia con respecto a su dependencia histórica de Europa.

Un área en la cual la Iglesia fue cada vez más crítica frente al gobierno de Velasco fue la referente a sus tendencias autoritarias, las cuales salieron a la luz particularmente en asuntos relacionados con la prensa. Durante los primeros años el gobierno permitió una libertad de prensa relativa, dejando pasar ciertas críticas al régimen pero sólo dentro de ciertos límites. Sin embargo, las relaciones entre el gobierno y los principales diarios del país comenzaron a deteriorarse a medida que el ritmo de las reformas se aceleraba. Los diarios eran propiedad de familias oligárquicas prominentes que, como mostrase Gilbert (1979), habían usado sus periódicos tradicionalmente como vehículos para defender y promover sus intereses económicos, antes que como empresas lucrativas o como medios de comunicación imparciales y objetivos. El gobierno comenzó a decretar gradualmente medidas dirigidas a controlar la prensa, lo que llevó a la expropiación de *Expreso* y *Extra* en 1970.

Luego, en 1974, el gobierno expropió los cinco diarios nacionales restantes y decidió sus funciones editoriales, esto es los entregó a distintos sectores organizados de la sociedad. En general, los periódicos fueron entregados a representantes de diversos grupos socioeconómicos tales como el campesinado, los trabajadores industriales, los mineros, los habitantes de los pueblos jóvenes, los maestros e intelectuales. De este modo *El Comercio*, antes propiedad de la familia Miró Quesada, se convirtió en el diario de los campesinos, en tanto que los trabajadores de las comunidades industriales asumieron el control de *La Prensa*, de Pedro Beltrán. Pero solamente se cedieron a aquellas organizaciones populares reconocidas oficialmente por el gobierno.

Estas reformas de tipo corporativo de la esfera política se reflejaron en la reorganización del Estado a medida que éste se expandía al sector industrial,

mediante el proceso de nacionalización. Así, cada sector de la sociedad era supervisado por una plétora de ministerios nuevos o reorganizados, dirigidos por generales. Entre ellos estaban los de Agricultura, Educación, Pesquería, Alimentación, Industria y Comercio, Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. SINAMOS, por ejemplo, manejaba la Confederación Nacional Agraria (CNA), que creció explosivamente hasta alcanzar más de un millón de miembros, comprendiendo para 1977 a más de dos mil comunidades campesinas y quinientas cooperativas. Esta situación llevó a Stepan (1978) a describir el proceso de la revolución militar como la reorganización de lo organizado y la organización de lo apenas organizado.

Así como las relaciones de propiedad fueron reorganizadas en la agricultura, la industria experimentó una reestructuración paralela. En una serie de decretos diseñados para incrementar la producción y armonizar las relaciones entre los trabajadores y el capital, se creó la comunidad industrial (CI), tanto en el sector nacionalizado o estatal como en el privado. En éste último, por ejemplo, las compañías con más de seis trabajadores o $250.000 en ingresos brutos debían reinvertir las ganancias (en acciones) progresivamente a nombre de sus trabajadores y hasta el cincuenta por ciento de la propiedad; asimismo, debían ofrecerles un nivel conmensurable de participación en la administración y distribuir el diez por ciento de las ganancias directamente entre ellos. Por último, con las provisiones de la Nueva Ley General de Industrias se hizo difícil y hasta casi imposible que las compañías despidieran permanente o temporalmente a sus empleados (llegándose a una suerte de «estabilidad laboral»).

Con la implantación de la ley de reforma industrial, los trabajadores ganaron una participación importante en la propiedad de las compañías, así como una voz significativa en su administración. Sin embargo, no se logró materializar la esperada expansión de la producción y la moderación del conflicto entre trabajadores y capital; de hecho, el número y la intensidad de las huelgas aumentaron. Es más, el número de trabajadores incluidos en las nuevas CI, que sumaban 3.500 en 1973, resultó ser una minoría privilegiada del total de la fuerza laboral potencial. En el sector privado, por ejemplo, la siempre grande población subempleada y desempleada —el creciente sector informal inclusive— permaneció fuera de ellas. En cuanto al sector estatal, donde los trabajadores recibieron bonos antes que acciones en las empresas, apenas 200.000 de ellos, un 4,3 por ciento de la población económicamente activa, pertenecía a las CI en 1975.

Sin embargo, lo que no estaba claro era cómo se relacionarían los sindicatos con estas nuevas comunidades industriales de obreros, que ahora tenían una participación en la propiedad y la administración. Poco después de la organización de la CNA en el sector agrícola, el gobierno anunció la formación del Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), una federación sindical cooptada que reemplazaba a las organizaciones obreras existentes en el país. También se fundaron

«organizaciones paralelas» similares, leales al gobierno revolucionario, entre los trabajadores estatales, los maestros y otros sectores. El objetivo del gobierno, una vez más, era ejercer el control sobre tan importantes organizaciones de masas de trabajadores y campesinos, y así orquestar el respaldo popular a las reformas.

Una serie de investigadores han descrito el crecimiento avasallador del Estado durante el docenio como un «capitalismo de Estado» (Bollinger 1977; Fitzgerald 1976; Quijano 1971). Además de las reformas económicas descritas, el Estado asumió una posición significativa en los sectores industrial, financiero y comercial de la economía. El fin era, no desplazar la inversión privada o extranjera, sino más bien fortalecer áreas «estratégicas» que se consideraban importantes para el avance de la industrialización y el desarrollo del mercado interno.

La expansión económica del Estado estuvo dirigida, en su mayor parte, a las compañías extranjeras y se diseñó para que racionalizara la economía y redujera su supuesta dependencia. En ningún momento quiso el gobierno crear una economía dirigida centralmente, y siempre permaneció comprometido con una economía mixta «pluralista», con diversos tipos de empresas públicas creadas por el Estado. El gobierno asumió también una posición dominante en la comercialización internacional y doméstica a través de los monopolios estatales de las exportaciones minerales y la venta al por mayor de alimentos. Asimismo, obtuvo el control de la industria bancaria mediante la compra de acciones, para así poder dirigir la asignación del crédito; éste era considerado crucial para el plan de desarrollo del régimen y se pensaba, por ello, que no podía dejarse únicamente a merced de las fuerzas del mercado.

Aunque la intención del gobierno era que el Estado complementara la inversión privada en la economía, sus acciones tuvieron el efecto opuesto, asustando a los sectores privado y extranjero de sus planes de inversión. En consecuencia, el porcentaje de la inversión estatal en la economía aumentó de 29,8 en 1968 a 44 en 1973. Es más, el gobierno esperaba que el ingreso de las exportaciones primarias (fundamentalmente petróleo, cobre y harina de pescado) permitiría financiar las inversiones del Estado en la industria. Durante un tiempo los altos precios del azúcar, cobre y otras exportaciones, junto con un sustancial endeudamiento en el extranjero en anticipación de grandes ingresos petroleros procedentes de las nuevas inversiones hechas en exploraciones, sostuvieron al régimen en una fase inicial de «luna de miel».

De este modo, la deuda externa peruana creció de $945 millones en 1970 a $2.170 millones en 1974 y a $4.127 millones en 1976. Este incremento se debió en parte a la mayor disponibilidad de préstamos de bancos extranjeros ansiosos de reciclar sus petrodólares al Tercer Mundo, luego del embargo petrolero de 1973. En efecto, los préstamos extranjeros financiaron la revolución de Velasco (juntamente con los ingresos por las exportaciones), al mismo tiempo que servían para contrarrestar

el corte de crédito y asistencia de los Estados Unidos luego de la nacionalización de la IPC. Sólo después de que el Perú aceptara pagar $150 millones para arreglar todos los reclamos pendientes de la IPC y otras compañías estadounidenses con el llamado Acuerdo Greene, de 1974, consiguió que los préstamos de los EE.UU. estuvieran nuevamente a su disposición. Ellos fueron especialmente decisivos para terminar el estancado desarrollo exportador de las minas de cobre de Cuajone, antes propiedad de la Southern Peru Copper Corporation.

Otra gran reforma en las relaciones de propiedad, además de las cooperativas, las comunidades industriales y las empresas estatales, fue el área conocida como propiedad social, creada en abril de 1974. Ella constaría —por lo menos inicialmente— sólo de empresas nuevas de propiedad social, financiadas por el Estado pero sujetas a la autogestión, al reparto de las utilidades y a un gobierno democrático por parte de todos los trabajadores, temporales y permanentes. Una fuerte oposición, la creciente escasez de fondos de inversión públicos y la exigencia de que se aplicase la ley a las empresas ya existentes y no a nuevas, provocaron que las empresas de propiedad social quedaran sin ejecución una vez que Velasco fuese depuesto del cargo en 1975.

El impulso del movimiento de reformas se vio repentinamente sacudido en febrero de 1973, cuando el Presidente cayó gravemente enfermo con un aneurisma abdominal que requirió la amputación de su pierna derecha. Aunque retornó al trabajo en abril, la preocupación por su salud planteó la cuestión de la sucesión, perturbando las relaciones con su gabinete a medida que algunos miembros comenzaban a maniobrar para sacar ventajas. Al mismo tiempo que las esperanzas de una total recuperación se desvanecían, el Presidente fue perdiendo gradualmente contacto, primero con sus ministros y asesores, luego con los oficiales de mediano rango y los subalternos del ejército, su principal base de apoyo, y por último con la opinión pública en general. Es más, a medida que su salud seguía deteriorándose, su comportamiento se hizo cada vez más errático y su gobierno más personalista y arbitrario, sobre todo hacia finales de 1974.

A comienzos de dicho año, una recesión internacional, desatada por el embargo petrolero mundial de la OPEP de 1973, afectó adversamente a los ingresos peruanos procedentes de las exportaciones, de las que dependía tanto la revolución de Velasco. Hubo fuertes caídas en los precios mundiales del azúcar y el cobre, combinados con el mal rendimiento de la alguna vez próspera industria de harina de pescado. En consecuencia, los acreedores internacionales comenzaron a exigir que el gobierno impulsara un programa de austeridad, justo en un momento en que el ritmo de las reformas exigía un mayor gasto público y las expectativas de cambio en la opinión pública se aceleraban. La situación financiera se vio exacerbada por una serie de problemas económicos adicionales, entre ellos las enormes importaciones industriales y de alimentos, el gran gasto en armas

soviéticas, la renuencia a emprender una reforma tributaria y las inconsistentes políticas manufactureras.

Al deteriorarse la economía, el descontento laboral subió revirtiendo un periodo de paz relativa que había prevalecido desde 1968. Durante los primeros cuatro años del régimen velasquista, los salarios reales habían subido en veintiséis por ciento y el enfoque conciliador del gobierno con respecto a los trabajadores había ayudado a mantenerlos calmados. Casi dos mil sindicatos fueron reconocidos oficialmente por el gobierno entre 1968 y 1975, tantos como los que se habían institucionalizado en los treinta años anteriores. Es más, la ley de estabilidad laboral de 1970 había dado a los trabajadores cierto grado de seguridad al prohibir su despido después de tres meses de estar empleados. Sin embargo, cuando la economía empezó a declinar entre 1973 y 1975, los salarios reales cayeron nuevamente al nivel de 1968, en tanto que el número de huelgas en el país explotó hasta alcanzar niveles sin precedentes (779 en 1975).

A medida que el descontento laboral se incrementaba dramáticamente y la economía se deterioraba junto con la salud y el liderazgo de Velasco, la oposición conservadora civil y militar del régimen se fue intensificando. Esta oposición coincidió con manifestaciones de protesta popular en las calles contra el gobierno, por vez primera. Ellas culminaron en febrero de 1975, cuando una huelga sin precedentes de la Guardia Civil dejó a la ciudad virtualmente sin protección. Cuando el ejército respondió con un asalto con tanques al cuartel policial para romper la huelga, estallaron motines, acompañados por incendios y saqueos por toda la ciudad. Parte de la violencia, como la que se dio en las oficinas de diarios partidarios del gobierno, el cuartel general del SINAMOS y un club militar, estuvo dirigida contra el régimen. Cuando el ejército sofocó el motín, las bajas civiles y policiales sumaban 86 muertos y 155 heridos. Debido a estos sucesos, la confianza pública en el gobierno se desmoronó.

Dada la mala salud de Velasco y el disgusto por los motines, las conversaciones sobre una sucesión, que ya venían dándose en altos círculos del gobierno, comenzaron a intensificarse. Francisco Morales-Bermúdez, el ministro de hacienda y premier de Velasco, parecía ser la elección lógica. Hombre cauto y frugal, Morales-Bermúdez gozaba en general de una buena consideración entre sus colegas militares de todas las corrientes políticas. Inicialmente, se acordó en el gabinete que Velasco dejaría el gobierno formalmente el 3 de octubre y que transferiría la presidencia a Morales-Bermúdez, aunque se habló también de una fecha anterior. Morales-Bermúdez, sin embargo, no se contentó con esperar y preparó un «golpe precipitante» el 29 de agosto en Tacna, a donde había ido a conmemorar el aniversario de la devolución de dicha provincia al Perú por parte de Chile en 1929. Tras regresar a Lima al día siguiente, fue juramentado formalmente como presidente frente a una Junta reconstituida. Esto marcó el inicio de la llamada

Segunda Fase de la revolución de 1968 (1975-1980), basada en la promesa de Morales-Bermúdez de «profundizar y consolidar el proceso revolucionario».

Al final de los siete años de gobierno de Velasco, ¿cómo podemos evaluar la primera fase de la revolución? Ciertamente podría criticársele su naturaleza autoritaria y antidemocrática que lindaba con lo totalitario, como han sostenido algunos críticos. Sin embargo, estas tendencias podrían ignorarse si sus ambiciosos objetivos redistributivos y desarrollistas se hubiesen alcanzado. ¿Funcionó la reestructuración masiva del Estado y la sociedad? La respuesta, un cuarto de siglo después del evento, pareciera ser que no.

Por ejemplo, en lo que respecta a la redistribución de la riqueza y el ingreso, la brecha histórica entre los sectores tradicional y moderno —la costa y la sierra— que caracterizaba la estructura dual del Perú, no fue cerrada en ningún grado discernible. De hecho, fuera de la reforma agraria, el impulso principal de la revolución velasquista tuvo lugar en el sector moderno antes que en el tradicional. En el primero, la redistribución se produjo principalmente en las CI, donde los trabajadores recibían beneficios monetarios y de otro tipo. Sin embargo, el número de sus integrantes conformaba apenas el ocho por ciento de la fuerza laboral, pero estaban en el cuarto superior del ingreso nacional. Tal vez un dos por ciento del ingreso nacional fue transferido a este grupo de trabajadores de «élite», en tanto que la inmensa mayoría de ellos permanecían fuera de las CI y por lo tanto no era afectada por las reformas.

En cuanto a la reforma agraria, su impacto redistributivo fue un poco más allá, pero implicó, al igual que en el sector moderno, un resultado dual de ganadores y perdedores. Solamente ganaron aquellos trabajadores que fueron reorganizados en cooperativas, fundamentalmente los que residían en las más rentables haciendas costeñas, antes que en las arcaicas haciendas serranas. Asimismo, una parte considerable de los campesinos independientes y de los trabajadores temporales fueron relegados. De este modo la reforma, que redistribuyó alrededor de una tercera parte de las tierras cultivables del país, benefició a entre una cuarta y una tercera parte de la fuerza laboral rural, pero excluyó al resto. Es más, dado que la reforma agraria constituyó una reforma únicamente *dentro* del sector agrícola, que se caracterizaba por su baja productividad, y no una transferencia de recursos *a* este sector desde el sector moderno, su impacto global fue limitado: probablemente menos del uno por ciento del ingreso nacional total.

Las reformas de Velasco también resultaron decepcionantes en cuanto al crecimiento económico. Al concentrarse en el sector moderno y transferir el capital excedente del sector extranjero y sus aliados domésticos al fomento de la ISI, el gobierno había esperado tanto aminorar la dependencia como generar el crecimiento industrial. Sin embargo, esta esperanza jamás se materializó. El crecimiento industrial, en general, y las manufacturas, en particular, permanecieron,

según McClintock (en Gorman 1983: 15), aproximadamente igual en el periodo comprendido entre 1971-1975 que en el de 1961-1970. Una razón para ello fue el cese de las inversiones privadas y extranjeras, que habían estado cayendo como porcentaje del PNB desde la década de 1950 y que ahora fueron espantadas por el programa de nacionalizaciones del gobierno.

En ausencia de dichas inversiones, el gobierno se convirtió en el inversionista más importante. Hacia 1972 el Estado había ampliado tanto su papel en la economía que representaba más de la mitad de su inversión total. En lugar de ser una economía mixta, el Perú se movía rápidamente hacia un capitalismo de Estado. Al asumir fundamentalmente el Estado las empresas del sector extranjero, ellas no lograron generar utilidades, en parte porque siempre habían perdido dinero, habían sido severamente descapitalizadas anticipándose a la nacionalización, o por la corrupción y los malos manejos. Es más, la cuenta salarial del gobierno se incrementó agudamente debido a las crecientes expectativas y demandas hechas por los trabajadores de estas empresas.

Para financiar sus inmensas inversiones públicas, el gobierno recurrió a los mercados monetarios internacionales, cuadruplicando su deuda externa de $945 millones en 1970 a $4.127 millones en 1976, creando así una nueva «dependencia de deuda». Esta opción llegó a su fin en 1975, cuando los bancos internacionales revirtieron sus políticas de préstamos fáciles y exigieron austeridad a un gobierno y una economía que habían entrado en crisis. Inevitablemente, parecía ser que a pesar de las reformas, el Perú seguía dependiendo para crecer fundamentalmente del desarrollo del sector exportador. Durante los primeros años del régimen de Velasco los precios de las exportaciones, y por lo tanto las utilidades, se movieron cíclicamente hacia arriba, enmascarando el continuo estancamiento de la producción. Entonces, cuando los precios y utilidades cayeron, el país no pudo pagar su abultada cuenta de importaciones de alimentos y bienes de capital, el crecimiento de los gastos de defensa y el peso de una deuda externa cada vez más inmanejable debido a que se disparaban sus intereses.

Para liberarse de esta crisis en aumento, el gobierno apostó por dos exportaciones de minerales, el petróleo y el cobre. Las grandes esperanzas de encontrar depósitos de petróleo significativos, similares a los descubiertos en el vecino Ecuador a comienzos de la década de 1970, se desvanecieron al ubicarse apenas dos pozos nuevos relativamente modestos. Por su parte, el *retorno del potencial de las principales* minas de cobre, las de Cuajone y Cerro Verde era de más largo plazo y no podía alcanzarse a tiempo para contrarrestar la crisis de 1975. Esto dejó al gobierno sin otra alternativa que abandonar sus ambiciosas y costosas reformas y pasar a una segunda fase de austeridad y reducción de costos, para lo cual la enfermedad y los problemas políticos de Velasco simplemente despejaron el camino.

Capítulo XII

El retorno a la ortodoxia, la redemocratización y el populismo redivivo, 1975-1990

Morales-Bermúdez y la Segunda Fase, 1975-1980

Aunque no fue inmediatamente evidente, el golpe efectuado por el general Morales-Bermúdez deponiendo a Velasco en agosto de 1975, inició una fase más conservadora del gobierno militar. Aunque posteriormente ella fuera calificada por un prominente general progresista como «contrarrevolución», también puede considerarse como un cambio de rumbo del régimen, ahora conocido como la Segunda Fase para distinguirla de la primera, bajo Velasco. A pesar de que al inicio manifestó su intención de conservar la revolución en la misma dirección, sin «desviaciones ni personalismos», Morales-Bermúdez intentó mantener un curso medio entre los progresistas «velasquistas» de izquierda y los generales de derecha, que mostraban tendencias autoritarias similares a las de los regímenes militares de las vecinas Bolivia (Bánzer) y Chile (Pinochet). A diferencia de Velasco, el nuevo jefe de Estado buscó remozar el papel decisorio de la Junta, restando, al mismo tiempo, importancia a su propia posición para así incrementar las consultas entre las armas y armonizar los puntos de vista contrapuestos dentro de las fuerzas armadas.

Presionado por los Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política económica, Morales-Bermúdez, el ex ministro de hacienda fiscalmente conservador, comenzó a instituir medidas tendentes a la liberalización, esto es, a reducir el papel del Estado y al mismo tiempo a incrementar el de la economía de mercado. Hacer esto conllevaba un esfuerzo inicial para lograr que las empresas públicas fuesen más rentables y tomar medidas de austeridad para reducir el creciente déficit presupuestario, haciendo así frente al problema de pagar la deuda externa que ahora era de $4.000 millones, y fomentar una mayor inversión extranjera y privada. El nuevo gobierno pidió a los trabajadores y al público en general que aceptara sacrificios tales como la reducción de los subsidios estatales y del gasto social, necesarios, según planteaba, por el inicio

de una recesión global. Morales-Bermúdez sostuvo, asimismo, que una mayor austeridad era necesaria para «consolidar la revolución».

La liberalización fue extendida cautelosamente al ámbito político, a través de una apertura a los partidos tradicionales que Velasco había evitado. Morales-Bermúdez avanzó significativamente en este sentido durante un viaje a Trujillo en abril-mayo de 1976. Dejando de lado el hecho de que su padre había sido muerto por apristas en 1939, el Presidente cruzó la gran divisoria histórica entre las fuerzas armadas y el APRA, ofreciéndole la rama de olivo de la reconciliación. Sin embargo, el precio que Haya de la Torre puso al inicio de este diálogo con el gobierno fue insistir en la convocatoria a elecciones y el retorno del país al gobierno democrático y constitucional.

Haya podía darse el lujo de tales condiciones porque no obstante el ajuste generalizado del régimen, la situación económica del país siguió deteriorándose y también, por lo tanto, el respaldo público al gobierno. Ante una renovada presión del FMI y la banca privada internacional para que tomara medidas más efectivas para reducir la inflación y cortar el gasto público, Morales-Bermúdez anunció un drástico «paquete» de austeridad en junio que comprendía una devaluación de cuarenta y cuatro por ciento del sol, la eliminación del subsidio a la gasolina y a los alimentos de primera necesidad, y una reducción del trece por ciento del presupuesto nacional. Aunque el gobierno intentó amortiguar el impacto del paquete decretando un alza salarial, los incrementos no bastaban para paliar el alza global del costo de vida. El Presidente justificó posteriormente estas medidas argumentado que eran necesarias para restaurar la responsabilidad fiscal y estimular así una mayor inversión del sector privado y reabrir la economía a los mercados internacionales.

La reacción pública a esta «terapia de *shock*» fue rápida y violenta. Los transportistas de Lima iniciaron una huelga en respuesta al dramático incremento del precio de la gasolina, que rápidamente se convirtió en tres días de disturbios calmados únicamente con la declaración del estado de emergencia y la intervención del ejército. En consecuencia, el respaldo popular al gobierno militar colapsó virtualmente y rápidamente se sucedieron rebeliones de derecha e izquierda en el ejército. Aunque fueron prestamente suprimidas, los intentos de golpe dieron a Morales-Bermúdez el pretexto para deportar a varios civiles e izquierdistas provelasquistas y purgar a casi trescientos oficiales y los restantes integrantes progresistas del gabinete, reemplazándolos por miembros más conservadores.

El gobierno pasó rápidamente a desmantelar las reformas del periodo velasquista. El término «socialismo» fue significativamente abandonado por la retórica oficial, el Programa de Propiedad Social fue clausurado calladamente y se declaró oficialmente el final de la reforma agraria. El SINAMOS, la agencia que había estado a cargo del proyecto de movilización de Velasco, fue desactivado y

se cortó la alianza del régimen con el Partido Comunista (PC), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otros grupos de izquierda. Por último, Morales-Bermúdez alteró significativamente la ley de estabilidad laboral, otorgando a los empleadores el derecho a despedir trabajadores por razones de rentabilidad o comportamiento.

La nueva izquierda y las organizaciones de los sectores populares comenzaron a proliferar y a movilizarse en contra del gobierno a medida que el costo del programa de austeridad se trasladaba cada vez más a las clases trabajadoras y se abandonaban los objetivos y programas sociales de la era velasquista. Los orígenes de la nueva izquierda se remontan a la década de 1950 con la formación del APRA rebelde, que se convirtió en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una escisión del PC controlado por Moscú. Al mismo tiempo, varios grupos maoístas también rompieron con el PC en 1964, tras la tumultuosa ruptura chino-soviética del mundo comunista. Al año siguiente, los ex militantes de Acción Popular (AP) y diversos trotskistas y marxistas de las universidades formaron Vanguardia Revolucionaria (VR). Todos estos grupos tenían en común sus fuertes críticas al PC moscovita, que veían «congelado» en los viejos dogmas y tácticas (Adrianzén et ál. 1990). Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970 no lograron unirse alrededor de un solo líder o línea ideológica.

A finales de la década de 1970, la nueva izquierda estaba conformada por una multitud de estos y otros grupos, tal vez hasta veinte de ellos, que abarcaban un amplio espectro de ideas radicales, desde el maoísmo y la teoría de la dependencia, a la teología de la liberación y el social cristianismo que seguía agitando a la Iglesia, por no mencionar al «velasquismo», el sustento ideológico de las reformas de la Primera Fase. Muchos grupos operaban clandestinamente y buscaban reclutar estudiantes y subalternos a su causa particular.

Un ejemplo de las nuevas y emergentes organizaciones de base fue la Confederación Campesina del Perú (CCP), que surgió en la década de 1970 como la más grande federación campesina del país. La CCP, que contaba con 200.000 miembros en 1977, adoptó las tácticas obreras de huelgas e invasiones para apoyar las demandas de tierra de los campesinos excluidos de la reforma agraria. Hubo, por último, un renacimiento de las actividades de los largo tiempo tranquilos partidos políticos tradicionales, los cuales, con el levantamiento de la censura y el renacer de la prensa independiente, reclamaron la convocatoria de elecciones y el retorno al orden democrático.

Para comienzos de 1977, el régimen de Morales-Bermúdez estaba aislado y políticamente asediado en una serie de frentes: la creciente oposición pública se expresaba en protestas, huelgas y manifestaciones; el FMI insistía en medidas de austeridad aún más draconianas; y los generales de derecha buscaban seguir los ejemplos represivos de Pinochet en Chile o de los generales argentinos que

habían tomado el poder en Buenos Aires. Es más, iban apareciendo evidencias adicionales de una difundida corrupción desde el inicio de la revolución militar, con acusaciones de comisiones ilegales en la compra de armamento y el mal manejo de las empresas estatales. Morales-Bermúdez, siempre un realista pragmático preocupado por la conservación de la unidad institucional de las fuerzas armadas ante las crecientes divisiones y facciones, estaba ahora convencido de que debía retirar a los militares de las trincheras del conflicto político y llevarlos de vuelta a las de la defensa nacional. En efecto, esto significaba que debía sacar a las fuerzas armadas del gobierno y conducirlas a los cuarteles, y orquestar el retorno al gobierno civil.

En realidad, la cuestión de la defensa nacional se había hecho cada vez más importante desde la ruptura, en 1976, de las negociaciones entre Perú, Bolivia y Chile en torno a la histórica búsqueda de una salida al mar de la mediterránea Bolivia. La intención del régimen de Morales-Bermúdez de desplazar la política militar nuevamente a su actividad tradicional de preparación militar y salvaguarda de la soberanía nacional, coincidió con la adopción de una línea cada vez más dura frente a Chile, el tradicional antagonista del Perú en el Pacífico, hasta el punto de que el gobierno fabricó una amenaza de guerra a mediados de 1976, alegando que una invasión chilena era inminente. Esta manipulación de la opinión pública ayudó al régimen a desviar la atención de sus males políticos y económicos.

En febrero de 1977, el gobierno anunció su Plan Túpac Amaru, que convocaba a la elección de una asamblea constituyente, además de esbozar los objetivos económicos más conservadores del régimen. Aparentemente, la finalidad era incorporar las reformas de la era velasquista a una nueva constitución, pero en realidad su intención era preparar el camino para la transición a un gobierno democrático. Sin embargo, antes de que se realizaran las elecciones, el país se vio remecido por un masivo paro general en julio convocado por la revitalizada izquierda y las organizaciones populares, en respuesta a otro paquete de austeridad impuesto por el gobierno, inspirado por el FMI.

Para satisfacer las demandas de sus acreedores extranjeros de una política más estricta de reformas y reajustes económicos, y hacer frente a la crisis económica cada vez más profunda, el gobierno presentó en junio de 1977 un plan económico de emergencia que eliminaba los subsidios a los productos alimenticios de primera necesidad, congelaba los salarios y cortaba drásticamente el gasto estatal. En respuesta a estas medidas draconianas, la nueva izquierda convocó un paro general de un día. El resultado fue un masivo paro a nivel nacional, el más grande de su género desde 1919, casi medio siglo antes, que paralizó el país durante veinticuatro horas. Además de insuflar nueva vida a la oposición, el éxito del paro forzó al gobierno a acelerar su cronograma para la realización de las elecciones y la transferencia del poder a los civiles.

Rápidamente se emprendieron negociaciones con los partidos políticos sobre los plazos y los términos de las elecciones antes anunciadas para la asamblea constituyente. Tanto el APRA como el derechista Partido Popular Cristiano (PPC), que representaba a la comunidad empresarial, participaron en ellas, pero Belaunde, que seguía siendo el jefe titular de AP incluso mientras estaba exiliado en los Estados Unidos, se resistió. El insistía en la inmediata convocatoria a elecciones generales y su abstención resultó ser una astuta maniobra que proyectó su imagen, y la de AP, como la principal fuerza opositora a los militares y su revolución. La nueva izquierda tampoco participó en las negociaciones, pero se concentró en organizar la oposición desde las bases, entre los pobres urbanos de los pueblos jóvenes, organizaciones vecinales y en los centros de trabajo. Este grupo político criticaba no sólo la caída de los niveles de vida, sino la política gubernamental sumamente impopular de «disciplinar» a los trabajadores, que llevó al despido de miles de sindicalistas y otros activistas. La actitud desafiante de la nueva izquierda le ganó una amplia simpatía no solamente entre los trabajadores, sino también entre los pobres urbanos de los pueblos jóvenes.

Otro paquete de austeridad provocó un segundo paro nacional en mayo de 1978, poco antes de las elecciones programadas para junio. En protesta por las nuevas medidas y exigiendo la liberación de los dirigentes sindicales encarcelados, los trabajadores convocaron un paro de cuarenta y ocho horas que resultó tan exitoso como el anterior. Desafortunadamente, también se vio manchado por aún mayor violencia en las calles. Aunque el conflicto social creciente vivido durante la Segunda Fase fue un resultado inmediato de la continua serie de paquetes de austeridad gubernamentales, debe también verse en el contexto de la persistente caída económica del país desde 1973. Para 1977 y nuevamente en 1978, el PNB había caído al campo negativo, sintiéndose su impacto con mayor fuerza entre las clases populares. El desempleo oficial subió de 4,2 por ciento en 1973, antes de la recesión internacional inducida por el embargo petrolero, a 7,0 en 1978, y el subempleo llegó al cincuenta por ciento. Al mismo tiempo, según Mauceri (1996: 50), entre 1973 y 1979 los salarios reales cayeron a la mitad y el costo de vida se quintuplicó.

Dadas las dimensiones de la recesión económica y los niveles de conflicto social, las elecciones de junio no podían haber tenido lugar en un peor momento para el gobierno de Morales-Bermúdez. Y los resultados fueron sorprendentes. El APRA recibió el treinta y cinco por ciento de los votos; el PPC, beneficiándose de la abstención de AP, obtuvo veinticuatro por ciento; y la nueva izquierda un sustancial treinta y seis por ciento en sus múltiples agrupaciones. Además de mostrar la persistente fortaleza organizativa del APRA, la mayor sorpresa fue el giro sustancial del electorado hacia la izquierda. De hecho, la nueva izquierda ganó treinta y cuatro de las cien curules de la asamblea constituyente, aunque repartidas

entre seis partidos distintos (consolidados de veinte partidos antes de las elecciones). En cambio, el APRA ganó treinta y siete curules en el centro del espectro político. Las restantes veintinueve curules se dividieron entre cinco partidos agrupados en la derecha. Significativamente, la nueva izquierda había surgido como una fuerza importante en la nueva alineación política del país.

El gran desempeño del APRA permitió que Haya fuese elegido presidente de la asamblea constituyente, con la aprobación tácita de los militares. Esto marcó un hito histórico: la culminación de la larga lucha por el poder del viejo dirigente de ochenta y tres años de edad. La reconciliación se fundó en la aceptación por parte de Haya de las condiciones fijadas por el gobierno para la transferencia del poder: la restricción de los debates de la nueva asamblea a la codificación de las reformas de la Primera Fase, sin ninguna discusión de las políticas económicas y sociales del gobierno. Los militares, por su parte, frente al resurgimiento de la izquierda, veían ahora paradójicamente al APRA de modo favorable. Se trataba del único partido capaz de ejercer algo de control sobre las masas en un momento de austeridad económica, y ya no era considerado una potencial amenaza revolucionaria para el orden establecido, como lo había sido antes.

La asamblea constituyente resultó ser un triunfo para Haya. Finalmente, sus dotes conciliadoras y de estadista se lucieron del todo; irónicamente, cuando el viejo político, enfermo de cáncer, se aproximaba al final de su vida. Haya, estableciendo un equilibrio entre los extremos de derecha e izquierda, logró producir un documento que incorporó las principales reformas de la Primera Fase, concedió el sufragio universal a todo ciudadano de dieciocho años de edad o más, redujo el periodo presidencial de seis a cinco años sin contemplar la reelección, y limitó el ámbito de los militares en los asuntos nacionales. Esta última disposición fue tal vez la más significativa, ya que reducía el papel de las fuerzas armadas a «garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la república». La constitución de 1933 había encargado a los militares «garantizar la constitución y las leyes de la república, y la conservación del orden público», lo cual sirvió como la base legal para sus intervenciones en 1948, 1962 y 1968 (Masterson 1991: 266). En una escena dramática, Haya firmó la carta en su lecho de muerte el 12 de julio de 1979. En cuanto a las elecciones prometidas, estas fueron pospuestas hasta julio de 1980, en medio del continuo descenso del nivel de vida, la creciente militancia obrera y el avance político sin precedentes de la izquierda.

Dada la prominencia del APRA y de Haya en la exitosa asamblea constituyente, el partido parecía ser el favorito lógico antes de las elecciones. Sin embargo, el deceso de su máximo líder lo debilitó seriamente, así como a sus futuras posibilidades de ganar la presidencia. En palabras de un connotado sociólogo, «dada la estructura vertical del partido y el culto en torno a la personalidad de

Haya, los restantes dirigentes apristas no eran sino 'satélites' que giraban en torno a la estrella, iluminados por su luz y fortaleza» (Cotler en *CHLA* 1991, VIII: 484).

En el subsiguiente vacío de poder, Armando Villanueva del Campo, jefe del aparato administrativo aprista, logró ganar a su causa a los jóvenes apristas radicales y derrotar a su oponente más conservador, el parlamentario Andrés Townsend Ezcurra. Ambos representaban la guardia vieja dominante del partido, que seguía predominando principalmente debido a que Haya apenas hizo un tardío esfuerzo por llevar al primer plano a dirigentes jóvenes como Alan García Pérez, su secretario personal.

De otro lado, la reactivada izquierda prometía un buen desempeño, fortalecida por la creciente militancia obrera y la movilización popular de base de trabajadores no organizados en las pobladas barriadas de la capital. De hecho, los sindicatos tuvieron un papel prominente en forzar a los militares a regresar a los cuarteles, al haber orquestado varios paros generales exitosos durante la Segunda Fase. Sin embargo, su potencial en la campaña presidencial quedó severamente comprometido por su crónica tendencia a dividirse, y en última instancia la izquierda no logró unirse en torno a un único candidato o plataforma.

Dada esta situación, solamente quedaban dos partidos de centro-derecha: el PPC, encabezado por Luis Bedoya Reyes, y AP, de Fernando Belaunde. Al primero le había ido bien en las elecciones a la asamblea constituyente, ganando el 24 por ciento de los votos. Sin embargo, no podía esperar igualar dicha cifra puesto que ella estaba inflada con los votos emigrados de AP, que se había abstenido de participar. Por otro lado, Belaunde, a quien muchos descartaban como una posibilidad real, tuvo un retorno sorprendentemente exitoso a la política peruana luego de una docena de años en el exilio, enseñando en los Estados Unidos.

La campaña fue fundamentalmente una carrera de tres: Villanueva (APRA), Bedoya (PPC) y Belaunde (AP), con la izquierda dividida en cinco listas distintas. A diferencia de los esfuerzos de Villanueva por restar importancia a su imagen pública como el viejo líder de los «búfalos» —las infames fuerzas de choque del partido— y su aura de intolerancia e inflexibilidad, Belaunde buscó enfatizar su enfoque no doctrinario y pragmático —pero democrático y pluralista— del arte de gobernar. Haciendo campaña principalmente en el interior, Belaunde subrayó sus obras públicas pasadas y prometió políticas —intencionalmente vagas— con las cuales iniciar una expansión económica que crearía un millón de empleos y beneficiaría principalmente a las provincias. Al final, el ex presidente apareció como una benévola figura paterna de modales carismáticos y caballerosos, y un programa vago pero reconfortante que cautivaba a una población golpeada por años de conmociones revolucionarias y crisis económica.

Los resultados de las elecciones, en las cuales los analfabetos votaron por vez primera, incrementando el electorado en diecisiete por ciento, fueron sorprendentes

de varias formas. Belaunde ganó una mayoría sustancial de cuarenta y cinco por ciento, en tanto que el APRA experimentó una fuerte caída a veintisiete por ciento de su máximo de treinta y cinco por ciento alcanzado en 1978. Su descenso coincidió con el del PPC, que disminuyó de veinticuatro por ciento en 1978 a quince por ciento, y el de la fragmentada izquierda, que se desplomó a catorce por ciento, menos de la mitad de su votación en 1978. Los resultados podrían explicarse por la muerte de Haya y el fracaso de Villanueva en trascender su imagen dura y sectaria, así como por la incapacidad de la izquierda para unirse, dejando poca opción fuera del más moderado Belaunde, a quien se prefería al conservador y pro empresarial Bedoya.

El segundo gobierno de Belaunde y el surgimiento de Sendero Luminoso, 1980-1985

Belaunde volvió a la presidencia en 1980 para gobernar un país que había cambiado significativamente con respecto al que lo eligió por vez primera en 1963. En términos demográficos, la población peruana había explotado en las décadas de 1960 y 1970, prácticamente duplicándose entre 1960 (9,9 millones) y 1980 (17,3 millones). El incremento fue aún más notable en Lima-Callao, que pasó de albergar 1,8 millones en 1961 a 4,6 millones en 1981. Un tercio de la población nacional vivía ahora en el área de la gran Lima metropolitana, y casi la mitad tenía menos de veinte años de edad.

El flujo migratorio de las provincias a la capital siguió su curso aparentemente inexorable, estimulado por las dislocaciones de la reforma agraria y la búsqueda de oportunidades económicas. Una manifestación visible de este aumento eran los inmensos y desparramados pueblos jóvenes que rodeaban Lima en tres de sus lados. El incremento de la población urbana fue impresionante, pasando de representar un cuarenta y siete por ciento de la población a nivel nacional en 1961 a un sesenta y cinco por ciento en 1985. Lógicamente, ello implicó un proceso de «descampesinización», o reducción de la población campesina, en particular entre el campesinado servil, flotante y comunal que había sido mayoritariamente excluido de las reformas de Velasco.

Es más, las comprehensivas reformas del Docenio y sus repercusiones económicas habían dejado a la creciente población peruana en una condición cada vez más inestable. Para empezar, la industrialización dirigida por el Estado tuvo éxito en expandir el sector manufacturero, pero los esfuerzos reformistas militares por armonizar las relaciones entre los trabajadores y las empresas fracasaron en su mayor parte. Este fracaso abrió el camino a una mayor militancia sindical y a la ola de huelgas que aceleró la retirada de los militares del poder, emprendida por Morales-Bermúdez. En consecuencia, si Belaunde no lograba revertir la caída

en el nivel de vida, podía esperar que el descontento laboral minase su nuevo gobierno.

Aún más problemático resultaba el hecho de que si bien los sectores privilegiados de los obreros y el campesinado se habían beneficiado en términos relativos con las reformas industriales y agrarias de la década anterior, una parte aún mayor de la población se había quedado atrás. Ella seguía hundida en la pobreza pero sus expectativas habían crecido gracias a la retórica y las promesas del gobierno revolucionario. Mientras tanto, aunque se había quebrado el poder de la tradicional oligarquía terrateniente y minera, una nueva y poderosa clase de capitalistas, asociada con intereses estatales y extranjeros, surgió en su lugar. Por último, el mal funcionamiento global del sistema económico dominado por el Estado impulsaba, como veremos, el crecimiento explosivo del sector informal.

Todos estos cambios se dieron en el contexto de las crecientes expectativas populares de comienzos de la década de 1970. Ellas fueron luego quebradas abruptamente durante la Segunda Fase del gobierno militar, cuando en respuesta a la recesión internacional y a la caída en el precio de las materias primas, el gobierno de Morales-Bermúdez respondió con un giro de 180 grados para adoptar severas medidas de austeridad que deprimieron fuertemente los salarios reales. Esta «amputación» de las expectativas, coincidente con la apertura del sistema político a una transición democrática, desencadenó un amplio descontento, la politización y la movilización popular, lideradas por la nueva izquierda. Belaunde logró capear esta ola de problemas y llegar a la presidencia proyectando una imagen paternal que transmitía optimismo y esperanza, así como la promesa de más empleo y una economía mejor.

Una respuesta distinta al descontento de los peruanos fue calculada por Abimael Guzmán Reynoso, un oscuro profesor de filosofía en la remota ciudad universitaria de Ayacucho. Nacido fuera de matrimonio en 1934 en Arequipa (Mollendo), Guzmán fue criado por sus tíos hasta los doce años, después de que su madre falleciese y su padre se comprometiese con otra mujer. Posteriormente se reunió con él, un comerciante de clase media con quien se cree tuvo una tensa relación. Según McClintock (1998), esta difícil relación se debió tal vez a la posición secundaria que percibía en un hogar con otros *siblings* legítimos. El introvertido Guzmán asistió a una escuela secundaria jesuita local en Arequipa, donde sobresalió académicamente. Según él mismo, la rebelión del Callao de 1948 y el levantamiento de Arequipa de 1950 en contra del dictador Odría aguzaron su conciencia social.

Después de egresar de secundaria, Guzmán estudió filosofía en la Universidad de San Agustín de Arequipa. Allí cayó bajo la influencia de un investigador kantiano excéntrico pero intransigentemente riguroso, y de un pintor real-socialista y estalinista químicamente puro. Según Gorriti (1990: 16-17), Guzmán

adquirió tanto la estricta metodología y el ascetismo del uno, como la devoción al comunismo ortodoxo —tal como se desarrollase en China— del otro. Luego de graduarse en San Agustín en 1961 con una tesis sobre la teoría del espacio de Kant, y posteriormente en ese mismo año en derecho con una tesis sobre «El estado democrático-burgués», Guzmán ingresó como profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, en 1962. Fue reclutado personalmente por Efraín Morote Best, el rector de la universidad, juntamente con una serie de otros jóvenes y prometedores intelectuales extranjeros y urbanos.

Fundada en 1677, la Universidad de Huamanga o Ayacucho acababa de reabrirse en 1959 por vez primera en tres cuartos de siglo, desde el fin de la Guerra del Pacífico. La contratación de Guzmán coincidió con los esfuerzos del gobierno por reactivar la universidad y convertirla en un trampolín para el desarrollo de esta región remota y empobrecida; con este propósito se adjudicaron fondos para ampliar el cuerpo estudiantil y desarrollar una fuerte orientación vocacional, incluyendo proyectos de extensión y desarrollo rural. Los estudiantes provenían de un amplio espectro social, incluyendo un gran número con un pasado rural humilde. La reapertura de la universidad sirvió para despertar la sed de educación entre la población principalmente campesina de Ayacucho, hasta el punto en estallar una violenta reacción pública cuando Velasco intentó cortar el presupuesto de la universidad en 1969. De hecho, la expectativa popular del ascenso educativo se hizo tan intensa en la década de 1960, que el movimiento social más importante de la ciudad y la región fue no por reclamos de tierra, sino en defensa de la gratuidad de la enseñanza.

Al llegar a Ayacucho para iniciar su trabajo como profesor, Guzmán, ya un ferviente marxista, comenzó a predicar sus creencias en clase y a organizar un desafío radical al PC. En ese entonces, este era un «grupo dormilón conformado por personas que escuchaban Radio Moscú en onda corta y que se reunían los fines de semana para beber y alabar el último crecimiento reportado en la producción de lingotes de hierro de la Unión Soviética» (Gorriti 1990: 17). El PC no fue rival para el genio carismático y organizador de Guzmán, quien pasó a usar la universidad para reclutar, organizar y subsidiar la creación de una nueva vanguardia comunista.

Como era un profesor fascinante, Guzmán inmediatamente atrajo una devota tertulia de estudiantes receptivos a su mensaje de una transformación marxista revolucionaria. La mayoría eran integrantes de la primera generación de campesinos indios del campo circundante que asistía a la universidad. Muchos esperaban graduarse como maestros y aspiraban a superar las condiciones sociales y económicas de sus padres. Guzmán vio en ellos el vehículo ideal para forjar una relación revolucionaria entre el campo y la ciudad.



Abimael Guzmán, tal como apareciera en un panfleto partidario a finales de la década de 1980. Cortesía de Orin Starn.

La oportunidad de crear un PC alternativo se produjo gracias a la histórica ruptura chino-soviética de 1960 que resonó por toda Latinoamérica, incluyendo el Perú e incluso el remoto Ayacucho. En 1964 una facción pro china rompió con el PC de orientación moscovita, encabezado por su fundador y viejo dirigente Jorge del Prado. Guzmán apareció como el organizador local y líder de la facción de orientación pekinesa Bandera Roja, y en el campus adoptó el *nom de guerre* de Álvaro, tal vez por uno de los legendarios conquistadores del Perú. Delgado, con los cabellos largos e invariablemente vestido con un saco arrugado sin corbata, Guzmán tenía una aire intenso, sincero y de intelectual. A menudo era visto caminando por la universidad con libros bajo los brazos, seguido ansiosa y entusiastamente por un grupo de alumnos atentos a cada una de sus palabras. Un colega nada impresionado lo describió en forma nada halagadora como «seco, desagradable... siempre rodeado por sus acólitos —un grupo de cholitos adefesieros— con los cuales podía hablar de Camus, Schopenhauer, filosofía de *Selecciones*» (Gorriti 1990: 18). Conocido como un feroz combatiente político y un notable organizador partidario, Guzmán también era en parte un mujeriego que se sentía particularmente cómodo en compañía de damas.

En 1964, el profesor de veintinueve años contrajo matrimonio con Augusta La Torre, de dieciocho, hija de un terrateniente empobrecido que también era un dirigente comunista local. Ella habría de tener un papel fundamental en la organización de Guzmán, junto con varios otros reclutas de clase media, sobre todo blancos, extraídos de la universidad. Entre ellos figuraba Osmán Morote, un alumno de Guzmán cuyo padre había contratado al joven arequipeño y que posteriormente fue catedrático en la universidad. Guzmán trabó una relación estrecha con los Morote, una familia vieja y respetada en Ayacucho. Antonio Díaz Martínez, otro líder importante, era un profesor de agronomía en la universidad que creció en condiciones prósperas en Cajamarca, pero cuya educación tuvo lugar en Lima. El único de los dirigentes principales que no fue reclutado en Ayacucho fue Julio César Mezzich, procedente de una familia limeña de clase alta de origen checo.

Al estallar los movimientos guerrilleros en los Andes peruanos en 1964-1965, Guzmán se vio obligado a seguir la política pekinesa de no participación. En consecuencia, perdió a algunos de sus seguidores estudiantiles que se dirigieron a las montañas ansiosos por entrar en acción, a unirse a uno de los focos de tipo cubano. Subsidiado por Pekín, Guzmán aprovechó la oportunidad para viajar a la China de Mao en 1964, retornando nuevamente en 1967 cuando ésta se encontraba inmersa en las convulsiones de la Revolución cultural. En ese momento asistió a una escuela de cuadros en la capital, donde fue instruido en las doctrinas de la «guerra popular» y aprendió tácticas subversivas, enseñadas por un veterano de la lucha clandestina contra el Kuomintang. Posteriormente, escribiría sobre sus experiencias con explosivos en las aulas: «cogíamos nuestros lapiceros y estallaban. Luego nos sentamos sorprendidos y nuestros asientos también estallaron. Todo eran fuegos artificiales alrededor nuestro. Había sido medido cuidadosamente, sólo para hacernos ver que se puede volar todo si se es lo suficientemente ingenioso»: una lección que Guzmán no olvidaría (Gorriti 1990: 18).

Al regresar al Perú en 1967, cuando el último de los focos guerrilleros andinos iba siendo sofocado por los militares, Guzmán sostuvo —en conformidad con la crítica pekinesa— que el enfoque cubano era «una desviación militarista pequeño burguesa». Del mismo modo, tildó de exhibicionista al Che Guevara cuando este fue muerto mientras intentaba organizar un foco en Bolivia. Un año después, Guzmán volvió a ser contratado como profesor en la universidad y procedió a reorganizar su movimiento según su experiencia en China. Sin embargo, poco más tarde fue expulsado de Bandera Roja.

La expulsión se debió a un acalorado debate entre los partidos revolucionarios de izquierda a finales de la década de 1960. En el contexto de las reformas «velasquistas» y el respaldo del PC y de Moscú al gobierno, el debate giró en torno a cuán deseable era rechazar la revolución armada en favor de la cooperación con el esfuerzo reformista. De hecho, muchos viejos revolucionarios de izquierda, entre

ellos Héctor Béjar y Hugo Blanco, ya se habían unido al gobierno velasquista. Guzmán fue el único en rechazar esta posición.

Después de su expulsión, el aspirante a revolucionario pasó los siguientes dieciocho meses (1970-1971) reflexionando sobre sus experiencias en China y estudiando intensamente los escritos de Marx, Mao y Mariátegui. En febrero de 1970 formó el «Partido Comunista del Perú en el Sendero Luminoso de Mariátegui», el nombre que diese a su grupo estudiantil en la universidad a finales de la década de 1960. A partir de los escritos de Mariátegui y Mao, Guzmán quedó convencido de la primacía del campesinado en el proceso revolucionario. Ahora, criticaba al régimen velasquista como un «capitalismo burocrático» en medio de un país que seguía siendo esencialmente «semifeudal» y «semicolonial». Mao había descrito la China prerrevolucionaria exactamente del mismo modo. Para muchos, ese concepto apenas si parecía coincidir con el hecho de que la mayor parte de la población peruana vivía ahora en ciudades, o de que la industria representara un mayor porcentaje del PNB que la agricultura. Incluso en el campo andino, la mayoría de las comunidades había desarrollado vínculos comerciales con los mercados locales. Con todo, la descripción sí tenía algo de cierto en la futura base y campo de referencia de Guzmán: Ayacucho y la sierra sur.

La economía del departamento era mayormente agrícola, conformada sobre todo por agricultura de subsistencia, haciendas retrógradas y minería en pequeña escala. Sin embargo, la vieja clase gamonal se había debilitado significativamente con el éxodo de los hacendados, quienes incorrectamente esperaban la aplicación de la reforma agraria en la década de 1970, lo cual en realidad no sucedió. Sin una significativa base industrial o comercial y con una débil clase terrateniente, el departamento carecía de una élite económica fuerte. De hecho, su única «industria» real era la educación, siendo los alumnos de la universidad unos diez mil de los setenta mil habitantes de la ciudad. En este sentido, la universidad era para Ayacucho lo que la minería para Cerro de Pasco y el azúcar para La Libertad y Lambayeque. Semejante dependencia económica también explica la fuerte oleada de protestas populares organizadas por Guzmán y otros activistas a finales de la década de 1960, contra los esfuerzos del gobierno por cortar el presupuesto universitario.

Al mismo tiempo, Ayacucho, desdeñosamente conocido por los limeños como parte de «la mancha india», recibía un porcentaje insignificante del gasto gubernamental. De hecho, figuraba regularmente en la sima departamental del gasto del sector público. Este descuido generó un fuerte resentimiento contra la capital y la más dinámica costa, que se traduciría —al igual que los recortes hechos por el gobierno en el presupuesto de la universidad — en la simpatía popular por Sendero luminoso y su jefe. También contribuyó a convertir este departamento en uno de los más atrasados y pobres del país. La tasa de analfabetismo era de 68,5

por ciento, la de mortalidad infantil 12,8 por ciento, la más alta en el mundo, y la expectativa de vida promedio era de 51 años, una de las más bajas.

Los alumnos y seguidores de Guzmán en la universidad, claro está, provenían de este medio. Pero como aspirantes a maestros, la mayoría de ellos de antecedentes mestizos o indios, habían escogido una profesión mal remunerada y que, a menudo, dependía de presupuestos y posibilidades inciertas. Su susceptibilidad al mensaje revolucionario de Guzmán no se debía únicamente a que buscaban ansiosamente saber del mundo moderno, a través del cual esperaban abrirse camino a una vida mejor más allá de la aldea; querían también comprender las razones de su condición históricamente oprimida en la sociedad señorial que ahora, en ausencia de la antigua clase gamonal de los *mistis*, estaba sujeta a un nuevo grupo de opresores: los pequeños empresarios mestizos surgidos para llenar el vacío dejado por la partida de los hacendados.

En su búsqueda de la «verdad» se toparon con la versión simplificada que Guzmán daba de las doctrinas marxista-leninistas, transmitida con el fervor religioso de un verdadero creyente por lo que resultaba completamente convincente. Si la educación había de ser el vehículo que les liberaría de su pasada pobreza y un boleto al mundo moderno, también serviría para liberarles de su tradicional dominación y posición infinitamente inferior en la clase baja de la «mancha» india. Psicológicamente es posible que, como sugiere McClintock (1998), estos jóvenes seguidores de Guzmán encajen con el fenómeno de los seguidores de movimientos revolucionarios «sedientos de un ideal», en busca de un líder con el cual colmar sus propias necesidades.

Al mismo tiempo no sorprende, según señalase Degregori (en Palmer 1992), que la estructura social rígidamente jerárquica y la cultura política autoritaria que caracterizaba a los Andes del Sur se haya replicado en la relación entre el líder y los seguidores en Sendero Luminoso. Organizados en cuadros o células sumamente compactas, los miembros seguían órdenes dictadas de arriba hacia abajo a través de una rígida cadena de mando por Guzmán, quien propició un culto a la personalidad de tipo maoísta. Por otro lado, el partido ofrecía una potente fuente de identidad y pertenencia a sus jóvenes integrantes. En tanto se trataba de un culto fundamentalista y cuasireligioso de personas de opinión semejante orientadas a un objetivo, el partido brindaba la oportunidad de formar parte de una familia sumamente unida de auténticos creyentes, cuyas vidas adquirían un sentido, significado y esperanza en un futuro por lo demás incierto.

Sendero logró tomar la universidad brevemente a comienzos de la década de 1970. Para ese entonces se conocía a Guzmán como el Dr. Shampoo, por su habilidad para lavarle el cerebro a reclutas potenciales de su movimiento. Sin embargo, no podía permanecer en la sierra por un lapso prolongado por sufrir un serio desorden en la sangre. Para mediados de 1975 era evidente que las reformas

militares generadas por la Primera Fase habían comenzado a pasarle la factura al país. Pero ahora Sendero había perdido el control de la universidad frente a una alianza de partidos izquierdistas.

En respuesta, Guzmán, que renunció a su puesto como catedrático, ordenó a sus cuadros que pasaran al campo a intensificar el trabajo político en preparación de la insurgencia armada. Según Smith (en Palmer 1992), la estrategia mayor era eventualmente mover las operaciones más allá de Ayacucho, estableciendo un eje de control o influencia de sur a norte, a lo largo de la espina vertebral de los Andes. De este modo, Sendero buscaba «liberar» gradualmente territorios y población del control tenue y cada vez más ineficaz del Estado peruano. Con el tiempo, esta estrategia prepararía el camino para la repetición de la estrategia de Mao de cercar y eventualmente conquistar las ciudades más importantes, y el mismo Estado.

Temporalmente golpeado por el deceso de Mao en 1976 y la subsiguiente aparición del más conservador Deng Xiaoping en China, el partido reaccionó denigrando a Deng y sus colegas como «los perros que traicionaron la Revolución cultural». También comenzó a referirse a los restantes partidos comunistas del mundo, la Unión Soviética inclusive, como «revisionistas podridos». Al desdeñar a sus rivales comunistas, Sendero preparaba el camino para eventualmente afirmar que él y sólo él sería de ahí en adelante el centro de la revolución mundial. En la propaganda partidaria, Guzmán sería proclamado posteriormente con orgullo como la cuarta espada del comunismo después de Marx, Lenin y Mao. Entretanto, mientras el país iba a votar en su primera elección presidencial desde 1963, Sendero anunciaba sus intenciones revolucionarias mundiales en forma más modesta: incinerando las ánforas de votación en el pequeño pueblo andino de Chuschi, el 17 de mayo de 1980. Poco después, los limeños se despertaron con el extraño espectáculo de perros colgados de los postes de luz, con el eslogan «Muerte a los revisionistas».

Mientras que Sendero aparecía en público por vez primera, el recién electo Belaunde armaba el nuevo gobierno que llevaría a cabo su programa para liberalizar y revivir la economía. Era una tarea para la cual el bien intencionado —pero ideológicamente anticuado— ex presidente no estaba preparado en un país que simplemente había cambiado con demasiada rapidez y profundidad como para que él lo comprendiera. En las últimas dos décadas, «un desborde popular» (Matos Mar 1984) había engullido a Lima y otras ciudades, colapsando a sus servicios públicos e infraestructura económica. Esta situación creó una brecha cada vez más grande entre el Estado y la sociedad, que el electorado ahora esperaba que Belaunde y su nuevo gobierno cerraran. Infortunadamente, el nuevo presidente, según un analista, «proyectaba [cada vez más] una imagen de lejanía, e intencionalmente de una visión grandiosa e irrelevante ante la creciente crisis económica y social» (Graham 1992: 76).

Una de las manifestaciones más visibles y problemáticas del desborde popular fue la eclosión, a mediados de la década de 1970, de una economía de mercado «informal» o un mercado negro paralelo, fuera de los límites de las actividades empresariales normales y legales. Ella era la creación de peruanos que, individualmente o en pequeñas unidades familiares, enfrentaban creativamente los límites, las barreras y las disfunciones de la economía y el gobierno formales. Hacían eso «inventando» su propia producción, oportunidades de empleo y hasta sus servicios comunales para vérselas con una economía nacional cada vez más recesiva y sobrevivir a ella. El sector informal, que comprendía diversos tipos de autoempleo, abarcaba desde vendedores ambulantes a factorías o talleres pequeños e inclusive algunos grandes, que fabricaban productos y componentes baratos. La supervivencia también se vio facilitada con el monto creciente de artículos de contrabando que pasaba por puntos poco vigilados de la frontera, y que un ejército de ambulantes vendía en cada esquina de Lima y otras ciudades. Dado que el sector informal caía fuera del ámbito del gobierno, los «informales» no pagaban impuestos ni estaban reglamentados por el Estado.

La idea de la economía informal, juntamente con una prescripción sobre cómo uncir sus energías populistas, se hizo famosa con un libro influyente aunque controvertido del economista Hernando de Soto *et al*., titulado *El otro sendero: la revolución invisible en el Tercer Mundo* (1986). El libro incluía, asimismo, una poderosa crítica neoliberal y un ataque al modelo «estatista» que el Perú había adoptado bajo el régimen velasquista. De Soto estimaba que la mitad de los ciudadanos de Lima vivía en casas informales y que el ochenta por ciento iba a trabajar en un transporte masivo informal, en tanto que la mitad de la población peruana estaba empleada en este sector. Observó, además, que organizaciones voluntarias o informales construían la infraestructura de pistas, sistemas de alcantarillado y mercados en las ubicuas barriadas urbanas del país. Este crecimiento explosivo del sector informal se produjo, decía él, porque el Estado, con su laberinto de trámites burocráticos, había bloqueado sistemáticamente la iniciativa y el espíritu empresarial de personas que deseaban producir. Para probar esto, mostró que conseguir el permiso para abrir una pequeña fábrica de ropa costó a un grupo de sus investigadores 289 días útiles. Para De Soto, el Estado mismo era la causa principal de la pobreza y del sector informal, al bloquear el potencial de los pequeños productores.

En forma bastante controvertida pero plausible, De Soto sostuvo también que el sector informal era una respuesta popular a los esfuerzos de la élite por mantener a los campesinos fuera de las ciudades. «Las instituciones legales peruanas», dijo, «simplemente se desarrollaron a lo largo de los años para satisfacer las necesidades y fortalecer los privilegios de ciertos grupos dominantes en las ciudades y aislar a los campesinos geográficamente en las áreas rurales». De hecho, la élite hizo que

fuera casi imposible construir una casa, conseguir un trabajo o abrir un negocio legalmente a los recién llegados. Según De Soto, en la década de 1940 se propuso, incluso, en el Congreso exigir a los visitantes del campo que sacaran pasaportes antes de entrar a Lima.

No cabe duda de que una gran parte de los informales eran indios y mestizos económicamente desposeídos, que emigraron a las ciudades en el último cuarto de siglo. Pero fue precisamente a este sector al que Velasco intentó ayudar ostensiblemente con sus reformas populistas y políticas «estatistas», incluyendo los subsidios al consumo y las restricciones a las importaciones, la reforma agraria (para detener y revertir la emigración del campo a la ciudad) y los esfuerzos por forjar una identidad nacional más inclusiva (el reconocimiento del quechua como lengua oficial). Con todo, en la década de 1980 la economía informal del Perú había crecido hasta ser una de las más grandes y empobrecidas de cualquier país en América Latina. Para De Soto y otros neoliberales, este fenómeno sugería que el Estado, que había cuadruplicado su tamaño en la década anterior, seguía siendo la fuente de los problemas peruanos y no su solución, y era necesario reducirlo considerablemente.

Belaunde coincidía filosóficamente con las ideas del autor de *El otro sendero* y ahora de vuelta en el poder con una mayoría operativa en el congreso (AP/PPC tenían treinta y dos de sesenta senadores y ciento ocho de ciento ochenta diputados), comenzó a enfrentar este y otros problemas apremiantes. Entre ellos estaban las futuras relaciones con las fuerzas armadas, el reinicio del crecimiento económico, dar respuesta a las demandas de un sector popular movilizado, e identificar y diseñar una estrategia con la cual hacer frente a Sendero Luminoso. El primer problema parecía ser el más urgente y delicado, dado que Belaunde había sido depuesto por los militares. Pronto se llegó a un acuerdo que dejó mayormente intactas las estructuras de mando de las fuerzas armadas, a cambio del nombramiento de comandantes retirados leales a Belaunde antes de 1968 para que dirigieran las tres ramas principales de la institución. Este acuerdo implicaba que las relaciones cívico-militares por lo menos habían vuelto a su estado anterior a 1968. De este modo, los militares conservaron la autonomía de su presupuesto y las transferencias de armas, y siguieron inmiscuyéndose en ciertos campos de la política, en particular aquellos referidos a la seguridad interna y externa.

En lo que respecta a la política económica, el presidente revirtió su promesa electoral de iniciar la expansión económica de inmediato para así crear un millón de empleos. En lugar de eso, nombró como premier a Manuel Ulloa, su ex ministro de hacienda, quien llevó consigo un equipo de sus «Chicago Boys», embebidos en las doctrinas neoliberales del libre mercado de Milton Friedman de la Universidad de Chicago, donde la mayoría de ellos se había formado. La política que prescribieron estaba diseñada para remozar el mercado reduciendo la preponderancia económica del Estado, eliminando la protección arancelaria de las industrias y estimulando la

inversión privada extranjera. Con este fin, el nuevo gobierno decidió proseguir con las conservadoras políticas de estabilización del gobierno de Morales-Bermúdez, para así reducir la inflación y ganarse la confianza de los inversionistas. De hecho, el Perú retornó al modelo tradicional de liberalismo económico anterior a 1968, basado en un crecimiento de *laissez-faire* de orientación exportadora.

Ulloa calculaba que la continua recuperación de las exportaciones, que se venía dando desde 1978, sentaría las bases para que aproximadamente en un año se reiniciara el crecimiento y la creación de empleos. Su optimismo se basaba en un inesperado incremento de setenta y ocho por ciento en el índice de los precios de exportación entre 1978 y 1980, que había estimulado las exportaciones y mejorado los términos de intercambio. Sin embargo, buena parte de esta mejora se debía a la finalización de proyectos de la era velasquista en cobre (Cuajone) y petróleo (el oleoducto norperuano), que incrementaron la producción en un momento de alza de precios. Asimismo, este breve auge mejoró gracias a la producción ilícita de coca, estimulada por la demanda rápidamente creciente de los Estados Unidos. Ella no figuraba en el índice de exportaciones del gobierno, pero en 1982 alcanzó un estimado de $700 a $800 millones, siendo el artículo más exportado en dicho año. Con todo, incluso con estas tendencias aparentemente favorables, la tasa de crecimiento económico disminuyó de 4,5 por ciento en 1980 a menos de uno por ciento en 1982.

Momentáneamente, por lo menos, el gobierno tuvo una breve oportunidad para contener el déficit y sentar las bases fiscales para reiniciar el crecimiento de más largo plazo. La confianza inicial en el programa de liberalización y la mejora en la balanza de pagos, permitió a Ulloa conseguir una transfusión de préstamos procedentes de agencias y bancos internacionales con los cuales financiar la proclividad de Belaunde a los grandes programas de obras públicas y conseguir armas para mantener contentos a los militares. Asimismo, Ulloa tomó medidas para reducir aún más los subsidios a los consumidores y proseguir con una serie de devaluaciones de la moneda, estimulando aún más las exportaciones.

Al mismo tiempo, la mayoría gobiernista del Congreso concedió poderes especiales al Presidente para revertir las reformas del Docenio. Sin embargo, dado que la reforma agraria y la estabilidad laboral habían sido incorporadas a la nueva constitución, Belaunde únicamente pudo hacer más estrictas las regulaciones que regían a las cooperativas agrícolas. Además, se vendieron algunas pequeñas compañías controladas por el Estado, pero las más grandes permanecieron intactas, fundamentalmente por falta de compradores. Mayor éxito tuvo el esfuerzo hecho por el Presidente, iniciado por Morales-Bermúdez, de reducir el número de empleados gubernamentales, de modo tal que en algunos ministerios se prescindió hasta del setenta por ciento de la fuerza laboral. Por otro lado, aunque esto ayudó a la política del gobierno de reducción general del presupuesto, con el

tiempo, como mostrase Mauceri (1996), la pérdida de experiencia representada por estos empleados contribuyó significativamente a un severo debilitamiento de la capacidad del Estado para desempeñar sus funciones.

A finales de 1982, el plan de liberalización de Ulloa no había logrado producir el efecto deseado. El PBI apenas había subido 1,8 por ciento y resultaba en realidad negativo sobre una base per cápita. La agricultura siguió teniendo un pobre desempeño, la minería se estancó y la industria cayó después de una breve alza del cinco por ciento en 1980 debido al ingreso de importaciones (los aranceles se rebajaron a la mitad, de sesenta y seis a treinta y dos por ciento), encabezadas por los textiles. Es más, las exportaciones cayeron a medida que la demanda y los precios internacionales se debilitaban, sobre todo los de los minerales, en tanto que las importaciones subían. Ello provocó una marcada inversión adversa en los términos de intercambio, de +21 por ciento en 1980 a –17 por ciento en 1981, y la reaparición de los problemas del déficit comercial y de balanza de pagos. Por último, la inflación comenzó a acelerarse y los préstamos internacionales desaparecieron en la segunda mitad de 1982, luego de que México incumpliera los pagos de su deuda y estallara la crisis de la deuda latinoamericana.

Ulloa renunció en diciembre de 1982 debido a estos malos resultados y a que la confianza iba desvaneciéndose, siendo reemplazado por Carlos Rodríguez Pastor, un banquero de la Wells Fargo. El nuevo ministro de economía no encontró otra alternativa que aceptar un programa de ajuste estructural ordenado por el FMI-Banco Mundial a cambio de $500 millones en préstamos de *standby*. Pero incluso cuando el plan de estabilización iba tomando forma, éste fue minado por el estilo patrimonial y los grandiosos proyectos de obras públicas de Belaunde. El Presidente, siguiendo las prácticas honradas por el tiempo del clientelismo y el patronazgo, siguió inflando la planilla pública con seguidores y amigos como recompensa a su lealtad y respaldo. Al mismo tiempo, siguió adelante con costosos pero cuestionables proyectos de obras públicas, como su querida marginal de la selva, paralizada durante el Docenio.

El nuevo programa de estabilización sufrió otro golpe a manos de la madre naturaleza. Una serie de desastres naturales azotaron al Perú a comienzos de 1983, justo cuando se cortaba el gasto público y el crédito se hacía más difícil. La aparición de la corriente El Niño en la costa alteró los patrones normales del clima, produciendo severas inundaciones en el norte y una prolongada sequía a mediados de año en el sur. Este clima disminuyó la producción agrícola y forzó al gobierno a emprender costosas importaciones y programas de asistencia a la zona de desastre. Estas catástrofes naturales, junto con la reducción de los subsidios al consumidor que constituían parte del programa de austeridad, provocó que el precio de los productos de primera necesidad se dispararan. Por último, la ausencia de la Corriente peruana hizo que la anchoveta desapareciera del océano Pacífico y

que la exportación de harina de pescado colapsara. Las pérdidas en esta industria sumaron $10 millones, y $42 millones las del algodón y el azúcar.

En la segunda mitad de 1983, la furia de la naturaleza, el impacto del plan de ajuste y el inicio de la recesión global, que causó una fuerte caída en las exportaciones, se combinaron para empujar a la economía peruana a una depresión. En los dos años siguientes, las ganancias por las exportaciones descendieron a cincuenta por ciento del nivel alcanzado en 1979 y el PNB cayó en doce por ciento. Más específicamente, la producción industrial disminuyó veintiuno por ciento, la inversión privada treinta y cuatro por ciento y los salarios reales treinta y uno por ciento, en tanto que el ingreso per cápita llegó al nivel de 1960. Al mismo tiempo, la inflación se duplicó a una tasa anual de 111 por ciento, y el desempleo se disparó oficialmente a un dieciocho por ciento, cifra probablemente subvaluada. En cuanto al sector informal, un índice —el subempleo— saltó a un estimado de sesenta y cuatro por ciento.

Los más golpeados por la intensificación de la crisis económica, que según un prominente historiador era la peor desde el final de la Guerra del Pacífico cien años antes, fueron los grupos de bajos ingresos, sobre todo los pobres urbanos y el campesinado de la sierra sur. Según un estudio, el ingreso del cincuenta y siete por ciento de las unidades domésticas en el campo se encontraba debajo de la línea de pobreza, en tanto que el treinta y dos por ciento estaba debajo del nivel de la pobreza extrema. Al mismo tiempo, la riqueza, luego de experimentar cierta nivelación en la época de Velasco, se fue reconcentrando en unas cuantas manos. En consecuencia, el Perú siguió figurando como uno de los países latinoamericanos con la distribución más desigual del ingreso. Es más, un mapa de la pobreza del país, trazado por el Banco Central, reveló la brecha persistente en el PNB per cápita entre el moderno sector costeño y la sierra más atrasada, cuyo ingreso per cápita tenía una correlación casi exacta con los índices más elevados de analfabetismo, mortalidad infantil y bajas tasas de esperanza de vida.

Los esfuerzos de Belaunde por enfrentar estas disparidades y los sufrimientos cada vez mayores de los pobres, resultaron generalmente inadecuados. La continua austeridad implicaba cortes en el gasto social y en los subsidios a los consumidores, que empeoraban el círculo cada vez más amplio de la pobreza en lugar de mejorarlo. El cese de los préstamos internacionales había detenido casi por completo el programa de obras públicas del Presidente, afectando a la industria de la construcción y a miles de trabajadores que fueron despedidos. Al mismo tiempo, su énfasis en la educación incrementó la matrícula escolar en un millón de alumnos entre 1980 y 1983, número muy por encima de cifras comparables para otros países latinoamericanos más prósperos. Sin embargo, esta tendencia únicamente sirvió para elevar el potencial de radicalización y movilización política, en un momento en el cual la economía se contraía fuertemente y el empleo y

las oportunidades desaparecían velozmente. Incluso la política de Belaunde de elevar el ingreso agrícola, permitiendo que los precios subieran según el mercado, resultó finalmente contraproducente, al permitirse que las importaciones baratas de alimentos minaran la producción y el precio de los cultivos tradicionales peruanos, incluso el de la nativa papa andina.

A medida que las condiciones empeoraban, el descontento social se incrementaba y varios paros nacionales estallaron en las ciudades y el campo. Es más, el crimen en las calles y la violencia social y política crecieron al mismo ritmo. Por ejemplo, el número de crímenes reportados subió de 123.230 en 1980 a 152.561 en 1985. Se hicieron más frecuentes actos terroristas tales como los asesinatos políticos por parte de Sendero Luminoso, así como el secuestro de empresarios y otras personas acaudaladas: la marca de un nuevo grupo llamado el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El MRTA tomó su nombre del rebelde dieciochesco que encabezó un masivo levantamiento indígena en contra de la corona española y que fue descuartizado en el Cuzco en 1782. A diferencia del maoísta Sendero Luminoso, el MRTA, que comenzó sus operaciones a mediados de 1984, estaba inspirado en la Revolución cubana de 1959, en particular en la estrategia «foquista» del Che Guevara. Sus orígenes se remontaban a pequeños grupos de izquierda escindidos que no habían sido absorbidos por Izquierda Unida (IU), organizada en 1980, como luego veremos, y que contaban con vínculos remotos con el APRA Rebelde de la década de 1960, y el velasquista Partido Socialista Revolucionario (PSR) de la década de 1970.

Aunque recibió entrenamiento y respaldo en Cuba, el MRTA era fundamentalmente nacionalista; de forma tradicional, identificaba al imperialismo, sobre todo a los Estados Unidos, como el principal enemigo; y extraía sus líderes de la clase media urbana, sobre todo entre los universitarios. Su supuesto estratégico subyacente consistía en la idea de que, bajo el tambaleante Belaunde, el gobierno democrático duraría poco y un golpe militar forzaría a IU a pasar a la oposición armada, y por lo tanto, a los brazos del MRTA. Los primeros blancos de sus ataques con explosivos en la capital incluyeron la Embajada estadounidense, el Citibank y restaurantes de Kentucky Fried Chicken. Se estima que en su momento cumbre, a mediados de la década de 1980, el movimiento contó con unos tres mil guerrilleros en el campo.

A medida que las condiciones sociales y económicas se iban deteriorando, se hizo inevitable una reacción política contra el Presidente y sus medidas. Ella llegó en las elecciones municipales de 1983, cuando Alfonso Barrantes, la cabeza de la recién creada IU, fue elegido como el primer alcalde marxista de Lima. Los orígenes de IU se remontaban a la transición a la democracia en 1980, cuando los partidos marxistas tradicionales del país decidieron tomar el camino electoral al poder.

Paradójicamente, esta decisión abrió la vía revolucionaria al más fundamentalista y extremista Sendero Lumino, uno de los pocos grupos que seguía comprometido con la lucha armada. Sin embargo, cada vez fue más claro que para competir eficazmente en la arena electoral, la plétora de partidos y facciones izquierdistas tendría que conformar algún tipo de frente unido. Barrantes, un ex aprista, logró este objetivo en 1981, fundando IU y logrando juntar una gama de moscovitas, maoístas, guevaristas y cristianos social-progresistas.

En su elección como alcalde dos años más tarde, Barrantes tuvo una gran votación en las barriadas y distritos obreros de Lima, que ahora daban cuenta de la mitad de los votos de la capital. IU también ganó la mayoría de las alcaldías en la sierra centro y sur. En cuanto al APRA, éste mostró una fuerte recuperación a nivel nacional de su opaco desempeño en las elecciones presidenciales de 1980, recogiendo el treinta y cuatro por ciento del voto popular, seguido por IU con treinta por ciento. En cambio, AP únicamente recibió el doce por ciento en Lima y el quince por ciento a nivel nacional. Juntos, el APRA e IU consiguieron un abrumador sesenta y tres por ciento de la votación, contra el treinta y dos por ciento de la coalición gobernante de AP y el PPC.

Ambas agrupaciones ganaron bastante atacando la política económica del gobierno «orientada al extranjero» y su falta de «sensibilidad social» por los pobres y los desempleados. Asimismo, declararon su oposición al pago de la deuda externa y presionaron para lograr una política de «reactivación económica» inmediata. Sin embargo, la recuperación electoral de la izquierda con respecto a su debacle de 1980, no se debió únicamente a la crisis económica, sino al exitoso esfuerzo de unir diversos partidos y facciones en IU, con una única lista de candidatos. La rehabilitación del APRA puede, asimismo, atribuirse al surgimiento de una nueva generación de dirigentes, encabezados por su secretario Alan García Pérez, quien abrió el partido a nuevos sectores y regiones. Haciendo un llamado moderadamente progresista a favor del cambio, el nuevo APRA liderado por García buscó captar exitosamente a sectores de la clase media desilusionados con Belaunde y que deseaban un cambio social, pero que temían al ascenso de la izquierda marxista.

Belaunde también sufrió un creciente descontento interno dentro de su propia administración y partido proveniente principalmente de los representantes provinciales de AP, quienes resentían el predominio de los «Chicago Boys» y del «ala internacionalista» del partido en lo que respecta a la economía. Esta política, sostenían, favorecía los intereses de las grandes empresas concentradas en Lima, pero ignoraba los problemas del desarrollo regional del cual Belaunde tanto había hablado al promover su candidatura en 1980.

Con un gobierno incapaz o sin interés por brindar mayores servicios sociales ante el deterioro de las condiciones socioeconómicas, las actividades de las organizaciones populares de base y autoayuda se intensificaron en los distritos

marginales de la capital. Ya vimos que el surgimiento de estas organizaciones en la década de 1970 en los pueblos jóvenes tenía su origen en las organizaciones que llevaban a cabo las invasiones de tierras, y en los esfuerzos tanto de la Iglesia como del Estado por brindar servicios a estas ciudades satélite que crecían explosivamente a nivel demográfico. Los esfuerzos estatales a favor de los residentes de los pueblos jóvenes disminuyeron precipitadamente después de la caída de Velasco y de que las reformas militares llegaran a su fin.

Tras la democratización, los partidos políticos, sobre todo el APRA y la izquierda, así como las organizaciones no gubernamentales (ONG), pasaron a llenar el vacío. Los primeros obviamente vieron una oportunidad política para organizar y reclutar seguidores al reemplazar, por parcialmente que fuera, la presencia estatal en los pueblos jóvenes. Aún más, las filas de los trabajadores organizados ya comenzaban a ralear debido a la incapacidad de sus dirigentes para impedir los despidos masivos que se iban haciendo cada vez peores a medida que se agravaba la crisis económica de la década de 1980. Al entrar a los pueblos jóvenes, la izquierda y los trabajadores buscaban reabastecer su decreciente base política a través de los esfuerzos por ayudar y captar seguidores en el creciente sector informal de la economía, ubicado en esas zonas.

Un ejemplo sumamente exitoso fue el Programa del Vaso de Leche, impulsado en 1984 por la municipalidad de Lima, controlada por la izquierda y el alcalde de IU, Alfonso Barrantes. El programa garantizaba un vaso de leche diario para cada niño e involucraba a la comunidad en una amplia red de distribución basada en los Comités de Vaso de Leche (CVL) locales, abiertos en el ámbito distrital. En 1988 había 7.458 CVL tan solo en Lima.

Al mismo tiempo, existen numerosos ejemplos de la respuesta espontánea de la población frente al deterioro de las condiciones económicas y sociales en los pueblos jóvenes. ¿Acaso al verse enfrentados con una crisis, los peruanos no habían adoptado creativamente el sector informal como una forma de sobrevivir a la caída del sector formal? Del mismo modo, los residentes de los pueblos jóvenes, encabezados a menudo por mujeres, respondieron creando organizaciones vecinales cooperativas de autoayuda para así hacer frente a la crisis económica. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1980 proliferaron las «cocinas populares» en los barrios de los pueblos jóvenes, organizadas y administradas por mujeres que compraban alimentos en gran número y preparaban grupalmente comidas de bajo precio para los integrantes de la colectividad. Frecuentemente asistidas por ONG, la Iglesia y las agencias de asistencia internacionales, mas no por el gobierno, las cocinas populares se propagaron en Lima y por todo el país, de modo que en 1988 había 643 tan solo en la capital. Al mismo tiempo, surgió un pequeño grupo de mujeres dirigentes políticas en los pueblos jóvenes, como Esther Moreno, quien fuera alcaldesa de Independencia de 1983 a 1989.

Esta tendencia era un reflejo de la cada vez más activa presencia de las mujeres en diversos niveles de la sociedad peruana durante las décadas de 1970 y 1980. De hecho, en este momento surgió un movimiento femenino que incluía activistas políticas de los partidos, mujeres de los barrios y feministas de clase media, muchas de las cuales eran el producto de la expansión del sistema universitario en las décadas de 1950 y 1960. La universidad se había convertido en un punto focal para las nuevas formas de expresión y activismo de las estudiantes, promoviendo, entre otras cosas, la igualdad y una mayor participación de las mujeres en la sociedad. Este componente de clase media del emergente movimiento de mujeres podía remontar sus raíces hasta comienzos de siglo, e incluso antes.

Por ejemplo, Denegri (1996) y otros autores han resaltado a un grupo de escritoras surgidas en la segunda mitad del siglo XIX, que insistían en el derecho de las mujeres a contar con una mejor educación, a ser oídas en la esfera pública y a tomar la pluma además de la maternidad. Entre ellas estaban la periodista Carolina Freyre de Jaimes, quien dirigiera en Lima la revista femenina *El Álbum* en las décadas de 1860 y 1870 (lo que sugiere un público femenino); la novelista Juana Manuela Gorriti, una contribuyente regular de la revista y una temprana feminista; y la cuzqueña Clorinda Matto de Turner, la fundadora de la novela indigenista, pero que también preparó un libro de texto para la enseñanza de literatura al «bello sexo».

Sin embargo, la madre del movimiento femenino moderno del Perú fue la activista aprista Magda Portal (1903-1989). Según Castro-Klarén, «ella definió un nuevo perfil para la mujer como política y escritora». Su autobiografía *Ser mujer en el Perú* (1979) narra sus luchas por incorporar importantes reivindicaciones feministas al programa del partido en la década de 1930, tales como el derecho al sufragio; ellas rindieron fruto veinte años más tarde, cuando las mujeres ganaron el derecho a votar y se les concedió el ingreso a las fuerzas armadas.

Como señala Blondet (1995), a mediados de la década de 1970 el movimiento femenino bebía intelectualmente de varias fuentes nuevas, entre ellas el discurso feminista de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer (1975) en México y la teología de la liberación, sobre todo la conferencia de los obispos en Puebla en 1979, así como la continua influencia de diversos movimientos revolucionarios en Cuba y China, y la izquierda política en general. Trabajando juntas o por separado, las mujeres de las barriadas, las feministas de clase media y las activistas políticas comenzaron a manifestarse públicamente en pos del cambio. Sus protestas se vincularon con la crisis económica de la Segunda Fase e incluían demandas de mejores condiciones de vida, subsidios y provisiones alimenticias para sus nacientes organizaciones, y el fin a la violencia doméstica. En un sentido más amplio también estaban relacionadas, claro está, con asuntos derivados de los cambios sociales

generales asociados con la modernización, que impulsaban a la mujer fuera del hogar y de su tradicional papel doméstico, y hacia el mercado laboral.

Las mujeres, en particular, tenían cada vez más un papel dirigente en las organizaciones cívicas de base de todo el país. Ellas se ocupaban fundamentalmente de las cuestiones prácticas de la vida, tales como la supervivencia económica, los derechos humanos y el desplazamiento y la supervivencia en una sociedad asolada por la guerra, y adoptaban una serie de formas institucionales, tales como clubes y federaciones de madres, asociaciones de migrantes, talleres de empleo comunal y cocinas comunales. Muchas de ellas fueron asimismo asistidas por ONG y proyectos comunales. Con el tiempo, los partidos políticos, al igual que el Estado, también tomaron nota de estos grupos y organizaciones de base fundados en el género, y comenzaron a establecer útiles relaciones con ellas.

A medida que la crisis económica y social se agudizaba después de pasada la mitad del gobierno de Belaunde, el gobierno tuvo que hacer frente al desafío cada vez más grande de Sendero Luminoso. Desde que irrumpiera en escena en 1980, Sendero había avanzado considerablemente en la captación de seguidores y en la implantación de la violencia y la destrucción en Ayacucho. Dos años más tarde, según algunas estimaciones, ganó el control de un ochenta y cinco por ciento de las provincias norteñas y centrales del departamento. En 1982, las huestes senderistas, mostrando su creciente poder, efectuaron un ataque espectacular a la prisión más importante de Ayacucho y liberaron a docenas de sus prisioneros. Otro indicio de su avance fue la presencia de más de diez mil simpatizantes en la ciudad de Ayacucho durante el funeral de Edith Lagos, una dirigente senderista muerta y otro ejemplo de la cada vez mayor participación de las mujeres en la esfera política. Estimulado por su éxito, Sendero celebró su segunda Conferencia Nacional en la clandestinidad y comenzó a preparar la siguiente etapa de su «guerra de guerrillas», para ampliar la base revolucionaria fuera de Ayacucho y fortalecer su ejército.

Este éxito inicial coincidió con la «crisis de subsistencia» que asolaba cada vez más al campesinado de las regiones más empobrecidas de la sierra sur. La presión demográfica de larga duración y las más recientes perturbaciones en la producción, provocadas por la reforma agraria y los desastres naturales, forzaron a un creciente número de campesinos a dejar sus comunidades y unirse al éxodo migratorio en busca de trabajo. La difusión de la dislocación y la cada vez más profunda pauperización produjeron un «dolor y descontento explosivos» entre algunos sectores del campesinado, haciéndolos más receptivos a los cantos de sirena del mensaje senderista.

Para ese entonces, una segunda ola de reclutas procedentes de la escuela secundaria y en algunos casos primaria, sobre todo de familias campesinas, ingresaba a sus filas. Ellos conformaban lo que un investigador denominó una

«masa descartable», impresionable y en busca de una identidad, crítica de las «costumbres arcaicas» de la generación de sus padres. Atrapados entre dos mundos, «ahora no tenían un lugar en la sociedad rural, pero [...] tampoco [podían] encontrar uno en el Perú 'moderno', asfixiado por la crisis y el desempleo» (Degregori, citado en Mcclintock 1998: 291). Sendero prometía arrasar con el viejo orden corrupto y reemplazarlo por un nuevo Estado senderista. La militancia en el partido pasó a ser un medio de movilidad social ascendente. Como posteriormente lo expresara un joven senderista,

> [d]ecían que Ayacucho iba a ser una zona liberada en 1985. Una famosa ilusión que han creado a los muchachos era que ya pues estamos en el 81, para el 85 va a ser una república independiente, ¿acaso no quieres ser un ministro? ¿acaso no quieres ser un jefe militar? (Degregori [1991: 398], citado en Stern 1996: 3). [Carlos Iván Degregori, «Jóvenes y campesinos ante la violencia política: Ayacucho 1980-1983». En Urbano Henrique, compilador, Mirko Lauer editor, *Poder y violencia en los Andes*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1991, 395-417.]

La posibilidad de ejercer el poder y saldar viejas o imaginadas cuentas con aquellos que eran percibidos como los «opresores», resultó ser altamente embriagadora para los posibles reclutas.

Las señales cada vez mayores de los éxitos de Sendero hicieron que finalmente Belaunde suspendiera las garantías constitucionales a regañadientes en diciembre de 1982, declarara el estado de emergencia y colocara el departamento de Ayacucho bajo total control militar. Hasta aquí el Presidente había sido lento en su reacción a la amenaza de Sendero Luminoso, definiendo a éste simplemente como una organización criminal y esperando que la división de contrainsurgencia de la Guardia Civil, los llamados sinchis, lograra eliminarlo junto con la policía. Sin embargo, mal financiada, mal entrenada y corroída por la corrupción y el faccionalismo político, la policía nacional no estaba a la altura de su misión.

En un sentido, la dependencia de Belaunde de la Guardia Civil también jugó a favor de los insurgentes, ya que ella era generalmente odiada por los campesinos como la fuerza que hacía cumplir la voluntad de la élite local, y por lo tanto era uno de sus principales opresores. Es más, los sinchis no tenían idea de la necesidad de ganarse el corazón y la mente de la población civil. Ellos capturaban, torturaban y asesinaban indiscriminadamente a todo aquel que fuera sospechoso de ser simpatizante o militante senderista, lo que simplemente tuvo el efecto de alienar al grueso de la población campesina y civil.

La decisión del gobierno de enviar al ejército en contra de Sendero Luminoso marcó una nueva etapa en el programa de contrainsurgencia, que produjo un agudo incremento en el número de bajas civiles. Dirigidas por el general Clemente Noel

y Moral, nombrado primer comandante cívico-militar de la zona de emergencia, las fuerzas de contrainsurgencia del ejército siguieron, en esencia, la táctica de la represión indiscriminada practicada por los sinchis, aunque en forma mucho más devastadora y eficiente. Esta represión, junto con el creciente número de ataques de los senderistas, tuvo como resultado un número mucho más elevado de bajas, principalmente civiles inocentes cogidos en el fuego cruzado, que crecieron de 2.800 en 1983 a 4.300 en 1984. El general Noel inició también una política de organizar y armar a las milicias o rondas campesinas, para así apoyar y asistir a las comunidades que se oponían a Sendero. Otra de sus estrategias, inspirada en la Guerra de Vietnam, fue la de reubicar a las poblaciones campesinas de zonas difíciles de defender en la puna, a los llamados pueblos estratégicos a menor altura, fortificados por el ejército.

Entretanto, la campaña terrorista de asesinatos y atentados explosivos de Sendero iba ganando impulso en otras partes del país. Los blancos eran funcionarios estatales, entre ellos alcaldes y gobernadores; funcionarios y proyectos de desarrollo; instalaciones de transportes y comunicaciones; centros mineros; instalaciones eléctricas, estaciones de policía y cuarteles militares. Según Durand (1994: 114), el número de ataques subió de 219 en 1980 a 2.050 en 1985, totalizando más de seis mil a lo largo del periodo y causando un estimado de $2.139.542 de pérdidas económicas. Un indicio de la difusión de la violencia senderista es el hecho de que para 1983, más de la mitad de los actos terroristas reportados se cometieron fuera de la región de Ayacucho.

El costo creciente de la campaña de represión militar provocó las críticas de los grupos de derechos humanos y la izquierda, sobre todo después de la masacre de ocho periodistas en la remota aldea de Uchuraccay, cerca de Huanta, el 26 de enero de 1983. Ampliamente reportada en la prensa nacional, tema de una comisión investigadora oficial y objeto de una amplia cobertura internacional por parte del afamado escritor peruano y hoy Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien dirigió la comisión, la masacre de Uchuraccay sirvió para intensificar el creciente debate nacional sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército, que incluían acusaciones de racismo y explotación de la población indígena. Incluso en los círculos militares se alzaron voces influyentes que cuestionaron la política antisubversiva del gobierno. Por ejemplo, el general Adrián Huamán, comandante de la zona de emergencia que reemplazó al general Noel a comienzos de 1984, declaró en agosto que los militares no lograrían contener la insurgencia sin ayuda social, económica y humanitaria del Estado para ayudar a la población empobrecida de la región. De hecho, Huamán estaba proponiendo ganar la guerra mediante un incremento en los esfuerzos de ayuda y desarrollo, diseñados para ganarse a la población civil. El gobierno destituyó al general de su mando dos días después de sus declaraciones.

Al final de su mandato, el gobierno de Belaunde se hallaba en pleno desorden, asediado por una economía en vías de colapsar, la difusión de la insurgencia senderista y la creciente desmoralización popular. Políticamente, la crisis abrió una oportunidad al APRA y a la IU. Desde su humillante derrota en 1980, el primero se había reorganizado y revisado a sí mismo en torno a la joven figura de Alan García Pérez, quien había nacido en 1949. Sus padres fueron activistas apristas y su progenitor pasó un tiempo en prisión por su militancia política. Alan se unió al partido a los once años y después de asistir a la escuela en el Perú, fue enviado a España y Francia a comienzos de la década de 1970 para seguir estudios universitarios. En la Sorbona de París estudió con un prominente estudioso de los Andes, quien posteriormente le describiría como una persona no intelectual pero sí inteligente y astuta, decidida a triunfar en la política. Regresó al Perú para trabajar con el partido en 1977 cuando el anciano Haya, ahora ansioso por promover una nueva generación de potenciales dirigentes partidarios, le nombró su secretario personal y luego secretario de organización del APRA. Según Graham (1996), en la campaña de 1980 García apoyó a Villanueva y luego se mantuvo al margen de la subsiguiente lucha por el poder entre el candidato derrotado y Andrés Townsend Ezcurra.

La oportunidad de promover su causa aún más llegó con el Décimocuarto Congreso del Partido, que se reunió en 1982 para elegir un nuevo secretario general. García fue la elección popular de los delegados jóvenes y progresistas, que buscaban romper con la vieja guardia y la naturaleza sectaria y violenta del pasado partidario. Sus fuertes credenciales apristas y el respaldo de Luis Alberto Sánchez, patricio del partido y su padrino personal, así como de otros dirigentes claves, resultaron ser decisivos para su elección al cargo máximo del partido. Tras asumir exitosamente una posición centrista entre las facciones de derecha e izquierda, fue abrumadoramente elegido poco después como el portaestandarte partidario en 1985.

En la campaña subsiguiente, García buscó revivir y reconfigurar la coalición «multiclasista» que sustentó al APRA durante el periodo clásico del populismo latinoamericano y peruano (1930-1960). Esto ciertamente parecía lógico, dado que el contexto internacional de la deuda y la severa recesión económica, y sus efectos en el Perú, eran notablemente parecidos a los de la era de la depresión en la década de 1930. Sin embargo, García percibió que, a mediados de la década de 1980, la clave del éxito electoral ya no se encontraba en la clase obrera organizada, a la cual Haya había cortejado y ganado en la fase anterior del partido, sino, más bien, en el sector informal urbano, que desde comienzos de la década casi se había duplicado, de 440.000 trabajadores a 730.000. Este crecimiento explosivo se debía no sólo a la continua inmigración desde el interior, sino también a trabajadores que perdían su empleo debido a la masiva contracción de la industria y el comercio. En

realidad, aunque la recesión cada vez más profunda había debilitado el mercado laboral industrial y desmovilizado a los sindicatos, el APRA hacía tiempo que había perdido el control del movimiento obrero a manos de la izquierda e IU. Por ejemplo, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), de orientación aprista, ahora apenas representaba el diez por ciento de los trabajadores organizados. Por esta razón, García calculaba que la mejor oportunidad para la recuperación electoral de su partido estaba en la captación de los informales. Además, esta estrategia serviría para revertir la debilidad histórica del APRA en Lima, donde jamás había ganado siquiera una mayoría.

El joven aspirante aprista añadió otro sector no tradicional a su versión revisada de la coalición populista: el campesinado, al cual percibía como estratégicamente vinculado al sector informal de base urbana a través del fenómeno de la emigración. Al no estar ya encerrado en la difunta estructura de hacienda, el campesinado también era accesible a las modernas técnicas de campaña. García calculaba que constituía el setenta por ciento de la población junto con los informales, pero ganaba apenas el veinticinco por ciento del ingreso nacional. En términos que recuerdan una retórica populista pasada, García se refirió a esta mayoría popular como «los olvidados» y como «el futuro de la nación», proponiendo revertir su condición mediante la creación de empleo, medidas redistributivas y asistencia social (Cameron 1994: 42-46). Del mismo modo, el candidato aprista revivió el término «oligarquía», favorito del populismo, que según él había sobrevivido a la reforma agraria bajo la forma de unos poderosos grupos financieros de élite, aliados con la banca internacional.

Al mismo tiempo, García buscó ampliar su atractivo en la clase media, en particular entre quienes habían conformado el núcleo del respaldo a Belaunde en 1980, pero que ahora estaban desilusionados con el fracasado Presidente. Para alcanzar este objetivo, García obligó al partido a exorcizar la imagen de su pasado sectario y abrirse a nuevos estratos y regiones, sobre todo a los sectores no apristas de la clase media. Por ejemplo, el APRA eliminó el saludo de tipo fascista con la mano izquierda, y reemplazó su «Marsellesa» de corte marcial con el vals «Mi Perú». Es más, en los discursos de su campaña, García subrayó el compromiso del partido con *todos* los peruanos, eliminando el maniqueo lema partidario de «sólo el APRA salvará al Perú». Aunque el giro de García a un público más amplio causó cierto resentimiento interno entre los militantes del partido, éste resultó ser altamente exitoso cuando el APRA logró una victoria abrumadora en las elecciones municipales de 1983.

Durante la campaña presidencial, que comenzó en serio en 1984, García, de treinta y cinco años, fusionó el énfasis en el pragmatismo, la capacidad técnica y la conciencia social; todo ello diseñado para atraer a una clase media ansiosa de un cambio pero temerosa de una alternativa marxista más radical. Con este fin,

presentó al APRA como un partido social-demócrata, una fuerza moderadamente progresista que era capaz de mover al Perú hacia delante. En términos específicos propuso la integración de la población india, enfatizar el desarrollo rural, la descentralización del gobierno (siempre una cuestión popular afuera de Lima) y la ayuda a los pobres. Por otro lado, propuso al crucial sector empresarial-industrial, otra parte populista de la alianza «pluriclasista», dar la espalda a las fracasadas políticas neoliberales del régimen belaundista y una mayor participación estatal en la reactivación del crecimiento, pero abandonó la vieja inclinación aprista a la nacionalización de las industrias. Al mismo tiempo, García identificó al FMI como un enemigo principal y pidió que los pagos de la cada vez más inflada deuda nacional se limitaran a no más del veinte o veinticinco por ciento.

Aunque el APRA revisado, liderado por el enérgico y carismático García, rápidamente se convirtió en el contendor favorito para ganar las elecciones, el partido tuvo que hacer frente a un imponente desafío de la izquierda, ahora relativamente unida bajo Alfonso Barrantes Lingán e IU. Aunque «Frejolito», como se llamaba afectuosamente a Barrantes, representaba la cara más moderada de la izquierda, su postura le trajo una presión considerable del ala radical del frente. Es más, la plataforma de IU era más específica que la del APRA, pidiendo explícitamente la nacionalización de la Southern Peru Copper Corporation, la revisión de los contratos petroleros con el extranjero, una moratoria selectiva de la deuda y la nacionalización de la banca. Este programa, aunque era popular entre su clientela tradicional en los sindicatos, las organizaciones de base de los pueblos jóvenes y las federaciones campesinas, despertó los temores de la clase media y de los sectores empresariales que la moderación de Barrantes no logró calmar. Al final, el nuevo APRA de García logró ocupar el centro político y con ello ganar la elección.

En un sufragio record del noventa y uno por ciento de la población elegible, García obtuvo el cuarenta y siete por ciento de la votación, contra el veintidós por ciento de Barrantes, el doce por ciento de Bedoya (PPC) y apenas algo más del seis por ciento de Alva Orlandini (AP). El ala centro-izquierdista no solamente había ganado una victoria sobresaliente con casi el setenta por ciento de la votación, sino que además la derecha había sufrido una aplastante derrota con apenas el dieciocho por ciento. El llamado de García al sector informal fue notablemente exitoso, ya que su votación en los pueblos jóvenes se duplicó de veinte por ciento en 1980 a cuarenta por ciento en 1985. Sin embargo, incapaz de alcanzar la mayoría del cincuenta por ciento necesaria, García evitó una segunda vuelta únicamente cuando Barrantes, quien ocupaba el segundo lugar, se retiró. Un análisis postelectoral reveló que García había logrado romper los tradicionales límites regionales del APRA en el norte, al ganar decisivamente en los pueblos jóvenes de Lima, en Cuzco, Puno y la selva.

El gobierno de García: de la ortodoxia a la heterodoxia, 1985-1990

García contemplaba un cuadro económico sombrío mientras se preparaba a asumir la presidencia en julio de 1985. Era claro que las políticas ortodoxas de Belaunde habían fracasado por completo. En general, el nivel de vida real había caído fuertemente sobre una base per cápita, de $1.232 en 1980 a $1.055 en 1985. Solamente en el sector público, el salario mensual había descendido de $230 en 1980 a $97 en 1985. Es más, el desempleo y el subempleo se habían disparado, de modo que según algunos estimados, en 1984 apenas el treinta y cinco por ciento de la fuerza laboral se consideraba adecuadamente empleada. El desempleo, los cortes de los subsidios de los alimentos y la reducción de los gastos en salud y educación, empeoraron visiblemente las condiciones de los pobres. Una estadística particularmente reveladora mostraba que en 1985, el consumo per cápita de calorías en el país era de apenas 1.781, contra las 2.400 calorías diarias recomendadas por los organismos internacionales de salud. En Ayacucho, la cifra era de apenas 1.271, habiendo empeorado sustancialmente después de la sequía de 1983 en la sierra sur, de modo tal que un grupo ecuménico de la Iglesia reportó casos de hambruna entre el campesinado de subsistencia.

Entretanto, los acaudalados hacían bastante más que sobrevivir evadiendo impuestos, «dolarizando» sus ingresos para proteger sus activos de la inflación y remitiendo su capital a refugios seguros fuera del país. De igual modo, la economía informal o mercado negro siguió creciendo rápidamente, con el efecto negativo de bajos salarios, falta de beneficios y la pérdida de rentas tributarias del Estado. La estrategia defensiva tal vez más notoria comprendió el surgimiento ilícito de la industria cocalera.

La producción y el consumo de la coca fueron, claro está, un rasgo tradicional de la sociedad india durante siglos. Se usaba no sólo con fines rituales, sino también para calmar los efectos del trabajo y el hambre a gran altura. La producción estuvo concentrada en los valles subtropicales de la selva y las laderas orientales de los Andes, en el departamento del Cuzco, sobre todo en Lares y La Convención, desplazándose luego más al norte entre las décadas de 1940 y 1960. Sin embargo, el *boom* de la producción de coca data de la década de 1970, cuando el crecimiento sumamente grande de la demanda de cocaína en los Estados Unidos llevó a los narcotraficantes colombianos a la región del valle del Huallaga a organizar la producción y exportación. Los principales centros de la floreciente industria llegaron a encontrarse en el alto Huallaga y en la ciudad de Tingo María, a unos 250 km al noreste de Lima. A finales de la década de 1980, la mitad de la oferta mundial de pasta básica de cocaína —el denso compuesto verdoso de hojas de coca aplastadas y kerosene con el cual se elabora la cocaína— provenía del Perú.

Los primeros intentos oficiales de cortar el crecimiento de la industria tuvieron lugar durante el gobierno de Morales-Bermúdez, a instancias de los Estados Unidos. Se estableció un monopolio estatal —la Empresa Nacional de la Coca— para reglamentar la venta tradicional de estas hojas, cuya producción estaba limitada a ciertas zonas del Cuzco. Se crearon otras agencias estatales, financiadas principalmente por los Estados Unidos, para impulsar los esfuerzos de control y erradicación, así como para promover su sustitución con cultivos alternativos y hacer cumplir las leyes. Ineficientes y con un presupuesto insuficiente, estas medidas no hicieron mucho por detener el auge de la producción cocalera, la cual creció, según Crabtree (1992: 115-117), de un estimado de 10.000 hectáreas en 1980, a 195.000 en 1986. Hacia 1985, el alto Huallaga atraía a un gran número de inmigrantes, principalmente de los empobrecidos Andes del sur, seducidos por los salarios relativamente altos y la posibilidad de una vida mejor. Al mismo tiempo, la coca se convirtió en una fuente nacional fundamental, aunque ilícita, de ingreso y empleo, sirviendo para amortiguar el impacto global de la depresión económica de esta década.

A partir de 1984, Sendero Luminoso, previendo una lucrativa fuente potencial de financiamiento, comenzó a desplazarse también al alto Huallaga para captar gente entre los pequeños cultivadores campesinos. Su estrategia consistía en defender los intereses de los cultivadores protegiéndolos, por un lado, de los narcotraficantes, que buscaban comprar la coca al menor precio posible mediante la intimidación y la fuerza, y por el otro, de los funcionarios estatales y la policía, que intentaban poner fin a la producción y erradicarla. Sendero rápidamente construyó una exitosa organización de base para defender a los cultivadores; asediados en dos frentes, éstos respondieron favorablemente al mensaje inusualmente pragmático de ayuda de los senderistas.

Aunque no formaba parte de la estrategia original senderista, el surgimiento de la industria cocalera en una región de frontera en que la presencia estatal era notoriamente nula, brindó al partido una oportunidad dorada para abrir un segundo frente importante en la «guerra de guerrillas» fuera de Ayacucho. Aún más importante resultó el hecho de que las arcas del partido se llenaron con los impuestos con que gravaba a los narcotraficantes para que pudieran negociar con los cultivadores. En cierto momento se estimó que los senderistas captaban más de $30 millones al año mediante estos «impuestos». Este dinero permitió a Sendero incrementar sustancialmente su ejército a un estimado de cinco mil a siete mil combatientes y mejorar su potencial militar con armamento más sofisticado. Los militantes senderistas recibían salarios de entre $250 y $500 al mes, muy por encima de la paga mensual promedio de los maestros de escuela del país. Desde 1986 y en adelante, Sendero Luminoso comenzó a atacar instalaciones militares y a emboscar patrullas policiales y del ejército impunemente. Podría argumentarse

que se trataba del movimiento subversivo más acaudalado de toda la historia, una posición que solidificó a comienzos de 1987 cuando tomó el pueblo de Tocache, que había reemplazado a Tingo María como la capital cocalera del país. Por el momento, al menos, el alto Huallaga era una «tierra liberada» y una auténtica fuente de dinero para el avance de la rebelión senderista.

Entretanto, unas altísimas expectativas populares recibieron la entrega de la banda presidencial rojiblanca a García en las Fiestas Patrias de 1985. A los treinta y seis años, García era el presidente más joven en la historia del país y había recibido la más grande votación popular jamás registrada. Asimismo, había conducido al partido más antiguo del país al poder por vez primera en sus seis décadas de historia. Esta victoria despertó grandes esperanzas entre los militantes apristas que se aprestaron a recibir el botín estatal que durante tanto tiempo les había sido negado. De otro lado, los desafíos que el nuevo presidente debía enfrentar no tenían precedentes. La economía estaba hundida en lo que podía sostenerse era la peor depresión en un siglo, una situación que ayudaba al rápido avance de Sendero. Es más, la población peruana no sólo era la tercera más pobre de América del Sur (después de Bolivia y Paraguay), sino que además era, en promedio, más joven, empobrecida y urbana que una década antes. Estas condiciones llevaron al resurgimiento de la izquierda desde 1980 la cual, cristalizada en IU, constituía un formidable reto opositor para el nuevo gobierno en el Parlamento.

El día de la inauguración del Congreso, García esbozó su estrategia y su programa económico. En su discurso, el Presidente reafirmó su concepción de la existencia de una pirámide social, desarrollada por vez primera en su folleto de campaña *El futuro diferente*, según la cual el Perú estaba organizado en la cima por un sector privilegiado conformado por los trabajadores organizados y los empleados estatales. La atención del gobierno debía concentrarse, más bien, en el setenta por ciento de la población situada en la base de la pirámide: los ambulantes y los residentes de los pueblos jóvenes, de un lado, y del otro los campesinos pobres y necesitados de lo que llamaba el Trapecio Andino. Su gobierno, a través de una estrategia política que bautizó como «reactivación social productiva», se proponía tomar medidas que estimularían la economía en beneficio de esta mayoría marginada.

Al mismo tiempo, García veía la necesidad de que el Estado defendiera la propiedad privada y la iniciativa individual, de modo tal que las clases empresariales se animaran a reinvertir en la economía para así alcanzar el crecimiento. En suma, el nuevo Presidente se proponía audazmente emprender el cambio y la reforma social de las mayorías pobres sin alienar a la élite empresarial, que era crucial para el progreso económico. Apostó a que esta última aceptaría este plan de tipo reformista, habiendo vivido ya la debacle de las políticas ortodoxas de Belaunde

y porque evidentemente temía el avance de la izquierda, tanto la legal (IU) como la subversiva (Sendero).

Sin embargo, la parte más sorprendente de su discurso fue el anuncio de que el nuevo gobierno restringiría el pago de la deuda externa a no más del diez por ciento de las exportaciones. Esta postura nacionalista, que adoptó un tono desafiante hacia la comunidad financiera internacional, satisfacía varios objetivos económicos y políticos. Por un lado, cuestionaba al FMI y su política de imposición de condiciones a los gobiernos para conceder sus préstamos. García creía, al parecer, que el temor de los bancos al «contagio» o difusión de la posición peruana a otros países deudores, mejoraría la débil posición negociadora del gobierno. Al mismo tiempo, su propuesta fue menos radical que el llamado de Fidel Castro a que el Tercer Mundo dejase de pagar sus préstamos íntegramente. Por otro lado, podía preverse que esta negativa al pago de la deuda sería popular entre la mayoría de la población y entre la clase empresarial, la cual percibió, según Mauceri (1996: 62), que lo ahorrado se invertiría en las medidas prometidas para reactivar el crecimiento económico.

En los siguientes meses, García se movió rápidamente para impulsar lo que se conocería como un programa económico «heterodoxo» (por oposición al «ortodoxo» anterior). Este, basado en una política de intervención estatal selectiva en la economía, brindaba subsidios estatales tanto a las empresas como a los trabajadores para estimular la economía deprimida y revivir el crecimiento. También contenía medidas antiinflacionarias tales como un complejo sistema de controles de salarios y precios. La política fiscal enfatizaba el empleo, y el gobierno estableció programas para contratar trabajadores para proyectos estatales, diseñados para mejorar las condiciones de vida en los pueblos jóvenes y áreas rurales empobrecidas. Por ejemplo, el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) dio empleo temporal con un salario mínimo a más de 150.000 trabajadores nada más en Lima. Económicamente hablando, ésta y otras medidas gubernamentales estimularon la demanda de consumo, en tanto que políticamente ayudaron a consolidar el respaldo electoral popular del partido mediante un sistema de clientelaje característicamente aprista.

Por su parte, la comunidad empresarial, el otro segmento clave de la estrategia económica y política de García, recibió numerosas concesiones y subsidios del gobierno. Las ayudas incluían créditos tributarios, tasas de cambio múltiples diseñadas para apoyar a los exportadores y a los importadores de insumos industriales (maquinarias, materias primas), y otros incentivos más. García también emprendió una política de concertación con el sector privado, consultando regularmente con los empresarios —los llamados «doce apóstoles»— que dirigían las doce empresas más grandes del país. En respuesta a la ayuda estatal, el gobierno esperaba que los empresarios reinvirtieran sus utilidades provenientes del crecimiento de nuevo en la economía y que brindaran el respaldo político necesario para el éxito del gobierno. Al limitar el pago de la deuda, «afinar la

maquinaria» y aproximarse al sector extranjero, García evidentemente apostaba por una recuperación económica generada interna y no externamente (préstamos e inversiones extranjeras).

Las políticas heterodoxas de García tuvieron éxito durante la primera mitad de su gobierno. El ingreso per cápita subió de –1,1 por ciento en 1985 a 7,3 por ciento y 5,1 por ciento en 1986 y 1987, respectivamente, elevando la demanda interna y estimulando la producción. El crecimiento real saltó de 1,5 por ciento en 1985 a 8,5 y 7 por ciento en 1986 y 1987, respectivamente. El crecimiento provino fundamentalmente de los sectores manufacturero (19 por ciento en 1986), construcción (30 por ciento) y agrícola, pero las exportaciones tradicionales permanecieron relativamente estancadas.

Los agricultores se beneficiaron con la demanda urbana más fuerte, así como con la mayor disponibilidad del crédito, pero quienes sacaban provecho tendían a ser los productores más integrados al mercado y no los campesinos más pobres y necesitados del llamado Trapecio Andino, a quienes García se había comprometido a ayudar. Infortunadamente, según Crabtree (1992: 53-59), su Plan Sierra, un programa de cinco años y $640 millones para ayudar a dos mil comunidades con una población de 2,5 millones de personas, demoró en prepararse y no comenzó a ponerse en práctica hasta bien entrado 1988, cuando la economía ya estaba en caída libre.

Con todo, estos fueron los dos mejores años de crecimiento económico desde el gobierno de Odría y el *boom* exportador inducido por la Guerra de Corea, a comienzos de la década de 1950. En términos generales el crecimiento peruano de aproximadamente ocho por ciento fue más rápido que el de los restantes países latinoamericanos por un margen sustancial. Al mismo tiempo, este *miniboom* se dio fundamentalmente en los sectores urbano y moderno (formal e informal) de la economía. En cuanto a la inflación, ella cayó en el mismo lapso de una tasa anual de 163 por ciento a 64 por ciento. La confianza en el inti, que había reemplazado ya al sol, subió a medida que los depósitos en dólares del sistema bancario disminuían de cincuenta y siete por ciento a trece por ciento.

Pero las señales de advertencia comenzaron a aparecer incluso cuando el cuadro económico parecía comenzar a brillar. En un primer momento, la condición fiscal del gobierno se deterioró, no tanto por el mayor gasto, que en realidad se redujo como porcentaje del PNB, sino por la caída en los ingresos estatales (provenientes de impuestos y empresas estatales). A pesar del crecimiento económico sustancial de 1986 y 1987, el ingreso del sector público disminuyó fuertemente como porcentaje del PBI (de cuarenta y seis por ciento en 1985 a 33,5 por ciento en 1986 y veintiséis por ciento en 1987).

La caída en el ingreso del sector público se debió a muchas razones técnicas, pero sobre todo al fracaso del gobierno de García en reformar el sistema tributario

notoriamente angosto y laxo del país, uno de los peores de América del Sur. Por ejemplo, en 1987, apenas 800 grandes compañías (de 10.000) daban cuenta del setenta y cinco por ciento de los impuestos recaudados por el tesoro y tres veces más ecuatorianos y doce veces más chilenos (en relación con la población total) presentaban declaraciones juradas que los peruanos. Un estudio calculó que en 1987 la evasión tributaria llegó al 4,4 por ciento del PBI, el equivalente al cuarenta por ciento del total del ingreso tributario. Los empresarios evadían las leyes tributarias con regularidad, pues nadie había sido enjuiciado y enviado a prisión, o visto sus empresas cerradas por el gobierno.

Otra señal de los problemas por venir era la demora en despegar la concertación del gobierno con los empresarios. En consecuencia, a mediados de 1987 aún no había ningún indicio de que la inversión privada —un factor crucial para extender los dos años de recuperación— estuviese creciendo. Es más y como era de esperar, no hubo un incremento neto en el flujo de los préstamos externos al Perú. El límite en el pago de la deuda por parte de García hizo que los bancos estadounidenses declararan valor deteriorado a sus préstamos peruanos, y que el FMI declarara «inelegible» al Perú para futuros empréstitos. Resulta interesante que el pago de la deuda en 1986 llegó a trece por ciento, aproximadamente el mismo monto que Belaunde pagó en 1985. Por último, la balanza de pagos se deterioró a medida que las importaciones subían, en tanto que las exportaciones permanecían relativamente estancadas.

Entretanto, las relaciones cívico-militares sufrieron ciertas alteraciones durante los dos primeros años del gobierno de García. En general, las fuerzas armadas asumieron una actitud positiva con respecto al nuevo presidente. La vieja enemistad con el APRA había quedado efectivamente enterrada con la aparición de una nueva generación de oficiales, y durante la campaña electoral, la moderación de García parecía preferible a la perspectiva de una victoria de Barrantes e IU. Al mismo tiempo, los militares recibieron bien su postura nacionalista con respecto al pago de la deuda, y el anuncio hecho poco después de asumir el mando de una política exterior no alineada.

Sin embargo, la reacción a sus políticas específicas fue mixta. García estaba decidido a intentar afirmar el control civil sobre las fuerzas armadas, durante largo tiempo un sueño elusivo para los demócratas en un país en el cual la intervención militar en la política era endémica. La oportunidad surgió al aparecer evidencias de la participación del ejército en una serie de masacres en Accomarca. García reaccionó rápidamente, cesando al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al comandante de la región central en Lima y al de la Zona de Emergencia de Ayacucho. Aunque esta actitud no tenía precedentes en un mandatario civil, no redujo significativamente el poder de las fuerzas armadas ni tampoco alteró su relación fundamental con las autoridades civiles. La fuerza aérea también se

disgustó cuando García redujo a la mitad una orden de compra de veintiséis cazas Mirage 2000. Esto explica el golpe abortado del general Luis Abram Cavallerino en abril de 1987, en la base aérea de Las Palmas.

Inicialmente, García también buscó enfatizar el lado desarrollista y de defensa de los derechos humanos de la estrategia antisubversiva seguida por las fuerzas armadas. Sin embargo, buena parte de la ayuda estatal prometida para el Trapecio Andino jamás se materializó. Y el énfasis puesto en conseguir que los militares mostraran mayor control en las violaciones de los derechos humanos fue minado por la masacre de 250 prisioneros senderistas amotinados, detenidos en las prisiones de Lurigancho y El Frontón, efectuada por el gobierno el 19 de junio de 1986.

La oposición militar a García creció aún más con su intento, realizado en marzo de 1987, de crear un único ministerio de defensa fusionando los de las tres armas en un único puesto en el gabinete. En la práctica, esta fusión habría reducido considerablemente el poder de la marina y la fuerza aérea, las cuales se opusieron vigorosamente a la propuesta. Sin embargo, a pesar de esta oposición a las políticas de García, el nuevo presidente logró conservar la iniciativa en las relaciones cívico-militares mientras siguió siendo popular (su aprobación pública subió a noventa por ciento a los seis meses de iniciado su gobierno). Al mismo tiempo, el *establishment* militar consiguió retener el veinte por ciento del presupuesto nacional (cinco por ciento más que educación y catorce por ciento más que los servicios de salud). Esta proporción sumaba $106 per cápita, tres veces el gasto promedio per cápita en todas las demás naciones sudamericanas en 1988, según Doughty (en Hudson 1993).

Además, García tuvo cierto éxito en hacer frente a un problema fundamental que había afectado al Perú durante buena parte de su historia: el dominio de Lima y el sistema de gobierno altamente centralizado. Aunque podemos remontar este problema al establecimiento de la corte virreinal y el gobierno colonial en el siglo XVI, el lugar central de Lima en la vida peruana se acentuó debido a que allí se concentró más de la tercera parte de la población total del país desde mediados del siglo XX. La fuerte expansión del Estado durante el gobierno de Velasco, juntamente con la concentración del comercio y la industria en la capital (que representaba alrededor de las dos terceras partes de la producción industrial y los salarios totales del país), contribuyeron aún más al predominio de Lima en la vida del país. Para quienes vivían en las provincias, claro está, la primacía de la capital fue tanto una bendición, en la medida en que Lima atrajo un flujo cada vez mayor de inmigrantes en busca de una vida mejor, como una maldición, puesto que la ciudad consumía y monopolizaba una parte abrumadoramente desproporcionada de la riqueza y los recursos de la nación.

Desde su fundación, el partido aprista —aunque no solamente él— buscó hacer frente a este problema. La regionalización formó parte de su programa original

de 1924, en tanto que la constitución de 1979, redactada bajo la égida de Haya de la Torre, estipulaba la creación de gobiernos regionales por todo el país. De modo que no sorprendió cuando, como parte de la plataforma de su campaña, García prometió emprender la descentralización administrativa del país. En marzo de 1987, cumplió su promesa promulgando un audaz plan para reorganizar los veinticuatro departamentos del país en doce regiones más grandes con poderes legislativos, administrativos y tributarios desactivadas durante la década siguiente. Aunque se efectuaron las elecciones para estas legislaturas regionales, el funcionamiento de las nuevas unidades administrativas se vio constreñido en los años subsiguientes por problemas de financiamiento debidos, como luego explicaré, al repentino colapso de la economía.

Otro desafío al que el gobierno de García tuvo que hacer frente provino de Sendero Luminoso, que a mediados de la década iba ampliando el radio de sus operaciones. Por ejemplo, Sendero había ingresado a la sierra central y norte, sobre todo al departamento de Pasco y al alto Huallaga, así como también al sur, principalmente en Puno. En Pasco logró establecer su influencia entre el campesinado en las comunidades más altas, remotas y pobres. Sin embargo, los rebeldes tuvieron menos éxito cuando bajaron a Cerro de Pasco, esperando captar adherentes entre los mineros. Allí su estridente propuesta doctrinaria no fue tan bien recibida por una población sindicalista a la que preocupaba más la negociación colectiva en torno a las condiciones salariales y laborales en las minas de cobre.

En Puno, que contaba con una larga tradición de conflictos por la distribución de la tierra (incluso después de la reforma agraria) y de rebeliones campesinas, Sendero buscó establecer una cabeza de puente entre la población quechua-hablante de las montañas situadas hacia la frontera boliviana, en las provincias de Azángaro y Melgar. El tipo de terreno y la proximidad a Bolivia, con su mal vigilada frontera, confirió una fuente de aprovisionamiento y un refugio seguro para las actividades de los senderistas. Sin embargo, Sendero se topó con unos obstáculos importantes en Puno; las federaciones campesinas bien organizadas y una Iglesia activista y progresista, con vínculos con la izquierda legal, fueron difíciles de infiltrar o ganar para el mensaje partidario y resistieron las operaciones de Sendero.

La larga posición progresista de la Iglesia del sur andino se remontaba por lo menos a la fundación del Instituto de Pastoral Andina en 1968, que tenía como objetivo preparar a trabajadores pastorales y misioneros en la cultura y las lenguas del sur. Una década más tarde, una carta pastoral de 1978 denunciaba las injusticias y las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de la población predominantemente campesina de la región. Buena parte del empuje progresista de la Iglesia surandina provino de órdenes misioneras extranjeras como las de Maryknoll o los carmelitas de los Estados Unidos.

Para contrarrestar los exitosos esfuerzos pastorales de la Iglesia entre la población indígena, Sendero Luminoso se vio forzado a alterar su táctica establecida de asesinatos e intimidación de los funcionarios locales, y adoptar medios políticos de persuasión más tradicionales para ganarse así seguidores locales influyentes en la región. De otro lado, en la zona cocalera del alto Huallaga, en San Martín, la influencia senderista siguió esparciéndose rápidamente en 1985-1986.

Para 1985 Sendero también había ingresado a Lima con una campaña de sabotajes que, entre otras cosas, causó numerosos apagones que provocaron, juntamente con los frecuentes atentados explosivos y asesinatos, una creciente sensación de temor y aprensión entre la población en general. En mayo de 1986, una serie de asesinatos, que culminó con la muerte de un almirante, hizo que los oficiales superiores exigieran al gobierno que declarara Lima como zona de emergencia. Asimismo, Sendero inició un esfuerzo concertado por infiltrar organizaciones cívicas tales como los sindicatos, las organizaciones magisteriales y los grupos de mujeres.

El atractivo senderista en Lima iba bastante más allá de las clases populares cada vez más pauperizadas, captando también a los sectores frustrados y socialmente descendentes de las clases medias. Esta atracción era particularmente fuerte entre jóvenes muy bien educados cuyas aspiraciones profesionales se veían frustradas cada vez más por la crisis económica. De hecho, McClintock (1998) correlacionó el número rápidamente en alza de los graduados de las universidades en la década de 1980, con las cada vez menores oportunidades de empleo adecuado a sus calificaciones. Por ejemplo, a diferencia de otras crisis económicas, el nivel de desempleo entre este segmento de la población era el doble que en el resto de la población. Es más, entre los cada vez peor pagados trabajadores del sector público, Sendero ganó bastantes adeptos; particularmente entre los maestros, cuyo salario mensual se redujo hasta apenas $90 a fines de la década, las dos terceras partes de lo que había sido diez años antes. En este contexto, los senderistas encontraron en las universidades lugares particularmente fértiles para reclutar una generación de jóvenes sin esperanza.

Además de la gama usual de adolescentes alienados atraídos a un movimiento de este tipo, Sendero también captó niños de hasta ocho años y a mujeres. Los primeros, conocidos como los «huérfanos de la revolución», eran tan impresionables que resultaban fácil presa para los sofisticados métodos de propaganda de Sendero. En cuanto a las mujeres, a menudo eran empleadas fructíferamente como sirvientes domésticas e informantes, brindando, según Masterson (1991: 278), la información confidencial necesaria para los atentados contra miembros de alta jerarquía del gobierno, el APRA y el ejército.

La nacionalización de la banca: del auge al colapso, 1987-1990

Con una economía que mostraba cada vez más señales de desintegración y con el movimiento de Sendero en constante avance, la popularidad de García comenzó a decaer a medida que llegaba a la mitad de su periodo. Apremiado por la necesidad de ajustar su plan económico heterodoxo y revertir las encuestas de opinión pública, ahora en descenso, García buscó una nueva iniciativa impactante que, al igual que su declaración sobre la deuda en 1985 o el decreto de reforma agraria de Velasco de 1969, inyectase nueva vida tanto a la economía como a su fortuna política. Aparentemente, la solución fue diseñada apresuradamente en un lapso de dos semanas, sin ninguna consulta o preparación adecuada para su implementación eficaz. En el segundo aniversario de su llegada al poder, García anunció, ante los aturdidos oídos del Congreso y el país, que iba a nacionalizar el veinte por ciento de la banca privada del país (excluyendo a los bancos extranjeros). El ochenta por ciento del crédito nacional estaba controlado por el Estado desde la época de Velasco. Este anuncio reverberó no sólo por toda la comunidad empresarial, de la cual dependía la política heterodoxa de García para las inversiones, sino también en el público en general, que era escéptico con respecto a las soluciones «estatistas» luego de los fracasos de la era velasquista. Aunque sólo fue una causa secundaria y no fundamental del subsiguiente colapso económico, la decisión de nacionalizar el sistema bancario resultó ser un colosal error político y un punto de inflexión del cual García jamás se recuperaría.

En términos económicos, el anuncio enterró la poca confianza que el Presidente había logrado generar con su concertación con los «doce apóstoles» de la comunidad empresarial (cuatro de los cuales se contaban entre los banqueros más poderosos del país). Temeroso de un posible giro a la izquierda y al socialismo por parte del gobierno, el desilusionado sector privado comenzó a desinvertir mediante la fuga de capitales a refugios seguros en el extranjero. Se sabe que García estaba cada vez más impaciente e irritado con la lenta respuesta empresarial en el cumplimiento de su promesa de realizar nuevas y grandes inversiones en la economía. Él sabía que la heterodoxia no podía funcionar sin estas inversiones, dada la falta de préstamos extranjeros.

García se volvió ahora furiosamente contra lo que llamó la «oligarquía financiera». Sostuvo, con un lenguaje cargado con la retórica de la lucha de clases, que ésta era el centro de un vil sistema de vínculos entre los bancos, las mutuales de ahorro y crédito, las compañías de seguros y los grandes grupos de interés económico que dominaban la economía. Esta acusación tenía algo de cierto, dado que cinco de los bancos más grandes controlaban el cincuenta por ciento del PBI, juntamente con varios grandes grupos empresariales. Sin embargo, la opinión

pública, que García había calculado que sería ampliamente favorable al anuncio, mantuvo una actitud, por lo general, negativa. El anuncio además generó una feroz oposición política, permitiendo que resucitase la derecha política, que yacía mayormente moribunda desde el aluvión electoral de García en 1985.

Incapaz de conseguir que la medida fuera aprobada por un congreso renuente y con la pérdida fundamental de la confianza empresarial, García sufrió una gran derrota política justo en el momento en que la economía continuaba deteriorándose. Por ejemplo, entre enero y diciembre de 1987 la inflación subió de una tasa anual de sesenta y cinco por ciento a 114,5 por ciento. Es más, el *boom* impulsado por la demanda de 1986 descendió en el transcurso de 1987, de modo tal que la tasa de crecimiento anual de 7,5 por ciento fue mucho más elevada al comienzo del año que a su fin. Aún más preocupante era el fuerte giro del superávit comercial: las reservas, debido principalmente al alza de las importaciones, pasaron de un superávit de $1,2 billones en 1985 a un déficit de $521 millones en 1987, el más alto desde 1981. La condición fiscal del gobierno también empeoró a medida que la recaudación fiscal caía pero el gasto apenas bajaba ligeramente.

Para revertir estas tendencias adversas, el gobierno abandonó sus políticas heterodoxas por otras ortodoxas. Cambios de políticas tan radicales, característicos de los gobiernos peruanos por más de un cuarto de siglo, han hecho que los economistas se refieran al «efecto pendular» como un factor importante que ha contribuido al pobre rendimiento económico peruano en este periodo. Se hizo un esfuerzo por hacer las paces con la comunidad financiera internacional, reuniéndose los representantes del gobierno con el Banco Mundial y conversando sobre el reinicio de los pagos, con la esperanza de conseguir nuevos préstamos. En octubre de 1987 el gobierno devaluó el inti en veinticuatro por ciento y anunció el primero de una serie de paquetes de austeridad progresivamente más severos, decretados en los siguientes dieciocho meses. Sin embargo, preocupado por el costo político de la caída de su popularidad y como reacción a las luchas burocráticas y a las disputas de su gobierno en torno a las políticas a seguir, García moderó cada paquete en un intento de hacerlo más tragable políticamente. Esta política de «gradualismo» hizo poco por contener la espiral inflacionaria, la desaceleración económica o la caída de los salarios. Por ejemplo, según Graham (1992: 109), la tasa de inflación se disparó de una tasa anual de 360 por ciento en el primer trimestre de 1988, a casi 7.000 por ciento en el segundo, la más alta en la historia moderna del Perú.

Dado que las condiciones seguían deteriorándose, en septiembre de 1988 García finalmente aceptó abandonar su política de austeridad gradual por un tratamiento real de *shock*, que comprendía una masiva devaluación del setenta y cinco por ciento; ajustes fiscales tales como alzas de precios (el de gasolina se cuadruplicó, los de los productos farmacéuticos se sextuplicaron) e impuestos más

elevados; y una contracción monetaria que consistió en la duplicación de las tasas de interés. Sin embargo, ni siquiera esto bastó para detener el alza de la inflación y fue necesario otro paquete de austeridad aún más duro en noviembre, que entre otras cosas devaluó el inti a 500 por dólar.

El costo social de estas medidas de ajuste, que en realidad no contribuyeron mucho a contener la espiral hiperinflacionaria, fue enorme. Con los precios ahora fuera de control, la tasa anual de inflación alcanzó un récord de 1.722 por ciento en 1988, roto sólo un año después con 2.776 por ciento. Al mismo tiempo, el PNB se contrajo en casi nueve y doce por ciento en los mismos años. En consecuencia, el ingreso real cayó veintidós por ciento entre 1987 y 1989, bajando a los niveles de la década de 1960. Asimismo, escasearon los productos de primera necesidad, a la par que largas filas de amas de casa hacían cola para conseguir huesos de vaca y pollo, grasa de cerdo y cabezas y colas de pescado. Los consumidores simplemente no podían comprar otras partes de los animales, que luego se malograban por falta de compradores. El ingreso anual de una unidad doméstica en Lima se contrajo en sesenta y cuatro por ciento entre 1987-1988. El índice de empleo (1979 = 100 por ciento), que en los primeros dieciocho meses de García subió a 104,5 por ciento, cayó entonces a 96,1 por ciento (y en las manufacturas de 101,3 por ciento a 88,2 por ciento). En 1990, el setenta por ciento de la fuerza laboral estaba desempleado o subempleado.

La situación fue igualmente grave en las zonas rurales. La agricultura, que experimentó una modesta recuperación (un crecimiento anual de 3 por ciento) en la primera mitad del gobierno de García, vivió ahora un colapso en mercados y precios, haciendo que el ingreso de las los agricultores se derrumbara. Los términos de intercambio en la agricultura se hicieron marcadamente negativos a medida que la demanda de productos agropecuarios descendía en las ciudades, y el precio de insumos como los fertilizantes se disparaba. Es más, el muy promocionado programa de García de crédito para los agricultores se contrajo, al quedarse los programas del gobierno sin dinero. En 1989 la producción agrícola se redujo marcadamente después de haber crecido en los dos años anteriores, provocando carestías en las ciudades y haciendo que fueran necesarias las costosas importaciones estatales. El arroz, por ejemplo, usualmente una mercancía con superávit, tuvo que importarse desde Corea del Norte.

La crisis cada vez más profunda causada por los paquetes de ajuste estructural de García quedó revelada con las crecientes evidencias de una difundida desnutrición. Según un estudio, menos de la mitad de la población ganaba lo suficiente ($48) en un mes como para comprar la canasta mínima de bienes necesarios para una subsistencia adecuada. Más de 6,5 millones de personas ni siquiera ganaban lo suficiente ($31 al mes) para consumir el nivel mínimo de calorías necesarias para evitar la desnutrición. Su incidencia era particularmente

aguda entre los niños pequeños, y la tasa de mortalidad infantil se incrementó sustancialmente. Los esfuerzos del gobierno para aliviar el impacto de los paquetes mediante su Programa de Compensación Social, iniciado en abril de 1989, tuvieron muy poco efecto por la ineficiencia burocrática y la falta de recursos. Sin embargo, las ONG con financiamiento externo y las organizaciones de base de autoayuda (las cocinas comunales y los programas del «Vaso de Leche»), incrementaron su asistencia en los pueblos jóvenes de Lima y otros lugares.

La reacción popular al impacto del *shock* fue relativamente tranquila. Las convocatorias hechas por la Confederación General de Trabajadores del Perú para un paro nacional en octubre, y nuevamente en diciembre, apenas recibieron un respaldo limitado de los trabajadores. Muchos obreros estaban tan ajustados que eran reacios a sacrificar la paga de un día, en tanto que otros temían perder su puesto si no se presentaban a trabajar. También había un considerable temor a que toda demostración o marcha laboral en las calles fuese reprimida violentamente por el gobierno. Con todo, el número de huelgas individuales subió de 579 en 1985 a 815 en 1988. Las más severas se dieron en el muy golpeado sector público, entre obreros municipales, maestros, trabajadores de salud y mineros, cuyos salarios habían caído debido a la crisis financiera del Estado y la economía.

Uno de los principales beneficiarios con esta difícil situación fue, claro está, Sendero Luminoso, el cual siguió ampliando sus operaciones en zonas tanto rurales como urbanas. Su mayor éxito lo obtuvo en el alto Huallaga. En 1988 la producción de coca de la región había alcanzado un estimado de 10.000 toneladas en más de 250.000 hectáreas, empleando tal vez a un cuarto de millón de personas. Los esfuerzos del gobierno para inducir a los agricultores a que la reemplazaran con otros cultivos como café, arroz, maíz, cacao o frutas, no funcionaron ni siquiera al caer el precio de la coca debido al exceso de oferta en los Estados Unidos. Y cuando los precios agrícolas se derrumbaron con la recesión de 1988-1989, los agricultores, de hecho, dejaron los cultivos tradicionales por la coca.

El final de la década de 1980 también vio un desplazamiento en el procesamiento de la coca, de los laboratorios a lo largo de la frontera colombiana a otros situados en zonas dentro del Huallaga, que estaban más cerca de las fuentes de aprovisionamiento. En 1987 se estimaba que la región producía $1 billón de dólares anuales, el doble del valor de las exportaciones de cobre. De hecho, la coca representaba aproximadamente el cuarenta por ciento del valor de las exportaciones y un veinte por ciento del PBI agrícola. Para que los dólares se convirtieran en intis, la industria bancaria se expandió rápidamente al Huallaga; según Crabtree (1992: 196), aviones repletos de dólares de la región eran transportados a Lima a cambio de su equivalente en intis.

Para Sendero, el control del Huallaga era ahora una clave de su estrategia global, al brindar una fuente disponible de hombres, armas y dinero a partir del cual

conseguir un «equilibrio» o paridad estratégica con las fuerzas armadas del país. Sin embargo, antes de alcanzar este fin debía enfrentarse al MRTA, dirigido por el ex aprista Víctor Polay Campos, un viejo compañero de estudios universitarios de García. El MRTA también había puesto la mira en la riqueza potencial del Huallaga y se había establecido allí para intentar sacar una tajada de las recompensas financieras de la industria cocalera. Ambas fuerzas subversivas chocaron en Tocache a comienzos de 1987, y Sendero inflingió una gran derrota a su rival.

En el Primer Congreso del partido, celebrado en 1988, se produjo una modificación fundamental en la estrategia senderista. Tras sostener que se había avanzado lo suficiente en el campo, Guzmán concluyó que la organización debía ahora desplazar su atención a las ciudades, y a Lima en particular. Sin embargo, la decisión fue aparentemente muy controvertida y provocó la oposición de una facción encabezada por Augusta La Torre, la esposa de Guzmán, quien argumentó que Sendero Luminoso aún no estaba listo para un movimiento tan audaz y que sería exponer el liderazgo de la organización prematuramente.

En consecuencia, Sendero intensificó sus operaciones en Lima, sobre todo con tácticas terroristas tales como los atentados con explosivos, una de las principales características de su guerra psicológica que buscaba desmoralizar a la población. Tal vez su mayor impacto en las ciudades fue el paro armado, desarrollado primero en Ayacucho. La táctica giraba en torno a la amenaza de violencia contra cualquiera que intentase ir a trabajar después de que la organización hubiese declarado el paro. Esto resultó particularmente efectivo contra los choferes de ómnibus y colectivos, que temían sacar sus vehículos a las calles, frustrando así los intentos de los trabajadores de dirigirse a su centro de trabajo.

La desaprobación de García en las encuestas siguió precipitándose a medida que Sendero avanzaba y la economía seguía deteriorándose, descendiendo en una de ellas de noventa por ciento a menos de diez por ciento en diciembre de 1988. Su posición en el APRA también fue descendiendo. Por ejemplo, en el decimosexto congreso partidario en 1988 fue pifiado y silbado, y se eligió secretario general a Luis Alva Castro, su rival más importante, quien albergaba ambiciones presidenciales.

El precipitado desplome presidencial en las encuestas de opinión pública creó, obviamente, un espacio tanto para la izquierda como para la derecha. IU celebró su Primer Congreso en enero de 1989, en medio de una gran esperanza en las elecciones municipales venideras, a finales de año, y en las elecciones parlamentarias y presidenciales programadas para 1990. Sin embargo, ellas se evaporaron cuando una división fundamental entre moderados y radicales, que se venía incubando desde 1987, se hizo irreconciliable. En términos generales, los moderados, encabezados por Barrantes, eran más tolerantes con el APRA y se oponían intransigentemente a Sendero Luminoso, en tanto que los radicales

tomaban la posición opuesta. Incapaces de ponerse de acuerdo con respecto a la composición de un comité ejecutivo nacional en el congreso de enero, ambas facciones se dirigieron fatalmente a las elecciones con distintas listas de candidatos.

Esta vez fue la derecha la que ganó más con la crisis económica. La cuestión aglutinadora fue la declaración hecha por García de su intención de nacionalizar el sistema bancario. Este anuncio desató la más grande manifestación de protesta de derecha en toda la historia del país. El 21 de agosto de 1987 la plaza San Martín de Lima se llenó íntegramente con unos treinta mil manifestantes para escuchar cómo el presidente y su propuesta eran denunciados rotundamente por Mario Vargas Llosa. En su discurso, el escritor internacionalmente aclamado sostuvo que la nacionalización de los bancos era un acto arbitrario e inconstitucional de un gobierno despótico y autoritario, decidido a destruir la democracia y el sistema de libre empresa. Apenas nueve meses después de su desastrosa actuación en las elecciones municipales, la derecha revivía milagrosamente gracias a una nueva coalición de los principales partidos conservadores: el FREDEMO, conformado por AP de Belaunde, el PPC de Bedoya y el Movimiento Libertad. Aunque lo respaldaba el Instituto Libertad y Democracia, encabezado por Hernando de Soto (el autor de *El otro sendero,* junto con Mario Ghibellini y Enrique Ghersi), Vargas Llosa era ahora la estrella política derechista en ascenso en virtud a su oposición a la nacionalización de la banca, y un temprano favorito a suceder al tambaleante García y al gobierno aprista en las elecciones de 1990.

Sin embargo, el primer beneficiario electoral tangible del colapso gubernamental fue el candidato independiente Ricardo Belmont, elegido alcalde de Lima en 1989. Belmont, un acaudalado y afable limeño que controlaba una estación de televisión y se había vuelto célebre al presentar un popular «talk show» radial y luego televisivo, se presentó eficazmente a sí mismo como una persona promedio que luchaba contra los viejos y anticuados partidos y políticos, y postuló a alcalde con la promesa de realizar «obras» —el nombre de su movimiento— públicas. Aceptando que «aunque soy de piel clara, los mestizos, indios y negros de los pueblos jóvenes me quieren bastante», Belmont repitió el éxito «pluriclasista» de García en 1985, alcanzando la victoria con un fuerte respaldo en los distritos obreros y pueblos jóvenes de Lima. Su victoria fue la primera señal de la creciente importancia de un nuevo fenómeno político en el país, el del candidato «independiente» que, como señala Cameron (1996: 48-49), prefiguró la sorprendente «aparición de la nada» de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990.

Capítulo XIII

Fujimori, el neoliberalismo y el progreso peruano, 1990-1995

La campaña de 1990

El principal candidato presidencial en 1990 era Mario Vargas Llosa, el novelista internacionalmente aclamado, cuya popularidad, aunque era relativamente un recién llegado a la política peruana, se disparó como vocero de la derecha contra el intento de nacionalizar el sistema bancario efectuado por García en 1987. Vargas Llosa nació en una familia de clase media pero de apellido aristocrático en Arequipa, en 1936. Debido a la separación de sus padres pasó su niñez en Cochabamba (Bolivia), y en Piura, donde su abuelo, un diplomático y funcionario del gobierno que había recibido nombramientos políticos. Enviado cuando era adolescente a la Escuela Militar Leoncio Prado, en Lima, el joven Vargas Llosa tuvo allí y posteriormente en la Universidad Mayor de San Marcos durante la dictadura de Odría, unas experiencias que le dejaron una honda impresión.

En el Leoncio Prado encontró un microcosmos de la vida peruana, marcado por los prejuicios, la hipocresía y el machismo, que posteriormente captó en la novela *La ciudad y los perros* (1963). El retrato nada halagüeño de la escuela provocó que las autoridades la prohibieran y que numerosos ejemplares fueran incinerados en una ceremonia pública. Vargas Llosa se involucró con el socialismo en la Universidad Mayor de San Marcos, que los espías de Odría mantenían bajo constante vigilancia, así como a sus estudiantes de inclinación izquierdista. A partir de sus experiencias durante los opresivos años de Odría, el aspirante a escritor también desarrolló una profunda admiración por las ideas de la libertad individual y percibió el potencial que el Estado tiene para sofocarla.

Vargas Llosa posteriormente ganó una beca para la Universidad de Madrid, donde escribió su tesis doctoral sobre el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Durante un tiempo vivió en París como traductor y periodista, enviando artículos a diversos diarios y revistas de Perú. A comienzos de la década de 1970,

habiendo cimentado su reputación internacional con las galardonadas novelas *La casa verde* (1966) y *Conversación en la catedral* (1969), Vargas Llosa rompió con García Márquez, entonces el principal defensor intelectual de la izquierda latinoamericana y la Revolución cubana, y comenzó a dirigirse gradualmente hacia la derecha.

Puede decirse que su coqueteo inicial con la política peruana comenzó durante el segundo gobierno de Belaunde, cuando el Presidente le pidió que encabezara la comisión oficial que investigaría la masacre de ocho periodistas en Uchuraccay, cerca de Ayacucho, en 1983. Al año siguiente se le ofreció la cartera de premier pero la rechazó. Sin embargo, hasta la nacionalización de la banca en 1987, las ambiciones políticas de Vargas Llosa no saltaron a primer plano. Inmediatamente después de la nacionalización, él y una serie de otros colaboradores, entre ellos Hernando de Soto, autor de *El otro sendero* (1986 en coautoría con M. Guibellini y E. Ghersi) y fundador del Instituto Libertad y Democracia (ILD), organizaron el Movimiento Libertad (ML).

Libertad, como se le llamó, se convirtió rápidamente en un vehículo de la derecha y de la posible candidatura presidencial de Vargas Llosa a la presidencia en las elecciones de 1990. En febrero de 1988, el ML formó un frente democrático con Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC) bajo el nombre de FREDEMO. El liderazgo de la nueva coalición de derecha fue disputado por un tiempo por Belaunde, que seguía siendo jefe de AP, pero en junio de 1989 Vargas Llosa fue elegido candidato presidencial de la alianza. De Soto, entretanto, había dejado el ML en oposición a su fuerte postura antiizquierdista. Vargas Llosa inició la contienda electoral con un favoritismo abrumador. Todos sus posibles contendores más importantes eran débiles. Por un lado, el poco carismático Luis Alva Castro, del APRA, arrastraba en la campaña la carga del fracaso de García, en tanto que Alfonso Barrantes y Henry Pease García dividieron los cada vez menos votos de la izquierda.

Según las encuestas de opinión, la mayoría de los peruanos, atormentados por años de conflicto civil y crisis económica, estaban ahora desplazándose políticamente hacia el centro moderado, alejándose de los extremos de derecha e izquierda. Al mismo tiempo y tal como lo indicaba la elección de Ricardo Belmont como nuevo alcalde de Lima, ellos manifestaban una profunda antipatía y desconfianza hacia la clase política establecida. Al fin y al cabo los partidos tradicionales de AP y el APRA, después de elevar las expectativas, no sólo habían fracasado miserablemente en estabilizar el país en la década de 1980, sino que además lo llevaron a un ciclo de decadencia, desorden y desesperación.

Tal vez excesivamente confiado con las encuestas que mostraban su fortaleza sobre sus rivales, Vargas Llosa y sus asesores evaluaron mal esta nueva postura política. Sintonizado filosóficamente con la primera ministra británica Margaret Thatcher, a la cual admiraba profundamente, el candidato del FREDEMO creía

que en la década de 1990 el Perú estaba listo para una «gran transformación conservadora», similar a la que había tenido lugar en el mundo angloamericano en la década de 1980. Los lineamientos de esta transformación fueron detallados en diciembre de 1989 por Vargas Llosa, en términos inusualmente específicos para un candidato, en un discurso que leyó ante un foro para candidatos presidenciales auspiciado por la principal asociación de ejecutivos del Perú.

En este discurso, Vargas Llosa pedía un duro programa de estabilización de tipo fondo-monetarista para reducir la tasa de inflación astronómica y prometió reinsertar el país en la economía internacional. Se liberalizaría el comercio, se reiniciaría el pago total de la deuda, se estimularía la inversión extranjera, las empresas estatales serían privatizadas, los controles de precios y los subsidios se eliminarían, se transformaría la estructura tributaria y se derogarían las leyes que garantizaban la estabilidad laboral a los trabajadores. Haciéndose eco de Thatcher, así como de De Soto, Vargas Llosa pedía una desregulación total del Estado y la construcción de una economía de mercado libre que reemplazara el fracasado estatismo y mercantilismo del pasado.

Sin embargo, la reacción general de la opinión pública al programa fue negativa. Este fue percibido como una prescripción demasiado severa y extremista para un público que buscaba candidatos que adoptaran soluciones más moderadas y menos dolorosas para la situación del país. El discurso asustó no solamente a mayorías pobres, que comprendían muy bien las implicaciones que la estabilización tenía para ellos, sino también a segmentos de las clases empresariales y medias que veían con recelo que se pusiera fin a los sistemas estatista y mercantilista con que muchos de ellos se habían beneficiado en el pasado.

Algunos observadores piensan que si bien Vargas Llosa venció en la primera ronda del proceso electoral de dos vueltas, en realidad perdió la elección con este discurso. Al esbozar los detalles de su programa, sus rivales lo pintaron como un fanático radical de derecha, advirtiendo los despidos masivos y otros costos sociales que su programa de *shock* tendría. El hecho de que hubiese decidido aliarse con los dos partidos establecidos de la derecha, que estaban desacreditados ante la opinión pública junto con el resto del *establishment* político, también contribuyó a debilitar su candidatura. Por último, la tez blanca del escritor de cincuenta y cuatro años de edad, su estilo de vida cosmopolita, su forma europeizada de ver las cosas y su porte distante hicieron que en la mentalidad popular fuera considerado como «el candidato de los ricos», una imagen que la oposición explotó con éxito. Apenas a tres semanas de la primera ronda, cuando Alva Castro había reducido algo la enorme ventaja inicial de Vargas Llosa, las compañías encuestadoras detectaron un desplazamiento gradual del electorado hacia un profesor y administrador universitario de ascendencia japonesa, hasta ese entonces poco conocido: Alberto Fujimori.

Fujimori nació en Lima en 1938, cuatro años después de que sus padres hubiesen llegado al país desde Japón para trabajar como operarios agrícolas. A comienzos de siglo llegaron al Perú grupos de japoneses contratados como trabajadores de las haciendas azucareras y algodoneras. Pero algunos dejaban el campo y se dirigían a la capital tan pronto como cumplían su contrato; según Gardiner (1975), allí se establecían en enclaves y entraban en el rubro del comercio al menudeo, prosperando a menudo gracias a sus hábitos de ahorro, de trabajo duro y a su iniciativa individual. La familia Fujimori no era ninguna excepción. Sus padres lo enviaron a escuelas estatales y luego a estudiar agronomía en la Universidad Nacional Agraria. Después de graduarse, Fujimori recibió becas para efectuar estudios de posgrado en Francia y los Estados Unidos, regresando posteriormente a su alma máter como profesor, ascendiendo gradualmente hasta llegar a ser rector. A finales de la década de 1980 estableció relación con un público amplio cuando presentó un programa televisivo llamado *Concertando*, que combinaba noticias agrícolas y políticas y estaba dirigido a los agricultores.

Percibiendo las posibilidades que un *outsider* tendría en la atmósfera prevaleciente «antipolítica», Fujimori primero intentó conseguir un puesto en la lista de senadores de la Izquierda Socialista (IS) de Barrantes para las elecciones de 1990. Al no tener éxito, organizó un partido político llamado Cambio 90, conformado por profesionales independientes y pequeños empresarios, muchos de los cuales eran protestantes evangélicos. Los evangelistas constituían apenas el cinco por ciento de la población peruana pero tenían el cuarenta por ciento del naciente partido, y llevaron a él sus técnicas misioneras de proselitismo casa por casa. Aunque Fujimori no tenía ninguna experiencia anterior en la política, leyó astutamente el deseo que el electorado tenía de caras nuevas. Pasó así a convertirse en el *outsider* político por excelencia, no contaminado por ninguna asociación con la desacreditada clase política peruana. Cuando un dirigente izquierdista preguntó a una placera por qué razón llevaba un afiche del candidato, ésta le respondió simplemente que «porque aún no ha hecho nada» (citado en Roberts 1995: 95, n. 35).

Luego de ingresar a la campaña como un virtual desconocido, Fujimori rápidamente denunció la terapia de *shock* de Vargas Llosa y pidió un enfoque más gradual de la estabilización. El lema de su campaña: «honradez, tecnología y trabajo», sobresalía por oposición a la demagogia usual de los políticos tradicionales y evocaba imágenes positivas de probidad y eficiencia tecnocrática. En una población que admiraba el progreso de los diligentes inmigrantes japoneses, que habían tenido éxito gracias al talento y la perseverancia antes que a sus apellidos y conexiones familiares, la ascendencia y la exitosa carrera de Fujimori pasaron a ser una ventaja. Pronto circularon rumores de que como presidente, su ascendencia daría al japonés-peruano un fácil acceso a los préstamos y capitales de Tokio.

Tales atributos personales eran bien vistos entre las masas mestizas e indias del país, al igual que entre los habitantes de los pueblos jóvenes y entre los campesinos. Fujimori puso sus miras particularmente en el inmenso sector popular o informal de los extensos distritos populares de Lima, cuyos habitantes eran inmigrantes que luchaban para mejorar su suerte, tal como su familia lo había sido. Posteriormente diría que «toda la campaña fue organizada de modo tal que mi mensaje llegase a mi base social: el sector informal y los marginales» (Salcedo, citado en Cameron 1997: 71). Con miras a atraer a este electorado, Fujimori eligió como su candidato a la vicepresidencia a Máximo San Román, el presidente mestizo de la asociación de medianos y pequeños empresarios más importante del país. En campaña, «El Chino», como empezó a ser nombrado, se identificaba diestramente con la gente común, trazando un contraste pintoresco con su fino y aristocrático oponente Vargas Llosa y su círculo de asesores blancos.

Fujimori parecía deleitarse en juntarse con la gente común en los pueblos jóvenes de la ciudad o en los mercados rurales de la sierra, colocándose a menudo un colorido poncho y chullo andinos. Disfrutaba recorriendo las barriadas en un tractor llamado el Fujimóvil, desde donde invariablemente recordaba a su público que el sería «un presidente como tú» (Conaghan y Malloy 1994: 227). Este estilo populista también se reflejó en sus promesas electorales, como hacer que el crédito estatal estuviese fácilmente a disposición de los informales y campesinos, y brindar protección legal a los vendedores ambulantes. En cambio, el caballeresco y formal Vargas Llosa se sentía incómodo haciendo campaña en los pueblos jóvenes, donde, a menudo, se mostraba tieso, distante y hasta arrogante, de modo que raras veces se presentaba allí. Todas estas imágenes llegaban a la población por la televisión, que ahora era el medio más importante del país.

Fujimori también ganó puntos en un debate presidencial cuando, al referirse a la intención declarada de su rival de «europeizar al Perú», dijo con una mueca, «Me parece que Usted desea convertir al Perú en una Suiza, Doctor Vargas Llosa» (citado en M. Vargas Llosa 1991: 37). Como un integrante del equipo de relaciones públicas del escritor correctamente anotase, «Fujimori se convirtió en un peruano de piel oscura que le había salido al frente a un Vargas Llosa aristocrático y de piel blanca. Tal vez era un peruano de primera generación, pero en la guerra de imágenes representaba al Perú políglota que había sido explotado y marginado por los intrusos europeos que Vargas Llosa simbolizaba» (citado en Cameron 1994: 118).

Cuando finalmente se emitieron los votos, Fujimori pareció salir de la nada para conseguir el veinticinco por ciento de los sufragios, apenas tres puntos por detrás del veintiocho por ciento de Vargas Llosa, alcanzando Alva Castro el tercer lugar con diecinueve por ciento y las candidaturas conjuntas de la izquierda el último, con once por ciento. Su notable actuación se debió, en gran medida, a que

había recibido la parte más importante del voto del sector informal en los pueblos jóvenes. A la inversa, el fracaso de la izquierda podía atribuirse no solamente a su división, sino al hecho de que su enfoque clasista había ignorado virtualmente los cambios sociales de los últimos quince años, que habían dado origen al nuevo e importante estrato de los informales. Para muchos activistas de la izquierda, este sector representaba una pequeña burguesía que oscilaba impredeciblemente en forma reaccionaria o progresista, dependiendo de las circunstancias.



Presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Reproducido con permiso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

En cuanto al voto parlamentario, los candidatos del FREDEMO lograron ganar una mayoría relativa de un tercio de las curules en ambas cámaras del congreso (veintiuno de sesenta y dos senadores y ochenta y tres de ciento ochenta diputados), en tanto que el APRA obtuvo una cifra ligeramente menor de un tercio (diecisiete senadores y setenta diputados). Las ganancias fueron costosas, puesto que el FREDEMO había gastado un asombroso total de $12,8 millones en las campañas presidencial y parlamentaria, buena parte de ello en medios sofisticados de relaciones públicas. De otro lado, la campaña del Cambio 90 de Fujimori gastó menos de un cuarto de millón de dólares y ganó menos de una quinta parte de las curules del Congreso (catorce senadores y treinta y dos diputados). En consecuencia, si Fujimori ganaba la segunda vuelta, como parecía probable, se enfrentaba a un probable entrampamiento en el Congreso, circunstancia en modo alguno prometedora para la incipiente democracia peruana.

Tras pasar a la segunda ronda electoral, Fujimori ocupó resueltamente el centro del espectro político, encajonando exitosamente a Vargas Llosa en la derecha. No tuvo muchos problemas para atraer votos del centro-izquierdista APRA, para quien el FREDEMO era un anatema, y de la izquierda, que se encontraba en un callejón sin salida. Por su parte, Vargas Llosa no logró desprenderse de la etiqueta de ser el «hombre rico», ni quebrar el abismo de clase que caracterizaba a buena parte de la política peruana. El candidato del FREDEMO había ganado más del setenta por ciento de la votación en los distritos de clase alta de San Isidro y Miraflores, pero menos del veinte por ciento en los distritos populares de Independencia y Villa María del Triunfo/Villa El Salvador.

Poco cambió esta tendencia en las semanas anteriores a la votación. Fujimori rechazó una propuesta de Vargas Llosa para formar un gobierno de coalición mayoritario y así evitar la segunda vuelta. Vargas Llosa intentó suavizar su programa de estabilización pero el daño ya estaba hecho, en tanto que Fujimori seguía proyectando una imagen moderada y pragmática. La religión pasó a ser un punto central de discusión cuando la Iglesia, estimulada por los miembros conservadores de la jerarquía, organizó un mitin el 31 de mayo encabezado por el nuevo arzobispo Augusto Vargas Alzamora, en protesta por unos supuestos insultos formulados por los protestantes evangélicos del partido de Fujimori.

La susceptibilidad del arzobispo en torno a este tema era en cierto sentido comprensible, puesto que el protestantismo había ido consiguiendo avances sustanciales en Perú a lo largo del último medio siglo. Un censo de 1981 registró que el 4,7 por ciento de la población era «cristiana no católica» (en 1972 representaba un 3,2 por ciento). Las mayores ganancias fueron las de las iglesias misioneras como los adventistas del séptimo día, los pentecostales y los bautistas, no tanto de las principales iglesias protestantes. Durante la primera mitad del siglo, la Iglesia Adventista constituyó el grupo protestante más grande del país. Sin embargo, en

los últimos veinte años, los pentecostales fueron el grupo que creció con mayor rapidez, contando con 212.822 miembros en 1982. Otras sectas que no forman parte de la corriente principal, como los mormones y los testigos de Jehová, también han crecido considerablemente en años recientes.

La mayoría de estos grupos ven América Latina como un área particularmente prometedora para el proselitismo, debido principalmente a la poca disposición al cambio de la Iglesia católica tradicional. Sin embargo, Klaiber (1992: 357) señala que la Iglesia en el Perú, en particular después del Concilio Vaticano II, había sido especialmente sensible a la población de los pueblos jóvenes y del sur andino, ofreciendo muchos de los atractivos que las sectas protestantes brindan. Él atribuye la expansión de los no católicos a la explosión demográfica, que simplemente abrumó a la Iglesia católica y abrió espacio a los recién llegados.

El crecimiento del protestantismo, en particular entre las clases subalternas, puede atribuirse también a otros factores. Por un lado, esta religión parece llenar un vacío en la vida de los pobres en términos de comunidad, participación y seguridad, que la Iglesia católica no ha podido o no ha estado dispuesta a cubrir. Ello, juntamente con la rápida promoción de personas laicas a puestos de responsabilidad, contribuyó a brindar una mayor autoestima. Por otro lado, como Marzal (1972) señaló, el énfasis que algunas de las sectas protestantes ponen en el Viejo Testamento, que subraya un rígido código de conducta y predica un mensaje mesiánico, resulta atractivo para una población que está igualmente empobrecida. Otros grupos protestantes, como los mormones y los adventistas, parecen haber captado bastantes seguidores en las ascendentes clases medias bajas urbanas.

Si el exabrupto del arzobispo a causa del protestantismo no logró influir sobre muchos votantes en la segunda vuelta, sí produjo, no obstante, extraños aliados en una Iglesia dividida, al igual que la mayoría de las instituciones peruanas, entre liberales y conservadores, respaldando algunos obispos a Vargas Llosa, un agnóstico confeso, en contra de Fujimori, un católico practicante. El racismo también levantó su fea cabeza en la campaña, cuando uno de los partidarios de Vargas Llosa declaró —haciéndose eco de una actitud ampliamente sentida en las clases altas— que él dudaba que el hogar de los incas estuviera listo para votar por un candidato que era un peruano de primera generación. Sin embargo, el resultado de la votación en la segunda vuelta desmintió tal afirmación puesto que Fujimori recogió virtualmente todos los votos del APRA y la izquierda en la primera vuelta y alcanzó una victoria resonante: sesenta y dos por ciento contra el treinta y ocho por ciento de Vargas Llosa.

Fujishock y autogolpe, 1990-1992

Al asumir la presidencia en julio de 1990, Fujimori declaró haber heredado un «desastre». Hernando de Soto, ahora un cercano asesor, enfatizó esto: «Esta sociedad está colapsando. ... No se respeta al Estado, el Congreso, las leyes, el sistema judicial, ni siquiera los semáforos. Nada funciona aquí» (citado en *Current History* 1992: 77). Aunque buena parte de este «desastre» puede atribuirse al gobierno de García, en verdad se trataba también del resultado de una crisis de más larga data. Por ejemplo, el PBI había crecido un mísero uno por ciento al año entre 1976 y 1989, en modo alguno suficiente para mantener a una población que en ese mismo lapso crecía al ritmo de 2,5 por ciento al año. Los ingresos sufrieron concomitantemente, estando los salarios reales de 1990 a la mitad de los niveles de 1980, que a su vez eran la mitad de lo que habían sido a mediados de la década de 1970.

Según Mauceri (1995), el declive económico peruano contribuyó a un severo debilitamiento del Estado en el mismo periodo aproximado de quince años. La recaudación tributaria en la década de 1980, por ejemplo, había descendido más de la mitad debido al declive económico. Al reducirse los recursos públicos, la infraestructura básica del país cayó en un serio estado de deterioro, agravado por la extensa destrucción de caminos, puentes y otras instalaciones realizada por los insurgentes de Sendero Luminoso. Igualmente dañino para la capacidad del Estado fue la reducción del sesenta por ciento del salario de los empleados estatales entre 1985 y 1990 que, junto con los despidos, minó tanto la moral como el nivel de conocimiento de los administradores públicos.

La crisis del Estado puede atribuirse también a su politización en la década de 1980. La redemocratización de esa década no solamente trajo consigo de vuelta a la política partidaria, sino que provocó el tambaleo de las políticas económicas firmes, siendo ahora las preocupaciones ideológicas o políticas antes que las pragmáticas las que guiaban el diseño económico. En una variante del efecto político pendular de democracia seguida por dictadura, el país oscilaba de una receta económica ortodoxa a otra heterodoxa. Es más, las tasas de cambio eran manipuladas como una cuestión de rutina por razones políticas y la corrupción iba en ascenso a medida que el partido vencedor procedía a emplear el aparato estatal para saquear el tesoro público.

Buena parte de la caída de la economía a finales de la década de 1980 se debía, claro está, al experimento heterodoxo de García, que hizo una ruidosa implosión. Entre 1988 y 1990, el PBI per cápita disminuyó un veinticinco por ciento y pronto llegaría al nivel de 1950, la contracción general de la economía —según la CEPAL (1991)— fue de 8,4 por ciento en 1988, a 11,4 por ciento en 1989 y a 4,9 por ciento en 1990. En 1985, el sesenta por ciento de la población

limeña estaba empleada «adecuadamente», pero para 1990 lo estaba menos del diez por ciento. Los salarios reales estaban ahora debajo del nivel de 1970. De este modo, no sorprende que el consumo familiar promedio cayera en cuarenta y seis por ciento en ese mismo lapso. Asimismo, la distribución del ingreso se hizo cada vez más sesgada. Mientras que la participación de los trabajadores en el ingreso real cayó de 37,7 por ciento en 1980 a 28,8 por ciento en 1989, los retornos del capital subieron de 38,1 por ciento a 42,5 por ciento. Según una fuente confiable, el desempleo alcanzó niveles «jamás antes vistos» en 1989 (citada en Cameron 1997: 59). Los ingresos del Estado descendieron también estrepitosamente, derrumbándose la recaudación tributaria hasta apenas el tres por ciento del PBI a fines del régimen aprista.

Los costos sociales de las fallidas políticas económicas de García fueron predeciblemente severos. Mientras que los niveles de pobreza aumentaban fuertemente por todo el país, el gasto en salud pública y educación disminuyó un treinta por ciento a lo largo de la década de 1980-1990. Lo que mejor simbolizó la crisis de la salud pública fue la epidemia de cólera a comienzos de 1991, una enfermedad que no se había visto desde el siglo XIX. El cólera atacó a más de un cuarto de millón de personas, dando muerte a un estimado de 2.500 y propagándose posteriormente a otros países.

El colapso económico estuvo acompañado por la prolongación, y en realidad intensificación, de la sangrienta guerra de diez años entre Sendero Luminoso y las fuerzas armadas. Desde su estallido en 1980, la insurgencia había costado más de veinte mil vidas, causado daños económicos estimados en $15.000 millones y creado más de doscientos mil refugiados internos. Casi el cuarenta por ciento del país y más de la mitad de su población vivía bajo la ley marcial. En un esfuerzo por ganar la guerra, los militares se convirtieron en uno de los peores violadores de derechos humanos del mundo, sólo igualados en su salvajismo por los revolucionarios en sus ataques a la población civil. La percepción general era que Sendero estaba avanzando gradualmente hacia su objetivo de destruir el Estado.

Parte del problema de la incapacidad estatal para detener el avance de Sendero era, claro está, la crisis económica que afectaba adversamente a los militares, al igual que a otras ramas del gobierno. El salario de los oficiales se había desmoronado, de modo que en 1990 un general peruano, para dar un ejemplo, ganaba apenas una cuarta parte de su contraparte chilena. Estas bajas remuneraciones produjeron, a su vez, un incremento en la corrupción relacionada con las drogas dentro de las fuerzas armadas, así como una tasa creciente de deserción y pérdida de moral. En la década de 1990, según Mauceri (1995: 13), el orgullo que sentían los militares por los avances en la profesionalización que tuvieron lugar en las décadas de 1950 y 1960 no era sino un lejano recuerdo.

Los diez años de lucha de los militares para derrotar a Sendero también se vieron inhibidos por un problema político. Una corriente de pensamiento de las fuerzas armadas proponía una «solución de guerra sucia a la argentina» que recurriría a una represión masiva, sin importar el costo en violaciones de derechos humanos. La opinión contraria, la llamada solución desarrollista, sostenía que únicamente una masiva asistencia social y programas de desarrollo económico extirparían las causas fundamentales de la insurgencia y se ganaría a «los corazones y mentes» de la población. En la década de 1980, el Estado alternaba infructuosamente entre ambos enfoques y no avanzó mucho en poner fin a la insurgencia.

Enfrentado a problemas tan intimidadores, Fujimori no tardó mucho tiempo en actuar. Unas cuantas semanas después de asumir el poder decretó un paquete de estabilización ortodoxo realmente draconiano, mucho más duro que cualquier otro que Vargas Llosa hubiese contemplado. Atacando la inflación desbocada, el gobierno cortó los subsidios de los precios y el gasto social, y aumentó las tasas de interés y los impuestos. Por ejemplo, el precio de la gasolina subió tres mil por ciento, en tanto que el de la mayoría de los alimentos creció quinientos por ciento. La tarifa del agua se octuplicó y la de la electricidad subió cinco veces. A este «fujishock», como fue denominado, le siguió, en febrero de 1991, una serie de medidas diseñadas para reestructurar la economía. Ellas incluían el inicio de la privatización, la desregulación de los mercados laboral y financiero, reformas tributarias y arancelarias, incentivos a la inversión y la descentralización de algunos servicios sociales. En una medida pensada para restaurar la confianza de la banca mundial y reinsertar al Perú en la economía mundial, Fujimori comenzó a pagar mensualmente a las instituciones financieras internacionales $60 millones de la deuda externa peruana, que ahora sumaba $21.000 millones.

Un efecto del programa de austeridad fue, claro está, la pauperización aún mayor de la población. En general, entre 1990 y 1992, el ingreso real de los peruanos cayó en una tercera parte. En Lima, el consumo global disminuyó en veinticuatro por ciento y un estimado de un millón de trabajadores perdió su puesto de trabajo. Para quienes sí lo conservaron, el salario disminuyó sensiblemente, un sesenta por ciento en el sector público y cuarenta por ciento en el sector privado. Un cálculo conservador daba como resultado que el cincuenta y cuatro por ciento de toda la población peruana vivía en la pobreza. En los siguientes años, el porcentaje de subempleados o desempleados del total de la fuerza laboral subió de 81,4 por ciento en 1990 a 87,3 por ciento en 1993, en tanto que el sector informal creció de 45,7 por ciento en 1990 a cincuenta y siete por ciento en 1992. Los niveles de desigualdad subieron en una proporción similar.

Al comentar el impacto del «fujishock», un economista señaló que era «como efectuar cirugía al corazón, el estómago, el riñón y los pulmones todo al mismo tiempo, en un paciente que no ha comido en tres años» (citado en *Current History*

1992: 77). Aunque Fujimori prometió proteger al segmento más pobre de la población del efecto de su terapia de *shock* con un programa social de emergencia de $400 millones, realmente sólo se gastó $90 millones. La única ganancia tangible fue la reducción de la hiperinflación, que descendió estrepitosamente de 7.650 por ciento a un estimado de cincuenta y cinco por ciento a finales de 1992.

No obstante el severo tratamiento de *shock* del gobierno y su impacto material negativo en la mayoría de la población, la popularidad de Fujimori, medida con las encuestas de opinión pública, siguió siendo alta. Cameron atribuye su popularidad al hecho de que con él, Perú se convirtió en un «ejemplo paradigmático» de lo que O'Donnell llamó una «democracia delegativa» (Cameron y Mauceri 1997: 48). En efecto, esto significaba que el pueblo había elegido a Fujimori para que efectuara en su nombre cualquier medida que él considerara de interés nacional, a pesar de las promesas que hubiese hecho en el calor de la campaña. Para Cameron, el anhelo que los peruanos tenían de una autoridad política y de una estabilidad económica era tan grande que el pueblo aceptaba cualquier medida que el nuevo presidente tomara para resolver la crisis.

Roberts, quien considera a Fujimori un neopopulista, explica su popularidad continuamente alta a la inteligente manipulación que el presidente hacía de ciertos temas políticos y simbólicos. Por ejemplo, al igual que populistas anteriores, puso las miras e identificó hábilmente a un enemigo doméstico al cual atacar. Sin embargo, Fujimori sustituyó la oligarquía o la plutocracia —los enemigos favoritos de populistas anteriores—, por la clase política y por las instituciones representativas del país. Fujimori, una vez en el poder, siguió cultivando la imagen de *outsider* y político contrario al *establishment* que había proyectado hábil y exitosamente durante su campaña y puso en práctica lo que se ha llamado la «política de la antipolítica» (Roberts 1995: 98).

Al no contar con su propia base política institucional, Fujimori enfocó sus críticas cada vez más hacia los partidos políticos, el Congreso y el poder judicial. El país, decía, había sido gobernado por una «partidocracia» corrupta, ineficiente y sectaria, manejada por patrones enquistados que habían llevado al Perú al borde mismo de la ruina financiera y política. Al denunciar las débiles instituciones representativas del país (que estaban controladas por sus opositores), Fujimori no solamente contribuyó a restarles legitimidad, sino que acopió un considerable respaldo político al mismo tiempo que se presentaba a sí mismo como el nuevo árbitro de la situación política. Semejante campaña de difamación es, claro está, concordante con la noción de una democracia «delegativa», en la cual el Congreso y el poder judicial son vistos por el presidente como poco menos que «molestias», constreñimientos innecesarios del poder Ejecutivo, sólo tolerables en la medida en que son imprescindibles para cortejar el respaldo internacional.

Es más, igual que en el transcurso de la campaña, Fujimori siguió recurriendo directamente al pueblo en forma sumamente personalista, sin la mediación de instituciones u organizaciones corporativas. Mientras que los populistas anteriores habían movilizado a los trabajadores, Fujimori dejó de lado a los sindicatos, que en todo caso estaban mayormente bajo el control de Izquierda Unida. Además, el catastrófico incremento del desempleo en la década de 1980 había diezmado las filas de los trabajadores y su tradicional poder organizativo. Al mismo tiempo, el colapso económico había inflado el sector informal, de modo que en la década de 1990 este comprendía cinco veces el número de trabajadores del sector formal.

Aunque los trabajadores habían respaldado a Fujimori en la segunda vuelta, una vez que asumió el mando desafiaron furiosamente el programa de *shock* del nuevo presidente, que llevó a cortes salariales, el despido de trabajadores y la derogación de las leyes que protegían sus derechos colectivos. Sin embargo, Fujimori soportó fácilmente tres fallidos paros nacionales, que revelaban claramente la impotencia y la irrelevancia política de los trabajadores. En 1991, los miembros de los sindicatos habían descendido a la tercera parte, apenas el doce por ciento de la fuerza laboral, en tanto que el sector informal de Lima representaba casi la mitad de la población económicamente activa.

Durante los doce primeros meses de su gobierno, Fujimori gozó de un tremendo poder de diseño de políticas, no obstante la débil posición en el Congreso de su partido, Cambio 90. Buena parte de este poder se derivaba de la constitución de 1979, que había concentrado el poder en el Ejecutivo. Es más, gracias a su aprobación pública continuamente alta, la tradicional luna de miel política postelectoral y a la coincidencia general del FREDEMO con su paquete de estabilización y objetivos económicos neoliberales, el Congreso delegó al nuevo presidente la autoridad para que impulsara su programa emitiendo decretos leyes. Al mismo tiempo, desde el inicio mismo de su régimen, Fujimori había establecido un pacto crucial con las sumamente importantes fuerzas armadas, que se convertirían en la principal base institucional del nuevo gobierno.

Para alcanzar este objetivo, el presidente escogió como su principal asesor en asuntos militares a Vladimiro Montesinos, un oscuro abogado y ex capitán del ejército con un pasado siniestro, pero con un excelente conocimiento de quién era quién en las fuerzas armadas. Pasado al retiro supuestamente por haber entregado información a los Estados Unidos, Montesinos defendió a Fujimori de los cargos de evasión tributaria y se especializaba en la defensa de narcotraficantes. La primera medida tomada por Fujimori para consolidar su control sobre los militares llegó el día de su inauguración presidencial, cuando reemplazó a los comandantes en jefe de la marina y la aviación. A finales de 1991, logró que el Congreso aprobara una ley que cambiaba el proceso de selección de los comandantes de las fuerzas armadas. El poder Legislativo dio poder al presidente para que efectuara tales

nombramientos entre los oficiales de mayor jerarquía y no estrictamente por rango, y para pasar a retiro a cualquier oficial sin causa alguna. Esto abrió paso a una creciente manipulación política, ya que Fujimori comenzó a pasar a retiro a una serie de comandantes de los servicios y a promover al general Nicolás Hermoza Ríos, un nuevo comandante en jefe cuya hoja de servicios, al parecer, no era distinguida.

Aunque su decisión iba contra la facción «institucionalista» de los militares, que propugnaban su autonomía frente a las interferencias políticas, fue a pesar de todo aceptada a cambio de la promesa de Fujimori de ampliar y legitimar, esto es legalizar, el esfuerzo contrainsurgente de las fuerzas armadas contra Sendero Luminoso. En adelante, los ascensos y pases al retiro se basarían, no en el mérito profesional, sino en la lealtad a Fujimori y Hermoza Ríos. Montesinos, también ganó el control del Servicio de Inteligencia Nacional, que según Obando (1996) usó no sólo para perseguir subversivos, sino también para ejercer vigilancia sobre los grupos de oposición.

Contando con el respaldo militar y un Congreso momentáneamente dócil, Fujimori pudo promulgar una serie de decretos leyes que liberalizaban la economía, estimulaban la inversión extranjera, cortaban el gasto estatal y reducían los aranceles. Del lado de los ingresos, el presidente persiguió a los evasores de impuestos y eliminó los subsidios y exoneraciones tributarias de empresas grandes, conseguidos mediante argucias legales. Para combatir a Sendero Luminoso, autorizó la creación de patrullas de defensa civiles, o rondas, tanto en las ciudades como en el campo. En los siguientes años, el ejército repartió más de diez mil escopetas Winchester modelo 1.300 a las rondas campesinas, entregadas, a menudo, en ceremonias por el mismo Fujimori o por un general, después de ser bendecidas por un sacerdote como si fueran a usarse en una guerra santa. Revirtiendo una prohibición de dar armas a los campesinos que se remontaba al periodo posterior a la conquista, en 1992 el Congreso aprobó una ley que legalizaba la distribución de armas, cimentando así una alianza hasta el momento impensable entre el ejército y el campesinado en la lucha contra Sendero.

Esta novedosa alianza fue el resultado de un cambio significativo en la opinión de los campesinos frente a Sendero, que se había ido gestando desde hacía unos cuantos años. Su desencanto se derivaba de la violencia indiscriminada y de las tácticas inflexibles de los insurgentes. El campesinado, que por lo general dependía de los intercambios sociales y del ingreso proveniente de fuentes externas a las comunidades, reaccionó negativamente a la estrategia senderista de estrangular las ciudades cortando su acceso a los mercados para vender sus productos.

Al mismo tiempo Sendero iba, a menudo, mucho más allá de los códigos de conducta comunales al imponer su «justicia revolucionaria» contra los supuestos enemigos. Una cosa era ejecutar ocasionalmente a un abigeo o un funcionario

corrupto, pero otra muy distinta dedicarse a matanzas indiscriminadas de supuestos «colaboradores» con lazos familiares y de parentesco en la comunidad. Esta última táctica iba en contra de la tradición de negociación de las comunidades andinas, por la cual los transgresores eran castigados pero siendo usualmente integrados nuevamente en la «familia» aldeana. Tras haber entregado el gobierno de sus comunidades a los rebeldes y experimentado su trato duro y arbitrario, los campesinos reaccionaron y buscaron reestablecer sus formas de gobierno comunales originales. Por estas razones, «en lugar de una progresiva consolidación del respaldo rural, al estilo del Ejército Rojo chino o del Viet Cong, Sendero Luminoso sentó las bases para la explosión de las revueltas armadas contra su designios revolucionarios» (citado en Stern, Ms., 1996: 17).

El ejército, por su parte, reconoció el cambio en el sentir de los campesinos y se movilizó para explotarlo, adoptando la llamada estrategia integrada de promover el «desarrollo sociopolítico» y las «acciones cívicas» en el campo. También adoptó una política de asesinato selectivo de los sospechosos de ser senderistas, en lugar de las matanzas indiscriminadas que habían marcado el método de la «guerra sucia» durante buena parte de la década de 1980. Reemplazando sabiamente en sus operaciones de contrainsurgencia a los reclutas costeños racialmente sesgados por otros quechua-hablantes y con antecedentes campesinos, el ejército mejoró las relaciones con los aldeanos, fraternizando con ellos en las fiestas comunales, distribuyendo alimentos y herramientas, y apoyándolos en los proyectos de desarrollo. Este nuevo enfoque resultó popular, ganándose la lealtad de la población civil andina y ayudó a fomentar la difusión de las rondas, que fueron cruciales para hacer retroceder a Sendero en la década de 1990.

Las rondas aparecieron en el Perú por vez primera en las décadas de 1970 y 1980 en los departamentos norteños de Cajamarca y Piura como organizaciones autóctonas campesinas diseñadas para eliminar a los abigeos, organizar los proyectos de autoayuda de la comunidad y resolver las disputas entre ellas (Starn 1999). Entonces, a comienzos de la década de 1980, los militares adoptaron el término para su concepto de patrullas campesinas forzadas para que se opusieran a las incursiones senderistas en sus comunidades. Con el tiempo y utilizando métodos menos coercitivos, la idea fue aceptada por las comunidades, tomando los campesinos la iniciativa y brindando el ejército importante apoyo «logístico» en forma de herramientas, medicinas y alimentos, además de armas de fuego.

Para comienzos de la década de 1990, estas organizaciones de autoayuda se habían propagado por los Andes del centro y del sur a una velocidad asombrosa, adquiriendo durante el proceso las dimensiones de un movimiento social. En 1994 había en todo el país un total de 4.205 rondas, que comprendían casi un cuarto de millón de personas. A pesar de algunas disputas ocasionales con los comandantes militares, las rondas resultaron ser sumamente efectivas contra Sendero. También

ayudaron a mejorar la imagen negativa que las fuerzas armadas tenían en relación con los derechos humanos, que había crecido enormemente en la década anterior a medida que el Perú ganaba la dudosa distinción de ser el principal violador de estos derechos en el mundo.

Durante los primeros dieciocho meses de su gobierno, el presidente tomó también medidas para cortar el floreciente comercio de coca en el Alto Huallaga. Esta era la exportación peruana más importante, sumando $1.000 millones al año, una tercera parte de todas las exportaciones combinadas, y daba empleo hasta al quince por ciento de la fuerza de trabajo. El flujo de dólares de los traficantes colombianos llegaba al mercado de cambio informal en Lima, donde los compraba el Banco Central para ayudar a pagar la inmensa deuda externa peruana. No sorprende que Fujimori, dada la importancia que el tráfico de drogas tenía para el país, reflejando la opinión pública, estuviese renuente a permitir las iniciativas estadounidenses para intensificar la «guerra contra las drogas».

Al comienzo, Fujimori vaciló en firmar un acuerdo con los Estados unidos para librar esta guerra. Se quejó de que la ayuda estadounidense era principalmente militar y no incluía suficiente asistencia económica. Sin embargo, luego de prolongadas negociaciones, ambos lados llegaron finalmente a un acuerdo en mayo de 1991. Fujimori calculaba que su plan de reinsertar al Perú en el sistema financiero mundial se vería obstaculizado sin un acuerdo de restricción de drogas con el Coloso del Norte. El paquete de ayuda subsiguiente sumó $60 millones, el grueso del mismo para asistencia militar, asignándose apenas el dos por ciento a proyectos de desarrollo alternativo. Sin embargo, la mayor parte del esfuerzo militar peruano se dirigió a la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso que, como vimos, protegía a los productores campesinos del Alto Huallaga. Esto significaba, en efecto, que la asistencia estadounidense fue usada principalmente para acciones de contrainsurgencia contra Sendero y no para la erradicación o la interdicción de las drogas. Sin embargo, después de que se plantearan objeciones en el Congreso de los Estados Unidos por la escalada en las violaciones de los derechos humanos en el Perú, se redujo algo la parte militar de la asistencia y se condicionó a la mejora de los derechos humanos en el país.

A medida que Fujimori avanzaba en acciones para solucionar los problemas de la economía, la subversión y el narcotráfico, fue manifestando una arrogancia y una tendencia autoritaria crecientes que irritaron a la oposición y a los medios. Mostró, por ejemplo, poca disposición a negociar con los miembros de las fuerzas de oposición del Congreso y efectuó arbitrarios ascensos y pases al retiro en las fuerzas armadas para consolidar su respaldo. Los miembros de su entorno comentaban el gusto por el poder del presidente y cada vez era más caricaturizado en los medios como un aspirante a emperador japonés. Asimismo, exasperó al Congreso con su propensión a exceder los poderes legislativos que le había

concedido y con sus frecuentes críticas destempladas a las instituciones cívicas del país.

A finales de 1991, las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo comenzaron a incrementarse. En noviembre, Fujimori emitió una avalancha de 120 decretos leyes justo antes de que expiraran los poderes que le había concedido el Parlamento. Buscando liberalizar la economía y reestructurar el Estado, muchos de ellos comprendían temas controvertidos y excedían la autorización dada por el Congreso. Por ejemplo, uno modificaba la ley de reforma agraria de 1969, retirando las restricciones a la venta de tierras y al funcionamiento de las empresas agrícolas. Otro, al que Fujimori eufemísticamente llamó de «flexibilización laboral», alteraba significativamente la legislación existente que reglamentaba los derechos de los trabajadores a organizarse, a entrar en huelga y a la estabilidad laboral. Otro más, creaba un organismo para supervisar la privatización de las empresas estatales, llamado Comité para la Promoción de la Inversión Privada.

Por último, en el área de la contrainsurgencia el presidente respondió a la presión de las fuerzas armadas creando tribunales militares para juzgar a los sospechosos de terrorismo. Este decreto reaccionaba frente a una tasa notoriamente baja de condenas (diez por ciento) en los tribunales civiles de las personas acusadas de terrorismo, que lograban sobornar e intimidar a los jueces para así conseguir su libertad. Fujimori, asimismo, decretó que los integrantes de las fuerzas armadas no podrían ser juzgados en los tribunales civiles por violaciones contra los derechos humanos, concediendo así virtualmente la inmunidad a sus integrantes.

El decreto, que confería más autoridad aún a los militares contra el terrorismo, era una respuesta a la creciente amenaza de Sendero. El número de asesinatos de funcionarios públicos, sacerdotes y dirigentes comunales siguió aumentando (hubo más de cuatrocientos entre 1988 y 1992). Es más, la creciente presencia de Sendero en Lima, sobre todo en los pueblos jóvenes, comenzó a conducir la guerra directamente a la población urbana. En una incursión particularmente notoria, un comando de aniquilamiento senderista asesinó a la dirigente comunal María Elena Moyano durante una celebración del Programa del Vaso de Leche en Villa El Salvador, en febrero de 1992, y luego dinamitó su cuerpo frente a los niños y otros participantes en la celebración. Para ese entonces, Sendero se jactaba de haber alcanzado la «paridad estratégica» con el Estado y Lima estaba inmersa cada vez más en un clima omnipresente de temor y desesperación por los crecientes niveles de violencia y caos económico, a pesar de que la tasa de inflación iba cayendo fuertemente.

En medio de una situación de deterioro constante, Fujimori conmocionó nuevamente al país al efectuar un autogolpe el 5 de abril de 1992. Poniendo fin a doce años de gobierno democrático, el presidente suspendió la constitución, cerró al Congreso y ordenó el arresto de varios dirigentes opositores. Con el respaldo de los empresarios y de los jefes militares anunció la creación de un

«Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional», que abriría el camino a una «auténtica democracia». Justificando sus actos, Fujimori culpó al Congreso por su comportamiento «irresponsable, estéril, antihistórico y antipatriótico», «que favorece los intereses de pequeños grupos y dirigentes partidarios por encima de los intereses del Perú» (citado en Rochabrun 1996: 16). Poco después del golpe, Fujimori fue recibido entusiastamente por las multitudes mientras caminaba por las calles del centro de Lima.

Cameron atribuyó el autogolpe a «un complejo conjunto de condiciones, entre ellas la desesperación económica y la violencia, la decadencia de las instituciones y el colapso de los partidos políticos, la afirmación de los militares y la reacción de la comunidad internacional» (Cameron y Mauceri 1997: 68); sin embargo, señaló, al mismo tiempo, que no podría haber sido exitoso sin el respaldo del pueblo peruano. Ciertamente, el autogolpe resultó ser sumamente popular entre la mayoría de los peruanos, que parecían estar de acuerdo en que el país necesitaba un gobierno más fuerte para enfrentar la crisis. Las encuestas de opinión pública indicaban que un asombroso setenta por ciento de la población respaldaba el autogolpe.

Aunque Fujimori acusaba al Congreso de obstruir su programa económico y al poder judicial de estorbar la lucha contra el terrorismo, detrás de su medida también había motivaciones políticas. Además de cerrar el Congreso, los soldados intentaron arrestar infructuosamente a Alan García, por el temor del gobierno a que se convirtiera en el líder de la oposición explotando los costos sociales del programa de austeridad, con lo cual se situaría en una posición ventajosa para retornar a la presidencia en las elecciones de 1995. Si bien había sido acusado de una gran corrupción durante su gobierno, García tenía como senador vitalicio el privilegio de contar con inmunidad a toda persecución, prerrogativa que el Congreso se había negado a eliminar. Inhabilitado por la constitución de postular a la reelección, Fujimori percibió plenamente el potencial que el carismático García, ahora nuevamente secretario de su partido, tenía para obstruir sus programas e intentar volver al poder en apenas treinta meses.

A pesar de que seguía siendo popular en casa, Fujimori fue ampliamente criticado en el extranjero por haber abrogado la democracia. Muchos países, entre ellos los Estados Unidos, suspendieron la asistencia económica y retiraron su respaldo, poniendo así en peligro la reinserción peruana en la economía mundial de la cual dependía el plan de recuperación económica de Fujimori. En consecuencia, retrocedió y aceptó —en un discurso dado en mayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA)— convocar a una asamblea constituyente para que redactara la constitución y llamar a elecciones ese mismo año. Este plan pareció satisfacer a la comunidad internacional, que aparentemente estaba más preocupada por la

amenaza de Sendero Luminoso, el avance del narcotráfico y las perspectivas de la liberalización económica, que por el revés sufrido por la democracia.

No obstante su retroceso en la cuestión electoral, el presidente procedió a gobernar por decreto con el respaldo de las fuerzas armadas, concentrando todos los poderes del Estado en sus manos. Una de sus primeras medidas fue desmantelar la judicatura, que había seguido repleta de personas nombradas por García. Trece jueces de la Corte Suprema y más de cien jueces y fiscales de primera instancia fueron reemplazados y el Presidente siguió adelante con el establecimiento de tribunales militares secretos para juzgar a los sospechosos de terrorismo, a pesar de las considerables críticas de las organizaciones de derechos humanos. Así, podría decirse que la democracia peruana había sido arruinada en gran medida por su incapacidad para hacer frente a la contrainsurgencia.

Sendero, por su lado, dio la bienvenida al autogolpe en la creencia de que la dictadura provocaría una represión estatal intensificada e indiscriminada, incrementando así la polarización del país, lo que, en última instancia, le beneficiaría. En julio desató una ofensiva que incluyó el atentado con explosivos contra una estación de televisión en Lima y un coche bomba en un distrito acomodado, que dio muerte a 21 personas e hirió a 250, en tanto que la ofensiva a nivel nacional dejó 179 muertos. Entonces, justo cuando su jefe Abimael Guzmán preparaba aparentemente la «Operación Conquistar Lima», fue repentinamente capturado el 12 de septiembre en una casa segura de un suburbio limeño por la policía nacional de inteligencia (DINCOTE).

Aunque Fujimori se apresuró a reclamar el crédito por la captura de Guzmán, el operativo fue la culminación de una intensa labor de inteligencia efectuada desde 1990, que había puesto la mira en apresar a la dirigencia de Sendero. En efecto, la operación fue dirigida por el general Antonio Ketín Vidal, quien había sido nombrado jefe de la DINCOTE por el ex presidente García. Tras encontrar el escondite de Guzmán al seguir a un sospechoso de ser senderista que había sido excarcelado, los agentes de la DINCOTE llevaron a cabo una vigilancia perfecta, disfrazándose como empleados municipales, vendedores ambulantes y como «invitados» de una parrillada en una casa vecina. En el momento adecuado, treinta y cinco agentes irrumpieron en la casa y aprehendieron pacíficamente al líder, quien supuestamente dijo en voz calma a sus captores: «Me tocó perder».

Los agentes de la DINCOTE arrestaron además a otros dos altos dirigentes de Sendero y lo más importante, descubrieron los archivos de la central informática de toda la organización. Esta bonanza informativa produjo más arrestos policiales que implicaron la captura de más de mil sospechosos en unas cuantas semanas. Para fin de año, las nueve décimas partes de la alta dirigencia del movimiento habían sido apresadas y Guzmán juzgado ante un juez marino encapuchado, quien le sentenció a cadena perpetua. La imagen captada en la televisión semanas antes de

un hombre panzón de mediana edad, con una barba desarreglada y lentes gruesos, subiéndose sumisamente la bragueta de sus pantalones, hizo mucho por desvanecer el aura de invencibilidad creada en torno a Guzmán y su movimiento.

La mística se desvaneció aún más cuando el apresado jefe de Sendero Luminoso pidió la paz al presidente y dijo a sus seguidores que depusieran las armas y negociaran con el gobierno. Este hecho tuvo el efecto de reconocer virtualmente a Fujimori como el vencerdor en la larga guerra y provocar la consternación y la división entre los restos de la dirigencia senderista. Una facción de línea dura procedió a reorganizarse con una nueva dirigencia y se negó a reconocer los llamados de paz de Guzmán: Con todo, una serie de amnistias o leyes de «arrepentimiento» fueron dadas en los siguientes dos años, diezmando las filas de la insurgencia.

El programa ofrecía una serie de beneficios a los subversivos que se rindieran y produjo oficialmente unas 5.500 defecciones de Sendero y más de 800 del MRTA entre 1992 y 1994. Expulsado del Alto Huallaga por Sendero, que derrotó su intento de inmiscuirse en su lucrativo negocio de «protección», el MRTA regresó a las ciudades y a sus raíces urbanas. Esta retirada expuso su organización a las fuerzas de seguridad que descubrieron muchas de sus células y encarcelaron a sus dirigentes. Sin embargo, uno de ellos, el ex sindicalista textil Néstor Serpa Cartolini, logró huir al Ecuador.

Aunque la captura de Guzmán en septiembre asestó un inmenso golpe a Sendero Luminoso, el nivel de los ataques terroristas no disminuyó de inmediato. Es más, el gobierno pronto se vio amenazado de otro lado. El 13 de noviembre, apenas unas semanas antes de que se efectuaran las elecciones a la Asamblea Constituyente, el general retirado Jaime Salinas Sedó encabezó un intento de golpe contra Fujimori. Salinas era una de las víctimas de la interferencia fujimorista en el proceso de ascenso y retiro de los militares basado en el mérito, habiéndosele obligado a pasar tempranamente al retiro por razones políticas. Anunciando el deseo de devolver el país a la democracia, Salinas había contado con el respaldo de aquellos miembros de las fuerzas armadas que habían visto pocas mejoras en sus condiciones económicas. Por ejemplo, el salario de un general de división era de apenas $283 mensuales, en tanto que un teniente segundo ganaba sólo $213. En los círculos militares también había un considerable disgusto con Vladimiro Montesinos, el asesor de seguridad nacional de Fujimori, quien orquestó la mayor parte de las decisiones referidas al personal militar de mayor jerarquía. Fujimori se enteró de la conjura y logró ingresar a la embajada japonesa antes de que los conjurados, que planeaban ingresar a Palacio de Gobierno, fueran arrestados y el movimiento frustrado.

La captura de Guzmán dio a Fujimori un impulso significativo en el momento de las elecciones de noviembre para el Congreso Constituyente Democrático (CCD). Como se anunciase en los lineamientos preparados en julio y agosto, el

CCD iba a ser unicameral y estaría conformado por ochenta congresistas, cuyo mandato duraría hasta el final del gobierno de Fujimori, el 28 de julio de 1995. Se encargó al CCD que preparara una nueva constitución, sujeta a ser aprobada mediante un plebiscito nacional, además de proponer una nueva legislación y ejercer el poder de supervisar al Ejecutivo. Sin embargo, la forma en que esto último funcionaría en la práctica, quedó sin especificar.

A pesar del creciente respaldo a Fujimori luego de la captura de Guzmán, el gobierno intentó también manipular el resultado de las elecciones de noviembre. Sin embargo, la popularidad personal del presidente no era fácilmente transferida a su partido, rebautizado Cambio 90/Nueva Mayoría y reorganizado por Jaime Yoshiyama, ingeniero y miembro del gabinete presidencial. Varios de los principales partidos de oposición, entre ellos el APRA, AP y Libertad de Vargas Llosa, se abstuvieron de participar, en tanto que Izquierda Unida y Acuerdo Socialista no lograron hacerlo porque en la elección anterior no recibieron el cinco por ciento mínimo necesario para calificar. Frente al PPC y a una serie de partidos y agrupaciones menores, muchos de ellos reemplazantes menos conocidos de los partidos tradicionales, Cambio 90/Nueva Mayoría ganó un mayoritario treinta y ocho pro ciento y una mayoría de cuarenta y cuatro representantes de ochenta. Sin embargo, el voto no podía ser considerado realmente representativo. Aunque hubo cierta representación de la oposición cuando el cuerpo recién elegido se disponía a redactar la nueva carta constitucional, Fujimori logró usar la mayoría de su partido, así como su poder de veto, para controlar la asamblea y hacer que el documento final fuera a su gusto.

Entretanto, las prometidas pero retrasadas elecciones municipales tuvieron lugar a finales de enero de 1993, cuando el CCD iniciaba sus labores. Esta vez, todos los partidos tradicionales participaron en ellas, pero con resultados mixtos. En Lima, el independiente Ricardo Belmont fácilmente obtuvo la reelección con un impresionante cuarenta y cuatro por ciento de la votación, entre un total de cuarenta candidatos. Su partido Obras arrasó en la mayoría de los distritos de la capital, en tanto que la izquierda apenas ganó uno y el APRA y el PPC obtuvieron no más del tres y el dos por ciento de la votación, respectivamente. A los partidos tradicionales les fue mejor a nivel nacional ya que recibieron aproximadamente el cuarenta por ciento de la votación, pero los independientes ganaron la mayoría de las alcaldías. Significativamente, le fue mal al partido Nueva Mayoría/Cambio 90 de Fujimori, que apenas si ganó un municipio.

Los resultados de estas elecciones y los datos de las encuestas sugieren que pasada más de la mitad de su gobierno, Fujimori seguía conservando el respaldo mayoritario de la población. Este se basaba fundamentalmente en el autogolpe, la captura de Guzmán y la fuerte caída de la inflación. Sin embargo, había descontento por la profundidad de la recesión y la ampliación del círculo de la pobreza debida al

programa de austeridad, que ahora incluía las dos terceras partes de la población. Con todo, la oposición seguía débil, dividida y esencialmente sin líderes (García había logrado fugarse al exilio), permitiendo a Fujimori seguir dominando el país y dar forma a sus instituciones políticas.

Este hecho fue confirmado en el plebiscito efectuado en octubre de 1993 en torno a la nueva constitución propuesta. El CCD había terminado su tarea y producido una nueva carta constitucional que era más que satisfactoria para Fujimori. Para empezar, ella permitía la reelección presidencial, abriéndole así el camino para postular en 1995. También, endureció las leyes antiterroristas al restablecer la pena de muerte e institucionalizar el juicio de los sospechosos de terrorismo en tribunales militares secretos. Además, la nueva constitución ayudó considerablemente a consolidar en la cumbre el poder institucional adquirido por Fujimori con su autogolpe. Ella creó un Estado más centralizado, dominado por un poderoso poder Ejecutivo que manejaba un congreso unicameral con pocos contrapesos a la autoridad presidencial. En suma, la nueva constitución que estaba a punto de presentarse a los votantes, había sido preparada a la medida del régimen fujimorista caracterizado cada vez más por su autocracia, arbitrariedad y desprecio por las instituciones cívicas. En palabras de Cameron, ella «institucionalizó un sistema político semiautoritario».

Utilizando la estrategia de solicitar un voto directo de si o no a la opinión pública, el plebiscito de la nueva carta constitucional fue aprobado con cincuenta y dos por ciento de los sufragios contra cuarenta y cuatro por ciento. Este fue un resultado sorprendentemente ajustado, ciertamente no la aprobación mucho más holgada (en proporción de setenta a treinta) que Fujimori había predicho. El gobierno ganó en Lima pero perdió en provincias, lo que hizo que una importante revista proclamase a Fujimori «el presidente de Lima». Aún más importante resulta el hecho de que el porcentaje de pobres urbanos que votaron a favor del «si» fue menor que en las elecciones de 1990, en tanto que entre las personas acaudaladas fue más alto. Al parecer, el costo social de una estabilización sin la red de seguridad prometida había golpeado al gobierno, tanto en las provincias como en los pueblos jóvenes de Lima. Por otro lado, los beneficios económicos de la liberación económica habían favorecido casi de inmediato a los grupos de más altos ingresos, los que irónicamente habían preferido a Vargas Llosa en 1990. A pesar de las maquinaciones oficialistas para influir en la votación, un equipo de la OEA enviado para velar por la corrección de la votación concluyó que ningún fraude significativo había tenido lugar y validó el resultado.

Sin embargo, el estrecho margen del resultado del plebiscito hizo que Fujimori reevaluara su programa a mitad de su mandato y a apenas dos años de la elección de 1995, en la cual ahora podía postular legalmente. En efecto, las encuestas de opinión posteriores al plebiscito mostraron que el respaldo del Presidente estaba

disminuyendo entre los grupos de menores ingresos. Los opositores comenzaron nuevamente a criticar el fracaso del gobierno en generar el crecimiento o el ingreso real, que permanecía en los niveles de 1988. Era evidente que Fujimori necesitaba incrementar el nivel del gasto social para aliviar los terribles sufrimientos de los pobres urbanos y rurales, que conformaban el eje de su respaldo.

Afortunadamente para él, la oportunidad para revivir el gasto social estatal se presentó con las ganancias inesperadas que se materializaron repentinamente gracias al programa de privatización de las empresas estatales. Este proceso había tenido un comienzo lento una vez aprobada la nueva ley de privatizaciones en 1991, que creó una comisión gubernamental (COPRI) para que vendiera o liquidara todas las empresas estatales. La reacción inicial del sector privado fue escéptica, como lo reflejase un editorial del boletín económico más influyente de Lima. «¿Quién va a invertir en este medio volátil infestado por el terrorismo, con una tasa de cambio baja y una tasa de interés enorme?» (citado por Wise en Cameron y Mauceri 1997: 102). En consecuencia, a lo largo de los siguientes doce meses apenas 12 de un total de 135 a 182 empresas estatales habían sido vendidas. El programa finalmente ganó algo de impulso un año más tarde, cuando en diciembre de 1992 Hierroperú, la empresa estatal del hierro, fue vendida a una firma china en $311,8 millones. Con todo, incluso a comienzos de 1994 menos de $500 millones de los activos estatales se habían vendido.

Dos factores explican el éxito gradual del programa: el autogolpe de Fujimori del 5 de abril, que canceló la oposición del Congreso al mismo, y un marcado descenso en la percepción internacional de los riesgos de invertir en Perú. La inflación estaba baja, Sendero Luminoso había sido seriamente afectado con la captura de sus dirigentes y la violencia terrorista comenzaba a dar señales de estar disminuyendo. Es más, luego de sufrir una breve caída después del autogolpe debido a la fuga de capitales y al cese de los préstamos extranjeros (más de $2.000 millones) por el disgusto internacional, la economía finalmente daba señales de estar creciendo nuevamente. El PBI registró una ganancia de 6,9 por ciento en 1993 y al año siguiente le seguiría una de 12,9 por ciento, las primeras desde 1991.

Entonces, en febrero de 1994, el programa privatizador obtuvo un gran éxito con la venta de la empresa estatal de telefonía y telecomunicaciones a un consorcio internacional encabezado por Telefónica de España. El precio favorable de la venta, unos asombrosos $2.000 millones, era más de cuatro veces el que fijase el gobierno. Alrededor de $1.400 millones de la venta fueron inmediatamente al tesoro, lo que equivalía al cincuenta y siete por ciento del valor total de las exportaciones anuales y el 5,2 por ciento del PBI. Este éxito tuvo un impacto favorable en la venta de otras empresas estatales en los sectores petrolero, minero y de electricidad. De este modo, a finales de 1994 el gobierno había vendido —o estaba en vías de hacerlo— la mayoría de las compañías privadas nacionalizadas

durante el gobierno militar, entre 1968 y 1980. Para mediados de 1995, el flujo total de estos ingresos al tesoro superaba los $3.000 millones.

Aunque los empresarios clamaban por un alivio tributario y el FMI presionaba para que se incrementasen los pagos por la deuda, fueron principalmente razones políticas las que dictaron la forma en que habría de usarse este dividendo procedente de las privatizaciones. Sin embargo, cómo utilizarlo sin desatar la inflación nuevamente era un motivo de preocupación, sin olvidar que toda decisión tendría que ser negociada con las agencias internacionales de préstamos, que condicionaban el flujo de empréstitos al Perú a la obtención de logros macroeconómicos. Se había ido avanzando con la deuda, en particular después de que Fujimori respondiera a las críticas internacionales al autogolpe y aceptara efectuar elecciones. A mediados de 1993, el gobierno llegó a un acuerdo sumamente favorable con el Club de París de acreedores occidentales, para reprogramar y reducir unos $8.000 millones de la deuda peruana que abrió el camino para $500 millones en inversiones extranjeras directas que entraron al Perú en los siguientes seis meses.

A medida que las condiciones financieras mejoraban, Fujimori aprovechó la oportunidad para potenciar sus posibilidades de ser reelecto en 1995, al mismo tiempo que acallaba a sus críticos en lo que respecta a la escasez del gasto social. En febrero de 1994, se presentó en la televisión para anunciar que la mitad del dividendo de las privatizaciones sería asignado a ese fin. Tres meses más tarde, el FMI fue persuadido para que permitiera al gobierno gastar $875 millones en programas sociales. A mediados del año, con una economía que seguía creciendo, el presidente prometió crear un millón de nuevos empleos en construcción y obras públicas, y construir un colegio al día durante el resto del año, y dos o tres al día en 1995.

Además de los ingresos procedentes de la privatización y el mejor arreglo del pago de la deuda, el gobierno de Fujimori fortaleció las finanzas estatales a través de una reforma tributaria. En 1989, la recaudación tributaria peruana había caído a apenas un 6,5 por ciento del PBI, muy por debajo del diez por ciento que generalmente se considera adecuado. Por lo tanto, esta reforma tenía una alta prioridad en la agenda de Fujimori al asumir la presidencia en 1990. En consecuencia, reorganizó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), reestructuró la Superintendencia de Aduanas (SUNAD) y comenzó a revisar el código tributario. En ese entonces la cobranza de impuestos en el Perú era algo auténticamente complicado. Había más de doscientos tipos distintos de impuestos y treinta y tres clasificaciones diferentes de contribuyentes, y las reglas que regían los impuestos fluctuaban enormemente de un año al otro. Para eliminar estos problemas se hizo más eficiente a la SUNAT y la SUNAD, se redujo el número de tributos y se elevaron los impuestos individuales y a las propiedades.

Gracias a estos cambios, las capacidades extractivas del Estado mejoraron enormemente. El porcentaje de impuestos cobrados con respecto al PBI subió a ocho por ciento en 1991 y a diez por ciento en 1992. Uno de los efectos de las reformas fue centralizar aún más el control del Ejecutivo sobre la política fiscal, a expensas de los gobiernos municipales. Esta medida fue vista en cierto sentido como un esfuerzo de Fujimori por minar la base financiera de alcaldes rivales, en particular de los populares Daniel Estrada del Cuzco y Ricardo Belmont de Lima, así como de aquellos que hicieron campaña para que se votara por el «no» en el plebiscito. También revivió en el país la vieja disputa entre regionalismo y centralismo. Por otro lado, las reservas del Banco Central remontaron el déficit de $143 millones dejado por el gobierno de García, a más de $6.000 millones a finales de 1994, producto del incremento de los ingresos obtenidos con las reformas tributarias y con el programa de privatización.

Al disponer de ingresos adecuados bajo el control creciente del Ejecutivo y una economía en expansión, Fujimori pudo emprender una eficaz campaña populista para su reelección en 1995. Tomando una parte de las reservas del Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas retiró $500 millones, o el seis por ciento de las mismas, para gastos estatales en mejoras de infraestructura y obras públicas. La clave del uso político del programa de gasto social era el mayor poder de decisión y control presupuestal que el presidente tenía sobre los ministerios. Aunque el poder siempre había estado concentrado en el Ejecutivo, Fujimori trabajó incansablemente durante su primer gobierno para ampliar el control presidencial. Esta tendencia se aceleró después del autogolpe, cuando las partidas del presupuesto se concentraron más en el Ministerio de la Presidencia, que hasta ese entonces tenía acceso únicamente al uno por ciento del presupuesto, pero que ya en 1994 accedía al catorce por ciento. El resultado fue que Fujimori ahora podía manejar directa y efectivamente los programas sociales del gobierno, apuntando a áreas y sectores específicos de la población para así alcanzar un máximo impacto político. De hecho, el Ministerio de la Presidencia había asumido el monopolio de las obras públicas y proyectos sociales.

El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) fue una de las agencias de desarrollo social más importantes, en particular en cuestiones de empleo, salud, nutrición, educación básica y otras áreas que beneficiaban a la población que vivía en la pobreza. A mediados de 1994, menos de nueve meses antes de las elecciones programadas, el número de proyectos de asistencia social (4.760) y empleos (23.000 al mes) que FONCODES financiaba y administraba se había incrementado enormemente, teniendo como objetivo los departamentos más pobres del país y aquellos con las tasas más altas de desempleo.

FONCODES fue complementado con el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), ambos

también manejados a través del Ministerio de la Presidencia. El FONAVI fue responsable de un auténtico aluvión en la construcción de viviendas, colegios y postas médicas de bajo costo en los pueblos jóvenes y otros lugares. El PRONAA aceleró la distribución de raciones alimenticias que buscaban elevar el nivel de nutrición de los niños pobres. Este organismo excluía los programas de otras organizaciones de base como las del Vaso de Leche y los siete mil comedores populares con vínculos con la Iglesia católica, consideradas «competidoras» del gobierno de Fujimori en un sentido político. A medida que se aproximaba el día de las elecciones, el candidato-presidente adoptó una estrategia de movilización de gran visibilidad, efectuando visitas personales diarias a estos proyectos y programas, a menudo en helicóptero, para maximizar su exposición en los medios y las relaciones públicas a favor de su campaña.

Era significativo el hecho de que la fuerza aérea ayudase al presidente a desplazarse rápidamente por todo el país para que asistiera a estos actos ceremoniales y de relaciones públicas. Ello resaltaba la función que las fuerzas armadas habían pasado desempeñar: ser el principal medio institucional a través del cual entregar estos servicios a la población y el mensaje político correspondiente. De hecho, a medida que la amenaza de Sendero Luminoso comenzaba a desvanecerse luego de la captura de Guzmán y de buena parte del alto mando del movimiento, los militares asumieron cada vez más un papel de acción cívica que el presidente podía explotar políticamente con facilidad.

Además, en muchas partes de la sierra las fuerzas armadas eran el único brazo funcional con que el Estado podía contar. Ello era particularmente cierto en el caso de las Zonas de Emergencia, donde los comandantes militares constituían la máxima autoridad política y donde ya se había iniciado la tarea de reconstrucción. La existencia y efectividad a nivel comunal de las rondas organizadas para combatir a Sendero, podían ahora ser desviadas por el gobierno para apoyar la reconstrucción y el suministro de servicios sociales. Al mismo tiempo, el control que Fujimori tenía de las fuerzas armadas se intensificó a consecuencia del autogolpe, de modo que a cambio de las gollerías y beneficios del gobierno, la institución podía ser movilizada por sus jefes para que desempeñara un importante papel organizativo en la reelección presidencial.

Por lo tanto, los militares asumieron cada vez más las tareas gubernamentales de repartir alimentos y servicios, y de administrar proyectos de infraestructura. Llegados a este punto, resultó fácil por cierto dar un paso más y hacer que los soldados asumieran algunas funciones de campaña relacionadas con la propaganda, los afiches y la promoción en general de la campaña de Fujimori. Según Kay (1996: 31), las fuerzas armadas se convirtieron en la Sierra en el partido político sustituto de la reelección presidencial.

Con su marca singular de «fujipopulismo» y el aparato estatal firmemente en sus manos, el presidente llegó confiado a las elecciones presidenciales de 1995. No podía decirse lo mismo de la oposición política. En general, los partidos tradicionales estaban en total estado de agotamiento y descomposición gracias a las incansables críticas que Fujimori hacía a su supuesta incompetencia y corrupción, y eran ahora objeto del desdén de los votantes. Según Cameron (1994), la mayoría de éstos había rechazado las afiliaciones de clase ideológicamente polarizadas de décadas anteriores y se declaró políticamente independiente, esto es, sin ideología y pragmática, como Fujimori correctamente percibió.

Por último, es claro que en 1985, al igual que en 1990 después de la traumática década anterior, el electorado ansiaba el orden y la estabilidad económica por encima de la justicia social y la democracia, las dos prioridades de 1980 (Kay 1996: 40). Fujimori finalmente había cumplido estos dos pedidos al aplastar la desbocada inflación y al haber derrotado a Sendero Luminoso. De hecho, había asumido, en cierto sentido, según Stern (1996, Ms.: 45), parte de la mítica aura de Guzmán, su ahora vencido rival revolucionario, quien también había prometido orden y eficiencia aunque siguiendo los lineamientos de un nuevo comunismo utópico antes que los de un capitalismo neoliberal.

No sorprende, entonces, que los contendores de Fujimori en la elección se describieran a sí mismos como «independientes» y *outsiders*. El mejor conocido de ellos, por lo menos internacionalmente, era el ex secretario general Javier Pérez de Cuellar, quien acaba de dejar su cargo luego de dos distinguidos periodos a la cabeza de las Naciones Unidas. También se arrojaron al ruedo Ricardo Belmont, el popular alcalde de Lima, y el economista Alejandro Toledo, cuyos mayores méritos para postular parecían ser sus orígenes indios y sus credenciales como un ex profesor visitante en la Universidad de Harvard. El APRA, al que Fujimori había mantenido bajo una nube acusando de corrupción al ex presidente García, intentó reagruparse nominando como su candidata a la congresista Mercedes Cabanillas. En retrospectiva, ninguno de los competidores de Fujimori tenía muchas posibilidades de vencer a la «maquinaria institucional del fujipopulismo».

Esto no quiere decir que Fujimori tomase su reelección como algo dado. De un lado, hizo campaña incansablemente en la sierra, en los pueblos jóvenes y en las regiones selváticas del país, donde vivía su clientela popular. Al hacer esto, asumió el papel de benefactor, mostrando la generosidad de su programa social bien provisto de fondos frente a grandes multitudes simpatizantes, mientras las cámaras de televisión grababan. Al mismo tiempo, el presidente usó los inmensos poderes de su cargo para mejorar sus posibilidades de victoria electoral en otras formas tradicionales, aunque manipuladoras. Por ejemplo, estimuló la proliferación de candidaturas —diecinueve en total— para así dividir el voto de la oposición.

También hizo que su nombre y retrato fueran colocados estratégicamente en la cédula electoral, en perjuicio de sus oponentes.

Cuando finalmente se contaron los votos el 9 de abril de 1995, Fujimori había obtenido el sesenta y cuatro por ciento de los sufragios. Sin embargo, esta victoria aparentemente abrumadora era engañosa porque esta vez el gobierno calculó el porcentaje excluyendo, no incluyendo, al número de votos nulos y blancos. Este método incrementaba sustancialmente su porcentaje global, pues si la votación hubiese sido calculada del mismo modo que lo fue en 1990, Fujimori habría conseguido únicamente el cincuenta y dos por ciento de los sufragios. A pesar de ello, el presidente sí logró armar la misma coalición vencedora de 1990, esto es las clases populares del campo y la ciudad, con el respaldo de las clases urbanas media y alta. Fujimori ganó limpiamente dondequiera que había dirigido la asistencia social y el gasto en infraestructura, incluyendo Puno (sesenta y cuatro por ciento), que había rechazado su Constitución apenas dieciséis meses antes.

Los resultados electorales del Congreso revelaron que los partidos tradicionales estaban casi muertos. Cambio 90/Nueva Mayoría de Fujimori obtuvo una ligera mayoría de cincuenta y dos por ciento, lo que se tradujo en unas sorprendentes sesenta y siete curules de un total de ciento veinte. Pero los cuatro partidos establecidos juntos (APRA, AP, PPC, IU) apenas recibieron el doce por ciento de la votación. De hecho, ninguno de ellos obtuvo el cinco por ciento establecido por el Jurado Nacional de Elecciones para calificar como partidos hábiles. Aunque hubo muchas evidencias de manipulación oficial y ciertas «irregularidades locales» en la elección, los observadores extranjeros invitados a observar el proceso electoral lo declararon esencialmente «libre y justo».

Sin embargo, la campaña electoral misma estuvo ensombrecida por el breve conflicto fronterizo que estalló entre Perú y Ecuador el 26 de enero de 1995. Aunque fue firmada una declaración de paz tres semanas más tarde, el 17 de febrero, los combates causaron más de 300 bajas en ambos bandos, además de un costo conjunto de $500 millones. Fue el estallido de violencia más serio entre ambos lados desde la guerra de 1941. Huelga decir que las noticias de los combates en el frente tendieron a desplazar la campaña electoral, aunque no hay evidencias de que la guerra haya sido provocada por el gobierno para desviar la atención de los problemas domésticos.

Los choques a lo largo de una sección de la frontera amazónica de cincuenta millas, jamás adjudicada o demarcada oficialmente, se habían venido dando con regularidad a lo largo de los últimos quince años. Pero ninguno de ellos llevó a hostilidades serias hasta enero, cuando las incursiones ecuatorianas fueron infructuosamente enfrentadas por las fuerzas peruanas estacionadas en la zona. A diferencia de otras ocasiones, esta vez los ecuatorianos no solamente estaban mejor equipados y preparados, sino que estaban dispuestos a combatir antes que

a retirarse. Ecuador había establecido, además, bases permanentes en la región del río Cenepa, que no fueron detectadas por las fuerzas peruanas y no podían ser capturadas. El cese del fuego de febrero fue acordado por ambos bandos en base al Protocolo de Río de 1942, que estipulaba que las naciones garantes (Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos) debían brindar observadores militares para que supervisaran una zona desmilitarizada en la región fronteriza bajo disputa.

A la par que estas hostilidades estallaron temporalmente a comienzos de 1995 a lo largo de la frontera peruano-ecuatoriana, la guerra interna con Sendero iba apagándose. Luego de la captura de Guzmán en 1992, el nivel y la intensidad de los ataques senderistas comenzaron a bajar perceptiblemente a mediados de 1993. En tanto que Guzmán languidecía en la cárcel condenado a cadena perpetua, una facción de línea dura que rechazó su pedido de «negociaciones de paz» con el gobierno intentó reorganizar el movimiento como Sendero Rojo, bajo el mando de Óscar Ramírez Durán, alias «Camarada Feliciano». Si bien era capaz de llevar a cabo actos ocasionales de atentados con explosivos y asesinatos, Sendero Rojo gastaba la mayor parte de sus energías evitando al ejército, convirtiéndose así en poco más que una sombra del partido anterior.

Una evaluación del primer gobierno de Fujimori

¿Qué puede decirse del gobierno de Fujimori al finalizar sus primeros cinco años en la presidencia? Es evidente que uno de sus mayores éxitos fue haber derrotado a la insurgencia terrorista de Sendero Luminoso, que según algunos observadores parecía estar al borde de tomar el poder en 1990. La guerra de quince años, desde 1980, le había costado al país unas 35.000 vidas y pérdidas económicas estimadas en $25.000 millones. Ahora que Guzmán estaba detrás de las rejas y el movimiento dispersado, el gobierno podía volcar su atención a la reconstrucción del país.

Del mismo modo, durante su primer gobierno, Fujimori tuvo éxito en estabilizar una economía que estaba escapando a todo control. En 1989, el último del gobierno de García, esta se contrajo en 11,7 por ciento y la inflación alcanzó una cifra récord de 7.649 por ciento. Poco después de su elección, Fujimori decidió aplicar un duro programa de estabilización, que tuvo éxito en romper el espinazo a una hiperinflación cuyos efectos adversos sufrían más los pobres. Sin embargo, los costos sociales del «fujishock» fueron enormes a pesar de los sustanciales esfuerzos de las organizaciones de base e internacionales, prevaleciendo en muchas partes del país el hambre, la desnutrición e incluso la inanición.

En el transcurso de los siguientes cinco años, Fujimori abrió la cerrada, protegida y sumamente regulada economía peruana al mercado libre y el comercio y las inversiones internacionales. Los aranceles se redujeron de sesenta y seis al 15,7 por ciento, 173 de un total de 183 compañías estatales fueron privatizadas y el

número de empleados públicos fue recortado a la mitad, de 470.000 a 210.000. La liberalización y las reformas económicas, juntamente con el control de la inflación, la derrota del terrorismo y el reinicio de los pagos de la deuda externa, sentaron las bases para la reinserción del país en la economía internacional y, a partir de 1993, el reinicio del crecimiento económico.

Sin embargo, estos logros tuvieron un sustancial costo humano e institucional. Para empezar, si bien podría discutirse que eran necesarios para poner fin a la crisis económica cada vez más profunda y a la amenaza terrorista, el autogolpe de 1992 y el autoritario estilo presidencial, que valieron a Fujimori el popular mote de «Chinochet», pusieron fin a más de una década de democratización. Desde entonces, Fujimori ha gobernado principalmente por decreto, subordinado al Congreso a su autoridad e incrementado los poderes de las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia. También ha purgado al poder judicial, ha ignorado la corrupción oficial, ha atacado las instituciones democráticas del país, los partidos políticos inclusive, y ha acallado consistentemente las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. En efecto, la ley de amnistía de 1995 permitió salir libres a soldados convictos de crímenes contra los derechos humanos.

En cuanto a la mejora del desempeño y la eficiencia del Estado, la hoja de servicios de Fujimori es mixta. Él heredó un gobierno que ya se había reducido a menos de la cuarta parte de su tamaño anterior, medido según el gasto per cápita, que según Webb (1991) disminuyó en 83 por ciento entre 1975 y 1990. El presidente siguió reduciendo el tamaño del Estado mediante despidos y cortes en el presupuesto, reformó y mejoró el sistema tributario y renegoció la deuda externa. Estas y otras reorganizaciones selectivas hicieron que Cameron y Mauceri (1997: conclusión) concluyeran que ahora hay «'islas de eficiencia' desarrollista en un sector público por lo demás débil e ineficiente».

Por cierto que al seguir gobernando el país desde el poder Ejecutivo y delegar poco poder fuera de su pequeño círculo de asociados, Fujimori tal vez logró que se «hicieran las cosas». Pero lo hizo a costa de minar las instituciones representativas del país y marginar a la sociedad civil. En suma, al evaluar el primer gobierno de Fujimori debemos decir que la restauración del orden político y económico en Perú se ha dado a expensas de la erosión de la democracia, el debilitamiento del Estado y el amplio deterioro social de la población.

Cronología

2500 a. C.	Comienzos de la agricultura y pesca en aldeas
1800 a. C.	Introducción del maíz, desarrollo de la irrigación y aparición de la cerámica
800 a. C.	Chavín, primera civilización panandina
100 a. C.	Surgimiento de las culturas costeñas de Moche y Nazca
600 d. C.	Los imperios Tiahuanaco (Tiwanaku) y Huari (Wari) florecen en los Andes del sur.
850-900 d. C.	La ciudad de Chan Chan es construida como capital del imperio Chimor, cerca de Trujillo
1200-1400 d. C.	Periodo formativo de los incas
1400-1500 d. C.	Expansión imperial incaica
1492	Se completa la reconquista española, los judíos son expulsados de la Península Ibérica y Colón descubre un «Nuevo Mundo», inaugurando un intercambio biológico y cultural
1525	La muerte de Huayna Cápac desata la guerra civil inca
1532	Los españoles llegan al Perú; Pizarro captura a Atahualpa en Cajamarca
1532-1572	Periodo de la conquista española
1533	Los españoles capturan Cuzco
1534	La orden franciscana llega a Perú
1535	Pizarro funda la Ciudad de los Reyes o Lima

1536	Rebelión de Manco Inca; formación de un Estado neoinca en Vitcos, Vilcabamba
1537	Almagro regresa de Chile y se rebela
1538	Pizarro derrota a Almagro en la Batalla de Las Salinas
1541	Pizarro es asesinado
1542	Se funda una Audiencia en Lima; el rey decreta las Leyes Nuevas para limitar la esclavización de los indios y la encomienda
1543	Se crea el Virreinato del Perú, con su capital en Lima
1544	El golpe de Estado de Gonzalo Pizarro da muerte a Blasco Núñez de Vela
1545	Descubrimiento de las minas de plata en el Cerro Rico de Potosí
1548	La rebelión de Gonzalo Pizarro es vencida y se restaura la autoridad del rey
1551	Se funda la Universidad Mayor de San Marcos en Lima.
1555	Felipe II sucede a Carlos V como rey de España
1557-1560	El pirata inglés Sir Francis Drake saquea la costa peruana
1564	Se descubre la «conspiración» del Taki Onqoy en Huamanga.
1569	El virrey Toledo llega al Perú
1570	Se establece en Lima el Santo Oficio de la Inquisición
1571-1582	Toledo implementa el programa de reformas coloniales
1571	El proceso del refinamiento de la plata en patios se introduce en Potosí; se ordena a los indios que se congreguen en reducciones
1572	El Estado neoinca de Vitcos (Vilcabamba), es conquistado y Túpac Amaru I, el último soberano Inca, es ejecutado en el Cuzco
1573	Los primeros mitayos llegan a Potosí
1583	La primera imprenta llega a Lima
1609	Garcilaso de la Vega publica los *Comentarios reales de los incas*
1610	Se calcula la población de Lima en 25.000 personas
1610-1660	Campañas de extirpación de idolatrías
1617	Fallece en Lima Isabel Flores de Oliva, posteriormente canonizada como Santa Rosa de Lima

1630	Se descubre una nueva mina de plata en Cerro de Pasco
1633	El rey decreta la venta de cargos imperiales en el Nuevo Mundo
1650	La población de Potosí alcanza su punto máximo en 160.000 personas
*c.*1650	Comienza una crisis de un siglo de duración en la producción de plata de Potosí
1681	Se publican los cuatro volúmenes de la *Recopilación de las leyes de Indias*
1687	Un severo terremoto asola la costa central
1700	Muere Carlos II, el último monarca Habsburgo, y le sucede Felipe V, el nieto Borbón de Luis XIV
1701-1713	Guerra de la Sucesión Española
1718-1721	Una epidemia panandina da muerte a 300.000 personas
1742	Juan Santos Atahualpa se proclama a sí mismo Inca y se rebela en la Amazonía
1750	La población de Potosí desciende a 30.000 personas
1759	El reformista rey Borbón Carlos III sube al trono español
1767	Expulsión de la orden jesuita, confiscándose posesiones estimadas en 5,7 millones de pesos
1776	Se crea el nuevo Virreinato del Río de la Plata; las colonias norteamericanas obtienen la independencia de Inglaterra
1778	La Corona española decreta el «libre comercio» dentro del imperio
1780-1782	La masiva rebelión de Túpac Amaru II cuesta cien mil vidas
1784	La Corona proscribe el odiado reparto de mercancías y el cargo de corregidor de indios
1784-1790	El virreinato es dividido en siete intendencias
1789	Revolución francesa
1792	Un censo estima la población del Perú en alrededor de un millón de personas
1796	España entabla la guerra contra Inglaterra, afectando el comercio internacional en forma adversa

1808	Napoleón invade España y el gobierno monárquico colapsa
1810	Las juntas de gobierno locales reemplazan al gobierno peninsular en las principales ciudades sudamericanas, pero no en Perú
1812	Las Cortes españolas se reúnen en Cádiz y decretan una constitución liberal
1814	Fernando VII es restaurado al trono de España y deroga la constitución liberal de 1812
1814	Estalla una rebelión contra el rey en el Cuzco.
1820-1821	El Ejército Libertador del general San Martín invade Perú, captura Lima y proclama la independencia
1822	San Martín se reúne con Bolívar en Guayaquil y posteriormente dimite como Protector
1824	Batalla de Ayacucho; el general Sucre derrota al ejército realista comandado por el virrey la Serna, asegurando la independencia de Perú y América del Sur
1821-1845	República temprana, signada por una extrema inestabilidad política durante la cual hubo veintitrés cambios de régimen y la constitución fue re escrita seis veces
1836-1839	Perú y Bolivia forman una confederación encabezada por el general Santa Cruz
1845-1862	Era del general Castilla, quien establece una *pax andina* de relativa estabilidad política y progreso económico basados en la exportación de guano y nitratos
1849-1874	Arriban al Perú unos cien mil culís chinos para trabajar en las islas guaneras, la construcción de ferrocarriles y las haciendas costeñas
1851	Los aranceles se reducen, inaugurando una nueva era de comercio libre; el primer ferrocarril operativo de América del Sur se abre entre Lima y el Callao
1854	Castilla emancipa a los esclavos
1858	Castilla sofoca un sangriento motín proteccionista de los artesanos limeños, que protestaban por la avalancha de artículos importados baratos
1866	La flota española bombardea el Callao pero es rechazada y eventualmente se retira del Pacífico, después de una breve guerra con Perú, Chile y Ecuador

1868	El presidente Balta contrata al estadounidense Henry Meiggs para que construya un sistema ferroviario
1869	El ministro de hacienda Piérola pasa el contrato de exportación del guano de los contratistas nacionales a una compañía francesa encabezada por Auguste Dreyfus
1870	Un sangriento levantamiento de culís chinos, conocido como la «rebelión de los rostros pintados», estalla en una hacienda de la costa norte
1872	Pardo es elegido como el primer presidente civil
1873	Inicio de la depresión mundial que afecta severamente al Perú; el Presidente Pardo decreta el establecimiento de un monopolio estatal del nitrato ante la drástica caída de los precios del guano y las rentas estatales; Perú firma un tratado de defensa mutua con Bolivia
1876	Perú se ve obligado a incumplir su deuda externa
1879-1883	Guerra del Pacífico, tras la cual Perú pierde sus provincias sureñas de Tarapacá y Arica que pasan a Chile
1885	Masiva rebelión india en la sierra norte de Ancash, liderada por Atusparia
1886	Se firma el controvertido Contrato Grace, que canceló la deuda externa a cambio de grandes concesiones a los tenedores de bonos británicos
1895	Piérola asume la presidencia luego de una sangrienta guerra civil
1895-1919	Era de relativa paz política y prosperidad impulsada por las exportaciones y basada en el gobierno de la élite, a la que se conoce como la «República Aristocrática»
1912-1914	Guillermo Billinghurst resulta elegido presidente con una plataforma populista; le depone un golpe militar encabezado por el general Benavides
1914-1918	La Primera Guerra Mundial abre un periodo de turbulencias socioeconómicas y políticas en Perú
1918-1919	Una serie de huelgas de trabajadores y estudiantes lleva al establecimiento de la jornada de ocho horas y la reforma universitaria
1919-1930	Oncenio del Presidente Leguía, marcado por una fuerte inversión extranjera y el recorte de las libertades civiles
1923	Demostraciones populares contra el intento del régimen de consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús

1924	Haya de la Torre funda en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana (el Partido Aprista)
1930	Muerte de Mariátegui, prominente intelectual y fundador del Partido Comunista Peruano
1930	El golpe del teniente coronel Sánchez Cerro derroca a Leguía e inaugura un periodo de inestabilidad económica y política
1931	Perú suspende los pagos de la deuda nacional
1932	Levantamiento popular en Trujillo severamente reprimido por el ejército, que implica una duradera enemistad política entre las fuerzas armadas y el APRA
1932-1933	Guerra fronteriza con Colombia librada en torno a los territorios disputados en Leticia
1933	Asesinato del Presidente Sánchez Cerro por un militante aprista, lo que conduce al segundo gobierno del general Benavides
1940	El censo nacional revela una población de 6,2 millones, subiendo de 2,6 millones en 1876
1941	Breve guerra fronteriza con Ecuador
1945-1948	Bustamante y Rivero es elegido presidente con el respaldo del APRA, legalizado por vez primera desde 1932
1948	Una revuelta en el Callao debilita el régimen de Bustamante y culmina con golpe exitoso del general Odría
1950	Fundación del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM)
1955	Es otorgado el voto a las mujeres
1956	La convivencia entre el APRA y la élite dominante legaliza al partido apuesta por primera vez desde 1948
1962-1963	El golpe militar producido luego de unas elecciones nacionales nada concluyentes instaura en el gobierno a una Junta que representa a las tres ramas de las fuerzas armadas
1963-1968	Se restaura el gobierno democrático con la elección de Belaunde Terry como presidente
1965	Las fuerzas armadas suprimen violentamente tres movimientos guerrilleros en la sierra
1968-1975	El golpe del general Velasco derroca al gobierno de Belaunde y abre un periodo de reformas sociales y económicas sin precedentes

1969	Inicio de la reforma agraria
1975	Una sangrienta huelga policial y motines urbanos conducen a un golpe, dirigido por el general Morales-Bermúdez, que depone a Velasco
1975-1980	El régimen de Morales-Bermúdez desmantela muchas de las reformas de Velasco y encabeza una transición de vuelta al gobierno civil
1980	Belaunde Terry es reelegido presidente; el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso inicia la «guerra popular»
1985	García Pérez es elegido como el primer presidente aprista de la historia en medio de la decadencia económica y una violencia terrorista cada vez mayor de Sendero Luminoso
1990	El desconocido político Alberto Fujimori es sorprendentemente elegido presidente y emprende un severo programa de austeridad económica y una campaña dirigida por las fuerzas armadas contra Sendero Luminoso
1991	Una epidemia del cólera, no vista desde el siglo XIX, simboliza la crisis socioeconómica de la década anterior
1992	El autogolpe del presidente Fujimori suspende la constitución y cierra el Congreso; el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, es capturado en Lima
1995	Fujimori es reelegido Presidente

Cuadros

Cuadro 1. **Datos económicos y otros**

	1980	*1985*	*1989*	*1990*
PBI (en millones, $ de 1980)[a]	20.579	20.167	19.500	18.418
PBI per cápita ($ de 1980)[a]	1.190	1.039	924	854

Tasas de crecimiento del PBI (precios de 1990)[b]

	1991	*1992*	*1993*	*1994*	*1995*	*1996*	*1997*	*Promedio 1981-90*	*Promedio 1991-97*
América Latina	3,5	3,0	3,9	5,4	0,2	3,5	5,3	1,0	3,5
Perú	2,8	-0,9	5,8	13,8	7,8	2,5	7,0	-1,2	5,4

Tasas de crecimiento del PBI per cápita[b]

	1991	*1992*	*1993*	*1994*	*1995*	*1996*	*1997*	*Promedio 1981-90*	*Promedio 1991-97*
América Latina	1,7	1,2	2,1	3,7	-1,5	1,9	3,6	-1,0	1,8
Perú	0,9	-2,6	4,0	11,9	6,0	0,7	5,1	-3,3	3,6

Estructura de la producción de 1997(% del PNB)[a]**:** Agricultura, 11%; Industria, 43%; Servicios, 46%,

Composición de las exportaciones
($6.800 millones, 1997)[a]
cobre, zinc, harina de pescado, petróleo crudo y derivados, plomo, plata refinada, café, algodón
Socios: EE. UU. 19%, Japón 9%, Italia, Alemania (1995)

Composición de las importaciones
($8.600 millones, 1997)[a]
maquinaria, equipos de transporte, alimentos, petróleo, hierro y acero, productos químicos, farmacéuticos
Socios: EE. UU. 21%, Colombia, Chile, Argentina, Japón, Alemania, Brasil (1995)

Cuadro 1. **Continuación**

Balanza de pagos (millones de $)[e]

	Balanza comercial	Exportaciones	Importaciones
1987	-500,0	2715,0	3215,0
1988	-134,0	2731,0	2865,0
1989	246,0	3533,0	2286,0
1990	399,0	3321,0	2922,0
1991	189,0	3406,0	3595,0
1992	-340,0	3661,0	4001,0
1993	-599,0	3523,0	4123,0
1994	-972,0	4574,0	5545,0
1995	-2111,0	5576,0	7687,0
1996	-1996,0	5897,0	7893,0

Salario real promedio (1990 = 100)

	Salario real	Tasa de crecimiento[c]
1987		6,1
1988		-23,6
1989		-46,7
1990		-14,4
1991	115,2	15,2
1992	111,1	-3,6
1993	110,2	-0,8
1994	127,4	14,9
1995	116,7	-8,4
1996	111,2	-4,5
1997	111,0	

Deuda externa: $23.400 millones

Pobreza (% de la población)[d]

Moderada		Extrema	
1990	1995	1990	1995
39,6	13,4	8,7	7,7

Distribución del ingreso-índice Gini (1994) -44,9

Principales grupos étnicos[a]

Amerindios	45%
Mestizos (mezcla de amerindios y blancos)	37%
Blancos	15%
Negros, japoneses, chinos y otros	3%
Población (1997)	25.573.924

Educación (1996)

Tasa actual de alfabetismo (más de 15 años)[a]:
población total 88,7%
(masculino, 94,5%; femenino, 83%)

Estadísticas de analfabetismo:[e] 50% (1940), 38% (1961), 27% (1972), 18% (1981), 13% (1993), 11% (1996)

Nivel educativo alcanzado (como % de la población)[e]:

	1981	*1996*
Ningún nivel	16,1	10,6
Primaria	42,3	30,0
Secundaria	31,4	40,7
Universitario	10,2	18,7

a. CIA World Factbook 1997
b. ECLAC 1997
c. IADB 1997
d. Banco Mundial 1998
e. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú 1996

Cuadro 2. **Población total y cambio demográfico anual en Perú, 1530-1995**

		Cambio demográfico anual	
Año	*Población total*	*Número*	*Porcentaje*
1530[1]	16.000.000	-2.285.714	-7,1
1548	8.285.000	-428.611	-2,6
1570	2.738.500	-252.114	-3,0
1650	3.030.000	3.644	0,1
1796	1.076.122	-13.382	0,5
1825	2.488.000	48.685	4,5
1836	1.373.736	-97.660	-3,9
1850	2.001.203	44.819	3,2
1862	2.487.916	40.559	2,0
1876	2.651.840	11.709	0,5
1940	6.207.967	55.564	2,0
1961	9.906.746	176.132	2,8
1972	13.572.052	333.209	3,3
1981	17.005.210	381.462	2,5
1990[2]	22.332.100	743.996	3,4
1995[2]	23.532.000	1.199.900	5,4

1. Los estimados de la población peruana anterior a la Conquista varían enormemente, pero en años recientes se incrementaron enormemente —a partir de las especulaciones de la década de 1950 que calculaban entre 3 y 4 millones— esobre la base del estudio etnohistórico del impacto de las enfermedades epidémicas que asolaron la región desde aproximadamente 1524. Los estimados recientes (de la población del territorio que actualmente cubre el Perú) oscilan entre 12 y 30 millones.

2. Estimado

Fuente: Rex A. Hudson (ed.), *Peru: A Country Study* (Washington, DC, 1993), 321; y Richard Webb y Graciela Fernández Baca (eds.), *Perú '96 en números: anuario estadístico* (Lima, 1996), 205.

Cuadro 3. **Población total y cambio demográfico anual en Lima, 1614-1996**

Año	*Población total*	Cambio demográfico anual	
		Número	*Porcentaje*
1614	24.441	S.D.	S.D.
1700	37.259	126	0,5
1796	52.627	160	0,4
1836	55.627	75	0,1
1857	94.195	1.837	3,3
1862	89.434	-952	-1,0
1876	100.156	766	0,8
1891	103.956	253	0,2
1898	113.409	1.350	1,3
1903	130.089	3.336	2,9
1908	140.884	2.159	1,7
1908[1]	172.927	S.D.	S.D.
1920	223.807	4.240	2,5
1931	373.875	13.642	6,1
1940	562.885	13.188	9,4
1961	1.632.370	50.928	9,0
1972	3.002.043	124.516	7,6
1981	4.164.597	129.516	4,3
1990[2]	6.414.500	249.989	6,0
1996[2]	6.914.000	S.D.	S.D.

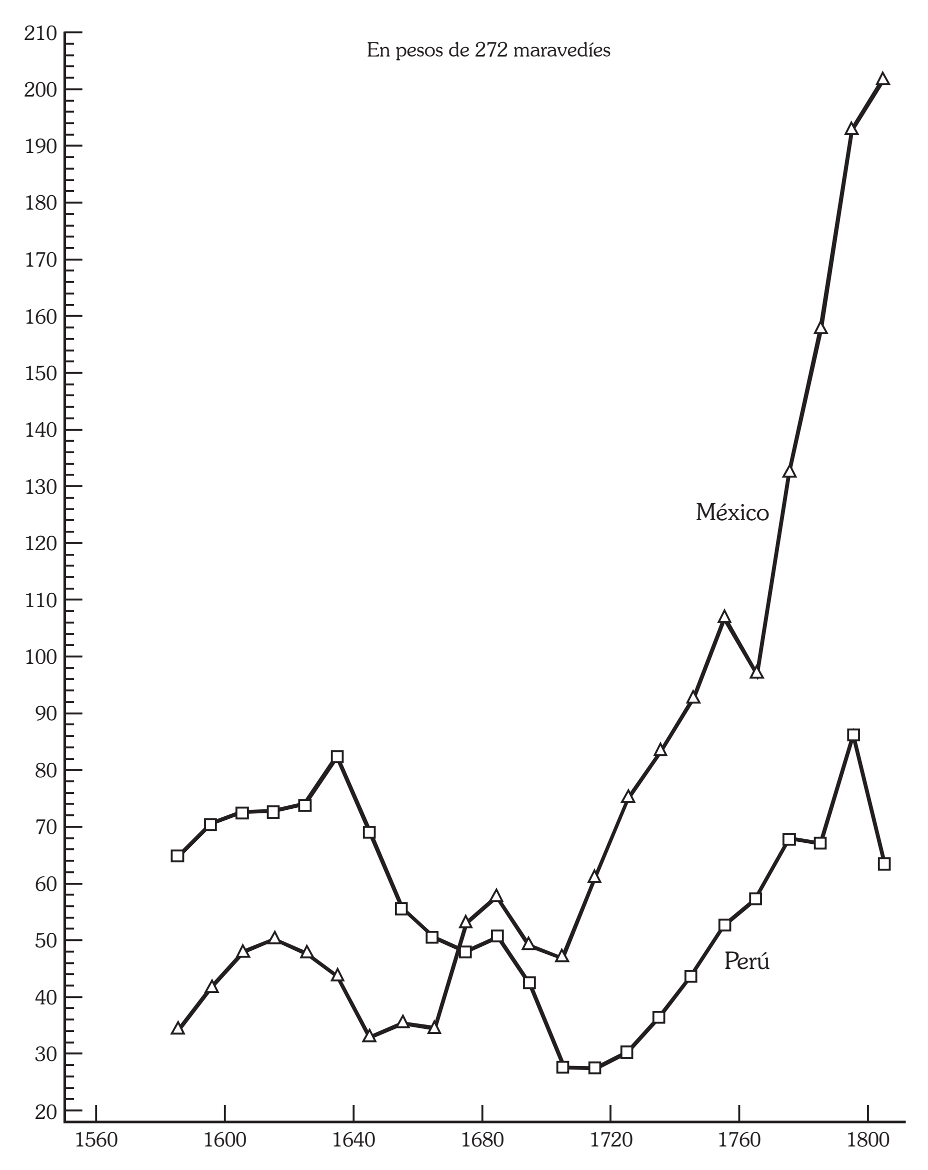
S.D. = sin datos

1. Provincia de Lima. Después de 1908, el crecimiento de la población y el tamaño del asentamiento hicieron que la provincia fuera la unidad de medida.

2. Estimado.

Fuente: Rex A. Hudson (ed.), *Peru: A Country Study* (Washington, DC, 1993), 322; y Richard Webb y Graciela Fernández Baca (eds.), *Perú ’96 en números: anuario estadístico* (Lima, 1996), 205.

Cuadro 4. **Producción registrada de plata en Perú y México, 1581-1810**



Fuente: Mark A. Burkholder y Lyman L. Johnson, *Colonial Latin America* (Nueva York: 1998), 139.

Cuadro 5. **Índice de quántum de exportaciones y tasa de crecimiento, 1830-1989 (1900= 100)**

Años	Quántum de exportación	Crecimiento anual promedio desde el último periodo (porcentaje)	Años	Quántum de exportación	Crecimiento anual promedio desde el último periodo (porcentaje)
1830-1839	16		1915-1919	289	5,7
1840-1849	31	6,9	1920-1924	346	3,6
1850-1859	64	7,6	1925-1929	568	9,7
1860-1869	84	2,7	1930-1934	541	-1,0
1870-1879	121	3,8	1935-1939	699	5,2
1880-1889	43	-18,9	1940-1944	520	-5,8
			1945-1949	570	1,9
			1950-1954	736	5,2
1880-1884	36		1955-1959	1.111	8,6
1885-1889	49	6,0	1860-1964	2.278	15,4
1890-1894	54	1,9	1965-1969	2.746	3,8
1895-1899	76	7,3	1970-1974	2.597	-1,1
1900-1904	110	7,7	1975-1979	2.674	0,6
1905-1909	158	7,4	1980-1984	3.258	4,0
1910-1914	215	6,7	1985-1989	3.565	1,8

Fuente: Efraín Gonzáles de Olarte (ed.), *The Peruvian Economy and Structural Adjustment: Past, Present and Future* (Miami, 1996), 32.

Cuadro 6. **Tendencias de largo plazo en las exportaciones**

Año	Quántum de exportación	Años	Número de años	Crecimiento anual promedio (porcentaje)
1831	12	1831-1877	46	5,5
1877	139	1877-1890	13	-7,8
1890	48	1890-1929	39	6,8
1929	622	1929-1949	20	-0,8
1949	563	1949-1961	12	11,4
1961	2.053	1961-1988	27	2,0
1988	3.473			
		1949-1988	39	4,8
		1831-1988	157	3,7

Fuente: Efraín Gonzáles de Olarte (ed.), *The Peruvian Economy and Structural Adjustment: Past, Present and Future* (Miami, 1996), 32.

Cuadro 7. **Gobernantes desde la independencia, 1821-1995**

		Fechas
1.	José de San Martín	1821-1822
2.	Junta: José de la Mar, Manuel Salazar y Baquijano, Felipe A. Alvarado	1822-1823
3.	José de la Riva-Agüero	1823
4.	José Bernardo de Torre Tagle	1823-1824
5.	Simón Bolívar, Antonio José de Sucre	1824-1826
6.	Andrés de Santa Cruz	1826-1827
7.	José de la Mar	1827-1829
8.	Agustín Gamarra	1829-1833
9.	Pedro Pablo Bermúdez	1834
10.	Luis José de Orbegoso	1833-1835
11.	Felipe Santiago Salaverry	1835-1836
12.	Andrés de Santa Cruz (Confederación Perú-Boliviana)	1836-1839
13.	Agustín Gamarra	1839-1841
14.	Francisco Vidal, Juan Crisóstomo Torrico	1842-1843
15.	Domingo Elías, Domingo Nieto	1843-1844
16.	Justo Figuerola	1844
17.	Ramón Castilla	1845-1851
18.	José Rufino Echenique	1851-1855
19.	Ramón Castilla	1855-1862
20.	Miguel de San Román	1862-1863
21.	Juan Antonio Pezet	1863-1865
22.	Mariano Ignacio Prado	1865-1868
23.	Pedro Diez Canseco (provisional)	1868
24.	José Balta	1868-1872
25.	Manuel Pardo*	1872-1876
26.	Mariano Ignacio Prado	1876-1879
27.	Nicolás de Piérola*	1879-1881
28.	Francisco García Calderón*	1881
29.	Lizardo Montero	1881-1883
30.	Miguel Iglesias	1883-1886
31.	Andrés A. Cáceres	1886-1890
32.	Remigio Morales-Bermúdez	1890-1894
33.	Justiniano Borgoño	1894
34.	Andrés A. Cáceres	1894-1895
35.	Manuel Candamo (Junta)*	1895
36.	Nicolás de Piérola*	1895-1899
37.	Eduardo López de Romaña*	1899-1903
38.	Manuel Candamo*	1903-1904
39.	Serapio Calderón*	1904
40.	José Pardo y Barreda*	1904-1908
41.	Augusto B. Leguía*	1908-1912
42.	Guillermo Billinghurst*	1913-1914
43.	Oscar R. Benavides	1914-1915
44.	José Pardo y Barreda*	1915-1919

Cuadro 7. **Continuación**

	Fechas
45. Augusto B. Leguía*	1919-1930
46. Luis Miguel Sánchez Cerro	1930-1931
47. David Samanez Ocampo (Junta)	1931
48. Luis Miguel Sánchez Cerro	1931-1933
49. Oscar R. Benavides	1933-1939
50. Manuel Prado Ugarteche*	1939-1945
51. José Luis Bustamante y Rivero*	1945-1948
52. Manuel A. Odría (Junta)	1948-1950
53. Manuel A. Odría	1950-1956
54. Manuel Prado Ugarteche*	1956-1962
55. Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley	1962-1963
56. Fernando Belaúnde Terry*	1963-1968
57. Juan Velasco Alvarado	1968-1975
58. Francisco Morales-Bermúdez	1975-1980
59. Fernando Belaúnde Terry*	1980-1985
60. Alan García Pérez*	1985-1990
61. Alberto Fujimori*	1990-2000
62. Valentín Paniagua*	2000-2001
63. Alejandro Toledo*	2001

* *Civil*

Fuente: F. Pease G.Y. *Perú: hombre e historia*, Vol. 3 (Lima, 1993).

Ensayo bibliográfico*

Exámenes generales

El mejor examen, más amplio y actualizado, es el de Carlos Contreras y Marcos Cueto, *Historia del Perú* Contemporáneo (Lima, 1999). También valiosos son Nelson Manrique *et al.*, *Nuestra historia*, 4 vols. (Lima, 1995); y Duccio Bonavia y Franklin Pease G.Y., *Perú: hombre e historia*, 3 vols. (Lima, 1991-1993). Más antiguos pero todavía útiles son Juan Mejía Baca (ed.), *Historia del Perú*, 12 vols. (Lima, 1980) y Julio Cotler, *Clases, estado y nación en el Perú* (Lima, 1978). La obra clásica es Jorge Basadre, *Historia de la República del Perú, 1822-1933*, 11 vols. (16ª ed., Lima, 1983). Un excepcional análisis interpretativo reciente, que se concentra en el siglo XX, es Sinesio López Jiménez, *Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú* (Lima, 1997).

Hay numerosas historias generales en inglés, comenzando con Kenneth J. Andrien, *Andean Worlds: Indigenous History, Culture and Consciousness Under Spanish Rule, 1532-1825* (Albuquerque, NM, 2001). Más viejo pero todavía útil es Magnus Mörner, *The Andean Past: Land, Societies and Conflicts* (Nueva York, 1985), que cubre los tres países que formaron el imperio inca (Perú, Bolivia y Ecuador) y su énfasis es principalmente social y económico. Véanse también los diversos capítulos de *The Cambridge History of Latin America (CHLA)*, vols. 1-12, editada por Leslie Bethell (Cambridge, Inglaterra, 1984-1996; hay edición en español). David Scott Palmer, *Peru: The Authoritarian Tradition* (Nueva York, 1980), enfatiza principalmente el siglo XX. También son útiles David Werlich, *Peru: A Short History* (Carbondale, IL, 1978); Henry E. Dobyns y Paul L. Doughty, *Peru: A Cultural History* (Nueva York, 1976); y Fredrick B. Pike, *The Modern History of Peru* (Nueva York, 1967).

---

* Comprende fundamentalmente los libros y artículos importantes publicados en el último cuarto de siglo. Para títulos anteriores véase Henry E. Dobyns y Paul L. Doughty, *Peru: A Cultural History* (Nueva York, 1976).

Dos importantes obras dan luz sobre Perú en el tardío siglo XX: Maxwell A. Cameron y Phillip Mauceri (eds.), *The Peruvian Labyrinth: Polity, Society, Economy* (University Park, PA, 1997), que es un digno sucesor de la compilación sumamente influyente de Abraham Lowenthal (ed.), *The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule* (Princeton, NJ, 1975); y con Cynthia McClintock (eds.), *The Peruvian Experiment Reconsidered* (Princeton, NJ, 1983; hay edición en español del IEP). Otro excelente cuadro general de la historia, la política y la economía por parte de especialistas prominentes es Rex Hudson (ed.), *Peru: A Country Study* (Washington, DC, 1993). Dos útiles historias compactas que también brindan perspectivas de la crisis de finales del siglo XX son James D. Rudolph, *Peru: The Evolution of a Crisis* (Westport, CT, 1992); y Latin American Bureau, *Peru: Paths to Poverty* (Londres, 1985). Támbién valioso es Orin Starn *et al.*, *The Peru Reader: History, Culture, Politics* (Durham, NC, 1995). Los que estén interesados en la presencia japonesa y sus antecedentes en Perú deben consultar la obra global de Mary Fukumoto, *Hacia un nuevo sol: japoneses y sus descendientes en el Perú: historia, cultura e identidad* (Lima, 1997).

La historia económica más reciente es la de John Sheahan, *Searching for a Better Society: The Peruvian Economy since 1950* (University Park, PA, 1999; hay edición en español del IEP). La historia económica clásica es Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, *Peru 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy* (Nueva York, 1978; hay edición en español). Debe consultarse juntamente con Efraín Gonzales de Olarte (ed.), *The Peruvian Economy and Structural Adjustment: Past, Present and Future* (Miami, 1996; hay edición en español del IEP). Richard Webb y Graciela Fernández Baca (eds.) brindan la información estadística necesaria en *Perú en números 1997: anuario estadístico* (Lima, 1997).

La historia clásica de la Iglesia católica es la de Jeffrey Klaiber, S.J., *The Catholic Church in Peru, 1821-1985* (Washington, DC, 1992; hay edición en español). Sobre los militares véase Daniel M. Masterson, *Militarism and Politics in Latin America: Peru from Sanchez Cerro to Sendero Luminoso* (Nueva York, 1991). Ronald Bruce St. John, *The Foreign Policy of Peru* (Boulder, CO, y Londres, 1992; hay edición en español) examina la política exterior peruana desde la independencia. Un tratamiento más amplio de las relaciones entre los EE. UU. y Perú, que revela la larga historia de interacciones políticas, económicas, sociales y culturales entre ambos países, es Lawrence A. Clayton, *Peru and the United States: The Condor and the Eagle* (Athens, Georgia, 1999). Véase también Fredrick B. Pike, *The United States and the Andean Republics: Peru, Bolivia and Ecuador* (Cambridge, MA, 1977). Una historia cultural breve pero incisiva es Sara Castro-Klarén, «Lima: A Blurred Centrality», en Mario Valdez (ed.) *A Comparative Cultural History of Latin America* (Oxford University Press, 2003). Véase también James Higgins, *A History of Peruvian Literature* (Liverpool, Inglaterra, 1987). En *Vision, Race, and Modernity: A Visual Economy of the Andean Image World* (Princeton, NJ, 1997; hay edición en español), Deborah Poole explora brillantemente el papel que las imágenes y tecnologías visuales han tenido en la configuración de la comprensión moderna de la raza.

Para un excelente ensayo historiográfico reciente véase Franklin Pease G.Y., *Perú: hombre e historia*, vol. 2, cap. 4, 93-128 (Lima, 1993), así como las secciones bibliográficas sobre el Perú en *CHLA*, 11 (1995; hay edición en español). Jorge Basadre, *Introducción a las bases documentales para la historia de la República del Perú*, 2 vols. (Lima, 1971), brinda una referencia historiográfica más completa para los títulos más viejos. Los lectores debieran asimismo consultar el *Handbook of Latin American Studies,* editado por Dolores Moyano Martin. Publicado anualmente por la University of Texas Press, el *Handbook* examina la bibliografía académica más reciente sobre el Perú (libros y artículos en inglés y español), toda ella cuidadosamente anotada. Está disponible en línea en la siguiente página web: http://lcweb2.loc.gov/hlas/.

Incas y preincas

Craig Morris y Adriana Von Hagen prepararon una introducción suntuosamente ilustrada sobre las civilizaciones preincaicas titulada *The Inka Empire and Its Andean Origins* (Nueva York, 1993). Véase también Michael E. Moseley, *The Incas and their Ancestors: The Archaeology of Peru* (Londres, 1992); y el muy ameno libro de Ian Cameron, *Kingdom of the Sun: A History of the Andes and their People* (Nueva York, 1990). Dos buenos exámenes de investigadores peruanos son Luis K. Watanabe, *Nuestra historia*, vol. 1, *Culturas preincas del Perú* (Lima, 1995); y Duccio Bonavia, *Perú: hombre e historia. De los orígenes al siglo XV* (Lima, 1991). En las bibliografías de estos libros pueden encontrarse referencias a publicaciones más específicas.

Sobre los incas, el lector debe comenzar con María Rostworowski de Diez Canseco, *History of the Inca Realm,* traducido por Harry B. Iceland (Nueva York, 1998, edición original en español, del IEP), así como los ensayos en *Arqueología, antropología e historia en los Andes. Homenaje a María Rostworowski*, editado por Rafael Varón Gabai y Javier Flores Espinoza (Lima, IEP, 1997). Otros tres excelente exámenes generales de los incas son Nigel Davies, *The Incas* (Boulder, CO, 1995); Thomas C. Patterson, *The Inca Empire: The Formation and Disintegration of a Pre-Capitalist State* (Nueva York, 1991); y (Richard) Moseley, *The Incas and their Ancestors*. También es útil George Collier, Renato Rosaldo y John Wirth (eds.), *The Inca and Aztec States, 1400-1800: Anthropology and History* (Nueva York, 1982). Véanse también las obras pioneras de R.T. Zuidema, entre ellas su *Inca Civilization in Cuzco* (Austin, TX, 1990); y John Murra, «Andean Societies before 1532», en *CHLA,* 1 (1984; hay edición en español), 59-90. Susan Ramírez sugiere una gran reinterpretación en *To Feed and Be Fed: The Cosmological Bases of Authority and Identity in the Andes* (Stanford University Press, en prensa).

En numerosos artículos, John Rowe sentó las bases de muchos estudios posteriores sobre los incas. Ann Kendall examinó su vida cotidiana en *Everyday Life of the Incas* (Londres, 1973); y Michael A. Malpass recientemente hizo lo mismo en *Daily Life in the Inca Empire* (Westport, CT, 1996). Marcia Ascher y Robert Ascher analizaron el código de los quipus en *The Code of the Quipu* (Ann Arbor, MI, 1981).

El problema de la escritura se examina en Elizabeth Hill Boone y Walter D. Mignolo (eds.), *Writing without Words: Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes* (Durham, NC, 1994). El papel de las mujeres lo desarrolla Irene Silverblatt, *Moon, Sun and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Peru* (Princeton, NJ, 1987; hay edición en español). Véanse también Constance Classen, *Inca Cosmology and the Human Body* (Salt Lake City, UT, 1993); y Gary Urton, *At the Crossroads of the Earth and Sky: An Andean Cosmology* (Austin, TX, 1981). Brian Bauer y S.P. Dearborn examinan la astronomía inca en *Astronomy and Empire in the Ancient Andes* (Austin, TX, 1995; hay edición en español).

Hay numerosos cuadros generales preparados por investigadores peruanos. Los más notables son Jorge Silva S., *Nuestra historia*, vol. 2, *El imperio de los cuatro suyos* (Lima, 1995); Fernando Silva Santisteban y Rogger Ravines, *Los incas: historia y arqueología del Tawantinsuyu* (Lima, 1994); María Rostworowski de Diez Canseco, *Historia del Tawantinsuyu* (Lima, 1988); Waldemar Espinoza Soriano, *Los incas: economía, sociedad y estado en la era del Tahuantinsuyo* (Lima, 1987); y Franklin Pease G.Y., *Del Tawantinsuyu a la historia del Perú* (Lima, 1978). De Pease, véase también su más reciente *Los incas: una introducción* (Lima, 1991). Rostworowski es una de las autoras más prolíficas y originales sobre los incas y las civilizaciones prehispánicas en Perú. Sus *Ensayos de historia andina* fueron publicados en 1993 y 1998 (Lima). Un examen útil pero más viejo es el de Luis Guillermo Lumbreras, *The Peoples and Cultures of Ancient Peru* (Washington, DC, 1974; hay edición en español). Véase también Louis Baudin, *A Socialist Empire: The Incas of Peru* (Princeton, NJ, 1961; hay edición en español).

La cuestión de los orígenes del Estado inca fue tratada por Brian Bauer, *The Development of the Inca State* (Austin, TX, 1992; hay edición en español); Gary Urton, *Pacariqtambo and the Origins of the Incas* (Austin, TX, 1990; hay edición en español); y Jonathan Haas, Sheila Pozorski y Thomas Pozorski, *The Origins and Development of the Andean State* (Cambridge, Inglaterra, 1987). Terence D'Altroy examina los incas y las provincias en *Provincial Power in the Inca Empire* (Washington, DC, 1992). Johann Reinhard escribió sobre *Machu Picchu: The Sacred Center* (Lima, 1991), que se puede leer ventajosamente junto con la relación de su descubridor, Hiram Bingham, *Machu Picchu—A Citadel of the Incas* (New Haven, CT, 1930). Las obras definitivas sobre el sistema vial y sobre los asentamientos incaicos son *The Inca Road System* (Nueva York, 1984), e *Inca Settlement Planning* (Austin, TX, 1990), de John Hyslop. Craig Morris y Donald E. Thompson estudiaron *Huanuco Pampa: An Inca City and Its Hinterland* (Londres, 1985). Catherine Julien interpreta a los incas desde la perspectiva de *Hatunqolla: A View of Inca Rule from the Lake Titicaca Region* (Berkeley, CA, 1983). Geoffrey W. Conrad y Arthur Demarest, *Religion and Empire: The Dynamics of Aztec and Inca Expansionism* (Nueva York, 1984), comparan los imperios inca y azteca, y han preparado otros estudios importantes.

En un fecundo trabajo, R.T. Zuidema explicó *The Ceque System of Cuzco: The Social Organization of the Capital of the Inca* (Leiden, Holanda, 1964; hay edición en español). Un estudio más reciente es Brian S. Bauer, *The Sacred Landscape of the Inca: The Cuzco Ceque System* (Austin, TX, 1999; hay edición en español). La gran obra de John Murra es *La organización económica del estado inca* (Ciudad de México, 1978) y *Formaciones economicas y politicas del mundo Andino* (Lima, 1975), o su versión ampliada *El mundo andino, población, medio ambiente y recursos* (Lima, 2002). Franklin Pease G.Y. también escribió sobre *Los últimos Incas del Cuzco* (Lima, 1976). La biografía definitiva de *Pachacútec Inca Yupanqui* (Lima, 1953) es de María Rostworowski de Diez Canseco. Ramiro Matos Mendieta estudia *Pumpu: centro administrativo inca de la puna de Junin* (Lima, 1994). Liliana Regalado de Hurtado escribió sobre la *Sucesión incaica* (Lima, 1993). Rogger Ravines (ed.) examinó la *Tecnología andina* (Lima, 1978). Consúltense también las obras clásicas de Charles Gibson, *The Inca Concept of Sovereignty and the Spanish Administration in Peru* (Austin, TX, 1948), y Sally Falk Moore, *Power and Property in Inca Peru* (Westport, CT, 1973). Algunos de los cronistas más importantes de los incas aparecen enumerados abajo en la sección sobre la conquista.

Conquista y virreinato

Siglo XVI

Los lectores debieran comenzar con el penetrante examen interpretativo de Steve J. Stern, «Paradigms of Conquest: History, Historiography, and Politics», *Journal of Latin American Studies (JLAS)* 24 (1992), 1-34; y John H. Elliott, «The Spanish Conquest and Settlement of America», en *CHLA*, 1, (1984) 149-206. La historia más reciente del periodo es Luis Millones, *Perú colonial* (Lima, 1995), vol. 2 de Manrique *et al.*, *Nuestra historia*. Nelson Manrique examina *El universo mental de la conquista de América* (Lima, 1993). La narrativa clásica es John Hemming, *The Conquest of the Incas* (Nueva York, 1970; hay edición en español), siendo la versión clásica la de William H. Prescott, *The History of the Conquest of Peru,* (Nueva York, 1998 (primera edición en 1847); hay edición en español). Véase también John Hemming, *Search for El Dorado* (Londres, 1978).

James Lockhart, *The Men of Cajamarca* (Austin, TX, 1972; hay edición en español) presenta un perfil de los conquistadores. La biografía más reciente de los Pizarro es la de Rafael Varón Gabai, *Francisco Pizarro and His Brothers: The Illusion of Power in Sixteenth-Century Peru* (Norman, OK, 1997 edición original en español; del IEP). Otras biografías son las de José Antonio del Busto Duthurburu, *Francisco Pizarro: El marqués gobernador* (2ª ed., Lima, 1978); Guillermo Lohmann Villena, *Francisco Pizarro. Testimonios, documentos oficiales, cartas y escritos* (Madrid, 1986); y Raúl Porras Barrenechea, *Pizarro* (Lima, 1978). Estos tres autores han publicado extensamente sobre la colonia.

En torno a los aspectos militares de la conquista véase John F. Guilmartin, Jr., «The Cutting Edge: An Analysis of the Spanish Invasion and Overthrow of the Inca Empire, 1532-1539», en *Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the Sixteenth Century,* editado por Kenneth J. Andrien y Rolena Adorno (Berkeley, CA, 1991), 40-69. Patricia Seed examina el requerimiento en *Ceremonies of Possession in Europe's Conquest of the New World, 1492-1640* (Cambridge, Inglaterra, 1995). Véase también su «The Conquest of the Americas, 1492-1650», en la *Cambridge Illustrated History of Warfare,* editada por Geoffrey Parker, (Cambridge, Inglaterra, 1995), y Sabine MacCormack, «Atahualpa and the Book», *Dispositio* 16: 36/38 (1988), 141-168. El encuentro también fue tratado en forma original por Antonio Cornejo Polar, «El comienzo de la heterogeneidad en las literaturas andinas: voz y letra en el 'diálogo' de Cajamarca», *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* (Lima, 1990).

La perspectiva india de la conquista fue reconstruida por Nathan Wachtel en *The Vision of the Vanquished: the Spanish Conquest of Peru through Indian Eyes, 1530-1570* (Nueva York, 1977; hay edición en español). Véase también su «The Indian and the Spanish Conquest», en *CHLA*, 2 (1984; hay edición en español), 207-248, así como Edmundo Guillén, *Visión peruana de la conquista (la resistencia incaica a la invasión española)* (Lima, 1978). Para la formación e importancia de las alianzas indias véase Steve J. Stern, «The Rise and Fall of Indian-White Alliances: A Regional View of 'Conquest' History», *Hispanic American Historical Review (HAHR)* 61: 3 (agosto, 1981), 461-491; hay edición en español.

Las tempranas rebeliones indias fueron examinadas en George Kubler, «The Neo-Inca State (1537-1572)», *HAHR* 27: 2 (mayo, 1947), 189-203; y Luis Millones, «Un movimiento nativista del siglo XVI: el Taki Onqoy», y «Nuevos aspectos del Taki Onqoy», en *Ideología mesiánica del mundo andino,* editado por Juan Ossio (Lima, 1973), 83-94, 95-102. Véase también la compilación de Millones, *El retorno de las huacas. Estudios y documentos sobre el Taki Onqoy. Siglo XVI* (Lima, IEP, 1990), y Pedro Guibovich Pérez, «Cristóbal de Albornoz y el Taki Onquoy», *Histórica* 15: 2 (1991), 205-236. Una visión disidente que cuestiona la idea del milenarismo como la fuerza impulsora de las rebeliones nativas andinas aparece en Gabriela Ramos y Henrique Urbano, (eds.), *Catolicismo y extirpación de idolatrías, siglos XVI-XVIII: Charcas, Chile, Mexico, Perú* (Cuzco, 1993). Véase también Ana María Lorandi, *De quimeras, rebeliones y utopías: la gesta del Inca Pedro Bohorques* (Lima, 1997).

Las guerras civiles se examinan en José Antonio del Busto Duthurburu, *La pacificación del Perú* (Lima, 1984); en tanto que Teodoro Hampe presenta una biografía de *Don Pedro de la Gasca* (Lima, 1989). Edmundo Guillén Guillén narra *La guerra de reconquista inca: Vilcabamba: epilogo trágico del Tawantinsuyo* (Lima, 1994).

Anthony Pagden, *The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology* (Nueva York, 1982), describe los famosos debates entre Sepúlveda y Las Casas en Salamanca en 1550, en torno a la verdadera naturaleza de los amerindios, y muestra cómo los europeos aprovecharon la noción aristotélica de la esclavitud natural para racionalizar su tratamiento de los indios conquistados.

Véase también la obra clásica de Lewis Hanke, *The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America* (Filadelfia, 1949; hay edición en español), y Bartolomé de Las Casas, *Los tesoros del Perú* (Madrid, 1958). Gustavo Gutiérrez escribió sobre *Las Casas: In Search of the Poor of Jesus Christ* (Nueva York, 1993; hay edición en español), así como Isacio Pérez Fernández, *Bartolomé de Las Casas en el Perú* (Cuzco, 1988).

Hay numerosas crónicas y relaciones contemporáneas de la conquista y la temprana colonia. Algunas de las más notables son Agustin de Zárate, *Historia del descubrimiento y conquista del Perú*, editado por Franklin Pease G.Y. y Teodoro Hampe Martínez (Lima, PUCP, 1995); Juan de Betanzos, *Suma y narración de los yngas* (Cochabamba, 1992); Bernabé Cobo, *Historia del Nuevo Mundo* (Madrid, 1943); Martín de Murúa, *Historia general del Perú,* dos tomos (Madrid, 1962-1964); Pedro Sarmiento de Gamboa, *Historia de los Incas* (Buenos Aires, 1943); Padre Pablo José de Arriaga, *Extirpación de la idolatría en el Pirú,* en *Crónicas peruanas de interés indígena* editado por Francisco Esteve Barba (Madrid, 1968); Pedro Cieza de Leon, *Crónica del Perú* (Lima, PUCP, 1984-1991); Garcilaso de la Vega, «El Inca», *Comentarios reales de los Incas (primera parte)* [1609] (Barcelona, 1968); Felipe Huamán Poma de Ayala, *El primer nueva corónica y buen gobierno,* 3 vols., editada por John V. Murra y Rolena Adorno, traducciones del quechua de Jorge L. Urioste (Ciudad de México, 1980) [*Letter to a King* (1613) traducción de Christopher Dilke (Nueva York, 1978)]; Luis Millones (ed.), *La crónica de Titu Cusi Yupanqui* (Lima, 1985); y *The Huarochiri Manuscript: A Testament of Ancient and Colonial Andean Religion,* traducido del quechua por Frank Salomon y George L. Urioste (Austin, TX, 1991; hay varias ediciones en español).

Para una discusión perceptiva de estos y otros cronistas andinos véase Franklin Pease G.Y., *Las crónicas y los Andes* (Lima, 1995). Véase también su «Las primeras versiones españolas sobre el Perú», *Colonial Latin American Review* (*CLAR*), 1 (1992), 65-76; y Raúl Porras Barrenechea, *Los cronistas del Perú y otros ensayos,* editado por Franklin Pease G.Y. (Lima, 1986). Véanse también las antologías compiladas por Francisco Carrillo, *Enciclopedia histórica de la literatura peruana*, vol. 2, *Cartas y cronistas del descubrimiento y conquista* (Lima, 1987); y *Cronistas del Perú antiguo,* vol. 4 (Lima, 1989). También es importante Tom Cummins, «Representation in the Sixteenth Century and the Colonial Image of the Inca», en *Writing without Words,* (1994)188-219.

Noble David Cook ha estimado diligentemente la población precolombina en el momento de la conquista y su caída estrepitosa en el siguiente siglo en su *Demographic Collapse: Indian Peru, 1520-1620* (Cambridge, Inglaterra, 1981), así como en su estudio más reciente, *Born to Die: Disease and New World Conquest (1492-1650)* (Nueva York, 1998). Véase también su libro con W. George Lovell (eds.), *«Secret Judgments of God»: Old World Disease in Colonial Spanish America* (Norman, OK, 1992). Los otros trabajos de Cook son *The People of the Colca Valley: A Population Study* (Boulder, CO, 1982); «Population Data for Indian Peru: Sixteenth

and Seventeenth Centuries», *HAHR*, 62: 1 (febrero, 1982), 73-120; y editó la *Tasa de la visita general de Francisco de Toledo* (Lima, 1975).

Nicolás Sanchez-Albornoz presenta una excelente imagen general de la población en los Andes coloniales en «The Population of Colonial Spanish America», en *CHLA*, 2, (1984) 3-36. Una visión disidente sobre el tamaño de la población precolonial es la de Daniel E. Shea, «A Defense of Small Population Estimates for the Central Andes in 1520», en *The Native Population of the Americas in 1492*, editado por William M. Denevan (Madison, WI, 1976). Véase también Nicolás Sanchez-Albornoz, *Indios y tributos en el Alto Perú* (Lima, 1978). Para el impacto de las enfermedades y epidemias europeas en el colapso demográfico consúltese Henry F. Dobyns, «An Outline of Andean Epidemic History to 1720», *Bulletin of the History of Medicine* 37 (1963), 493-515; y el clásico estudio de Alfred W. Crosby, *The Columbian Exchange* (Westport, CT, 1972), que examina las consecuencias biológicas y culturales que 1492 tuvo para los Andes centrales.

Puede encontrarse información sobre la inmigración española a los Andes en Ida Altman, *Emigrantes y sociedad: Extremadura y América en el siglo XVI* (Madrid, 1992). Véase también Peter Boyd-Bowman, *Patterns of Spanish Emigration to the New World (1493-1580)* (Buffalo, NY, 1973); y Sánchez Albornoz, «The Population». James Lockhart, *Spanish Peru, 1532-1560* (Madison, WI, 1968; hay edición en español), es la historia social clásica de la temprana colonización, en tanto que su *Letters and People of the Spanish Indies: Sixteenth Century*, con Enrique Otte, eds. (Cambridge, Inglaterra, 1976), arroja luz sobre los orígenes, motivos y ocupaciones de los emigrantes tempranos. Véase también Lockhart, «Social Organization and Social Change in Colonial Spanish America», en *CHLA*, 2, (1984) 265-320; hay edición en español. Richard M. Morse examina «The Urban Development of Spanish America» en *CHLA*, 2, (1984) 67-104; hay edición en español. Se puede obtener una percepción de las actitudes, valores y mentalidad de los primeros invasores españoles en Alexandra Parma Cook y Noble David Cook, *Good Faith and Truthful Ignorance: A Case of Transatlantic Bigamy* (Durham, NC, 1991; hay edición en español). Véase también Teodoro Hampe Martínez, «The Diffusion of Books and Ideas in Colonial Peru: A Study of Private Libraries in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», *HAHR* 73: 2 (1993), 211-233. Rosa María Acosta de Arias-Schreiber escribe sobre las *Fiestas coloniales urbanas (Lima-Cuzco-Potosí)* (Lima, 1997).

La versión clásica sobre *The African Slave in Colonial Peru 1524-1650* es de Fredrick Bowser (Stanford, CA, 1974; hay edición en español). Para el complejo problema de la estratificación y la identidad colonial étnica/racial véase el importante estudio de David Cahill, «Colour by Numbers: Racial and Ethnic Categories in the Viceroyalty of Peru, 1532-1824», *JLAS* 26: 2 (1994), 325-346. También es útil el más viejo estudio de Magnus Mörner, *Race Mixture in the History of Latin America* (Boston, 1967), hay edición en español. Véase asimismo Hiroyasu Tomoeda y Luis Millones, *500 años de mestizaje en los Andes* (Osaka, 1992). En torno al significado del término *indio* véase Irene Silverblatt, «Becoming Indian in the Central Andes of Seventeenth-Century Peru», en *After*

Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements, editado por Gyan Prakash (Princeton, NJ, 1995), 279-298.

Se han publicado numerosas obras sobre las tempranas sociedad y economía coloniales. Dos estudios fecundos que adoptan la imagen del indio como participante activo y no pasivo en la conquista —como antes se le retrataba—, y que elaboró estrategias sofisticadas de resistencia y adaptación, son Steve J. Stern, *Peru's Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest: Huamanga to 1640* (Madison, WI, 1982; hay edición en español), y Karen Spalding, *Huarochiri. An Andean Society under Inca and Spanish Rule* (Stanford, 1984). Ambos estudios también ofrecen interpretaciones importantes pero contrastantes de la emergente economía colonial. Spalding caracteriza al Perú colonial como esencialmente feudal desde el principio, en tanto que Stern rechaza esta postura, refiriéndose a «empresarios aristocráticos» que mostraron fuertes características comerciales y productivas. Consúltense también los numerosos artículos de Spalding, entre ellos «Exploitation as an Economic System: The State and the Extraction of Surplus in Colonial Peru», en *The Inca and Aztec States, 1400-1800*, editado por George Collier *et al.* (Nueva York, 1982), 321-344. En «The Social Significance of Judicial Institutions in an 'Exploitative' Society: Huamanga, Peru, 1570-1640», también en Collier *et al.*, 289-320, Stern muestra cómo los pueblos nativos recurrieron diestramente a la legislación y los tribunales coloniales para proteger sus intereses. Un estudio clásico anterior es el de George Kubler, «The Quechua in the Colonial World», *Handbook of South American Indians,* editado por J.H. Steward, vol. 2 (Nueva York, 1963), 331-410. Más recientemente, Susan Ramírez explora *The World Upside Down: Cross-Cultural Contact and Conflict in Sixteenth Century Peru* (Stanford, CA, 1996; hay edición en español).

José de la Puente Brunke examina la *Encomienda y encomenderos en el Perú: estudio social y político de una institución colonial* (Sevilla, 1992). Un perfil comprehensivo de un encomendero peruano aparece en Efraín Trelles Aréstegui, *Lucas Martínez Vegaso: funcionamiento de una encomienda peruana inicial* (Lima, 1982). Véase también Fred Bronner, «Peruvian Encomenderos in 1630: Élite Circulation and Consolidation», *HAHR* 57: 4 (1977), 633-659.

La minería de la industria de la plata ha sido objeto de una investigación exhaustiva de Peter Bakewell, quien presenta una excelente síntesis en «Mining in Colonial Spanish America», en *CHLA*, 2, (1984) 105-152; hay edición en español. Gwendolyn Ballantine Cobb examina *Potosí y Huancavelica. Bases económicas del Perú, 1545-1640* (La Paz, 1977). Para una perspectiva comparativa anterior véase David H. Brading y Harry E. Cross, «Colonial Silver Mining; Mexico and Peru», *HAHR* 52: 2 (1972). Carlos Contreras examina *La ciudad del mercurio: Huancavelica, 1570-1700* (Lima, IEP, 1982). Véase también Guillermo Lohmann Villena, *Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII* (Sevilla, 1949); y Arthur P. Whitaker, *The Huancavelica Mercury Mine* (Cambridge, MA, 1941).

El sistema laboral de la mita ha recibido una considerable atención académica. Dos monografías importantes son Jeffrey A. Cole, *The Potosi Mita, 1573-1700: Compulsory Indian Labor in the Andes* (Stanford, CA, 1985); y Peter Bakewell,

Miners of the Red Mountain: Indian Labor in Potosi, 1545-1650 (Albuquerque, NM, 1984; hay edición en español). Véase también Thierry Saignes, «Notes on the Regional Contribution to the Mita in Potosi in the Early Seventeenth Century», *Bulletin of Latin American Research* (*BLAR*) 4: 1 (1985). Steve J. Stern examina sucintamente la mita y el sistema laboral de Potosí en su discusión del debate en torno al «Feudalism, Capitalism, and the World-System in the Perspective of Latin America and the Caribbean», *American Historical Review* (*AHR*) 93: 4 (octubre, 1988), 829-872 (reimpreso en *Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor, and the Capitalist World System in Africa and Latin America*, editado por Frederick Cooper *et al.* [Madison, WI, 1993], 23-83). Se han editado y publicado numerosas crónicas sobre Potosí, varias de ellas por Lewis Hanke. Véase también *Tales of Potosi: Bartolomé Arzans de Orsua y Vela*, introducción y edición de R.C. Padden (Providence, RI, 1975; edición original de la obra de Arzans en español).

Un examen general del comercio transatlántico, con referencias al Perú, figura en Murdo J. MacLeod, «Spain and America: The Atlantic Trade, 1492-1720», en *CHLA*, 1, (1984) 341-388; hay edición en español. Véase también James Lockhart, «Trunk Lines and Feeder Lines: The Spanish Reaction to American Resources», en Andrien y Adorno, *Transatlantic Encounters*, 90-120; así como Fernando Iwasaki Cauti, *Extremo Oriente y Perú en el siglo XVI* (Madrid, 1992); y Woodrow W. Borah, *Early Colonial Trade between Mexico and Peru* (Berkeley, CA, 1954). El surgimiento de la economía colonial interna de los Andes se analiza en el trabajo pionero de Carlos Sempat Assadourian, *El sistema de la economía colonial: mercado interno, regiones y espacio económico* (Lima, IEP, 1982). Aunque a diferencia de Karen Spalding, Assadourian se niega a interpretar la economía colonial andina ya sea como feudal o capitalista, muestra cómo la economía minera engendró el desarrollo de una considerable producción e intercambio internos a lo largo de un amplio «espacio económico». Véase también su «The Colonial Economy: The Transfer of the European System of Production to New Spain and Peru», *JLAS* 24 (1992), 55-68; *Transiciones hacia el sistema colonial andino* (Lima, IEP, 1994); y muchos otros trabajos. La obra de Assadourian es evaluada en Steve J. Stern, «New Directions in Andean Economic History: A Critical Dialogue with Carlos Sempat Assadourian», *Latin American Perspectives* 12 (1985), 133-148.

Los trabajos de Assadourian y Stern estimularon nuevos estudios sobre la participación indígena en la economía colonial, que figuran en *Ethnicity, Markets, and Migration in the Andes: At the Crossroads of History and Anthropology*, editado por Brooke Larson y Olivia Harris, con Enrique Tandeter (Durham, NC, 1995), una edición abreviada de *La participación índigena en los mercados surandinos: estrategias y reproducción social, siglos XVI-XX* (La Paz, 1987). En esta misma corriente, dos estudios influyentes son Brooke Larson, *Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia: Cochabamba, 1550-1900* (Princeton, NJ, 1988; hay edición en español); y Luis Miguel Glave, *Trajinantes: caminos indígenas en la sociedad colonial, siglos XVI-XVII* (Lima, 1989). Glave, como Assadourian, explora la formación del mercado

interno andino, enfatizando las formas en que las estructuras socioeconómicas andinas fueron adaptadas para que encajaran con el nuevo ordenamiento colonial.

Los mejores estudios recientes de los obrajes son los de Miriam Salas de Coloma, *Estructura colonial del poder español en el Perú. Huamanga (Ayacucho) a través de sus obrajes, siglos XVI-XVIII*, 3 vols. (Lima, 1998), y Neus Escandell-Tur, *Producción y comercio de tejidos coloniales: los obrajes y chorrillos del Cusco 1570-1820* (Cuzco, 1997), basado en su tesis de Ph.D., Textile Production and Trade during the Colonial Period: Cuzco, 1570-1820 (UCSD, 1993). Luis Miguel Glave examina los orígenes y la evolución de la comunidad india en *Vida, símbolos y batallas: creación y recreación de la comunidad indígena, Cusco, siglos XVI-XX* (Lima, 1992). Sobre la migración de indios, véase el galardonado libro de Ann M. Wightman, *Indigenous Migration and Social Change: The Forasteros of Cuczo* [sic] *1520-1720* (Durham, NC, 1990); y David Robinson (ed.), *Migration in Colonial Spanish America* (Cambridge, Inglaterra, 1990).

Magnus Mörner, «The Rural Economy and Society of Colonial Spanish America», en *CHLA*, 2, (1984) 189-218; hay edición en español, presenta un cuadro global. Véase también el importante estudio de Manuel Burga, *De la Encomienda a la hacienda capitalista: el valle de Jequetepeque del siglo XVI al XX* (Lima, 1976); así como el clásico de Pablo Macera, «Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas peruanas», *Acta Historica*, reimpreso en Macera, *Trabajos de historia* (Lima, 1977). Más recientemente está Jorge A. Guevara Gil, *Propiedad agraria y derecho colonial: los documentos de la hacienda Santotis, Cuzco (1543-1822)* (Lima, 1993).

La diversidad del sistema de hacienda y la tenencia de la tierra por todo el Perú colonial se señala en una serie de estudios que rastrearon su desarrollo regional en la época virreinal. Susan E. Ramírez, *Provincial Patriarchs: Land Tenure and the Economics of Power in Colonial Peru* (Albuquerque, NM, 1986; hay edición en español), cubre la costa norte, concentrándose en la élite terrateniente, al igual que Robert G. Keith, *Conquest and Agrarian Change* (Cambridge, MA, 1976), que ofrece un análisis incisivo de la emergencia del sistema de hacienda y su diversidad. Sobre el Alto Perú también es digno de nota Larson, *Colonialism*. En *Landowners in Colonial Peru* (Austin, 1984), Keith A. Davies examina la formación de Arequipa y su desarrollo singular de los minifundios en los siglos XVI y XVII. Luis Miguel Glave y María Isabel Remy se unieron en *Estructura agraria y vida rural en una región andina: Ollantaytambo entre los siglos XVI y XIX* (Cuzco, 1983), para construir una microhistoria ricamente detallada que abarca varios siglos de economía y sociedad agrarias en Ollantaytambo (entre Cuzco y Machu Picchu).

Las mujeres en la sociedad andina están recibiendo una atención creciente. Un cuadro global aparece en Asunción Lavrin, «Women in Spanish American Colonial Society», *CHLA,* 2, (1984) 321-356; hay edición en español. Para otro cuadro global véase María Emma Mannarelli, «Sexualidad y desigualdades genéricas en el Perú del siglo XVI», *Allpanchis* 22: 35-36 (1990), 225-249. Los métodos del control sobre las mujeres se examinan en Silverblatt, *Moon, Sun, and Witches*. Véase también su

«Andean Women under Spanish Rule», en *Women and Colonization: Anthropological Perspectives*, editado por Mona Etienne y Eleanor Leacock (Nueva York, 1980).

El estudio más reciente es Kathryn Burns, *Colonial Habits: Convents and the Spiritual Economy of Cuzco, Peru* (Durham, NC, 1999). Ella sostiene, entre otras cosas, que las monjas desempeñaron un papel vital en la reproducción de un ordenamiento colonial andino, en el cual los intereses económicos y espirituales estaban profundamente entrelazados. María Rostworowski de Diez Canseco ha escrito una biografía de *Doña Francisca Pizarro: una ilustre mestiza, 1534-1598* (Lima, 2003). Véase también Amaya Fernández Fernández *et al.*, *La mujer en la conquista y la evangelizacion en el Perú (Lima 1550-1650)*, (Lima, 1996); Elinor C. Burkett, «Indian Women and White Society: The Case of Sixteenth-Century Peru», en *Latin American Women: Historical Perspectives,* editado por Asunción Lavrin (Westport, CT, 1978); y su Early Colonial Peru: The Urban Female Experience (*tesis de Ph.D.*, Universidad de Pittsburgh, 1975). Un examen más temprano es el de Judith Prieto de Zegarra, *Mujer, poder, y desarrollo en el Perú*, 2 vols. (Lima, 1980).

Para un examen sucinto de la administración colonial española véase J.H. Elliott, «Spain and America in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», en *CHLA*, 1, (1984) 287-340; hay edición en español. Un análisis más reciente es el de John Lynch, «The Institutional Framework of Colonial Spanish America», *JLAS* 24 (1992), 69-81. John J. TePaske analizó «The Costs of Empire: Spending Patterns and Priorities in Colonial Peru, 1581-1820», *CLAR*, 2: 1 (1993), 1-33. Consúltese también Charles Gibson, quien sigue la transición del dominio inca al hispano en su obra clásica, *The Inca Concept of Sovereignty and the Spanish Administration in Peru* (2ª ed., Nueva York, 1969).

No contamos con una biografía reciente del virrey Toledo. Por lo tanto, debemos depender de Roberto Levillier, *Don Francisco de Toledo,* 4 vols. (Buenos Aires, 1935-40); y Arthur F. Zimmerman, *Francisco de Toledo, Fifth Viceroy of Peru, 1569-1581* (Caldwell, ID, 1938). Las reformas de Toledo se basaron en el *Gobierno del Perú* (1567), de Juan de Matienzo, editado por Guillermo Lohmann Villena (París, 1967).

Hay numerosos estudios sobre los *curacas*, o jefes étnicos nativos. El más reciente de ellos es Scarlett O'Phelan Godoy, *Kuracas sin sucesiones: del cacique al alcalde de indios, Perú y Bolivia, 1750-1835* (Cuzco, 1997). Véase también Franklin Pease G.Y., *Curacas, reciprocidad y riqueza* (Lima, 1992); y Rafael Varón Gabai, *Curacas y encomenderos. Acomodamiento nativo en Huaraz, siglos XVI-XVII* (Lima, 1980). Otros artículos son Carlos Sempat Assadourian, «Los señores étnicos y los corregidores de indios en la conformación del estado colonial», *Anuario de Estudios Americanos* 44 (1987), 325-426; Karen Spalding, «Defendiendo el suyo. El kuraka en el sistema de producción andina», en *Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX,* editado por Segundo Moreno Yáñez y Frank Salomon (Quito, 1991); Luis Miguel Glave, «Un curacazgo andino y la sociedad campesina del siglo XVII: la historia de Bartolomé Tupa Hallicalla, curaca de Asillo», *Allpanchis* 33 (1989), 11-39; y Susan Ramírez, «The 'dueño de indios': Thoughts on the Consequences of the Shifting Bases of Power of the 'curaca de los viejos

antiguos' under the Spanish in Sixteenth-Century Peru», *HAHR* 67: 4 (noviembre, 1987; hay edición en español).

Un artículo clave sobre la Iglesia católica es Nuria Sala i Vila, «Gobierno colonial, Iglesia y poder en Perú», *Revista Andina* 11: 1 (1993), 133-161. Un cuadro general de la Iglesia, con numerosas referencias al Perú, aparece en Josep M. Barnadas, «The Catholic Church in Spanish America», en *CHLA*, 1, (1984) 511-540; hay edición en español. También es importante el detallado libro de Sabine MacCormack, *Religion in the Andes: Vision and Imagination in Early Colonial Peru* (Princeton, NJ, 1991), así como sus artículos. Entre los estudios sobre la Inquisición tenemos Pedro Guibovich Pérez, *En defensa de Dios: estudios y documentos sobre la Inquisición en el Perú* (Lima, 1998); Teodoro Martínez Hampe, *Santo Oficio e historia colonial: approximaciones al Tribunal de la Inquisición de Lima (1570-1820)* (Lima, 1998); María Emma Mannarelli, *Hechiceras, beatas y expósitas: mujeres y poder inquisitorial en Lima* (Lima, 1998); y Fernando Ayllón, *El Tribunal de la Inquisición: de la leyenda a la historia* (Lima, 1997). Véase también Nicholas Griffiths, «Inquisition of the Indians? The Inquisitorial Model and the Repression of Andean Religion in Seventeenth-Century Peru», *Colonial Latin American Historical Review* 3 (invierno, 1994), 19-38; y su *The Cross and the Serpent: Religious Repression and Resurgence in Colonial Peru* (Norman, OK, 1996; hay edición en español), que interpreta la extirpación en el contexto de una lucha multifacética por el poder en las aldeas, entre el cura parroquial local, el *curaca* y el principal magistrado nativo.

El estudio más reciente de la *Idolatry and Its Enemies: Colonial Andean Religion and Extirpation, 1640-1750*, es de Kenneth Mills (Princeton, NJ, 1997), quien intenta, entre otras cosas, reconstuir la religión andina tal como era a mediados del periodo colonial. Para la transición de las creencias religiosas andinas al cristianismo véase Veronica Salles-Reese, *From Viracocha to the Virgin of Copacabana: Representation of the Sacred at Lake Titicaca* (Austin, TX, 1997). También son importantes Ramos y Urbano (eds.), *Catolicismo y extirpación*; Luis Millones (ed.), *El retorno de las huacas* (Lima, 1990), y su *Historia y poder en los Andes centrales* (Madrid, 1987); y Pierre Duviols, *Cultura andina y represión. Procesos y visitas de idolatrías y hechicerías, Cajatambo siglo XVII* (Cuzco, 1986). La versión clásica y más vieja del tema es Duviols, *La destrucción de las religiones andinas (durante la conquista y la colonia)* (Ciudad de México, 1977). La relación original es la de Arriaga, *La extirpación* [1621]. Véase también Teodoro Hampe Martínez, *Cultura barroca y extirpación de idolatrías: la biblioteca de Francisco de Ávila (1648)* (Cuzco, 1996).

Siglo XVII

El mejor estudio del siglo XVII es el de Kenneth J. Andrien, *Crisis and Decline: The Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century* (Albuquerque, NM, 1985 [en español: IEP, 2011]). Andrien sostiene que Perú no entró en una depresión en este siglo, sino más bien que experimentó una reestructuración de la minería de plata a una

economía más autosuficiente, diversificada y regionalizada. La interpretación más tradicional de un siglo en depresión se esboza en John J. TePaske y Herbert S. Klein, «The Seventeenth-Century Crisis in New Spain: Myth or Reality», *Past and Present* 90 (febrero, 1981), 116-135. Los mismos autores han compilado un conjunto de datos de las cuentas de ingresos y gastos de *The Royal Treasuries of the Spanish Empire in America*, vol. 1, *Peru* (Durham, NC, 1982). Véase también Peter Bakewell, *Silver and Entrepreneurship in Seventeenth-Century Potosi* (Albuquerque, NM, 1988; hay edición en español) y Luis Miguel Glave, «El virreinato peruano y la llamada 'crisis general' del siglo XVII», en *Cuadernos de Historia* 2 (Lima, 1986).

Los tempranos vínculos entre Perú y México se describen en Woodrow Borah, *Early Colonial Trade between Mexico and Peru* (Berkeley, CA, 1954; hay edición en español); y Lawrence A. Clayton «Trade and Navigation in the Seventeenth-Century Viceroyalty of Peru», *JLAS* 7 (1975), 1-21. El libro de Clayton, *Caulkers and Carpenters in a New World: The Shipyards of Colonial Guayaquil* (Athens, OH, 1980; hay edición en español), describe el surgimiento de los astilleros de Guayaquil, que suministraban naves tanto para la flota del tesoro como para el tráfico marítimo que recorría la costa oeste del océano Pacífico. Véase también Fred Bronner, «Church, Crown and Commerce in Seventeenth-Century Lima: A Synoptic Interpretation», en *Jahrbuch fur Geschichte von Staat, Wirtschaft and Gesellschaft Lateinamerikas*, 29 (Colonia, Alemania, 1992).

Andrien asimismo describe y analiza cuidadosamente la decadencia del gobierno regio en el Perú durante el siglo XVII, buena parte de la cual la atribuye a la venta de cargos públicos a partir de 1633. Véase también John Parry, *The Sale of Public Offices in the Spanish Indies under the Hapsburgs* (Berkeley, CA, 1953). La decadencia del gobierno colonial puede igualmente atribuirse a los crecientes costos de la defensa imperial, narrada, junto con las intrusiones extranjeras en el Pacífico, por Peter T. Bradley, *The Lure of Peru: Maritime Instrusion into the South Sea, 1598-1701* (Nueva York, 1989). Véase también su *Society, Economy, and Defence in Seventeenth-Century Peru: The Administration of the Count of Alba de Liste, 1655-1661* (Liverpool, Inglaterra, 1992); «The Defence of Peru, 1648-1700», en *Jahrbuch*, 29, 90-120; y con David Cahill, *Hapsburg Peru: Images, Imagination and Memory in Peru* (Liverpool, Inglaterra, 1999). Las haciendas y la capacidad empresarial jesuita se examinan en Nicholas P. Cushner, *Lords of the Land: Sugar, Wine and Jesuit Estates of Colonial Peru, 1600-1767* (Albany, NY, 1980); y *Farm and Factory: The Jesuits and the Development of Agrarian Capitalism in Colonial Quito, 1600-1767* (Albany, NY, 1982). Véanse también las clásicas *Instrucciones para el manejo de las haciendas jesuitas del Perú (siglos XVII-XVIII)*, de Pablo Macera (Lima, 1966), así como otros estudios de la industria azucarera en sus *Trabajos de Historia*, 4 vols. (Lima, 1977).

Las fuentes sobre la historia de la Iglesia son Brian R. Hamnett, «Church Wealth in Peru: Estates and Loans in the Archdiocese of Lima in the Seventeenth Century» *Jahrbuch*, 10 (1973), 113-132; Antonine Tibesar, *Franciscan Beginnings in Colonial Peru* (Washington, DC, 1953; hay edición en español); y Luis Martín, *The Intellectual Conquest of Peru: The Jesuit College of San Pablo, 1568-1767* (Nueva York, 1968).

Un buen examen de las relaciones entre Iglesia y Estado es el de Margaret E. Crahan, «Civil Ecclesiastical Relations in Hapsburg Peru», *Journal of Church and State* 20: 1 (invierno, 1978), 93-111.

La vida de Santa Rosa de Lima ha recibido considerable atención: Luis Millones, *Una partecita del cielo* (Lima, 1993); Fernando Iwasaki Cauti, «Mujeres al borde de la perfección: Rosa de Santa María y las alumbradas de Lima», *HAHR* 73: 4 (noviembre, 1993), 581-613; y Luis Miguel Glave, «Santa Rosa de Lima y sus espinas: la emergencia de mentalidades urbanas de crisis y la sociedad andina (1600-1630)», en *Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano*, vol. 1, editado por C. García Ayluardo y M. Ramos Medina (Ciudad de México, 1993), 53-70. Este último fue ampliado y convertido en libro: *De Rosa y espinas: economía, sociedad y mentalidades andinas, siglo XVII* (Lima, IEP, 1998). Véase también Teodoro Hampe Martínez, *Santidad e identidad criolla: estudio del proceso de canonización de la Santa Rosa* (Lima, 1998). Acaba de publicarse Frank Graziano, *Wounds of Love: The Mystical Marriage of Santa Rosa de Lima* (Nueva York, 2003).

Acerca de San Martín de Porras, véase Iwasaki Cauti, «Fray Martin de Porras: santo, ensalmador y sacamuelas», *CLAHR* 3: 1-2 (1994), 159-184; y José Antonio del Busto, *San Martín de Porras* (Lima, 1992). Otros estudios útiles sobre el clima religioso del Perú colonial son Armando Nieto, *Francisco del Castillo, el apóstol de Lima* (Lima, 1992); Maria Emma Mannarelli, *Pecados públicos* (Lima, 1993); y Nancy Van Deusen, *Dentro del cerco de los muros: el recogimiento de la época colonial* (Lima, 1987), así como sus recientes artículos, «Defining the Sacred and the Worldly: *Beatas* and *Recogidas* in Late Seventeenth-Century Lima», *CLAHR* 6: 4 (octubre, 1997), 441-477; y «Determining the Boundaries of Virtue: The Discourse of *Recogimiento* among Women in Seventeenth-Century Lima», *Journal of Family History* 22: 4 (octubre, 1997), 373-389; y también su libro, *Between the Sacred and the Wordly: The Institucional and Cultural Practice of Recogimiento in Colonial Lima* (Stanford, 2001).

Los desarrollos intelectuales y culturales del virreinato se encuentran en Jacques Lafaye, «Literature and Intellectual Life in Colonial Spanish America», en *CHLA*, 2, (1984) 663-704; hay edición en español. La evolución del nacionalismo criollo se desarrolla en el brillante estudio de D.A. Brading, *The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots and the Liberal State, 1492-1867* (Cambridge, Inglaterra, 1991; hay edición en español), que compara la búsqueda criolla de identidad en los virreinatos de Nueva España y Perú. Bernard Lavallé examina, en el mismo estilo pero para el Perú, *Las promesas ambiguas: criollismo colonial en los Andes* (Lima, 1993). La estructura y función de las ceremonias y fiestas coloniales, que fueron un importante medio de control con que unir a una heterogénea población colonial, han sido exploradas innovadoramente por Juan Carlos Estenssoro Fuchs en *Música y sociedad coloniales: Lima 1680-1830* (Lima, 1989), así como en otros artículos. Véase también el importante estudio de Thierry Saignes, «Indian Migration and Social Change in Seventeenth-Century Charcas», en *Ethnicity, Markets, and Migration in the Andes: At the Crossroads of History and Anthropology*, editado por

Brooke Larson y Olivia Harris, con la colaboración de Enrique Tandeter (Durham, NC, 1995), 167-195.

J.G. Varner tiene una biografía de *El Inca: The Life and Times of Garcilaso de la Vega, 1539-1616* (Austin, 1968), autor de los *Comentarios reales de los Incas*. Del mismo modo, *Guamán Poma: Writing and Resistance in Colonial Peru* (Austin, 1986), de Rolena Adorno, analiza cuidadosamente la obra del autor de la *Carta al rey*. Un estudio sumamente provocador e influyente es el de Manuel Burga, *Nacimiento de una utopía: muerte y resurrección de los Incas* (Lima, 1987). Para la escuela de pintura cuzqueña véase Teresa Gisbert, *Iconografía y mitos indígenas en el arte* (La Paz, 1980).

Algunas colecciones documentales importantes para este periodo son Roberto Levillier (ed.), *Gobernantes del Perú: cartas y papeles, siglo XVI*, 14 vols. (Madrid, 1921-1926), y Lewis Hanke (ed.), con Celso Rodríguez, *Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria. Perú*, 5 vols. (Madrid, 1978-1979).

Siglos XVIII y XIX (hasta 1830)

Un excelente examen global de las reformas borbónicas es el de David Brading, «Bourbon Spain and Its American Empire», en *CHLA*, 1, (1984) 389-440. John R. Fisher ha escrito extensamente sobre el periodo. Véase su *Commercial Relations between Spain and Spanish America in the Era of Free Trade, 1778-1796* (Liverpool, Inglaterra, 1985); «Soldiers, Society, and Politics in Spanish America, 1750-1821», *Latin American Research Review* (*LARR*) 17: 1 (1982); y *Government and Society in Colonial Peru: The Intendant System, 1784-1814* (Londres, 1970; hay edición en español), así como numerosos otros artículos. La versión clásica del impacto perturbador que la creación del Virreinato de Buenos Aires tuvo en Lima es de Guillermo Céspedes del Castillo, *Lima y Buenos Aires* (Sevilla, 1956). Véase también Carmen Parrón Salas, *De las reformas borbónicas a la república: el Consulado y el comercio marítimo de Lima, 1778-1821* (Murcia, España, 1995).

Para la participación criolla en las Audiencias véase Mark A. Burkholder y D.S. Chandler, *From Impotence to Authority: The Spanish Crown and the American Audiencias, 1787-1808* (Columbia, MO, 1977; hay edición en español); y de Mark A. Burkholder, *Politics of a Colonial Career: Jose Baquíjano and the Audiencia of Lima* (Albuquerque, NM, 1980). Manuel Marzal examina *La utopía posible: indios y jesuitas en la America colonial* (Lima, 1992). Para la influencia de la Ilustración véase Pablo Macera, *Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional* (Lima, 1956); y Guillermo Lohmann Villena, «Criticismo e ilustración como factores formativos de la conciencia del Perú en el siglo XVIII», en *Problemas de la formación del Estado y de la nación en hispanoamerica*, editado por Inge Buisson *et ál.* (Bonn, 1994), 15-31.

El punto de partida para la economía en el siglo XVIII es el excelente volumen editado por Nils Jacobsen y Hans-Jurgen Pühle, *The Economies of Mexico and Peru during the Late Colonial Period, 1760-1810* (Berlín, 1986). El examen global

de Hispanoamérica de Mörner, «The Rural Economy and Society», también cubre el Perú en el siglo XVIII. Alberto Flores-Galindo presenta un rico análisis de la economía y la sociedad en Lima en *Aristocracia y plebe, Lima, 1760-1830* (Lima, 1984). Véase también Ileana Vega de Cáceres, *Economía rural y estructura social en las haciendas de Lima durante el siglo XVIII* (Lima, 1996). Jorge Juan y Antonio de Ulloa reportan su misión de diez años al virreinato del Perú en *Discourse and Political Reflections on the Kindgoms of Peru..*, editado por John J. TePaske (Norman, OK, 1978 [1735; edición original en español]). D.G. Browning y D.J. Robinson examinan «The Origin and Comparability of Peruvian Population Data: 1776-1815», en *Jahrbuch*, 14 (1977).

John R. Fisher, *Silver Mines and Silver Miners in Colonial Peru, 1776-1824* (Liverpool, Inglaterra, 1977), es la fuente clásica sobre la minería colonial tardía; hay edición en español del IEP, 1977. Un estudio más reciente es el de Enrique Tandeter, *Coercion and Market: Silver Mining in Colonial Potosi, 1692-1826* (Albuquerque, NM, 1993; hay edición en español). Véase también su «Población y economía en los Andes (siglo XVIII)», *Revista Andina* 13: 1 (julio, 1995), 7-22, y otros artículos. Carlos Contreras examina *Los mineros y el rey: los Andes del Norte, Hualgayoc, 1770-1825* (Lima, 1995). Véase también Rose Marie Buechler, *The Mining Society of Potosi, 1776-1810* (Syracuse, NY, 1981). Magdalena Chocano analiza el *Comercio en Cerro de Pasco a fines de la época colonial* (Lima, 1982).

Sobre los precios consúltense las contribuciones de Kendall W. Brown (Arequipa), Enrique Tandeter y Nathan Wachtel (Potosí y Charcas), y Brooke Larson (Cochabamba) en Lyman L. Johnson y Enrique Tandeter (eds.), *Essays on the Price History of Eighteenth-Century Latin America* (Albuquerque, NM, 1990). Véase también Pablo Macera, *Los precios del Perú, siglos XVI-XIX: fuentes* (Lima, s.f.). Carlos Sempat Assadourian y sus colegas plantean la hipótesis de que la expansión de la minería en el Alto y Bajo Perú después de 1750, fue al mismo tiempo un reflejo y un estímulo de la expansión general de la economía en el tardío periodo colonial. Véase *Minería y espacio económico en los Andes: siglos XVI-XX* (Lima, IEP 1980).

Dos importantes estudios recientes sobre las finanzas y el crédito peruano son Herbert S. Klein, *The American Finances of the Spanish Empire: Royal Income and Expenditures in Colonial Mexico, Peru and Bolivia, 1680-1809* (Albuquerque, NM, 1998); y Alfonso W. Quiroz, *Deudas olvidadas: instrumentos de crédito en la economía colonial peruana, 1750-1820* (Lima, 1993). Estudios anteriores son los de Javier Tord Nicolini, *Las cajas reales y la sociedad colonial peruana, 1700-1820* (Lima, 1983); y Javier Tord Nicolini con Carlos Lazo, *Hacienda, comercio, fiscalidad y luchas sociales (Perú colonial)* (Lima, 1981).

Una serie de importantes estudios regionales y locales revelan aspectos de la economía y la sociedad en el siglo XVIII. Nils Jacobsen analiza la economía y la sociedad del altiplano sur en el «largo» siglo XIX en *Mirages of Transition: The Peruvian Altiplano, 1780-1930* (Berkeley, CA, 1993). Kendall W. Brown estudia Arequipa en *Bourbons and Brandy: Imperial Reform in Eighteenth-Century Arequipa* (Albuquerque, NM, 1986 [en español: IEP, 2008]). Cristóbal Aljovín de Losada, en «Los compradores

de temporalidades a fines de la colonia», *Histórica* 14: 2 (1990), 183-233, examina la venta de las haciendas jesuitas después de la expulsión de la orden en 1767, en tanto que Jorge Polo y La Borda trata los avatares comerciales de la antigua hacienda jesuita de Pachachaca en *La hacienda Pachachaca: autoabastecimiento y comercialización (segunda mitad del siglo XVIII)* (Lima, 1980). Magnus Mörner examina la sociedad y la producción rurales en Cuzco en *Perfil de la sociedad rural del Cuzco a fines de la colonia* (Lima, 1978). Olinda Celestino y Albert Meyers, en *Las cofradías en el Perú: región central* (Fráncfort, 1981), sugieren que el número creciente de disputas por tierras indica una presión creciente de la población sobre las mismas y una relación tierrahombre en vías de deterioro.

Para la estructura económica de Lima véase también M.M. Haitin, Late Colonial Lima: Economy and Society in an Era of Reform and Revolution (*tesis de Ph.D.*, Universidad de California, Berkeley, CA, 1983); y «Prices, the Lima Market and the Agricultural Crisis of the Late Eighteenth Century in Peru», *JLAS* 22 (1985), 167-198. O. Febres Villaroel estudia «La crisis agrícola en el Perú en el último tercio del siglo XVIII» *Revista Histórica* 27 (1964), 102-199; y A. Moreno Cebrián examina *El corregidor de indios y la economía peruana en el siglo XVIII* (Madrid, 1977). Otros estudios regionales ya citados para el periodo colonial anterior extienden su análisis hasta el siglo XVIII. Entre ellos están Glave y Remy, *Estructura agraria*; Cushner, *Lords of the Land*; Spalding, *Huarochirí*; Ramírez, *Provincial Patriarchs*; Macera, *Trabajos de Historia*; y Larson, *Colonialism*. Véase también Scarlett O'Phelan Godoy e Yves Saint-Geours (eds.), *El norte en la historia regional, siglos XVIII-XIX* (Lima y Piura, 1998).

A lo largo de los años, el estallido de rebeliones indias y de castas en el siglo XVIII, que culminó con la rebelión de Túpac Amaru de 1780, ha producido una bibliografía sustancial y unas controversias y debates considerables. Sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa, los estudios más recientes son los de Arturo Enrique Torre y López, «Juan Santos: ¿el invencible?», *Histórica* 17: 2 (1993), 239-266; y Alonso Zarzar, *Apo Capac Huayna, Jesús Sacramentado* (Lima, 1989). La mejor versión en inglés es la de Michael F. Brown y Eduardo Fernández, *War of the Shadows: The Struggle for Utopia in the Peruvian Amazon* (Berkeley, CA, 1991).

Hay cuatro interpretaciones fundamentales de la Gran Rebelión de Túpac Amaru, que estalló en el Cuzco en 1780: como un movimiento precursor de la independencia; como un renacimiento inca y un nacionalismo neoinca; como una forma tradicional de negociación política en pos de la reforma del Estado colonial; y como un movimiento anticolonial y protonacionalista. El análisis más reciente es el de Ward Stavig, *The World of Tupac Amaru: Conflict, Community, and Identity in Colonial Peru* (Lincoln, NE, 1999). Véase también Charles F. Walker, *Smoldering Ashes: Cuzco and the Creation of Republican Peru, 1780-1840* (Durham, NC, 1999; hay edición en español); y su compilación *Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII* (Cuzco, 1996), que incluye importantes contribuciones de Estenssoro Fuchs sobre las ideologías populares, y de Sergio Serulnikov sobre la forma en que los campesinos del Alto Perú comprendían

un orden justo. De este último véase también su «Disputed Images of Colonialism: Spanish Rule and Indian Subversion in Northern Potosi, 1777-1780», *HAHR* 76: 2 (mayo, 1996), 189-226, que abre un nuevo espacio en la interpretación de las rebeliones andinas del siglo XVIII, y que podría ser aplicable a los sucesos del Bajo Perú.

Un importante examen más antiguo es el de Steve J. Stern (ed.), *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World: 18th to 20th Centuries* (Madison, WI, 1987; hay edición en español del IEP). Alberto Flores-Galindo critica las diversas interpretaciones en «Las revoluciones tupamaristas: temas en debate», *Revista Andina* 7: 1 (1989), 279-287; en tanto que Jean Piel se pregunta «Cómo interpretar la rebelión panandina de 1780-1783», en *Tres levantamientos populares: Pugachov, Tupac Amaru, Hidalgo*, editado por Jean Meyer (Ciudad de México, 1992), 71-80. Otros volúmenes editados que contienen contribuciones importantes son Flores-Galindo, *Tupac Amaru II-1780: antología* (Lima, 1976), que incluye el fecundo estudio de John Rowe, «El movimiento nacional inca del siglo XVIII», publicado originalmente en 1954; Flores-Galindo, *Túpac Amaru y la Iglesia: antología* (Cuzco, 1983); *Actas del coloquio internacional: Túpac Amaru y su tiempo* (Lima, 1982); y Luis Durand Flórez (ed.), *La revolución de los Túpac Amaru: antología* (Lima, 1981).

Las causas de los levantamientos también las explora Scarlett O'Phelan Godoy en *La gran rebelión en los andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari* (Cuzco, 1995), *Rebellions and Revolts in Eighteenth-Century Peru and Upper Peru* (Colonia, Alemania, 1985), *Un siglo de rebeliones anticoloniales. Peru y Bolivia 1700-1783* (Lima, 1988), así como en numerosos artículos. Su último libro examina la decadencia de los *curacas* en *Kurakas sin sucesiones*. Véase también Ward Stavig, «Ethnic Conflict, Moral Economy, and Population in Rural Cuzco on the Eve of the Thupa Amaro II Rebellion», *HAHR* 68: 4 (1988), 737-770; John Rowe, «Genealogía y rebelión en el siglo XVIII: algunos antecedentes de la sublevación de Jose Gabriel Thupa Amaru», *Histórica* 6: 1 (julio, 1982), 65-85; y David Cahill, Crown, Clergy and Revolution in Bourbon Peru: The Diocese of Cuzco, 1780-1814 (*tesis de Ph.D.*, Universidad de Liverpool, 1984), así como otros artículos suyos. Otros dos estudios importantes son Jan Szeminski, *La utopía tupamarista* (Lima, 1984); y Jürgen Golte, *Repartos y rebeliones. Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial* (Lima, 1980).

Leon G. Campbell, *The Military and Society in Colonial Peru* (Filadelfia, 1978), examina la supresión de la rebelión por parte de las fuerzas realistas. Véase también su «Recent Research on Andean Peasant Revolts, 1750-1820», *LARR* 14: 1 (1977), 3-49, y otros artículos. Otras obras útiles son las de José Antonio del Busto, *José Gabriel Túpac Amaru antes de su rebelión* (Lima, 1981); Luis Durand Flórez, *Independencia e integración en el plan poíitico de Túpac Amaru* (Lima, 1973), y su compilación *Colección documental del bicentenario de la revolución emancipadora de Túpac Amaru,* 5 vols. (Lima, 1980-1982). La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú publicó la *Colección documental de la independencia del Perú* en 30 tomos (Lima, 1971-1975), que incluye el tomo

2, vols. 1-4, *La rebelión de Túpac Amaru* (Lima, 1971). Kathryn Burns, «Amor y rebelión en 1782: el caso de Mariano Túpac Amaru y María Mejía», *Histórica* 16: 2 (1992), 131-176, descubre un interesante episodio secundario.

Las raíces del continuo descontento y rebeldía nativa tras la Gran Rebelión se examinan en Nuria Sala i Vila, *Y se armó el tole tole: tributo indígena y movimientos sociales en el virreinato del Perú, 1784-1814* (Lima, 1996). Ella muestra cómo el remozamiento del sistema del tributo por parte de la corona después de la rebelión de Túpac Amaru, ayudó a minar las comunidades indias al permitir que personas ajenas a ellas controlaran su cobro. Varios trabajos narran estas rebeliones posteriores, en especial las del Cuzco de 1805 y 1814. Véase, por ejemplo, Luis Durand Flores, *El proceso de independencia en el sur andino: Cuzco y La Paz 1805* (Lima, 1993); el estudio sumamente original de Alberto Flores-Galindo, *Buscando un Inca: identidad y utopía en los Andes* (Lima, 1987); y John Fisher, «Regionalism and Rebellion in Late Colonial Peru: The Aguilar-Ubalde Conspiracy of 1805», *Biblioteca Americana* 1: 1 (1982), 44-59. La segunda rebelión es el tema de Víctor Peralta Ruiz, «Elecciones, Constitucionalismo y Revolución en el Cuzco, 1809-1815», en Carlos Malamud (ed.), *Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, 1830-1930*, 2 vols. (Madrid, 1995), 83-112; Sala i Vila, «La participación indígena en la rebelión de los Angulo y Pumacahua, 1814-1816», en Pilar García Jordán y Miguel Izard (eds.), *Conquista y resistencia en la historia de América* (Barcelona, 1992), 273-288; David P. Cahill, «Una visión andina: el levantamiento de Ocongate de 1815», *Histórica* 12: 2 (diciembre, 1988), 133-159; y Cahill con Scarlett O'Phelan Godoy, «Forging Their Own History: Indian Insurgency in the Southern Peruvian Sierra, 1815», *BLAR* 11: 2 (1992; hay edición en español), 126-167. Un estudio más antiguo es el de Jorge Cornejo Bouroncle, *Pumacahua: la revolución del Cuzco de 1814, estudio documentado* (Cuzco, 1974). Véase también Luis Durand Flórez, *Criollos en conflicto: Cuzco despues de Túpac Amaru* (Lima, 1985).

Como sería de esperar, la lucha por la independencia ha producido una bibliografía considerable. Dado que Perú formó parte del proceso independentista mayor de toda Sudamérica, los investigadores debieran comenzar con el reciente y excelente análisis de Brian R. Hamnett, «Process and Pattern: A Reexamination of the Ibero-American Independence Movements, 1808-1826», *JLAS* 29: 2 (mayo, 1997), 279-328. Véase también David Bushnell y Neill Macaulay, *The Emergence of Latin America in the Nineteenth Century* (Nueva York, 1988, 1994; hay edición en español); el incisivo estudio de George Reid Andrews, «Spanish American Independence: A Structural Analysis», *Latin American Perspectives* 12: 1 (invierno, 1985), 105-132; y John Lynch *The Spanish American Revolutions, 1808-1826* (Londres, 1973; hay edición en español). Para el desarrollo y el significado del nacionalismo criollo véase Brading, *The First America*, Lavallé, *Las promesas ambiguas*; y Cecilia Méndez, *Incas sí, indios no: apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Peru* (Lima, 1993). Méndez es la investigadora más reciente (véase Ramos y Serulnikov) en cuestionar la importancia de la utopía andina (Flores-Galindo y Burga) como una causa principal de la rebelión nativa. En contraste con los trabajos de estos últimos,

ella la analiza como un discurso intelectual que refleja las aspiraciones nacionalistas de los intelectuales peruanos, antes que como una versión confiable de la mentalidad o las aspiraciones colectivas del campesinado nativo andino.

La versión más detallada sobre el Perú en inglés es la de Timothy E. Anna, *The Fall of the Royal Government in Peru* (Lincoln, NE, 1979; hay una versión en español del IEP), que sostiene que la decadencia económica del país después de 1812 llevó al colapso del régimen monárquico. El estudio de Anna, que examina la rebelión fundamentalmente desde la perspectiva de Lima, se complementa con Walker, *Smoldering Ashes*. Las dimensiones provinciales se examinan en John Fisher, «Royalism, Regionalism, and Rebellion in Colonial Peru, 1808-1815», *HAHR* 59: 2 (1979), 232-257.

La idea del «nacionalismo indígena» fue promovida por la publicación que el gobierno de Velasco Alvarado (1968-1975) hiciera de la *Colección documental*. Se trata de una amalgama de documentos oficiales, periódicos de la época, escritos de ideólogos, memorias y relaciones de viajeros. Para la versión criolla véase Félix Denegri Luna, Armando Nieto Vélez, S.J., y Alberto Tauro, *Antología de la independencia del Perú* (Lima, 1972), y *Quinto Congreso Internacional de Historia de América*, 5 vols. (Lima, 1972), ambos publicados por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Peru.

Una escuela marxista revisionista, liderada por Heraclio Bonilla (ed.) en su *La independencia en el Perú* (Lima, 1972, 1981), cuestionó esta postura. Ellos sostienen que la independencia peruana fue esencialmente obra de fuerzas externas, y que le faltó un compromiso efectivo de parte de la élite, una amplia participación popular y todo sentido de conciencia nacional. Esto contribuyó a un periodo postindependentista caracterizado por un Estado débil, la persistencia de las estructuras social y económica tradicionales, y el surgimiento de la dependencia externa del imperialismo británico. Jorge Basadre también se unió al debate en *El azar en la historia y sus límites* (Lima, 1973), en tanto que Scarlett O'Phelan Godoy cuestiona «El mito de la independencia concedida: los programas políticos del siglo XVIII y del temprano siglo XIX en el Perú (1730-1814)», en *Histórica.*

Entre otros estudios útiles tenemos los de John R. Fisher, Allan J. Kuethe y Anthony McFarlane (eds.), *Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru* (Baton Rouge, LA, 1990); Alberto Flores-Galindo (comp.), *Independencia y revolución (1780-1840)*, 2 vols. (Lima, 1987); y Brian R. Hamnett, *Revolución y contrarrevolución en México y el Perú: liberalismo, realeza y separatismo (1808-1824)* (Ciudad de México, 1978).

La participación popular en la lucha por la independencia es el tema de numerosos artículos y libros: Peter Guardino, «Las guerrillas y la independencia peruana: un ensayo de interpretación», *Pasado y Presente* 2: 3 (1989), 101-117; Heraclio Bonilla, «Bolívar y las guerrillas indígenas del Perú», *Cultura: Revista del Banco Central del Ecuador* (mayo-agosto, 1983), 81-95; Ezequiel Beltrán G., *Las guerrillas de Yauyos en la emancipación del Perú, 1820-1824* (Lima, 1977); y

Raúl Rivera Serna, *Los guerrilleros del centro en la emancipación peruana* (Lima, 1958).

La independencia y el siglo XIX

Largo tiempo conocido como el «siglo olvidado», el XIX está recibiendo más atención de los historiadores. Un excelente enfoque revisionista es el de Peter Guardino y Charles Walker, «The State, Society, and Politics in Peru and Mexico in the Late Colonial and Early Republican Periods», en *Latin American Perspectives* 19: 2 (primavera, 1992), 10-43. Varios historiadores debatieron el problema de la *Tradición y modernidad en los Andes* en el siglo XIX, compilado por Henrique Urbano (Cuzco, 1992). El contexto latinoamericano mayor se encuentra en Frank Safford, «Politics, Ideology and Society in Post-Independence Spanish America, 1821-1870», en *CHLA*, 3 (1985), 347-421; hay edición en español. Un útil examen global es Heraclio Bonilla, «Peru and Bolivia from Independence to the War of the Pacific», en *CHLA*, 3, (1985) 539-582; hay edición en español. Sigue siendo valiosa la *A History of Peru*, del anticuario inglés Clements Markham (Chicago, 1892).

Dos ensayos interpretativos anteriores sobre la formación y el papel del Estado son Ronald H. Berg y Frederick Stirton Weaver, «Towards a Reinterpretation of Political Change in Peru during the First Century of Independence», *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* (*JISWA*) 20: 1 (febrero, 1978), 69-84; y Stephen Gorman, «The State, Elite and Export in Nineteenth-Century Peru», *JISWA* 21: 3 (agosto, 1979), 395-418. Para revisiones historiográficas véase Nelson Manrique, «La historiografia peruana sobre el siglo XIX», *Revista Andina* 9: 1 (julio, 1991), 241-259; y Christine Hünefeldt, «Viejos y nuevos temas de la historia económica del siglo XIX», en *Las crisis económicas en la historia del Perú*, editado por Heraclio Bonilla (Lima, 1986), 33-60. Pedro Planas pasa revista a los enfoques anteriores y posteriores de *La descentralización en el Perú republicano (1821-1998)* (Lima, 1998).

La idea de un Estado colapsado que abrió el camino a la penetración del imperialismo extranjero fue desarrollada por la escuela de la dependencia, en particular por Bonilla, «Continuidad y cambio en la organización politica del Estado en el Perú independiente», en *Independencia y revolución: 1780-1840*, editado por Alberto Flores-Galindo (Lima, 1987), 269-294; y Bonilla, *Metáfora y realidad de la independencia en el Perú* (Lima: IEP, 2001). Véase también John Fisher, «La formación del estado peruano (1808-1824) y Simón Bolivar», en *Problemas de la formación del estado*, 465-480; Flores-Galindo, «El militarismo y la dominación británica (1825-1845)», en C. Araníbar, H. Bonilla *et al.*, *Nueva historia general del Perú* (Lima, 1979), 107-123; y Celia Wu Brading, *Generals and Diplomats: Great Britain and Peru, 1820-1840* (Cambridge, Inglaterra, 1991; hay edición en español).

En «Continuidad y cambio», Bonilla sostiene que las estructuras coloniales persistieron hasta bien entrado el siglo XIX. El mismo tema fue desarrollado por Julio

Cotler, *Clases, estado y nación en el Perú* (Lima, 1978); y Jesús Chavarría, «The Colonial Heritage of National Peru: An Overview», *Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* 25 (1978), 37-49. Véase también el provocador ensayo de Alberto Flores-Galindo, *Aristocracia y Plebe, Lima 1760-1830* (Lima, 1984), sobre las relaciones de clase en la transición de colonia a república.

Según la interpretación tradicional del desenfrenado caudillismo post independentista, las ideas políticas se redujeron a estériles debates en los salones de la élite urbana y cosmopolita, y tuvieron poco impacto en los resultados políticos. Estas tempranas divisiones ideológicas están bien cubiertas en Gonzalo M. Portocarrero, «Conservadurismo, liberalismo y democracia en el Perú del siglo XIX», en *Pensamiento político peruano* (Lima, 1987), 85-98; y Daniel M. Gleason, «Anti-Democratic Thought in Early Republican Peru: Bartolomé Herrrera and the Liberal-Conservative Ideological Struggle», *The Americas* 38 (1981), 205-217. Véase también Hugo Garavito Amézaga, *El Perú liberal: partidos e ideas políticas de la Ilustración a la república aristocrática* (Lima, 1989); y el importante estudio de Fernando de Trazegnies, *La idea del derecho en el Perú republicano del siglo XIX* (Lima, 1980), que examina los cambios en el derecho en el periodo posterior a la independencia y su evolución a lo largo del siglo XIX.

La Iglesia en la temprana república es examinada por Klaiber, *Religion and Revolution in Peru, 1824-1976* (Notre Dame, IN, 1977; hay edición en español). Una versión más detallada es la de Pilar García Jordán, *Iglesia y poder en el Perú contemporáneo 1821-1919* (Cuzco, s.f.), y «Estado moderno, Iglesia y secularización en el Perú contemporáneo (1821-1919)», *Revista Andina* 6: 2 (diciembre, 1988). Ambos ven las relaciones entre la Iglesia y el Estado liberal como relativamente benignas debido a las necesidades mutuas de mantener su poder.

Un trabajo pionero sobre este periodo fue efectuado por el historiador económico Paul Gootenberg, quien percibe detrás de los conflictos caudillistas algo más que simples luchas personalistas por el poder. Su meticuloso y revisionista *Between Silver and Guano: Commercial Policy and the State in Postindependence Peru* (Princeton, NJ, 1989; hay edición en español), es un modelo de análisis histórico sobre cuestiones de comercio y política. Asimismo en su fecundo *Smoldering Ashes*, Walker se concentra en el programa ignorado de Agustín Gamarra, una figura caudillista dominante en la temprana república, y también atribuye un mayor grado de voluntad a las clases subalternas en la política posterior a la independencia, a las que, sin embargo, en última instancia se negó la ciudadanía en la nueva república. También se concentra en el Cuzco la tesis de Thomas Kruggeler, Unreliable Drunkards or Honorable Citizens? Artisans in Search of Their Place in Cuzco Society (1825-1930) (*tesis de Ph.D.*, Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, 1993).

Otro estudio revisionista de la dinámica del caudillismo es el de Cecilia Méndez, Rebellion without Resistance: Huanta's Monarchist Peasants in the Making of the Peruvian State, Ayacucho 1825-1850 (*tesis de Ph.D.*, SUNY, Stony Brook, 1996). Ya

antes Patrick Husson, en *De la guerra a la rebelión (Huanta, siglo XIX)* (Lima, 1992), había postulado que esta revuelta monarquista enfrentó a la vieja élite provincial aliada con el campesinado nativo, con los grupos sociopolíticos emergentes que representaban la nueva república. Véase también Heraclio Bonilla, «La oposición de los campesinos indios a la república peruana: Iquicha, 1827», en *Los pueblos campesinos de las Américas: etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX*, editado por Bonilla y Amado A. Buerrero Rincón (Santander, España, 1996), 301-313.

Gootenberg inició el estudio de los precios en este periodo en su «Carneros y Chuño: Price Levels in Nineteenth-Century Peru», *HAHR* 70: 1 (febrero, 1990; hay edición en español), 1-57. Sus otros trabajos son «North-South: Trade Policy, Regionalism and Caudillismo in Post-Independence Peru», *JLAS* 25: 2 (mayo, 1991), 273-308; «Beleaguered Liberals: The Failed First Generation of Free Traders in Peru», en *Guiding the Invisible Hand: Economic Liberalism and the State in Latin American History*, editado por Joseph Love y Nils Jacobsen (Nueva York, 1988; hay edición en español del artículo), 63-97; y «The Social Origins of Protectionism and Free Trade in Nineteenth Century Lima», *JLAS* 14 (1982), 329-58; hay edición en español. Véase también su *Tejidos y harinas, corazones y mentes: el imperialismo norteamericano del libre comercio en el Perú, 1825-1840* (Lima, 1989); y «Paying for Caudillos: The Politics of Emergency Finance in Peru, 1820-1845», en *Liberals, Politics and Power: State Formation in Nineteenth-Century Latin America*, editado por V. Peloso y B. Tenenbaum (Athens, GA, 1996), 134-165.

Se han publicado importantes estudios económicos y cuantitativos adicionales sobre la temprana república. En *Mirages of Transition*, Nils Jacobsen sostiene, como otros autores, que la continuidad, y no el cambio, fue el rasgo característico de un proceso de modernización conservadora durante el «largo» siglo XIX. Otros estudios valiosos son los de Shane Hunt, «Price and Quantum Estimates of Peruvian Exports, 1830-1962», discussion paper (Princeton, NJ, 1973); Heraclio Bonilla, «La coyuntura comercial del siglo XIX en el Perú», *Desarrollo Económico* 12: 46 (julio-septiembre, 1972), 305-331; y Bonilla, *Gran Bretaña y el Perú. Los mecanismos de un control económico* (Lima, 1977). El impacto adverso del comercio libre en el Cuzco fue examinado por Bonilla, Lía del Río y Pilar Ortiz de Zevallos, «Comercio Libre y crisis de la economía andina: el caso de Cuzco», *Histórica* 2: 1 (1978). Sin embargo, el reciente trabajo de Kruggler cuestiona esta imagen dependentista. William L. Lofstrom prefigura los intereses económicos estadounidenses en Perú, en *Paita: Outpost of Empire: The Impact of the New England Whaling Fleet on the Socioeconomic Development of Northern Peru, 1832-1865* (Mystic, CT, 1997); hay edición en español.

El problema de los préstamos y la deuda extranjera lo examina Carlos Marichal en su libro, *A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to Great Depression, 1820-1930* (Princeton, NJ, 1989; hay versión en español); y Carlos Palacios Moreyra, *La deuda anglo-peruana, 1822-1890* (Lima, 1983). Véase también W.M. Matthew, «The First Anglo-Peruvian Debt and Its Settlement, 1822-49», *JLAS* 2 (1970), 81-98.

El trabajo más importante sobre la minería es el de José Deustua, *The Bewitchment of Silver: The Social Economy of Mining in Nineteenth-Century Peru* (Athens, OH, 1999). Otros dos estudios importantes sobre la minería en este periodo son los de José Deustua, *La minería peruana y la iniciación de la república, 1820-1840* (Lima, 1986); y Carlos Contreras, *Mineros y campesinos en los Andes: mercado laboral y economía campesina en la sierra central, siglo XIX* (Lima, 1987). Véase también Deustua, «Routes, Roads and Silver Trade in Cerro de Pasco, 1820-1860», *HAHR* 74: 1 (1994), 1-31; y «Mining Markets, Peasants, and Power in Nineteenth-Century Peru», *LARR* 29: 1 (1994), 29-54, que, al igual que Assadourian para el periodo colonial, analiza las ramificaciones de la minería de la plata en el mercado interno de la temprana república; lo mismo hace Nelson Manrique, *Mercado interno y región: la sierra central, 1820-1930* (Lima, 1987).

Pablo Macera cubre una amplia gama de temas agrarios, económicos y sociales en sus *Trabajos de Historia*, 4 vols. (Lima, 1977). Véanse, por ejemplo, «Feudalismo colonial americano»; «Algodón y comercio exterior peruano en el siglo XIX», en el vol. 3; y «Las plantaciones azucareras andinas, 1821-1875», en el vol. 4. Jean Piel también escribió extensamente sobre asuntos agrarios en *Capitalisme agraire au Pérou*, 2 vols. (París, 1975-1983; hay edición en español). La mejor fuente sobre el comercio de lanas es Jacobsen, *Mirages*. Véase también Rory Miller, «The Wool Trade of Southern Peru, 1850-1915», *Ibero-Amerikanisches Archiv* 8 (1982), 297-311; y W.S. Bell, *An Essay on the Peruvian Cotton Industry, 1825-1920* (Liverpool, Inglaterra, 1985).

Las comunidades de indios son tratadas por Mark Thurner en *From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nationmaking in the Andes* (Durham, NC, 1997); y «'Republicanos' and 'la Comunidad de Peruanos': Unimagined Political Communities in Postcolonial Andean Peru», *JLAS* 27: 2 (mayo, 1995; hay versión en español), 291-318. Nils Jacobsen examina el «Liberalism and Indian Communities in Peru, 1821-1920», en *Liberals, the Church and Indian Peasants*, editado por R.H. Jackson (Albuquerque, NM, 1997), 123-170. Véase también Luis Miguel Glave, *Vida, símbolos y batallar* ; y Christine Hünefeldt, *Lucha por la tierra y protesta indígena, las comunidades indigenas del Perú entre colonia y república, 1800-1830* (Bonn, 1982). Otros artículos útiles son Henri Favre, «El mundo andino en tiempos de Bolívar: los asto entre 1780-1830», *Revista del Museo Nacional* 47 (1983-1985), 259-271; y «Bolívar y los indios», *Histórica* 10: 1 (julio, 1986), 1-17.

Tristan Platt esboza su modelo del Estado tributario en *Estado boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el norte de Potosí* (Lima, 1982). Dos intentos de aplicar este modelo al Perú son los de María Isabel Remy, «La sociedad local al inicio de la república: Cuzco, 1824-1850», *Revista Andina* 6: 2 (diciembre, 1988), 451-484; y Luis Miguel Glave, «Demografía y conflicto social: historia de las comunidades campesinas en los Andes del sur» (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo 23, 1988).

Víctor Peralta Ruiz examina cuidadosamente las finanzas estatales en el Cuzco en *En pos del tributo: burocracia estatal, élite regional y comunidades indígenas en*

el Cuzco rural, 1826-1854 (Cuzco, 1991). Él postula la existencia de un quid pro quo entre el Estado y las comunidades basado en el cobro continuo del tributo, mostrando al mismo tiempo cómo una emergente clase mestiza usó la burocracia provincial para ganar poder y prestigio en el campo. Las tempranas políticas fiscales están bien examinadas en Nils Jacobsen, «Taxation in Early Republican Peru, 1821-1851: Policy Making between Reform and Tradition», en *América Latina en la epoca de Simón Bolívar*, editado por Reinhard Liehr (Berlín, 1989), 324-330; Carlos Contreras, «Estado republicano y tributo indígena en la sierra central en la post-independencia», *Histórica* 13: 1 (julio, 1989), 9-44; y Christine Hünefeldt, «Poder y contribuciones: Puno, 1825-1845», *Revista Andina* 7: 2 (diciembre, 1989), 367-409.

Los desarrollos sociales en la temprana república también vienen recibiendo una atención creciente. El estudio demográfico de Gootenberg sobre la «Population and Ethnicity in Early Republican Peru: Some Revisions», *LARR* 3 (1991), 109-157; hay edición en español, revisa algunas de las propuestas de George Kubler (1952). Los trabajos clásicos sobre la esclavitud son los de Christine Hünefeldt, *Paying the Price of Freedom: Family and Labor among Lima's Slaves, 1800-1854* (Berkeley, CA, 1994) hay edición en español; y Carlos Aguirre, *Agentes de su propia libertad: los esclavos y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854* (Lima, 1993), ambos de los cuales atribuyen una mayor participación a los esclavos en el proceso de manumisión. Véase también el equilibrado estudio de Peter Blanchard, *Slavery and Abolition in Early Republican Peru* (Austin, TX, 1992), que interpreta la manumisión más como un resultado de la guerra civil de 1854-1855. Carlos Aguirre y Charles Walker (eds.) exploran los problemas de la criminalidad y la violencia social a lo largo del tiempo en *Bandoleros, abigeos y montoneros: criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII-XX* (Lima, 1990). Véase también Carlos Aguirre, «The Lima Penitentiary and the Modernization of Criminal Justice in Nineteenth-Century Peru», en *The Birth of the Penitentiary in Latin America: Essays on Criminology, Prison Reform, and Social Control, 1840-1940,* editado por Ricardo Salvatore y Aguirre (Austin, TX, 1996); y Christine Hünefeldt, «Cimarrones, bandoleros y milicianos: 1821», *Histórica* 3, 2 (1979), 71-88.

Los estudios de género y de las mujeres en el siglo XIX vienen recibiendo cada vez mayor atención. Véase Christine Hünefeldt, *Liberalism in the Bedroom: Quarreling Spouses in Nineteenth-Century Lima* (University Park, PA, 1999); Sarah C. Chambers, *From Subjects to Citizens: Honor, Gender and Politics in Arequipa, Peru, 1780-1854* (University Park, PA, 1999; hay edición en español); y Gertrude M. Yeager, «Women and the Intellectual Life of Nineteenth-Century Lima», *Inter-American Review of Bibliography* 40: 3 (1990), 361-393.

La era del guano (1840-80) ha sido objeto de una considerable atención y debates académicos a lo largo de los años. El ejemplo más reciente es el penetrante estudio de Paul Gootenberg, *Imagining Development: Economic Ideas in Peru's «Fictitious Prosperity» of Guano, 1840-1880* (Berkeley, CA, 1993; hay edición en español). Gootenberg es el primer historiador en mostrar que una sofisticada tradición de pensamiento «desarrollista» opositora compitió, durante la era

del guano, con la de los defensores del modelo predominantemente liberal de crecimiento hacia afuera. Véase también su *Between Silver and Guano*.

La mecánica del comercio guanero y el considerable grado de autonomía retenida por el gobierno peruano son desarrollados cuidadosamente en W.M. Matthew, *The House of Gibbs and the Peruvian Guano Monopoly* (Londres, 1981), así como varios otros artículos importantes, entre ellos «A Primitive Export Sector: Guano Production in Mid-Nineteenth-Century Peru», *JLAS* 9: 1 (1977). El economista Shane Hunt cuestiona la tesis de Jonathan Levin (1960) del enclave en «Growth and Guano in Nineteenth-Century Peru», en *The Latin American Economies: Growth and the Export Sector, 1830-1930*, editado por Roberto Cortés Conde y Shane Hunt (Nueva York, 1985), 255-319, que reemplaza su *Growth and Guano in NineteenthCentury Peru* (Princeton, NJ, 1973) [«Guano y crecimiento en el Perú del siglo XIX», *HISLA* 4 (1984), 35-92]. Véase también Cecilia Méndez, «La otra historia del guano: Perú 1840-1879», *Revista Andina* 5: 9 (1987), 7-46. La imagen dependentista fue desarrollada por Heraclio Bonilla en *Guano y burguesía en el Perú* (3ª ed., Quito, 1994); en esta reciente edición, Bonilla actualiza su tesis y responde a sus críticos. El intento hecho por el gobierno de pasar de la exportación de guano a la de nitratos lo analizan Robert Greenhill y Rory Miller en «The Peruvian Government and the Nitrate Trade, 1873-1879», *JLAS* 5: 1 (1973), 107-131.

El estudio clásico de la importación de trabajadores chinos para que reemplazaran a los esclavos negros luego de su emancipación es el de Watt Stewart, *Chinese Bondage in Peru: A History of the Chinese Coolie in Peru, 1849-1874* (Durham, NC, 1951; hay edición en español). El tema fue vuelto a examinar recientemente por Fernando de Trazegnies, *En el país de las colinas de arena: reflexiones sobre la inmigración china en el Perú del s. XIX*, 2 vols. (Lima, 1994); y Humberto Rodríguez Pastor, *Hijos del celeste imperio en el Perú (1850-1900): migración, agricultura, mentalidad y explotación* (Lima, 1989). Véase también H.E. Maude, *Slavers in Paradise: The Peruvian Labour Trade in Polynesia, 1862-1864* (Canberra, Australia, 1981).

El problema del guano y la deuda fue analizado por Alfonso W. Quiroz en su revisionista *La deuda defraudada: consolidación de 1850 y dominio económico en el Perú* (Lima, 1987). Véase también su importante *Domestic and Foreign Finance in Modern Peru, 1850-1950: Financing Visions of Development* (Pittsburgh, PA, 1993). En torno al guano y la formación del Estado véase Javier Tantaleán Arbulú, *Política económica financiera y la formación del Estado: siglo XIX* (Lima, 1983).

Watt Stewart es también el biógrafo del constructor de ferrocarriles *Henry Meiggs: Yankee Pizarro* (Durham, NC, 1946; hay versión en español). Para la importancia de los ferrocarriles y el desarrollo véase Carlos Contreras, «Mineros, arrieros y ferrocarril en Cerro de Pasco, 1870-1904», *HISLA* 4 (1984); Guido Pennano, «Desarrollo regional y ferrocarriles en el Perú», *Apuntes* 5: 9 (1979), 131-151; y Heraclio Bonilla, «El impacto de los ferrocarriles: algunas proposiciones», *Historia y Cultura* (1972), 93-120. El temprano desarrollo industrial se narra en Jorge M. Grieve, «El desarrollo de las industrias mecánicas en el Perú entre 1800 y 1880», *Historia y Cultura* 15 (1982), 23-69. Para la reinversión de las ganancias

del guano en la agricultura costeña véase Macera, «Las Plantaciones azucareras andinas»; Engelsen, «Social Aspects»; y Burga, *De la encomienda*. Florencia Mallon sugiere el impacto del guano en el desarrollo del comercio y la agricultura en la sierra central en *The Defence of Community in Peru's Central Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940* (Princeton, NJ, 1983); también lo hace Manrique en su libro *Mercado interno y región*. Véase también Manuel Burga, «La hacienda en el Perú, 1850-1930: evidencias y método», *Tierra y sociedad* (1978), 9-38.

Carmen Mc Evoy en su libro *La utopía republicana: ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919)* (Lima, 1997), basado en su tesis de la UCSD, cubre la historia política del siglo XIX y comienzos del XX en amplios trazos. Ella muestra cómo los civilistas, liderados por Manuel Pardo, superaron el legado autoritario de Ramón Castilla sólo para recaer nuevamente ellos mismos en los hábitos autoritarios. Véase también su *Un proyecto nacional en el siglo XIX: Manuel Pardo y su visión del Perú* (Lima, 1994). Los lectores deben asimismo consultar el excelente estudio de Ulrich Mucke, *Der Partido Civil in Peru* (Stuttgart, Alemania, 1998 [en español: IEP-IFEA, 2011]), que desarrolla un rico análisis de los mecanismos de gobierno, tanto en el Ejecutivo y el Legislativo, así como en el proceso electoral. Vincent Peloso examina los «Liberals, Electoral Reform, and the Popular Vote in Mid-Nineteenth Century Peru», en *Liberals, Politics, and Power,* 186-211. La imagen que la élite tenía de los indios fue analizada por Efrain Kristal, *The Andes Viewed from the City: Literacy and Political Discourse on the Indian in Peru 1848-1930* (Nueva York, 1987); hay edición en español.

Para la inmigración europea durante la era del guano véase Pilar García Jordán, «Reflexiones sobre el darwinismo social: inmigración y colonización, mitos de los grupos modernizadores peruanos, 1821-1919», *Bulletin de l'Institut Francais d'Études Andines* 21: 3 (1992), 961-975. La inmigración italiana se examina en Giovanni Bonfiglio, *Los italianos en la sociedad peruana* (Lima, 1993); y Evelyn Worrall, *La inmigración italiana: 1860-1914* (Lima, 1990). Son también útiles Christine Hünefeldt, «Inserción socioeconómica de los extranjeros en el Perú: una interpretación de los datos censales entre 1840 y 1870», en *Primer seminario sobre poblaciones inmigrantes: actas* (Lima, 1986), 141-196. La historia temprana de los hermanos Grace en Perú se encuentra en Larry Clayton, *W.R. Grace & Co.: The Formative Years, 1850-1930* (Ottawa, IL, 1985); y Marquis James, *Merchant-Adventurer: The Story of W.R. Grace* (Wilmington, DE, 1993).

Francisco Quiroz Chueca escribió sobre *La protesta de los artesanos: Lima-Callao, 1858* (Lima, 1988). Véase también Cecilia Méndez, «Importaciones de lujo y clases populares: un motin limeño», *Cielo Abierto* 29: 10 (julio, 1984). Una llamativa reinterpretación de la violencia de la turba desatada por el abortado golpe de 1872 es *Masas urbanas y rebelión en la historia: golpe de estado: Lima 1872* (Lima, 1978), de Margarita Giesecke. Para el estallido de rebeliones campesinas en la segunda mitad del siglo véase Michael J. Gonzales, «Neocolonialism and

Indian Unrest in Southern Peru, 1867-1898», *BLAR* 6: 1 (1987), 1-26. Sobre la rebelión de Bustamante véase Nils P. Jacobsen, «Civilization and Its Barbarism: The Inevitability of Juan Bustamante's Failure», en *The Human Tradition in Latin America, the Nineteenth Century*, editado por William Beezley y Judith Ewell (Wilmington, DE, 1989), 82-101; y Emilio Vásquez, *La rebelión de Juan Bustamante* (Lima, 1976). Humberto Rodríguez Pastor examinó *La rebelión de los rostros pintados* (Lima, 1979).

Algunas de las mejores relaciones del siglo son J.J. von Tschudi, *Travels in Peru (1838-1842)*, traducción de T. Ross (Londres, 1847; hay versión en español); Basil Hall, *Extracts from a Journal Written on the Coast of Chile, Peru and Mexico in the Years 1820, 1821, and 1822,* 2 vols. (Edinburgo, 1824); hay edición en español; Clements R. Markham, *Travels in Peru and India* (Londres, 1862); Thomas J. Hutchinson, *Two Years in Peru,* 2 vols. (Londres, 1873); y Flora Tristán, *Peregrinations of a Pariah, 1833-1834: Flora Tristan*, traducción de Jean Hawkes (Boston, 1986; hay edición en español); y *Flora Tristan, Utopian Feminist: Her Travel Diaries and Personal Crusade*, edición y traducción de Paul y Doris Beik (Bloomington, IN, 1993).

El tardío siglo XIX y comienzos del XX

Un examen global del periodo figura en Peter F. Klarén, «The Origins of Modern Peru, 1880-1930», en *CHLA*, 5, 587-640. Le acompaña un extenso ensayo bibliográfico (891-896), actualizado en el volumen 11 (1994). Véase también Mc Evoy, *La utopía republicana.* David Nugent escribió un provocativo estudio regional sobre el surgimiento del Estado moderno: *Modernity at the Edge of Empire: State, Individual and Nation in the Northern Peruvian Andes, 1885-1935* (Stanford, CA, 1997). También útil para este periodo es Magnus Mörner, *The Andean Past: Land, Societies, and Conflicts* (Nueva York, 1985). Para ensayos informativos sobre la planificación urbana, la religión, la estructura social, el movimiento obrero, la etnicidad y la cultura véase Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero S. (eds.), *Mundos interiores: Lima, 1850-1950* (Lima, 1995).

Una historia comprehensiva de la Guerra del Pacífico aún está por escribirse, ya sea en inglés o en español. Es más, no hay una contraparte peruana al sólido estudio de William F. Sater, *Chile and the War of the Pacific* (Lincoln, NE, 1986), cuya bibliografía contiene las fuentes relevantes para ambos lados del conflicto, en tanto que una breve pero buena síntesis diplomática figura en Ronald Bruce St John, *The Foreign Policy of Peru* (Boulder, CO, 1992; hay edición en español). El mejor relato general peruano sigue siendo el que figura en las obras de Jorge Basadre, en particular en su *Historia de la República del Perú*, 6ª ed., 17 vols. (Lima, 1968-1969), vol. 8; y *Chile, Perú y Bolivia independientes* (Barcelona y Buenos Aires, 1948). Para la política doméstica y la movilización social luego de la caída de Lima, véase Margarita Guerra Martiniere, *La ocupación de Lima, 1881-1883: el gobierno de García Calderón* (Lima, 1991); y *La ocupación de Lima, 1881-1883: aspectos económicos* (Lima, 1996). Enrique Amayo ha escrito sobre

La política británica en la Guerra del Pacífico (Lima, 1988). Véase también Héctor López Martínez, *Guerra con Chile: episodios y personajes, 1879-1885* (Lima, 1989).

El centenario de la guerra sí estimuló la producción sobre el tema, fundamentalmente estudios editados por historiadores peruanos. El mejor de ellos es el de Jorge Basadre *et al.*, *Reflexiones en torno a la Guerra de 1879* (Lima, 1979), que incluye contribuciones originales de una serie de historiadores peruanos bien conocidos. Véase también Wilson Reátegui Chávez *et al.*, *La Guerra del Pacifico*, 2 vols. (Lima, 1979, 1984); Percy Cayo Córdoba *et al.*, *En torno a la Guerra del Pacífico* (Lima, 1983); y Fernando Lecaros (ed.), *La Guerra con Chile en sus documentos* (Lima, 1979). El general retirado Edgardo Mercado Jarrín tiene un análisis interesante de la *Política y estrategia en la Guerra con Chile* (Lima, 1979).

La fuente documental más importante sigue siendo Pascual Ahumada Moreno (ed.), *Guerra del Pacífico: Recopilación completa*..., 8 vols. (Valparaíso, Chile, 1895-91). Una colección más reciente de documentos y artículos interpretativos fue publicada por la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú del Ministerio de Guerra, *La resistencia de La Breña*, 3 vols. (Lima, 1982-84). Andrés A. Cáceres escribió sus memorias de *La guerra del 79: sus campañas (memorias)* (Lima, 1973), al igual que su esposa, Antonia Moreno de Cáceres, *Recuerdos de la campaña de la Breña (memorias)* (Lima, 1974). Sobre la campaña peruana del general chileno Patricio Lynch, véase su *Memoria...* (Lima, 1883-1884). Véanse también las concisas *Crónicas de la guerra con Chile (1881-1883)* de Ricardo Palma (Lima, 1984). Celia Wu de Brading tradujo los informes de dos oficiales navales británicos en *Testimonios británicos de la ocupación chilena de Lima (enero de 1881)* (Lima, 1986).

El debate sobre la formación de un nacionalismo popular alternativo debido a la invasión chilena fue estimulado por los estudios sumamente originales de Mallon, *The Defense of Community*; y Manrique, *Campesinado y nación*. Al debate se unió Heraclio Bonilla, «The Indian Peasantry and 'Peru' during the War with Chile», en *Resistance, Rebellion, and Consciousness*, 219-231. Véase también la contribución de Mallon, «Nationalist and Antistate Coalitions in the War of the Pacific: Junin and Cajamarca, 1879-1902», en *Resistance, Rebellion, and Consciousness*, 232-279; y *Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru* (Berkeley, CA, 1995; hay edición en español). La interpretación de Bonilla se presentó originalmente en «The War of the Pacific and the National and Colonial Problem in Peru», *Past and Present* (noviembre, 1978), 92-118, basado en su tesis doctoral presentada en la Universidad Mayor de San Marcos en 1977. Véase también su *Guano y burguesía* y *Un siglo a la deriva: ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra* (Lima, 1980).

Sobre la disolución social engendrada por la guerra, véase Bonilla, «The War of the Pacific»; y Henri Favre, «Remarques sur la lutte des classes au Pérou pendant la Guerre du Pacifique», en *Litterature et société au Pérou du XIXe siècle a nos jours* (Grenoble, Francia, 1975), 54-81. Peter Blanchard atribuye la proliferación de las revueltas campesinas después de la guerra al general desarreglo económico, político

y administrativo luego de la derrota peruana. Véase su «Indian Unrest in the Peruvian Sierra in the Late Nineteenth Century», *Americas* 38 (1982), 449-463. Al igual que Mallon en torno a la Guerra del Pacífico, Thurner aplica un análisis postcolonial a la rebelión de Atusparia en *From Two Republics* y «Atusparia and Cáceres: Rereading Representations of Peru's Late Nineteenth-Century 'National Problem'», *HAHR* 77: 3 (agosto, 1997), 409-442. Véase también William W. Stein, *El levantamiento de Atusparia: el movimiento popular ancashino de 1885, un estudio de documentos* (Lima, 1988); C. Augusto Alba Herrera, *Atusparia y la revolución campesina de 1885 en Ancash* (Lima, 1985); y Wilfredo Kapsoli (ed.), *Los movimientos campesinos en el Perú: 1879-1965* (Lima, 1977), que incluye una contribución sobre Atusparia de Manuel Valladares y Jean Piel. El descontento campesino en que se produjo la rebelión de la sal en 1895 se examina en Husson, *De la guerra.*

La mejor fuente sobre la recuperación económica de la postguerra es Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977* (Lima; 1985). Este estudio incluye cuidadosos análisis sectoriales y regionales de la producción de exportación y las manufacturas, y sostiene que se dio un breve brote de crecimiento autónomo a comienzos del siglo XX, sólo para desaparecer después de 1908. Véase también Gianfranco Bardella, *Un siglo de la vida económica del Perú, 1889-1989* (Lima, 1989). El análisis dependentista clásico es el de Ernesto Yepes del Castillo en *Perú 1820-1920: un siglo de desarrollo capitalista* (Lima, 1972). Véase también su artículo«El desarrollo peruano en las primeras décadas del siglo XX», en *Nueva historia general del Perú* (Lima, 1979). Quiroz cuestiona a Thorp y Bertram, y a Yepes, en sus revisionistas *Domestic and Foreign Finance* y *Banqueros en conflicto: estructura financiera y economía peruana, 1884-1930* (Lima, 1989). En ambos trabajos atribuye una mayor importancia a los grupos financieros y empresariales domésticos en la modernización y el desarrollo peruano durante la República Aristocrática, y después. Véase también su «Financial Development in Peru under Agrarian Export Influence, 1884-1950», *Americas* 47: 4 (1991), 447-476. La cuestión arancelaria se examina en Carlos Boloña, Tariff Policies in Peru, 1880-1980 (*tesis de Ph.D.*, St. Anthony's College, Oxford, 1981; hay edición en español). Los informes de los cónsules británicos de este periodo se encuentran en Bonilla, *Gran Bretaña y el Perú*, en especial los vols. 2-4.

Una valiosa información y análisis económicos de este periodo fueron preparados por Shane Hunt, *Real Wages and Economic Growth in Peru, 1900-1940* (Boston, 1977; hay versión en español), y *Price and Quantum Estimates of Peruvian Exports, 1830-1962* (Princeton, NJ, 1973). Usando éstas y otras fuentes, Albert Berry analiza el «International Trade, Government, and Income Distribution in Peru since 1870», *LARR* 25: 2 (1990), 31-60. Otra información cuantitativa aparece en P. E. Dancuart y J.M. Rodríguez (eds.), *Anales de la hacienda pública del Perú*, 24 vols. (Lima, 1902-08), y en diversos estudios de Pablo Macera dentro de sus *Trabajos.*

La economía de exportación de este periodo también fue cubierta en varios otros estudios especializados. Por ejemplo, Rory Miller publicó varios artículos importantes, entre ellos «The Making of the Grace Contract: British Bondholders

and the Peruvian Government, 1885-1890», *JLAS* 8: 1 (1976), 73-100; «The Grace Contract, the Peruvian Corporation and Peruvian History», *Ibero-Amerikanisches Archiv*, vol. 9 (1983), 319-348; «Railroads and Economic Development in Central Peru, 1890-1930», en J. Fisher (ed.), *Social and Economic Change in Modern Peru* (Liverpool, Inglaterra, 1976); «The Wool Trade of Southern Peru, 1850-1915», *Ibero-Amerikanisches Archiv* 8 (1982), 297-312; y «British Firms and the Peruvian Government, 1895-1930», en D.C.M. Platt (ed.), *Business Imperialism 1840-1930: An Inquiry Based on British Experience in Latin America* (Londres, 1977).

William Bollinger brinda mucha información útil en The Rise of United States Influence in the Peruvian Economy, 1869-1921 (*tesis de M.A. inédita*, UCLA, 1972), al igual que Heraclio Bonilla, «Emergence of U.S. Control of the Peruvian Economy, 1850-1930», en Joseph S. Tulchin (ed.), *Hemispheric Perspectives on the United States* (Westport, CT, 1978), 325-351; hay edición en español del artículo. Véase también la interpretación marxista que Bollinger hace de «The Bourgeois Revolution in Peru: A Conception of Peruvian History», *Latin American Perspectives* 4: 3 (verano, 1977), 18-54. Como antídoto a estas visiones dependentistas véase Clayton, *Peru and the United States*. Rodrigo Montoya Rojas contribuye al debate sobre la transición económica en *Capitalismo y no capitalismo en el Perú: un estudio histórico de su articulación en un eje regional* (Lima, 1981), y en *Lucha por la tierra, reforma agraria y capitalismo en el Perú del siglo XX* (Lima, 1989).

La mejor interpretación de la formación y desarrollo de la República Aristocrática es la de Manuel Burga y Alberto Flores-Galindo, *Apogeo y crisis de la República Aristocrática* (Lima, 1979). Véase también Pedro Planas, *La república autocrática* (Lima, 1994); y su *El 900: balance y recuperación* (Lima, 1994); y Carmen McEvoy, *La utopía republicana.* Alicia del Águila examina los espacios sociales de la élite y los subalternos en *Callejones y mansiones: espacios de opinión pública y redes sociales y políticas en la Lima del 1900* (Lima, 1997). Miller cuestiona la idea de la formación de una oligarquía cohesionada en «The Coastal Elite and Peruvian Politics, 1895-1919», *JLAS* 14: 1 (1982), 97-120; y «La oligarquía costera y la República Aristocrática en el Perú, 1895-1919», *Revista de Indias* 48: 182-83 (enero-agosto, 1988), 551-566. Para una respuesta véase Michael J. González, «Planters and Politics in Peru, 1895-1919», *JLAS* 23: 3 (octubre, 1991), 515-542; y Quiroz, «Financial Leadership and the Formation of Peruvian Elite Groups, 1884-1930», *JLAS* 20: 1 (mayo, 1988), 49-81. Véase también Nils Jacobsen, «Free Trade, Regional Elites and the Internal Market in Southern Peru, 1895-1932», en *Guiding the Invisible Hand*, 145-175. Nelson Manrique, en su libro *Yawar Mayu: Sociedades terratenientes serranas, 1879-1910* (Lima, 1988), sostiene provocadoramente que la Guerra del Pacífico fortaleció a la tradicional clase terrateniente de la sierra en tanto que debilitó a la costeña, lo que llevó a una alianza entre ambos grupos en la posguerra con miras a reestablecer el control sobre el país después de la conflagración.

Otros estudios importantantes más antiguos sobre la formación de la oligarquía son Dennis Gilbert, *The Oligarchy and the Old Regime in Peru* (Ithaca, NY, 1977); y su *La oligarquía peruana: historia de tres familias* (Lima, 1982); así como Sinesio

López J., «El estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación», *Revista Mexicana de Sociología* 40: 3 (1978), 991-1007. Un examen más reciente del tema aparece en el importante estudio de Felipe Portocarrero Suárez, *El imperio Prado: 1890-1970* (Lima, 1995). Un buen análisis del pensamiento político de la élite, la civilista en particular, figura en Kristal, *The Andes Viewed from the City* (existe edición en español); y Luis Alberto Sánchez, *Balance y liquidación del novecientos* (Santiago, 1941), así como los escritos de los intelectuales de la época Alejandro Deustua, Joaquín Capelo, Manuel González Prada, Javier Prado, Francisco García Calderón, Manuel Vicente Villarán, José de la Riva-Agüero y Víctor Andrés Belaunde, entre otros. Véase también Thomas Ward, *La anarquía inmanentista de Manuel González Prada* (Nueva York, 1998).

Un valioso retrato sociohistórico de *Lima en 1900*, de Richard Morse (Lima, 1973), se basa en el trabajo y las observaciones sociológicas de Capelo, Villarán y otros contemporáneos. Véase también Marcos Cueto, *El regreso de las epidemias: salud y sociedad en el Perú del siglo XX* (Lima, 1997), que examina las mejoras en la sanidad y la salud pública después de 1900, en contraste con su deterioro a finales de siglo. David Parker ofrece un análisis intrigante de *The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society, 1900-1950* (University Park, PA, 1998). Él sostiene que los oficinistas de Lima se definían a sí mismos como integrantes de la clase media basándose tanto en valores tradicionales como el honor familiar, la educación y el «estilo de vida», como en los criterios capitalistas modernos del ingreso y la ocupación. Véase también Gonzalo Portocarrero (ed.), *Las clases medias: entre la pretensión y la incertidumbre* (Lima, 1999). Para la inmigración italiana véase Bonfiglio, *Los italianos*; y Worrall, *La inmigración italiana*.

Una serie de importantes estudios regionales ofrecen un nuevo cuadro de los desarrollos sociales y económicos fuera de Lima en este periodo. El magistral *Mirages of Transition*, de Nils Jacobsen, revisa la perspectiva dependentista tradicional del periodo. También se concentran en el sur Luis Miguel Glave, «Agricultura y capitalismo en la sierra sur del Perú (fines del siglo XIX y comienzos del XX)», en *Estados y naciones en los Andes,* editado por J.P. Deler e Y. Saint Geours, tomo I (Lima, 1986), 213-243; Benjamin Orlove, *Alpacas, Sheep, and Men: The Wool Export Economy and Regional Society in Southern Peru* (Nueva York, 1977); Alberto Flores-Galindo, *Arequipa y el sur andino, siglos XVIII a XX* (Lima, 1977); y Manuel Burga y Wilson Reátegui Chávez, *Lanas y capital mercantil en el sur: la Casa Ricketts, 1895-1935* (Lima, 1981). Véase también Geoff Bertram, «Modernización y cambio en la industria lanera en el sur del Perú, 1919-1930, un caso frustrado de desarrollo», *Apuntes* 3 (1977), 3-22. Una relación contemporánea es la del viajero alemán Karl Kaerger, *Condiciones agrarias de la sierra peruana (1899)*, traducida por Christine Hünefeldt (Lima, 1979).

Magnus Mörner evalúa «The Extent and Limitations of Change: Cuzco, Peru, 1895-1920», en *The Transformation of Rural Society in the Third World*, editado por Mörner y Thommy Svensson (Londres, 1991), 98-119. Sobre el Cuzco véase también J. Tamayo Herrera, *Historia social del Cuzco republicano* (Lima, 1978).

Defense of Community, de Mallon, analiza la transición al capitalismo en la sierra central, en tanto que Carmen Diana Deere hizo lo mismo para Cajamarca en *Household and Class Relations: Peasants and Landlords in Northern Peru* (Berkeley, CA, 1990; hay edición en español del IEP). Para el norte véase también Lewis Taylor, Main Trends in Agrarian Capitalist Development: Cajamarca, Peru, 1880-1976 (*tesis de Ph.D.*, Universidad de Liverpool, 1979); *Bandits and Politics in Peru: Landlord and Peasant Violence in Hualgayoc 1900-1930* (Cambridge, Inglaterra, 1983; existe versión en español); y «Enrique López Albújar and the Study of Peruvian Brigandage», *BLAR* 13: 3 (1994), 247-280.

El desarrollo de la minería peruana figura en numerosas obras: Luis Jochamowitz, *Hombres, minas y pozos 1896-1996: un siglo de minería y petróleo en el Perú* (Lima, 1996); Carlos Contreras, *Mineros y campesinos en los Andes* (Lima, 1988); Josh DeWind, *Peasants Become Miners: The Evolution of Industrial Mining Systems in Peru, 1902-1974* (Nueva York, 1987); Julian Laite, *Industrial Development and Migrant Labour in Latin America* (Austin, TX, 1981); Dirk Kruijt y Menno Vellinga, *Labor Relations and Multinational Corporations: The Cerro de Pasco Corporation in Peru (1902-1974)* (Assen, the Netherlands, 1979; hay edición en español); y Alberto Flores-Galindo, *Los mineros de la Cerro de Pasco, 1900-1930* (Lima, 1974). El boom del caucho en la Amazonía y su fin lo narran Michael Edward Stanfield, *Red Rubber, Bleeding Trees: Violence, Slavery, and Empire in Northwest Amazonia, 1850-1933* (Albuquerque, NM, 1999); y Guido Pennano, *La economía del caucho* (Lima, 1988).

La agricultura costeña de exportación ha recibido bastante atención académica. Un importante examen global interpretativo es el de Bill Albert, «External Forces and the Transformation of Peruvian Coastal Agriculture, 1880-1930», en *Latin America, Economic Imperialism and the State*, editado por Christopher Abel y Colin M. Lewis (Londres y Dover, NH, 1985), 231-249. Para el desarrollo de la industria azucarera en la costa norte véase Michael J. Gonzales, *Plantation Agriculture and Social Control in Northern Peru, 1875-1933* (Austin, TX, 1984); Bill Albert, *An Essay on the Peruvian Sugar Industry, 1880-1920* (Norwich, Inglaterra, 1976); y Peter F. Klarén, «The Social and Economic Consequences of Modernization in the Peruvian Sugar Industry, 1870-1930», en *Land and Labour in Latin America: Essays on the Development of Agrarian Capitalism*, editado por Kenneth Duncan e Ian Rutledge (Cambridge, Inglaterra, 1977; existe versión en español), 229-252. Véase también el importante *De la encomienda*, de Burga. Para la industria algodonera consúltese Vincent Peloso, *Peasants on Plantations: Subaltern Strategies of Labor and Resistance in the Pisco Valley, Peru* (Durham, NC, 1999); Michael J. Gonzales, «The Rise of Cotton Tenant Farming in Peru, 1890-1920: The Condor Valley», *Agricultural History* 65: 1 (1991), 51-71; y W.S. Bell, *An Essay on the Peruvian Cotton Industry, 1825-1920* (Liverpool, Inglaterra, 1985).

El proceso de expansión de los latifundios, dinamizados por las fuerzas de mercado internacionales y nacionales del temprano siglo XX, fue esbozado inicialmente por François Chevalier, «L' Expansion de la grande propriete dans le Haut-Pérou au XXe siècle», *AESC* 21 (1966), 815-831. El resultado fueron los cercamientos y la dislocación de las tenencias campesinas, que propiciaron una

creciente emigración y una serie de levantamientos campesinos, en especial en el sur productor de lanas. Este proceso ha sido documentado en una serie de estudios, entre ellos los de Jacobsen, Mallon, Manrique, Klaren y otros. Un buen examen analítico general es el de Michael J. Gonzales, «Neo-Colonialism and Indian Unrest in Southern Peru, 1867-1898», *BLAR* 6: 1 (1987), 1-26. Véase también Peter Blanchard, «Indian Unrest»; Wilson Reátegui Chávez (ed.), *Documentos para la historia del campesinado peruano, siglo XX* (Lima, 1978); y Wilfredo Kapsoli, *Los movimientos*.

La emigración campesina de la sierra a la costa es el tema de Henri Favre, «The Dynamics of Indian Peasant Society and Migration to Coastal Plantations in Central Peru», en *Land and Labour in Latin America*, 253-268. El enganche, en tanto mecanismo de reclutamiento laboral para las plantaciones costeñas en desarrollo, se interpreta y debate en una serie de estudios: Michael Gonzales, «Chinese Plantation Workers and Social Conflict in Peru in the Late Nineteenth Century», *JLAS* 21: 3 (octubre, 1989), 385-424; y «Capitalist Agriculture and labour Contracting in Northern Peru, 1880-1905», *JLAS* 12 (1980); Peter Blanchard, «The Recruitment of Workers in the Peruvian Sierra at the turn of the Century: The *Enganche* System», *Inter-American Economic Affairs* 33: 3 (1979); Albert, *An Essay*; y Klarén, «The Social and Economic Consequences». Los trabajadores contratados en la industria azucarera a comienzos de siglo los examinó Harvey C. Gardiner en *The Japanese and Peru, 1873-1973* (Albuquerque, NM, 1975).

Peter Blanchard, «A Populist Precursor: Guillermo Billinghurst», *JLAS* 9: 2 (1977), 251-273, es el mejor análisis sobre el presidente reformista. El trasfondo sobre el desarrollo de las fuerzas armadas al derrocamiento de Billinghurst a manos de Benavides se esboza en Dan Masterson, *The Military and Politics in Latin America: Peru from Sánchez Cerro to Sendero Luminoso* (Nueva York: 1991); hay edición en español. Véase también Paquita Benavides de Peña *et al.*, *El Mariscal Benavides: su vida y su obra*, 2 vols. (Lima, 1976-1981).

La versión clásica del impacto de la Primera Guerra Mundial en Perú es la de Bill Albert, *South America and the First World War: The Impact of the War on Brazil, Argentina, Peru and Chile* (Cambridge, Inglaterra, 1988). Albert concluye que la guerra no instituyó un proceso de industrialización por sustitución de importaciones en Perú, debido fundamentalmente a la rapidez con la cual el país logró reestablecer y ampliar sus mercados de exportación con los beligerantes. Las finanzas peruanas durante y después de la guerra las examina cuidadosamente Quiroz, *Domestic and Foreign Finance*. Él sostiene que los grupos de élite peruanos participaron vigorosamente en la modernización y diversificación de la economía en este periodo. Esta postura contrasta con la de la escuela de la dependencia, que sostiene que el comportamiento de la élite era tradicional e «irracional», lo que constituyó un gran obstáculo al desarrollo económico. Para esta última postura véase Yepes del Castillo, *Perú 1820-1920*; y Julio Cotler, *Clases, estado y nación*.

El estudio clásico sobre el movimiento obrero es el de Peter Blanchard, *The Origins of the Peruvian Labor Movement, 1883-1919* (Pittsbugh, PA, 1982). Sobre los trabajadores azucareros véase Peter Kammann, *Von der Landarbeiterbewgung*

zur Angestelltengewerkschaft; Soziale Protestbewegungen im Tal des Chicama, Peru, 1909-1968 (Fráncfort, 1990). Véase también Denis Sulmont, *El movimiento obrero en el Perú, 1900-1980* (Lima, 1980); y Ricardo Melgar Bao, *Burguesía y proletariado en el Perú* (Lima, 1980). David Parker reexamina la «Peruvian Politics and the Eight-Hour Day: Rethinking the 1919 General Strike», *Canadian Journal of History* (diciembre, 1995), 417-438. Consúltense también las memorias de Julio Portocarrero, *Sindicalismo peruano: primera etapa, 1911-1930* (Lima, 1987). Pueden encontrarse varios ensayos excelentes sobre la cultura de la clase obrera limeña en Steve Stein (ed.), *Lima obrera: 1900-1930*, 2 vols. (Lima, 1986-87). Son particularmente notables los de Laura Miller, «La mujer obrera en Lima, 1900-1930»; y Susan C. Stokes, «Etnicidad y clase social: los afroperuanos de Lima, 1900-1930», en el vol. 2. Véase también Stein, «Popular Culture and Politics in Early Twentieth-Century Lima», *New World* 1: 2 (1986), 46-65; y José Deustua, Steve Stein y Susan Stokes, «Soccer and Social Change in Early Twentieth-Century Peru», partes 1 y 2, *Journal of Latin American Popular Culture* 4 (1984) y 6 (1985). Piedad Pareja desarrolla el vínculo entre *Anarquismo y sindicalismo en el Perú* (Lima, 1978); en tanto que Luis Tejada examina el sindicato de panaderos en *La cuestión del pan; el anarcosindicalismo en el Perú, 1880-1919* (Lima, 1988).

Hay numerosos estudios buenos del indigenismo, entre ellos José Tamayo Herrera, *Historia del indigenismo cuzqueño, siglos XVI-XX* (Lima, 1980), e *Historia social e indigenismo en el altiplano* (Lima, 1982); y Nelson Manrique, «Clorinda Matto y el nacimiento del indigenismo literario (*Aves sin nido*, cien años después)», en *Debate Agrario* 6 (junio de 1989). De Tamayo Herrera, véase su más reciente *Liberalismo, indigenismo y violencia en los países andinos (1850-1995)* (Lima, 1998); y los estudios de Kristal (1987), Klaiber (1977), Rénique (1991) y Deustua y Rénique (1984). Véase también Thomas Davies, Jr., *Indian Integration in Peru (A Half Century of Experience 1900-1948)* (Lincoln, NE, 1974); Wilson Reátegui, *Tres instituciones indigenistas del siglo XX* (Lima, 1978); Wilfredo Kapsoli, *El pensamiento de la Asociación Pro-Indígena* (Cuzco, 1980); y *Ayllus del sol, anarquismo y utopía andina* (Lima, 1984). Son indispensables las *Memorias* de Luis E. Valcárcel, un prominente indigenista (Lima, 1981). Un análisis más reciente de Marisol de la Cadena sitúa el movimiento en su contexto provincial: «From Race to Class: Insurgent Intellectuals 'de provincia' in Peru, 1910-1970", en Stern (ed.), *Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980-1995* (Durham, NC, 1998; hay edición en español del IEP), 22-59. Véase, asimismo, la clásica novela indigenista de Clorindo Matto de Turner, *Aves sin nido*, traducida al inglés por John R. Polt y editada por Antonio Cornejo Polar (Nueva York, 1998).

La bibliografía sobre Jose Carlos Mariátegui es voluminosa. Sus obras completas fueron publicadas en *Obras completas de José Carlos Mariátegui*, 20 vols. (Lima, 1957-1970). Su trabajo más conocido es *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* (Lima, 1927), que apareció en versión inglesa como *Seven Essays on Peruvian Reality*, traducido por Marjory Urquidi (Austin, TX, 1971). Una bibliografía completa de estudios sobre Mariátegui, así como un cuidadoso análisis de su pensamiento, es el de Harry E. Vanden, *National Marxism in Latin America: José Carlos Mariátegui's Thought and Politics* (Boulder, CO, 1986). Charles Walker

redactó un artículo perceptivo sobre la «Lima de Mariátegui: los intelectuales y la capital durante el oncenio», *Socialismo y Participación* 35 (setiembre, 1986), 71-88. Véase también su «Bibliografía reciente sobre José Carlos Mariátegui», *Revista Andina* 4: 1 (julio, 1986), 253-273.

Entre otros estudios notables sobre Mariátegui figuran Sandro Mariátegui (ed.), *Simposio internacional: Amauta y su época* (Lima, 1998); Roland Forgues, *Mariátegui, la utopía realizable* (Lima, 1995); Gonzalo Portocarerro *et al.*, *La aventura de Mariátegui: nuevas perspectivas* (Lima, 1995); Marc Becker, *Mariátegui and Latin American Marxist Theory* (Athens, OH, 1993); Robert Paris, *La formación ideológica de José Carlos Mariátegui* (Ciudad de México, 1981); Bruno Podestá (ed.), *Mariátegui en Italia* (Lima, 1981); Jesús Chavarría, *José Carlos Mariátegui and the Rise of Modern Peru, 1880-1930* (Albuquerque, NM, 1979); y Alberto Flores-Galindo, *La agonía de Mariátegui: la polémica con la Komintern* (Lima, 1980). Véase también Pedro Planas, *El pensamiento social de Víctor Andrés Belaunde: antología* (Lima, 1997), sobre uno de los principales contendores de Mariátegui; y José de la Riva-Agüero, *Obras completas* (Lima, 1964-).

Al igual que Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre ha sido el tema de una considerable atención académica. Sus *Obras completas* se publicaron en 6 vols. (Lima, 1976-1977). Para una compilación escogida en inglés véase Robert J. Alexander (comp. y trad.), *Aprismo: the Ideas and Doctrines of Víctor Raúl Haya de la Torre* (Kent, OH, 1973). La mejor biografía (intelectual) de Haya es Fredrick B. Pike, *The Politics of the Miraculous in Peru: Haya de la Torre and the Spiritualist Tradition* (Lincoln, NE, 1986). Sobre el joven Haya véase Pedro Planas, *Los orígenes del APRA: el joven Haya (mito y realidad de Haya de la Torre)* (2ª ed., Lima, 1986). Véase también Richard V. Salisbury, «The Middle American Exile of Victor Raul Haya de la Torre», *The Americas* 40 (1983), 1-16. Para los orígenes del partido aprista véase Steve Stein, *Populism in Peru: Emergence of the Masses and the Politics of Social Control* (Madison, WI, 1980); Peter F. Klarén, *Modernization, Dislocation and Aprismo: Origins of the Peruvian Aprista Party, 1880-1932* (Austin, TX, 1973; hay edición en español); y Jeffrey L. Klaiber, S.J., «The Popular Universities and the Origins of Aprismo, 1921-1924», *HAHR* 55: 4 (1975), 693-715. Véase también su estudio más amplio, *Religion and Revolution in Peru* (Notre Dame, IN, 1977; hay edición en español). Liisa North también analiza los *Orígenes y crecimiento del Partido Aprista: el cambio socio-económico en el Perú* (Lima, 1975). Para las diferencias y la ruptura entre Mariátegui y Haya véase Ricardo Luna Vegas, *Mariátegui, Haya de la Torre y la verdad histórica* (Lima, 1978).

Karen Sanders examina el debate en torno a la cuestión nacional en el pensamiento de Gonzalez Prada, García Calderón, Víctor Andrés Belaunde, Mariátegui y Haya en su excelente *Nación y tradición: cinco discursos en torno a la nación peruana, 1885-1930* (Lima, 1997). Véase también Malgorzata Nalewajko, *El debate nacional en el Perú (1920-1933)* (Varsovia, 1995).

El tratamiento más amplio de la economía durante y después de la guerra, que incluye un análisis sectorial, es Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977*, así como

Quiroz, *Domestic and Foreign Finance*. Para la economía y la sociedad en el altiplano véase Nils Jacobsen, *Mirages of Transition*, en especial su interpretación del descontento indígena durante y después de la guerra. Stein, *Populism in Peru*, interpreta la decadencia y el colapso de la República Aristocrática, al igual que los cambios sociales del Oncenio durante la década de 1920.

José Luis Rénique pinta brillantemente *Los sueños de la sierra: Cuzco en el siglo XX* (Lima, 1991). Véase también su tesis doctoral, State and Regional Movements in the Peruvian Highlands: The Case of Cuzco, 1895-1985 (Universidad de Columbia, 1988; Ann Arbor, MI, 1993); y Jesús Guillén, *La economía agraria del Cuzco 1900-1980* (Cuzco, 1989). Varios ensayos interesantes sobre el Cuzco aparecen en Juan Vega Ganoza y Jesus Guillén Marroquín (eds.), *Cuzco, problema y posibilidad* (Cuzco, 1981).

La información sobre la Iglesia aparece en Jeffrey L. Klaiber, S.J., *The Catholic Church in Peru*, así como en el estudio más detallado de Jordán, *Iglesia y poder*. La mejor relación de *The Foreign Policy of Peru* en este periodo es la de St John.

El Oncenio de Leguía es el tema de Planas, *La República Autocrática*. Véase también Clayton, *Peru and the United States*; y Baltazar Caravedo Molinari, *Clases, lucha política y gobierno en el Perú (1919-1933)* (Lima, 1977). Los discursos de Leguía aparecen en *Discursos, mensajes y programas*, 3 vols. (Lima, 1924-1926), y *Mensaje* (Lima, 1928, 1929, 1930). La historia económica clásica del Oncenio es Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977*. Para una buena relación de sus políticas económicas y financieras véase Paul Drake, *The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 1923-1933* (Durham, NC, 1989), y Barbara Stallings, *Banker to the Third World: U.S. Portfolio Investment in Latin America, 1900-1986* (Berkeley, CA, 1987; hay versión en español). Véase también Quiroz, «Lima como Centro financiero».

Post 1930

El periodo en general no ha sido bien estudiado. El mejor cuadro global es el de Geoffrey Bertram, «Peru, 1930-1960», en *CHLA*, 8 (1991), 385-450. Véase también Adam Andarle, *Los movimientos políticos en el Perú entre las dos guerras mundiales* (La Habana, 1985); Masterson, *Militarism and Politics*, caps. 2 y 3; y Cotler, *Clases*. José Carlos Huayhuaca reunió las fotografías de *Martín Chambi, fotógrafo: Cuzco, 1920-1950* (Lima, s.f.), el maestro fotógrafo de la vida cotidiana y el trabajo en el sur.

El mejor análisis de la caída de Augusto B. Leguía y el surgimiento de Luis M. Sánchez Cerro es el de Stein, *Populism in Peru*. Véase también su «Populism in Peru: APRA and the Formative Years», en *Latin American Populism*, editado por Michael L. Conniff (Albuquerque, NM, 1981), 113-134, y el reciente estudio revisionista de Steven J. Hirsch, «We Want Social Justice»: Union Workers, the Peruvian Aprista Party, and Populist Politics in Lima-Callao, 1931-1948 (*tesis de Ph*. D., Universidad

de George Washington, 1996). Imelda Vega-Centeno B., *Aprismo popular: cultura, religión y política* (Lima, 1991); y Klaiber, *Religión y revolución*, analizan el uso que el partido hizo de la religión y la cultura popular para atraer un seguimiento político masivo. Véase también Orazio R. Ciccarelli, *Militarism, Aprismo and Violence in Peru: The Presidential Elections of 1931* (Buffalo, NY, 1971).

Víctor Villanueva relata en *Así cayó Leguía* (Lima, 1977), el final de este gobierno. Pedro Ugarteche compiló *Sánchez Cerro: papeles y recuerdos de un presidente del Perú*, 4 vols. (Lima, 1969-1970). Véase también B. Loveday, *Sánchez Cerro and Peruvian Politics, 1930-1933* (University of Glasgow Institute of Latin American Studies, Occasional Paper no. 6, 1973). José Luis Rénique analiza el papel de «Los descentralistas arequipeños en la crisis del año 1930», *Allpanchis* 12 (1979).

Véase también Manuel Castillo Ochoa, «El populismo conservador: Sánchez Cerro y La Unión Revolucionaria», en *Pensamiento político peruano 1930-1968*, editado por Alberto Adrianzén (Lima, 1990), 47-76. El sentimiento anti-japonés en la década de 1930 se esboza en Orazio Ciccarelli, «Peru's Anti-Japanese Campaign in the 1930s: Economic Dependency and Abortive Nationalism», *Canadian Review of Studies in Nationalism* 9: 1 (primavera, 1982),115-133; y Gardiner, *The Japanese.*

Ciccarelli escribió con autoridad sobre el «Fascism and Politics in Peru during the Benavides Regime, 1933-1939: The Italian Perspective», *HAHR* (agosto, 1990), 405-432; y «Fascist Propaganda and the Italian Community in Peru during the Benavides Regime, 1933-1939», *JLAS* 20: 2 (noviembre, 1988), 361-388. Para el fascismo en la clase dominante peruana véase José Ignacio López Soria (ed.), *El pensamiento fascista (1930-1945) antología* (Lima, 1981); y Willy Pinto Gamboa, *Sobre fascismo y literatura (la guerra civil española en la Prensa, El Comercio y La Crónica 1936-1939)* (Lima, 1983). Thomas M. Davies, Jr., toca el mismo tema en «Peru,» en *The Spanish Civil War, 1936-39: American Perspectives*, editado por Mark Falcoff y Frederick B. Pike (Lincoln, NE, 1982).

La rebelión de Trujillo de 1932 no ha sido estudiada adecuadamente, aunque *El año de la barbarie, Perú 1932*, de Guillermo Thorndike (Lima, 1969), presenta algunos elementos esenciales, al igual que los estudios de Víctor Villanueva, un ex-oficial del ejército y aprista. Dos valiosos trabajos son Thomas M. Davies, Jr., y Víctor Villanueva (eds.), *Secretos electorales del APRA: correspondencia y documentos de 1939* (Lima, 1982); y *300 documentos para la historia del APRA* (Lima, 1978). El primero ilustra la disposición de Haya a hacer arreglos en su búsqueda del poder, en tanto que el segundo expone los diversos complots y conspiraciones preparados por el APRA en este periodo. Carmen Rosa Balbi examina a *El Partido Comunista y el Apra en la crisis revolucionaria de los años treinta* (Lima, 1980); y publicó con Laura Madalengoitia, *Parlamento y lucha política: Perú, 1932* (Lima, 1980). Para el parlamento véase Víctor Andrés Belaunde, *El debate constitucional: discursos en la asamblea 1931-1932* (Lima, 1966). Jose Deustua y Alberto Flores-Galindo examinan la cuestión de «Los Comunistas y el movimiento obrero: Peru, 1930-1931»,

en *Historia: problema y promesa, homenaje a Jorge Basadre*, vol. 2, editado por Franklin Pease G.Y. *et al.* (Lima, 1984).

Luis Alberto Sánchez fue un confidente político de Haya, jerarca partidario y una figura política importante cuya carrera, al igual que la de este último, abarca buena parte del siglo. Entre sus obras tenemos su *Testimonio personal: memorias de un peruano del siglo XX*, 4 vols. (Lima, 1969-76); *Apuntes para una biografía del Apra*, 3 vols. (Lima, 1978-1981); *Correspondencia, 1924-1976*, 2 vols. (Lima, 1983); así como diversas otras obras sobre la literatura, la política y la historia peruana. Algunos de sus papeles peruanos se encuentran en la Pennsylvania State University y están catalogados en *Literature and Politics in Latin America: An Annotated Calendar of the Luis Alberto Sánchez Correspondence, 1919-1980*, traducción y compilación de Donald C. Henderson y Grace R. Pérez (University Park, PA, 1982). Véase también Henderson, *Perú visto por L.A.S.: historia y vida política* (Lima, 1990).

La historia económica del periodo se encuentra en Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, *Peru 1890-1977*; y Quiroz, *Domestic and Foreign Finance*. Véase también Rosemary Thorp y Carlos Londoño, «The Effect of the Great Depression on the Economies of Peru and Colombia», en *Latin America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis*, editado por Rosemary Thorp (Nueva York, 1984); hay edición en español, 81-116; así como Thorp, *Economic Management and Economic Development in Peru and Colombia* (Pittsburgh, PA, 1991; hay edición en español). Paul Drake analiza hábilmente la misión Kemmerer en *The Money Doctor*. Sobre salarios y precios consúltese Hunt (1977). Sobre las inversiones de los EE.UU en Perú en este periodo véase Stallings, *Banker to the Third World*, cap. 6. Para el surgimiento de una clase industrial véase Baltazar Caravedo Molinari, *Burguesía e industria en el Perú, 1933-1945* (Lima, 1976); y *Clases, lucha política*. Otros útiles estudios de la economía en este periodo aparecen en Heraclio Bonilla (ed.), *Las crisis económicas en la historia del Perú* (Lima, 1986).

La información sobre la evolución de la sociedad rural es relativamente poca. Un reciente estudio de Alejandro Diez Hurtado, *Comunes y haciendas: procesos de comunalización en la sierra de Piura, siglos XVIII-XX* (Cuzco, 1998), muestra que la disolución de las haciendas en Piura comenzó mucho antes de la década de 1930, tal vez ya en la de 1890. Véase también Juan Martínez-Alier, *Haciendas, Plantations and Collective Farms: Agrarian Class Societies-Cuba and Peru* (Londres, 1977); y *Los huacchilleros del Perú* (Lima, 1973). También es importante Florencia Mallon, *The Defense of Community*; y Manrique, *Mercado interno*, ambos sobre la sierra central. La evolución de la sierra norte se examina en Deere, *Household and Class*. Véase también la tesis de Taylor (1979).

El mejor estudio de la minería en este periodo es Elizabeth Dore, *The Peruvian Mining Industry: Growth, Stagnation, and Crisis* (Boulder, CO, 1988; hay edición en español). Véase también Jochamowitz, *Hombres, minas y pozos*; y Denis Sulmont, *Historia del movimiento obrero minero metalúrgico* (Lima, 1980). Para los trabajadores en Cerro de Pasco, véase Kruijt y Vellinga, *Labor Relations and Multinational Corporations*. Los trabajadores migrantes a las minas se examinan

en Laite, *Industrial Development and Migrant Labour*, y «Migration and Social Differentiation amongst Mantaro Valley Peasants», en *Miners, Peasants and Entrepreneurs: Regional Development in the Central Highlands of Peru*, editado por Norman Long y Bryan R. Roberts (Cambridge, Inglaterra, 1984; hay edición en español). El proceso de proletarización campesina se trata en DeWind, Jr., *Peasants Become Miners*; Wilfredo Kapsoli, *Los movimientos campesinos en Cerro de Pasco, 1880-1963* (Lima, 1975); y Flores-Galindo, *Los mineros de Cerro de Pasco*.

La figura de Óscar Benavides —héroe militar y dos veces presidente (1914-1915, 1933-1939)— se trata en José Zárate Lescano, *El mariscal Benavides: su vida y su obra* (Lima, 1976). El dos veces Presidente Manuel Prado (1940-1945, 1956-1962) ha recibido poca atención de los investigadores, pero son útiles sus *Mensajes presidenciales* (Lima, 1939-1945). Consúltese también Portocarrero Suárez, *El imperio Prado.*

El mejor estudio sobre los militares es Masterson, *Militarism and Politics*. Véanse también las obras de Víctor Villanueva. La guerra con Ecuador es cubierta hábilmente por Clayton, *Peru and the United States*; y St John, *The Foreign Policy*. Estudios más antiguos son los de Bryce Wood, *The United States and Latin American Wars, 1932-1942* (Nueva York, 1966); y D.H. Zook, *Zarumilla-Marañón: The Ecuador-Peru Dispute* (Nueva York, 1964). Véase también Ernesto Yepes del Castillo, *Tres días de guerra, ciento ochenta de negociaciones: Perú, Ecuador, 1941-1942* (Lima, 1998); y Félix Denegri Luna, *Perú y Ecuador: apuntes para la historia de una frontera* (Lima, 1996).

El régimen de José Luis Bustamante es examinado hábilmente por Gonzalo Portocarrero M., *De Bustamante a Odría: el fracaso del Frente Democrático Nacional, 1945-1950* (Lima, 1983); y el capítulo de Nigel Haworth sobre «Peru» en *Latin America Between the Second World War and the Cold War, 1944-1948*, editado por Leslie Bethell e Ian Roxborough (Cambridge, Inglaterra, 1992), 170-189. Véase también Carlos Monge, If the People Are Sovereign, the People Must Be Fed: Agricultural Policies and Conflicts during the Bustamante y Rivero Administration, Peru, 1945-48 (*tesis de Ph.D.*, Universidad de Miami, 1993).

El gobierno de Manuel Odría se analiza hábilmente en David Collier, *Squatters and Oligarchs: Authoritarian Rule and Policy Change in Peru* (Baltimore, 1976; hay edición en español). Sobre Belaunde, véase William Ascher, *Scheming for the Poor: The Politics of Redistribution in Latin America* (Cambridge, MA, 1984), en especial el cap. 8; Jane S. Jaquette, «Belaunde and Velasco: On the Limits of Ideological Politics», en *The Peruvian Experiment*, 402-437; y The Politics of Development in Peru, (serie) *tesis de Ph.D.*, Latin American Studies Program, Universidad de Cornell, (Ithaca, NY, 1971). Véase también Cotler, *Clases*; y «Peru since 1960», en *CHLA*, 8, 451-459. Gilbert interpreta *La oligarquía*; Clayton, la relación entre *Peru and the United States*; y St John trata *The Foreign Policy* para este periodo. La información electoral figura en R. Roncagliolo, *¿Quién ganó? Elecciones, 1931-81* (Lima, 1980).

La incorporación de los trabajadores es detallada como parte de un proceso sudamericano más amplio en Ruth Collier y David Collier, *Shaping the Political*

Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America (Princeton, NJ, 1991), 316-330. Véase también Alberto Moya Obeso, *Sindicalismo aprista y sindicalismo clasista en el Peru, 1920-1956* (Lima, s.f.); y Denis Sulmont, *El movimiento obrero*. Las relaciones laborales en Cerro de Pasco las examinan Kruijt y Vellinga en *Labor Relations and Multinational Corporations*, y otros.

La más importante interpretación de Haya es la de Pike, *The Politics of the Miraculous*, que incluye un examen del giro a la derecha del APRA después de 1940. Véase también Mariano Valderrama, «La evolución ideológica del APRA: 1924-1962», en *El APRA: un camino de esperanzas y frustraciones*, editado por Valderrama *et al.* (Lima, 1980); y Grant Hilliker, *The Politics of Reform in Peru* (Baltimore, 1971). La lucha entre el APRA y el PC por el control del movimiento obrero se debate en M. Lauer *et al.*, *Frente al Perú oligárquico (1928-1968): Debate Socialista 1* (Lima, 1977).

La fuente fundamental sobre la economía del periodo sigue siendo Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977*, así como Rosemary Thorp, «Stabilization Policies in Peru, 1959-1977», en *Inflation and Stabilization in Latin America*, editado por R. Thorp y L. Whitehead (Londres, 1979). Los caps. 2 y 3 de Richard Webb, *Government Policy and the Distribution of Income in Peru, 1963-1973* (Cambridge, MA, 1977) son extremadamente útiles para las décadas de 1950 y 1960, así como los capítulos correspondientes en Dore, *The Peruvian Mining Industry*; y Jochamowitz, *Hombres, minas y pozos*. Véase también W. Warren, *Inflation and Real Wages in Underdeveloped Countries: India, Peru and Turkey* (Londres, 1976). E.V.K. Fitzgerald cubre los gobiernos de Prado y Belaunde en *The Political Economy of Peru, 1956-1978* (Cambridge, Inglaterra, 1979; hay edición en español del IEP); véase también Shane Hunt, «Distribution, Growth and Government Economic Behavior in Peru», en *Government and Economic Development*, editado por Gustavo Ranis (New Haven, CT, 1971). Para información sobre los avances educativos en las décadas de 1950 y 1960, véase Robert S. Drysdale y Robert G. Myers, «Continuity and Change: Peruvian Education», en *The Peruvian Experiment*, 254-301.

El proceso de industrialización se examina en John Weeks, *Limits to Capitalist Development: The Industrialization of Peru, 1950-1980* (Boulder, CO, 1985); Frits Wils, *Industrialization, Industrialists, and the Nation State in Peru: A Comparative Sociological Analysis* (Berkeley, CA, 1979; hay versión en español); y M. Beaulnes, *Industrialización por sustitución de importaciones, 1958-1969* (Lima, 1975). Véanse también los estudios de Baltazar Caravedo, entre ellos «The State and the Bourgeoisie in the Peruvian Fishmeal Industry», *Latin American Perspectives* (1977); y *Desarrollo desigual*. Numerosas referencias bibliográficas aparecen en Francisco Durand, «La industrialización en el Perú: bibliografía», *Estudios Andinos* 17-18 (1981), 195-246. Véase también Portocarrero Suárez, *El imperio Prado*; asimismo cubierto en Gilbert, *La oligarquía*. Teobaldo Pinzás revisa críticamente la bibliografía sobre *La economía peruana, 1950-1978: un ensayo bibliográfico* (Lima, 1981).

El estudio fundamental de los militares es Masterson, *Militarism and Politics in Latin America*. Véanse también las obras de Víctor Villanueva. Éstas se examinan

críticamente en James Malloy, «Dissecting the Peruvian Military: A Review Essay», *JISWA* 15: 3 (agosto, 1973), 375-382. El golpe de 1962 también lo analiza Arnold Payne, *The Peruvian Coup d'Etat of 1962: The Overthrow of Manuel Prado* (Washington, DC, 1968). Sobre la Iglesia, consúltese Klaiber, S.J., *The Catholic Church*, sobre todo el cap. 8; y Milagros Peña, *Theologies and Liberation in Peru: The Role of Ideas in Social Movements* (Filadelfia, 1995).

Las fuentes básicas sobre el movimiento campesino de finales de las décadas de 1950 y 1960 son Howard Handelman, *Struggle in the Andes: Peasant Political Mobilization in Peru* (Austin, TX, 1975); y Manuel Burga y Alberto Flores-Galindo, «Feudalismo andino y movimientos sociales (1866-1965)», en *Historia del Perú*, editada por Juan Mejía Baca (Lima, 1980), 11-112. Véase también Diego García Sayán, *Toma de tierras en el Perú* (Lima, 1982); Peter Kammann, *Movimientos campesinos en el Perú, 1900-1968: Análisis cuantitativo y cualitativo preliminar* (Lima, 1982); Alberto Flores-Galindo, «Apuntes sobre las ocupaciones de tierras y el sindicalismo agrario, 1945-1964», *Allpanchis* 11 (1978), 175-185; y Wilfredo Kapsoli E., *Los movimientos campesinos en el Perú, 1879-1965* (Lima, 1977). Hugo Blanco, el jefe del movimiento en La Convención, es autor de *Tierra o muerte: las luchas campesinas en el Perú* (Ciudad de México, 1974). Los conflictos rurales también se examinan brevemente en Colin Harding, «Land Reform and Social Conflict in Peru», en *The Peruvian Experiment*, 220-253.

Raúl Hopkins revisa el *Desarrollo desigual y crisis en la agricultura peruana, 1944-1969* (Lima, 1981). Véase también A. Figueroa, «La agricultura y el desarrollo capitalista en el Peru» y Heraclio Bonilla, «Estudios sobre la formación del sistema agrario peruano: logros y perspectivas», en *La cuestión rural en el Perú*, editado por J. Iguíñiz (Lima, 1983), 225-234, 235-260. Para la sierra norte, véase Deere, *Household and Class*; Lewis Taylor, «Main Trends»; y John S. Gitlitz, Hacienda, Comunidad, and Peasant Protest in Northern Peru (*tesis de Ph.D.*, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, 1975). Véase también el importante estudio de C. Scott, «Peasants, Proletarianization and the Articulation of Modes of Production: The Case of the Sugar-Cane Cutters in Northern Peru, 1940-1969», *Journal of Peasant Studies* (1976), 321-342. Dos libros editados por Norman Long y Bryan R. Roberts examinan el proceso de cambio económico en la sierra central: *Miners, Peasants, and Entrepreneurs*; y *Peasant Cooperation and Capitalist Expansion in Central Peru* (Austin, TX, 1978). Véase también Gerardo Rénique, *La agricultura del valle del Mantaro: estadísticas socio-económicas, 1950-1968* (Lima, 1978). Sobre la sierra sur véase el importante estudio de José Luis Rénique, *Los sueños de la sierra*; Jesús Guillén, *La economía agraria del Cuzco: 1900-1980* (Cuzco, 1989); y Martínez Alier, *Los huacchilleros*. Para fuentes sobre la emigración véase la evaluación crítica de Héctor Martínez, *Migraciones internas en el Perú (aproximación crítica y bibliografía)* (Lima, 1980). Véase también A. Ortiz S., *Migraciones internas y desarrollo desigual: Perú, 1940-1972* (Lima, 1982).

Entre las memorias personales útiles están José Luis Bustamante y Rivero, *Tres años de lucha por la democracia en el Perú* (Buenos Aires, 1949); Pedro Beltrán, *La verdadera realidad nacional* (Madrid, 1976); y Sánchez, *Testimonio personal*.

Véase también Haya de la Torre, *Obras completas*; y Fernando Belaunde Terry, *La conquista del Perú por los Peruanos* (Lima, 1959), traducida como *Peru's Own Conquest* (Lima, 1965). Jorge del Prado, largo tiempo jefe del Partido Comunista Peruano, escribió *Cuatro facetas de la historia del PCP* (Lima, 1987); y Valcárcel, *Memorias* (Lima, 1981). Para una *Biografía del movimiento social-cristiano en el Perú (1926-1956), apuntes*, consúltese Pedro Planas Silva (Lima, 1996).

La «revolución» militar de 1968 estimuló una extensa bibliografía. Los mejores puntos de partida para un examen global son Lowenthal, *The Peruvian Experiment*; su secuela, *The Peruvian Experiment Reconsidered*, (hay edición en español del IEP) editada con Cynthia McClintock; y, con Jane Jaquette, «The Peruvian Experiment in Retrospect», *World Politics* 39: 2 (enero, 1987), 280-296. El análisis más reciente, con nueva información reunida mediante extensas entrevistas con funcionarios gubernamentales claves, es Dirk Kruijt, *Revolution by Decree: Peru, 1968-75* (Amsterdam, 1994; hay edición en español). También es importante Masterson, *Militarism*. Para buenos exámenes generales y breves véase Cotler, «Peru since 1960»; y Luis Pásara, «El docenio militar», en Juan Mejia Baca (ed.), *Historia del Perú*, XII (Lima, 1980). George D. E. Philip examina la Primera Fase en *The Rise and Fall of the Peruvian Military Radicals, 1968-1976* (Londres, 1978). Liisa North y Tanya Korovkin analizan los antecedentes y la perspectiva de los dirigentes en *The Peruvian Revolution and the Officers in Power, 1967-1976* (Montreal, 1981). Véase también Frederick M. Nunn, *Time of the Generals: Latin American Professional Militarism in World Perspective* (Lincoln, NE, 1992); y «Professional Militarism in Twentieth-Century Peru: Historical and Theoretical Background to the Golpe de Estado of 1968», *HAHR* 59: 3 (agosto, 1979), 391-418.

La naturaleza esencialmente autoritaria y corporativa del régimen fue desarrollada por diversos autores: David Scott Palmer, *Peru: The Authoritarian Tradition* (Nueva York, 1980); Alfred Stepan, *The State and Society: Peru in Comparative Perspective* (Princeton, NJ, 1978); David Chaplin (ed.), *Peruvian Nationalism: A Corporatist Revolution* (Princeton, NJ, 1976); y James M. Malloy, *Authoritarianism, Corporatism and Mobilization in Peru* (Pittsburgh, PA, 1973).

David G. Becker plantea que el surgimiento de una «nueva burguesía» durante el Docenio, se vio favorecido por políticas favorables a la educación y por las corporaciones transnacionales en su *The Bourgeoisie and the Limits of Dependency: Mining, Class, and Power in «Revolutionary» Peru* (Princeton, NJ, 1983). Podemos encontrar una interpretación marxista en William Bollinger, «The Bourgeois Revolution in Peru: A Conception of Peruvian History», *Latin American Perspectives* 4 (verano, 1977), 18-56. Otros aspectos del Docenio se enfatizan en Raúl P. Saba, *Political Development and Democracy in Peru: Continuity in Change and Crisis* (Boulder, CO, 1987); y David Booth y Bernardo Sorj (eds.), *Military Reformism and Social Classes: The Peru Experience, 1968-1980* (Londres, 1983). La caída del poder de la oligarquía la narra Henry Pease García en *El ocaso del poder oligárquico: lucha política en la escena oficial, 1968-1975* (Lima, 1977).

Sheahan discute la economía en *Searching*, al igual que Carol Wise, Peru Post-1968: The Limits to State-Led Economic Development (*tesis de Ph.D.*, Universidad

de Columbia, 1990; hay versión en español). Véase también E.V.K. Fitzgerald, *The State and Economic Development: Peru since 1968* (Cambridge, Inglaterra, 1976); y *The Political Economy*; véase también Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977*. Guido Pennano (ed.) y otros autores narran el declive económico en *Crónica de un colapso económico: Perú 1974-1979*, 2 vols. (Lima, 1980). Barbara Stallings examina a «Peru and the U.S. Banks: Privatization of Financial Relations», en Richard R. Fagen (ed.), *Capitalism and the State in U.S.-Latin American Relations* (Stanford, CA, 1979). Véase también R. Devlin, *Transnational Banks and the External Finance of Latin America: The Experience of Peru* (Santiago, 1985); Drago Kisic, *De la corresponsabilidad a la moratoria: el caso de la deuda externa peruana 1970-1986* (Lima, 1987); y John Sheahan, «Peru: Economic Policies and Structural Change, 1968-1978», *Journal of Developing Areas* 7 (1980). Las implicaciones redistributivas de la revolución se discuten en Webb, en *Government Policy*; y por Adolfo Figueroa, en «The Impact of Current Reforms on Income Distribution in Peru», en *Income Distribution in Latin America*, editado por Alejandro Foxley (Londres, 1976).

Sobre la industrialización véase Weeks, *Limits to Capitalist Development*; Wils, *Industrialization*; y Hugo Cabieses *et al.*, *Industrialization and Regional Development* (Amsterdam, 1982). Las comunidades industriales las analizan Giorgio Alberti, Jorge Santisteban y Luis Pásara (eds.) en *Estado y clase: la comunidad industrial en el Perú* (Lima, 1977). Evelyne Huber Stephens examina *The Politics of Workers' Participation: The Peruvian Approach in Comparative Perspective* (Nueva York, 1980), en tanto que Henry Dietz discute los pobres urbanos en *Poverty and Problem Solving under Military Rule: The Urban Poor in Lima, Peru* (Austin, TX, 1980); y, más recientemente, en *Urban Poverty, Political Participation and the State: Lima, 1970-1990* (Pittsburgh, PA, 1998).

Sobre el papel de las corporaciones de los EEUU en la década de 1960, consúltese Charles T. Goodsell, *American Corporations and Peruvian Politics* (Cambridge, MA, 1974). La cuestión de la nacionalización la tratan Adalberto J. Pinelo, *The Multinational Corporation as a Force in Latin American Politics: A Case Study of the International Petroleum Company in Peru* (Nueva York, 1973); George Ingram, *Expropriation of U.S. Property in South America: Nationalization of Oil and Copper Companies in Peru, Bolivia and Chile* (Nueva York, 1974); y Dore, *The Peruvian Mining Industry*. Alan Angel examinó *Peruvian Labour and the Military Government in Peru since 1968* (Londres, 1979). Los fracasos económicos del régimen son señalados astutamente por Daniel Shydlowsky y Juan Wicht, *Anatomía de un fracaso económico: Perú, 1968-1978* (Lima, 1978); y «The Tragedy of Lost Opportunity in Peru», en *Latin American Political Economy*, editado por Jonathan Hartlyn y Samuel A. Morley (Boulder, CO, 1986), 217-242.

Tal vez el aspecto más estudiado del gobierno revolucionario es el programa de reforma agraria. Una buena evaluación aparece en A. Fernández de la Gala y A. Gonzales Zúñiga (eds.), *La reforma agraria peruana, 20 años después* (Chiclayo, Perú, 1990). Véase también Linda J. Seligman, *Between Reform and Revolution: Political Struggles in the Peruvian Andes, 1969-1991* (Stanford, CA, 1995); Elena

Álvarez, *Política económica y agricultura en el Perú, 1969-1979* (Lima, 1983), y *Política agraria y estancamiento de la agricultura, 1969-1977* (Lima, 1980); Tom Alberts, *Agrarian Reform and Rural Poverty* (Boulder, CO, 1983); Cristóbal Kay, «The Agrarian Reform in Peru: An Assessment», en *Agrarian Reform in Contemporary Developing Countries*, editado por A.K. Ghose (Londres, 1983); y, finalmente, Cynthia McClintock, *Peasant Cooperatives and Political Change in Peru* (Princeton, NJ, 1981); y «Post-Revolutionary Agrarian Politics», en *The Politics of Transformation*, editado por Stephen M. Gorman (Boulder, CO, 1982), 17-66.

Son también valiosos José Matos Mar y Jose Manuel Mejía, *La reforma agraria en el Perú* (Lima, 1980); Peter S. Cleaves y Martin J. Scurrah, *Agriculture, Bureaucracy and Military Government in Peru* (Ithaca, NY, 1980); José María Caballero, *Economía agraria de la sierra peruana antes de la reforma agraria de 1969* (Lima, 1981), *Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina* (Lima, 1980); y con Elena Álvarez, *Aspectos cuantitativos de la reforma agraria (1969-1979)* (Lima, 1980); Carlos Amat y León (ed.), *Realidad del campo peruano después de la reforma agraria: 10 ensayos críticos* (Lima, 1980); David Guillet, *Agrarian Reform and Peasant Economy in Southern Peru* (Columbia, MO, 1979); y Mariano Valderrama, *Siete años de reforma agraria peruana 1969-1976* (Lima, 1976).

Sobre los trabajadores azucareros véase Santiago Roca, *Las cooperativas azucareras en el Perú: distribución de ingresos* (Lima, 1975). Son también útiles Cristóbal Kay, «Achievements and Contradictions of the Peruvian Agrarian Reform», *Journal of Development Studies* 18 (1982), 141-170; y Susana Lasarria-Cornhiel, «Agrarian Reform of the 1960s and 1970s in Peru», en *Searching for Agrarian Reform in Latin America*, editado por William C. Thiesenhusen (Boston, 1989), 127-155.

Diversos participantes en el gobierno militar han escrito sobre la revolución. Por ejemplo, véase Héctor Béjar, *La revolución en la trampa* (Lima, 1976); Héctor Cornejo Chávez, *Socialcristianismo y la revolución de Velasco* (Lima, 1975); Carlos Delgado, *El proceso revolucionario peruano: testimonio de lucha* (Buenos Aires, 1972), y *Revolución y participación* (Lima, 1974); Carlos Franco, *La revolución participatoria* (Lima, 1975); *Perú participación popular* (Lima, 1979), y su compilación *El Perú de Velasco*, 3 vols. (Lima, 1986); María del Pilar Tello, *¿Golpe o revolución? Hablan los generales del 68*, 2 vols. (Lima, 1983); y Juan Velasco Alvarado, *La voz de la revolución: discursos...* (Lima, 1972).

Un excelente resumen analítico de la Segunda Fase del Docenio se encuentra en Stephen M. Gorman, «The Peruvian Revolution in Historical Perspective», en su compilación *Post-Revolutionary Peru: The Politics of Transformation* (Boulder, CO, 1982). También se incluye en este volumen una serie de estudios informativos sobre la transición del gobierno militar al civil, entre ellos Sandra Woy-Hazelton, «The Return to Partisan Politics in Peru». La transición es asimismo examinada hábilmente por Julio Cotler, «Military Interventions and 'Transfer of Power to Civilians' in Peru», en Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule: Latin America* (Baltimore, 1986), 148-172. Consúltese también James M. Malloy y Mitchell A. Seligson (eds.), *Authoritarians and Democrats*

(Pittsburgh, PA, 1988). Más recientemente, Federico Prieto Celi presentó *Regreso a la democracia: entrevista biográfica al General Francisco Morales-Bermúdez Cerutti, Presidente del Perú (1975-1980)* (Lima, 1996).

No hay ningún estudio importante del segundo gobierno de Belaunde, aunque Cotler lo cubre en su «Peru since 1960», en *CHLA,* al igual que James D. Rudolph, *Peru: The Evolution of a Crisis* (Nueva York, 1992); y Michael Reid, *Peru: Paths to Poverty* (Londres, 1985). Alberto Flores-Galindo presenta una perspectiva historiográfica de larga duración en «La imagen y el espejo: la historiografía peruana (1910-1986)», en *Márgenes* 4 (diciembre, 1988).

José Matos Mar, *Desborde popular y crisis del estado* (Lima, 1984), es el estudio clásico de la creciente brecha entre Estado y sociedad, al igual que el de Hernando de Soto (en coautoría con Mario Ghibellini y Enrique Ghersi), *El otro sendero* (Lima, 1986), sobre la proliferación de los informales y el sector informal. Véase también Norma Adams y Néstor Valdivia, *Los otros empresarios: ética de migrantes y formación de empresas en Lima* (Lima, 1991); y D. Carbonetto *et al.*, *Lima: sector informal* (Lima, 1988). Véase también D. Cotlear *et al*. *Perú: la poblacion migrante* (Lima, 1987).

David Scott Palmer compara «The Changing Political Economy of Peru under Civilian and Military Rule», *JISWA* 37: 4 (primavera, 1984), 37-62. Los experimentos macroeconómicos peruanos en la década de 1980 los examina e interpreta Manuel Pastor Jr. en *Inflation, Stabilization, Debt: Macroeconomic Experiments in Peru and Bolivia* (Boulder, CO, 1992); y con Carol Wise en «Peruvian Economic Policy in the 1980s: From Orthodoxy to Heterodoxy and Back», *LARR* 27: 2 (1992), 83-118. Consúltese también Paul Glewwe y Dennis de Tray, *The Poor in Latin America during Adjustment: A Case Study of Peru* (Washington, DC, 1989).

Kisic analiza la crisis de la deuda de comienzos de la década de 1980 en el contexto de la historia financiera peruana en *De la corresponsabilidad a la moratoria*; el mismo tema abordan Thomas Scheetz, *Peru and the International Monetary Fund* (Pittsburgh, PA, 1986); y Óscar Ugarteche, *El estado deudor: economía política de la deuda, Perú y Bolivia 1968-1984* (Lima, 1986). También es importante Daniel M. Schydlowsky, «The Tragedy of Lost Opportunity in Peru», en *Latin American Political Economy: Financial Crisis and Political Change*, editado por Jonathan Hartlyn y Samuel A. Morley (Boulder, CO, 1986). Alfred H. Saulniers revisa las *Public Enterprises in Peru: Public Sector Growth and Reform* (Boulder, CO, 1988); al igual que Carlos Zuzunaga Flores (ed.), *Las empresas públicas en el Perú* (Lima, 1985).

En cuanto a las elecciones en el periodo de la democratización, véase Fernando Tuesta Soldevilla, *Partidos políticos y elecciones en el Perú (1978-1993)* (Lima, 1994), así como otros estudios anteriores suyos sobre el mismo tema electoral. Henry A. Dietz examina «Electoral Politics in Peru, 1978-1986», *JISWA* 28 (invierno, 1986-1987). Por su parte Eduardo Ferrero Costa pasa revista a las *Relaciones del Perú con los Estados Unidos* en este periodo (Lima, 1987).

Una serie de trabajos confrontan el problema de la consolidación democrática en la década de 1980. Véase, por ejemplo, Julio Cotler, «Political Parties and the Problems of Democratic Consolidation in Peru», en *Building Democratic Institutions:*

Party Systems in Latin America, editado por Scott Mainwaring y Timothy R. Scully (Stanford, CA, 1995), 323-353; la compilación preparada por Cotler, *Para afirmar la democracia* (Lima, 1986); y Cynthia McClintock, «The Prospects for Democratic Consolidation in a 'Least Likely' Case: Peru», *Comparative Politics* 21: 2 (1989), 127-148. Son también útiles Luis Pásara y Jorge Parodi (eds.), *Democracia, sociedad y gobierno en el Perú* (Lima, 1988); Alberto Adrianzén *et al.*, *Democracia: realidades y perspectivas* (Lima, 1988); y Alberto Giesecke (ed.), *Burocracia, democratización y sociedad* (Lima, 1989). Véase también Patricia Wilson, «Lima and the New International Division of Labor», en *The Capitalist City: Global Restructuring and Community Politics*, editado por Michael Peter Smith y Joe R. Feagin (Nueva York, 1987), 199-214. Michael Fleet y Brian H. Smith ofrecen *The Catholic Church and Democracy in Chile and Peru* (Notre Dame, IN, 1997).

Nigel Haworth examina «Radicalization and the Left in Peru, 1976-1991», en *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika*, editado por Barry Carr y Steve Ellner (Boulder, CO, 1993), 41-60; así como Cynthia Ann Sanborn, The Democratic Left and the Persistence of Populism in Peru, 1975-1990 (*tesis de Ph.D.*, Universidad de Harvard, 1991). Véase también Lewis Taylor, «One Step Forward, Two Steps Back: The Peruvian Izquierda Unida, 1980-1990», *Journal of Communist Studies* 6 (1990), 108-119; y Ricardo Letts, *La izquierda peruana: organizaciones y tendencias* (Lima, 1981).

Las condiciones rurales, incluyendo una apreciación excelente de la reforma agraria, se evalúan en R.F. Watters, *Poverty and Peasantry in Peru's Southern Andes, 1963-1990* (Pittsburgh, PA, 1994). Véase también J.M. Mejía, *La neoreforma agraria: cambios en la propiedad de la tierra 1980-1990* (Lima, 1990). Otros estudios sobre la sociedad y la economía agraria son Fernando Eguren *et al.*, *Perú: el problema agrario en debate* (Lima, 1988); R. Hopkins *et al.*, *La lenta modernización de la economía campesina* (Lima, 1987); y Javier Iguíñiz (ed.), *La cuestión rural en el Perú* (Lima, 1986). Véase también M. Lajo Lazo, *La reforma agroalimentaria: antecedentes, estrategia y contenido* (Cuzco, 1986); A. Figueroa, *Capitalist Development and the Peasant Economy in Peru* (Cambridge, Inglaterra, 1984; hay edición en español); y J.M. Caballero, «Agriculture and the Peasantry under Industrialization Pressures: Lessons from the Peruvian Experience», *LARR* 19: 2 (1984), 3-40.

El surgimiento de Sendero Luminoso en 1980 y su rápido crecimiento durante esa década produjo una explosión de estudios e informes periodísticos de diversa calidad. El de más reciente aparición es el excelente estudio comparativo de Cynthia McClintock, *Politics, Economics, and Revolution: Explaining the Guerrilla Movements in Peru and El Salvador* (Washington, D.C., 1998). Un examen global reflexivo y perceptivo, que sitúa y arraiga el movimiento en una perspectiva histórica es la introducción de Steve J. Stern a su compilación *Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980-1995* (Durham, NC, 1998; hay edición en español del IEP). El libro se preparó a partir de una conferencia en la Universidad de Wisconsin en 1995, que reunió a una docena o más de connotados peruanistas (principalmente peruanos) para examinar los orígenes sociales, la dinámica y las consecuencias de la guerra. Un excelente cuadro global y análisis es el de Lewis

Taylor, «Counter-Insurgency Strategy, the PCP-Sendero Luminoso and the Civil War in Peru, 1980-1996», *BLAR* 17: 1 (enero, 1998), 35-59. El deterioro de las condiciones de los campesinos las examina W.P. Mitchell en *Peasants on the Edge: Crop, Cult, and Crisis in the Andes* (Austin, TX, 1991).

Un útil volumen complementario es *Shining Path of Peru*, editado por David Scott Palmer (Nueva York, 1992), que reúne una importante colección de ensayos escritos por analistas prominentes del movimiento. Palmer fue un colega docente de Abimael Guzmán mientras era un voluntario del Peace Corps en la Universidad de Huamanga, en la década de 1960. Además de este volumen, Palmer publicó una serie de artículos sobre el movimiento, entre ellos «Rebellion in Rural Peru: The Origins and Evolution of Sendero Luminoso», *Comparative Politics* 18: 2 (enero, 1986), 127-146, donde interpreta la insurgencia como otro capítulo en el «patrón histórico del conflicto entre centro y periferia» en Perú. Véase también su «The Revolutionary Terrorism of Peru's Shining Path», en *Terrorism in Context*, editado por Martha Crenshaw (University Park, PA, 1995), 249-308.

El antropólogo Carlos Iván Degregori es el «senderólogo» —que es como se conoce a los analistas del movimiento— peruano más prominente. Degregori señala que lo que inicialmente fue una vanguardia pequeña y violenta, que intentaba infructuosamente desatar una rebelión campesina de amplia base, fue convirtiéndose con el paso del tiempo en un movimiento fundamentalmente urbano, conformado por intelectuales y «jóvenes sin esperanza». En «Why Peasants Rebel: The Case of Peru's Sendero Luminoso», *World Politics* 37: 1 (octubre, 1984), 48-84, McClintock ve la insurgencia como una rebelión campesina de amplia base, debida a la fuerte caída en los niveles de vida del campesinado ayacuchano en las décadas de 1970 y 1980. Véase también su «Peru's Sendero Luminoso Rebellion: Origins and Trajectory», en *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*, editado por Susan Eckstein (Berkeley, CA, 1989), 61-101.

Degregori cuestiona la imagen de Sendero como una manifestación más de otro movimiento milenarista andino. Él enfatiza más bien el «hiperclasismo» del partido, esto es la colocación de las distinciones de clase sobre otras formas de desigualdad, como las raciales, regionales o étnicas siguiendo una estricta doctrina marxista-leninista. El estudio más importante de Degregori es *Ayacucho 1969-1979: el surgimiento de Sendero Luminoso: del movimiento por la gratuidad de la enseñanza al inicio de la lucha armada* (Lima, 1990, 3.ª ed. 2010). Véase también su *Qué difícil es ser Dios: ideología y violencia política en Sendero Luminoso* (Lima, 1989); *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros* (1ª parte), *Lucha armada y utopía autoritaria* (2ª parte) (Lima, 1985-1986), y *Ayacucho, raíces de una crisis* (Lima, 1986). Más recientemente publicó —juntamente con José Coronel, Ponciano del Pino y Orin Starn— *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (Lima, 1996).

Otro trabajo importante es el de Gustavo Gorriti, *The Shining Path: A History of the Millenarian War in Peru*, traducido y con introducción de Robin Kirk (Chapel Hill, NC, 1999; hay edición original en español). En *The New Republic*, 18 de junio

de 1990, Gorriti traza un retrato particularmente fascinante de Abimael Guzmán, el fundador y líder máximo del movimiento. Son más generales los textos de Deborah Poole y Gerardo Rénique, *Peru: Time of Fear* (Londres, 1992); y el fallido estudio de Simon Strong, *Shining Path: Terror and Revolution in Peru* (Nueva York, 1992).

Una crítica convincente es la de Orin Starn, «Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru», *Cultural Anthropology* 6: 1 (1991), 63-91. Véase la crítica similar pero destemplada de Deborah Poole y Gerardo Renique en «The New Chroniclers of Peru: U.S. Scholars and Their 'Shining Path' of Peasant Rebellion», *BLAR* 10: 2 (1991), 133-191. Resulta interesante también el trabajo de Enrique Mayer, «Peru in Deep Trouble: Mario Vargas Llosa's 'Inquest in the Andes' Reexamined», *Cultural Anthropology* 6: 4 (1991), 466-504. La versión de Vargas Llosa figura en «The Story of a Massacre», *Granta* 9 (1983), 62-83.

Sobre el pensamiento de Guzmán consúltese Luis Arce Borja (ed.), *Guerra popular en el Perú: el pensamiento Gonzalo* (Bruselas, 1989), y su entrevista con Guzmán, «La entrevista del siglo: Presidente Gonzalo rompe el silencio», *El Diario*, 24 de julio de 1988. Otro estratega prominente del movimiento fue Antonio Díaz Martínez, muerto en el motín de la prisión de Lurigancho en 1986. Sus ideas se esbozan en Colin J. Harding, «Antonio Díaz Martínez and the Ideology of Sendero Luminoso», *BLAR* 7: 1 (1987), 65-73. Véase también Díaz Martínez, *Ayacucho: hambre y esperanza* (Ayacucho, 1969; 2ª ed., Lima, 1985) y otros estudios. Entre las publicaciones oficiales de Sendero tenemos a *Retomemos a Mariátegui y reconstituyamos su partido* (Lima, 1975); *Desarrollemos la guerra de guerrillas* (Lima, 1982); y *El desarrollo de las ideas marxistas en el Perú* (Lima, 1979).

Starn, al igual que Degregori (1996) hiciera más recientemente, escribió también sobre el movimiento de base de las *rondas campesinas*, que se originó en la sierra norte a finales de la década de 1970 como patrullas de ronderos organizados por las comunidades campesinas para que persiguieran a los abigeos, y que posteriormente fueron dirigidas contra Sendero (no deben ser confundidas con las *rondas* o comites de defensa civil campesina, formadas por las fuerzas armadas en la sierra central y sur para combatir a Sendero). Consúltese Starn, *Nightwatch: The Politics of Protest in the Peruvian Andes* (Durham, NC, 1999). Véase también su «'I Dreamed of Foxes and Hawks': Reflections on Peasant Protest, New Social Movements and the *Rondas Campesinas* of Northern Peru», en *The Making of Social Movements in Latin America*, editado por A. Escobar y S. Álvarez (Boulder, CO, 1992); *Con los llanques todo barro: reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales* (Lima, 1991); y el volumen que editase, *Hablan los ronderos: la búsqueda por la paz en los Andes* (Lima, 1993). Véase también John Gitlitz y Telmo Rojas, «Peasant Vigilante Committees in Northern Peru», *JLAS* 15: 1 (1983), 163-197.

La expansión de Sendero fuera de su base inicial en Ayacucho a otras partes del país es el tema de diversos estudios. Por ejemplo, Brown y Fernández, en *War of Shadows*, argumentan que los ashaninkas vieron el arribo de los terroristas a la selva central como el retorno de antiguos héroes culturales. Para otras zonas véase

José Luis Rénique, «La batalla por Puno: Violencia y democracia en la sierra sur», *Debate Agrario* 10 (1991), 83-108; José E. Gonzales, «Guerrillas and Coca in the Upper Huallaga Valley», en Palmer, *Shining Path*, 123-143; Lewis Taylor, «Agrarian Unrest and Political Conflict in Puno (1985-87)», *BLAR* 6: 2 (1987); y Michael L. Smith, «Shining Path's Urban Strategy: Ate-Vitarte», en Palmer, *Shining Path*, 127-148. Para el valle del Mantaro véase también Nelson Manrique, «La década de la violencia», *Márgenes* 5-6 (1989), 137-182.

El papel de las mujeres en Sendero es examinada perceptivamente por Robin Kirk, *Grabado en piedra: las mujeres de Sendero Luminoso* (Lima, 1993). De otro lado, Carol Andreas, en *When Women Rebel: The Rise of Popular Feminism in Peru* (Westport, CT, 1985), es fuertemente pro senderista. En torno a la cuestión más amplia del impacto de la guerra en las mujeres consúltese Isabel Coral Cordero, «Women in War: Impact and Responses», en Stern, *Shining and Other Paths*.

La radicalización de los jóvenes y su susceptibilidad al canto de sirena de Sendero se desarrolla en Julio Cotler, «La radicalización política de la juventud popular en el Perú», *CEPAL* 29 (1986); y Carlos Iván Degregori, «Del mito de Inkarri al 'mito' del progreso: poblaciones andinas, cultura, e identidad nacional», *Socialismo y Participación* 56 (Lima: 1986), 49-56. Véase también Nicolás Lynch, *Los jóvenes rojos de San Marcos: el radicalismo universitario de los años setenta* (Lima, 1990); y Denis Chávez de Paz, *Juventud y terrorismo: características sociales de los condenados por terrorismo y otros delitos* (Lima, 1989). Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart presentan percepciones en su importante *El Perú desde la escuela* (Lima, 1989). La relación entre Sendero y la izquierda democrática la desarrolla Iván Hinojosa, «On Poor Relations and the Noveau Riche; Shining Path and the Radical Peruvian Left», en Stern, *Shining and Other Paths* (hay edición en español); y Sandra Woy-Hazleton y William A. Hazleton, «Shining Path and the Marxist Left», en Palmer, *The Shining Path*.

Para la estrategia y la campaña de los militares en pos de derrotar la insurgencia véase Taylor, «Counter-Insurgency Strategy»; Carlos Iván Degregori y Carlos Rivera, *Perú 1980-1990: fuerzas armadas, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático* (Lima, 1993); y Masterson, *Militarism*. La delicada relación de Belaunde y García con las fuerzas armadas se examina en Philip Mauceri, *Los militares en el Perú: su política en la insurgencia y democratización (1980-1989)* (Lima, 1989). El general Clemente Noel Moral, comandante de la Zona de Emergencia de Ayacucho, publicó su versión en *Ayacucho: Testimonio de un soldado: memorias* (Lima, 1989). Nelson Manrique en «La caída de la cuarta espada y los senderos que se bifurcan», *Márgenes* 13-14 (1995), 11-42, analiza el impacto que la captura de Guzmán tuvo en Sendero.

Gabriela Tarazona-Sevillano examina a *Sendero Luminoso and the Threat of Narcoterrorism* (Nueva York, 1990), al igual que Gustavo Gorriti, «Democracia, narcotráfico y la insurrección de Sendero Luminoso», en Pásara y Parodi (eds.), *Democracia*, 193-212. Véase también David Scott Palmer, «Peru, the Drug

Business and Shining Path: Between Scylla and Charybdis?», *JISWA* 34: 3 (1992), 65-88.

El desplazamiento demográfico provocado por la guerra contra Sendero es descrito conmovedoramente por Robin Kirk, *Decade of Chaqwa: Peru's Internal Refugees* (Washington, D.C., 1991). Véanse sus observaciones hechas como periodista que cubría el Perú en este periodo en *The Monkey's Paw: New Chronicles from Peru* (Amherst, MA, 1998). Para el problema general de las violaciones de los derechos humanos en Perú durante la guerra, véanse los diversos informes publicados por Americas Watch, Amnistía Internacional, el Departamento de Estado de los EE.UU., y la Oficina de Latinoamérica de Washington, así como la Comisión Andina de Juristas de Lima. Susan C. Bourque y Kay B. Warren publicaron «Democracy without Peace: The Cultural Politics of Terror in Peru», *LARR* 24: 1 (1989).

Otras contribuciones valiosas para comprender a Sendero son Harold O. Skar, *Between Freedom-Fighting and Terrorism in Peru-The Issue of Sendero Luminoso* (Oslo, 1988); Gordon H. McCormick, *The Shining Path and Peruvian Terrorism* (Santa Mónica, CA, 1987); James Anderson, *Sendero Luminoso: A New Revolutionary Model?* (Londres, 1987); Colin Harding, «The Rise of Sendero Luminoso», en *Region and Class in Modern Peru*, editado por Rory Miller (Liverpool, Inglaterra, 1986); Vera Gianotten, Tom de Wit y Hans de Wit, «The Impact of Sendero Luminoso on Regional and National Politics in Peru», en *The New Social Movements and the State in Latin America*, editado por David Slater (Amsterdam, 1985), 171-202; y Lewis Taylor, *Maoism in the Andes: Sendero Luminoso and the Contemporary Guerrilla Movement in Peru* (University of Liverpool, Centre for Latin American Studies, Working Paper no. 2, 1983; hay edición en español). Para *An Annotated Bibliography of the Shining Path Guerrilla Movement: 1980-1993*, véase Peter A. Stern (Austin, TX, 1996); y John M. Bennett, *Sendero Luminoso in Context: An Annotated Bibliography* (Lanham, MD, 1998). Sobre el MRTA, consúltese Gordon H. McCormick, *Sharp Dressed Men: Peru's Tupac Amaru Revolutionary Movement* (Santa Mónica, CA, 1993).

Para el problema general de la violencia en la década de 1980 véase el cautivante estudio de Tina Rosenberg, *Children of Cain: Violence and the Violent in Latin America* (Nueva York, 1991); y el igualmente conmovedor *The Heart that Bleeds: Latin America Now* (Nueva York, 1994), de Alma Guillermoprieto. El problema se examina en perspectiva histórica en Deborah Poole (ed.), *Unruly Order: Violence, Power, and Cultural Identity in the High Provinces of Southern Peru* (Boulder, CO, 1994); y Henrique Urbano (comp.) y Mirko Lauer (ed.), *Poder y violencia en los Andes* (Cuzco, 1991). Igualmente importante es Nelson Manrique, *La piel y la pluma: escritos sobre literatura, etnicidad y racismo* (Lima, 1999). Otros estudios son Juan Ossio, *Violencia estructural en el Perú* (Lima, 1990); DESCO, *Violencia politica en el Perú, 1980-1988*, 2 vols. (Lima, 1989); Juan Ansión, *Pishtacos. De verdugos a sacaojos* (Lima, 1989); *Violencia y pacificación* (Lima, 1989); Denis Sulmont *et al.*, *Violencia y movimiento sindical* (Lima, 1989); Rolando Ames (ed.), *Informe al Congreso sobre los sucesos de los penales* (Lima, 1988);

Rodrigo Montoya *et al.*, *La sangre de los cerros Urqukunapa Yawarnin* (Lima, 1987); Alberto Flores-Galindo y Nelson Manrique, *Violencia y campesinado* (Lima, 1986); y Felipe McGregor *et al.*, *Siete ensayos sobre la violencia en el Perú* (Lima, 1985).

Los mejores estudios sobre el gobierno de García y el ascenso del APRA al poder son John Crabtree, *Peru under Garcia: An Opportunity Lost* (Pittsburgh, PA, 1992); y Carol Graham, *Peru's APRA: Parties, Politics and the Elusive Quest for Democracy* (Boulder, CO, 1992). Son también útiles Cotler, «Peru since 1960», en *CHLA*; Rudolph, *Peru: The Evolution*; y Reid, *Peru: Paths*. García esboza su propio diagnóstico y prescripción en *Un futuro diferente: la tarea histórica del APRA* (Lima, 1985). Sus discursos se encuentran en *A la inmensa mayoria, discursos (1985-1987)* (Lima, 1988).

La controvertida política heterodoxa de García atrajo una considerable atención académica. Véase Manuel Pastor, Jr., *Inflation, Stabilization, Debt*; y con Carol Wise, «Peruvian Economic Policy in the 1980s»; Rosemary Thorp, *Economic Management and Economic Development in Peru and Colombia* (Pittsburgh, PA, 1991; hay edición en español); y Ricardo Lago, «The Illusion of Pursuing Redistribution through Macropolicy: Peru's Heterodox Experience, 1985-1990", en *The Macroeconomics of Populism in Latin America*, editado por Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (Chicago, 1991), 263-330. Véase también Eva Paus, «Adjustment and Development in Latin America: The Failure of Peruvian Heterodoxy, 1985-1988», *World Development* 19: 5 (1991), 411-434; Pedro Pablo Kuczynski, «Peru», en *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, editado por John Williamson (Washington, DC, 1990); Germán Alarco, *Economía peruana, 1985-1990: enseñanzas de la expansión y del colapso* (Lima, 1990); y Leonel Figueroa, «Economic Adjustment and Development in Peru: Towards an Alternative Policy», en *Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth*, editado por Giovanni Cornia, Frances Stewart y Richard Jolly (Oxford, 1987). Daniel Carbonetto, un economista argentino y uno de los arquitectos de la política económica colaboró con otros en *El Perú heterodoxo: un modelo heterodoxo* (Lima, 1987). Véase también Carol Wise, «Democratization, Crisis, and APRA's Modernization Project in Peru», en *Debt and Democracy in Latin America*, editado por Barbara Stallings y Robert Kaufman (Boulder, CO, 1989). Felipe Ortiz de Zevallos, *The Peruvian Puzzle* (Nueva York, 1989), presenta la crisis económica y una receta para su solución.

Francisco Durand investiga *Business and Politics in Peru: The State and the National Bourgeoisie* (Boulder, CO, 1994). Véase también su *Empresarios y la concertación* (Lima, 1987); y *La burguesía: los primeros industriales; Alan García y los empresarios* (Lima, 1988). Carlos Malpica analiza *El poder económico en el Perú*, 2 vols. (Lima, 1989), al igual que Eduardo Anaya Franco, *Los grupos de poder económico: un análisis de la oligarquía financiera* (Lima, 1990); y Ludovico Alcorta, *El nuevo capital financero: grupos financieros y ganancias monopólicas en el Perú* (Lima, 1992). Sobre la hiperinflación véase Jürgen Schuldt, *Hacia la hiperinflación en el Perú* (Lima, 1988). Consúltese también Efraín Gonzales de Olarte (ed.), *Economía para la democracia* (Lima, 1989); y *Crisis y democracia: el Perú*

en busca de un nuevo paradigma de desarrollo (Lima, 1987), así como Heraclio Bonilla y Paul Drake (eds.), *El Apra: de la ideología a la praxis* (Lima, 1989). La Fundación Friedrich Ebert de Lima también publicó numerosos estudios sobre la economía en este periodo.

Los grupos sociales y movimientos de base, cuya proliferación fue una señal característica de la década de 1980, son el tema de Susan C. Stokes, *Cultures in Conflict: Social Movements and the State in Peru* (Berkeley, CA, 1995). La investigadora peruana más importante del papel creciente de las mujeres en estos grupos, y en la sociedad peruana en general, es Cecilia Blondet, entre cuyas obras tenemos «Out of the Kitchens and onto the Streets: Women's Activism in Peru», en *The Challenge of Local Feminisms*, editado por Amrita Basu (Boulder, CO, 1995), 251-275; *Las mujeres y el poder: una historia de Villa El Salvador* (Lima, 1991); y con Carmen Montero, *La situación de la mujer en el Perú, 1980-1994* (Lima, 1994); también con Montero, *Los comedores populares: balance y lecciones de una experiencia* (Lima, 1994). Otras obras útiles son Roselie Lenten, *Cooking under the Volcanoes: Communal Kitchens in the Southern Peruvian City of Arequipa* (Amsterdam, 1993); Amelia Fort, *Mujeres peruanas: la mitad de la población del Perú a comienzos de los 90* (Lima, 1993); Virginia Vargas, *Cómo cambiar el mundo sin perdernos: el movimiento de mujeres en el Perú y América Latina* (Lima, 1992); Patricia Portocarrero (ed.), *Mujer en el desarrollo: balances y propuestas* (Lima, 1990); Nora Qaler y Pilar Núñez (eds.), *Mujer y comedores populares* (Lima, 1989); Patricia Córdova y Carmen Luz Gorbiti, *Apuntes para una interpretación del movimiento de mujeres: los comedores comunales y los comités del vaso de leche en Lima* (Lima, 1989); y Susan Lobo, *Tengo casa propia: organización social de las barriadas de Lima* (Lima, 1984). Véase también Maruja Barrig, «The Difficult Equilibrium between Bread and Roses: Women's Organizations and the Transition from Dictatorship to Democracy in Peru», en *The Women's Movement in Latin America: Feminism and the Transition to Democracy*, editado por Jane S. Jaquette (Boston, 1989).

La situación de los emigrantes a Lima se examina en Dietz, *Urban Poverty*; y Jean-Claude Driant, *Las barriadas de Lima: historia e interpretación* (Lima, 1991). Véanse también Carlos Iván Degregori *et al.*, *Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a ciudadanos en San Martin de Porras* (Lima, 1986); y Jürgen Golte y Norma Adams, *Los caballos de Troya de los invasores: estrategias campesinas en la conquista de la Gran Lima* (Lima, 1987). Entre otros numerosos estudios tenemos a Teófilo Altamirano, *Presencia andina en Lima Metropolitana* (Lima, 1984); Jorge B. Burga y Claire Delpech, *Villa El Salvador: la ciudad y su desarrollo, realidad y propuestas* (Lima, 1989); Romeo Grompone *et al.*, *La Lima de los 80: crecimiento y segregación social* (Lima, 1983); sobre el estudio de los problemas obreros destaca el libro de Denis Sulmont, *Cuestionamiento y posibilidades de renovación en el movimiento sindical* (Lima, 1990). El deterioro en las condiciones de los trabajadores y otros grupos sociales, como los pobladores de las barriadas urbanas, entre ellos las mujeres, se documentan hábilmente en Carmen Rosa Balbi *et al.*, *Movimientos sociales: elementos para una relectura* (Lima, 1990).

Diversos estudios tratan el problema del tráfico de drogas. Para el contexto histórico véase Joseph A. Gagliano, *Coca Prohibition in Peru: The Historical Debates* (Tucson, AZ, 1984); y Jonathan Cavanagh y Rosemary Underhay, *Coca and Cocaine: An Andean Perspective* (Westport, CT, 1993). En torno al tráfico véase Diego García Sayán (ed.), *Coca, cocaína y narcotráfico: el laberinto en los Andes* (Lima, 1989); Rensselaer Lee, *The White Labyrinth* (New Brunswick, NJ, 1989); y Edmundo Morales, *Cocaine: White Gold Rush in Peru* (Tucson, AZ, 1989).

El primer gobierno de Alberto Fujimori ha sido tema de considerables comentarios y análisis. El mejor cuadro global es el de Maxwell A. Cameron y Phillip Mauceri (eds.), *The Peruvian Labyrinth* (University Park, PA, 1997). Véase también *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996*, editado por Fernando Tuesta Soldevilla (Lima, 1996). Ambos volúmenes presentan extensos ensayos bibliográficos. El periodista Alfredo Barnechea intenta situar los problemas peruanos en perspectiva global en *La república embrujada: un caso en la pobreza de las naciones* (Lima, 1995).

Para un análisis de las victorias electorales de Fujimori véase José María Salcedo, *Terremoto: ¿cómo ganó Fujimori?* (Lima, 1995); Jeff Daeschner, *The War of the End of Democracy: Mario Vargas Llosa vs. Alberto Fujimori* (Lima, 1993); y Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone, *Elecciones 1990: demonios y redentores en el nuevo Perú* (Lima, 1991). El propio análisis de Vargas Llosa se encuentra en *El pez en el agua: memorias* (Barcelona, 1993), y en inglés en *A Fish in the Water* (Nueva York, 1994). Consúltese también Álvaro Vargas Llosa, su hijo, quien manejó la campaña, *El diablo en campaña* (1991); y *The Madness of Things Peruvian: Democracy under Siege* (New Brunswick, NJ, 1994).

Philip Mauceri disecta incisivamente las razones del debilitamiento del Estado en los últimos quince años en *State under Siege: Development and Policy Making in Peru* (Boulder, CO, 1996). En «State Reform, Coalitions, and the Neoliberal Autogolpe in Peru», *LARR* 30: 1 (1995), 7-38, también presenta un buen examen global y análisis del primer gobierno de Fujimori, así como del autogolpe de 1992. Véase también Henry Pease García, *Los años de la langosta: la escena política del fujimorismo* (Lima, 1994). La tesis de la compatibilidad del neoliberalismo de Fujimori con el populismo la desarrollan Kenneth M. Roberts, «Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case», *World Politics* 48: 1 (octubre, 1995), 82-116; y Bruce H. Kay, «Fujipopulism and the Liberal State in Peru, 1990-1995», *JISWA* 38: 4 (1996). Véanse también Kurt Weyland, «Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities», *Studies in Comparative International Development* 31: 3 (otoño, 1996), 3-31. Una biografía útil del presidente es Luis Jochamowitz, *Ciudadano Fujimori: la construcción de un político* (Lima, 1993). Véanse también los siguientes números de *Current History*: febrero de 1991, febrero de 1992, marzo de 1993, y febrero de 1996.

Con respecto a la economía en la década de 1990 véase Sheahan, *Searching*; John Crabtree y Jim Thomas (eds.), *Fujimori's Peru: The Political Economy* (Nueva York, 1998; hay edición del IEP); y Efraín Gonzales de Olarte (ed.), *The Peruvian Economy and Structural Adjustment: Past, Present and Future* (Miami, 1996; hay

edición en español del IEP). Véanse también las compilaciones de este último, *Neoliberalismo y desarrollo humano: desafíos del presente y del futuro* (Lima, 1998); *El neoliberalismo a la peruana: economía política del ajuste estructural, 1990-1997* (Lima, 1998); y *El péndulo peruano: políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1993* (Lima, 1994). Daniel M. Schydlowsky y Jürgen Schuldt critican el *Modelo económico peruano de fin del siglo: alcances y límites* (Lima, 1996). Véase también Carol Wise, «The Politics of Peruvian Economic Reform: Overcoming the Legacies of StateLed Development», en *JISWA* 36 (primavera, 1994). El problema de brindar una red de seguridad adecuada para los pobres durante la transición al neoliberalismo con Fujimori, lo examina Carol Graham en *Safety Nets, Politics, and the Poor: Transitions to Market Economies* (Washington, DC, 1994). Véanse también Carlos Paredes y Jeffrey Sachs (eds.), *Peru's Path to Recovery: A Plan for Economic Stabilization and Growth* (Washington, D.C., 1991); y J. Iguíñiz *et al.*, *Los ajustes: Perú 1975-1992* (Lima, 1993).

El problema de la consolidación y la ruptura de la democracia con Fujimori lo trata Maxwell A. Cameron, *Democracy and Authoritarianism in Peru: Political Coalitions and Social Change* (Nueva York, 1994). Otra perspectiva es la de Cynthia McClintock, «Presidents, Messiahs and Constitutional Breakdowns», en *The Failure of Presidential Democracy*, editado por Juan J. Linz y Arturo Valenzuela (Baltimore, 1994). Sobre el mismo tema véase Cotler, quien también coloca el problema en su contexto histórico en su «Political Parties». Véase también J. Tulchin y G. Bland (eds.), *Peru in Crisis: Dictatorship or Democracy?* (Boulder, CO, 1994). Es también útil Comisión Andina de Juristas, *Del golpe de estado a la nueva constitución* (Lima, 1993); *La constitución de 1993: análisis y comentarios* (Lima, 1993); y C. Kenny, «¿Por qué el autogolpe? Fujimori y la opinión pública», en *La política bajo Fujimori: partidos politicos y opinión pública*, editado por Fernando Tuesta (Lima, 1996). Consúltese también Gregory D. Schmidt, «The Evolution of Executive Decree Authority in Peru's 'Volcanic Democracy'», en *Executive Decree Authority: Calling Out the Tanks, or Filling Out the Forms?*, editado por John M. Carey y Matthew Soberg Shugart (Cambridge, Inglaterra, 1998). El general Jaime Salinas Sedó, líder de un abortado golpe en contra de Fujimori y en nombre de la democracia, escribió *Desde el Real Felipe: en defensa de la democracia* (Lima, 1997). Los apuros de la izquierda peruana en la era del neoliberalismo de la postguerra se exploran en Kenneth M. Roberts, *Deepening Democracy? The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru* (Stanford, CA, 1999).

La derrota de Sendero Luminoso la analizan Taylor, «Counter-Insurgency Strategy»; y Carlos Tapia, *Del «equilibrio estratégico» a la derrota de Sendero Luminoso* (Lima, 1996). Véase también Manrique, «La caida de la cuarta», 11-42. En torno a la importancia de las *rondas campesinas* en este proceso véase Orin Starn, «Villagers at Arms: War and Counterrevolution in Peru's Andes», en Stern, *Shining and Other Paths*; Carlos Tapia, *Autodefensa armada del campesinado* (Lima, 1995); y Ludwig Huber, *Después de Dios y la Virgen están las rondas: las rondas campesinas en Piura* (Lima, 1995). Philip Mauceri examina «Military Politics and Counter-Insurgency in Peru», *JISWA* 33: 4 (invierno, 1991), 83-109.

El problema de los derechos humanos se trata en Carlos Chipoco, *En defensa de la vida: ensayos sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario* (Lima, 1992); y Beatriz Ramaciotti (ed.), *Democracia y derechos humanos en el Perú de los 90: los nuevos retos* (Lima, 1993). Véanse también los diversos informes sobre el Perú en Americas Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Latinoamérica en Washington. David Scott Palmer examina las «United States-Peru Relations in the 1990s: Asymmetry and Its Consequences», en Latin America and Caribbean Contemporary Record, 1989-1990, editado por E. Gamarra y J. Malloy (Nueva York, 1992).

Siglas de publicaciones

AESC	Annales: economies, societés, culture. Actualmente, *Annales: Histoire, sciences sociales*
AHR	American Historical Review
BLAR	Bulletin of Latin American Review
CEPAL	Comisión Economica para América Latina
CHLA	Cambrige History of Latin American
CLAHR	Colonial Latin Americas Historical Review
CLAR	Colonial Latin American Review
HAHR	Hispanic American Historical Review
JISWA	Journal of Interamerican Studies World Affairs
JLAS	Journal of Latin American Studies
LARR	Latin Americas Research Review

Índice de nombres y lugares

Diez mil años de historia del Perú están brillantemente condensados en este volumen, escrito por uno de los más prestigiosos historiadores norteamericanos sobre el Perú. Los capítulos concernientes a la era prehispánica y a las fases de la conquista española y el dominio colonial, sintetizan los más recientes aportes hechos por la investigación académica, en una presentación asequible y atractiva. La mayor parte del volumen está dedicada, sin embargo, al período republicano, cuyo tratamiento se beneficia del hecho de haber sido investigado profundamente por Peter Klarén en varios de sus trabajos anteriores. El eje del texto descansa en el seguimiento de las luchas de los sectores populares del país, marcados por su carácter étnico, de indios, negros y mestizos, por ganar una cuota de poder dentro una nación gobernada básicamente por una élite de origen europeo.

El libro incluye un extenso ensayo bibliográfico, de textos tanto en inglés como en castellano, que actualiza la producción histórica sobre el Perú en los últimos veinticinco años. También contiene algunas ilustraciones de gran valor testimonial, así como un rico índice de nombres y lugares. Se trata de uno de los más valiosos libros editados en los últimos años en el Perú, como apoyo a la enseñanza superior y al mejor conocimiento de nuestro pasado.


ISBN: 978-9972-51-095-3
9 789972 510953

IEP Instituto de Estudios Peruanos